

Tesis País 2020

Piensa Chile
sin pobreza

Tesis País 2020

Piensa Chile
sin pobreza

TESIS PAÍS 2020

Piensa Chile sin pobreza

© **Fundación Superación de la Pobreza**

Distribución gratuita

Coordinador Programa Tesis País:

Diego Weinstein

Equipo editorial:

Ricardo Álvarez

Fernanda Azócar

Luis Iturra

Eduardo Martínez

Mauricio Rosenblüth

Diego Weinstein

Foto de portada:

Reseña: "Mujer pastoreando a sus llamas junto a sus hijas en Colchane, región de Tarapacá, febrero de 2017

Créditos: María Ignacia Escudero

Edición:

Jennifer Abate

Diseño:

Carlos Muñoz / www.cemuma.cl

Agradecemos y reconocemos el trabajo de todas y todos los profesionales de la Fundación Superación de la Pobreza que oficiaron como tutores institucionales. Ellos apoyaron, nutrieron y orientaron el trabajo de los tesisistas. Para el ciclo 2019-2020 fueron tutores: Christian Orellana, Luisa Olgúin, Lucía Silva, Luis Iturra, Carlos Colihuechún, Daisy Bustamante, Andrea Hernández, Florencia Hepp, Luis Rodríguez, Antonia Garcés, Francisca Castro, Pedro Segura, Pedro Hepp, Cristian Cornejo, Maximiliano Mayan, Sandra Sepúlveda, María Paz Rengifo, Fernanda Azócar, Héctor Morales, Diego Pérez, Cristian Riquelme, Andrés Bravo, Eduardo Martínez, Carolina Momberg, Claudia Muñoz, Ricardo Álvarez, Ricardo Villalobos, Carola Tapia, Mauricio Rosenblüth y Diego Weinstein.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	P 7
INTRODUCCIÓN	P 9
PARENTALIDAD Y ROLES DE GÉNERO	
GESTAR Y PARIR CON DERECHOS: EL CASO DE LA ATENCIÓN EN SALUD MATERNA DE LAS MUJERES PEHUENCHE EN LA RED ASISTENCIAL ALTO BIOBÍO, SANTA BÁRBARA Y LOS ÁNGELES / Elda Jara	P 16
REAPROPIACIONES DEL ROL MATERNO. LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES MIGRANTES VENEZOLANAS EN LA CIUDAD DE TALCA / Karina González	P 38
BARRERAS ESTRUCTURALES PARA EL EJERCICIO DE PATERNIDADES CORRESPONSABLES: EL CASO DE LOS TRABAJADORES FAENEROS DEL GRAN CONCEPCIÓN / Yairi Guzmán	P 61
PATRIMONIO BIOCULTURAL Y DESARROLLO	
LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO COMO SUSTENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA VILLA CERRO CASTILLO DE AYSÉN / María Consuelo Gana, María Trinidad Puga y Elisa Mingo	P 87
SISTEMA AGROMARINO ALIMENTARIO LOCALIZADO EN HUAPE, CORRAL: UNA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ECONÓMICA PARA TERRITORIOS BORDE COSTEROS / José Barriga	P 113
COOPERATIVISMO	
PRÁCTICAS, ESTRATEGIAS Y SIGNIFICADOS DE AUTOGESTIÓN: CASOS DE ORGANIZACIONES DE TIPO COOPERATIVO EN LAS REGIONES DEL BIOBÍO Y ÑUBLE / Carlo Arriagada	P 137
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: DEMOCRATIZANDO LA BANCA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO / Pedro Hepp	P 164
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	
ESCUELA ALBERGUE: LAS FUNCIONES DE LA ESCUELA ANTE SITUACIONES DE DESASTRE SOCIONATURAL. EL CASO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ / Irene Villalobos	P 191

CADENA GLOBAL DE PRODUCCIÓN DE SALMÓN ATLÁNTICO POST
CRISIS DEL VIRUS ISAV: ANCLAJE ESPACIAL Y TRANSFORMACIONES
TERRITORIALES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS Y EL SUR DE CHILE /
Marion Stock _____ P 216

“FUEGO EN CONTRA”: CONOCIMIENTO LOCAL COMO HERRAMIENTA PARA
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES / **Diego Valdebenito** _____ P 244

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LA
CIUDAD DE VALPARAÍSO: ORGANIZACIÓN, TENSIONES Y CAPACIDAD
DE AGENCIA COMO FÓRMULA PARA EL TRABAJO COLABORATIVO AL
INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA / **Javiera Andrades, Sandra
Correa y Gisselot Letelier** _____ P 269

EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LA
CIUDAD DE VALPARAÍSO: ORGANIZACIÓN, TENSIONES Y CAPACIDAD
DE AGENCIA COMO FÓRMULA PARA EL TRABAJO COLABORATIVO AL
INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA / **Javiera Órdenes, Camilo
Paz, Víctor Campos, Vicente Ramírez y Paz Letelier** _____ P 294

NIÑEZ Y SEGREGACIÓN SOCIAL: EL CASO DEL CAMPAMENTO MANUEL
BUSTOS DE VIÑA DEL MAR / **Claudia Cárdenas y Fernanda León** _____ P 320

VIVIENDA Y ENTORNO

EL HÁBITAT RESIDENCIAL Y SU DESARROLLO EN TORNO A LA VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL MEDIANTE PRÁCTICAS DE AUTOCONSUMO REFERIDAS A
CULTIVOS URBANOS / **Alan Farmer** _____ P 346

ANÁLISIS DE PROGRAMAS SOCIALES

PROPUESTA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS SOCIALES
DESDE EL ENFOQUE DE EXCLUSIÓN SOCIAL: ESTUDIO DE CASO DEL
PROGRAMA FAMILIAS, PERTENECIENTE AL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES DE CHILE / **Diego Apablaza** _____ P 371

FARMACIAS POPULARES EN CHILE: UNA MIRADA TERRITORIAL HACIA LA
EQUIDAD EN SALUD EN CHILE / **Macarena Filún** _____ P 399

LA CONSOLIDACIÓN DE UNA IDENTIDAD PROFESIONAL SOCIAL: EL CASO
DEL PROGRAMA SERVICIO PAÍS EN LA COMUNA DE CHIMBARONGO,
CHILE / **Camilo Caro** _____ P 432

PRESENTACIÓN

Tengo el agrado de poner a disposición de las y los lectores nuestro duodécimo libro del programa *Tesis País: piensa un país sin pobreza*, el cual reúne 17 artículos elaborados por tesisistas de pre y postgrado de las más diversas disciplinas. Estos escritos son una síntesis de los principales hallazgos, resultados y recomendaciones contenidos en sus respectivas tesis de grado y magíster.

Estos trabajos de investigación, muy variados en su naturaleza, abordan aristas diversas y complementarias del fenómeno de la pobreza, tales como problemáticas de la parentalidad y los roles de género; la valorización del patrimonio biocultural para potenciar estrategias de desarrollo local; las propuestas de cooperativismo para generar desarrollo económico solidario y democrático; los desafíos que encierra la gestión del riesgo de desastres; la discusión sobre participación en comunidades educativas y la concepción de niños y niñas como actores y protagonistas de su realidad; la segregación residencial, los problemas de la vivienda, la relación con sus entornos y la recuperación de espacios públicos, así como el análisis crítico de distintos programas sociales.

Este volumen se compila en momentos de una profunda crisis sanitaria y social que se experimenta a nivel mundial, que en el caso de Chile se suma a la revuelta que irrumpió en nuestro país a fines de 2019 y cuyas reivindicaciones continúan pendientes de resolución. La sociedad chilena exige cambios profundos y duraderos frente a nuestros crónicos problemas de pobreza, desigualdad, injusticia social, abusos y corrupción, que han perpetuado por décadas brechas sociales que hoy ya se han tornado intolerables y han generado importantes problemas de polarización y cohesión social.

Con esta nueva publicación esperamos seguir aportando a la discusión sobre pobreza y políticas públicas desde una perspectiva multidimensional, relacional, dinámica, subjetiva, biocultural y territorial, con el objetivo de comprender la pobreza y sus posibilidades de superación. Las crisis que estamos viviendo son profundas y están teniendo mayor incidencia en comunidades vulnerables a lo largo del país. Sus impactos aún no se terminan de dimensionar y es altamente probable que tengan una duración prolongada dadas las

barreras estructurales existentes y las fragilidades en los sistemas de protección social vigentes.

En este contexto, con el compromiso de aportar a la construcción de un país sin pobreza y más justo, esta publicación es un esfuerzo por seguir contribuyendo a la difusión de investigaciones aplicadas, que en su gran mayoría abordan problemáticas de carácter local, las que buscan nutrir el debate público y la toma de decisiones, aportando conocimiento, evidencias, nuevas miradas y propuestas, así como recomendaciones concretas sobre temas de alta relevancia para el país y sus diversas comunidades a lo largo del territorio.

DIEGO WEINSTEIN

Coordinador nacional Programa Tesis País
Fundación Superación de la Pobreza

INTRODUCCIÓN

En sus 25 años de trayectoria, la Fundación Superación de la Pobreza ha desarrollado un compromiso activo con el mejoramiento de las políticas sociales, tanto por medio de su programa de intervención social Servicio País como a través de la elaboración de estudios y propuestas en diversos ámbitos de la gestión social del Estado.

El programa Tesis País surge bajo el sello de dichos propósitos e invita año a año a jóvenes estudiantes de pre y postgrado de diversas disciplinas a desarrollar sus tesis en temáticas de pobreza, desarrollo, exclusión, inequidad, discriminación, políticas sociales e integración social. De este modo, Tesis País busca incidir en la formación de las y los estudiantes, y contribuye a motivar, estimular y sensibilizar a nuevos profesionales y especialistas para que se interesen por estudiar y comprender el fenómeno de la pobreza a nivel local, regional o nacional, apliquen sus conocimientos a problemáticas concretas y propongan recomendaciones que contribuyan a su superación desde una mirada multidimensional.

Favorecemos el desarrollo de estudios y análisis sobre la pobreza y la vulnerabilidad social, sus manifestaciones, condicionantes y causas características, sus estrategias de superación; profundizamos, además, en aspectos teóricos, metodológicos y prácticos. Con el objetivo de contribuir a la superación de

las inequidades socioterritoriales que afectan a nuestro país, buscamos promover la investigación en territorios aislados, en ámbitos rurales, así como en comunas urbanas segregadas a lo largo de todo el país. El objetivo es generar investigaciones aplicadas, levantar evidencias y elaborar propuestas para así alcanzar mayores grados de integración social, equidad y justicia social.

Durante el ciclo 2019-2020 se recibieron 79 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 52 en las dos modalidades que considera nuestro programa: tesis terminada y proyecto de tesis. De dichos trabajos, 17 se convirtieron en los artículos que contiene esta publicación. Se presenta, a continuación, un breve resumen de sus contenidos, organizados en siete ejes temáticos.

El eje *parentalidad y roles de género* contiene los tres primeros artículos de esta compilación. El primer trabajo se titula **Gestar y parir con derechos: el caso de la atención en salud materna de las mujeres pehuenche en la red asistencial de Alto Biobío, Santa Bárbara y Los Ángeles**, escrito por Elda Jara. El texto da cuenta del incumplimiento de derechos en la atención en salud materna que experimentan las mujeres pehuenche. Estas mujeres habitan en un territorio aislado que no cuenta con atención resolutive en salud obstétrica, por lo que durante su proceso de gestación y parto deben dejar sus comunida-

des y familias para acceder a una atención en salud. Así, se ven despojadas del significado comunitario del nacimiento y de la compañía de sus familiares, por lo que sus experiencias de parto y puerperio inmediato suelen estar pobladas de sentimientos de soledad, miedo y dolor. En este escenario, como se analizará en el texto, el sistema de salud no ha logrado incorporar una perspectiva intercultural. Este artículo está basado en la tesis realizada por la autora para la obtención del grado de Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción.

Karina González es la autora del siguiente trabajo, que lleva por título **Reapropiaciones del rol materno. La experiencia de las mujeres migrantes venezolanas en la ciudad de Talca**, escrito a partir de su tesis para obtener el grado de socióloga de la Universidad Católica del Maule. Este artículo analiza la problemática de la migración transnacional y, específicamente, lo que experimentan las mujeres venezolanas residentes en la ciudad de Talca que tienen hijos(as) que permanecen en su país de origen. Frente a este escenario, estas madres buscan nuevas estrategias para dar continuidad al rol materno y así poder ejercer prácticas de cuidado.

El tercer artículo, titulado **Barreras estructurales para el ejercicio de paternidades corresponsables: el caso de los trabajadores faeneros del Gran Concepción**, fue desarrollado por Yairi Guzmán. El texto aborda la construcción social y cultural de las paternidades entre varones del Gran Concepción que trabajan mediante faenas en el norte de Chile debido a las escasas posibilidades

laborales en su región de origen. Esta condición, así como las disposiciones legales en la materia, terminan obstaculizando el ejercicio de paternidades más corresponsables, reproducen la división sexual del trabajo y tensionan su rol como padres. Este escrito está basado en la tesis de Yairi Guzmán para obtener el grado de socióloga de la Universidad de Concepción.

El siguiente eje agrupa dos artículos que estudian la relación entre *patrimonio biocultural y desarrollo*. **La puesta en valor del patrimonio como sustento del turismo comunitario en la Villa Cerro Castillo de Aysén** es el título de la investigación de María Consuelo Gana, María Trinidad Puga y Elisa Mingo, basada en la tesis con la que obtuvieron el grado de sociólogas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las autoras exploran la riqueza del patrimonio de la Villa Cerro Castillo, vinculado a su cultura y tradiciones, y a la naturaleza del lugar, con el objetivo de proponer una estrategia de desarrollo turístico de la localidad. Para generar este plan común es fundamental promover el sentido de comunidad, la cohesión social y asociatividad entre las y los habitantes del lugar, así como fortalecer su grado de organización y empoderamiento.

El segundo artículo en esta línea es el escrito por José Barriga, **Sistema Agro-marino Alimentario Localizado en Huape, Corral: una propuesta de articulación económica para territorios borde costeros**. En esta investigación se releva una propuesta gastronómica comunitaria doméstica que desarrolla una agrupación de mujeres. Esta se basa en un Sistema Agromarino Ali-

mentario Localizado —Sial—, el que permite construir una alternativa frente a la especialización de la explotación de recursos y entornos marítimo-pesqueros a través de la complementariedad del borde costero en tanto uso integrado de los recursos socioeconómicos que ofrece el mar y la tierra. Este texto está basado en la tesis realizada por el autor para la obtención del grado de Magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Austral.

Un tercer eje sobre *cooperativismo* está compuesto por dos artículos en la materia. El primero se titula **Prácticas, estrategias y significados de autogestión: casos de organizaciones de tipo cooperativo en las regiones del Biobío y Ñuble** y es el resultado del trabajo de Carlo Arriagada, quien se basó en su tesis para obtener el grado de sociólogo de la Universidad de Concepción. El autor busca identificar y comprender prácticas, estrategias y significados en organizaciones autogestionadas que emplean dinámicas de tipo cooperativo en la región del Biobío y Ñuble. El artículo ahonda en iniciativas sociolaborales que conforman agrupaciones que implican un impacto positivo en la vida social de sus integrantes, pues generan procesos de integración socioafectiva y formas de asociación económica que promueven prácticas solidarias. Esta perspectiva está en sintonía con las demandas por un sistema económico más humano levantadas por miles de personas durante el estallido social de 2019 y la crisis económica que ha producido la pandemia por Covid-19 en 2020.

En este mismo eje presentamos el trabajo de Pedro Hepp, **Cooperativas de ahorro y crédito: democratizando la banca en la región de Valparaíso**, elaborado a partir de su trabajo de tesis para titularse como ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hepp realiza un análisis sobre la situación de las cooperativas de ahorro y crédito de la región de Valparaíso con el fin de determinar las barreras y desafíos a los que estas instituciones se enfrentan. Las cooperativas son un espacio de encuentro y de participación, y crean capacidades locales para un desarrollo económico que aporta a la descentralización territorial. Esta investigación propone un modelo que no solo busca que las instituciones bancarias sean económicamente estables, sino que se conviertan en entidades de control democrático que posibiliten la inclusión financiera de un sector que ha sido históricamente relegado.

Los siguientes cuatro artículos obedecen al desarrollo de la temática *gestión del riesgo de desastres*. Irene Villalobos contribuye a este eje con su artículo **Escuela albergue: las funciones de la escuela ante situaciones de desastre sicionatural. El caso de la comunidad educativa del Liceo de Huara, región de Tarapacá**. En este estudio se describe y analiza la función de la escuela frente a los desastres sicionaturales en la fase de postimpacto en su comunidad educativa. Frente a la tardía respuesta de las autoridades, la comunidad educativa propone estrategias de intervención descentralizadas, con el fin de agilizar la burocracia administrativa y favorecer la eficiencia de la reconstrucción a través de la promoción y fortalecimiento

de redes de apoyo locales y regionales. Con esta investigación de tesis, Irene Villalobos obtuvo el grado de Magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile.

El siguiente texto se titula **Cadena global de producción de salmón atlántico postcrisis del virus ISAv: anclaje espacial y transformaciones territoriales en la región de Los Lagos y el sur de Chile** y es de autoría de Marion Stock, quien basó este trabajo en su proyecto para obtener el título de geógrafa de la Universidad de Chile. El texto analiza los efectos sobre el territorio de las fases productivas asociadas a la crianza de salmón en agua dulce y agua de mar, y a su posterior comercialización y distribución para el consumo humano. Luego de la crisis del ISAv se produjo una reestructuración de la cadena global de producción del salmón y una reconfiguración espacial que implicó transformaciones territoriales que respondieron a necesidades de la industria para continuar funcionando mediante la diversificación de su producción. Estos movimientos han precarizado aún más las condiciones de vida de las y los trabajadores locales, y han generado un aumento de la pobreza multidimensional regional en los últimos años.

“Fuego en contra”: conocimiento local como herramienta para la gestión del riesgo de incendios forestales es el tercer trabajo de este eje y su autor es Diego Valdebenito. En este artículo se abordan los conocimientos locales desplegados para enfrentar la catástrofe de los megaincendios acaecidos en la zona central en el verano de 2017. Las comunidades que habitan territorios que han

experimentado terremotos, escasez hídrica e incendios forestales generan respuestas colectivas y solidarias ante los desastres, basadas en lógicas de reciprocidad y colaboración preexistentes. Activando conocimientos locales y su tejido organizativo, estas comunidades logran prevenir y mitigar el riesgo de desastres. Son ellas quienes conocen mejor el territorio y poseen un portafolio de recursos y saberes más idóneo para hacer frente a la emergencia. Este escrito está basado en la tesis de Diego Valdebenito para obtener el grado de sociólogo de la Universidad Diego Portales.

El artículo de Javiera Andrades, Sandra Correa y Gisselot Letelier, titulado **Memorias vivas y actuales: entre las memorias colectivas e individuales de los habitantes de Cerro Merced respecto a la reconstrucción postincendio de 2014**, cierra este eje relacionado con trabajos sobre la gestión del riesgo de desastres. Con esta investigación obtuvieron el grado de trabajadoras sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El texto da cuenta de los abordajes del incendio ocurrido en 2014, evento en el que la versión oficial y estatal ha puesto énfasis en la reconstrucción material y urbana. No obstante, esto ha invisibilizado la complejidad del fenómeno de la reconstrucción postdesastre. Los habitantes del sector han ido desplegando lugares, objetos y monumentos, generando una memoria viva, tanto colectiva como individual, del acontecimiento, a partir de una materialidad cargada de símbolos y afectos que les permiten hacer frente al olvido y elaborar su nueva realidad.

A continuación, se ofrece a las y los lectores dos artículos contenidos en el tema *educación e infancia*. El primero lleva por título **Participación social en liceos técnicos profesionales de la ciudad de Valparaíso: organización, tensiones y capacidad de agencia como fórmula para el trabajo colaborativo al interior de la comunidad educativa**. Sus autores y autoras son Javiera Órdenes, Camilo Paz, Víctor Campos, Vicente Ramírez y Paz Letelier. En este escrito se abordan los procesos y prácticas de participación social en nuestra sociedad a través del estudio de los procesos democráticos, organizativos y deliberativos que ocurren en las comunidades educativas y sus espacios de participación. Se analizan obstáculos y elementos facilitadores de la participación, así como el rol favorecedor del diálogo de ciertos actores clave que fungen como agentes de cambio autónomos, en contraste con lo que ocurre en espacios normados y jerárquicos. Se analiza, además, el escaso involucramiento de otros actores en estos mismos procesos. Con esta investigación de tesis, las y los autores obtuvieron el grado de psicólogos y psicólogas educacionales de la Universidad de Valparaíso.

El segundo artículo está escrito por Claudia Cárdenas y Fernanda León, y se titula **Niñez y segregación social: el caso del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar**. Con este trabajo obtuvieron el título de sociólogas de la Universidad de Valparaíso. En el trabajo exponen e identifican las actitudes y representaciones sociales que construyen niñas y niños acerca del territorio que habitan, las que están afectadas y atravesadas por la segregación residen-

cial existente. Estas representaciones se vinculan a lo comunitario, a una historia compartida y a una valoración de los espacios públicos y de encuentro, pero también a una sensación de inseguridad dentro del territorio y a un sentimiento de aislamiento respecto a la urbe. La niñez está considerada en esta investigación desde una concepción que la sitúa como actor y protagonista de su realidad social en tanto ejerce su derecho a ser oída y a opinar en todos los asuntos que le afectan.

El penúltimo eje aborda la relación entre *vivienda y entorno*, y a ella contribuye una investigación de Alan Farmer titulada **El hábitat residencial y su desarrollo en torno a la vivienda de interés social mediante prácticas de autoconsumo referidas a cultivos urbanos**. En el escrito se analiza la producción de la vivienda de interés social y su relación con el entorno como oportunidad para implementar prácticas de autoconsumo asociadas al cultivo urbano. Se estudia el rol que cumplen las relaciones y prácticas socioespaciales y la sustentabilidad derivada de la intervención para recuperar espacios públicos en desuso por medio del componente natural. Esto, con el fin de dotarlos de nuevas áreas verdes de carácter productivo y autogestionadas por la comunidad. Este artículo evidencia que el diseño de conjuntos y viviendas sociales condiciona y predispone la manera en que los habitantes se enfrentan y hacen uso de su entorno. Este trabajo se basó en la tesis realizada por el autor para la obtención del grado de arquitecto de la Universidad Viña del Mar.

El último eje se centra en el *análisis de*

programas sociales y son tres los artículos que lo componen. El primero está escrito por Diego Apablaza, lleva por título **Propuesta metodológica de análisis de programas sociales desde el enfoque de exclusión social: estudio de caso del Programa Familias, perteneciente al subsistema Seguridades y Oportunidades** y se basó en su tesis para obtener el grado de administrador público de la Universidad de Santiago de Chile. El autor propone criterios que debieran incorporar los programas sociales, los que cuestionan el paradigma imperante en materia de promoción y protección social. El enfoque de exclusión social permite integrar una mayor cantidad de variables para el análisis de las políticas sociales, pues concibe las causas de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión desde una perspectiva multidimensional, multifactorial, estructural, relativa y dinámica en tanto factores que restringen la ciudadanía.

El texto **Farmacias populares en Chile: una mirada territorial hacia la equidad en salud en Chile**, elaborado por Macarena Filún, analiza los modelos de farmacias populares que se han masificado en Chile y hace énfasis en su impacto en las dimensiones económica, social y sanitaria. Las farmacias populares han contribuido a subsanar y disminuir las brechas existentes en el acceso a medicamentos en el país. Esta política pública se revela como una alternativa concreta para subsanar estas brechas y para construir un camino hacia la salud como un derecho. Estas entidades contribuyen a la disminución del gasto de bolsillo de los usuarios al mismo tiempo que favorecen la

equidad territorial y la disminución del centralismo. Su integración a la red de salud comunal ha permitido subsanar la fragmentación del sistema de salud. Así, desde una perspectiva comunitaria e intersectorial, es posible abordar ámbitos estratégicos de la acción sanitaria integral, asumiendo la complejidad del bienestar de las personas y sus comunidades. Este escrito está basado en la tesis realizada por la autora para la obtención del grado de química farmacéutica de la Universidad de Chile.

El artículo final de esta compilación lleva por título **La consolidación de una identidad profesional social: el caso del programa Servicio País en la comuna de Chimbarongo, Chile**, elaborado por Camilo Caro, quien con esta investigación obtuvo el título de psicólogo de la Universidad de Chile. Su trabajo analiza los procesos subjetivos que experimentan las y los jóvenes profesionales del programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza en contextos de intervención social en pobreza. Indaga en la construcción de significados y sentidos respecto al ser profesional en un contexto territorial e intersubjetivo de intervención social, teniendo en consideración el impacto social y las capacidades de transformación de esta actividad profesional. El autor destaca la importancia del vínculo territorial e intersubjetivo al momento de realizar intervenciones, relevando la incorporación de los profesionales al diario vivir de las comunidades. Finalmente, se subraya la importancia del acompañamiento de la institución encargada del proceso de intervención, que propicia espacios reflexivos que

permiten la construcción de un puente entre la experiencia práctica y la consolidación identitaria.

Nuestro anhelo es que esta nutrida y variada colección de trabajos contribuya a mejorar la comprensión de la pobreza y a enriquecer el debate sobre sus posibilidades de superación al profundizar en su conocimiento teórico, metodológico y práctico. Para esto, la Fundación pretende seguir ofreciendo un espacio abierto y diverso que fomente el desarrollo de conocimientos en todas las áreas de la ciencia, la técnica, el arte, la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. Se espera continuar abriendo instancias de divulgación de los trabajos de tesis de pre y postgrado con el objetivo de seguir contribuyendo a la socialización, discusión y debate del conocimiento generado a nivel nacional, regional y/o local con profesionales, especialistas, funcionarios públicos, representantes comunitarios, etc.

Esperamos que las energías y la dedicación de quienes desarrollaron estos trabajos investigativos tengan utilidad en el marco de la discusión de políticas y programas sociales, y en la generación de propuestas innovadoras y eficaces que contribuyan con recomendaciones concretas para la mejora en enfoques, abordajes y criterios de estas políticas y programas sociales. La invitación continúa abierta: a pensar un país sin pobreza, con más integración y equidad social desde una perspectiva eminentemente participativa, dialógica y comunitaria, con foco en la promoción de un desarrollo local inclusivo.



GESTAR Y PARIR CON DERECHOS: EL CASO DE LA ATENCIÓN EN SALUD MATERNA DE LAS MUJERES PEHUENCHE EN LA RED ASISTENCIAL DE ALTO BIOBÍO, SANTA BÁRBARA Y LOS ÁNGELES

Elda Karina Jara Pacheco¹,
Universidad de Concepción

RESUMEN

El presente estudio da cuenta de una realidad extremadamente compleja que viven las mujeres pehuenche de Alto Biobío durante su proceso de gestación y parto. Ellas habitan en un territorio geográfica y culturalmente aislado, no cuentan con servicios de salud resolutivos en urgencias obstétricas y deben someterse a un sistema que las obliga a dejar sus comunidades y familias para acceder a una atención de salud que asegure su vida y la del hijo/a que está por nacer. En este panorama, se ven despojadas del significado comunitario del nacimiento y de la compañía de sus familiares, por lo que sus experiencias de parto y puerperio inmediato suelen estar pobladas de sentimientos de soledad, miedo y dolor. Las políticas que norman las prácticas clínicas asociadas a la salud materna indican acciones que deben ser incorporadas por los establecimientos y equipos de salud, pues permitirían mejores experiencias de nacimiento. Entre ellas se cuenta el derecho de la madre a estar acompañada durante el parto, lo que para las mujeres que provienen de sectores rurales es prácticamente imposible. El foco de este estudio es visibilizar el incumplimiento de derechos relacionados con la atención de salud materna de las mujeres pehuenche, que no las considera como sujetas de derechos culturales en el ámbito de la salud, el acceso limitado a atención resolutiva en salud obstétrica y la parcial efectividad de los espacios que se han creado desde una perspectiva intercultural.

Palabras clave: salud materna, mujer indígena, interculturalidad, sistema de salud.

¹ Socióloga de la Universidad de Concepción. El presente artículo está basado en una investigación que dio lugar a la tesis “Gestar y parir con derechos: el caso de la atención en salud materna de las mujeres pehuenche en la red asistencial Alto Biobío, Santa Bárbara y Los Ángeles”, elaborada para optar al grado de Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción (2018). Profesora guía: Carla Donoso Orellana, Concepción, Chile.

INTRODUCCIÓN

Ser mujer indígena en las sociedades latinoamericanas suele ser una condición sociocultural que aumenta la probabilidad de vivir situaciones de vulneración de derechos. Esta temática ha sido analizada desde perspectivas feministas que plantean que la feminización de la pobreza está directamente relacionada con la intersección de los factores de género, clase y raza o etnicidad. Se plantea que estos factores influyen directamente en la vida de mujeres y hombres, determinando su acceso a derechos y oportunidades, y produciendo condiciones de privilegio o exclusión que dependen de la posición social (Magliano y Mallimaci, 2015, en Carrasco, 2018). Es por ello que el origen étnico de las mujeres muchas veces condiciona su situación de salud o enfermedad.

Según el informe “Salud de la mujer indígena” (Cordero, L., Luna, A., Vattuone, M., 2010), estas mujeres se enfrentan a barreras económicas, sociales y culturales que restringen su acceso a servicios de salud de calidad. La salud materna no es la excepción. Las mujeres indígenas se encuentran en evidente desigualdad. La mortalidad materna figura entre los indicadores de salud que permiten evidenciar una de las mayores brechas que separan a ricos y pobres (ONU, 2019)², fenómeno que se agudiza en el caso de las mujeres indígenas.

La realidad chilena no es muy diferente. El estudio “Epidemiología con enfoque intercultural” del Ministerio de Salud (Minsal) (Oyarce y Pedrero, 2009) calculó las tasas brutas de mortalidad para el trienio 2001-2003 y reveló que estas son sistemáticamente más altas en poblaciones indígenas que en la población no indígena: 30% para los mapuche lafquenche de La Araucanía y 80% para los indígenas del extremo sur. Datos disponibles del Servicio de Salud (S.S.) indican que para el año 2011, en la provincia del Biobío, la mortalidad materna alcanzó un 1,4 x 100.000 nacidos vivos en mujeres no mapuche, frente a una alarmante tasa de 16,5% x 100.000 nacidos vivos en mujeres mapuche (Minsal, 2011). Los niños mapuche y pehuenche del área de cobertura del S.S. Biobío exhibían un 140% más de riesgo de morir antes de cumplir un año que los niños no mapuche durante el 2001-2003, y en el trienio 2004-2006 esta cifra aumentó a 310% (Minsal, 2011).

Según el BID (Cordero, L., Luna, A., Vattuone, M., 2010), uno de los problemas concretos al que se enfrentan las mujeres indígenas en su proceso reproductivo es la poca accesibilidad a servicios de salud pertinentes culturalmente, cercanos a sus comunidades y con capacidad resolutiva frente a urgencias obstétricas. Suelen tener acceso a pocos especialis-

² Naciones Unidas (2009). The Millenium Development Goal Report. Nueva York: Naciones Unidas. Recuperado de http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDC_Report_2009_ENG.pdf, fecha de acceso: 1/XI/2009. Citado en: Cordero, L., Luna, A., Vattuone, M. (2010). Salud de la mujer indígena. Banco Interamericano de Desarrollo, 2010.

tas y a escasos insumos, medicamentos e infraestructura para enfrentar el proceso reproductivo de una manera que permita disminuir morbilidad materno-infantil. La comuna de Alto Biobío enfrenta este dilema: cuenta con ocho postas rurales y un Cesfam para un territorio de 2.000 km² y una población 100% rural. El 98,9% de sus habitantes son mapuche pehuenche (INE, 2017) y se encuentran agrupados en 13 comunidades que viven en un territorio que, según la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere, 2011), está en la categoría de aislamiento crítico debido a las complejidades de acceso a servicios de educación, salud y a centros proveedores de bienes y servicios³. Un 60,7% de su población se halla en situación de pobreza multidimensional (Casen, 2017). Alto Biobío, además, es la comuna con mayor índice de natalidad del país. Para el año 2015, su tasa fue de 24,7 nacidos vivos por mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 12,7.

El derecho de acceder a la salud, un asunto de múltiples enfoques

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (2004) afirma que el acceso a la atención de salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho bá-

sico, y que es obligación de los Estados garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, para lo que deben asignar a esos servicios el máximo de recursos disponibles⁴.

Al respecto, el derecho a la salud en todas sus formas y niveles abarca elementos esenciales. Algunos de estos han sido destacados por el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) a través de sus observaciones generales. Un sistema de salud con enfoque de derechos debe asegurar: (i) la disponibilidad oportuna de servicios de salud, en especial a grupos prioritarios y vulnerables; (ii) la accesibilidad, es decir, debe permitir el ingreso para todos y todas sin discriminación, por lo que debe estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. También incluye el acceso a la información relacionada con la salud; (iii) la aceptabilidad, que obliga a todos los establecimientos, bienes y servicios de salud a ser culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la identidad y creencias de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la vez que deben ser sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida. Otro elemento que según el Cdesc debe ser garantizado en el marco del derecho

³ En el Decreto Supremo N°68, publicado el 27 de noviembre de 2010, que establece la Política Nacional de Desarrollo de Localidades Aisladas, se señala que “se entiende por territorio aislado aquel con bajo nivel de accesibilidad, con escasa población y alta dispersión de ésta, baja presencia y cobertura de servicios básicos y públicos, y que, a consecuencia de estos factores, se encuentra en una situación de desventaja y desigualdad social respecto del desarrollo del país”. Estudio de identificación de localidades en condiciones de aislamiento 2012. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

⁴ Recopilación sobre las observaciones generales y las recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Naciones Unidas, 2014.

a la salud es (iv) la calidad, ya que además de aceptables desde el punto de vista cultural, el sistema de salud y sus políticas deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, y resguardar la promoción, prevención y recuperación de la salud, brindando en todo momento un trato digno⁵.

En comunidades indígenas, la problematización y alcances del derecho a la salud son más amplios. Gracias al Convenio 169 de la OIT, los pueblos originarios son titulares de derechos colectivos. Esto los erige como sujetos demandantes y pueden exigir garantías ante el Estado, como la de participar en la planificación y evaluación de las políticas, incluidas las de salud.

En Chile, las políticas de salud materna que se aplican a las mujeres de pueblos originarios obedecen a diversos compromisos internacionales ratificados por nuestro país, entre los que se cuentan (i) los derechos sexuales y reproductivos de la mujer asegurados en la Conferencia de El Cairo de 1994 y la Convención Belém do Pará del mismo año; (ii) la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Chile en 1990; y (iii) el Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT de 1989, promulgada por Chile en 2008. Este último implica una cobertura transversal que debiera materializarse en programas e iniciativas locales con pertinencia cultural en la atención de salud materna.

En este ámbito, estos tres enfoques se relacionan constantemente. Sin embargo, evidencian tensiones que hacen surgir importantes diferencias en la implementación de las políticas de salud materna a nivel territorial, de servicio de salud y de pueblo originario.

Interculturalidad en las políticas de salud materna: el contexto chileno

En Chile, la asistencia al parto ha estado marcada por radicales transformaciones que han tenido como objetivo influir directamente en la reducción de las tasas de mortalidad materno-infantil. Durante el siglo XIX,

“Gestar y parir eran experiencias que se asociaban a la mortalidad materna. Por ello, a fines del siglo comenzó la formación de matronas y obstetras, lo que produjo que paulatinamente el parto y las enfermedades asociadas a la gestación y al puerperio, fueran asistidas por profesionales y ya no por parteras empíricas”
(Zárate, 2007, citado en Leiva y Sadler, 2016, p. 63).

De tal modo, la asistencia al parto fue transitando desde el reino de lo natural-comunitario-normal-fisiológico al de lo médico-hospitalario-intervenido-patológico⁶.

Esta transición tuvo como principal resultado la drástica disminución de la

⁵Ídem.

⁶ En 1957, en nuestro país el 60,8% de los nacimientos ya era atendido por profesionales y esta cifra alcanzó el 99% en 1990. Zárate, M.S. (2007). *Dar a Luz en Chile, siglo XIX: de la “ciencia de hembra” a la ciencia obstétrica*. Santiago: Dibam, 2007.

mortalidad materno-infantil⁷, lo que se convirtió en un importante indicador de desarrollo. Pero también hubo consecuencias en el plano de la excesiva *medicalización*⁸, ya que la atención hospitalaria y profesionalizante de los nacimientos disminuyó, si es que no erradicó, el papel de la comunidad en este proceso tan vital, al punto de modificar su significado cultural a través de la desvinculación de este tránsito de los saberes ancestrales de las madres y sus familias.

En este contexto, las mujeres de pueblos originarios debieron construir nuevos significados, adoptar nuevas costumbres, aceptar espacios ajenos. Nuevos personajes empezaron a controlar sus cuerpos y su privacidad, tales como matronas, médicos y enfermeros. Aparecieron nuevas tecnologías, tiempos y procedimientos, como las salas de parto, los quirófanos e instrumental

obstétrico que hasta hoy generan una profunda contradicción con sus saberes culturales⁹. Luego de décadas aplicando el modelo de salud y de atención occidental del parto, los conocimientos de los pueblos indígenas sobre el gestar, el parir y el nacer se encuentran en un momento crítico por desuso, lo que los podría llevar a su olvido y desaparición definitiva.

En Chile, desde hace algunos lustros, las políticas públicas de salud materna han incorporado paulatinamente algunos aspectos del nacimiento propios de culturas indígenas gracias a la planificación de políticas basadas en derechos, como es el caso de los programas (i) de Salud de la Mujer¹⁰; (ii) de pueblos indígenas en el marco del Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas (Pespi)¹¹; y (iii) del sistema de protección Chile Crece Contigo (Chcc)¹². En este contexto, las incorporaciones culturales toman como

⁷ Durante la última mitad de siglo, la tasa de mortalidad materna en Chile transitó desde 293,7 por 100.000 nacidos vivos, en 1957, a 18,5 por 100.000 nacidos vivos en 2011, lo que se explica principalmente por el aumento del nivel educacional de las mujeres y la mejora del sistema sanitario. En 2008, Chile era uno de los países en el continente americano con la tasa más baja de mortalidad materna, solo por debajo de Canadá, con cifras muy inferiores al promedio continental (Herrera, 2013, citado en Cabieses, B., Bernales, M., Obach, A., Pedrero, V. comps, 2016).

⁸ Se entiende como medicalización un proceso que implica convertir en enfermedad toda una serie de episodios vitales que son parte de los comportamientos de la vida cotidiana de los sujetos y que pasan a ser explicados y tratados como enfermedades cuando previamente solo eran acontecimientos ciudadanos (Leiva y Sadler).

⁹ Según Alarcón, A. y Nahuelcheo, Y. (2008), estos cambios se denominan aculturación o globalización en el ámbito de la salud, ya que en territorios donde conviven diferentes culturas en situaciones desiguales de poder se genera una adaptación forzada y hegemónica que produce la pérdida paulatina del conocimiento como patrimonio cultural.

¹⁰ El programa Salud de la Mujer se centra en las etapas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y adopta un enfoque de género, salud mental y de ciclo vital de la mujer.

¹¹ En los territorios en que existe mayor población indígena se implementa el Programa Especial de Pueblos Indígenas (Pespi), desde el cual se propone la incorporación de un enfoque de salud intercultural de manera transversal a todas las políticas sanitarias.

¹² El sistema de protección a la infancia Chile Crece Contigo comenzó a implementarse en 2006, a través de los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud, como una política basada en derechos.

marco de referencia las recomendaciones de Chcc, que establece un modelo de atención personalizado del parto. En materia de interculturalidad, el programa Salud de la Mujer actúa en concordancia con la implementación del Pespi, adecuándose a los requerimientos de cada territorio.

Con todo, la implementación de medidas interculturales de salud materna está supeditada a los recursos de cada servicio, a la infraestructura disponible, capacitaciones y, de manera muy importante, a la motivación y capacidad de innovación de los equipos profesionales. Esta situación provoca diversos vacíos, discontinuidades e inconsistencias en el proceso de planificación e implementación de políticas en la materia, lo que condiciona el acceso efectivo de las mujeres de pueblos indígenas a servicios de salud materna de calidad y culturalmente pertinentes.

En este marco, esta investigación se propuso analizar las percepciones y representaciones de las mujeres pehuenche de Alto Biobío sobre su experiencia como usuarias de la red de salud que brinda asistencia al proceso reproductivo. Para ello, se caracterizaron las condiciones de acceso, la valoración de su propia experiencia y su percepción sobre el estado de cumplimiento de derechos culturales por parte de los establecimientos de salud. Además, para complementar la información brindada por las mujeres pehuenche, usuarias de la red asistencial, se recogieron percepciones y experiencias de los propios profesionales que brindan atención de salud materna. De este modo, se pudo comprender de mejor manera las viven-

cias y percepciones de todos los actores involucrados.

MÉTODO

Esta investigación es de tipo cualitativa y se inscribe en la línea de estudios de caso, que corresponde a “la recopilación e interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, una institución, una empresa o un movimiento social particular” (Vieytes, 2004, p. 623).

El caso analizado fue el de la red asistencial del Servicio de Salud Biobío, que brinda atención a las mujeres pehuenche provenientes de las comunas de Alto Biobío y Santa Bárbara, y que incluye a los establecimientos Cesfam Ralco, Hospital Comunidad y Familia de Santa Bárbara y Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz (Cavrr). En ellos se indagó en la incorporación del enfoque de derechos de la mujer pehuenche, teniendo a la vista la implementación del programa Salud de la Mujer, el Pespi y el sistema de protección Chcc.

Como método de recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, basada en dos mallas temáticas elaboradas para mujeres mapuche pehuenche usuarias de la red asistencial, como también para los funcionarios y funcionarias de los programas involucrados. En total, se realizaron 20 entrevistas:

- Un informante clave
- Seis mujeres madres pehuenche

- Cuatro facilitadores interculturales
- Seis matronas/es miembros de los equipos de salud de los establecimientos involucrados en el estudio
- Tres representantes provinciales del Servicio de Salud Biobío

El procesamiento de la información se realizó mediante un análisis de contenido, una “técnica de análisis que se utiliza para sistematizar y analizar el contenido de mensajes de textos, sonidos e imágenes con el objetivo de efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente” (Vieytes, 2004, p. 539). Como software de apoyo se usó Atlas.ti, que sirvió para categorizar los datos de las entrevistas.

De acuerdo con la legislación nacional, el estudio contempla límites éticos para no pasar a llevar la voluntad de las informantes y los procesos íntimos relacionados con el resguardo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres madres pehuenche, por una parte, y, por otra, para no conflictuar la estabilidad laboral de los equipos del S.S. Biobío. Por ello, el estudio fue sometido a evaluación en el comité ético-científico del servicio de salud correspondiente, lo que permitió tomar todas las precauciones recomendadas por la bioética y las ciencias sociales. Estas suponen la confidencialidad y el consentimiento informado de quienes participaron, por un lado, y la no interferencia en la dinámica de los centros de salud con las mujeres gestantes y sus familias, por otro.

Se validó el protocolo de consentimiento informado utilizado teniendo como base la Ley 20.120 y los acuerdos inter-

nacionales de bioética (Declaración de Helsinki, 2000, última versión, citada en González, 2016), y luego de ser aprobado por el comité ético-científico fue presentado a cada informante, comunicando el nombre de la investigación, equipo investigativo, objetivos, solicitud para realizar entrevistas semiestructuradas, posibilidad de grabar audio y opción de utilizar seudónimo para resguardar la identidad. Luego de la firma del documento, voluntaria e informada, las personas estaban en condiciones de participar.

HALLAZGOS Y RESULTADOS

A continuación, se presentan los hallazgos del estudio, que tienen que ver con las experiencias de maternidad de las mujeres pehuenche. Para ello, en un primer apartado se describen los procesos de funcionamiento de la red asistencial en salud materna del S.S. Biobío, lo que permite comprender el proceso que experimentan las mujeres. Luego, se hace una descripción y análisis etnográfico sobre la experiencia de maternidad de las mujeres pehuenche en la red asistencial. Por último, se profundiza en las falencias y problemáticas identificadas por las mismas usuarias con respecto a su experiencia en la red asistencial.

1. Un camino por recorrer: red asistencial de salud materna para las mujeres pehuenche

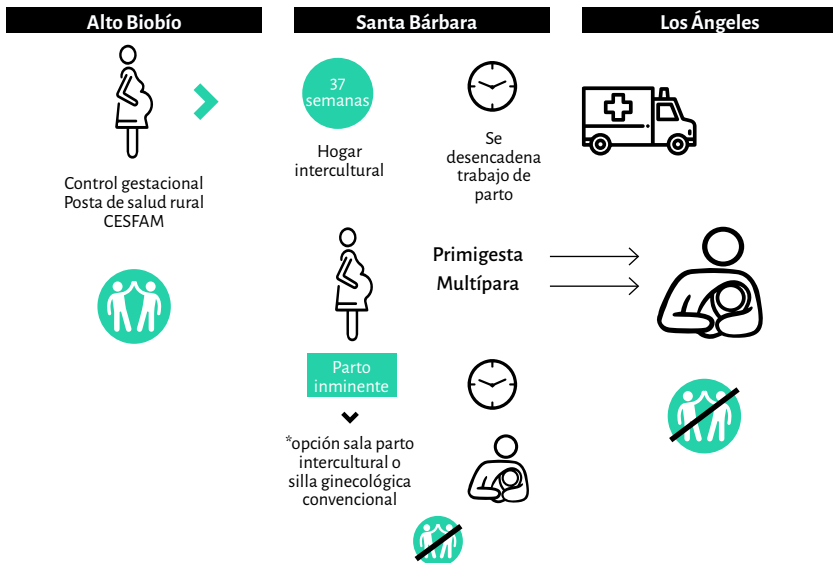
La red asistencial de salud materna del S.S. Biobío tiene como principal objeti-

vo asegurar el tratamiento clínico de los procesos reproductivos de las mujeres que habitan las comunas incluidas en su territorio de influencia. Debido a esto, el S.S. tiene una especial preocupación por las mujeres provenientes de sectores rurales, con dificultades de accesibilidad debido a la geografía extrema del lugar y a que pertenecen al pueblo pehuenche. Cada uno de los establecimientos incluidos en este estudio cumple con un

rol dependiendo del área de complejidad y del ciclo vital de la mujer usuaria, con el objetivo principal de centralizar la atención de los nacimientos.

En la siguiente ilustración se grafica el proceso de derivación, que busca centralizar y hospitalizar la atención del nacimiento en los establecimientos de mayor complejidad.

Figura 1. Centralización de la atención obstétrica en la red asistencial de salud materna Biobío



Fuente: elaboración propia.

La imagen muestra el recorrido que realizan las mujeres desde Alto Biobío hasta la ciudad de Los Ángeles, que queda a 100 km de distancia desde Ralco, el sector urbano de Alto Biobío, con el objetivo de recibir atención obstétrica en su periodo reproductivo. Las mujeres reciben atención gestacional en las postas de salud rural y en el Cefsam de

la comuna. La ronda médica tiene una periodicidad semanal y las mujeres acuden a las postas de salud rural para sus controles mensuales, los que son realizados por matronas/es. Cabe destacar que, al tratarse de una comuna con un territorio rural extenso y geografía de difícil acceso, las mujeres acuden a los controles según las condiciones del cli-

ma y traslado. Muchas de ellas asisten a sus controles caminando durante horas o cabalgando.

En el caso de las mujeres que son usuarias de las postas rurales de salud, los controles prenatales que corresponden a la semana 36 de gestación en adelante son realizados en el Hospital Comunidad y Familia de la comuna de Santa Bárbara, que queda a 50 km aproximados de distancia de Ralco. En este lugar las mujeres cuentan con un Hogar Intercultural de la Madre y el Niño, donde pueden alojarse mientras se realizan los chequeos respectivos. Es una estrategia que permite asegurar el acceso a las prestaciones de salud para las mujeres pehuenche de las zonas más apartadas de la provincia. Esto implica que las gestantes deben dejar sus hogares y familias y ser trasladadas a otra comuna para continuar con su gestación en un ambiente hospitalario.

Durante el tiempo de gestación, el programa Salud de la Mujer y Chile Crece Contigo contemplan una serie de instancias donde se les entrega a las gestantes información sobre el periodo que están viviendo, así como sobre sus derechos y posibilidades de decisión en el momento del parto, que incluyen opciones de manejo del dolor, diferentes posiciones de parto y alternativas de acompañamiento, entre otros. Sin embargo, el tiempo y los recursos destinados para la atención de las mujeres de sectores rurales es escaso. Las largas distancias y las dificultades de acceso

no permiten la realización grupal de los talleres en las postas rurales. Según el relato de las profesionales de este establecimiento, “hay muchas mujeres que se quedan sin talleres, lo que implica un desconocimiento de sus derechos y posibilidades de autonomía en el momento del parto”.

En el momento del trabajo de parto, las mujeres son evaluadas por matronas/es del hospital de Santa Bárbara y, según su evolución, se decide realizar la atención del parto en el mismo hospital o trasladarlas al Cavrr en la comuna de Los Ángeles, ubicado a 50 km desde Santa Bárbara y a 100 km de Ralco. Cabe mencionar que el hospital de Santa Bárbara cuenta con una sala de parto intercultural y es el único hospital tipo II en la provincia que está autorizado para atender partos, aunque solo en casos inminentes, ya que no cuenta con los especialistas necesarios para atender urgencias obstétricas, neonatales, ni puede suministrar anestesia, la cual constituye una garantía estatal¹³.

En esta etapa, casi la totalidad de las mujeres en trabajo de parto son derivadas a Los Ángeles, donde transcurre este proceso según los protocolos del Cavrr. Allí se garantiza el acceso a la atención especializada en salud obstétrica, el acceso a recibir medicamentos para el manejo del dolor y atención de urgencia para la madre y el neonato. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta opción implica la pérdida de una garantía muy importante que se

¹³ Ministerio de Salud, Programa Nacional Salud de la Mujer (2015). Guía Clínica Perinatal. Recuperado de http://www.minsal.cl/sites/default/files/files/GUIA%20PERINATAL_2015_%20PARA%20PUBLICAR.pdf

encuentra establecida en el sistema de protección Chcc: la posibilidad de ser acompañadas por sus familias. Las extensas distancias y costos de traslado hacen inviable que las mujeres bajen acompañadas.

Cabe destacar que, al momento de realizar esta investigación, el Cavrr no contaba con un trabajo sostenido en salud materna intercultural, a diferencia de las iniciativas que se han desarrollado constantemente en los establecimientos de salud primaria de la red.

De modo excepcional, las mujeres que se presentan en una etapa de parto inminente en el hospital de Santa Bárbara y que cumplen con un estado de salud apropiado son atendidas en este establecimiento y pueden optar a recibir atención y acompañamiento de los/as facilitadores interculturales, quienes brindan cuidados postparto a las mujeres pehuenche.

2. Gestar en la cordillera, parir en la ciudad

Se le llamó a este proceso “gestar en la cordillera, parir en la ciudad” ya que, para las mujeres pehuenche, el camino para convertirse en madres implica dejar la comunidad, la ruralidad, los hijos/as, los animales y entrar en el proceso vertiginoso que propone/impone el modelo de salud biomédico.

Los relatos que se recolectaron para esta investigación revelan la vivencia de la maternidad en íntima cercanía con sus comunidades de origen y con sus familias, ya que prácticamente la totalidad de las mujeres retorna a su territorio durante la gestación o después del parto.

Según el reciente estudio etnográfico “Domoche Kimün: sabiduría de mujeres kimche pewenche de Alto Bio Bio” (Figueroa, Y., Báez, L., 2017), las mujeres cumplen un importante rol en la reproducción cultural, por lo que su experiencia de maternidad cobra una importancia crucial. Según los testimonios recogidos por Figueroa y Báez (2017), el proceso de maternidad de las mujeres pehuenche tradicionalmente se llevaba a cabo en la casa de la mujer, con su familia, muchas veces apoyada por la partera o *puñeñelchefe*, de manera rápida y espontánea.

La partera o *puñeñelchefe*, agente tradicional de salud, es de suma relevancia en la salud sexual y reproductiva de las mujeres pehuenche. La confianza de las gestantes en la *puñeñelchefe* es importante, ya que, desde su perspectiva, la ausencia de ellas en algunos territorios fundamenta la necesidad de acceder a la red asistencial para el control de la gestación y apoyo en el proceso de parto¹⁴.

Las mujeres pehuenche nutren sus experiencias de gestación, parto y puerperio de los conocimientos comunitarios provenientes de las mujeres *kimche* de

¹⁴ A pesar de la confianza de las mujeres en el apoyo de la *puñeñelchefe*, su práctica es clandestina, ya que existe la memoria de la persecución que otrora sufrieron las parteras, por lo que las mujeres que confían en su apoyo lo hacen de forma paralela al control gestacional con profesionales en la posta rural.

la comunidad: madres, tías, abuelas y suegras que traspasan sabiduría y experiencias sobre los cuidados de la gestación, el proceso del parto, lactancia y crianza. Sin embargo, en la actualidad, la experiencia de la maternidad para las mujeres pehuenche está determinada por su grado de cercanía y conocimiento de la cosmovisión de su pueblo, como también por las condiciones geográficas del territorio, el acceso a información y las condiciones de accesibilidad a los servicios de salud materna que, en este caso, proveen los profesionales de la salud y facilitadores interculturales en el periodo de atención primaria en postas de salud rural, Cesfam y en los hospitales a los que serán derivadas en las últimas semanas de gestación.

Debido a la lejanía de los servicios resolutivos en materia de urgencias obstétricas, la experiencia de la maternidad para las mujeres pehuenche implica el constante traslado desde sus lugares de origen hasta las ciudades que cuentan con los servicios de salud adecuados para atender su proceso reproductivo—gestación, parto y postparto—, lo que significa desigualdad en el acceso a las prestaciones de salud, desarraigo de sus tradiciones culturales, alejamiento de la familia y personas de confianza.

A continuación, se describen con mayor detalle las experiencias del proceso reproductivo:

Gestación

Según el relato de las mujeres entrevistadas, la gestación se caracteriza por ser un periodo en que las actividades habituales de la mujer pehuenche siguen

realizándose de forma normal y ellas siguen desarrollando labores domésticas, de crianza de las y los hijos, cuidado de animales y desarrollo de otras actividades productivas. Esto implica que las mujeres pehuenche, sobre todo las que viven esta fase en las comunidades, realizan actividades físicas de manera cotidiana y permanente.

“No es una enfermedad... no hay cambios, sigue la vida tal cual hasta que nace la guagua y después, unos tres, cuatro días después que nace la guagua y después se retoma todo, harto trabajo”

(Alicia, madre pehuenche).

El conocimiento sobre este periodo es manejado por las mujeres de la comunidad, por lo que son ellas quienes acompañan, enseñan y aconsejan a la futura madre en los cuidados que debe mantener.

“Al menos en mi familia, siempre se cuidan, se cuidan mucho, ejemplo, no se puede salir sola, siempre nos cuidan de ir a los ríos, que no vaya a los arroyos por diferentes motivos, diferentes cosas que pueden ocurrir, y especialmente para que los niños salgan sanitos...”

(Claudia, madre pehuenche).

Dentro de los cuidados de la gestación, es de gran importancia el resguardo del vientre materno de cualquier manipulación de terceros hasta aproximadamente el quinto mes. Por ello, las mujeres de origen pehuenche, y más aún aquellas que viven en sectores aislados en la cordillera, generalmente asisten a control médico desde el quinto o sexto mes de gestación. Esta decisión man-

tiene el resguardo y la intimidad de este proceso, aunque implique un factor de riesgo frente a la detección tardía de irregularidades o patologías del embarazo que puedan poner en riesgo la salud presente y futura del feto y la mujer. La respuesta a este dilema debiera ser construida desde un enfoque intercultural en salud, que permita el respeto a la intimidad, pero también resguarde la salud de las gestantes.

En esta etapa, es de suma importancia la información a la que pueden acceder las mujeres gestantes sobre las prestaciones de salud de la red asistencial, en especial aquellas relacionadas con el recorrido que deben realizar y los derechos que pueden ejercer en este proceso. Aquí cobran importancia los talleres del periodo gestacional de Chile Crece Contigo, que se realizan con mayor constancia y con pertinencia cultural en el Hogar Intercultural de Santa Bárbara. Según el relato de las mujeres, esto ha hecho una diferencia positiva en cuanto a las condiciones en las que llegan las mujeres al Hospital de Los Ángeles, ya que les permite manejar conocimientos sobre la solicitud de la placenta, sobre su derecho al acompañamiento y a ejercer cuidados propios de la cultura en el puerperio.

“Sí, ahora sí, porque igual la preparan antes, le dicen qué tiene que llevar, qué tiene que hacer, y cuando vienen al hogar tienen talleres, charlas, todo”
(Marta, madre pehuenche).

Sin embargo, los talleres solo están asegurados para las mujeres que se hospedan en el Hogar Intercultural, lo que deja fuera a mujeres rurales que no se

hospedaron, aquellas que se atendieron de forma particular o que residen en zonas urbanas.

Trabajo de parto y parto

Según la información que se maneja sobre los cuidados culturales en el trabajo de parto y el parto, propiamente tal, en el mundo mapuche pehuenche se sabe que el acompañamiento y asistencia de la familia era habitual, lo que permitía que la mujer estuviera en un espacio de confianza y seguridad emocional. Durante mucho tiempo, estos aspectos fueron menospreciados o tratados sin mayor importancia por la medicina clínica, sin embargo, la evidencia científica actual señala que dichas prácticas son factores que influyen positivamente en las experiencias de parto.

Con todo, las experiencias actuales de las mujeres de origen pehuenche son diametralmente distintas a las experiencias de antaño debido a su enrolamiento en la red asistencial de salud, la hospitalización y centralización del parto en grandes ciudades.

En las últimas semanas de gestación, cuando es probable que se desencadene el trabajo de parto, las mujeres son derivadas al Hogar Intercultural emplazado dentro de las dependencias del Hospital de Santa Bárbara. Se trata de un espacio acogedor, diseñado para ser pertinente culturalmente y manejado por personas pehuenche, hablantes de chedungüin, conocedoras de los cuidados tradicionales de la maternidad y capacitadas formalmente en salud materna.

Por estos motivos, en el relato de las mujeres pehuenche, el Hogar Intercultural emerge como un espacio que les ha permitido acceder a los servicios de salud de forma segura. Sin embargo, el ingreso a este recinto también significa un evento de obligatoriedad, ya que limita las decisiones sobre la forma en que desean resolver el nacimiento de sus hijos/as.

Las mujeres pueden decidir no acudir al Hogar Intercultural y quienes lo han preferido así, lo perciben como un espacio de autonomía frente a la presión de parte del personal de salud, a pesar de que saben que es su responsabilidad si se presentan problemas y se pone en riesgo la integridad de las y los neonatos.

“La matrona manda una ambulancia a buscarme, que ya tenía que irme al hogar de la madre campesina de Santa Bárbara y yo no me quise ir, le dije que no, entonces se fue la ambulancia sin mí para abajo [...]. Sí, yo no fui, no quise, yo decidí por mí, hice lo que yo quise y no fui a eso, luego no fui más a controles, pero lo que sí, fui muy cuidadosa, y mi familia me acompañó a eso [...]. Yo sabía que era un riesgo, pero sabía que mi mamá tenía la suficiente experiencia para que me apoyara y ahí me fui al hospital cuando ya la guagua estaba por nacer”

(Claudia, madre pehuenche).

“Te dicen un montón de cosas, porque por una parte está el temor que la señora deje a los niños, que deje su casa, que deje todas sus cosas, y por el otro lado tienes la presión que, si le pasa algo al bebe, tú te haces cargo...”

(Claudia, madre pehuenche).

Además, el ingreso al Hogar implica el alejamiento de los familiares adultos, que pueden proporcionar acompañamiento significativo en el momento del trabajo de parto y el parto mismo, lo que genera insatisfacción entre las usuarias, quienes por derecho debieran estar acompañadas por una persona significativa.

“A las ñañas tampoco les gustaba bajar, por lo mismo, porque no se sentían en casa, no se sentían atendidas, no se sentían escuchadas”
(Marta, madre pehuenche).

Cuando el momento del parto se acerca y el trabajo de parto se inicia, las mujeres que llegan al Hospital de Santa Bárbara o que están alojando en el Hogar Intercultural son llevadas al Hospital de Los Ángeles. De este modo, se produce un quiebre entre la etapa de acompañamiento familiar y contención cultural y el parto, que involucra toda una transformación del entorno y de los/as protagonistas. En este contexto, según el relato de las mujeres entrevistadas, el trabajo de parto y el parto transcurren con preocupaciones, dolor y soledad:

“Llegó el momento del parto y me fui al hospital, fue traumático, terrible, primeriza, nadie te va a decir ‘cálmate, párate de la camilla, camina’, te dejan ahí, gritas, estás sola, no tenía mi compañero, no tenía a nadie, sola, sola, toda la noche grité, caminé, y ahí nadie te va a decir ‘mi guachita, cuídese, camine’. Ahí los profesionales hacen su trabajo, no más”

(Marta, madre pehuenche).

“Finalmente, quedé como con un trauma, le tengo terror, yo me acuerdo del nacimiento de mi hija, a pesar de que es lo más lindo que tengo, pero me da mucho miedo”

(Claudia, madre pehuenche).

Debido a las difíciles condiciones de acceso y comunicación, las familias no tienen posibilidad de llegar en el tiempo en que las mujeres se trasladan de recinto hospitalario, ya que no cuentan con comunicación inmediata, con vehículo particular o con apoyo para cuidar a los demás hijos/as y animales de la familia. Esta es una de las necesidades importantes de las mujeres pehuenche, que se manifiesta en sus relatos y que ha definido sus experiencias de parto en la red asistencial:

“Sola viví el parto, sola, sola, estuve toda la noche y mi hijo nació como a las nueve, y todo eso yo grité, grité y grité, pero sola, nadie te toma en cuenta”

(Marta, madre pehuenche).

“Lamentablemente, los padres están más ausentes por un tema territorial, también, piensa que las gestantes bajan acá [Hospital de Santa Bárbara] en espera del parto, de acá se van, una vez que empiezan el trabajo de parto, muchas a Los Ángeles, es prácticamente imposible que la pareja alcance a llegar, entonces viven este proceso prácticamente solas”

(Carla, integrante del equipo de salud).

“Imagínese, hay ñañitas de 16 años y van solitas, solas, solas, a veces los pololos no quieren responder y la mamá, porque tiene otros niños chicos, por distintas razones no están con sus hijitas, entonces ellas se van solas, entonces a mí se me parte el alma cuando una ñaña se va con tanta... no se va contenta de tener su guagüita”

(Irma, integrante del equipo intercultural).

“Era año nuevo y no habían buses, yo tenía miedo porque estaba sola, mi mamá no se pudo ir conmigo, mi pareja no me contestaba y llegando a Los Ángeles a una la dejan en urgencias y ahí una tiene que moverse, tenía que ir a firmar un papel y no sabía dónde, tuve que andar buscando y con dolores, me llevaron a la sala de parto y me dijeron que sin celular, nada, sacarme todo y ponerme el pijama blanco, y yo quería tener mi celular para avisar [...] me puse nerviosa, tenía miedo y estaba sola”

(Carmen, madre pehuenche).

Caso contrario es el de las mujeres que se presentan en etapa de parto inminente en el Hospital de Santa Bárbara y que cumplen con las condiciones de salud para tener un parto natural. Esto implica que pueden optar por utilizar la sala de parto intercultural, que ofrece alternativas de manejo del dolor, la sala de parto tradicional o ambos espacios. Además, pueden solicitar la preparación de hierbas o *lawen* específicas para facilitar el parto y la alimentación tradicional postparto, todas experiencias interculturales que se realizan en este hospital. De forma muy importante, en este lugar tienen mayores posibilidades

de ser acompañadas por una persona de confianza¹⁵.

En los hospitales de Santa Bárbara y Los Ángeles se han establecido protocolos para facilitar la entrega de la placenta para su uso ritual. Sin embargo, no son muchas las que cursan su solicitud. Esto está estrechamente ligado con la información que manejan las mujeres y sus familias sobre los derechos que pueden ejercer. En este sentido, cobra relevancia la efectiva realización de los talleres Chcc en el periodo gestacional, que permitirían la toma de decisiones de las mujeres y familiares con respecto a estos derechos reproductivos.

CONCLUSIONES

La interculturalidad en salud es un enfoque en pleno desarrollo que pone en tensión la gestión de la red asistencial. Según los resultados obtenidos en esta investigación, en la red asistencial analizada existen diferentes proyectos, iniciativas y formas de implementar el modelo de salud intercultural desde las tres políticas relacionadas con la salud materna que han sido relevadas con anterioridad¹⁶.

Partiendo desde la salud primaria, se distinguen los establecimientos que implementan un modelo de interculturalidad en el territorio, de manera local

y con el conocimiento permanente de la cosmovisión del pueblo pehuenche. Este es el caso de los establecimientos de salud rural de Alto Biobío (ocho postas de salud rural y un Cefsam) y el Hogar Intercultural del Hospital de Santa Bárbara, donde no solo se han implementado iniciativas concretas de incorporación de elementos culturales, sino que los/as funcionarios/as han sumado a su quehacer el manejo cultural de las etapas del proceso reproductivo, lo que les ha permitido reconocer y comprender que los cuidados de la gestación son compartidos con las parteras, agentes de salud pehuenche reconocidas por las comunidades.

El Hogar Intercultural de Santa Bárbara es un espacio que fue pensado para facilitar y asegurar el acceso de las mujeres gestantes a la atención hospitalaria del parto. Pero la ausencia de anestesiólogos y equipamiento para atender complicaciones ha hecho que solo se permitan partos inminentes en el lugar. Pese a eso, el espacio sigue siendo un aporte a la salud materna intercultural, ya que ha logrado incorporar, a nivel protocolar, un cambio en la alimentación de las parturientas, en el uso de hierbas medicinales, en la realización de talleres de gestantes con enfoque intercultural avalados por Chile Crece Contigo y, de una manera muy incipiente, el acompañamiento de la guardadora al parto de las mujeres que lo solicitan. Con todo, para las mujeres que provienen

¹⁵ Las mujeres que fueron entrevistadas para esta investigación no contaban con experiencias propias en el uso de este espacio ni con antecedentes de otras mujeres que hubiesen sido usuarias.

¹⁶ El Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas, el Programa Salud de la Mujer y los lineamientos transversales que indica el sistema de protección a la infancia Chcc.

de sectores rurales, este espacio igualmente implica alejarse de sus familias y permanecer en un lugar de tránsito a la espera de ser llevadas al Cavrr de Los Ángeles. Por ello, es un espacio que las mujeres evitan a través de la generación de estrategias que doblegan el sistema de derivación entre establecimientos de menor a mayor complejidad.

¿Cómo fortalecer estos espacios de interculturalidad en Santa Bárbara si las mujeres están siendo derivadas a Los Ángeles? El enfoque intercultural en salud no tiene que ver solo con incorporar la cosmovisión y ciertos elementos culturales en algunas etapas del proceso, sino que también guarda relación con comprender las identidades de las mujeres pehuenche y sus necesidades más sentidas, entre las que destaca vivir este proceso cercanas a su familia y a su territorio.

Por otro lado, la atención en salud materna con enfoque intercultural que se desarrolla en el Cavrr en Los Ángeles se encuentra muy lejana aún de las iniciativas que se han logrado implementar en Santa Bárbara y Alto Biobío. Parece ser que mientras mayor sea el nivel de complejidad del establecimiento de salud, mayor es la dificultad de flexibilizar los procedimientos e incorporar un modelo de salud intercultural. Esto contribuye a que las experiencias de las mujeres en la atención de salud materna con enfoque intercultural no tengan continuidad.

Pese a los esfuerzos que se han hecho, el parto de las mujeres pehuenche de Alto Biobío sigue siendo una experiencia de desarraigo. Tomando como

referencia las entrevistas realizadas, se puede sostener que la experiencia de la maternidad para las mujeres pehuenche es un constante recorrido en soledad, desconocimiento, miedo y lejanía de la familia. Las mujeres requieren más información y que esta se entregue de forma oportuna en el marco de las redes de apoyo, en el terreno comunitario, en los espacios previos al trabajo de parto, a fin de generar condiciones propicias para que puedan decidir sobre la forma en la que quieren parir y quiénes serán sus acompañantes, entre otras definiciones que aseguran una experiencia positiva de parto.

El derecho al acceso a las prestaciones de salud no está garantizado en contextos de aislamiento geográfico y cultural. Los resultados dan cuenta de que las mujeres de origen pehuenche acceden a las prestaciones de salud materna de manera insuficiente, ya que la centralización de exámenes y atención de especialistas se realiza en Los Ángeles. Por otro lado, se enfrentan a la obligatoriedad de los procedimientos al no contar con otros recursos y redes de apoyo que les permitan tomar decisiones relacionadas con, por ejemplo, el momento del trabajo de parto en que se presentan en los establecimientos de salud.

Existen lagunas importantes para que las mujeres pehuenche puedan ejercer el derecho a la información durante el embarazo y el parto. La información con la que cuentan en el momento del trabajo de parto es insuficiente, ya que los talleres gestacionales de Chcc muchas veces no se realizan en condiciones óptimas o en los tiempos oportunos. Las mujeres y sus familias

no conocen sus opciones frente al trabajo de parto y el parto mismo. Muchas no saben que pueden exigir el acompañamiento, métodos no farmacológicos para el manejo del dolor, la entrega de la placenta y cuáles pueden ser sus usos, entre otros. Esto se ve reflejado en el bajo uso de la sala de parto intercultural en Santa Bárbara y en los casos limitados de entrega de la placenta.

El derecho al acompañamiento en el trabajo de parto y el parto se ejerce muy escasamente en el caso de las mujeres pehuenche. Es una de las necesidades más sentidas por las mujeres pehuenche y una de las menos satisfechas. Según el análisis que se realizó en esta investigación, los funcionarios/as atribuyen esta deficiencia a la lejanía de las comunidades y a la imposibilidad de los acompañantes (masculinos) de estar presentes por estar a cargo de los demás hijos, entre otros aspectos. Sin embargo, existen iniciativas que pueden fortalecerse, como el acompañamiento de mujeres pehuenche conocedoras de la cultura que pueden actuar como un pilar de confianza para la parturienta. Esto es posible en el Hospital de Santa Bárbara, sin embargo, no es un procedimiento que se extienda hasta Los Ángeles, por lo que no sirve para las mujeres usuarias de la red en general.

RECOMENDACIONES

Un sistema centralizador que desterritorializa a las mujeres madres, en este caso con un fuerte componente cultural, debe hacerse cargo de la insatisfacción

usuaria. Por ello, generar estrategias para dar cumplimiento a los derechos culturales es de suma importancia para avanzar hacia experiencias positivas de parto/nacimiento. A continuación, se entregan diversas recomendaciones para el fortalecimiento del enfoque de salud intercultural en la gestión de la red asistencial, que pueden ser implementadas sin grandes cambios estructurales en materia de financiamiento y/o rediseño del S.S. Se trata de medidas que pueden ser resueltas en el marco local/provincial mediante ajustes y reasignaciones de mediano alcance.

Se deben fortalecer las redes de apoyo a nivel comunitario y formación de monitoras de salud materna en las comunidades. Se recomienda formar monitoras de salud reproductiva para que se conviertan en agentes de salud en el territorio, capaces de informar a las mujeres sobre sus derechos como pehuenche en esta materia. Diversas experiencias han demostrado la importancia de las redes de apoyo en el territorio. Se sugiere contactar a mujeres pehuenche interesadas en la temática de salud reproductiva, conocedoras de la cultura y la lengua chedüngun y con un perfil activo en su comunidad. Mujeres validadas por sus pares y que sean representantes de cada una de las comunidades.

Esto les permitirá a las mujeres gestantes contar con una red de apoyo reconocida y, en su propia localidad, con espacios de aprendizaje donde se compartan experiencias con otras mujeres pehuenche sin tener que ir a Santa Bárbara u otras comunas, y que la información que manejen no dependa

exclusivamente de los funcionarios/as de la red, que hoy no cuentan con las condiciones para cumplir con el alcance territorial de los programas de salud materna.

En términos de derechos, estrategias como estas permiten que los/as usuarios/as participen de forma activa en los procesos de salud y sean protagonistas de la implementación de las políticas. A nivel latinoamericano, existen casos muy interesantes que pueden servir de inspiración. Se recomienda revisar la experiencia mexicana “Madrinas Obstétricas”, iniciativa planificada en el contexto de aislamiento territorial y acceso limitado a los servicios sanitarios de las mujeres gestantes. Del mismo modo, destaca la experiencia colombiana “Mujeres Parteras del Pacífico”, una iniciativa de rescate y formación de mujeres en el oficio de la partería, que propone un trabajo coordinado con los establecimientos de salud pública. Y, por último, la experiencia de salud comunitaria de los “Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna”, agrupaciones presentes en nuestro país que fomentan la lactancia y el apoyo psicoafectivo a madres lactantes y sus familias¹⁷.

Reforzar el rol de acompañamiento de las guardadoras del Hogar Intercultural. Muy en sintonía con el punto anterior, es de suma importancia fortalecer el rol de las guardadoras del Hogar Intercultural de Santa Bárbara, una

figura que ya existe en la red asistencial de salud y ha sido muy valorada por las mujeres gestantes. La idea es que las guardadoras acompañen a las mujeres que llegan solas y con parto inminente. También se propone que, en el caso de que estas no puedan viajar con un familiar o persona de confianza, acompañen a las mujeres que se hospedan en el hogar cuando deben emprender el viaje al Cavrr de la ciudad de Los Ángeles. Esto debe enfatizarse como un procedimiento regular, no excepcional. Debe estar descrito en el perfil de cargo y el tipo de contrato que se celebre con estas personas. A su vez, dicha figura debe ser reconocida por el hospital y el equipo médico a cargo de la sala de parto, lo que exige un trabajo coordinado entre los equipos de maternidad de Santa Bárbara y Los Ángeles.

Incorporar una facilitadora intercultural con conocimientos en salud materna en el Cavrr de Los Ángeles. Ya que el objetivo principal de las políticas de salud materna es centralizar los partos en los centros de salud de mayor complejidad a nivel provincial, es necesario contar con las condiciones para proporcionar acompañamiento psicoafectivo a las mujeres que por diferentes razones llegan solas. Por ello, se propone vincular a una mujer de origen pehuenche, conocedora de los procesos culturales de la salud materna y los derechos de las mujeres gestantes, para que proporcione acompañamiento y apoyo a las

¹⁷ Revisar: <http://www.omm.org.mx/index.php/iniciativas-nacionales/estrategia-madrinas-obstetricas>, http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1199:mujeres-parteras-del-pacifico-caucano-colombiano-cuentan-con-el-apoyo-de-ops-oim-y-usaid&Itemid=442, https://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_LMgalm.PDF

mujeres de origen pehuenche que se encuentran en trabajo de parto y postparto. De igual modo que en el caso anterior, esto debe planificarse como un procedimiento regular, con reglamentos establecidas que permitan definir un perfil de cargo y una estrategia de intervención en la sala de parto. Para su planificación, deben incorporarse equipos de salud materna, salud intercultural y mujeres pehuenche usuarias de la red asistencial.

Es importante mencionar que, al momento de realizar esta investigación, el Cavrr contaba con dos facilitadores interculturales, que sin embargo no pueden cumplir específicamente el rol de acompañamiento a las mujeres en trabajo de parto y postparto, ya que desempeñan funciones en todas las áreas de atención del complejo en apoyo a pacientes ambulatorios y hospitalizados. Para esta labor se requiere un conocimiento especializado y concentrado en el área de maternidad.

Reforzar el instrumento plan de parto.

Es necesario que las mujeres cuenten con asesoría y orientación para poder tomar decisiones referentes al modo en que desean vivir su experiencia de maternidad en los establecimientos de la red asistencial. La realización de un plan de parto permite planificar todas las etapas del proceso, velando por su adecuación cultural. Por ello, mujeres gestantes, junto con los profesionales de salud materna y salud intercultural, debieran poder coordinar con an-

ticipación si las mujeres, por ejemplo, deciden solicitar la placenta, quiénes las acompañarán en este proceso, qué métodos de manejo de dolor prefieren, etc., y realizar la orientación o asesoría en conjunto con la familia, en un espacio adecuado o incluso resaltando la oralidad del acuerdo, que luego debería ser escrito por los equipos de salud en un documento que valide la planificación. Este es un instrumento que debiese ser utilizado no solo por los profesionales de salud primaria en la etapa de control gestacional, sino que también por los profesionales que atienden en los establecimientos de mayor complejidad. Para ello se requiere un mayor nivel de coordinación del trabajo en red. Se recomienda revisar la experiencia del hospital de la comuna de El Carmen, donde se ha incorporado la modalidad del plan de parto¹⁸.

Garantizar visitas guiadas de Chile Crece Contigo al Cavrr.

Los protocolos del Chcc indican que las mujeres tienen derecho a visitar los centros hospitalarios donde atenderán su parto. Sin embargo, al momento de desarrollar esta investigación, las visitas guiadas al Cavrr destinadas a las mujeres gestantes de Alto Biobío no se estaban efectuando. Las condiciones de aislamiento geográfico y falta de recursos para su traslado son algunas de las razones que han dificultado cumplir con este requerimiento. Es de suma importancia que las mujeres y sus acompañantes conozcan los espacios donde vivirán el proceso del nacimiento, a fin de que

¹⁸ Más información en el sitio web: http://www.hospitalelcarmen.cl/hec/wpcontent/uploads/2016/06/plan_parto_hec-1.pdf

se les permita construir un mínimo vínculo de confianza con el lugar y los funcionarios/as. Se propone que el S.S. Biobío establezca las facilidades para el traslado de las mujeres. De lo contrario, fortalecer las iniciativas audiovisuales que permitan el reconocimiento de los espacios y equipos médicos, resolver dudas y obtener información adicional.

Evaluación *ex ante/ ex post* de la implementación de las medidas anteriormente propuestas. Es de total relevancia contar con información de tipo cuantitativo y cualitativo sobre la satisfacción de las mujeres de origen pehuenche que acuden a la atención en salud materna en la red de atención del S.S. Biobío, con el objetivo de manejar datos fidedignos sobre la evaluación de la prestación de servicios y otros asociados a las necesidades y/o requerimientos que plantean las mujeres con respecto a la atención en salud materna con enfoque intercultural.

BIBLIOGRAFÍA

- **Báez, L., Figueroa, J. (2018).** Domoche Kimün: sabiduría de mujeres kimche pewenche de Alto Bio Bio. Editorial Indugraf, Los Ángeles, 2018.
- **Cabieses, B., Bernaldes, M., Obach, A., Pedrero, V. (comps.) (2016).** Vulnerabilidad social y sus efectos en salud en Chile: desde la comprensión del fenómeno hacia la implementación de soluciones. Universidad del Desarrollo, Equipo de Estudios Sociales en Salud.
- **Carrasco, J. (2016).** Trayectorias migratorias de mujeres colombianas en Santiago de Chile. Una discusión sobre maternidad, pobreza y migraciones. Tesis País. Piensa la Metropolitana sin pobreza, volumen 1. (pp. 98-123) Fundación Superación de la Pobreza, Santiago, 2016.
- **Ministerio de Salud, Programa Nacional Salud de la Mujer (2015).** Guía Clínica Perinatal. Recuperado de http://www.minsal.cl/sites/default/files/files/GUIA%20PERINATAL_2015_%20PARA%20PUBLICAR.pdf. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Encuesta Casen 2017.
- **Subsecretaría de Desarrollo Regional.** Decreto N°608: Una política nacional de desarrollo de localidades aisladas. Recuperado de <http://www.subdere.gov.cl/documentacion/decreto-nº-608-una-política-nacional-de-desarrollo-de-localidades-aisladas-6>
- **Cordero, M., Luna, A., Vattuone, M. (2010).** Salud de la mujer indígena: intervenciones para reducir la muerte materna. Banco Interamericano de Desarrollo.
- **González, I. (2016).** Del apoyo mutuo a la acción colectiva. Lupus al GES. (Tesis de maestría inédita). Escuela de Salud Pública. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
- **Leiva, G., Sadler, M. (2016).** Nacer en el Chile del siglo XXI: el sistema de salud como un determinante social crítico en la atención del nacimiento. En: Cabieses, B., Bernaldes, M., Obach, A., Pedrero, V. (comps.) (2016). Vulnerabilidad social y sus efectos en salud en Chile: desde la comprensión del fenómeno hacia la implementación de soluciones (pp. 61-77). Equipo de Estudios Sociales en Salud, Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile.
- **Naciones Unidas (2014).** Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de derechos humanos. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
- **Oyarce, A., Pedrero, M. (2011).** Perfil epidemiológico de la población mapuche residente en el área de cobertura del Servicio de Salud Provincia del Bío Bío. Serie Análisis de Estudios de Salud de los Pueblos Indígenas de Chile. Recuperado de <http://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Edicion%20Perfil%20Epidemiológico%20Básico%20de%20B%3%ADo%20B%3%ADo.pdf>
- **Vieytes, R. (2004).** Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.
- **Zárate, M. (2008).** Dar a luz en Chile, siglo XIX. De la "ciencia de hembra" a la ciencia obstétrica. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago.



**REAPROPIACIONES DEL ROL MATERNO. LA EXPERIENCIA
DE LAS MUJERES MIGRANTES VENEZOLANAS EN LA
CIUDAD DE TALCA**

Karina González Contreras¹,
Universidad Católica del Maule

RESUMEN

La literatura sobre migración transnacional ha mostrado que las migrantes tienden a experimentar ciertas particularidades en sus trayectorias cuando son madres, las que redundan en la mantención de labores de cuidado a distancia (Hondagneu-Sotelo & Ávila, 1997, en González, 2007; Stefoni, 2013). Entendiendo que la maternidad no es un hecho transcultural ni solo biológico (*maternity*), sino que corresponde a una construcción social y a una apropiación subjetiva (*motherhood*), las reflexiones de este artículo convergen en la reapropiación del rol materno entre las mujeres venezolanas residentes en la ciudad de Talca que tienen hijos(as) que viven en su país de origen.

El presente artículo es de corte cualitativo por su naturaleza exploratoria-descriptiva. El uso del enfoque narrativo como parte de la metodología permite describir el proceso de distanciamiento de la madre y su hijo(a), pues cada relato representa un testimonio único para entender la maternidad transnacional. Al sentirse interpeladas por los contextos sociales, las madres buscan nuevas estrategias para dar continuidad al rol materno, las que se resumen en la creación de redes de apoyo y utilización de aplicaciones como WhatsApp para comunicarse y ejercer prácticas de cuidado.

Palabras clave: migración transnacional, maternidad, género, prácticas de cuidado.

¹ Socióloga. Artículo basado en la tesis “Reapropiaciones del rol materno. La experiencia de mujeres migrantes venezolanas en la ciudad de Talca”, realizada para obtener el grado de socióloga, 2018, Universidad Católica del Maule. Profesora guía: Javiera Cubillos Almendra. Talca, 2018.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda el fenómeno migratorio desde la maternidad. En un esfuerzo por dar continuidad a la descentralización y visibilizar el fenómeno migratorio en el Maule, este trabajo apunta al caso de madres migrantes venezolanas que se separan de sus hijos(as) debido a diversos factores que responden a una crisis político-económica en Venezuela. La experiencia de las mujeres confluye entre el *continuum* de una maternidad ejercida a distancia y los desafíos que deben enfrentar para traer a sus hijos e hijas a Chile.

La Fundación Superación de la Pobreza (FSP) ha generado una serie de trabajos relacionados con la migración en la región Metropolitana (FSP, 2017a). Además, ha desarrollado estudios en la zona norte, específicamente en la región de Antofagasta (FSP, 2017b; FSP, 2017c). En esa línea, este artículo coincide en ciertos aspectos con la Tesis País de Javiera Carrasco, “Trayectorias migratorias de mujeres colombianas en Santiago de Chile. Una discusión sobre maternidad, pobreza y migraciones (2017)”. El interés por desarrollar estudios sobre maternidad transnacional abre nuevos debates en torno al fenómeno migratorio en la

región del Maule, los cuales deben ser pensados en función del territorio y de las dinámicas propias que en él se presentan. Ante ello, queda en evidencia que existe una serie de necesidades que se ven afectadas en esta dinámica.

Desde 1990, Chile ha experimentado de manera creciente el arribo de migrantes latinoamericanos (Acuña et al., 2015). El porcentaje de inmigrantes² pasó de 0,81%³ en 1992 a 4,35%⁴ en 2017 (INE, 2018a). Al 31 de diciembre del 2018, según algunos parámetros metodológicos⁵, se estima un 6,67%⁶ de población migrante en Chile (INE & DEM, 2019b), con la siguiente distribución según los quince principales países de procedencia: 23% Venezuela, 17,9% Perú, 14,3% Haití, 11,7% Colombia, 8,6% Bolivia, 6% Argentina, 3% Ecuador, 1,7% España, 1,5% Brasil, 1,4% República Dominicana, 1,3% Estados Unidos y Cuba, 1,1% China, 0,7% México y Alemania, 5,6% otros países y 0,3% corresponde a países no declarados (INE & DEM, 2019c).

Respecto a los flujos migratorios por parte de mujeres, existe un notorio aumento desde el Censo 2002 (citado en Cano et al., 2009; DEM, 2016). Al Censo

² Nacidos en el extranjero que declararon residir habitualmente en Chile al momento del Censo.

³ Equivalente a 114.597 extranjeros.

⁴ Equivalente a 784.685 extranjeros.

⁵ La metodología se definió como una combinación de datos censales y registros administrativos producidos por las instituciones vinculadas al proceso migratorio, es decir, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración, en colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Registro Civil e Identificación (INE & DEM, 2019a).

⁶ Equivalente a 1.251.225 personas extranjeras residentes habituales en Chile.

2017, este patrón se mantiene levemente, lo cual se traduce en 395.097 mujeres, correspondientes a 50,3%, y 389.588 hombres, que representan el 49,6% del total. No obstante, desde el INE y el DEM (2019d) manifiestan que las últimas cifras corresponden a 646.128 hombres (51,6%) y 605.097 mujeres (48,4%).

Ahora bien, el fenómeno migratorio internacional se puede vincular al histórico movimiento migratorio campo-ciudad, del que Chile no se ha visto ajeno (Jaspers, 2007). En la región del Maule, por la naturaleza informal de su agricultura, la necesidad variante de mano de obra según la época del año y la precariedad de un gran número de la población rural, los trabajos son temporales e inestables, condición que ha caracterizado a la región desde siempre (Castro, 2012). Estos factores, entre muchos otros, dan origen a la migración dentro de la región y a desplazamientos interregionales.

El Maule tiene una población total de 1.044.950 habitantes⁷, según el Censo de 2017. Comparado con otras regiones del país, no presenta mayores porcentajes migratorios internacionales, aunque se debe mencionar que ha experimentado un gran crecimiento desde el 2005, cuando registraba 3.403 migrantes, hasta el 2014, cuando ya contaba con 5.021 extranjeros. Al 2017, la población migrante representaba un 1% a nivel regional, con 10.780 migrantes (INE, 2018b). Al 2018, la cifra ha aumentado

a 34.418⁸, la cual da cuenta de un 3,1%⁹. Si bien el Maule no se encuentra entre las regiones con mayor porcentaje de migrantes, es la que presenta un mayor volumen de personas en el componente de registros administrativos respecto al total de población estimada a diciembre de 2018, con un 67,3% (INE & DEM, 2019a). En la región, un 44% de la población extranjera proviene de Haití y un 26,3% de Venezuela. Respecto a Talca, capital regional, un 40,5% de la población extranjera estimada para la comuna proviene de Venezuela y le sigue el colectivo de Haití con 31,4% (INE & DEM, 2019c).

Durante los últimos años, el paradigma clásico y patriarcal de las dinámicas migratorias, que por muchos años invisibilizó el papel de la mujer, se transformó. Hoy podemos hablar de una feminización en los movimientos migratorios a nivel mundial (Oso, 2008), la cual coincide con el aumento en la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, lo que ha generado una demanda por cuidadoras y trabajadoras domésticas (Stefoni, 2011). No obstante, en la región no se puede hablar de una feminización de la migración dadas las características de su matriz productiva.

En efecto, las autoras Acuña et al. (2015) aluden a Alvites (2011a, 2011b) y Skornia (2008), quienes mencionan que la autonomía de las mujeres estaría en tensión con la maternidad, a pesar de lo que se ha desarrollado el concepto de *mater-*

⁷ Cifra desagregada en 533.326 mujeres y 511.624 hombres.

⁸ Cifra desagregada en 13.737 mujeres y 20.681 hombres.

⁹ Respecto a la población total estimada al 31 de diciembre de 2018.

nidades transnacionales, que alude a un modelo de familia donde la madre está en el extranjero y desarrolla diversas prácticas de responsabilidad y cuidado a distancia de los hijos(as).

A inicios del siglo XXI, las madres transnacionales y sus familias están construyendo nuevos espacios, expandiendo límites nacionales e improvisando estrategias de maternidad, rol cuestionado tanto en los lugares de origen como de destino (Pedone, 2008). Dichas temáticas permiten desnaturalizar el “rol de la mujer” o derribar los mitos de las “buenas madres” y las “malas madres”, como expone Caplan (2000, en Pérez, 2012).

Enfoque transnacional: una mirada para comprender dos mundos interconectados

El enfoque transnacional surge desde el quiebre de los enfoques más estáticos y polarizados entre el origen y el destino, trabajo que desarrollaron Basch, Glick, Schiller y Santzon (1992), el que se traduce en que los migrantes mantienen diversos vínculos con el lugar de origen, a la vez que se incorporan en los países receptores. Es decir, lugares que no son independientes espacial y temporalmente, sino que están conectados a partir de las prácticas que los propios migrantes despliegan cotidianamente (citado en Stefoni, 2014).

Imilan y otros autores (2014) llaman la atención sobre lo propuesto por Landolt (2001), quien explica que el enfoque transnacional se debe a la creciente internalización del capital y la reorga-

nización global de la producción, fenómenos que favorecen el incremento de la población migrante a nivel mundial dado por el desarrollo en los medios de transporte, facilidad de viajes y desarrollo de la tecnología. Cuando se mantienen vínculos con el lugar de origen y el de llegada, se potencia el desarrollo de iniciativas económicas, sociales y culturales capaces de generar un fuerte impacto en las sociedades de salida y destino (Stefoni, 2004).

Según la sociología de las migraciones y los estudios de comunicación, la sociedad actual se caracteriza por los movimientos migratorios transnacionales y la comunicación por medio del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC's) (Huerta & Martínez, 2013). Las TIC's son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, entre otros), y se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones (Belloch, 2011). La proliferación de las tecnologías de información aporta al cambio de interacciones cara a cara y al desarrollo de relaciones virtuales entre inmigrantes y sus familias (Baldassar et al., 2016).

Maternidad transnacional: “estar aquí” y “estar allá”

La maternidad transnacional ha tenido diferentes enfoques de estudio. Inicialmente, el concepto fue acuñado y popularizado por Hondagneu-Sotelo & Ávila (1997, en González, 2007), quienes de-

sarrollaron, en su trabajo *I'm here, but I'm there. The meanings of Latina Transnational Motherhood*, estudios acerca de las relaciones familiares transnacionales. En esta exploración identificaron que el rol de las mujeres inmigrantes seguía estando ligado a la labor de reproducción, reflejado en que deben “estar aquí”, pero “estar allá” a la vez, pues es la única forma de seguir brindando protección, cariño y cuidado estando a miles de kilómetros de distancia (Stefoni, 2013a).

En otras investigaciones, Merla (2014) apunta a los trabajos de Bernhard et al., (2009) y Olwig (1999), quienes muestran las tensiones que pueden surgir entre las madres y las personas que se ocupan de sus hijos en el lugar de origen, especialmente las abuelas, tensiones que se articulan, entre otras cosas, en torno al desplazamiento de la autoridad y las funciones parentales de la madre hacia lo que algunos llaman “la otra madre”, debido a que el cuidado del hijo o hija es asumido generalmente por un rol femenino de la familia materna o paterna (abuelas, hermanas, cuñadas, entre otras) (Osorio et al., 2013).

La mujer debe salir a buscar trabajo para asegurar el sustento familiar sin que ello signifique renunciar a la responsabilidad que tiene como mandato cultural en el cuidado (Stefoni, 2013a). En este contexto, Wagner (2008) cita a Camacho (1996), quien resalta que la reproducción de estereotipos sobre la destrucción de la familia y de la vida de los hijos pone énfasis en la existencia de una familia nuclear organizada en torno a los roles dominantes de género: la mujer que sirve a los demás, que está en la casa atendiendo a la familia, al es-

poso, a los hijos y a los mayores, un “ser-para-otros” y un “ser-a-través-de-otros”.

El hecho de que las mujeres migrantes trabajen y vivan en un país extranjero mientras sus hijos permanecen en el país de origen está provocando la redefinición de los significados y las formas de organización de la maternidad para acomodar las separaciones espaciales y temporales (Osorio et al., 2013). Sin embargo, cuando las mujeres alteran este orden de género quedan expuestas a descalificaciones y cuestionamientos a su condición de madres, llegando en muchos casos a ser acusadas de madres *abandonadoras* y despreocupadas de sus hijos (Stefoni, 2013a). A diferencia del hombre inmigrante, que llena las expectativas familiares asumiendo su rol proveedor a través de las remesas económicas, lo que según Morad, Bonilla y Rodríguez (2011) implica un distanciamiento en aspectos afectivos y de cuidado, las madres inmigrantes no pueden dejar de lado el papel de cuidadoras, a pesar de aportar tanto o más dinero que los hombres (citado en Huerta & Martínez, 2014).

En este sentido, la maternidad se considera una construcción sociohistórica, ya que ha sido contemplada como un estereotipo que unifica a todas las mujeres bajo una misma imagen, sin considerar diferencias de clase social, culturales o etarias; en ella, la representación de lo materno se enmarca en una visión patriarcal. En este contexto, aluden Tellez y Heras (2004, en Pérez, 2012), no se considera la identidad y el entorno sociocultural de las mujeres, pues se habla de maternidad y no de maternidades.

En relación a lo mencionado, la cons-

trucción sociohistórica ha naturalizado el cuerpo y la labor femenina en función de una maternidad social, y la sociedad ha reproducido estos patrones patriarcales a lo largo de la historia. Todo esto impacta en la distribución de los géneros en las diferentes esferas sociales y condiciona las vivencias y la forma que tienen de percibir el mundo mujeres y hombres, ya que las primeras son “ads-critas” al ámbito privado, entendido como doméstico, mientras que los segundos se destinan al espacio público, donde desarrollan cargos de relevancia social en la política, economía, tecnología, etc. Considerando esta distribución, se entendería que la resolución de dilemas en el ámbito familiar sería responsabilidad de quien mantiene la relación afectiva y de cuidado que existe entre los integrantes de la familia (Medina-Vicent, 2016).

Merla (2014) alude a Goulbourne et al., (2009) y Morgan (1996), quienes mencionan que los cuidados son un elemento esencial en el mantenimiento de las relaciones familiares a distancia, y una de las principales formas por las cuales las personas que viven alejadas entre sí hacen familia en el territorio de destino. Los cuidados se contemplan en clave multidimensional e incluyen no solo los cuidados personales, sino también el apoyo financiero (en forma de envío de dinero y objetos), el apoyo práctico (intercambio de consejos, asistencia en las actividades de la vida cotidiana), el apoyo emocional y, finalmente, la provisión de alojamiento.

Estos tipos de apoyo, recalca Baldassar et al. (2007), pueden proporcionarse a distancia mediante la utilización de

medios de comunicación como el teléfono, fijo o móvil, el fax o redes sociales basadas en Internet. Estos recursos representan los principales canales de circulación de cuidados, del mismo modo que lo son el envío de dinero y los viajes. Stefoni (2013b) cita en este ámbito a Senyurekli (2008), quien manifiesta que los medios a través de los cuales se mantienen los vínculos más allá de las fronteras son los artefactos tecnológicos de comunicación (teléfono, Internet, celular, webcam, entre otros), el transporte a menor costo en los últimos años y el envío de remesas económicas y sociales (ideas, comportamiento, identidades y capital social), los que van transformando la vida social y política de las personas en origen y destino y permiten configurar las relaciones de cuidado a distancia (Agar, 2007; Marín et al., 2014; Merla, 2014).

El avance de las tecnologías y las arquitecturas de Internet favorecen el desarrollo de las reproducciones en vivo a través de dispositivos que permiten superar las fronteras para estar presentes desde la distancia, como propone Castells (2001, en Marín et al., 2014), lo que a su vez sería la culminación de un proceso histórico de disociación entre localidad y sociabilidad. Las prácticas factibles gracias a la masificación de la comunicación por Internet se dan a través de sitios web o aplicaciones que generalmente no implican costos económicos extra para quienes los utilizan. Entre las redes sociales digitales más usadas se encuentran Facebook y Twitter, y el software Skype. Además, con el ingreso y popularización de los *smartphones* se afirma lo que plantea Castells (2006, citado en Marín et al., 2014) acer-

ca de la concretización de la conexión sin ruptura espacio-temporal, sea desde recursos ya existentes o desde nuevos recursos específicos para celulares, como las aplicaciones de mensajería y llamadas como WhatsApp.

Lo anterior permite concluir que la maternidad transnacional o el cumplimiento de roles maternos a distancia — considerando las crisis de Latinoamérica y su desarrollismo neoliberal— está cruzada por un déficit en necesidades humanas que altera la calidad de vida, la que depende de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, las que según las categorías axiológicas corresponden a *ser, tener, hacer y estar*. Es importante mencionar que lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1993).

MÉTODO

La ausencia de estudios a nivel regional sobre migraciones vuelve urgente la visibilización e investigación de este fenómeno social desde una mirada local. En el caso de la región del Maule, donde ha crecido el número de migrantes y se generan nuevas dinámicas, es fundamental abordar el fenómeno desde una mirada que considere su complejidad e integralidad (Micheletti, 2016a).

Es posible plantear que no ha existido una reflexión sistemática acerca de lo que el trabajo de las mujeres ha

aportado a lo largo de la historia para hacer posible la supervivencia de las personas; tampoco una que aborde la especificidad de la cultura femenina, con la excepción pionera de Simmel en los años veinte del siglo pasado, que no tuvo mayor continuidad en la sociología (citado en Tobío, 2012).

En ese contexto, este artículo desarrolla una perspectiva comprensiva que vislumbra la maternidad no como un concepto estático y único, sino más bien como un crisol de múltiples maternidades mediadas por contextos históricos, sociales y culturales. Por ejemplo, en varias culturas estas se organizan desde sistemas patriarcales que identifican la figura femenina con la maternidad, un “deber ser” que se instala desde la posibilidad biológica de reproducción. Sin embargo, desde una perspectiva feminista, las ciencias sociales o humanas han tensionado la ecuación “mujer = madre”, pues no responde a una esencia, sino a una representación de la construcción sociohistórica y cultural de lo que es la maternidad (Tubert, 1996).

El objetivo general del artículo es conocer y describir la reapropiación del rol materno en mujeres venezolanas residentes en la ciudad de Talca que tienen hijos(as) que viven en su país de origen. Para dar respuesta a lo anterior se generan cinco objetivos específicos: i) identificar los motivos de las madres inmigrantes venezolanas para tomar la decisión de migrar y dejar a sus hijos y/o hijas en el país de origen; ii) identificar las redes de apoyo de madres inmigrantes venezolanas en el país de origen y en Chile; iii) conocer los mecanismos, factores y/o tecnologías que facilitan y/u

obstaculizan el ejercicio de maternidad transnacional en las mujeres venezolanas; iv) identificar las prácticas de cuidado y los apoyos que ejercen las madres inmigrantes venezolanas para sus hijos/as desde el país de destino; y v) reconocer, desde un patrón de género, las emociones y sentimientos desplegados en el proceso de separación que vivieron las madres migrantes venezolanas con sus hijos/as.

Ya que el enfoque de la investigación es exploratorio-descriptivo, es pertinente realizar una primera aproximación desde la metodología cualitativa (Taylor y Bogdan, 2000; Rodríguez, Gil y García, 1996) para entrar en el mundo de significados y representaciones que las madres migrantes le otorgan a dicha práctica, lo que implica la necesidad de desarrollar futuras investigaciones desde otras metodologías que permitan una mayor profundidad, como un análisis de contenido y discurso (Bernasconi, 2011; Beiras, Cantera y Casasanta, 2017). El enfoque cualitativo permitió obtener datos sobre esta experiencia en particular. Se exponen los resultados en función de la trayectoria de las madres desde la decisión de migrar y quedan de manifiesto las necesidades de las migrantes, pensadas no solo desde el tener, sino desde una perspectiva integral que engloba la forma sistemática de las personas. Las posibilidades de *ser*, *estar* y *hacer* conducen a la realización de los seres humanos y apuntan a la capacidad de elegir el modo de vida que valoran (FSP, 2017d).

Como instrumento de recolección de datos se utilizó la entrevista en profundidad. La muestra fue intencionada y se llegó a los participantes a través de la técnica de bola de nieve (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). El total de casos fue de seis mujeres y dos de ellas participaron de una segunda entrevista con el fin de profundizar datos¹⁰. A continuación, se muestra la caracterización de las participantes. Los nombres de las madres han sido cambiados para mantener la confidencialidad de los relatos.

¹⁰ Las venezolanas que participaron en más de una entrevista están referenciadas con la simbología (*).

Tabla 1. Caracterización de las participantes¹¹

Nombre	Edad		Ocupación / profesión		Estado civil	Cantidad de hijos/as			Tiempo en Chile
	Venezuela	Chile	Venezuela	Chile		Total	País origen	Chile	
Rosa (*)	36 años		Docente	Trabaja como asesora del hogar y en un local de comida rápida	Casada (pareja en Venezuela)	3	3	-	Desde febrero de 2018
Victoria (*)	27 años		Nivel superior incompleto	Trabaja en el casino de una empresa y en una pescadería	Casada (pareja en Chile)	1	-	1	Desde diciembre de 2017
Paula	32 años		Trabajadora de Nestlé	Trabaja como asesora del hogar	Separada (antes del viaje a Chile)	1	-	1	Desde septiembre de 2017
Magali	46 años		Docente y abogada	Trabaja dando clases particulares y como voluntaria en una fundación	Casada (pareja en Chile)	2	1 (23 años)	1	Desde diciembre de 2017
Inés	43 años		Docente y terapeuta	Sin trabajo	Separada (antes del viaje a Chile)	3	2 (en Colombia)	1	Desde agosto de 2018
Paloma	30 años		Abogada	Sin trabajo (embarazada)	Casada (pareja en Venezuela)	1	1	-	Desde septiembre de 2018

Fuente: elaboración propia.

¹¹ Actualizado a la fecha 24 de noviembre de 2018.

RESULTADOS

La crisis de Venezuela: una migración forzada

La crisis venezolana data de hace algunos años y hace referencia a una situación que cada vez se hace más insostenible en términos económicos y políticos. Esta crisis ha conducido a una disminución de la calidad de vida ocasionada por la escasez de alimentos y medicinas, el desempleo y los altos costos en educación y salud. En este sentido, las madres venezolanas comparten similares motivos por los cuales deciden migrar y dejar a sus hijos e hijas en el país. El principal es la necesidad de sostener económicamente el hogar y comprar alimentos.

“Porque a veces nos encontrábamos en situaciones en que las niñas no tenían qué comer [...] estábamos pasando mucha necesidad y mis niñas lloraban porque no tenían nada que comer, entonces yo tomé la decisión de venirme”

(Rosa, 36 años, tres hijas).

Las creencias políticas son otra de las razones que gatillaron la decisión de migrar. Ese es el caso de una madre activista política, contra quien se ha desencadenado una persecución por parte del gobierno. En Venezuela, señala la mujer entrevistada, se han elevado los sueldos de los militares y se han incrementado sus cuotas de poder para combatir al pueblo que sale a manifestarse.

“Yo vengo de un centro político, soy luchadora de calle. [...] Realmente, cada día, la persecución hacia mí, hacia mi familia, es fuerte [...] me tuve que salir de mi casa por allanamiento, hubo muchas manifestaciones en que mi hija tuvo que presenciar...”

(Magali, 46 años, un hijo y una hija).

La corrupción en Venezuela es un fenómeno al que las entrevistadas aludieron con frecuencia. Una de ellas señala que decidió migrar porque se negó a cometer actos reñidos con la ética, lo que provocó su salida de un cargo como funcionaria gubernamental y cesantía. A esto se suma su embarazo, un riesgo, considerando, tal como ella señala, que tanto en el sistema público como en el privado hay escasez de implementos necesarios para la realización de un buen parto.

Las madres que participaron en esta investigación se vieron obligadas a migrar por la crisis que afecta al pueblo venezolano. Al ver que no podían cubrir necesidades básicas de sus hijos, debieron tomar la decisión de migrar y buscar oportunidades laborales, sacrificando la posibilidad de estar junto a ellos. Para ellas, el territorio de origen no propiciaba las condiciones mínimas para vivir, trabajar, habitar, vincularse y participar (FSP, 2017d). Por lo tanto, la migración se originó desde la responsabilidad maternal que sentían, de su intención de velar por el bienestar, cuidado y protección de sus hijos(as). En una perspectiva macro, tenemos que esta migración corresponde a lo descrito en la teoría *push and pull* (expulsión-atracción) (Lacomba, 2001; Jensen, 2014; Stefoni, 2014), ya que Ve-

nezuela no estaba brindando las condiciones óptimas para vivir, mientras que Chile se posiciona como un país atractivo por su estabilidad y crecimiento económico (Banco Mundial, 2018).

El apoyo de la familia como pilar fundamental

Las madres de las migrantes —las abuelas de sus hijos— tienen un rol fundamental en el cuidado de los nietos y nietas, y son el apoyo primordial y de extrema confianza de las madres que migran.

Funciones como el cuidado físico, el aseo, la vestimenta y la alimentación de las y los niños son cumplidas por las abuelas, quienes también juegan un rol mediador cuando las madres se comunican con los hijos(as) menores, ya que son ellas quienes informan cómo se encuentran, si han tenido problemas de salud, cómo les ha ido en la escuela, etc. Además, cumplen con otro rol, pues en varios casos son ellas quienes deben traer a los nietos(as) desde Venezuela a Chile. Se puede decir que las abuelas se transforman en “la otra madre”, como plantea Merla (2014).

“Mi mamá, quien me apoya con el niño [...] la que me trae al niño en bus [...]. Es un apoyo incondicional”
(Victoria, 27 años, un hijo).

Adicionalmente, las mujeres cuentan con el apoyo de otros familiares en Venezuela, como hermanas o el mismo padre de los hijos(as), quienes también desempeñan un rol de cuidadores, aun-

que en menor medida, debido a obligaciones laborales (a pesar de la crisis, varios continúan con sus trabajos por sueldos más bajos que el mínimo), las que les impiden estar todo el día con los niños, sobre todo con los menores de cinco años.

“Tuve que decirle a su papá que le diera todo el amor para que ella no se sintiera abandonada y que siempre le hablara de mí [...]. A la pequeña me la cuida una señora [vecina]”
(Rosa, 36 años, tres hijas).

En Chile, las principales redes de apoyo son familiares que llevan más tiempo en el país, así como fundaciones promigrantes donde hacen amigos(as) entre la comunidad venezolana. Los apoyos que brindan estas personas son diversos y van desde lo económico hasta la contención y apoyo emocional, sobre todo en temas ligados a la maternidad. Las madres relatan que entre ellas se aconsejan, y las que llevan más tiempo y ya tienen a sus hijos(as) en Chile muestran apoyo por medio de sus experiencias.

“Lo de mi hijo [cuando viajaba a Chile], yo me desesperé y mandé una nota por el grupo [de WhatsApp (venezolanos en Talca)] [...], entonces él salió un 21 y las fechas estaban todas locas, y me apoyaron con una plata, con un consuelo, “todo saldrá bien” [...]. El apoyo moral también vale mucho”
(Paula, 32 años, un hijo).

El hecho de que el principal apoyo de estas mujeres sean las madres (abuelas), evidencia la reproducción del cuidado, que se desplaza hacia otras

mujeres, principalmente familiares. Frente a la ausencia física de la madre, se rearticula la cadena a partir de la figura femenina más cercana (Acuña et al., 2015). La creación de lazos y redes de amistad a partir del apoyo de fundaciones promigrantes es un hallazgo de esta investigación y refuerza la idea de que las migrantes cuentan con un capital social importante.

La maternidad en tiempos de WhatsApp

La tecnología que usan todas las madres venezolanas es el celular. Internet y, específicamente, la aplicación WhatsApp son primordiales para mantener una comunicación virtual, rápida e instantánea. Este mecanismo se ve alterado o limitado por la señal de Internet en Venezuela y, en Chile, cuando no se tiene regularizada la situación migratoria, lo que impide contratar un plan de teléfono, pues uno de los requisitos para acceder a ellos es contar con cédula de identidad con RUT vigente.

“Todos los días por WhatsApp, notas de voz, videollamadas [...] no hay un día en que no haya dejado de saber de mi hijo. Le mando en la mañana notas de voz, teníamos una rutina [y] trato de hacerla por teléfono”

(Paloma, 30 años, embarazada, un hijo).

A pesar de estas dificultades, dentro de un sinfín de posibilidades, que van desde las llamadas directas hasta viajes constantes para mantener una relación física más cercana, usar WhatsApp es

la mejor alternativa, económicamente hablando. La comunicación a través de esta aplicación permite desarrollar y desplegar prácticas de cuidado y apoyo hacia sus hijos(as), relacionadas con el acompañamiento, entrega de consejos y orientación en la toma de decisiones.

“Aunque [yo] no esté en físico allá, hay decisiones que [mi hijo] no toma si no las consulta, eeh, cualquier proceso, “mamá, tengo que hacer esto [...] cómo lo hago, cómo piensas de esto” [...] y [le respondo] en la medida que yo puedo”

(Magali, 46 años, dos hijos).

Además, existe apoyo escolar, que consiste en brindar ayuda en tareas y trabajos.

“Con la grande la apoyo en el sentido de sus tareas, que tiene que presentar esto, que tiene que presentar un proyecto [...]. Entonces la ayudé ahí, pue’, a pesar de que estoy aquí”

(Rosa, 36 años, tres hijas).

Uno de los apoyos más relevantes que identificaron las madres fue el de envío de remesas económicas, dinero que se destina a comprar alimentos.

Las mujeres entrevistadas se identifican como las principales proveedoras y tienen claro que ellas tienen un poder adquisitivo en Chile que les permite sustentar el hogar en Venezuela. A pesar de esto, ellas continúan con una labor activa de cuidado en comparación con los padres, lo que le entrega un significado más profundo a su rol de madres. El hecho de intercambiar experiencias con sus propias madres y otras mujeres

determina su labor y responsabilidad como madres, y a partir de la interacción social van creando y moldeando el ejercicio de la maternidad.

“El amor de madre es único [...]. Estoy pendiente de ellas a todo momento, no espero a desocuparme del trabajo [...]. Le pago todos los gastos, porque con lo que gana mi esposo, eso no le alcanza, él trabaja allá y no le alcanza, ni siquiera para comprar un pollo”
(Rosa, 36 años, tres hijas).

El desarrollo de tecnologías como las transmisiones en vivo (Marín et al., 2014), disponibles en WhatsApp, permite mitigar la ausencia de las madres y estar en constante comunicación.

En relación con las prácticas de cuidado, estas incluyen la entrega de cariño y acompañamiento en momentos importantes del hijo(a) (primer día de clases, ceremonias, cumpleaños, etc.), pero, con mayor fuerza, prácticas de apoyo financiero, práctico y emocional. Cabe mencionar que la remesa social (intercambio de cultura, ideas, comportamiento, identidades y capital social) figura como soporte para el hijo(a) cuando llega a Chile y debe insertarse en una nueva cultura.

Secuelas psicológicas producto de la separación: depresión y sentimiento de culpabilidad

La emocionalidad que le otorgan las madres al hecho de estar lejos de sus hijos(as) responde a sentimientos como nostalgia, dolor, angustia y depresión

(Solé y Parella, 2004, en González, 2007). Las mujeres manifiestan graves secuelas psicológicas al separarse de sus hijos/as. Señalan que las primeras semanas son las más difíciles, ya que el desapego que sufren les genera dolor y angustia, lo que las lleva a cuadros depresivos. Incluso, una de las mujeres reportó haber intentado acabar con su vida.

“La verdad, tuve que ir a un psicólogo y luego fui a un psiquiatra porque intenté tomarme unas pastillas porque me sentía sola [...] no es igual que se te desprendan un hijo, que tus tres hijos [...] y ya cuando están adultos, igual, yo ahorita te lo cuento, yo vivía en un estrés”
(Inés, 43 años, dos hijas y un hijo).

En varias ocasiones, las madres revelaron sentirse culpables, sobre todo cuando sus hijos/as (pequeños) no quieren hablar con ellas.

“A veces me siento como culpable [...] yo trataba de sacarle palabras, pero no quería hablar conmigo, es la manera en que toman la distancia, el desapego de que uno ya no está [...] yo me deprimía, lloraba mucho”
(Paula, 32 años, un hijo).

Asimismo, frente a situaciones importantes para los hijos(as), como un cumpleaños, las mujeres declararon que, si bien apoyaron con la fiesta, esta representó un momento crítico para ellas porque estaban lejos en un momento relevante.

“Él cumple [años] en julio, yo quería que pasara rápido ese día, que pasara la semana, que él compartiera allá [...] imagínese qué podíamos sentir”
(Victoria, 27 años, un hijo).

Desde esta perspectiva, tiene sentido lo que plantean Berger y Luckmann (2001) respecto al mundo intersubjetivo que compartimos con otras personas, ya que muchos de los sentimientos que resuenan en las madres tienen que ver con la interacción con otros, con momentos donde se comparten experiencias, significados y formas de ejercer la maternidad. En ocasiones, son otras personas quienes hacen que se desarrollen estos sentimientos de culpa, ya que “cuestionan” y “acusar” a las madres por dejar a sus hijos(as), tal como alude Stefoni (2013a). Un elemento que llama la atención es que las madres señalan al gobierno de su país como responsable de la separación de las familias.

“El gobierno que está se ha encargado de separar a miles de familias, y qué te puedo decir, ha destruido los sueños de cada venezolano y nos ha llevado a esa separación [...]. Para mí, el principio fue duro, lloré, casi caigo en un cuadro de depresión, fue fuerte y tuve que ser fuerte por ellas”
(Rosa, 36 años, tres hijas).

Uno de los temas más sensibles de esta investigación fue el relacionado con la separación de los hijos. Para las madres que llevan menos tiempo en el país, hablar sobre esto resulta más difícil. Todas las mujeres entrevistadas lloraron al menos una vez y una de ellas lo hizo durante el proceso de entrevista.

El apego de las mujeres a sus hijos(as) es fuerte y proviene de una concepción social maternal (Pérez, 2012; Pedone, 2008; Marín et al., 2014; Skornia & Cienfuegos, 2016) y de la forma en que las venezolanas asumen su identidad como madres en su entorno sociocultural (Téllez y Heras, 2004, en Pérez, 2012). Esto explica que frente a la difícil decisión de migrar y brindar una mejor calidad de vida a sus hijos(as), muchas mujeres queden expuestas a comentarios de otras personas, los que afectan su salud psicológica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como revisamos anteriormente, se puede asegurar que las madres, al verse interpeladas por los contextos sociales, buscan nuevas estrategias para dar continuidad al ejercicio maternal. Tales estrategias se resumen en buscar redes de apoyo, utilizar tecnologías para comunicarse y ejercer prácticas de cuidado.

Distintas son las necesidades humanas (Max-Neef, Elizalde, Hopenhayn, 1993) que se ven afectadas, en distintos grados, cuando se despliega la maternidad transnacional (Tabla 2).

Tabla 2. Necesidades expuestas en la maternidad transnacional

		Necesidades (categorías existenciales)			
		SER	TENER	HACER	ESTAR
Necesidades (categorías axiológicas)	SUBSISTENCIA	Salud mental (-)	Alimentación (+) Trabajo (-/+)	Trabajo (-/+)	
	PROTECCIÓN		Legislaciones (-/+) Derechos (-/+) Familias (-/+)		
	AFECTO	Autoestima (-)	Familia (+) Amistades (+)	Expresar emociones (-) Compartir (-) Cuidar (-/+)	
	ENTENDIMIENTO				Interacción (-/+) Comunicación (+)

Fuente: elaboración propia a partir de Matriz de necesidades y satisfactores (Max-Neef, Elizalde, Hopenhayn, 1993, pp. 58-59).

Para estas mujeres surge la necesidad de apropiarse de la maternidad, ya que en algún momento vivieron situaciones que gatillaron un sentimiento que se expresaba en la frase “me alejaron de mi hijo(a)”, un fenómeno doloroso del que responsabilizan al conflicto político-económico venezolano. La trayectoria de las madres comienza con la decisión de migrar pensando en el bienestar del hijo(a). Como ya fue discutido, hay una estrecha relación entre el motivo y la calidad de vida que está experimentando el niño(a) y/o joven y la decisión de buscar trabajo en otro país. Si bien la separación desencadena secuelas psicológicas, a medida que transcurre el tiempo, y viendo que son un apoyo fundamental para la satisfacción de las necesidades básicas de su círculo familiar, las mujeres van empoderándose, una estrategia que les permite contrarrestar la ausencia y no sentirse culpables de “abandonar a los hijos”. Esto expresa un

vaivén dentro del imaginario simbólico que las participantes de este estudio tienen respecto a la maternidad.

Para estas mujeres, la migración no supone una ruptura definitiva con los vínculos familiares y maternofiliales, sino que más bien se configura como el contexto para modificar sus decisiones, reconstruir sus roles y activar sus relaciones de apoyo y de reciprocidad (Hernández, 2014). Un elemento que permite esta configuración en la maternidad es el desarrollo de la tecnología, la que permite estar en constante comunicación. WhatsApp es la aplicación que destaca para continuar con el desarrollo de la maternidad a miles de kilómetros. Si hace un par de años era el cibercafé el espacio para desarrollar estas prácticas (Stefoni, 2013b), en la actualidad hablamos del celular como aparato tecnológico personal que representa un valor significativo para las madres.

En el país de origen, el cuidado de los(as) hijos(as) es asumido por una figura femenina, como se conoce teóricamente, y es la abuela materna, mayoritariamente, la que cumple el rol de madre. Destaca también el apoyo de otras mujeres como cuidadoras y del mismo padre cuando se encuentra en Venezuela. Ante lo mencionado, Hernández (2014, p. 99) describe que es posible definir esta “maternidad en colectivo” como una red de mujeres que forman parte del entorno relacional y familiar más cercano, la que da lugar a dos figuras clave en el cuidado de los hijos: la madre migrante y la(s) madre(s) social(es).

En efecto, los fenómenos migratorios no solo deben leerse desde un punto de vista económico (Acuña et al., 2015). El contexto venezolano actual ha llevado a que muchas personas emigren en busca de condiciones que les permitan obtener una mejor calidad de vida. A lo largo de esta investigación, se evidenció que el caso de las mujeres involucra primero a sus hijos(as), ya que las madres ponen en la balanza migrar cuando esto les permite transformarse en la principal proveedora del hogar; aun cuando implique sacrificar la permanencia al lado de sus hijos(as), es un mejor destino que quedarse en Venezuela pasando “necesidad”, como aluden en sus propias palabras.

En este sentido, surgen diferentes recomendaciones para abordar este fenómeno social, desde lo más abstracto a lo más práctico.

(Re)pensar las dinámicas actuales de este fenómeno y la manera en que se

ha transformado a lo largo del tiempo. Se debe comprender la maternidad transnacional en contexto, ya que cada madre otorga un significado distinto al desarrollo de la maternidad transnacional dependiendo de la diversidad cultural, etaria, social y económica de las mujeres. Este proceso refleja lucha, fragilidad, angustia y felicidad —al reencontrarse con sus hijos(as)— como elementos que confluyen, lo que da cuenta de que las mujeres venezolanas se reapropian de su maternidad. Lo anterior también representa la figura del inmigrante, una que se ha ido construyendo a partir de luchas simbólicas, cargadas de sentido y de significados (Jensen, 2008).

Visibilizar el fenómeno de la maternidad transnacional desde diferentes ámbitos. Es imprescindible pensar en la complejidad que representa dejar a los hijos(as) para viajar miles de kilómetros, lo que se suma a las dificultades del proceso migratorio general, que ya es complejo y dinámico. En esa línea, es necesario profundizar en las formas de comunicación, redes de apoyo, prácticas de cuidado e implicancias de la separación, pues es el primer paso para desarrollar perspectivas que profundicen en el cambio de roles de género y los nuevos significados para las madres que se desplazan (Osorio et al., 2013): es la mujer la que sale del país y cumple el rol proveedor, pero continúa con su ejercicio maternal, desnaturalizando mitos o prejuicios sobre madres abandonadoras.

Considerar las realidades migratorias de cada región del país en las políticas públicas. En esta oportunidad, el estu-

dio está centrado en la capital regional del Maule, Talca, una ciudad que manifiesta ciertos patrones socioculturales y económicos que permiten abordar el fenómeno migratorio, pero en general se debe tener a la vista la realidad de cada territorio de las regiones. Incluso, se deben tomar en cuenta las diferentes realidades de las migrantes, es decir, las características de una madre venezolana no serán iguales a la de una boliviana, argentina, colombiana o peruana.

Programas psicológicos especializados en maternidades. Una de las dificultades que enfrenta cada madre es la separación de su hijo(a) y sus secuelas. En este sentido, se debe comprender que la ayuda psicológica podría contribuir a la salud mental de la madre. Estas mujeres quedan expuestas a ser juzgadas socialmente por la decisión que tomaron, lo cual repercute en su estabilidad emocional y causa depresión, angustia y tristeza, lo que las puede llevar incluso a actos que atenten contra su seguridad. Es necesario velar por la integridad mental de las madres a través de un programa especializado en este fenómeno que las ayude mientras se encuentran separadas de sus hijos(as).

Programas que faciliten la llegada de los(as) hijos(as) en menos tiempo. La actual visa de reunificación familiar, que entró en vigencia como mandato del Ministerio de Relaciones Exteriores

el 2 de julio de 2018, tiene “letra chica”. Esta visa puede ser solicitada por cónyuges, convivientes civiles, hijos menores de edad y mayores que estudien hasta los 24 años. Lo anterior rige solo para personas de nacionalidad haitiana que residan en Chile con residencia temporaria o definitiva¹². Ahora bien, ¿qué ocurre con los ciudadanos venezolanos que necesitan de este trámite? Hoy, Chile cuenta con la visa de responsabilidad democrática dirigida a ciudadanos venezolanos que buscan radicarse en Chile, la cual no se otorga a quienes poseen visa de turismo. Si bien el trámite de reunificación familiar fue presentado para apoyar a la población haitiana, el Gobierno de Chile anunció que también entraría en vigencia para los ciudadanos venezolanos, lo que se concretó el 20 de agosto de 2019. Toda esta tramitación debe realizarse en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública¹³.

Debe quedar claro que este trámite no daría como resultado un tipo de visa, sino un salvoconducto. Además, solo es aplicable para cónyuges (concubinato legal), para hijos(as) menores de edad y casos excepcionales y de especial complejidad. Solo podrán obtener un salvoconducto a través de esta medida los venezolanos cuyos pasaportes hayan sido emitidos desde 2012 hacia atrás, y la persona que esté en Chile (con la cual se van a reunir) debe tener visa de

¹² Ministerio de Relaciones Exteriores (2019). Chile en el Exterior. Visa de Reunificación Familiar. Gobierno de Chile. Sitio web: <https://chile.gob.cl/chile/blog/haiti/puerto-principe/visa-de-reunificacion-familiar>

¹³ Rehbein, C. (2018). Venezolanos en Chile: ¿Qué trámites hacer si quieren traer a un familiar directo al país? En: *Publimetro* <https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/06/25/familiar-venezolano-tramites.html>

residencia aprobada. Los venezolanos cuyos pasaportes hayan sido emitidos desde 2013 en adelante deberán solicitar la visa de responsabilidad democrática o la visa consular de turismo, ya que no serían elegibles para adherirse a esta medida de reunificación familiar¹⁴.

La mayoría de las madres entrevistadas entró a Chile con visa de turista (la cual tiene una vigencia de 90 días y les impide desempeñarse laboralmente con contrato) y comenzaron a trabajar en empleos informales y esporádicos que reproducen los malos tratos hacia los migrantes, pero lo soportaron y lo soportan porque necesitan enviar dinero a sus hijos(as). Ahora, como el objetivo de las madres es traer a sus hijos(as) en un plazo de un año aproximadamente, el salvoconducto aplicado para visas emitidas antes del 2012 resulta obsoleto, incluso para después del 2013, ya que una madre que haya llegado en 2013 al país, de seguro ya se encuentra con su hijo(a). Los años definidos no contribuyen a la reunificación familiar y se debe pensar en plazos más cortos.

Concretizar las políticas públicas migratorias para hacerlas eficientes. Es necesario que Chile cuente con políticas públicas claras y eficientes en temas migratorios, y con visados que den respuesta a las diversas realidades migrantes. Pareciera que todos los trámites de visas fueran coartados por la burocracia estatal y un escaso enfoque de derechos humanos. Sin ir más allá, la experiencia de las madres en la solicitud de visados

da cuenta de que el trámite es lento y solo genera más ansiedad para ellas. En este sentido, es urgente cambiar el Decreto Ley 1094 promulgado en el año 1975, con última modificación en 2011. Si bien el Senado de la República aprobó el proyecto para una nueva ley migratoria en 2019, aún no hay noticias de su promulgación.

Finalmente, es indispensable mencionar una vez más que la migración necesita ser entendida en su contexto, de acuerdo a periodos de la humanidad, cifras, patrones y dinámicas que han sido diversas. Solo así podrá ser abordada en toda su complejidad y alcanzar su necesaria visibilización en la agenda pública.

¹⁴ León, J. (2019). Reunificación familiar para venezolanos en Chile. En Blog Venezolanos en Chile. Disponible en <https://venezolanoenchile.com/2019/08/21/reunificacion-familiar-venezolanos-en-chile/>

BIBLIOGRAFÍA

- **Acuña, M., Castañeda, M., Peñaloza, C., Vega, D. (2015).** Narrativas maternas, transformaciones de género y nudos exploratorios sobre las mujeres bolivianas inmigrantes en Chile. *Iberoamérica Social: Revista Red de Estudios Sociales* (IV), 116-127.
- **Agar, L. (2007).** Inmigrantes en Chile, un desafío para la interculturalidad. *Novamérica*, 115. Río de Janeiro, Brasil.
- **Baldassar, L., Nedelcu, M., Merla, L., Wilding, R. (2016).** ICT-based co-presence in transnational families and communities: challenging the premise of face-to-face proximity in sustaining relationships. *Global Networks Partnership & John Wiley & Sons Ltd.* 133-144.
- **Banco Mundial (2018).** Chile, panorama general. Recuperado el 28 de octubre de 2018 de <http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview>
- **Beiras, A., Cantera, L., Casasanta, A. (2017).** La construcción de una metodología feminista cualitativa de enfoque narrativo-crítico. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 16(2) pp. 54-65.
- **Belloch, C. (2011).** *Las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.)*. Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia, España.
- **Bernasconi, O. (2011).** Aproximación narrativa al estudio de fenómenos sociales: principales líneas de desarrollo. *Acta Sociológica*, 56. pp. 9-36.
- **Berger, P. y Luckmann, T. (2001).** *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
- **Bourdieu, P. (2001).** Las formas del capital: capital económico, capital cultural y capital social. En *Poder, derecho y clases sociales* (2a ed.). Bilbao: Desclée de Brouwer.
- **Cano, M., Soffia, M., Martínez, J. (2009).** Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio. *Cepal - Serie Población y Desarrollo* N°88. Santiago de Chile.
- **Carrasco, J. (2017).** *Trayectorias migratorias de mujeres colombianas en Santiago de Chile. Una discusión sobre maternidad, pobreza y migraciones*. En Fundación Superación de la Pobreza. Tesis País 2017.
- **Castro, A. (2012).** Familias rurales y sus procesos de transformación: estudio de casos en un escenario de ruralidad en tensión. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, Vol. 11, No. 1, pp. 180-203.
- **Departamento de Extranjería y Migración (2016).** *Migración en Chile 2005-2014: Anuario estadístico nacional*. Santiago de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- **Fernández, M. (2016).** El cuidado como principio moral universalizable. *Reshes, Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales*. Año VIII, N°16, pp. 153-169.
- **Fundación Superación de la Pobreza (2017a).** Calidad del empleo asalariado en la población migrante de la región Metropolitana. *Serie Miradas País, volumen N°1*.
- _____ (2017b). Migración y campamentos en la ciudad de Antofagasta. *Serie Miradas País, volumen N°2*.
- _____ (2017c). *Fronteras invisibles. Convivencia urbana y migración en Antofagasta*.

_____ (2017d). *Umbrales sociales para Chile: desafíos para la política social*.

_____ (2017e). *Tan lejos, tan cerca. Un estudio cualitativo acerca de las percepciones y valoraciones de la población sobre las transformaciones económicas y productivas que ha experimentado el mundo rural en La Araucanía*. Región de La Araucanía, Chile.

• **González, H. (2007)**. Familias y hogares transnacionales: una perspectiva de género. En: *Puntos de Vista, Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid* (11). Universidad Autónoma de Madrid, España.

• **Hernández, A. (2014)**. El rostro de la maternidad migrante. La fotografía como herramienta etnográfica en el estudio de las migraciones femeninas. *Ankulegi* 18, pp. 97-110. Universidad Autónoma de Madrid, España.

• **Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (1991)**. *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.

• **Huertas, A., Martínez, Y. (2013)**. Población migrante y apropiación de las TIC desde una perspectiva feminista: reflexiones en torno a la comunicación transnacional en el colectivo adolescente. *Revista Telos (Cuadernos de Comunicación e Innovación)*. Madrid, España.

• **Imilan, W., Garcés, A., Margarit, D. (2014)**. Flujos migratorios, redes y etnificaciones urbanas. En: *Poblaciones en movimiento: Etnificación de la ciudad, redes e integración*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile. 19-38.

• **Instituto Nacional de Estadísticas (2018a)**. *Presentación de la segunda entrega de resultados Censo 2017*. Gobierno de Chile. Recuperado el 5 de julio de 2018, disponible en <http://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2018/05/presentacion-de-la-segunda-entrega-de-resultados-censo2017.pdf>

_____ (2018b). Base de datos 2.1 Población nacida fuera del país, por país o continente de nacimiento, según residencia habitual actual y sexo. Gobierno de Chile.

• **Instituto Nacional de Estadísticas & Departamento de Extranjería y Migración (2019a)**. Estimación de población extranjera en Chile. Gobierno de Chile. Recuperado de <https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/07/Minuta-Estimaci%C3%B3n-Regional-y-principales-Comunas.pdf>

_____ (2019b). Memoria Anual 2018. Gobierno de Chile. Recuperado de <https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/06/Memoria-Digital-2018-Departamento-de-Extranjer%C3%ADa-y-Migraci%C3%B3n.pdf>

_____ (2019c). Estimación de población extranjera en Chile, según país de nacionalidad. Gobierno de Chile. Recuperado de <https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/08/Minuta-estimaci%C3%B3n-regional-y-comunal-por-pa%C3%ADs.pdf>

_____ (2019d). Estimación de personas extranjeras residentes en Chile 31 de diciembre 2018. Gobierno de Chile. Recuperado de <https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/04/Presentaci%C3%B3n-Extranjeros-Residentes-en-Chile-31-Diciembre-2018.pdf>

• **Stefoni, C. (2004).** *Inmigrantes transnacionales: la formación de comunidades y la transformación en ciudadanos*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede Chile, disponible en <http://biblioteca-virtual.clacso.org.ar/ar/libros/chile/flacso/artstef.pdf>

_____ (2013a). Los cibercafé como lugares de prácticas transnacionales: el caso de la maternidad a distancia. *Polis, Revista Latinoamericana*, 12 (35). 211-227.

_____ (2013b). Formación de un enclave transnacional en la ciudad de Santiago de Chile. *Migraciones Internacionales* [en línea] [Fecha de consulta: 11 de abril de 2018] Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15129650006> > ISSN 1665-8906

_____ (2014). Perspectiva transnacional en los estudios migratorios. Revisión del concepto y nuevos alcances para la investigación. En: Imilan, W., Garcés, A., y Margarit, D. *Poblaciones en movimiento: etnificación de la ciudad, redes e integración* (pp. 41-65). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

• **Taylor, S. & Bogdan, S. (2000).** *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós: Argentina.

• **Tijoux, M., Palominos, S. (2015).** Aproximaciones teóricas para el estudio de procesos de racialización y sexualización en los fenómenos migratorios de Chile. *Polis*. 42. Publicado el 03 de marzo de 2016, consultado el 07 de junio de 2016. Disponible en <http://polis.revues.org/11351>

• **Tijoux, M. (2017).** *Migraciones contemporáneas hacia Chile*. Material del curso Interculturalidad, migración y racismos, impartido en UAbierta, Universidad de Chile.

• **Tobío, C. (2012).** Cuidado e identidad de género: de las madres que trabajan a los hombres que cuidan. *RIS - Revista Internacional de Sociología*, 70 (2). Universidad Carlos III de Madrid. España, pp. 399-422.

• **Tubert, S. (1996).** *Figuras de la madre*. Ediciones Cátedra. Madrid, España.

• **Wagner, H. (2008).** Maternidad transnacional: discursos, estereotipos, prácticas. En: Herrera, G., Ramírez, J. (Eds). *América Latina migrante: Estado, familias, identidades*. Flacso, sede Ecuador. 325-342.

A teal background featuring a close-up photograph of two hands. One hand is larger and appears to be an adult's, while the other is smaller, likely a child's. The hands are positioned as if one is holding or supporting the other, with fingers slightly spread. The lighting is soft, highlighting the texture of the skin.

BARRERAS ESTRUCTURALES PARA EL EJERCICIO DE PATERNIDADES CORRESPONSABLES: EL CASO DE LOS TRABAJADORES FAENEROS DEL GRAN CONCEPCIÓN

Yairi Nicole Guzmán Ahumada¹,
Universidad de Concepción

RESUMEN

La presente investigación es un esfuerzo por contribuir a los estudios de género desde una perspectiva insuficientemente abordada desde el punto de vista académico y más aún desde las políticas públicas: las barreras estructurales que existen para el ejercicio de paternidades corresponsables.

La muestra estuvo constituida por varones de clase media baja del Gran Concepción que trabajan en faenas en el norte de Chile, cuyos discursos fueron analizados desde un enfoque cualitativo.

En el análisis fueron considerados el rol de la institucionalidad laboral y las políticas públicas de corresponsabilidad en la reproducción de la división sexual del trabajo; la estructura de oportunidades del territorio como factor determinante en la decisión de los varones padres de irse a trabajar lejos de casa; y la consecuente construcción social y cultural de sus paternidades, caracterizada como un proceso conflictivo, ya que se sienten tensionados por cumplir con los mandatos irrevocables de la masculinidad hegemónica: su rol histórico de proveedores y la “obligación” de dar respuesta a las demandas de paternidad corresponsable que sus hijos y la sociedad actual les exigen.

Finalmente, y como resultado principal de esta investigación, se evidencia que, a pesar de las falencias de las instituciones y la falta de oportunidades en la región del Biobío, las paternidades que ejercen estos trabajadores faeneros se caracterizan por el retroceso del “padre autoritario” y el tránsito hacia una paternidad del tipo “periférica”. Desde una perspectiva multidimensional, esto vulnera su bienestar, pues no permite el desarrollo de las categorías existenciales de *ser, estar, tener y hacer*, y obstaculiza el ejercicio de paternidades más corresponsables, lo que tensiona su rol como padres.

Palabras clave: masculinidades, paternidades, necesidades existenciales, sistema laboral, corresponsabilidad, estructura de oportunidades.

¹ Socióloga. Artículo basado en la tesis “El trabajo produciendo padres: experiencias en el ejercicio de paternidades de trabajadores faeneros del Gran Concepción”, realizada en el marco del proyecto Fondecyt N°11130379, titulado “Hacia la configuración de nuevas masculinidades: relaciones de género y arreglos domésticos en las familias del Concepción urbano”, para obtener el grado de socióloga de la Universidad de Concepción. Profesora guía: Dra. Lucía Saldaña Muñoz, Concepción (2017).

INTRODUCCIÓN

Diversas transformaciones sociales, económicas y culturales han tenido lugar desde finales de la década de los noventa. La creciente inclusión de la mujer en el mercado del trabajo y la vida pública, así como el aumento de los años de escolaridad, han generado transformaciones importantes no solo a nivel macro-social, sino también en las esferas más íntimas de las familias, las relaciones de pareja y la propia identidad de género (Guajardo, 2013). Sumado a esto, se ha observado la paulatina inclusión del hombre en la esfera doméstica, principalmente vinculado a labores de crianza, pero aún alejado de las actividades domésticas asociadas al orden, limpieza y gestión (Wainerman, 2007).

Pese a los cambios sociales y culturales mencionados, no se puede desconocer la existencia de roles, comportamientos y posiciones que hombres y mujeres ocupan en la sociedad y que se han perpetuado de manera histórica, los que están determinados por las estructuras sociales.

Desde el enfoque de género, se plantea que las identidades subjetivas de hombres y mujeres son de origen social. Los roles de género son construcciones sociales y culturales impuestas sobre un cuerpo sexuado (Scott, 1986). Existen roles, prácticas, espacios, significados y una posición en las relaciones de género asociados a la idea de ser varón, lo que se comprende como masculinidad o masculinidades (Connell, 1995, citado en Olavarría & Valdés, 1997).

A modo descriptivo, Olavarría (2001, p. 11) plantea que “según la masculinidad dominante, los hombres se caracterizan por ser personas importantes, activas, autónomas, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controladas, heterosexuales, son los proveedores en la familia y su ámbito de acción está en la calle”.

En concordancia con lo anterior y pese a la existencia de ciertas imposiciones que pesan sobre los hombres, Olavarría y Valdés señalan: “la masculinidad es una construcción cultural que se reproduce socialmente y que, por tanto, no se puede definir fuera del contexto socio-económico, cultural e histórico en que están insertos los varones” (Olavarría & Valdés, 1997, citados en Olavarría & Parrini, 2000, p. 11)

A raíz de lo anterior y comprendiendo la variabilidad determinada por el contexto de la idea de ser varón, autoras como Fuller, en el contexto latinoamericano, han abordado aspectos de la construcción subjetiva del ser hombre, en los que el deseo de poder y control es un elemento clave en su formación, y eventos como ser padre y tener un trabajo remunerado son fundamentales para ser validados en el entorno social (Fuller, 2001, citada en Espinoza & Silva, 2015).

Desde ahí es fundamental comprender la masculinidad y la paternidad como construcciones culturales que se reproducen socialmente y, por tanto, se relacionan directamente con el contexto

social, laboral, territorial y familiar en el cual están insertos los varones.

Transformaciones de las paternidades en Chile

Ser padre es un mandato irrevocable para alcanzar el estatus de hombre y diversos estudios corroboran la importancia que este hecho tiene en la biografía de los varones. Pero la paternidad, su significado y ejercicio varía de acuerdo al contexto y a los cambios en las diferentes esferas de la sociedad: la flexibilidad laboral y las demandas por mayor democracia al interior de las familias han hecho que los varones cuestionen su paternidad (Olavarría, 2001).

En esa línea, Jiménez (2012, p. 147) afirma: “En algunas sociedades, aunque no en todas, la paternidad es una condición importante para obtener el estatus y las prerrogativas totales de la hombría o la masculinidad”.

Por su parte, Micolta (2002, p. 162) define la paternidad “como una categoría que se percibe, se piensa y se construye socialmente, entendiendo que se trata de una elaboración sociocultural con una dimensión simbólica”.

Es importante mencionar el vínculo entre las diversas estructuras sociales, las familias y los tipos de paternidades que ejercen los varones. A lo largo de la historia, han existido diferentes modelos de familias dentro de determinadas sociedades, lo que hace necesario describir y analizar estos tipos de familias y los modelos de paternidad que se produ-

cen al interior de las mismas, ya que la familia, tal como plantea Parrini (2001), es un modelo en el cual se socializan y reproducen roles de género.

La revolución industrial, con énfasis en las áreas urbanas, generó la separación entre la casa y el mundo laboral, y provocó una división sexual del trabajo entre la esfera reproductiva y la esfera productiva, y delimitó los espacios entre lo que se considera privado y público, lo que generó una división de roles que adjudicó a la mujer las tareas reproductivas dentro del espacio doméstico y al varón las tareas productivas en el mundo público. Paralelamente, la institución familiar comenzó a mutar, transformándose en una familia del tipo nuclear patriarcal (Olavarría, 2001).

Valdés (2007, p. 2), en concordancia con lo ya expuesto, afirma:

“La relativa estabilidad y legitimación de la familia que surgió con la industrialización se extendió a amplias capas de la población gracias a los sistemas de protección social estatal. Ello condujo a que este tipo de familia se homogeneizara bajo la separación de esferas masculinas (trabajo) y femeninas (familia)”.

La industria, la Iglesia católica y las políticas públicas dictadas por el Estado fueron promulgando y difundiendo este tipo de familia a través, por ejemplo, de la implementación del salario familiar, de la maternidad moral y del Código Civil, que estatúa la indisolubilidad del matrimonio (Valdés, 2007). Todo esto generó concepciones sobre la

paternidad que identificaban al padre como proveedor económico y autoridad familiar.

Con la instauración del régimen neoliberal en Chile y el establecimiento de un Estado subsidiario, este dejó de intervenir significativamente en el devenir económico y social del país, dejando al mercado la regulación de una buena parte de la sociedad. Las asignaciones familiares propias del Estado de bienestar, que reproducía la familia nuclear patriarcal, se devaluaron, los salarios de los trabajadores disminuyeron y los empleos formales y la participación política de los trabajadores sindicalizados se vio notablemente limitada; en este contexto, la mujer ingresa al mundo laboral en trabajos informales y estacionales, cambiando las dinámicas de las familias nucleares patriarcales (Valdés, 2007).

Paralelamente, la globalización y la modernización introdujeron ciertos cambios culturales en las sociedades occidentales que influyen hasta en las esferas más íntimas de las relaciones sociales y han generado una demanda creciente de igualdad por parte de la ciudadanía, mayor diversidad y relaciones sociales más democráticas. Por ende, las y los hijos y las esposas han cuestionado y limitado el poder omnipotente del padre en la familia, tal como lo han hecho las políticas públicas y los organismos que promueven y defienden los derechos humanos (Olvarría, 2001).

Ximena Valdés (2009) realizó en Chile una investigación titulada “El lugar que habita el padre en Chile contemporá-

neo: estudio de las representaciones sobre la paternidad en distintos grupos sociales”, cuyo objetivo fue analizar los cambios en las representaciones de la paternidad de varones pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos.

De su análisis emergen tres modelos que representan las formas de ser padres de los entrevistados: el primero corresponde a los *padres presentes o próximos*, varones que asumen las actividades tradicionalmente atribuidas a las mujeres-madres, vinculadas a las labores domésticas y reproductivas. Generalmente, este modelo se da en contextos en los cuales son las madres las proveedoras principales del hogar o en los que, luego de una separación, es el padre quien asume absolutamente las actividades de crianza de hijos/as (Valdés, 2009).

Un segundo modelo es el que agrupa a los *padres neopatriarcales*, quienes se caracterizan por ser buenos proveedores, al igual que sus esposas, pero en este caso ellas escogen hacerse cargo de la vida familiar. Se trata de un paradigma que responde al liberalismo y al conservadurismo propio de la religión, pues en la esfera pública los hombres se hacen responsables de sus hijos, son padres presentes, sobre todo en tareas como la escolaridad, pero en la esfera doméstica reproducen la división sexual del trabajo (Valdés, 2009).

El tercer tipo de paternidad es el de los *padres periféricos*, quienes reproducen la paternidad industrial, pero para ellos la comunicación es algo central en la relación de filiación. Son buenos proveedores y les resulta importante el éxito económico y laboral. Se trata de padres

distantes de la cotidianidad de sus hijos e hijas, que tienden a reproducir las relaciones de género tradicional en el hogar (Valdés, 2009).

Se desprende que el modelo de padre industrial centrado en la autoridad y manutención económica de la familia va gradualmente en retirada, pues los padres actuales comprenden que el significado y ejercicio de la paternidad debe centrarse en la cercanía y comunicación con sus hijos e hijas, es decir, en ser padres presentes. Pero aún coexisten elementos de la paternidad industrial, pues si bien se amplía la afectividad y emocionalidad en la relación con los hijos e hijas, continúa la preponderancia del rol proveedor de los varones y la división sexual del trabajo continúa reproduciéndose (Valdés, 2009).

Frente a los diferentes cambios que han ocurrido al interior de las familias y el nacimiento de sus diversas formas, cabe cuestionarse: ¿cómo se ha configurado la paternidad? ¿Se puede afirmar la caída del padre proveedor y autoritario? O, más bien, ¿existe una metamorfosis entre el antiguo orden y las concepciones más democráticas de relaciones familiares y sociales?

Ser padre y trabajador en la región del Biobío

Como se expuso en el apartado anterior, la paternidad está atravesada fuertemente por el mandato de proveer para las familias, lo que muchas veces entra en conflicto con las ascendentes demandas de proximidad y afectividad

que tanto las parejas como los hijos e hijas hacen a los varones.

Olavarría (2001) plantea que, tanto en sus subjetividades como prácticas, los varones sienten que es el trabajo lo que les permite sustentar a sus familias y cumplir con las misiones de proveer y proteger, aunque eso signifique no tener tiempo suficiente para estar con sus hijos.

Para Salguero (2007), las representaciones sociales del trabajo influyen directamente en la vida de los varones. Se trata de supuestos que van incorporando a través de los procesos de socialización que realiza la familia, la escuela y los grupos de pares. El trabajo pasa a ser parte fundamental en la vida de los hombres, pues es a través de él que alcanzan un estatus que los define como responsables y proveedores. Dicho de otra manera, a través de esta vía alcanzan el reconocimiento social. A pesar de que sus parejas trabajen, ellos se auto-definen como los principales proveedores y deben hacerse responsables de sus familias (Salguero, 2007).

Teniendo a la vista que es el trabajo el medio que permite a los varones alcanzar y cumplir con el rol de sostener sus familias, ¿qué ocurre en una realidad laboral como la chilena, caracterizada por jornadas laborales extensas y trabajos deslocalizados?

En la misma línea de lo planteado por Olavarría, en Chile es más complejo compatibilizar trabajo y familia, pues se trabaja más horas al año que en otros países. Para muchos trabajadores, las largas jornadas laborales están dadas

por la necesidad de obtener mejores remuneraciones, por lo que suman horas extras durante los festivos y domingos (Caamañó, 2007).

Según datos aportados por la encuesta Casen 2017, en la región del Biobío, el 12,3% de su población está en situación de pobreza, un promedio notoriamente por encima del nacional, que es de 8,6%, y que se agudiza aún más si se compara con el de la región Metropolitana (5,4%).

Es relevante que, en la región del Biobío, según el Censo de 2017, el promedio de años de escolaridad de los jefes de hogar es de 10,7 años, lo que significa que una gran parte de la población mayor de 25 años no tiene su enseñanza media completa, lo que aminora la cantidad de opciones laborales.

Además, para el año 2017, la región del Biobío promedió un 7,2% de desocupación, lo que la ubica sobre el promedio nacional de 6,7%, según cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2017).

Otro antecedente relevante es que Biobío es la región que concentra la mayor cantidad de empleos de cobertura económica —mejor conocidos como proempleos o empleos de emergencia— de todo el país, pues concentra más del 70% de estos. Como su nombre lo indica, son otorgados en periodos de emergencia, pero aquellos que se crearon en la región tras el cierre de la mina de carbón de Lota existen hasta hoy, lo que deja en evidencia que Biobío no ha logrado generar mejores posibilidades de empleo para la gran cantidad de demanda a la que debe hacer frente (Di-

pres, 2017).

Lo descrito evidencia que el modelo centralista chileno ha dejado en desventaja a las regiones, donde existen menos oportunidades laborales y educacionales y se arrastran brechas históricas que generan, en muchas ocasiones, que los varones se trasladen a lugares lejanos de su hogar en busca de mejores salarios, agudizando aún más la división sexual del trabajo. En general, los varones deben salir muy temprano por las mañanas y vuelven muy tarde por la noche; incluso, aquellos que trabajan mediante faenas no vuelven a sus hogares durante varios días (Olavarría, 2001).

La lejanía entre padres e hijos que situaciones como esta produce se manifiesta en la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo realizada en 2015. Para la región del Biobío, los hombres dedican, en promedio, 2,68 horas diarias al trabajo no remunerado, es decir, a labores domésticas y de cuidado. Las mujeres, en tanto, le destinan un promedio de 5,75 horas diarias (Enut, 2015).

La división sexual del trabajo se perpetúa y deja las labores de cuidado y crianza mayoritariamente en manos de las mujeres, mientras que los varones padres, que no logran salir de las rígidas estructuras laborales, siguen manteniéndose menos involucrados en la reproducción de la vida, situación que se agudiza en el caso de los varones padres que trabajan mediante faenas en el norte de Chile, ya que se encuentran entre 14 y 20 días seguidos fuera del hogar.

En las regiones, la estructura laboral y la falta de oportunidades actúan como ba-

rreras para que los varones puedan ser más corresponsables, pues para cumplir su compromiso de proveer a las familias se mantienen poco involucrados en la vida diaria de sus hijos e hijas. Este problema se agudiza cuando se analizan las disposiciones legales referidas a los permisos parentales, debido a que estos son entregados principalmente a la madre y el padre trabajador puede hacer uso de ellos solo en casos donde la mujer no puede acudir o voluntariamente le cede el permiso. La legislación contribuye a que siga siendo la madre la principal encargada del cuidado de los hijos, lo que promueve una paternidad menos activa y corresponsable (Revisar Anexo 1).

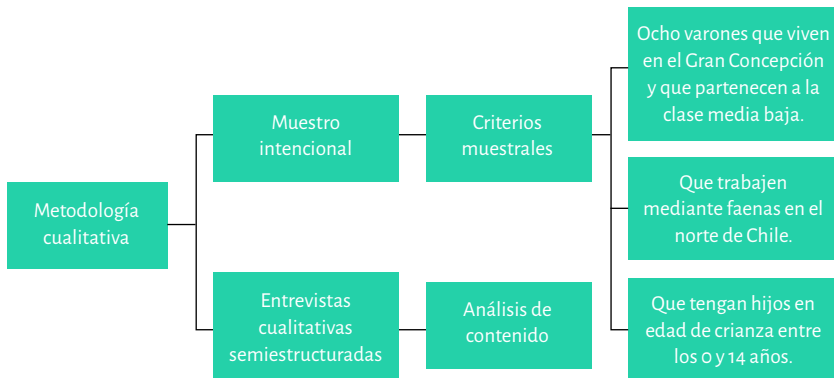
Todo esto sugiere algunas interrogantes: ¿cómo están significando y ejercien-

do la paternidad los varones padres que trabajan mediante faenas en el norte de Chile? ¿Qué cambios y continuidades han tenido las paternidades? ¿Qué tan relevante es el rol de las estructuras sociales, el sistema laboral y la estructura de oportunidades en el ejercicio de las paternidades corresponsables? ¿De qué forma se ven vulneradas las necesidades existenciales del *ser, estar, hacer y tener* de estos padres trabajadores de la región del Biobío?

MÉTODO

El siguiente esquema representa los métodos y estrategias empleados en la realización de la investigación.

Figura 1. Métodos y estrategias empleados en la investigación



Fuente: elaboración propia.

Se utilizó una metodología cualitativa, centrada en experiencias y construcción de significados (Ruiz, 1996), a través de la cual se pueden obtener, desde los discursos de los propios protagonistas, los

significados que le atribuyen a la paternidad, al ejercicio de esta y a la manera en que viven la tensión entre el trabajo y el ejercicio de la paternidad.

Para definir la categoría de clase media baja se utilizaron los criterios del Fondecyt al cual está adscrita esta investigación, es decir, se recurrió a personas que se encontraran entre el decil tres y el seis y que percibieran un ingreso per cápita entre \$125.559 y \$193.104, según el Portal Becas y Créditos (2014).

La técnica de levantamiento de información empleada fue la de entrevistas cualitativas, que han sido descritas como “no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 101), y, a diferencia de las entrevistas estructuradas, dan mayor libertad tanto al entrevistado como al/a entrevistador/a y los ponen en una relación de igual a igual, lo que genera mayor confianza en el entrevistado y permite ahondar en los ejes temáticos propuestos en esta investigación.

Finalmente, se empleó un análisis de contenido, definido como “una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más concretamente, de los documentos escritos” (Ruiz, 2009, p. 192). Lo que caracteriza a este tipo de análisis es que no busca

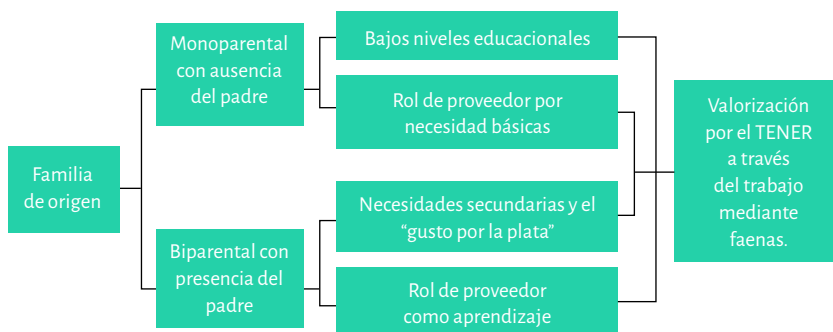
solamente el contenido manifiesto del texto, sino que además pretende alcanzar lo oculto, lo latente, lo que puede inferirse e interpretarse de él (Ruiz, 2009).

HALLAZGOS Y RESULTADOS

1. Familias de origen y el surgimiento del rol proveedor: entre el aprendizaje y la necesidad

Dos de los rasgos característicos de los trabajadores faeneros entrevistados son la escolaridad incompleta y la temprana edad a la que iniciaron sus primeras experiencias laborales. Ambas condiciones son el producto de las carencias económicas padecidas en sus familias de origen y tienen directa relación con la situación socioeconómica de la región del Biobío y del país hace 20 años. Las condiciones materiales y sociales asociadas a este contexto han hecho que estos hombres valoren de forma positiva el trabajo en faenas, pese a las adversidades que presenta.

Figura 2. Familia de origen y surgimiento del rol proveedor



Fuente: elaboración propia.

Es relevante señalar que dos de los ocho entrevistados fueron criados dentro de una familia monoparental y seis en una familia biparental. Aquellos pertenecientes a una familia biparental, donde existía una figura paterna presente que cumplía el rol de proveedor, iniciaron sus actividades laborales más tardíamente que aquellos criados en una familia monoparental donde la madre era la jefa de hogar. En este último caso, ambos entrevistados comenzaron sus primeras experiencias laborales a una corta edad, asumiendo su autocuidado e incluso haciéndose responsables de la manutención de su hogar, lo que influyó en que abandonaran tempranamente la educación formal.

1.1 Familia monoparental y ausencia del padre

Dos de los entrevistados provienen de una familia monoparental en la que la figura del padre estaba mayoritariamente ausente y, por tanto, tuvieron que asumir roles de proveedores a temprana edad. Así lo describe uno de los entrevistados cuando se le consulta por qué comenzó a trabajar a los ocho años:

“Por la necesidad, po’, como vivía con mi mamá y no tenía a nadie que sustentara la casa, pasé demasiada hambre igual”

(Alejandro, 40 años, Chiguayante).

Andrés, por su parte, se refirió a la ayuda (económica) recibida de su padre:

“Y ahí me las arreglaba yo y ahí empecé a trabajar chico, si con mi abuelo a los 11 años ya andaba con él trabajando en sus negocios. Y ahí me ganaba mis mone’as de chiquitito, y de repente no iba a clases porque cuando uno es chico, uno piensa que la vida siempre va a seguir así, ¿cacha’i? No pensa’i que la vida es difícil, así que después, ya cuando uno va creciendo, va viendo que la vida no es fácil”

(Andrés, 28 años, Chiguayante).

Las carencias que sufrían sus familias tenían que ver con cuestiones básicas, como alimentación, vestimenta, escolaridad, entre otras, lo que marca una diferencia con las familias biparentales.

1.2 Familia biparental

Seis de los entrevistados provienen de familias biparentales, es decir, crecieron en hogares con una figura paterna y una materna, donde el hombre asumía el rol proveedor. Esto está relacionado con el más tardío ingreso de estos jóvenes a la vida laboral y, en consecuencia, con la más tardía deserción de la enseñanza escolar media. Tres de ellos incluso terminaron el cuarto medio y uno es técnico de educación superior.

El hecho de no haber finalizado la enseñanza media, en el caso de algunos entrevistados, o haber continuado estudios superiores, en el caso de otros, está marcado por lo que ellos denominan “el gusto por la plata”, es decir, tener acceso

a ciertas cosas, sobre todo materiales, a las que no pudieron acceder cuando eran más pequeños. Sumado a lo anterior, en algunos casos estos varones fueron padres jóvenes y se vieron forzados a iniciarse en el mundo laboral para sustentar sus nuevas familias. En palabras de Guillermo:

“¡Eh!, porque... porque empecé a trabajar a los 17 años y me gustó la plata, me quedó gustando el dinero, así que después no estudié más y hasta el día de hoy trabajo [...]. Así que más que nada eso, po’, me quedó gustando la plata, como te digo, este... me tenía pa’ comprar lo que yo quisiera, ya que mis papás no podían darme los gustos que a mí me gustaban en ese tiempo, y por eso empecé a trabajar y ahí tenía todo, me compraba ropa, ayudaba a mi hermana en ese tiempo, que ella estudiaba, y así...”

(Guillermo, 39 años, Chiguayante).

Jorge Andrés no concluyó su enseñanza media, ya que fue padre a los 17 años y debió asumir el rol de padre proveedor:

“Sí, no, es que en ese momento ya no quería seguir estudiando, y cuando lo dejé, más que nada fue por el tema de trabajo, de sustento a mi hijo, o sea, aparte que igual me gustaba carretear y todo el cuento”

(Jorge Andrés, 35 años, Concepción).

En estos casos, no se habla de necesidades económicas vitales. En el caso de Guillermo, el abandono de la enseñanza media estuvo mediado por una

decisión propia, lo que él denomina el “gusto por la plata”, y la necesidad de cubrir necesidades de carácter secundario, pues en su hogar había quien cumpliera el rol “proveedor”, por lo que se contaba con el dinero para tener lo básico.

En la misma línea de lo anterior, Igor, otro de los entrevistados, relata que hubo carencias secundarias en su infancia, lo que ha determinado algunas de sus autoimposiciones actuales como padre, referidas principalmente a entregarles seguridad económica a sus hijos/as:

“Claro, entonces tampoco puedo recriminar, igual de repente yo quería algo más y no se pudo, que es lo que yo, a lo mejor, efectúo con mi hijo, que a mi hijo trato que no le falte nada, y si quiere algo más, trato de dárselo igual, que no le pase lo que a mí; a lo mejor, cosas extras que yo quería, no las podía tener, entonces trato de que a mi hijo no le falte ni le pase tampoco”

(Igor, 33 años, Coronel).

Durante la entrevista, Jorge nunca hace mención a haber padecido necesidades, pero sí a la figura del padre presente y proveedor:

“No era buen padre, pero trabajólico a cagar, muy trabajólico hasta el día de hoy”

(Jorge, 39 años, Chiguayante).

Se evidencian relaciones importantes entre las familias de origen y la figura del padre, y la iniciación de la vida laboral de los entrevistados y sus años de escolaridad, pues en los casos donde el padre estaba ausente, fueron ellos

quienes tuvieron que asumir roles de autocuidado y de ayuda o provisión económica al hogar de origen, incluso siendo niños. Algunos de los entrevistados mencionan que sus madres no tenían trabajos permanentes debido a que debían cuidar a sus hermanos menores.

Mientras, en el caso de las familias biparentales, se observa una mayor cantidad de años de escolaridad cuando está presente un padre proveedor, y la carencia de estudios superiores se debe a la paternidad temprana o al “gusto por la plata”, que finalmente los ha vinculado al mundo laboral y al rol de proveedores.

En conclusión, existen condiciones materiales, familiares y sociales que determinan la visión actual que tienen los entrevistados sobre su permanencia y trayectoria en el trabajo mediante faenas y la importancia que le otorgan a la dimensión del *tener*.

2. Condiciones laborales del rubro y permisos de parentalidad como barreras para el ejercicio de una paternidad corresponsable

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación y como han sostenido diversos estudios (Fuller, 2001; Jiménez, 2012; Olavarría, 2001, entre otros), son dos los mandatos fundamentales de la masculinidad hegemónica: ser padres y ser proveedores.

Es importante analizar, en el discurso de los entrevistados, cómo se concilian estos mandatos con los cambios culturales y sociales que exigen paternidades

corresponsables y con las condiciones laborales y legales generadas en el contexto del trabajo por faenas.

La exigencia de que los varones se involucren en el cuidado y la crianza de sus hijos e hijas se torna contradictoria con la existencia de un mercado laboral globalizado, caracterizado por jornadas laborales extensas, donde los trabajadores pasan una cantidad considerable de tiempo fuera de sus hogares o, incluso, trabajan mediante faenas y no vuelven a sus casas en semanas. Dicho panorama dificulta considerablemente la compatibilidad entre la paternidad presente y el rol de proveedor (Olavarría, 2001).

Lo descrito anteriormente evidencia las condiciones laborales que actualmente rigen el mundo del trabajo en Chile y que definen el contexto laboral de los entrevistados: el trabajo mediante faenas en el norte de Chile.

De la siguiente forma describe Jorge el sistema de turnos propios de las faenas:

“Mira, cuando estaba en el turno de 20 x 10, sí, ese es el turno más largo, porque ya no sé, al décimo día, no sé, ya no podí ni hablar con los viejos, están todos enojados, ¿cacha’i? Las levantá’s, las pegas, el trato que de repente, o sea, el trato en el sentido que querí trabajar pa’ puro matar el día. Ay, si al final es un cacho más o menos, no más, digamos, y los turnos largos provocan que andí siempre así. ¡Argh...!”

(Jorge, 39 años, Chiguayante).

Pasar más tiempo en sus trabajos que en sus casas es algo que aflige a estos trabajadores faeneros:

“Porque vení recién llegando y mira’i pa’ delante y te quedan 14 días y son las 10 de la mañana del día miércoles y ya te sentí; ya, y de repente va’i caminado y empeza’i así, ¡uf!, ¿cachai? Y decí’i ‘chucha, son las 10 de la mañana, recién vengo llegando, me quedan 14 días, ¿cacha’i? Porque yo aquí en la casa estoy 14 días, no más, porque los otros los ocupo viajando. Y lo otro es que de ahí hasta el domingo la cuestión es lenta, pero cuando ya es lunes empeza’i a descontar, queda menos, ¿cacha’i? El ánimo anda mejor y después, cuando ya es domingo, no, ya anda’i desesperado por bajar, querí’i puro irte a la casa”

(Nicolás, 24 años, Hualpén).

Como se menciona, es mayoritario el tiempo que están en el trabajo lejos de casa, el descanso en sus hogares se hace corto y la estadía en sus trabajos, “eterna”.

El trabajo mediante faenas desempeñado por los entrevistados es un caso extremo de la utilización extensiva del tiempo, caracterizado por jornadas laborales de 12 horas y el traslado temporal al lugar de trabajo. En consecuencia, estos trabajadores faeneros se distancian de sus familias y viven en función de su trabajo, lo que dificulta sustancialmente la compatibilización trabajo-familia.

Para comprender la contradicción entre las extensas jornadas laborales en Chile y las demandas por una paternidad más

presente es necesario tener a la vista la institucionalidad legal en esta materia.

La legislación laboral implementó la figura del trabajador a tiempo completo y a la familia como su carga, por lo que las subjetividades masculinas se relacionan directamente con ese mandato (ser proveedor) y con la división sexual del trabajo (Faur, 2006).

Actualmente, los padres cuentan con un postnatal de cinco días, no extensible por partos múltiples, derecho a sala cuna en el caso de tener la tutela legal del hijo o hija y, en el caso de enfermedades de los hijos e hijas, es la madre la que tiene el derecho prioritario de pedir permiso, mientras que el padre hará uso de él en el caso de fallecimiento de la madre o por tutela o traspaso legal del derecho de manera voluntaria por la madre (Chile Crece Contigo, 2017).

Los permisos parentales entre hombres y mujeres están lejos de avanzar de manera sustancial hacia la generación de una verdadera conciliación trabajo-familia (Anexo 1). La mayoría de los entrevistados señalan que el postnatal les fue respetado en sus trabajos, pero que posteriormente experimentaron dificultades para obtener permisos en el caso de enfermedad de sus hijos/as.

“El postnatal al papá, a mí me lo dieron, cuando nació la Emi me dieron cinco días. [...] O sea, claro, igual te pueden dar un permiso especial, pero igual, no es que te digan ¡ah! no sé, po’, tiene que ser algo extremo, o no sé, ¿cacha’i? Que esté hospitalizá’, pero ponte tú que esté con gripe o que se haya quebrado un bracito, ¿cacha’i? Que te den permiso, no, tú ándate, no, tiene que ser algo realmente grave como para que te den un permiso especial”

(Guillermo, 39 años, Chiguayante).

Andrés habla de la imposibilidad de obtener permisos para asistir a actividades o ceremonias de hijos e hijas:

“No, no, tiene que ser algo grave, no sé, tu mama grave en el hospital, pero no, por ejemplo, por un evento, que mi hijo vaya a ir al jardín, que tenga un show, no, no hay permiso”

(Andrés, 28 años, Chiguayante).

La falta de disposiciones legales que involucren de manera más efectiva a los hombres en la crianza de los/as hijos/as no solo en caso de ausencia de la madre, sino de una manera corresponsable, continúa perpetuando la división sexual del trabajo.

En concordancia con lo recién expuesto, las largas jornadas laborales de estos trabajadores faeneros alejan al padre de sus responsabilidades múltiples al interior de la esfera reproductiva.

3. Experiencias del trabajador faenero y tensión entre el rol del padre proveedor y el ejercicio de una paternidad más presente: entre el “refugio” y la “angustia”

Como se mencionó en los párrafos anteriores, diversas condiciones familiares, educacionales, económicas y territoriales llevaron a los entrevistados a convertirse en trabajadores faeneros. Se trata de una situación bastante conflictiva. Del análisis de los discursos de los entrevistados se desprende una clara tensión entre la añoranza familiar y el hecho de que “la plata está pa'l norte”, pues dos de los mandatos irrevocables de la masculinidad hegemónica están en juego: ser proveedor y ser padre (Fuller, 2001, citada en Espinoza & Silva, 2015).

Este hallazgo central pone de relieve la compleja situación que experimentan los entrevistados en sus trayectorias laborales, pues la construcción de la masculinidad no es un proceso sencillo y muchas veces genera una contradicción que Marqués separa en “refugio” y “angustia”, ya que el varón debe mediar entre una posición en la que se siente cómodo de ser hombre y, por el otro lado, angustiado, debido a las exigencias de cumplir con el modelo ideal de masculinidad, que es muy difícil de alcanzar (Marqués, 1997).

El ejercicio de las paternidades de los entrevistados ha sido atravesado por diferentes elementos, entre los que su trayectoria laboral faenera ha cumplido un papel fundamental. En el siguiente cuadro comparativo, basado en las categorías existenciales postuladas por Max-

Neef (1986), se describen las tensiones entre ser padres y ser proveedores que atraviesan los entrevistados.

Tabla 1. Tensión entre ser padres y ser proveedores de acuerdo a las categorías existenciales de Max-Neef (1986)

CATEGORÍAS EXISTENCIALES	PADRE	PROVEEDOR
SER	Padre presente y guía de los hijos	Padre proveedor
TENER	Tiempo libre, permisos parentales y responsabilidades familiares	Trabajo y dinero, posibilidad de escoger dónde trabajar
HACER	Actividades en familia, expresar emociones y cuidar de las/los hijos	Trabajar, proveer y sacrificarse por los hijos
ESTAR	En familia, en casa y en las etapas importantes de los hijos	En el trabajo, lejos de casa

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior evidencia, por una parte, los problemas de *no estar* y *no hacer*, es decir, la ausencia de estos padres de momentos y etapas de la vida de sus hijos, pues muchas veces no fueron parte ni estuvieron presentes en sus cumpleaños, navidades, presentaciones en la escuela, graduaciones, entre otros hitos importantes, lo que les afecta profundamente y tensiona la existencia de una relación cercana con ellos.

Así lo describe Guillermo:

“Eeeh... a ver, el año pasado la Cony le tocó hacer la primera comunión, ¿cacha’í? Y yo... eeeh... fue en diciembre, más menos, sí, fue en diciembre cuando le tocó hacer su... eeeh... se confirmó, eeeh... y me dijo

ella sí es que yo iba a estar para su evento y yo no pude, ‘no puedo, hija’, le dije, y me decía ‘pero por qué no, papá; ‘porque no puedo, po’, hija, mi trabajo no me... no puedo’, no me dan permiso para estas ocasiones. Y ahí me decía ella que era injusto, que era injusto porque igual iban a estar todas sus compañeras con sus papás, y ella, no sé, po’, entre comillas, la única que iba estar sin su papá. Sí iba a estar su mamá, iba a ir su padrino, de hecho, fue él, po’, ¿cacha’í? Pero no es lo mismo, po’, no es lo mismo que estás tú a que esté mi padrino. Así que de repente es... igual es fuerte pa’ uno, fuerte, pero ahí uno tiene que convivir con eso, po’”

(Guillermo, 39 años, Chiguayante).

Andrés, por su parte, describe la angustia de perderse etapas importantes del crecimiento de su hijo:

“No, estaba acá, estaba acá, así que celebramos y todo, pero igual te perdí muchas cosas, por ejemplo, no sé, po’, cositas que hace él ahora, como va creciendo, ¿cacha’i? Y no está’i acá, po’, llega’i y él ya sabe hacerlo, ¿cacha’i? Cuando me fui no caminaba, po’, llegué aquí y caminaba pa’ acá, pa’ todos lados, po’, y eso igual duele, po’, porque te perdí muchas etapas de tu hijo, pero por temas de trabajo hay que hacerlas, no más, si no queda de otra”

(Andrés, 28 años, Chiguayante).

Pese a la angustia, los entrevistados sienten que “el sacrificio es por mis hijos/as” y que, a pesar de las dificultades y complejidades propias del oficio, el dinero que reciben trabajando en el norte de Chile les permite entregar seguridad económica a sus familias y con ello cumplir el rol de ser proveedores.

Dentro de las principales metas que los entrevistados plantean está que sus hijos e hijas sean profesionales y que alcancen trabajos con mejores remuneraciones para no ser obreros, sino empleadores o trabajadores independientes. Hay una frase clave que repiten los entrevistados: “que mis hijos sean mejor que yo”. Pese a la baja escolaridad de la mayoría de ellos, existe una valoración importante de los estudios y están seguros de que la educación logrará que sus hijos puedan tener un mejor nivel de vida.

“Es que, por ejemplo, yo igual he pasado por hartas cosas que digo o que quiero que él no pase, por ejemplo, andar trabajando la pala, que sea manda’o, que él, no sé, po’, si Dios quiere algún día pueda hacer su empresa, que él dirija, que no ande metiendo las manos”

(Andrés, 28 años, Chiguayante).

Como ya se ha señalado, la lejanía, la ausencia en hitos importantes, la necesidad de proveer y sacrificarse por hijos e hijas han marcado la forma en que se comportan y piensan como padres.

3.1. El avance del padre periférico y el retroceso del padre autoritario

Se utilizó la tipología de Ximena Valdés (2009) para calificar este hallazgo; se observan elementos esenciales que permiten clasificar a los padres faeneros como periféricos.

Como ya se describió, los padres periféricos son aquellos que reproducen la paternidad industrial, pero consideran que la comunicación es central en la relación de filiación. Asimismo, son buenos proveedores y para ellos es importante el éxito económico y laboral. No obstante, son padres distantes de la cotidianidad de sus hijos y tienden a reproducir relaciones de género tradicionales en el hogar (Valdés, 2009).

Efectivamente, son padres más cercanos comunicativamente, menos autoritarios, pero alejados de la cotidianidad de sus hijos e hijas dada la naturaleza de su trabajo por faenas. Al mismo

tiempo, en sus familias se continúa reproduciendo la división sexual del trabajo, pues ellos son los proveedores principales de sus hogares y las mujeres las encargadas de la crianza, de la administración y reproducción de la esfera doméstica, incluso en los casos en que ambos trabajan.

A continuación, uno de los entrevistados hace referencia a que es su pareja la que administra el hogar mientras que él solo provee:

“¡Ah, hace todo, po’! Ella hace todo en la casa, es la dueña de casa, se hace lo que ella quiere en la casa, yo soy tema lucas, nada más, si me dice ‘oye, hay que comprar esto’, ahí está. ‘Oye, hay que cambiar esto’, ahí está, pero ella hace y deshace en la casa”

(Jorge, 39 años, Chiguayante).

Lo anterior también ocurre con la educación de los hijos e hijas, y pese al valor que le otorgan a que los niños reciban una buena educación y sean profesionales, son pocos los padres faeneros que se involucran constantemente en esta labor. Así lo describe Pedro:

“Es que no estoy muy enchufado en lo que van, de repente igual le ayudo, paso a leerle y le trato de hacer una orientación y todo eso, pero no mucho, aparte, pa’ qué te voy a mentir, no me acuerdo mucho, porque también no fue muy enfocado al científico-humanista mis estudios, entonces sirve bastante escucharlo, escucho a la mamá cuando le explica, entonces la mamá está como bien metida en el cuento de las tareas y todo”

(Pedro, 34 años, San Pedro de la Paz).

Por su parte, Guillermo asegura aportar, en ocasiones, en las tareas manuales de su hija:

“Sí, a la Constanza, sí, cuando tiene que hacer, no sé, trabajos manuales... eeeh... ¿cacha’i? En eso, más que nada, yo le ayudo”

(Guillermo, 39 años, Chiguayante).

No existe un constante involucramiento en la educación de los hijos e hijas por parte de estos varones, salvo en algunos casos. En general, son las madres las que cumplen el rol de apoderadas y quienes se responsabilizan cotidianamente de las labores escolares. Esto tiene relación, por un lado, con la división sexual de las tareas domésticas y, por otro, con la baja escolaridad de los entrevistados. Finalmente, la naturaleza del trabajo realizado les impide hacerse presentes de manera regular en la escolaridad de sus hijos/as, lo que vulnera sus necesidades de hacerse responsables y ejercer labores de cuidado.

Otra característica de la trayectoria de estos varones y su manera de ejercer su paternidad es la cercanía, pues son más demostrativos e incluso “malcriadores” con sus hijos debido a que, al estar alejados de ellos durante mucho tiempo, en el corto periodo en el que están en casa buscan tener y estar en momentos de cercanía, diversión y afectividad. Estas prácticas y significados que los entrevistados dan a la paternidad demuestran cómo el padre autoritario va en retroceso y cómo la educación y el disciplinamiento son responsabilidad principalmente de las madres.

De esta forma lo describe Andrés:

“Eeeh... mira, yo no tengo nada que decir, yo soy cariñoso, no soy mañoso con él, de hecho, con mi hijo soy mal enseñador, lo que él quiere, yo se lo hago, y ahí alegamos con mi señora, me dice ‘pero está mal lo que está haciendo’, le digo ‘buta, es niño, a mí no me gusta que lllore, ¿cacha’i? No me gusta que mi hijo ande llorando. Igual, como estoy poquitos días acá, trato de que él se sienta cómodo, jugamos, hacer las cosas que él quiera, ¿cacha’i? Y cariñoso con él, más que nada, igual a veces tengo su genio, pero son cosas de la vida”

(Andrés, 28 años, Chiguayante).

Igor menciona que al estar pocos días en casa trata de enseñar a su hijo a través de la comunicación y del buen trato:

“Donde alcanza’i a estar cinco días en la casa y tampoco es la idea estar los cinco días peñando con él, po’, porque a las finales yo creo que le ayuda menos. Yo uso el sistema más de conversar con él, de a lo mejor, en los momentos de discusión, de peleas que podamos tener con él, que tampoco son peleas, digamos, pero de sacarlo por el lado de llevarlo a comprarle un heladito y conversarle el tema, decirle ‘esto no se hace’ y de guiarlo por el lado bueno, o sea, lógicamente, manteniendo siempre la línea de que yo soy el papá y él es el hijo”

(Igor, 33 años, Coronel).

Es evidente que la relación que estos hombres tienen con sus hijos/as está mediada por una necesidad imperiosa de otorgarles todo lo que ellos necesitan y no obtuvieron. Ello implica que, de

alguna manera, relevan la entrega material por sobre la afectiva. En tanto, la valorización del dinero, producto de su pasado de carencias, ha generado que, frente a la tensión de escoger la familia o el trabajo, prefieran continuar perpetuando el rol principal de ser proveedores.

Es importante destacar, como ya ha sido mencionado, la existencia de avances en materia de paternidad, referidos principalmente al retroceso del padre autoritario y el avance de padres más comunicativos y cariñosos, comprometidos con entregarles bienestar, sobre todo material, a sus hijos e hijas.

Como ya se ha dicho, se trata de padres periféricos, pues pese a que sus relaciones se basan en la comunicación, continúan estando alejados de la vida cotidiana de sus hijos e hijas, sobre todo en materia de escolaridad e incluso de enseñanza. La falta de estudios de los entrevistados genera menores posibilidades laborales en la región del Biobío, lo que detona que se mantengan en trabajos deslocalizados a pesar de la profunda añoranza de estar cerca de sus familias, especialmente de sus hijos, lo que evidencia la constante tensión y vulneración de las necesidades múltiples de estos padres trabajadores.

4. El anhelado retorno a casa y las dificultades de obtener trabajo en la región del Biobío

Para los entrevistados, la experiencia de trabajar a través de un sistema de faenas tiene aspectos positivos y negativos.

Tal como se evidenció en los hallazgos anteriores, son dos los acontecimientos que se contraponen en su trayectoria faenera: el hecho de que “la plata está pa'l norte” y la añoranza familiar. Ante esta tensión, discursivamente, los entrevistados plantean el anhelo de volver a trabajar cerca de sus hogares, pero tienen diversas metas familiares que se interponen, como asegurar la educación de sus hijos e hijas y adquirir seguridad material antes de retornar.

“Es que me gusta, aparte que acá en Concepción, eeeh... las lucas no son buenas en lo que yo hago, la plata está pa' allá pa'l norte, más que nada es por eso, ¿cacha'i? Acá, si estuviera bueno, no sé, po'. Hubiera buenos trabajos...”

(Guillermo, 39 años, Chiguayante).

Algo parecido describe Alejandro:

“Acá, lo que es construcción es malo, aquí hay mucha mano de obra y mal paga, por eso que toda la gente quiere arrancar pa' afuera de Rancagua, pa' allá, porque hay harta pega”

(Alejandro, 40 años, Chiguayante).

Extrañar a sus familias y la pérdida de etapas fundamentales de la vida de sus hijos e hijas son algunos de los aspectos negativos de trabajar lejos de casa por tiempos prolongados. Sin embargo, la dificultad de encontrar las mismas posibilidades de trabajo en Biobío les impide regresar.

“Porque mi ida para allá para Antofagasta no es para ir a quedarme, yo tengo metas y tengo fechas, eeeh... yo aquí no podía acceder a algunas cosas, claro, me quedaba plata, pero no como pa' juntar o para comprar algo, entonces allá sí, entonces vamos por fecha. Nosotros, con mi señora, estamos postulando a casa, mi meta, si Dios quiere, si nos va bien, recibir esa casa y amoblarla, eeeh... comprar cosas, arreglarla, eso pasaría después de un año, dos años, y de ahí ya retornar. Pero, como te digo, no es parte hacerme un plan de seguir allá, pero igual caes en el círculo de que como ganas un poco más de lucas tiendes a subir tu estándar de vida acá”

(Pedro, 34 años, San Pedro de la Paz).

En consecuencia, el rol de ser proveedores marca la pauta en el ejercicio de paternidad que desarrollan estos trabajadores faeneros. Las condiciones de vida que tuvieron en sus familias de origen hicieron que desde temprana edad asumieran roles de proveedores, por lo que valoran de manera positiva el dinero que ganan en su trabajo, ya que es el medio que les permite entregar un buen nivel de vida a sus familias (Salguero, 2007).

Por lo tanto, quieren volver, pero chocan con las dificultades de encontrar el mismo estándar de salario en la región del Biobío; ganar dinero y proveer para el hogar es para ellos más importante que la cercanía y la corresponsabilidad en la crianza. De esta forma, reproducen una división sexual del trabajo que aprendieron en sus familias de origen y

que el sistema laboral y legal, junto con las escasas oportunidades laborales de la región para este perfil de trabajadores, perpetúa a través de barreras para la corresponsabilidad (Olavarría, 2001).

Lo positivo es que se observa el retroceso de padres autoritarios, pues son las madres las que llevan a cabo mayoritariamente la tarea de educar y enseñar a sus hijos e hijas, mientras que estos padres buscan pasar buenos momentos con ellos, enfocando su relación de padre e hijo en la comunicación y el afecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este trabajo se proponía responder las interrogantes sobre el impacto que el trabajo mediante faenas, la estructura de oportunidades que presenta la región del Biobío y las disposiciones legales en materia de corresponsabilidad tienen sobre el ejercicio de las paternidades. Al finalizar, se logró evidenciar que todos estos factores inciden en la manera en que estos padres ejercen y significan su paternidad y, en ocasiones, actúan como barreras para la corresponsabilidad.

En primer lugar, diversas son las condiciones económicas, educacionales y familiares de los entrevistados que permiten comprender la valoración positiva del tipo de trabajo que desempeñan, pese a las dificultades que presenta. El gusto y la necesidad por ser los proveedores de sus familias son mandatos que aprendieron de sus propios padres (en

presencia o ausencia de ellos), porque les fue inculcado o por necesidad.

Proveer tiene un rol protagónico en las vidas de estos varones y solo pueden cumplir con ese mandato a través del trabajo (Salguero, 2007). La labor que desempeñan es bastante particular, pues implica alejarse de casa por periodos de tiempo prolongados. Como contrapartida, esta labor les entrega un sustento económico sustancialmente mayor que el que podrían obtener dentro de la región del Biobío. Por ello, han estado dispuestos a separarse de sus familias, sus hijos e hijas y vivir tensionados el proceso de crianza de las y los niños.

La trayectoria laboral de los faeneros se caracteriza por sentimientos encontrados entre la necesidad de proveer y la vivencia de extrañar a las familias; la ausencia en fechas y eventos importantes ha marcado sus biografías y ha conflictuado, en ocasiones, las relaciones familiares. Sin embargo, existe una presión social (o mandato) que les indica que deben sacrificarse por sus familias, lo que los lleva a asumir como responsabilidad la entrega de bienestar a sus hijos e hijas, evitar que experimenten carencias, sobre todo en el ámbito económico, y buscar que sus hijos no padezcan las necesidades que ellos experimentaron. En este contexto particular, se corroboran los postulados de Olavarría (2001), que indica que el hombre proveedor sigue marcando la pauta dentro de los roles de un padre.

Esta investigación puso de relieve que los padres faeneros experimentan una fuerte tensión entre las necesidades

según las categorías existenciales de *ser, estar, tener y hacer* y su rol como sostenedores económicos de la familia. No logran conciliar sus dos roles: ser padres presentes y ser proveedores en un contexto de falta de oportunidades en la región del Biobío, lo que los ha obligado a trasladarse al norte de Chile en búsqueda de mejores oportunidades. Dicha tensión se agudiza en las celebraciones de fin de año: la Navidad es mencionada por todos los entrevistados como la fecha que viven con más nostalgia cuando les corresponde trabajar, lo que les genera diversos cuestionamientos sobre su permanencia en el rubro. No obstante, la necesidad de proveer sigue marcando la pauta y por ello deciden mantenerse en sus trabajos.

Las prácticas paternas de los trabajadores faeneros entrevistados se han modificado como resultado de su lejanía afectiva y cotidiana de la vida de sus hijos e hijas. El padre autoritario ha ido notoriamente en retroceso, dejando lugar a padres más comunicativos, afectivos y, en algunos casos, “malcriadores”. Dichas variaciones en las formas de ser padre se deben a que estos hombres se esmeran en que los escasos momentos que pasan en casa sean gratos: no quieren discutir ni reprender a sus hijos/as, quieren regalinearlos, salir con ellos/as, conversar. Esto genera una tensión adicional, ya que atribuyen la enseñanza de los/as hijos casi de manera exclusiva a la madre. Por todo lo anterior, en la cotidianidad continúan siendo padres lejanos, poco involucrados en la escolaridad y salud de sus hijos/as. Continúan reproduciendo la división sexual del trabajo y lo atribuyen a las características laborales del rubro.

Esto permite concluir que estamos frente a padres periféricos, más comunicativos pero ausentes de la cotidianidad y de la vida reproductiva tanto del hogar como de sus hijos e hijas (Valdés, 2009). Esta situación les causa tensión, pues anhelan tener un buen trabajo en la región y poder estar más cerca de sus hijos e hijas de acuerdo con sus proyecciones.

Es posible asegurar que las condiciones laborales y legales no constituyen un avance real en materia de corresponsabilidad en nuestro país, sino que se convierten en barreras que, en forma de escasas atribuciones y obligaciones del padre estipuladas en la ley, perpetúan la división sexual del trabajo. En caso de enfermedad de los hijos e hijas o eventos importantes en la vida de estos, la ley no contempla que sea el padre el responsable, sino la madre, por lo que en sus trabajos no gozan de otros permisos distintos al periodo de postnatal masculino.

El sistema laboral chileno, basado en el uso extensivo del tiempo, en este caso de trabajadores faeneros cuyas jornadas laborales promedian 12 horas diarias y cuyos turnos van de los 14 a los 20 días lejos de casa, es altamente inflexible. Los entrevistados, sin excepción, señalan que es imposible solicitar permisos para asistir a eventos escolares de sus hijos e hijas, y ponen de relieve la dificultad de contar con permisos en caso de enfermedad y la inviabilidad de modificar sus turnos, por ejemplo, para asistir a la graduación de sus hijos/as. Se trata de barreras estructurales para el ejercicio de la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos e hijas.

Esta investigación muestra que existen condiciones estructurales e incluso de clase que pueden marcar diferencias importantes a la hora de concebir y ejercer las paternidades en nuestro país. En este caso particular y extremo, la elección de trabajar mediante faenas, pese a los sacrificios que conlleva, está atravesada por necesidades materiales y por la carencia de oportunidades laborales en la región del Biobío para varones con niveles de escolaridad que, salvo en un uno de los casos estudiados, no superan la enseñanza media.

A modo de recomendación y en virtud de la innegable relación e influencia que las estructuras sociales, económicas y laborales tienen en la formación de las identidades de género, las masculinidades y las paternidades, las políticas públicas deben avanzar hacia la conciliación trabajo-familia desde un enfoque de género, que parta de la base de la existencia de los roles de género construidos socialmente para, desde ahí, promover la corresponsabilidad.

Estas políticas deben contemplar permisos parentales que propicien la responsabilidad de la crianza de ambos padres, es decir, deberían ser equitativos para la madre y el padre y no excluyentes.

Por otra parte, deben regularse las extensiones de las jornadas laborales, a fin de que los padres tengan mayor tiempo libre para entregar a sus familias, sobre todo a sus hijos e hijas.

En el caso del rubro que describe esta investigación, es importante que el trabajo se descentralice y se diversifique la matriz productiva, lo que permitiría que en más territorios existiesen oportunidades laborales concretas y que no fueran el norte y la actividad minera el único horizonte.

Por otra parte, y quizás en el corto plazo, es necesario incentivar que las empresas mineras y las contratistas ofrezcan planes educativos y capacitaciones a sus trabajadores para que tengan la oportunidad de nivelar estudios y de capacitarse en otras áreas, lo que podría permitirles aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo en su región.

Finalmente, es innegable que tener o no acceso a una estructura de oportunidades educacionales, laborales y culturales desde el nacimiento condiciona las elecciones de vida, por ello, es fundamental avanzar en políticas públicas que disminuyan las brechas de desigualdad, con el objetivo de aumentar las oportunidades a lo largo y ancho del territorio y poner el foco en la mejora de la calidad de vida de las personas y sus familias.

BIBLIOGRAFÍA

- **Caamañó, E. (2007).** Oportunidades de conciliación de trabajo y vida familiar en la legislación laboral chilena, pp. 171-202. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So718-68512007000100005
- **Casen, 2017.** Informe de Desarrollo Social. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Recuperado de http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/pdf/upload/IDS2017_2.pdf
- **Chile Crece Contigo (2017).** Cartilla de derechos laborales: permisos de paternidad y maternidad. Recuperado de <http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/cartilla-actualizada-de-derechos-laborales/>
- **Connell, R. (1995).** La organización social de la masculinidad. En Olavarría & Valdés (1997), *Masculinidad/es, poder y crisis*. Santiago: Isis Internacional/ Ediciones de las Mujeres 24, pp. 31-38.
- **Dirección de Presupuestos (2017).** Programa de empleo con apoyo fiscal. Recuperado de http://www.dipres.gob.cl/598/articulos-159656_doc_pdf.pdf
- **Espinoza, R. & Silva, J. (2015).** Cuerpos legítimos/ilegítimos: subjetivación de la masculinidad de hombres jóvenes en el norte de Chile. Recuperado de http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/13/secciones/tematica/pdf/t_06_cuerpos_legitimos_173-216.pdf
- **Faur, E. (2006).** Género, masculinidades y políticas de conciliación familia-trabajo. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3996614>
- **Guajardo, G. (2013).** Soltería, familia y masculinidad en Chile. En: Olavarría (2013), *Masculinidad/es y globalización: trabajo y vida privada, familia/s y sexualidad/es*. V Encuentro de Estudios de Masculinidades, p. 11.
- **Instituto Regional de Estadísticas (2017).** Boletín de empleo región del Biobío. N°10. Trimestre agosto-octubre de 2019. Recuperado de https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-viii/estadisticas-r8/boletines-informativos/encuesta-nacional-de-empleo-ene/ane-xo-biobio/11-anexo-empleo-aso-biob%-C3%ADO.pdf?sfvrsn=697b421f_4
- **Instituto Nacional de Estadísticas (2017).** Resultados Censo 2017. Región del Biobío.
- **Instituto Nacional de Estadísticas (2015).** Síntesis de resultados regionales Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Recuperado de https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-regionales-enut.pdf?sfvrsn=eac63260_5
- **Jiménez, L. (2012).** Algunos aspectos del conflicto entre los géneros. La sexualidad, la reproducción y la paternidad desde la perspectiva de algunos varones mexicanos. Un referente del conflicto. Sociotam, vol. XII, núm. 1, 2012, pp. 131-167. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65429254008>
- **Max-Neef, M., Elizalde, Z., & Hopenhayn, M. (1986).** Desarrollo a escala humana. Santiago, Chile: Cepaur.
- **Ministerio de Educación (S/F).** En: Portal Becas y Créditos. Recuperado de http://portal.becasycréditos.cl/index2.php?id_contenido=25672&id_portal=74&id_seccion=4804

- **Micolta, A. (2002).** Paternidad como parte de la identidad masculina. Revista Prospectiva N°6-7, pp. 159-172. Recuperado de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1163/1/Prospectiva%206%20y%207.p.159-172,2002.pdf>
- **Olavarría, J. & Parrini, R. (2000).** *Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia*. Santiago: LOM Ediciones, p. 11-12.
- **Olavarría, J. (2001).** Y todos querían ser buenos padres, varones de Santiago de Chile en conflicto. Flacso, Chile, pp. 13-89.
- **Parrini, R. (2000).** Los poderes del padre: paternidad y subjetividad masculina. En: Olavarría & Parrini (2000), *Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia*. Santiago: LOM Ediciones, pp. 69-76.
- **Pineda, E. (2010).** *Roles de género y sexismo en seis discursos sobre la familia nuclear, una aproximación sociológica*. Colección Estudios de Género, Acercándonos Ediciones, 1ra Edición. Buenos Aires, Argentina, p. 6.
- **Ruiz Olabuénaga, J. A. (2009).** *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad Deusto.
- **Salguero, A. (2007).** El significado del trabajo en las identidades masculinas. En: Jiménez & Tena (2007). *Reflexiones sobre masculinidades y empleo*, pp. 429-448. Recuperado de http://www.crim.unam.mx/drupal/crimArchivos/Colec_Dig/2007/Lucero_Jimenez_G/18_El_significado_trabajo_identidades_masculinas.pdf
- **Scott, J. (1986).** El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. Compilado Marta Lamas. México.
- **Taylor, S. & Bogdan, R. (1996).** *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- **Valdés, X. (2009).** El lugar que habita el padre en Chile contemporáneo. Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 8, N°23.
- **Valdés, X. (2007).** Notas sobre la metamorfosis de la familia en Chile. Recuperado de <http://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2007/1122/Resumen.XimenaValdes.pdf>
- **Wainerman, C. (2007).** Conyugalidad y paternidad, ¿una revolución estancada? En: Gutiérrez (2007). *Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política*. Buenos Aires: Clacso.

ANEXOS

1. Cuadro comparativo de derechos parentales

LEY	PADRE	MADRE
Prenatal	No tiene	Seis semanas (42 días) con derecho a prolongación
Permiso por nacimiento del hijo/a	Cinco días pagados, distribuidos en el primer mes desde el nacimiento	—
Postnatal	Cinco días (puede aumentar en el caso de que la madre traspase ese derecho, a partir de la séptima semana de postnatal parental)	12 semanas (84 días) con derecho a prolongación a 12 o 18 semanas más
Sala cuna	Si tiene la tuición del hijo o hija	Si la empresa tiene más de 20 trabajadoras
Alimentación de hijos menores de dos años	Puede tener este derecho por traspaso de mutuo acuerdo	Una hora al día
Permisos por enfermedad	En caso de tener la tuición del hijo Por fallecimiento de la madre o traspaso de la madre (debe ser compensado)	Derecho prioritario (debe ser compensado)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Chile Crece Contigo, 2017.

2. Cuadro muestral

Nombre	Edad	Nivel de escolaridad	Comuna de residencia	Ocupación	Lugar de trabajo	Jornada laboral	Años de trabajo en el rubro	Ingresos mensuales (fijos o promedio)	Situación conyugal	Número de hijos/as y edad
Guillermo	39	Media incompleta	Chiguayante	Pintor industrial	Antofagasta	20x20	22 (interrumpidos)	600.000	Conviviente	Dos (11 y 3)
Andrés	28	Básica completa	Chiguayante	Operario de cañerías	Antofagasta	14x14	Nueve	600.000	Conviviente	Uno (1 año, 2 meses)
Alejandro	40	Básica completa	Chiguayante	Pintor industrial	Mejillones	20x10	Dos	600.000	Conviviente	Tres (13, 15 y 18)
Jorge	39	Media completa	Chiguayante	Eléctrico-montaje	Antofagasta	10 x 10	12 (interrumpidos)	600.000	Conviviente	Dos (19 y 11)
Nicolás	24	Técnico superior	Hualpén	Mantenimiento industrial-eléctrico	Antofagasta	14x14	Dos meses	600.000	Conviviente	Uno (1 año, 6 meses)
Jorge Andrés	35	Media incompleta	Concepción	Camionero	Antofagasta	20x10	Dos	900.000	Casado	Tres (15 y mellizas de 7 años)
Igor	33	Media completa	Coronel	Operario de cañerías	Antofagasta	10x10	Siete	600.000	Casado	Dos (6 y 1 año, 4 meses)
Pedro	34	Media completa	San Pedro	Camionero	Antofagasta	20x10	Tres	900.000	Casado	Dos (11 y 2 años, 7 meses)

Fuente: elaboración propia.



LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO COMO SUSTENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA VILLA CERRO CASTILLO DE AYSÉN

María Consuelo Gana, María Trinidad Puga¹, Elisa Mingo²,
Pontificia Universidad Católica de Chile



RESUMEN

La siguiente investigación se realizó con el propósito de identificar el patrimonio de la Villa Cerro Castillo en Aysén, una tarea relevante si se comprende que este sustenta, en parte, el turismo comunitario. A través del método cualitativo se analizaron entrevistas realizadas a 28 personas y un grupo focal. Los casos se dividieron en tres grupos: locales, migrantes y turistas de la localidad. Los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de la teoría fundamentada de Glaser & Strauss (2002). Las principales conclusiones obtenidas dan cuenta de que el patrimonio de la localidad está fuertemente relacionado con su cultura y tradiciones, así como con la naturaleza característica del lugar. Estos elementos servirían para proponer una estrategia de desarrollo turístico en la localidad, que en estos momentos es incipiente.

Palabras clave: patrimonio, turismo comunitario, desarrollo local, migrantes por amenidad.

¹ Sociólogas. Artículo basado en la tesis “El patrimonio en la Villa Cerro Castillo de Aysén”, presentada al Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con Fundación Patagonia de Aysén, para optar al título profesional de sociólogas. Profesor guía: Patricio Velasco. Junio, 2018. Santiago de Chile.

² Licenciada en Sociología. Artículo basado en la tesis “El patrimonio en la Villa Cerro Castillo de Aysén”, presentada al Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con Fundación Patagonia de Aysén, para optar al título profesional de socióloga. Profesor guía: Patricio Velasco. Junio, 2018. Santiago de Chile.

INTRODUCCIÓN

La Villa Cerro Castillo, ubicada 95 kilómetros al sur de Coyhaique, en la XI región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, es una localidad de importante atractivo turístico que se inserta en el recorrido de la Carretera Austral o Ruta 7 en Chile. A ello contribuye la existencia del Parque Nacional Cerro Castillo y las actividades que se pueden realizar en él, los diversos paisajes que incluyen glaciares, bosques y ríos, actividades como la pesca, escalada en roca y cabalgatas, y la presencia de pinturas rupestres y el Museo Escuela, encargado de estudiar y difundir el patrimonio de la zona.

La región de Aysén, la tercera más extensa y la más deshabitada del país, enfrenta una situación histórica de aislamiento institucional, geográfico, económico, social y cultural, a pesar de que la ruta que la cruza es una de las conexiones de mayor importancia de carácter inter e intraregional. En este escenario, Aysén comienza a introducirse lentamente en la escena nacional y las instituciones públicas comienzan a desarrollar proyectos con miras al desarrollo local y la búsqueda de la superación de la pobreza y el aislamiento (Muñoz y Torres, 2010).

Con una mezcla de antepasados chilotos, gauchos —en referencia a los chilenos argentinizados (Baeza, 2009)— y trabajadores de la Carretera Austral, los actuales habitantes de la región conservan costumbres que marcan un sello distintivo. Como resultado de los distin-

tos procesos de poblamiento organizado que dirigieron los Estados de Chile y Argentina (“Pacificación de La Araucanía” y “Campaña del desierto”, respectivamente) (Torres & Rojas, 2011), estos elementos se introducen y mantienen visibles hasta la actualidad a través de las tradiciones culturales del mate, el chamamé y la esquila, la utilización de la boina y las bombachas, entre otras (Osorio, 2007), las que, a pesar del esfuerzo estatal de chilenuización, dan cuenta de un sincretismo cultural cotidiano único y propio de un lugar cuya tradición cultural hegemónica proviene de la Patagonia (Osorio, 2007; Torres & Rojas, 2011).

A esto se suma la movilidad territorial característica de las y los patagones, que han luchado por adaptarse a ambientes aislados y físicamente hostiles, y han conformado familias austeras y amigables con el forastero, dedicadas históricamente a la ganadería en grandes extensiones de tierra (Torres y Rojas, 2011; Saldívar Arellano, 2017). Hoy, este grupo se ha diversificado gracias a la conectividad que ha generado la construcción de la carretera, lo que ha permitido que los individuos vean la zona como un sector viable para desarrollar su vida de una manera diferente a la de las grandes ciudades y, a la vez, de un modo potencialmente explotable para diferentes industrias, como la minería, la energía hidroeléctrica y las empresas turísticas. Lo anterior hace que las tradiciones de la región confluyan en un espacio cultural donde el imaginario

se crea a partir de conexiones ancestrales y memorias referidas a una comunidad transnacional, pero también desde un ensamblaje de esta cultura con tradiciones locales en constante reproducción, que impulsan a nuevos y antiguos migrantes y a naturales de los lugares de residencia a custodiar la tradición (Saldívar Arellano, 2017).

Por otra parte, esta región destaca por sus diversos paisajes, que incluyen campos de hielo, glaciares, ríos, lagos, volcanes, diversa flora y fauna, y numerosas comunidades colindantes con parques y reservas nacionales, lo que posibilita la realización de múltiples actividades como el trekking, montañismo, cabalgatas, fotografía y paisajismo, ciclismo y pesca, entre muchas otras (Muñoz y Salinas, 2010). En este contexto geográfico y cultural, el turismo se desarrolla actualmente como una de las actividades productivas más importantes y con mayor potencial de crecimiento de la región (Gore Aysén, 2014), con la Carretera Austral como principal vía de accesibilidad. De esta manera, se da inicio a un proceso de combinación entre las formas tradicionales de vida, tanto móviles (desde la perspectiva migratoria) como locales, y una nueva forma turística que tiene sus bases en el intercambio cultural y económico entre habitantes locales y visitantes (Torres y Rojas, 2011).

Es posible afirmar que las zonas rurales, que ocupan la mayor parte del territorio regional, presentan oportunidades turísticas diferentes a las de las áreas urbanizadas en tanto predomina lo natural, la actividad agraria, núcleos pequeños de población, aislamiento comunicacional y/o topográfico, homogeneidad

de hábitos sociales y permanencia de manifestaciones culturales ancestrales (Baidal y Antoni, 2000), lo que favorece el turismo local y de pequeña escala con miras hacia un desarrollo sustentable del lugar y de la comunidad (Cánoves et al., 2006).

Desde esta perspectiva, Muñoz y Salinas (2010) diferencian el “discurso de región” en oposición al “discurso del desarrollo”. El primero, propio de las localidades orientadas a la provisión de servicios hospitalarios y ecoturismo, se produce y reproduce a través de los aspectos simbólicos que la comunidad valora, que hoy muestran un reensamblaje entre los modos de vida comunitarios y las distintas formas turísticas, lo que ha ampliado el espacio simbólico y los efectos del vínculo entre naturaleza y sociedad (Rodríguez et al., 2016). Así, la identidad es uno de los elementos de mayor importancia para el reconocimiento, diferenciación y posicionamiento de los lugares, y es el contexto en el cual se desarrolla el *place branding*, una estrategia de divulgación de los destinos turísticos que proyecta, a través de la promoción identitaria, un sentimiento de orgullo y arraigo a la cultura y naturaleza únicas de la región de Aysén (Gnoth, 2007; Fernández-Cavia, 2011). De este modo, se activa lo tangible y lo intangible de un territorio con el objetivo de crear un discurso capaz de motivar a un público heterogéneo, que abarque de manera compleja la realidad del lugar (Sales Piñeiro, 2017). En caso contrario, la creación de esta marca territorial puede caer en el mero posicionamiento publicitario competitivo, sin tener en cuenta las diferentes dimensiones y audiencias que interactúan en ese espacio (imagi-

narios socioculturales, variables macro-económicas, etc.) (op. cit., 2017).

En los últimos años, y con el objetivo de dar a conocer su patrimonio turístico, la región se ha concentrado en la adaptación y creación de infraestructura hotelera, así como en el incremento de la oferta de servicios turísticos relacionados con la naturaleza en sus distintos ámbitos, como excursiones de montaña, pesca y cabalgatas, entre otros. Lo anterior es interesante si se toma en cuenta que incluso actividades tradicionales para los habitantes de la región, como los recorridos en bote por los ríos, los viajes a caballo u otros, se convierten automáticamente en productos turísticos en las temporadas de alta demanda, donde compiten los oferentes locales con los operadores foráneos (Muñoz & Salinas, 2010). Estos aspectos hacen del ecoturismo la principal forma turística, motivada principalmente por la observación y apreciación de la naturaleza, pero también de las culturas y tradiciones que puede ofrecer el área. Es por esto que muchas veces el turista patagónico ha sido identificado con un individuo nostálgico que busca escapar de la imagen tosca, dinámica y masiva de la ciudad (Rodríguez et al., 2016). En esto, el sistema turístico de Aysén es particular y se constituye a partir de las relaciones sociales que se dan entre los proveedores y receptores de estos servicios, quienes aportan a través de la valoración y evaluación de los atractivos turísticos, pero también como proveedores de ideas innovadoras a este sector (Torres y Rojas, 2011; Muñoz y Salinas, 2010).

Esta relación local-turista, replicada a veces entre quienes migran a esta zona, implica que el turista y el migrante pasan a ser productores de significados culturales que devienen en nuevos paisajes sociales y nuevas percepciones y apreciaciones del lugar (Rodríguez et al., 2016). Por esto se vuelve crucial la observación del crecimiento turístico de la zona y de las implicancias que ha tenido sobre la comunidad y su cultura, ya que desde estos aspectos se puede dar cuenta de las diferentes relaciones de poder configuradas y las distintas conceptualizaciones sobre la identidad de la villa. Todo esto permite reflexionar sobre el lugar geográfico como un espacio conceptual donde sus significados y límites simbólicos son negociados de manera continua por los grupos que lo conforman (Saldívar Arellano, 2017).

En este contexto, y frente a la posibilidad de que la región pueda verse afectada negativamente por el fenómeno turístico, la Fundación Patagonia de Aysén, organización privada sin fines de lucro, apoya el desarrollo del turismo comunitario, de modo que a través de este se puedan satisfacer las necesidades actuales del turismo y las de la comunidad oferente, sin comprometer la calidad de vida de la población local a futuro, manteniendo el bienestar ambiental y capturando beneficios económicamente rentables para los residentes de las localidades (Orgaz, 2013). El turismo comunitario, conocido también como turismo de base comunitaria, se presenta entonces como vía de desarrollo de las comunidades en tanto permite la creación de micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas de manera colectiva por integrantes de

la comunidad y diferenciadas del turismo de masas (López-Guzmán, 2011). De este modo, se pretende mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales de manera sostenible desde su potencial cultural, patrimonial y natural, lo que a su vez contribuye a la conservación de estos recursos, pues son las propias comunidades las que los administran (Orgaz, 2013).

El proyecto de la Fundación Patagonia de Aysén busca comprometer a la comunidad para que, trabajando de manera conjunta, genere una oferta turística local, diferente y única, que con el tiempo se transforme en un referente para proyectos similares. Las acciones que se han desarrollado y que se busca desarrollar en la Villa Cerro Castillo contemplan la búsqueda de apoyo en la comunidad a través del trabajo en colegios, identificación y potenciamiento de los valores del lugar, implementación de mejoras en servicios e infraestructura local, desarrollo de tradiciones y aventuras, y utilización de tecnología para conectar la Patagonia con el resto del país y del mundo (Fundación Patagonia de Aysén, S/F).

La localidad de Cerro Castillo se ubica 96 km al sur de Coyhaique (Figura 1) y a los pies del Parque Nacional Cerro Castillo, su principal atractivo turístico. Esta localidad cuenta con 500 habitantes, aproximadamente, 160 casas y 30 comercios, entre ellos hostales y hosterías (Fundación Patagonia de Aysén, S/F). Respecto de la realidad social, en el último tiempo ha habido una fuerte migración de los jóvenes hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades y condiciones, lo que ha implicado un

envejecimiento de la población (Maldonado, 2011). Por su atractivo natural, Cerro Castillo se ha posicionado como un importante destino turístico, y no solo se ha incrementado notoriamente el flujo de personas dentro de la villa en ciertos periodos del año, sino que además algunas han optado por instalarse de manera definitiva o por temporadas.

Mapa 1. Ubicación Villa Cerro Castillo, región de Aysén



Fuente: <https://earth.google.com/web/>

El presente artículo toma como base la tesis “El patrimonio de la Villa Cerro Castillo de Aysén” (Gana, Mingo y Puga, 2018), presentada al Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de sociólogo, y recoge sus aprendizajes para analizar el patrimonio como la base de un desarrollo turístico sostenible e inclusivo en la Villa Cerro Castillo. Este trabajo profundiza en los aspectos turísticos del patrimonio de esta localidad e incorpora las valoraciones y expectativas de sus habitantes, migrantes y turistas. A continuación, se presentan antecedentes conceptuales y una breve descripción de la metodología utilizada durante la investigación, para dar paso a la presentación de resultados con las consecuentes conclusiones y recomendaciones.

MARCO TEÓRICO

La conservación del patrimonio de una localidad es relevante no solamente para la herencia cultural de esa pequeña comunidad, sino también para el resto de sus habitantes, en tanto implica un reconocimiento y una gestión recíproca (Krebs y Schmidt-Hebbel, 1999). Es por esto que la conceptualización de una idea de patrimonio resulta esencial para un modelo de desarrollo turístico sustentable, pues permite entender qué elementos son valorados por los individuos, por qué deben ser protegidos y cómo deben ser administrados.

A partir de este planteamiento se visualizan diferentes modos de definir lo que se entiende por patrimonio. Algunas de estas conceptualizaciones, uti-

lizadas desde su complementariedad, pueden ser provechosas para su comprensión. En primer lugar, es relevante el concepto de *fronteras simbólicas*, pues promueve la formación de identidades desde elementos territoriales que configuran relaciones histórico-culturales (Cuche, citado en Flores, 2007). La cultura local se conforma a partir de las relaciones sociales existentes en espacios delimitados y pequeños, en los que se establecen formas específicas de representación con códigos comunes (Featherston, citado en Flores, 2007). Estos códigos, generados por el sentimiento de pertenencia, fortalecen el sentido de identidad de una comunidad a través del vínculo que se forma entre una sociedad en particular con su territorio y con espacios donde confluyen significados cotidianos que permiten la construcción de esta pertenencia, que remite a memorias, tradiciones y costumbres del lugar (Saldívar Arellano, 2017). A partir de esto, se define al patrimonio cultural como el conjunto de bienes con alto contenido simbólico, materiales e inmateriales, que son identificados por una sociedad concreta como portadores de valores culturales propios de la comunidad y que, en consecuencia, deben ser la base a la hora de establecer el potencial de desarrollo del territorio en cuestión (Hernández, 2002; Flores, 2002).

La Patagonia se presenta como un espacio cosmopolita y un campo social transnacional, donde se reconocen intercambios que sobrepasan el mero concepto de nación y se visibiliza al otro como diferente dentro de sus propios límites culturales, pero también se percibe al lugar y su cultura como un

“conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos“ (Glick-Schiller y Levit, citado en Saldívar Arellano, 2017, p. 188). Se deja entrever, entonces, que esta imagen ideal de patrimonio como obra colectiva común contiene, internamente, elementos de diferenciación social que demuestran la categorización jerárquica de ciertas cualidades que serían valoradas y preservables, en oposición o desmedro de otras, que resultan excluidas (Troncoso y Almirón, 2005).

La construcción del patrimonio es una operación dinámica en la cual se reconstruye, selecciona e interpreta el pasado como continuidad social (Troncoso y Almirón, 2005). Los bienes culturales se retiran de la vida cotidiana y se reúnen a medida que se resignifican y recontextualizan constantemente en un espacio que está en constante desarrollo. Por lo anterior, se comprende que el turismo puede ser un fenómeno beneficioso para el patrimonio cultural o un grave problema para el mismo, lo cual dependerá de cómo se aborde la relación entre ambos (Velasco, 2009). La gestión turística del patrimonio cultural podría definirse como la aplicación de conocimientos específicos para la conversión de bienes de patrimonio cultural en recursos turísticos, como es el caso de las fiestas costumbristas que se realizan a lo largo de la región. Pero por encima de la aplicación de conocimientos técnico-científicos o de metodologías concretas, la gestión turística del patrimonio cultural, al igual que la gestión del patrimonio cultural en ge-

neral, tiene un objetivo primordial, que es preservar la herencia que los bienes representan. Una vez que esto se ha garantizado, es posible relacionar el bien con un contexto social y económico más amplio (Velasco, 2009).

Desde esta perspectiva emergen los principales conceptos en los cuales se sustenta la presente investigación, relevante para el desarrollo turístico de la Villa Cerro Castillo en la región de Aysén, área rural que se caracteriza por la actividad ganadera extensa, la realización de fiestas costumbristas y su principal atracción natural, el Cerro Castillo.

En primera instancia, es importante definir qué entenderemos por turismo comunitario. Esta modalidad turística involucra a la comunidad de manera directa a través de la participación activa y la gestión del desarrollo turístico local, de modo que los beneficios obtenidos repercuten directamente en la comunidad. La promoción del desarrollo integral de las comunidades, propia de este tipo de turismo, es una herramienta que permite reducir la pobreza (Richards y Hall, citado en Pastor et al., 2011), ya que además de dinamizar la economía local y brindar ventajas comparativas, permite un turismo respetuoso con el medio ambiente y responsable con el entorno social y cultural, hecho que se deriva del mayor control social que se daría en el manejo de los recursos y la comprensión de la naturaleza y la cultura como soportes de la actividad turística (Pastor et al., 2011). El objetivo de esta modalidad turística es preservar la identidad étnica, la valoración y la transmisión de patrimonio cultural en todas sus formas, reconociendo a las comunidades

como portadoras de valores, historia e identidad (Pastor et al., 2011).

Se puede afirmar que el patrimonio es uno de los elementos esenciales para el desarrollo sustentable de este tipo de turismo, definido generalmente como la selección del conjunto de bienes, elementos o manifestaciones materiales o inmateriales que constituyen el acervo común de las sociedades, es decir, todo lo que es considerado como digno de conservación de manera independiente de la utilidad que pueda presentar para una sociedad en particular (Arévalo, 2004; Troncoso & Almirón, 2005). Sobre esta base, el patrimonio constituye los rasgos identitarios al interior de un grupo, que se diferencia a través de estos de los exteriores (Arévalo, 2004). Desde una perspectiva más dinámica, el patrimonio sería el resultado de un proceso o negociación social de selección de elementos en función de propósitos y necesidades actuales, pero también de las necesidades patrimoniales de un futuro imaginado por estos actores contemporáneos, un legado en constante formulación que se interpreta y recrea a través del tiempo en un espacio de negociación entre grupos vinculados a través de relaciones de poder (Troncoso y Almirón, 2005).

El patrimonio, por lo tanto, es una selección basada en valoraciones específicas de cada grupo humano, valoraciones que orientan hacia una acción considerada como una forma de motivación social que crea expectativas, impulsa y orienta el accionar hacia determinados objetivos, metas y formas de vida (Erice et al., 2010). A partir de esto, es relevante la definición del patrimonio como

base para un desarrollo turístico sustentable que concuerde con la visión de una comunidad, donde el imaginario se proyecte hacia lo real en lo material y en las prácticas espaciales cotidianas (Vergara et al., 2014).

Con el fin de que en la definición del patrimonio se encuentren los distintos habitantes de Cerro Castillo, se distinguen tres grupos de personas relevantes para este estudio:

Turistas: “persona que hace turismo” (RAE, 2017). La Organización Mundial de Turismo (OMT) define turismo como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (1994).

Migrantes: teniendo en cuenta el contexto donde se realiza la investigación, se toma la decisión metodológica de distinguir el concepto de migración por estilo de vida del de migración por amenidad. El primero hace referencia a la movilidad residencial motivada por la búsqueda de mejores condiciones de vida, ya sea en el ámbito personal, natural, social y cultural, diferenciando los espacios de destino de los grandes centros urbanos de origen (Zunino e Hidalgo, 2012). Asociado a este concepto se encuentra la migración por amenidad, que refiere a migraciones permanentes de personas a ciertos lugares a partir de la percepción subjetiva de estos, ya sea asociada a la calidad ambiental existente o a la diferenciación cultural con respecto al lugar de origen, en búsqueda de una mejora en su calidad de vida,

más allá de mejores expectativas económicas (Zunino e Hidalgo, 2012). Por otro lado, dentro del grupo de migrantes también están aquellos de segunda vivienda. Este grupo ha sido definido como integrado por personas, generalmente agrupadas en familias, que se trasladan a ciertos espacios, habitualmente turísticos, y se vinculan a ellos por largos periodos de tiempo a través de relaciones inmobiliarias, lo que forma parte del fenómeno de turismo residencial (Domínguez, 2007).

Habitantes locales: se consideran habitantes locales a aquellos individuos que provienen de las familias de pioneros o de los primeros migrantes de la zona. Nacidos y educados en la villa o en las cercanías de Cerro Castillo, son portadores de tradiciones locales y de la cultura regional.

La pregunta guía de este estudio es la siguiente: ¿cuál es el significado que los habitantes, turistas y migrantes le atribuyen al patrimonio de la localidad Cerro Castillo en Aysén? Ella busca identificar el significado que estos tres grupos humanos le atribuyen al patrimonio de la villa, agrupado en torno a los componentes del patrimonio material e inmaterial a partir de las diferentes valoraciones y expectativas que estos definen con respecto al desarrollo turístico de la localidad. Los objetivos específicos que guían la investigación, para el caso de este artículo, son:

1. Describir la situación actual del turismo y las acciones que se están desarrollando en el ámbito turístico en la localidad, desde la comunidad y las instituciones públicas.

2. Comparar las valoraciones que los habitantes, migrantes y turistas le otorgan a la localidad de Cerro Castillo en Aysén, sus características y tradiciones.
3. Identificar las expectativas que los habitantes, migrantes y turistas tienen en relación a la vida o visita de la localidad de Cerro Castillo en Aysén.

Esto da cuenta de la relevancia de esta investigación, ya que visibiliza las relaciones particulares que se dan, en la Patagonia actual, entre turistas, locales y migrantes, y los elementos patrimoniales que están en constante negociación, mientras su conectividad y accesibilidad crece constantemente. Además, se considera que la conceptualización del patrimonio como construcción social es todavía reciente en el mundo de la investigación (Troncoso & Almirón, 2005), por lo cual este estudio podría llegar a ser una contribución a esta nueva forma de entender el patrimonio.

MÉTODO

La investigación se realizó a partir de una aproximación cualitativa-interpretativa, con el objetivo de conocer, a través del discurso de los mismos individuos, cuál es el patrimonio de la Villa Cerro Castillo de Aysén. El paradigma interpretativo comprende la realidad como un conjunto de significaciones atribuidas por los propios sujetos, donde el contexto, las subjetividades y los discursos de cada uno de ellos cobra vital importancia. En esta metodología, el

rol del investigador es el de interpretar el modo en que los actores sociales significan su realidad (Krause, 1995). La investigación siguió un modelo transversal, dado que se realiza en un momento puntual.

La selección de participantes se basó en un muestreo no probabilístico, con criterios de inclusión intencionados para asegurar una máxima variabilidad, a fin de asegurar la calidad de los datos. Los criterios incluyeron a habitantes locales nacidos o criados en la Villa Cerro Castillo; migrantes que hubiesen llegado a la villa desde el país o el extranjero hace más de un mes; turistas que estuvieran visitando la villa o que la hubiesen visitado recientemente. Los guiones temáticos que se utilizaron para obtener la información se diferenciaron según grupo y fueron creados a partir de una revisión sistemática de literatura ligada al tema tratado y conversaciones con la contraparte correspondiente. Las entrevistas realizadas de manera individual y grupal fueron de carácter semiestructurado, pues se buscó la flexibilidad en el diálogo para profundizar en temas que podrían enriquecer la información recolectada.

Algunos de los participantes fueron recomendados desde la Fundación Patagonia de Aysén, sin embargo, para no caer en el sesgo de autoselección, fueron los mismos residentes de la villa u otros que no tuviesen relación con la institución quienes nos pusieron en contacto bajo la modalidad de bola de nieve. Esto permitió la llegada a casos heterogéneos respecto a su experiencia en la villa. Se entrevistó a un total de 28 personas, que se dividen en once ha-

bitantes locales, diez migrantes y siete turistas. Además de esto, se realizó un grupo focal con alumnos de cuarto medio del Liceo Técnico de Cerro Castillo (carrera de Técnico en Turismo), pues fue considerado relevante incorporar a los jóvenes como actores primordiales para el desarrollo sustentable de la villa y principales responsables del resguardo de su patrimonio.

Los datos obtenidos fueron analizados por medio de la teoría fundamentada y se codificó la información en tres etapas: codificación abierta, axial y selectiva. Esto permitió maximizar las posibilidades de descubrir algo nuevo y lograr la saturación teórica. Esta aproximación posibilita la obtención de categorías emergentes y la realización de un análisis descriptivo y luego relacional, donde las categorías son extraídas de manera inductiva a partir de los datos, lo cual tiene como resultado un conjunto de conceptos interrelacionados entre sí que dan cuenta del fenómeno a un nivel descriptivo, a través de un relato, y analítico-relacional mediante la construcción de un árbol de códigos y subcódigos como base (Strauss & Corbin, 2002).

Con el fin de proteger la identidad de los participantes, se aseguró el anonimato a través de la firma de un consentimiento informado que transparenta los objetivos y el carácter voluntario de la participación en la investigación. En el caso particular del trato con menores de edad, es el profesor a cargo del curso quien firma el consentimiento informado, previa autorización del director de la institución. Los nombres no son relevantes para el análisis de resultados que se presentará a continuación, pues el

objetivo es representar a los individuos solamente en términos de sexo y edad.

RESULTADOS

1. Turismo en la Villa Cerro Castillo de Aysén

El turismo como actividad es hoy una de las industrias de más rápido crecimiento, contribuye a la economía global y nacional, y potencia el progreso socioeconómico a través de la creación de empleos, empresas, emprendimientos e infraestructura, entre otros (Sernatur, 2014). Teniendo esto en cuenta, son varias las estrategias que se han ideado a nivel nacional y regional para incluir al turismo local en este fenómeno global. En particular, el Gobierno Regional de Aysén se ha centrado en la Carretera Austral como eje de conectividad y los atractivos asociados a esta, lo que la convierte en el motor del desarrollo turístico de la región. En los últimos años se han realizado instancias participativas y sectoriales que han contemplado diagnósticos, diálogos e intervenciones, entre otras estrategias, que han dejado una serie de enseñanzas y líneas de acción que deben ser desarrolladas en este ámbito (Hormazábal, 2006).

En primer lugar, la Villa Cerro Castillo, como localidad de la región de Aysén, formó parte del Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas (Pedze) del país. Este reconoce la existencia de brechas condicionantes para el desarrollo territorial y, por lo tanto, explicita la necesidad de políticas especiales de in-

tervención que apunten a la reducción de las inequidades existentes al interior de las zonas extremas designadas, así como también entre estas y el resto del territorio nacional. Se distinguieron cinco ejes articuladores del plan para la región de Aysén asociados a conectividad, asentamientos humanos, derechos sociales, desarrollo productivo y patrimonio ambiental y cultural (Gore, 2013), donde el fenómeno turístico fue abordado desde el desarrollo productivo como motor de desarrollo de la región y también desde el resguardo y promoción del patrimonio ambiental y cultural de esta. El accionar de este plan se centró en una serie de transferencias monetarias e intervenciones de tipo social para los emprendedores del rubro turístico (Fondos Semilla, Serco-tec, Emprende, entre otros), y además contribuyó a través del mejoramiento de infraestructura de tipo vial y turística (continuación del tramo pavimentado, construcción de miradores, señaléticas viales, etc.) (Hormazábal, 2006). En este sentido, la villa adquiere importancia como localidad que forma parte de la Carretera Austral, pero también en relación al Parque Nacional Cerro Castillo como atractivo turístico, una mirada que no necesariamente ha considerado a las personas que habitan el sector. Las intervenciones de las instituciones públicas se han caracterizado por una lógica sectorial que impide ver los contextos territoriales, por lo que las demandas poblacionales no han sido correctamente canalizadas y, por lo tanto, no han tenido los resultados esperados (Hormazábal, 2006).

Desde el año 2000 se reconoce a la Villa Cerro Castillo como parte de la Zona de

Interés Turístico (Zoit) del Lago General Carrera o Chelenko (Sernatur, 2017). Esta denominación llegó cuando la actividad turística ya estaba en ascendente desarrollo a través de un proceso ampliamente participativo en los ámbitos público (seremías, gobierno provincial, gobierno regional, municipalidades y otras instituciones públicas) y privado (representado por los gremios de turismo de las distintas localidades). En estas instancias se pudo dialogar sobre la dirección que estaba tomando el turismo en esta zona, qué acciones se debían llevar a cabo en los distintos territorios y quiénes se encargarían de monitorear el proceso. En estas conversaciones, la localidad de Cerro Castillo destacaba por la cercanía a Puerto Ibáñez y su oferta en cuanto a rutas de *trekking*, cabalgatas, escalada y pesca con mosca. Si bien esta designación contempla un Plan Integral de Calidad Turística que divide al territorio en subsistemas de acuerdo a su vocación turística, además de contemplar ocho programas para el desarrollo de la actividad turística, el Plan no ha logrado congregarse, hasta ahora, el financiamiento necesario para su desarrollo (Hormazábal, 2006). Aún más, la estrategia de gobernanza local, a través de la mesa público-privada, no se ha logrado formalizar como tal, por lo que no se han materializado los resultados esperados (Hormazábal, 2006).

Otra de las iniciativas implementadas en la zona es el proyecto Acca de la Patagonia (Área de Conservación de Cultura y Ambiente), que buscó crear un instrumento para gestionar la protección de los recursos y el patrimonio ambiental en acuerdo con los actores del territorio. A través de un proceso de participación

ciudadana, en conjunto con organismos públicos e internacionales (Ffem, Conama, Gore, municipios y gobernaciones), se pretendía la creación de esta área de conservación y la ejecución de proyectos que respondieran a los objetivos planteados. Si bien no se pudieron concretar ambos objetivos en su totalidad, se destaca el trabajo en conjunto que se tradujo en un documento donde se formalizan los compromisos de las diferentes partes durante 10 años, con un programa de inversión a tres años. Dentro de este destacan los planes de capacitación a servicios turísticos, un programa de señaléticas, la incorporación del turismo en la planificación municipal y el diseño de una estrategia comunicacional, entre otros (Hormazábal, 2006).

El turismo que se visibiliza hoy en la villa es una actividad estacional debido a la época de llegada de turistas, en la que destacan los servicios de alimentación, alojamiento y tour operadores. Son diversas las carencias de este sector, entre las que se incluyen deficiente capacitación turística en los servicios (idiomas, seguimiento de reglamentaciones, etc.) y precaria infraestructura turística (terminal de buses y baños públicos), falencias en el servicio de información turística existente y escasez de servicios para turismo de lujo, según declaraciones de los y las entrevistadas. Se afirma, además, que la región en general se ha visto afectada por un boom turístico que ha influido de manera positiva en la apertura de la localidad y del habitante local al turismo (un proceso que habla tanto del cambio de mentalidad como de la creación de emprendimientos relacionados), y en el crecimiento econó-

mico de la villa, donde el turismo se ha vuelto una entrada de ingresos de gran importancia para la economía familiar. Por otra parte, el encuentro entre turistas y locales provee de retroalimentación e ideas innovadoras al turismo local, y además motiva la revalorización de la belleza escénica del entorno natural, que se había vuelto cotidiana. Esto permite comprender que el sistema turístico en Cerro Castillo no se basa solamente en un intercambio económico, sino también en un intercambio de significados culturales que resultan en la conformación de nuevos paisajes sociales y apreciaciones del lugar (Rodríguez et al., 2016).

Sin embargo, también se percibe negativamente la llegada de la cultura de la globalización, que impactaría principalmente a los jóvenes, quienes se debatirían entre lo que les ofrece el mundo cosmopolita y lo propio de la vida familiar de campo y sus tradiciones. Además, esta produce una incompatibilidad entre el tiempo del turista y el tiempo del local, que provoca que este último deba adaptarse a la rutina del turista, lo que deriva en una pérdida de costumbres locales en lo que refiere a la vida en comunidad y en familia. Ambas situaciones se relacionan, a su vez, con la visión de una comunidad que se encuentra cada vez más fragmentada socialmente y donde la unidad que antes se veía en la gente local ha evolucionado a un individualismo enfocado en lo personal, que ha acrecentado el sentimiento de desconfianza y ha roto las redes existentes a medida que va llegando más gente (Mujer, 27 años, residente de la Villa Cerro Castillo). De este modo, se visibiliza la constante negociación de significa-

dos y límites culturales en la relación que se configura entre los residentes locales tradicionales y quienes llegan a visitar, la que implica cambios en sus hábitos y rutinas, y que a largo plazo afecta a la cohesión social (Saldívar Arellano, 2017). Respecto a los servicios turísticos en específico, la creciente llegada de turistas ha provocado un colapso de servicios durante la temporada, además de un aumento constante de los precios de los productos básicos y la llegada de servicios extralocales que le quitan oportunidades al proveedor local.

Para hacerse cargo de esta situación, actualmente la Universidad Austral desarrolla una iniciativa apoyada por Corfo llamada “Diseño y puesta en marcha del Sistema de Gestión Turística de las Áreas Silvestres Protegidas en la región de Aysén”, que tiene por objetivo crear un sistema para mejorar el servicio turístico y las condiciones de coordinación y gestión en estas áreas, con el fin de propiciar un turismo sustentable que dinamice la economía local y que a la vez conserve el patrimonio natural. Para esto se constituyó el Consejo Local de Turismo de la Villa Cerro Castillo y el Parque Nacional Cerro Castillo, que logró crear un área piloto en el parque. Este consejo es un espacio que articula la gestión turística del parque con la comunidad aledaña, a fin de generar un trabajo colaborativo con sentido de pertenencia y que considere las oportunidades de desarrollo turístico de la zona (Universidad Austral Campus Patagonia, 2019).

A partir de estas acciones surgen aprendizajes a tener en cuenta para futuras iniciativas. Si bien muchas de ellas han

sido experiencias exitosas en algunos ámbitos, el aparato público ha generado una sobreintervención en los distintos territorios, lo que ha promovido una cultura asistencialista que ha terminado por obstaculizar los procesos de desarrollo. Esto se hace visible, por ejemplo, en el caso de organizaciones que se forman instrumentalmente para poder acceder a fondos, pero sin acordar un objetivo común, lo que las hace inestables y proclives a no conseguir los objetivos planteados en la intervención (Hormazábal, 2006). Es por situaciones como estas que el primer paso debe ser tener a la vista el patrimonio de la Villa Cerro Castillo, a fin de planificar acciones que tengan relación con esta visión común a partir de las valoraciones y expectativas de quienes habitan la zona, es decir, debería ser un proceso donde los pobladores y residentes de la villa tomen un papel protagónico en el desarrollo turístico inclusivo y sustentable de esta.

2. Comparar las valoraciones que los habitantes, migrantes y turistas le otorgan a la localidad de Cerro Castillo en Aysén, sus características y tradiciones

A continuación, se presentan los elementos que los participantes valoran de la localidad de Cerro Castillo. En primera instancia, se da a conocer la manera en que estos participantes entienden el concepto “buena calidad de vida” y después se profundiza en los aspectos que se identifican dentro de la villa. Principalmente, aparece la importancia de vivir tranquilos, referida a la capacidad

del individuo de disponer de tiempo para realizar actividades distintas al trabajo, tener la libertad para compartir con amigos, realizar actividades de ocio y relajación. Por otro lado, se percibe como fundamental vivir cerca de la naturaleza, una cuestión fundamental tanto en el ámbito laboral (trabajos al aire libre) como en el recreativo (deportes y actividades que incorporen el medio ambiente). Además de esto, se valoran aspectos como la seguridad, que se materializa en la posibilidad de dejar los autos y casas abiertas sin tener la preocupación de que alguien vaya a entrar. La educación, la vida en familia, la conectividad y tener ingresos estables aparecen también como factores relevantes.

Los discursos de los participantes manifiestan un acuerdo común sobre la percepción de que en la Villa es posible encontrar una buena calidad de vida, a pesar de que reconocen ciertas carencias que deberían superarse con un mayor grado de desarrollo. En particular, los tres grupos (turistas, migrantes y habitantes locales) comparten la idea de que es posible encontrar tranquilidad y disponer del espacio y tiempo para realizar distintas actividades (ir al campo, visitar a los vecinos, realizar actividades de recreación, etc.). Emerge un discurso de valoración de la vida simple, de disfrute de las cosas sencillas del día a día. Por otra parte, hay una valoración común del paisaje natural que provee la villa, que se valora desde la perspectiva escénica y por la amplia gama de actividades que este ofrece. Dentro de estas destacan el *trekking*, la escalada en roca y la pesca con mosca. El elemento central del paisaje es el Cerro Castillo, sello

local y representante del pueblo, como afirma un turista (hombre, 26 años): “el cerro es una especie de templo que se levanta escoltando la villa”. No obstante, los locales manifiestan que, con el tiempo, el Cerro Castillo se vuelve cotidiano.

La tradición y cultura gaucha de la zona se puede percibir cotidianamente, pues algunos habitantes, por ejemplo, se movilizan a caballo para la realización de sus actividades diarias y usan vestimentas tradicionales como la boina y las bombachas. A fin de rescatar estas manifestaciones culturales se comenzaron a organizar fiestas costumbristas por iniciativa de la comunidad en conjunto con la Municipalidad de Puerto Ibáñez. En estas instancias se realizan actividades demostrativas tales como la esquila, capadas a diente, los pilcheros, desfiles, etc. Además, en ellas, los locales usan sus vestimentas tradicionales, “es un día donde todos se visten bonito, se ponen su boina, su cuchillo a la cintura” (mujer, 42 años, residente de la Villa Cerro Castillo). Por último, en estas actividades también se exhibe la gastronomía tradicional, donde destaca el asado de cordero al palo. En general, estas actividades se valoran de manera positiva, tanto por la capacidad de mantener tradiciones como por la atracción turística que representan, lo que viene aparejado de la capacidad de generar ingresos. Estas acciones demuestran que el turismo es un fenómeno beneficioso para la mantención del patrimonio local (Velasco, 2009) y, en línea con el Plan de Acción de la Zoit Chelenko (Sernatur, 2017), estos eventos deberían consolidarse para preservar su autenticidad y coordinar su realización a lo largo del año, lo que evitaría que se

masifiquen y se desnaturalicen sus raíces culturales.

Si bien los participantes coinciden en las valoraciones expuestas hasta ahora, existen ciertos aspectos que no son compartidos en la evaluación general de la Villa Cerro Castillo. En cuanto a las percepciones particulares de los locales, se lee como positiva la posibilidad de acceso a servicios básicos que tiene la villa, como afirma un residente (hombre, 43 años), quien señala que “la villa es un lugar que ofrece lugares donde puedes ir [a] comprar cosas, tienes un colegio, un centro médico”. Además, las personas relevan el potencial turístico de la localidad, que representa amplias posibilidades de desarrollo para el residente.

La seguridad y la libertad para realizar actividades diarias, sin miedo a ser perjudicados por un tercero, surge como fundamental en el diario vivir y emerge como consecuencia de la confianza que se tienen los vecinos, quienes habitan en un lugar donde todos se conocen y respetan. Por esto, el migrante y el turista son percibidos con desconfianza. Si bien existen ciertas valoraciones positivas de este grupo (relacionadas con su capacidad de trabajo y otros aportes al desarrollo de la villa), predominan los discursos donde se reconocen percepciones negativas, que refieren principalmente a las diferencias culturales de quienes vienen de afuera o a posibles actitudes que no manifestarían respeto por lo local y tradicional.

“Lamentablemente, no han sido muy respetuosos tanto con la cultura como que han llegado criticando el dicho de “el que se apura en la Patagonia, pierde el tiempo”; dicen que es por vago, por flojos, no se refiere a que no hagas nada hoy día, sino que a lo que hagas tiene que ser con cuidado, para no hacerlo dos veces, ese es el tema del dicho, tómatelo con calma y te va a quedar bien hecho en vez de hacerlo todo apurado”

(hombre, 43 años, residente de la Villa Cerro Castillo).

Sobre las valoraciones particulares de los migrantes, aparecen aspectos como la felicidad que se da en actividades como el asado al palo, compartir con gente y vivir tranquilamente, y la libertad de poder vivir sin estructuras impuestas externamente y de manera simple. Como afirma Rodríguez y otros investigadores (2016), la migración por amenidad es una práctica que reacciona al enfoque de eficiencia económica que propone el sistema capitalista y que hace que se valoren los aspectos de la villa descritos anteriormente.

La riqueza arqueológica de la localidad y la ubicación estratégica se presentan también como elementos fundamentales de la villa. Esta última se refiere a la característica particular del lugar, que desde ahí permite acceder tanto a la naturaleza como a la ciudad con poco esfuerzo. A partir de esto, la localidad se concibe como “un lugar conectado y desconectado a la vez” (mujer, 32 años, residente de la Villa Cerro Castillo). Un residente (hombre, 33 años) resume lo anterior al afirmar que en Cerro Castillo

lo tiene todo, “montaña, ríos, campo y a una hora con buena carretera [de] Co-yhaique”.

Por otra parte, los turistas valoran las actividades que se pueden realizar en la villa, como el *trekking*, montañismo y escalada. Y, desde la perspectiva de la comunidad, le dan importancia a la calidez de la gente, al hecho de que todos se saludan, conversan, invitan a tomar mate, entre otros. Por todas estas razones, la villa se valora como un escape de la superficialidad de las relaciones en la ciudad (Rodríguez et al., 2016).

Es importante recalcar los elementos que tanto locales como migrantes y turistas reconocen y valoran negativamente en la vida en grandes ciudades. Los centros urbanos se perciben como lugares contaminados y sucios, donde la convivencia de una gran cantidad de personas impacta de manera negativa en las rutinas y hábitos de los individuos particulares (por ejemplo, tráfico vehicular, trámites burocráticos, etc.). Además, describen la ciudad como un lugar donde se vive con una constante inseguridad e intranquilidad, lo que se relaciona con la falta de sentido comunitario y escasez de redes conocidas, individualismo y estructuras temporales impuestas externamente por los parámetros sociales que se consideran apropiados. “En la villa se vive, no se sobrevive” (mujer, 32 años, residente de la Villa Cerro Castillo).

3. Identificar las expectativas que los habitantes, migrantes y turistas tienen de su vida o visita en la localidad de Cerro Castillo en Aysén

Las expectativas de los grupos sobre el futuro de la villa tienen que ver principalmente con el desarrollo del turismo local y, a partir de este, la mantención de su patrimonio. Como ya se mencionó, se reconoce el gran potencial turístico de la localidad, que se percibe como un destino inexplorado con naturaleza salvaje. Para un residente (hombre, 33 años), se trata de “un destino desarrollable, un diamante en bruto”. Se busca un desarrollo turístico que proteja la cultura local, donde el desarrollo se planifique de la mano de los mismos locales y no de un tercero que venga de afuera. Con miras a esto es que desde 2013 se desarrolla en el liceo de la villa la carrera de Técnico en Turismo, con el fin de preparar a los jóvenes para que sean ellos los guías que en un futuro exhiban la villa y su cultura.

Los relatos permiten identificar cinco elementos necesarios para lograr un desarrollo turístico sostenible e inclusivo en la localidad. En primer lugar, el empoderamiento de los locales con respecto al potencial turístico de la villa resulta imprescindible. Para esto, se requiere que se autoreconozcan como agentes clave que se motiven para hacerse cargo del desarrollo local. “La gente debe darse cuenta de lo que tiene en sus manos” (hombre, 43 años, residente de la Villa Cerro Castillo). Sumado a lo anterior, los habitantes deben desarrollar instancias donde puedan dar a conocer sus tradi-

ciones y aprender a comercializar sus servicios turísticos como una opción atractiva, asegurándose de la calidad de lo que se ofrece. De este modo, se generaría una marca turística, pero también se promoverían las identidades colectivas propias del lugar a través del sentimiento de orgullo de lo que se ofrece (Fernández-Cavia, 2011). Por último, y como consecuencia de lo anterior, los participantes mencionan la importancia de establecer una reglamentación que proteja los intereses de los locales, “crear una reglamentación respecto a cómo deben manejar el turismo, en qué dirección debiera ir y quiénes deben ser los reales protagonistas de este” (hombre, 26 años, turista). Una correcta gestión turística es esencial si lo que se pretende es que el turismo impacte de manera positiva en la preservación del patrimonio cultural (Velasco, 2009).

En segundo lugar, surge la necesidad de la producción local de bienes y servicios. Esto no solo promovería el crecimiento económico de la villa, sino que además se presentaría como una alternativa ante el fenómeno de escasez, precios excesivos y viajes dictaminados por la necesidad hacia los centros urbanos. Para esto es necesario generar un encadenamiento productivo que apunte a dinamizar la economía local, involucrando al sector agrícola y ganadero en coordinación con la demanda del sector turístico (Hormazábal, 2006).

En tercer lugar, se busca promover la asociatividad local, lo que apunta a percibir a los proveedores turísticos como miembros de una sociedad más que como una competencia. La asociatividad se percibe como causa y consecuen-

cia de la construcción de comunidad, pues permite compartir información y, en algunos casos, que una persona recomiende los servicios turísticos de otros locales dependiendo de las necesidades e intereses de los turistas (mujer, 42 años, residente Villa Cerro Castillo). De esta manera, se vuelve necesaria una red de apoyo entre los locales que, basada en el conocimiento común de los servicios que ofrece la villa, sea capaz de generar una red de ayuda, lo que a su vez ofrecerá un ambiente grato para el turista. Una valoración positiva de parte de este contribuiría a un alza de la demanda de servicios turísticos, lo que mejoraría la economía del pueblo en general y los ingresos percibidos individualmente.

“El concepto de ser socios, no que negociemos, sino que informar que tú vendes pan, que tú haces la mermelada, entregando información de que el otro camping está abierto, está habilitado, y si puedo saber los precios, mucho mejor”

(hombre, 43 años, residente de la Villa Cerro Castillo).

En cuarto lugar, se vuelve especialmente relevante la calidad de los servicios ofrecidos. Existe en los discursos la idea de que es necesario mejorar la calidad de los servicios turísticos locales y así prevenir que sea un agente externo a la comunidad quien tome este rol. En primera instancia, es fundamental que los servicios básicos para los turistas estén cubiertos en la villa y que, además, sean de buena calidad, a fin de justificar el precio que se demanda al turista y evitar la percepción de una incongruencia

en la relación precio-calidad del servicio o producto que se ofrece. Como afirma uno de sus habitantes:

“Hay que tener en cuenta que a veces hay precios elevados y la calidad de los servicios no es tan buena, creo que el problema de fondo, a lo mejor, es que en la parte sur de la Patagonia tenemos que mejorar en la capacitación a las personas que entregan los servicios y así podemos subirle un poquito los precios y nadie nos va a cuestionar”

(hombre, 28 años, residente de la Villa Cerro Castillo).

En quinto lugar, los participantes reconocen que es fundamental un trato de respeto entre quienes residen en la villa y quienes la visitan; la relación entre los tres grupos debe ser de armonía. Es importante que quienes vienen de afuera reconozcan las particularidades de las formas de vida local, sus costumbres, actividades y actitudes, para que puedan actuar de manera respetuosa sin invadir o pasar a llevar a quienes los reciben en su casa.

Para lograr que el desarrollo de la localidad sea sostenible en el tiempo, que respete y proteja la naturaleza y que responda a una planificación común y no a intereses económicos individuales, se reconocen distintos actores clave que deben actuar de manera responsable con miras a beneficiar a la villa en su conjunto. Primero, se manifiesta la necesidad de que el gobierno local desarrolle un marco de acción, de manera que los habitantes de la villa sean capaces de planificar actividades ligadas al turismo y que, al mismo tiempo, se

fiscalicen y monitoreen las actividades que no se encuentren en la línea de lo que la villa desea promover. Un ejemplo de esto es el modelo de gobernanza local público-privada que se propone en el Plan de Acción de la Zoit Chelenko (Sernatur, 2017). Se reconoce también que el cambio y el empoderamiento deben provenir de las mismas personas, quienes, considerando a la comunidad y su patrimonio, formulan e implementan sus proyectos turísticos y culturales. Es fundamental que la educación en el liceo les entregue a los jóvenes conocimientos enfocados en la cultura y la naturaleza de la villa, que les muestre las potencialidades del territorio, con el objetivo de hacer surgir un sentimiento de arraigo en la juventud, para que vean la posibilidad de desarrollar sus proyectos individuales y comunitarios en la localidad.

“El liceo tiene acá un rol fundamental, tiene que haber un cambio profundo en su malla curricular, está totalmente descontextualizado, ellos tienen un rol fundamental en encantar a los jóvenes y enseñarles a un turismo sustentable y comunitario. Se tiene que promover un cuidado a la naturaleza y participación por parte del liceo. Hace falta que el liceo se contextualice, que haga cursos en base a la cultura y las necesidades de la villa”

(mujer, 32 años, residente de la Villa Cerro Castillo).

Por último, es interesante dar a conocer ideas que surgen desde la visión de los participantes como facilitadores y/o promotores del desarrollo sustentable del turismo local. Estas tienen que ver con la inclusión de los campesinos en

el turismo a partir de la apertura de este espacio para mostrar actividades tradicionales que se realizan en la comuna, lo que les permitiría ser partícipes del desarrollo local. Por otro lado, también se propone dar espacio a los emprendimientos locales e involucrar a los habitantes en el desarrollo del turismo, para que no vengan externos y desarrollen líneas incompatibles con los valores de la villa.

"Que los que estén, implementen mejores cosas, que la misma gente que está logre mejorar sus servicios, pero gente de acá, ojalá no llegue un rico de afuera e instale un lodge matando todos los servicios pequeños que han luchado desde siempre", dice una mujer de 38 años, residente de Villa Cerro Castillo. En línea con lo anterior, surge la idea de generar un centro de artesanías donde todo aquel que tenga algún emprendimiento o producción de algún bien (mermelada, miel, productos en cuero, etc.) tenga un espacio físico para ir a vender.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta investigación permite observar cómo la Patagonia, y en específico la Villa Cerro Castillo en Aysén, se presenta como un territorio vívido, es decir, un espacio donde confluyen los significados cotidianos de los distintos grupos que conviven en un espacio, lo que permite la construcción de sentidos de pertenencia o exclusión que remiten a las memorias o tradiciones culturales propias del lugar (Saldívar Arellano, 2017; Ther, 2012).

En la villa se aprecia un reconocimiento generalizado del potencial turístico de la localidad, pues tanto quienes viven en ella como quienes la visitan lo perciben como un fenómeno en aumento que promueve el desarrollo del lugar, percepción ligada a las iniciativas que se han gestionado desde el ámbito público y privado. Algunos aspectos que son evaluados como positivos son el crecimiento económico local, el aprendizaje cultural y el aumento de la conectividad. Sin embargo, persiste cierta desconfianza de las consecuencias que esta pueda provocar en la villa. Existe un alto desconocimiento sobre la manera óptima de manejo de un crecimiento de este tipo, y si bien la mayoría de los habitantes de la localidad tienen planes y proyectos enfocados en el servicio turístico, muchos no saben cuál es la forma sustentable de llevarlos a cabo. Aún más, no existe un plan de desarrollo común de la villa que permita seguir pautas ideales, lo que abre las puertas a externos para que tomen la oportunidad y desarrollen formas turísticas no acordes a las tradiciones, valoraciones ni expectativas de la localidad. Esto podría llevar a una paulatina pérdida de la cultura característica de la villa. Para generar este plan o proyección común, surge como esencial la promoción del sentido de comunidad y cohesión social entre los habitantes del lugar. Para esto, es fundamental que los individuos sean capaces de funcionar como grupo, reconociendo las necesidades comunes y trabajando a partir de ellas en pos del logro de un objetivo común: que sean ellos los promotores y fiscalizadores de su propio desarrollo.

En línea con lo anterior, el concepto de asociatividad local pretende lograr una red de conocimiento generalizado en la Villa Cerro Castillo, donde todos tengan claridad respecto a los servicios que se ofrecen, sus características y funcionamiento, lo que le permitiría al visitante elegir a partir de un conocimiento real. Se busca que quien tiene, por ejemplo, sus cabañas completas, no aloje a alguien en una carpa en el jardín, sino que derive al turista a otra opción de alojamiento. Al generar una comunidad capaz de ofrecer una alternativa de turismo local que se posicione por sobre de la oferta de turismo extralocal, lo que se estaría protegiendo es el patrimonio de la Villa Cerro Castillo. Según lo recopilado en la presente investigación, este patrimonio refiere a

“Un fuerte interés por desarrollar el turismo local, donde se cuiden y valoren las características de la localidad que responden por un lado a la cultura y tradiciones, el hacer lento y tranquilo, el acogimiento característico de sus locales y la vida simple, y por otro lado, al entorno natural específico del lugar, representado por el Cerro Castillo y sus alrededores”

(Hernández, 2002).

Todos estos son elementos portadores de los valores propios de la comunidad, lo que los hace merecedores de una protección especial en términos de conservación y uso potencial.

A partir de lo elaborado en este artículo, se proponen las siguientes recomendaciones para que todos los actores identificados como clave en la localidad (go-

bierno local, jóvenes, migrantes, locales y fundaciones) sean capaces de trabajar en conjunto y así avanzar en la solución de las problemáticas reconocidas. Las propuestas se encuentran en la línea de las acciones promotoras del desarrollo turístico del territorio Chelenko como Zoit, cuyo objetivo para el año 2030 es la creación de un destino turístico responsable e inclusivo en términos comunitarios, que respete y proteja los recursos naturales y culturales, y que asegure el desarrollo sustentable de la comunidad local (Sernatur, 2017).

En primera instancia, surge la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de información turística. Es indispensable desarrollar un centro de servicio turístico que cuente con la información necesaria para atender de mejor manera al turista. Para cumplir con esta meta debería entregarse material visual, mapas de la localidad y sus alrededores, itinerarios de las posibles actividades, horarios de movilización, fotos representativas y un postulado con las costumbres de la villa. Además, las oficinas deberían contar con la ayuda de un operador capacitado que conozca cuáles son los servicios que ofrece la villa y cuáles son sus características. Esto último debe ir acompañado por una estrategia comunicacional que difunda la autenticidad del territorio e incentive al turista a respetar y disfrutar de lo que ofrece la villa (ritmos, distancias, aislamiento) (Sernatur, 2017).

Deberán también mejorarse las instalaciones de servicios básicos de la localidad y comprometer la construcción de baños públicos, paraderos de buses, instalación de cajero automático

y una estación de servicios, además de la mejora de los accesos a los atractivos turísticos. La implementación de estos servicios sería un aporte para el turismo, pero también facilitaría la vida de la comunidad residente en general, ya que son estos servicios los que ponen en valor los recursos naturales y culturales en áreas prioritarias para el turismo a nivel regional y nacional (Gore Aysén, 2013).

Además, se sugiere que se realice una serie de capacitaciones a todos los residentes de la localidad que sean proveedores de servicios turísticos o que quieran emprender en esta área. Las capacitaciones deberán tratar temas como la identificación de oportunidades, las formas en que un servicio debe ser ofrecido, su calidad y precio, la manera en que funcionan los mercados turísticos, qué actitudes pueden promover su desarrollo y cuáles frenarlo, cómo debe ser la relación con los turistas y con los otros proveedores de servicios, qué tipo de actividades se deben promover y cuáles dañan el entorno natural característico de la villa, etc. Esta propuesta refuerza lo planteado por el plan de acción de la Zoit Chelenko (Sernatur, 2017) y fomenta el desarrollo de programas de capacitación y certificación de competencias laborales para puestos de trabajo relacionados con el desarrollo turístico, a la vez que acompaña y promueve la formalización de iniciativas turísticas que sean auténticas, es decir, que resguarden el patrimonio local, e innovadoras, para que de este modo sean los actores locales los protagonistas del desarrollo económico local (Hormazábal, 2006).

Por otro lado, es importante que se regule la línea de construcción de los servicios de alojamiento y alimentación, y que se reglamente el acceso a espacios turísticos y la extensión de las construcciones, para no interferir con las rutinas de los demás habitantes y para generar un ambiente visual de orden y unión local, donde la imagen de la villa represente un pueblo que comparte una cultura común. Con lo anterior se pretende generar una planificación común de las actividades turísticas a fin de acordar un camino de desarrollo cuyo horizonte sea la protección de la cultura y tradiciones locales. Como propone el Gobierno Regional de Aysén (2013) en su Plan Regional de Ordenamiento Territorial, se vuelve prioritaria una transferencia para elaborar un plan de gestión que regularice la actividad turística en esta zona, que forma parte del Zoit del Lago General Carrera, y que permita la acción coordinada entre organismos públicos y privados para crear una política con pertinencia territorial que no sobreintervenga la zona (Hormazábal, 2006).

Del éxito de estas recomendaciones y la protección del patrimonio de la localidad dependen la efectiva promoción del sentimiento de comunidad entre los habitantes de la villa, quienes deben reconocerse, más que como habitantes con proyectos individuales, como un grupo asociado por una meta en común, el resguardo y promoción de los elementos naturales y culturales que forman parte de su patrimonio. Los conceptos de asociatividad, organización y empoderamiento deben ser reflexionados e internalizados a través de mecanismos que contribuyan a mantener instancias de comunicación donde

los proveedores de servicios turísticos puedan compartir sus conocimientos, incertidumbres y logros, lo que permitiría crear las condiciones ideales para el desarrollo de iniciativas colaborativas e inclusivas (Sernatur, 2017). Los habitantes de la villa deben presentarse como un bloque seguro y estable, con la capacidad de mostrar con orgullo lo que es suyo, de manera tal que sean capaces de proteger y mantener sus tradiciones y cultura. Este último aspecto, apoyar la promoción de proyectos viables e integrados que surjan desde una visión estratégica de desarrollo local, debería plantearse como lineamiento central para todos los proyectos que busquen desarrollar tanto la Fundación Superación de la Pobreza en general como la Villa Cerro Castillo en particular.

BIBLIOGRAFÍA

- **Arévalo, J. M. (2004).** La tradición, el patrimonio y la identidad. *Revista de Estudios Extremeños*, 60(3), 925-956.
- **Baidal, I. & Antoni, J. (2000).** Turismo y espacios rurales: conceptos, filosofía y realidades. *Investigaciones Geográficas (Esp)*, (23).
- **Canoves, G., Villarino, M. & Herrera, L. (2006).** Public policies, rural tourism and sustainability: a difficult balance. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (41), 199-217.
- **Domínguez, M. D. M. R. (2007).** El turismo de segunda residencia: análisis comparado de las provincias de Pontevedra y La Coruña. En: *Empresa global y mercados locales: XXI Congreso Anual Aedem*, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 6, 7 y 8 de junio de 2007 (p. 25). Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, Esic.
- **Fernández Cavia, J. (2011).** Ciudades, regiones y países como marcas: Luces y sombras del place branding. *Manual de Comunicación Turística*, 103-113.
- **Flores, M. (2007).** La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. *Revista Opera*, (7), 35-54.
- **Fundación Patagonia de Aysén (S/F)** Recuperado de <http://www.fundacionpatagoniadeaysen.cl/patagonia/proyecto/proyecto-cerro-castillo/2016-11-02/131620.html>
- **Gnoth, J. (2007).** The structure of destination brands: leveraging values. *Tourism Analysis*, 12(5-6), 345-358.
- **Gobierno Regional de Aysén (2013).** Actualización del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Aysén.
- **Hernández, F. (2002).** *El patrimonio cultural. La memoria recuperada*. Gijón: Trea.
- **Hormazábal Lama, R. (2006).** Aprendizajes y aportes para una estrategia de desarrollo económico territorial, territorio cuenca Lago General Carrera. Desarrollo Económico Local-GTZ. Programa de Descentralización y Desarrollo Regional y Local "Región Activa".
- **Krause, M. (1995).** La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. *Revista Temas de Educación*, 7(7), 19-40.
- **López-Guzmán, T., Sánchez-Cañizares, S. & Pavón, V. (2011).** Community-based tourism in developing countries: a case study. *Tourismos*, 6(1).
- **Maldonado, K.C.G. (2011).** Propuesta de lineamientos para un plan de desarrollo local del sector de Cerro Castillo, región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
- **Muñoz, M.D. & Torres Salinas, R. (2010).** Conectividad, apertura territorial y formación de un destino turístico de naturaleza: el caso de Aysén (Patagonia chilena). *Estudios y perspectivas en turismo*, 19(4), 447-470.
- **OMT (1994).** Recomendaciones sobre estadísticas de turismo OMT-ONU, serie M. N. 83. Conceptos de turismo. Recuperado de <https://unstats.un.org/unsd/statcom/docoo/m83note-s.pdf>
- **Orgaz Agüera, F. (2013).** El turismo comunitario como herramienta para el desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados. *Nómadas* (38).

- **Osorio, M. (2007).** “Aisén territorio y Aisén humanidad. Itinerario de una construcción social de la(s) identidad(es) regional(es)”. En: *Otras narrativas en la Patagonia*. Santiago de Chile: Ñire Negro, pp. 9-33.
- **Pastor, V. J., Jurado, C. C. & Domingo, A. S. (2011).** Desarrollo rural a través del turismo comunitario. Análisis del valle y cañón de Colca. *Gestión turística*, (15), 1-20.
- **Real Academia Española [RAE] (2017).** Definición turismo. Edición Tricentenario. Rae.es. Recuperado de <https://dle.rae.es/?w=turista&m=form>
- **Rodríguez Torrent, J. C., Gissi Barbieri, N. & Medina Hernández, P. (2015).** Lo que queda de Chile: la Patagonia, el nuevo espacio sacrificable. *Andamios*, 12(27), 335-356.
- **Rodríguez Torrent, J. C., Reyes Herrera, S. & Mandujano Bustamante, F. (2016).** Reconfiguración espacial y modelos de apropiación y uso del territorio en la Patagonia chilena: migración por cambio de estilo de vida, parques de conservación y economía de la experiencia. *Revista de Geografía Norte Grande*, (64), 187-206.
- **Saldívar Arellano, J. M. (2017).** “Chilote tenía que ser”: vida migrante transnacional en territorios patagónicos de Chile y Argentina. *Cultura-hombre-sociedad*, 27(2), 175-200.
- **Sales Piñeiro, C. (2017).** El place branding. El rol y la construcción del imaginario colectivo de las audiencias internas.
- **Servicio Nacional de Turismo (2014).** Plan de acción región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Sector Turismo 2014-2018.
- **Servicio Nacional de Turismo (2017).** Ficha Plan de Acción para la Gestión Participativa de Zonas con Interés Turístico (Zoit).
- **Strauss, A. & Corbin, J. (2002).** *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Ed. Universidad de Antioquia.
- **Torres Salinas, R. & Rojas Hernández, J. (2011).** Naturaleza, cultura y formas turísticas de vida en Aysén. *Sociedad Hoy*, (20), 77-109.
- **Ther Ríos, F. (2012).** Antropología del territorio. *Polis, Revista Latinoamericana*, 11(32).
- **Troncoso, C. A. & Almirón, A. V. (2005).** Turismo y patrimonio. Hacia una relectura de sus relaciones. *Aportes y transferencias*, 9(1), 56-74.
- **Universidad Austral de Chile (2019).** Se constituyó Consejo Local de Turismo en Villa Cerro Castillo. Recuperado de <https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2019-07-12-se-constituyo-consejo-local-de-turismo-en-villa-cerro-castillo>
- **Velasco, M. (2009).** Gestión turística del patrimonio cultural: Enfoques para un Desarrollo Sostenible del Turismo Local. Cuadernos del Turismo N° 23.
- **Vergara, L., Rozas, M. & Zunino, H. (2013).** Los imaginarios urbanos y la arquitectura de Puerto Varas: Encrucijada entre lo local y lo global. *AUS (Valdivia)*, (14), 19-22.
- **Zunino, H. & Hidalgo, R. (2010).** En busca de la utopía verde: migrantes de amenidad en la comuna de Pucón, IX Región de La Araucanía, Chile. *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 14(331), 75.



SISTEMA AGROMARINO ALIMENTARIO LOCALIZADO EN HUAPE, CORRAL: UNA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ECONÓMICA PARA TERRITORIOS BORDE COSTEROS¹

José Barriga Parra²,
Universidad Austral de Chile



RESUMEN

Huape es un territorio del borde costero ubicado en la comuna de Corral, región de Los Ríos. Al igual que otras zonas de estas características, ha experimentado diversas transformaciones estructurales en los últimos treinta años. Uno de estos cambios ha sido el establecimiento de una especialización en torno a la explotación de recursos y entornos marítimo-pesqueros, lo que ha afectado los modos de vida locales que relacionan complementariamente el uso del mar y la tierra. Utilizando la dimensión alimentaria, propusimos una metodología cualitativa de tipo etnográfica que caracterizara organizaciones económico-alimentarias en las que participan grupos domésticos de la localidad.

Confirmamos las problemáticas territoriales que devienen de la especialización marítimo-pesquera. Sin embargo, el estudio evidenció que una propuesta gastronómica comunitaria basada en un Sistema Agromarino Alimentario Localizado (Sial) permite construir alternativas a esta especialización, pues a través de la complementariedad del borde costero, las y los actores locales logran reforzar dimensiones socioeconómicas.

Palabras clave: Huape, Corral, complementariedad del borde costero, etnografía, Sistema Agromarino Alimentario Localizado.

¹ Este artículo está basado en la tesis "Nadie vivió del puro mar ni nadie vivió de pura tierra: territorios agromarinos alimentarios en el borde costero de Huape, región de Los Ríos, Chile", realizada para obtener el grado de Magíster en Desarrollo Rural, Universidad Austral de Chile. Tesis realizada en el contexto del proyecto Fondecyt N°1171309, "Condicionamientos socio-ambientales y económico-culturales de la producción y la intermediación en el espacio pesquero-artesanal chileno", dirigido por el Dr. Gonzalo Saavedra Gallo.

² Sociólogo, Magíster en Desarrollo Rural. Asociado a ONG Alerce Andino.

INTRODUCCIÓN

Las particularidades geográficas del sur de Chile, relacionadas con su extenso entorno borde costero, han permitido desarrollar modos y medios de vida que ensamblan paisajes rurales de mar y tierra. Esta configuración territorial, derivada del uso del entorno socioecológico por parte de las comunidades locales, ha dado vida a la complementariedad borde costera, que corresponde a las prácticas y saberes cuya base cultural está relacionada con el integrado de los recursos socioeconómicos que ofrece el mar y la tierra (Skewes, 1999; Skewes, Álvarez y Navarro, 2012).

Existen registros históricos de esta complementariedad vinculados a modos de vida de comunidades mapuche lafkenche (Bengoá, 2007). Sin embargo, la expresión económico-cultural referida en este artículo relata la articulación observada en comunidades pesquero-artesanales, donde predomina la combinación de prácticas como la recolección de mariscos y algas, pesca artesanal y trabajo familiar campesino —agrícola, silvícola y pecuario— (Gajardo y Ther, 2011). En términos alimentarios, dicha complementariedad se ha institucionalizado en diversas culinarias tradicionales, de las cuales un ejemplo paradigmático es el curanto, cuya preparación gastronómica combina intensos sabores del mar (cholgas, almejas) y de la tierra (cerdo, papa) (Cárdenas y Muñoz, 2015).

En los últimos treinta años, esta complementariedad borde costera se ha

imbricado con la profundización del modelo de desarrollo que vincula a los países latinoamericanos con un rol primario-exportador. Este proceso ha generado transformaciones en diversas escalas y dimensiones (Amtmann y Blanco, 2001), y la especialización en torno a la explotación de recursos y entornos marítimo-pesqueros es un ejemplo de ello.

Esta especialización marítimo-pesquera, que busca llegar a los mercados globales, ha desarrollado efectos que han agrietado las relaciones entre los diversos actores del territorio borde costero, lo que ha afectado la vida comunitaria de los actores locales (Teckling, 2015; Calderón y Morales, 2016). Asimismo, en términos de sustentabilidad, se ha evidenciado que este tipo de organización económica ha profundizado la presión sobre los recursos pesqueros, afectando la sostenibilidad de la actividad socioeconómica de las comunidades locales (Nahuelhual et al., 2018). No obstante, y no exentas de controversias, existen evidencias que plantean la posibilidad de la coexistencia entre este formato de especialización marítimo-pesquera y la realización de modos y medios de vida local asociados a la complementariedad borde costera (Saavedra, 2016).

Considerando que las economías litorales son productoras de alimentos —marinos y agropecuarios— de autosustento y comercialización, cuyas expresiones permiten abastecer y surtir a las familias y los mercados del territorio

(Lowitt, 2014; Arteché, 2016), se plantea necesario considerar las implicancias sociales, ambientales, económicas y culturales que tienen las transformaciones señaladas, en orden de visualizar las maneras en que las organizaciones económico-alimentarias en Huape han visto dificultada la reproducción de su complementariedad entre mar y tierra. De esta manera, no solo estaremos viendo las rupturas, fragmentaciones y continuidades de la complementariedad borde costera, sino que también podremos analizar si esta sinergia sigue aportando a la sustentabilidad de medios y modos de vida borde costeros.

Identificamos, en el enfoque de los Sistemas Agroalimentarios Localizados —Sial— (Torres Salcido, 2013) y en el debate por la multiterritorialidad alimentaria (Torres Salcido, 2016; 2017), un lente analítico que nos permite caracterizar los arraigos socioculturales que, aun con complicaciones devenidas de la excesiva capitalización de los territorios rurales, reproducen los componentes de un sistema alimentario específico, en el cual los diseños generados por las comunidades locales y otros actores multiescalares dan curso a la reproducción de la vida en el territorio (Muchnik, 2006).

Este ejercicio confirmó las problemáticas señaladas anteriormente. Sin embargo, profundiza en la manera en que una propuesta gastronómica comunitaria basada en un Sistema Agromarino Alimentario Localizado ha permitido construir alternativas a esta especialización, donde actores locales han logrado reforzar dimensiones económico-culturales a través de la preparación de culinarias que articulan productos del mar

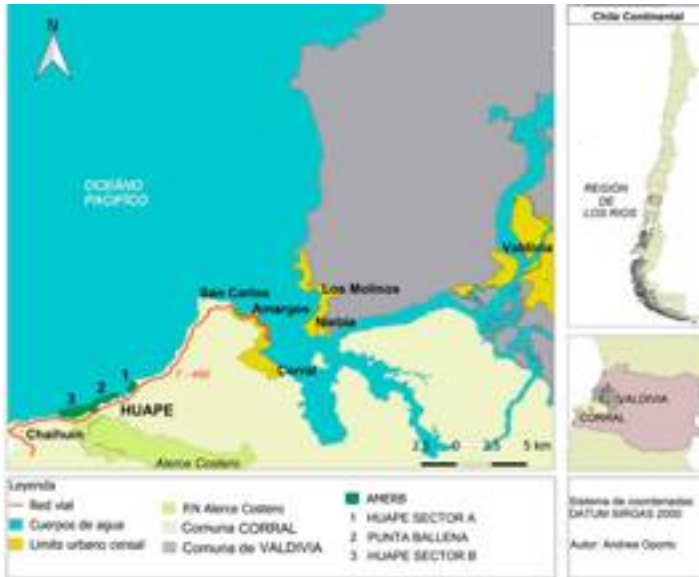
y la tierra.

ÁREA DE ESTUDIO

Huape, ubicada en la región de Los Ríos, específicamente en la comuna de Corral, es parte del territorio borde costero de la provincia de Valdivia, cuya administración comparte con las comunas de San José de la Mariquina y Valdivia (Mapa 1). Su historia no ha estado exenta de las transformaciones antes señaladas y ha incorporado nuevas características que es importante revisar.

En una secuencia temporal (Diagrama 1), podemos señalar que existe un primer momento en el que Corral participó del auge industrial que estaba viviendo la zona de Valdivia a finales del siglo XIX y comienzos del XX (Guarda, 1953). Este proceso coincide con la colonización alemana en la región, donde comunidades mapuche del interior, que se relacionaban con la costa a través de la navegación de sus ríos para la búsqueda de diversos alimentos, fueron desplazadas permanentemente hacia esta zona costera (Adán y Godoy, 2006).

Mapa 1. Zona borde costera de Corral, provincia de Valdivia, región de Los Ríos, Chile



Fuente: Andrea Oporto a partir de bases de datos geográficos del Gobierno de Chile.

Cuando la comuna se constituyó como uno de los centros de intercambio marítimo más importantes del sur de Chile, se intensificaron los intercambios comerciales de alimentos provenientes de los sectores rurales borde costeros como consecuencia del fenómeno migratorio relacionado con la demanda de mano de obra por parte de las empresas que se habían establecido al alero del puerto. Sin embargo, producto

del terremoto de 1960 y el cambio en el modelo de desarrollo generado por la dictadura militar, las industrias fueron cerrando y las comunidades que quedaron en el territorio se mantuvieron con una economía de autosustento, la cual estaba fuertemente vinculada a la comercialización de ciertos productos alimentarios, de tipo pesqueros y agrícolas, en los mercados de Valdivia y Corral (Andrade y Pacheco, 2009).

Diagrama 1. Procesos sociohistóricos de la región de Los Ríos y la comuna de Corral



Fuente: elaboración propia a partir de Guarda, 1953; Adán y Godoy, 2006; Andrade y Pacheco, 2009; y Uribe, 2017.

A finales del siglo XX, el territorio borde costero de la comuna se había instituido como un lugar especializado en la pesca artesanal (Uribe, 2017), proceso que fue apoyado por la aparición de mercados internacionales que buscaban ciertos productos alimentarios para la exportación a países del norte global —el caso emblemático es el recurso loco (*Concholepas concholepas*)—, así como respuestas institucionales de administración marítimo-costera que requerían dar sostenibilidad a los recursos pesqueros (específicamente, sindicatos de pescadores y áreas de manejo). En paralelo, la construcción de la ruta costera T-450, que une el borde costero de Corral con su centro urbano, provocó que las unidades prediales se individualizaran y formalizaran a partir de la propiedad de facto que habían constituido algunas familias en el proceso de colonización, lo que condujo a una pérdida de prác-

ticas comunitarias de tipo alimentario, como la cosecha de trigo o la siembra de papas (Andrade y Pacheco, 2009).

Desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, las comunidades costeras establecieron propiedad privada en sus predios familiares, lo mismo que hicieron los sindicatos de pescadores, que permitían la extracción formal de productos marinos a través de porciones de mar que son coadministradas con el Estado, denominadas Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (Amerb) (Subsecretaría de Pesca, 2002).

En los últimos 20 años, Huape ingresa como Zona de Interés Turístico de Corral (Zoit Corral), proceso que vino acompañado de la llegada de actores gubernamentales y de la sociedad civil que buscaban promocionar el territorio como parte de un destino ecoturístico

(Subsecretaría de Turismo, 2016) asociado al Parque Nacional Alerce Costero y la Reserva Costera Valdiviana, administradas respectivamente por Conaf y la ONG internacional The Nature Conservancy (TNC). A su vez, estos cambios han permeado a las comunidades locales, ya que han articulado una incipiente oferta de servicios turísticos para la demanda nacional e internacional que llega en temporada estival.

Finalmente, se puede comprender que Huape ha experimentado diversos procesos sociohistóricos cuya articulación ha permitido que sus habitantes (4,84% del total comunal según el Censo de 2017) organicen su actividad en torno a una diversidad de prácticas alimentarias de tipo agrícola individuales, marítimo-pesqueras de carácter individual y colectivo, servicios gastronómicos para el turismo y/o actividades de baja calificación en los centros urbanos de Corral y Valdivia (Municipalidad de Corral, 2016).

MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, los sistemas alimentarios son definidos como un conjunto de elementos y actividades que relacionan producción, elaboración, distribución, preparación y consumo de alimentos, que considera los aspectos socioeconómicos y ambientales de estas actividades (Hlpe, 2017). Sin embargo, existen enfoques epistemológicos diversos que permiten analizar desde distintos ejes las implicancias globales de la interrelación entre los componentes de estos sistemas alimentarios. Además, existen miradas críticas que

problematizan procesos de transformación territorial devenidas de los efectos producidos por los cambios en los sistemas alimentarios locales y sus contextos socioambientales.

Con respecto a estos últimos, desde la economía política se ha propuesto el concepto de Sistema Alimentario Global (Friedmann y McMichael, 1989), cuyo foco está puesto en los cambios que han producido las economías “desarrolladas” en los países del tercer mundo producto del aumento del consumo de una canasta de alimentos específica. Este se habría dividido en regímenes marino-alimentarios (Campling y Havice, 2018) y agro-alimentarios (Cid, 2007), en cuya constitución se identifican al menos tres momentos claves (Diagrama 2).

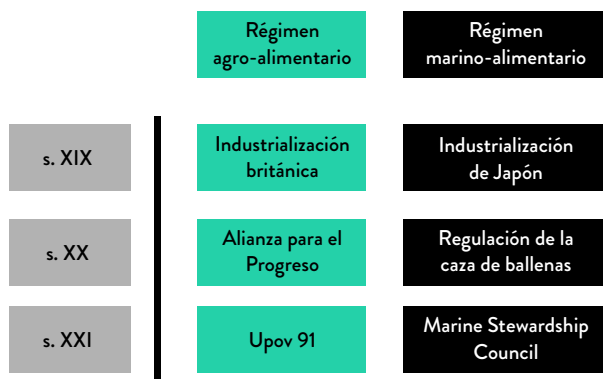
Por el lado de los regímenes marino-alimentarios (Campling y Havice, 2018), existe un primer momento vinculado a la explotación de los recursos pesqueros por parte de países en desarrollo, los que necesitaban tener una abundante cantidad de alimentos para mantener a la clase trabajadora que sostenía sus procesos de industrialización. Caso emblemático es el de Japón, que se convirtió en el primer régimen pelágico. En un segundo momento, y producto del régimen anterior, se crea la necesidad de regular la explotación pesquera a nivel mundial, gracias a lo que se regula la caza de ballenas, se constituyen las áreas de explotación de carácter nacional y se busca que países desarrollados obtengan sus recursos marino-alimentarios a partir de la importación de productos extraídos en naciones del sur global. Finalmente, el último régimen

se presenta como resultado de la desregulación por parte de la explotación de áreas marinas no delimitadas por los países, en la que ciertas pesquerías fueron eliminadas producto de la sobreexplotación. Como respuesta a esta situación, se entiende que el tercer régimen marino-alimentario está configurado por formas de gobernanza público-privadas, en las cuales los modelos de certificación, como Marine Stewardship Council (MSC), permitirían mantener la sostenibilidad de los recursos pesqueros, lo que generaría una alimentación devenida de pesquerías sustentables.

Por su parte, el régimen agro-alimentario (Cid, 2007) se habría configurado en un primer momento por la centralidad británica, cuando los territorios del sur global, específicamente las colonias, mantenían una producción alimentaria que le permitía a la población británica sostener su industrialización entre

el siglo XIX y el siglo XX. Luego, este régimen se modifica a uno centrado en Estados Unidos, en el que la Alianza para el Progreso permite impulsar un reemplazo de cultivos alimentarios por especies provenientes de ese país, lo que derivó en una desaparición de agrobiodiversidad y técnicas de producción local, dado que los países del sur global empiezan a incorporar el paquete tecnológico de la revolución verde. Este proceso termina en un tercer régimen alimentario, el cual está vinculado a la corporativización del alimento, en el cual el producto se identifica con el uso de biotecnología y/o mediante el nombre de la empresa que patenta ciertos insumos agrarios. Ejemplo de ello es la expansión del último convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov).

Diagrama 2. Procesos sociohistóricos de la región de Los Ríos y la comuna de Corral



Fuente: elaboración propia.

Revisando la historia, aparecen aspectos que nos permitirían avanzar en la comprensión de los encadenamientos socioprodutivos que existen en los territorios borde costeros. Por ejemplo, podríamos abordar la interrelación que existe entre los espacios de extracción y los eslabones que permiten ir nutriendo los mercados alimentarios globales, lo que explicaría ciertos efectos en la mantención de recursos para sostener el abastecimiento global.

No obstante, en términos analíticos, este encuadre solo nos permitiría observar la mencionada especialización marítimo-pesquera, puesto que no facilita la mirada hacia el interior de las comunidades locales que participan de los diferentes componentes del sistema alimentario y menos deja vislumbrar si la fragmentación de la complementariedad borde costera se relaciona con los efectos socioambientales de este Sistema Alimentario Global.

Podemos decir que una de las falencias de este enfoque es que invisibiliza la capacidad de agencia, o sea, la capacidad que tienen los actores locales para construir propuestas que se interrelacionen desde una base económico-cultural propia, que contemple la complementariedad borde costera. Es por ello que debemos considerar un enfoque epistemológico distinto, que abarque desde una mirada local los componentes y contextos del sistema alimentario.

El enfoque de los Sistemas Agroalimentarios Localizados —Sial— (Muchnik, 2006) se aleja de la mirada neoclásica de la economía y centra su interés analítico en las relaciones sociales,

culturales, económicas y ambientales que permiten a los actores locales construir sistemas alimentarios dotados de identidad territorial. Distingue cómo la organización económico-alimentaria local va promoviendo territorialidades basadas en el saber hacer específico de cada territorio, lo cual va permeando los distintos componentes del sistema alimentario (Fournier y Muchnik, 2012). Si bien tiene una focalización en el espacio local, las relaciones que problematiza no se circunscriben únicamente a esta escala, ya que considera la existencia de disrupciones y propuestas que nacen de la multiescalaridad del entramado global-local del sistema alimentario, es decir, abre la mirada hacia la posible existencia de una multiterritorialidad alimentaria, donde procesos de territorialización coexisten, disputan y debaten localización/deslocalización alimentaria (Haesbaert y Canossa, 2011; Torres, 2017).

Por otra parte, al entender lo alimentario como un hecho social total, aborda la organización económica sin la necesidad de aislar los factores biológicos de los sociales, lo cultural de lo natural, al mismo tiempo que sirve para comprender cómo los seres humanos intercambian, trabajan y (re)construyen símbolos de identidad (Muchnik, 2006; Torres, 2017). Específicamente, esta propuesta permitió establecer la existencia de sistemas alimentarios localizados en diferentes lugares del mundo (se han “catastrado” especialmente en Francia, Italia, España y, en el contexto latinoamericano, México), cuya base está en la concatenación del saber hacer territorial que facilita la construcción de una propuesta localizada, donde a través

del apoyo de diversas instituciones se logra dar valor agregado a los productos alimentarios locales, aumentando los ingresos familiares y contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población (Muchnik, 2006; Fournier y Muchnik, 2012).

En términos operacionales, el enfoque Sial permite analizar el sistema alimentario desde cinco variables (Diagrama 3): lazos territoriales, tipos de mercado, gobernanza del sistema, aporte a la seguridad y soberanía alimentaria, y acción social local (Muchnik, 2006; Fournier y Muchnik, 2012; Torres, 2012, 2013, 2017; Camacho et al., 2017). Estas variables nos permitirán determinar el nivel de territorialización que tienen las organizaciones económico-alimentarias de Huape, si estas tienen como base la complementariedad borde costera y si esas expresiones generan interrupciones y/o continuidades en la reproducción de las comunidades borde costeras, así como en la sostenibilidad del sistema alimentario del territorio.

En primer lugar, los tipos de lazos territoriales permiten identificar cómo se ha ido localizando la economía alimentaria. Existen lazos históricos devenidos de una historia común de los actores del territorio y lazos materiales relacionados con las características bioculturales de los productos que ahí se manifiestan, los que se ven fortalecidos con lazos inmateriales dado que construyen sabores y saberes específicos de la cultura alimentaria que ahí habita (Muchnik, 2006; Torres, 2017).

En segundo lugar, destaca la variable relacionada con los mercados, que se

articulan para la comercialización local, nacional o de exportación. La diferencia que existiría con un mercado convencional es que el consumidor adquiere un conocimiento y valorización por un producto de alto valor territorial, lo que permite generar un valor simbólico y material que se ve reflejado en formas institucionales de arraigo —por ejemplo, denominaciones de origen— (Fournier y Muchnik, 2012).

Esta situación nos lleva a la tercera variable, relacionada con la gobernanza del Sial. Se identifica que el mercado final termina en las clases medias del sector urbano, lo que genera una profundización en la desigualdad de acceso a alimentos de calidad. Sin embargo, más allá de las contradicciones, se señala que la estrategia permite generar gobernanza territorial en sectores rurales, lo que fortalece institucionalmente culturas y éticas locales a partir de la valorización de los usos del mismo territorio (Torres, 2012).

En términos de seguridad y soberanía alimentaria, se entiende que al valorar el saber hacer de las comunidades se produce una revalorización de su patrimonio gastronómico, lo cual termina contribuyendo a mejorar el acceso, inocuidad y conservación de alimentos (Torres, 2013; Camacho et al., 2017). No obstante, es importante señalar que muchas veces esta revalorización es constreñida por marcos normativos que dificultan la producción y comercialización de productos locales que no cumplen con ciertos estándares formales de seguridad alimentaria, pero que sí presentan una trazabilidad basada en marcos económico-culturales localizados

(por ejemplo, quesos de leche cruda) (Richard, 2018).

Finalmente, la acción social localizada vendría a potenciar las variables antes señaladas, donde los actores que desarrollan estrategias Sial van territorializando su propuesta alimentaria a partir de gobernanzas que fortalecen vínculos locales y aportan a la seguridad alimentaria de los territorios (Torres Salcido, 2017). Es importante señalar que, para generar este proceso, la propuesta Sial identifica la potencialidad de algunas unidades sociales (cooperativas, asociaciones campesinas o unidades de producción familiar), situación que invisibiliza articulaciones económico-alimentarias que transgreden la formalidad organizacional.

Es por ello que haremos una breve reflexión sobre la importancia de trabajar operacionalmente con el concepto analítico de grupos domésticos (D'Argemir, 1998). Estos se reconocen como un conjunto de dimensiones de significancia compartidas que no pueden ser reducidas solamente al parentesco y que permiten descentrar la mirada del "grupo familiar". Asimismo, esta nominación reconoce debilidades teóricas del concepto "familia", ya que reproduce falsas dicotomías entre el espacio productivo/espacio doméstico (Harris, 1996). De esta manera, desde los usos antropológicos del concepto, los grupos domésticos vendrían a estar articulados por un conjunto de actividades socioeconómicas —pluriactividad— cuya visualidad permite comprender cómo estas relaciones van construyendo propuestas económicas desde encuadres culturales propios (Gudeman y Rivera, 1990), ya

sea mediante mecanismos de intercambio local y/o bajo la intervención en diversos procesos de localización/deslocalización del sistema alimentario (Muchnik, 2016).

Así, analizar la acción social localizada de grupos domésticos nos abre la posibilidad de existencia de diversas motivaciones en la articulación económico-alimentaria de un territorio y no tan solo las que se vinculan con una cadena de valor de orden global. Conjuntamente, nos desafía a considerar la importancia de la base histórico-cultural del borde costero (Skewes et al., 2012) al momento de dar respuestas locales a fenómenos de multiescalaridad territorial (Torres, 2017).

MÉTODO

Esta investigación fue diseñada contemplando las organizaciones económico-alimentarias que desarrollaban grupos domésticos en las diversas estacionalidades del año, por lo que el trabajo de campo se realizó entre junio de 2017 y junio de 2018. A su vez, esta decisión metodológica invitó a utilizar el enfoque etnográfico (Guber, 2011) como eje de la investigación, dado que abordar el conocimiento situado de aspectos de la vida social permitiría entender la relación con el mar y/o la tierra, así como los procesos de rupturas y continuidades que van construyendo significado a partir de su complementariedad (D'Argemir, 1998).

El muestreo utilizado fue no probabilístico, de tipo intencional (Vieytes, 2004), dado que se trabajó con grupos domésticos que representaban ciertas características a nivel de territorio. Se utilizó una primera aproximación a través de la entrevista grupal, para que posteriormente se profundizara la información con observación participante de las prácticas económico-alimentarias de las y los participantes, técnica a la que se añadió la conversación antropológica acuñada por Gudeman y Rivera (1990). Este proceso fue documentado, a partir de un registro “no sistemático” de tipo narrativo, mediante diversas notas de campo (Restrepo, 2016). Finalmente, a comienzos de junio de 2018 se realizó un grupo de discusión con todos los grupos domésticos, que se enfocó en conocer la percepción sobre su pasado y presente económico-alimentario.

De esta manera, como se observa en la Tabla 1, se llega a un muestreo que incorpora a seis grupos domésticos cuyas particularidades ayudarán a robustecer etnográficamente el apartado de resultados.

Tabla 1. Muestreo de grupos domésticos de Huape

GRUPOS DOMÉSTICOS	DESCRIPCIÓN
"I"	Constituido por ND, mujer de 38 años, y JA, hombre de 52 años, sus dos principales prácticas económico-alimentarias en el territorio están vinculadas a la recolección de algas, el manejo de animales menores y la producción de hortalizas en invernaderos. En ciertos momentos del año, ND se encarga de los cuidados de sus dos hijas mientras JA realiza trabajo asalariado en las comunas de Corral y Valdivia.
"II"	FT, mujer de 40 años, y WA, hombre de 40 años, son padre y madre en este grupo doméstico. Tienen dos hijos, uno de 17 y otro de un año. WA participa del sindicato de pescadores de Huape. FT, por su parte, es integrante de la agrupación Lafkenmapu, donde realiza labores de cocinera y secretaria en el restaurante que mantiene la agrupación.
"III"	Este grupo doméstico participa de la comunidad mapuche vinculada al tronco familiar ñanco. JC, hombre de 52 años, es hijo de la mujer más antigua de esta comunidad. Junto a él está CL, mujer de 45 años. JC es buzo y recolector de orilla, mientras que CL es recolectora de orilla y horticultora. En el caso de JC, ha sido dirigente histórico de la pesca artesanal y actualmente participa de la Federación de Pescadores Artesanales del Sur, una de las más importantes de la región de Los Ríos.
"IV"	Constituido por JD, hombre de 64 años, es parte de los "colonos" que mantienen hoy en día un predio de 5 ha (aproximadamente), el cual fue entregado formalmente cuando se hizo la división predial por la llegada de la Ruta T-450. MG, mujer de 52 años, es su esposa y llegó a mediados de los años ochenta desde la provincia de Osorno. Se autodefine como recolectora de orilla. Sin embargo, mantiene producción de hortalizas en invernaderos, así como manejo de ovinos y bovinos para el autoconsumo y/o el comercio local.
"V"	Este grupo doméstico está integrado por LT, hombre de 72 años, y CD, mujer de 60 años, aproximadamente. Ambos son padres de FT. En el caso de este grupo, LT es uno de los pocos pescadores artesanales no sindicalizados que quedan en el territorio. Por su parte, CD es quien cuida de sus nietos, así como de las gallinas que termina cocinando para la alimentación de su familia extendida (hijos, hijas, yernos, nueras, nietos, nietas y quien llegue a su casa).
"VI"	En términos económico-alimentarios, MM, mujer de 56 años, es una de las mujeres más importantes de este territorio. Participa de la agrupación Lafkenmapu y es quien ha desarrollado gastronomía local basada en la combinación mar-tierra. Su esposo, hombre de 60 años, aproximadamente, realiza trabajos de construcción dentro del territorio del borde costero de Corral.

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.

RESULTADOS

1. Especialización marítimo-pesquera: entre los intermediarios y la Amerb

En temporada de verano, la mayoría de los grupos domésticos se organiza para realizar recolección de algas, pesca de congrio —*Genypterus blacodes*— y manejo de frutales. Sin embargo, en la última década, esta tríada se ha per-

filado hacia una especialización en la recolección de algas (Fotografía 1). Específicamente, ha sido hegemonizada por la recolección de algas de tipo carragenófitas, o sea, algas que terminan siendo procesadas para la extracción de carragenina, compuesto utilizado para la elaboración de lácteos y aderezos. En este sentido, existe un predominio de la recolección de luga larga —*Sarcothalia crispata*— y luga corta —*Mazzaella laminarioide*—.

Fotografía 1. Recolección de luga en Huape



Fuente: archivo personal del autor.

La organización económico-alimentaria del alga articula tres tipos de actores: quienes recolectan el alga, quienes generan la intermediación local del producto y la industria alimentaria nacional, actor ubicado fuera del territorio y que extrae el compuesto carragenina para la elaboración de sus productos (por ejemplo, yogurt, salsas de tomate). La forma de trabajo de los intermedia-

rios crea una problemática organización oligopsónica basada en: i) manejo de precio; ii) competencia desleal con compradores externos; y iii) cooptación de recolectores mediante préstamos monetarios en temporada de invierno, lo que compromete la venta de su recolección en temporada de verano al precio que definan los intermediarios.

Con respecto a la complementariedad borde costera, se señala que, históricamente, al terminar el verano, las prácticas económico-alimentarias se alejan de la recolección de algas, dando paso a que algunos grupos domésticos mantengan actividades de otoño como la recolección de productos forestales no madereros (Pfnm), producción de carne bovina y pesca artesanal. No obstante, la nueva articulación de esta organización económico-alimentaria ha generado una expansión en su temporalidad, dado que los intermediarios han instalado acopios de algas, lo que ha permitido que recolectoras/es puedan entregar pequeñas cantidades durante abril-mayo.

Esta situación genera que actividades como la pesca o la recolección de Pfnm comiencen a ser desplazadas, lo cual permea la síntesis mar-tierra:

“Uno se dedica más directo a un solo trabajo, porque si te pones a agarrar murta³ y a sacar luga, al final no trabajas ninguna de las dos cosas bien”

(LT, 2018).

Además, las largas jornadas de trabajo de recolección han ido permeando la dieta local basada en culinarias que requieren mayor tiempo de preparación. Así, se evidencia la aparición de una gastronomía “instantánea”, basada en carbohidratos de procesamiento in-

dustrial y productos que incluyen la señalada carragenina. Un ejemplo son los “fideos con pomarola”.

Así, la progresiva preponderancia de la organización económico-alimentaria del alga ha desarticulado la complementariedad borde costera, fragmentando partes del sistema alimentario local, desplazando prácticas alimentarias locales y agrietando la seguridad y soberanía alimentaria de los grupos domésticos. A su vez, ha generado un aumento en la degradación del recurso alga, ya que no solo ha aumentado la temporada de extracción, sino que también la presión diaria sobre el recurso.

Por otro lado, en la época de invierno, algunos grupos domésticos que se vinculan al sindicato de pescadores de Huape realizan la extracción de locos. Este recurso es clave para obtener ingresos monetarios, puesto que su similitud con el abalón—*Haliotis rufescens*—, molusco de alto consumo en la población del continente asiático, le permite entrar en mercados internacionales como abalón chileno. Además, a diferencia de lo que sucede con el alga, este recurso está mediado por la Amerb del sindicato, situación que ayuda para negociar de mejor manera con el intermediario nacional.

³ *Ugni molinae*.

Fotografía 2. Pesaje en recolección de locos en Huape



Fuente: archivo personal del autor.

El plan de manejo de 2017 (Subpesca, 2017) les permitió a los habitantes de Huape extraer 104.000 unidades de locos, cuya totalidad fue comercializada directamente por el sindicato a la empresa exportadora, la que se ubica en la comuna de Coronel, región del Biobío, a 500 km de Huape. Las mujeres recolectoras del sindicato contabilizan, pesan y miden cada loco para que esté dentro de la regulación (Fotografía 2), mientras que los hombres, además de extraer el recurso, realizan el trayecto Huape-Coronel en el camión de la empresa, ya que así aseguran el intercambio comercial.

Una vez terminado el procedimiento, la empresa paga el monto acordado y el sindicato comienza la distribución de la remuneración:

“10% para el sindicato, 5% se le saca a las recolectoras, de ahí el resto se divide entre el buzo, la máquina [bote] y el marino gana otra parte”
(WA, 2017).

La organización monoprodutiva del loco genera que durante el resto del año sus socios no realicen prácticas económico-alimentarias en la Amerb, puesto que al entender al loco como una mercancía de alto valor comercial, generan una sobreprotección del área (entre otras medidas, contratan guardias y ven con recelo los botes que estén dentro del área). Esta situación ha generado que algunos miembros busquen trabajo temporal remunerado fuera de Huape, ya sea en Corral o Valdivia, lo cual ha desembocado en controversias de carácter organizacional. Asimismo, esta situación ha tensionado el territorio y ha hecho que incluso algunos grupos

domésticos no se vinculen con las actividades económico-alimentarias del mar, dado que la sobreprotección de la Amerb no les permite trabajar la pesca artesanal de manera fluida.

En términos de la complementariedad borde costera, esta organización económico-alimentaria afecta de dos maneras: i) disminuye la relación con su entorno socioecológico marino, ya que no se genera un plan de manejo que incluya otro tipo de recursos; y ii) desarticula la combinación de prácticas alimentarias mar-tierra, ya que quienes son excluidos de la Amerb prefieren buscar trabajo asalariado fuera del territorio dadas la continuas controversias que genera la protección de la zona intermareal.

Así, la especialización marítimo-pesquera relacionada con el loco ha centrado parte de la configuración del sistema alimentario local en un único producto, en un tipo de encadenamiento productivo, lo cual no solo ha generado dificultades para que la agregación del valor quede en el territorio, sino que también ha conformado barreras para la reproducción de la complementariedad borde costera en los grupos domésticos no sindicalizados. Dicha situación termina generando fragmentación de las estrategias de pluriactividad que implementan los grupos domésticos del territorio, y con ello un aumento en la vulnerabilidad socioeconómica de los actores locales.

En conclusión, las organizaciones económico-alimentarias del alga y el loco no logran dar cabida al despliegue de un sistema alimentario que promueva la utilización de productos del mar y de la tierra. Al contrario, los efectos de articular el territorio a los regímenes marino-alimentarios no solo han generado rupturas de la complementariedad borde costera, sino que también han ido presionando el entorno socioecológico de Huape, fragmentando la base sociocultural y desarticulando estrategias locales de reproducción de la vida.

2. Sistema agromarino alimentario localizado: restaurante “Pesca Sur”

En 2007, algunas mujeres de los grupos domésticos gestaron una idea colectiva para poder construir un local que les permitiera comercializar sus hortalizas, propuesta que fue apoyada por el Programa de Desarrollo Local de la Municipalidad de Corral. Esta articulación se combinó con el apoyo que mantuvo TNC⁴, que incentivó a las mujeres a construir un espacio donde pudieran vender gastronomía local. Entonces, en el año 2008, junto a sus esposos, crearon una organización que edificó el restaurante que comercializaría preparaciones culinarias a turistas que llegaran a la zona.

⁴ The Nature Conservancy.

El restaurante se llama “Pesca Sur”, nombre que tiene un vínculo territorial, dado que “Pesca Sur” fue un bote utilizado por algunos miembros de los grupos domésticos que constituyen esta agrupación. En este local realizan preparaciones culinarias con diversos productos de Huape y además utilizan el espacio del comedor para mostrar tejidos a lana y mermeladas hechas en la zona. Aunque trabajan durante todo el año, la temporada estival es la época más importante, ya que reciben turistas regionales y nacionales que visitan las áreas protegidas de la costa de Corral.

Observamos que el proceso asociativo del grupo ha sido fortalecido por lazos histórico-culturales que mantienen las mujeres, dado que, al ser tías, sobrinas, madres de grupos domésticos interconectados rememoran espacios familiares donde se reproducía la complementariedad borde costera. Ejemplo de ello es el recuerdo del fogón, ya que antes de la llegada de la cocina a leña, la cocina a gas y el refrigerador, era el espacio que permitía sintetizar el territorio agromarino alimentario, dado que su construcción facilitaba la preparación, mantenimiento y consumo de culinarias locales:

*“Mi papá traía chancharro [en referencia al pez *Helicolenus lengerichi*], nosotros le echábamos sal, sacábamos bracitas a un lado y poníamos el pescado... hacían tortillas al rescoldo, papas asadas, habas tostadas, chalotas asadas... nadie vivió del puro mar ni nadie vivió de pura tierra”*
(MM, 2018).

Este recuerdo es utilizado por la agrupación para influenciar su propuesta económico-alimentaria, puesto que la base del trabajo del restaurante está en la combinación del mar y la tierra:

“Nuestra agrupación se llama Lafkenmapu, mar y tierra, sacamos los productos del mar, aprovechando todo lo que tenemos del mar y de la tierra”
(FT, 2017).

Ejemplo de esto es la preparación gastronómica “ícono” del restaurant, las “lapas con murtas”, preparación que viene a reensamblar variedades de productos devenidos del mar y de la tierra, lo que genera una nueva síntesis de su complementariedad, pero ahora desde una propuesta relacionada al servicio de alimentación para la propuesta ecoturística de la Zoit Corral.

Es importante señalar que esta organización económico-alimentaria permite que otros grupos domésticos participen de esta rearticulación de la complementariedad, dado que en invierno los grupos domésticos que no participan del sindicato pueden mantener una relación con diversidad de moluscos, donde las lapas (*Fissurella spp*) y mañihues (*Fissurela nigra*) son recolectados en el espacio intermareal del borde costero para luego ser comercializados a la agrupación. Esta situación no solo permite generar recursos monetarios, sino que también promueve que los grupos domésticos recolecten moluscos para el consumo doméstico y les permite sintetizar en el espacio doméstico la relación mar-tierra.

Situación similar sucede durante la época de primavera y verano, momento en el que miembros de algunos grupos domésticos de Huape pueden comercializar sus hortalizas o pescados directamente con la agrupación:

“Nos llaman [y nos ofrecen] sierras, tantas corvinas... ellos nos contactan a nosotras... los productos de la huerta... salimos a buscar donde la vecina en la mañana temprano”
(FT, 2017).

No obstante, hay productos que no pueden conseguir en el lugar y tienen que comprar fuera de Huape, ya sea porque no se producen localmente (productos agrícolas que se dejaron de producir, como el trigo) y/o no pueden ser comercializados de forma legal:

“Cuando la gente mata un animalito aquí pa’ vender... te vende corte único... entonces nosotros necesitamos carne específica [y] preferimos comprarla... en la carnicería o en el súper”
(MM, 2018).

Caso particular es lo que sucede con los locos que se preparan en el restaurante, puesto que como la totalidad que extrae el sindicato local es comercializada fuera del territorio, la agrupación debe articular su obtención a partir de la relación que mantiene con los sindicatos cercanos a Huape (Chaihuín o Niebla). Este tipo de organización económica

co-alimentaria permitió a las mujeres de la agrupación desplegar acción social localizada, utilizando el espacio del restaurante como lugar de encuentro, de conversación y puesta en práctica de un sistema alimentario que promueve la complementariedad borde costera en el conjunto de sus componentes. Es esta posibilidad de recrear y reproducir la vida de los grupos domésticos, articulando la economía local bajo significados acordes a los territorios borde costeros, lo que definimos como un Sistema Agromarino Alimentario Localizado.

No obstante, como hemos observado, la propuesta no está exenta de dificultades que constriñen los marcos de acción, ya que la incorporación y valorización de ciertos productos se ve afectada por la promoción estatal de una cadena de valor de vocación exportadora y la estandarización de prácticas de seguridad alimentaria que no contemplan los marcos económico-culturales del territorio borde costero (Ley de Carnes⁵).

CONCLUSIONES

Observar los fenómenos que acontecen en los territorios borde costeros a partir de lo económico-alimentario nos permite evidenciar maneras en que se construye y/o fragmenta la complementariedad borde costera. Analizar grupos domésticos facilita el reto antes propuesto, dado que la pluriactividad

⁵ Ley N°19.162 de 1992, publicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre de ese año. Entró en vigencia en enero de 1994.

de estos (D'Argemir, 1998) nos desafía a considerar la base histórico-cultural del borde costero (Skewes et al., 2012), así como sus respuestas locales a fenómenos de carácter global (Torres, 2017).

En términos analíticos, el enfoque Sial permite evidenciar que las relaciones locales/globales que acontecen en las formas de organizar lo económico-alimentario en un territorio (Muchnik, 2006) van influyendo en la manera en que se constituye la vinculación mar-tierra. Se evidencia que en Huape la especialización marítimo-pesquera también genera problemáticas territoriales, las cuales afectan directamente la constitución económico-cultural de la complementariedad borde costera. Sin embargo, este tipo de organización económico-alimentaria no es hegemónica, o sea, la organización del territorio borde costero no solo puede ser leída como una participación en los regímenes agro y marino alimentarios.

De esta manera, podemos visualizar a actores locales que en su relación con otros actores territoriales (como la municipalidad o la ONG TNC) van proponiendo maneras de organizar su territorio, gracias a lo que logran articular una propuesta gastronómica coherente con su identidad borde costera. Esta situación expone la constitución de un fenómeno de multiterritorialidad alimentaria (Torres, 2017; Haesbaert y Canossa, 2011).

La potencialidad de esta propuesta, ya sea para mantener y/o profundizar lo realizado, está mediada por las dificultades que generan las organizaciones económico-alimentarias que coexisten

en el territorio, así como por barreras normativas que poco ayudan al desarrollo de las comunidades borde costeras.

Para los productos marinos, la posibilidad de mantener y fomentar sus usos estará supeditada a las consecuencias de las fluctuaciones de mercado que median la especialización marítimo-pesquera. Por ejemplo, si las lapas y mañihues entran en una demanda de consumo nacional y/o global, la articulación local se verá fuertemente afectada, ya que el sindicato podría incorporarlos en su plan de manejo. Esta situación generaría que los recolectores no sindicalizados fueran desplazados de la actividad, lo que afectaría la seguridad y soberanía alimentaria de los grupos domésticos, así como al abastecimiento del restaurante, ya que el sindicato comercializa la totalidad de su plan de manejo a intermediarios externos al territorio.

Asimismo, la expansión del sistema agromarino alimentario en Huape depende de la evaluación de prohibiciones normativas. Un ejemplo es la situación que afecta a productores locales de carne bovina, puesto que el marco legal para su comercialización les exige utilizar un matadero que certifique la inocuidad de la carne. Sin embargo, en este recorrido etnográfico pudimos evidenciar que estos productos son consumidos localmente, situación que ofrece una posibilidad para declarar la comercialización local de carne bovina para restaurantes borde costeros que promuevan su abastecimiento a partir de circuitos cortos de comercialización, ya que la inocuidad alimentaria deven-

dría de marcos económico-culturales específicos (Torres, 2013; Camacho et al., 2017).

Este artículo sostiene que la profundización de la acción social localizada que se observa en las mujeres de la agrupación Lafkenmapu puede permitir la mantención y/o expansión de este sistema agromarino alimentario localizado. El desafío es conectar con diversos actores que les permitan reforzar su propuesta, ya sea mediante la renovación de vínculos o a través de la búsqueda de otros actores regionales, nacionales e internacionales.

De esta manera, su organización económico-alimentaria les permitirá mantener la reproducción de sus grupos domésticos desde una perspectiva económico-cultural que arraiga su complementariedad borde costera a partir de la reinterpretación de la gastronomía local.

- **Harris, O. (1986).** La unidad doméstica como unidad natural. En *Nueva Antropología*, vol. VIII, núm. 30, pp. 199-222.
- **Hlpe (2017).** La nutrición y los sistemas alimentarios. Un informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma.
- **Lowitt, K. (2014).** A coastal foodscape examining the relationship between changing fisheries and community food security on the west coast of Newfoundland. *Ecology and Society*, vol. 19 (3): 48.
- **Muchnik, J. (2016).** Dinámicas culturales/dinámicas territoriales: los Sial en movimiento. En: Torres-Salcido (ed). (2016). *Territorios en movimiento. Sistemas agroalimentarios localizados, innovación y gobernanza*. Bonilla Artigas Editores, Unam. México, p. 49-63.
- **Municipalidad de Corral (2016).** Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016-2020. Disponible en: <http://www.municipalidadcorral.cl/wp-content/uploads/2016/05/PLADECO-CORRAL-Informe-Final.pdf>.
- **Nahuelhual, L., Saavedra, G., Blanco, G., Wesselink, E., Campos, G. y Vergara, X. (2018).** On super fishers and black capture: imagen of illegal fishing in artisanal fisheries of southern Chile. En *Marine Policy*, vol. 95, sep. 2018, pp. 36-45.
- **Richard, N. (2018).** Industria del queso y sus aspectos culturales en Chile. En *Rivar*, vol. 5, N°14, mayo de 2018, pp. 183-200.
- **Restrepo, E. (2016).** *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Enviñón Editores.
- **Saavedra, G. (2016).** La pesca artesanal en el sur austral de Chile. Controversias territoriales en el espacio marino-costero. *Revista Antropologías del Sur*, N°5, p. 64-83.
- **Skewes, J. C. (1999).** Metáforas en entredicho: la comunidad de Amargos y los emisarios del progreso. *Cinta de Moebio* (5).
- **Skewes, J. C., Álvarez, R. y Navarro, M. (2012).** Usos consuetudinarios, conflictos actuales y conservación en el borde costero de Chiloé Insular. *Magallania*, vol. 40 (1), p. 109-125.
- **Subpesca (2017).** Resolución exenta que señala, aprueba décimo informe de seguimiento de área de manejo que indica. Disponible en: <http://www.subpesca.cl/portal/618/w3-article-11290.html>.
- **Subsecretaría de Turismo (2016).** Plan de acción para la gestión participativa de zonas de interés turístico (Zoit). Disponible en: <http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/PLAN-DE-ACCI%C3%93N-ZOIT-CORRAL.pdf>
- **Tecklin, D. (2015).** La apropiación de la costa chilena: ecología política de los derechos privados en torno al mayor recurso público del país. En: Bustos, B., Prieto, M. y Barton, J. (2015). *Ecología política: naturaleza, propiedad, conocimiento y poder*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, p. 121-142.
- **Torres Salcido, G. (2012).** La gobernanza de los sistemas agroalimentarios locales. Gerardo Torres Salcido y Rosa María Larrea Torres, *Sistemas Agroalimentarios Localizados: identidad territorial, construcción de capital social e instituciones*, Juan Pablos Editor, México, pp. 69-88.



PRÁCTICAS, ESTRATEGIAS Y SIGNIFICADOS DE AUTOGESTIÓN: CASOS DE ORGANIZACIONES DE TIPO COOPERATIVO EN LAS REGIONES DEL BIOBÍO Y ÑUBLE

Carlo Felipe Arriagada Castro¹,
Universidad de Concepción

RESUMEN

Los procesos para alcanzar, sostener y aumentar el bienestar a nivel individual y colectivo son amplios y heterogéneos. Dentro de las realidades locales, parte de la población ha enfocado sus esfuerzos a la conformación de organizaciones sociolaborales de tipo autogestionado. La siguiente investigación se propone identificar y comprender prácticas, estrategias y significados en organizaciones autogestionadas que emplean dinámicas de tipo cooperativo en la región del Biobío y Ñuble.

Para adentrarnos en el mundo material, relacional y simbólico de estas asociaciones, este estudio propone un análisis de tipo cualitativo. Los instrumentos de recolección de datos fueron grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Para dar sentido y explicación a este fenómeno social, se hace uso principalmente del enfoque de la economía social, complementado con teorías de la necesidad, integración, autoridad, clusterización y alienación. Esta combinación permite conocer de manera más amplia y profunda a estas organizaciones.

Los resultados, en general, permiten constatar efectos a nivel individual (integrantes) y colectivo (organizaciones). A nivel individual, se desarrollan procesos de integración socioafectiva y se interpreta el trabajo desde una perspectiva estética y de autorrealización. En el colectivo, en cambio, se ponen en marcha prácticas que despliegan el carácter distributivo, solidario y cohesionado de las organizaciones, que adquieren recursos a través de las capacitaciones de parte del Estado. Sin embargo, también se presentan aquí nodos críticos asociados al nexo existente con la institucionalidad gubernamental.

Palabras clave: economía social, solidario, organización, autogestionado, socioafectivo, Estado.

¹ Sociólogo. Artículo basado en la tesis "Prácticas, estrategias y significados de autogestión: casos de organizaciones de tipo cooperativo en las regiones del Biobío y Ñuble", realizada en el marco del trabajo del Fondecyt regular N°1160186, "Cartografía de heterogeneidad económica: estudio de caso en Biobío y Valparaíso", para obtener el título de sociólogo, año 2019. Programa de Pregrado, Universidad de Concepción. Profesora guía: Beatriz Cid Aguayo, Concepción, 2019.

INTRODUCCIÓN

La economía neoclásica ha erigido un cuerpo teórico donde el egoísmo natural ha pasado a ser incuestionable. Por ende, los individuos son concebidos principalmente como seres maximizadores, guiados estrictamente por la racionalidad económica, la cual es también intrínseca e inevitable (Monares, 2018). Ciertamente, el egoísmo es un componente que media las relaciones sociales y puede verse promovido e intensificado dependiendo del sistema político y social. No obstante, considerar que la premisa anterior es indesmentible y guía la totalidad de las acciones individuales y asociativas, parece un error.

Por esa razón, esta investigación busca sumar antecedentes teóricos y empíricos asociados a las prácticas, estrategias y significados que construyen organizaciones autogestionadas que emplean dinámicas de tipo cooperativo en la región del Biobío y Ñuble. El relato de las participantes pone de relieve la complejidad de las biografías y la inserción de las organizaciones en un mercado laboral cada vez más competitivo. En esa línea, las integrantes de las respectivas asociaciones constatan de manera latente y manifiesta que el trabajo colectivo ha sido clave en la vida emocional, material y relacional de las personas que las componen, pues permite la obtención de nuevos recursos y el mejoramiento de los ya existentes.

Una de las agrupaciones descritas, “Manos del Biobío” está compuesta por ar-

tesanas y pequeños productores, y su labor opera desde la lógica del comercio justo. Actualmente, funciona en la región del Biobío, ciudad de Concepción. Entre los productos que sus integrantes diseñan, presentan y venden están los trabajos en madera, joyas de plata y cobre, joyería mapuche, tejidos en lana e hilo, papel maché, lámparas, cuero, decorativos y jabones, entre otros varios productos de distinta índole.

Es necesario realizar una aclaración fundamental: las organizaciones de las regiones del Biobío y Ñuble, así como la agrupación “Manos del Biobío”, no se definen a sí mismas como cooperativas. “Manos del Biobío” es una organización comunitaria que trabaja desde el enfoque del comercio justo, sin embargo, es posible asociarla conceptualmente a la lógica cooperativista.

Como se planteó en un inicio, existen elementos que nos permiten distinguir, sostener y defender dinámicas de tipo cooperativo, elementos que se irán presentando a lo largo del texto. Es posible rastrear estos elementos tempranamente, por ejemplo, en el momento en que las integrantes ingresan y pasan a ser parte de las organizaciones. También podemos identificar elementos solidarios en los mecanismos para gestionar las organizaciones, como la distribución del problema-beneficio. Asimismo, con esta investigación podremos dar cuenta de que la racionalidad económica y el egoísmo natural, supuestamente guías de las acciones económicas, no expli-

can necesariamente ni dan cuenta de la compleja interacción entre los agentes.

Los resultados de esta investigación toman como referente las necesidades y/o motivaciones por parte de las integrantes al momento de querer conformar sus organizaciones. Se abordan aquí determinadas prácticas que estas realizan, por ende, es un análisis que opera a un nivel intragrupal y que permite plantear tópicos como la valorización del trabajo, la posición de la mujer y la distribución de los beneficios a partir del trabajo colectivo.

Posteriormente, y operando a un nivel macrorelacional, estudiaremos y discutiremos acerca de los nexos que las organizaciones establecen con instituciones del Estado. En este sentido, se presentan antecedentes como el recurso más valorado y distribuido por el Estado, la manera en que las integrantes interpretan este apoyo y los nodos críticos que genera dicha relación. Finalmente, se presentan las narraciones y/o relatos de las integrantes sobre el trabajo que desempeñan, el cual es preferentemente interpretado como autorrealizador.

El cuerpo teórico utilizado corresponde principalmente, aunque no exclusivamente, a la economía social. Lo primordial de este enfoque teórico no es la negación del interés individual o la consecución de ganancia, sino la observación, constatación y defensa de formas de organización económica y racionalidades que no se guían únicamente por fines instrumentales. En este sentido, “la economía cooperativa, solidaria y autogestionada presenta algo distinto en su forma de propiedad, de organiza-

ción y de gestión, afirmando lo común y asociativo y sin la centralidad en el aumento del capital y las utilidades como orientación” (Meyer, 2017, p. 19).

Para lograr un cuerpo teórico amplio, pero a su vez conciso y coherente, esta investigación propone identificar, dividir y explorar tres dimensiones de la economía social. A saber, ética-filosófica; social e institucional. A su vez, se agregan aportes teóricos nuevos que tienen por fin fortalecer el análisis de los datos.

La economía social está situada entre el sector público y privado (Chávez y Monzón, 2008). En este sentido, se la ha catalogado como una economía que pone de relieve las necesidades de la sociedad y que busca resolver viejos y nuevos problemas, los que no han sido resueltos de manera eficiente por instituciones privadas y públicas (Mutuberría, 2003). Además, y a diferencia de la perspectiva neoclásica, excede lo económico-monetario como último fin. Lo anterior se sustenta en la producción y promoción de valores tales como la solidaridad, tolerancia, ayuda mutua y altruismo, los que convierten a la economía social en un referente de sectores escasamente representados en los sistemas políticos democráticos contemporáneos (Chávez y Monzón).

En la actualidad, aunque no necesariamente de manera explícita, los agentes en las sociedades de mercado son definidos como “utilitaristas, calculadores, autocentrados, competitivos e irresponsables por los efectos de sus acciones” (Coraggio, 2016, p. 17). Por otra parte, otros autores consideran que el

egoísmo natural es una ilusión de tipo antropológico para cuya afirmación, en términos culturales, no existiría evidencia concreta (Sahlins, 2011, citado por Monares, 2018).

Con respecto a lo anterior, cabe precisar que el objetivo de esta perspectiva no es idealizar las prácticas ejercidas por las integrantes de las organizaciones. Por el contrario, es rastrear cómo las integrantes de las respectivas agrupaciones, dentro de un marco cultural determinado, definen su propia normativa, ya sea apuntando al beneficio individual o bien a la promoción de la solidaridad (Polanyi, 1994, citado por Monares, 2018).

Respecto a la dimensión social, su potencialidad radica en identificar y diferenciar las formas de racionalidad-acción que ponen en práctica los agentes y organizaciones. La racionalidad con “acuerdo a fines” o instrumental está orientada hacia el cálculo económico que forma y da sustento principalmente a las instituciones de la economía, de las cuales las más claras representantes son las empresas (Atria, 2012; Cid, 2018). En cambio, la racionalidad con “acuerdo a valores” se expresa en la vocación, lo que implica que quien despliega esta racionalidad está llamado a ser un sujeto portador de valores (Atria; Cid).

Estos tipos de pensamiento-acción, cabe aclarar, no son excluyentes entre sí. Además, pueden estar moldeados por diferentes factores y circunstancias, como la biografía de los agentes, los objetivos que se planteen al corto, mediano y largo plazo, la estructura de la organización y los nexos que formen con otras entidades del mundo social,

público y privado. Con lo anterior, es sustancial tener clara la siguiente idea: la racionalidad no implica exclusivamente acciones que busquen la generación de ganancias monetarias, sino también aquellas que se realizan por que son consideradas e interpretadas como necesarias de cumplir, o bien, que persiguen un fin tautológico.

En este caso, las organizaciones que tomen como fundamento consciente o “inconsciente” la perspectiva de la economía social pueden sopesar de manera más equilibrada ambos tipos de racionalidades y llegar a un modelo que busque la generación y obtención de ganancias para el aumento de los ingresos y que, a la vez, implique el cumplimiento de determinadas normas por ser consideradas justas.

En cuanto a la dimensión institucional, las organizaciones que ejercen prácticas de tipo cooperativo buscan equilibrar la relación trabajo-capital. Por ende, la distribución de los beneficios del trabajo tiende a ser más equitativa (Schmidt y Perius, 2004). En este sentido, la repartición del beneficio puede lograrse, en parte, no exclusivamente, por la equitativa distribución del poder-decisión de cada participante.

Ahora bien, estas organizaciones deben velar de igual forma por la calidad de su gestión. Para lograrlo, Schmidt y Perius (2004) señalan que es necesario tener a la vista dos factores, el educador y el fiscalizador. El primero guarda relación con el ejercicio participativo de los integrantes respecto a sus asociaciones. El segundo, en cambio, plantea la necesidad de la constante profesionalización,

es decir, cuidar la eficiencia y calidad de los servicios y/o productos comercializados.

MÉTODO

Fueron 11 las asociaciones estudiadas en Biobío y Ñuble, las que en su mayoría estaban conformadas por mujeres². En estas organizaciones se realizaron 11 grupos focales y ocho entrevistas semiestructuradas. Para el caso de la agrupación “Manos del Biobío” se desarrollaron 10 entrevistas que buscaron conocer el sentido que les daban a sus labores y asociaciones.

Para lograr este cometido, la estrategia metodológica proviene del enfoque cualitativo. En este sentido, lo que cobra importancia es el descubrimiento del “sentido, la lógica y dinámica de las acciones humanas” (Vieytes, 2004, p. 69). Esta investigación es de tipo secundaria, exploratoria, no experimental y sincrónica. En correspondencia con lo anterior, la técnica utilizada es el análisis del discurso. Para dicho análisis, el contexto de las participantes es fundamental, puesto que permite, por ejemplo, identificar elementos de género, clase y etnicidad (Vieytes, 2004).

HALLAZGOS Y RESULTADOS

1. Necesidades y motivaciones de ingreso

1.1 Necesidades de orientación socioafectiva

La esfera de los ingresos es, sin duda, esencial, y tiene que ver con determinados contextos y/o procesos sociales. En este sentido, si bien no es erróneo explicar la afiliación a organizaciones autogestionadas por la necesidad de generar ingresos, es una perspectiva limitada, incompleta y/o parcial para los análisis que aquí queremos realizar y compartir.

El análisis realizado identifica a estas agrupaciones como fuentes principales o secundarias de ingresos dependiendo de la situación particular de cada integrante. Ahora bien, dichos ingresos y participación han contribuido, como explican las participantes, a relevantes procesos de integración de tipo socioafectivos.

Para esta investigación es fundamental reconocer que las necesidades de las personas son variadas, pero no necesariamente infinitas, y no se ubican únicamente en el plano fisiológico. Por otra parte, no deben ser comprendidas solamente como carencia, puesto que también comprometen y movilizan a las personas, por ende, devienen en potencialidad, que no es otra cosa que la

² Es por eso que esta investigación se refiere a “las integrantes” a lo largo de todo el artículo.

capacidad de acción del género humano (Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010). Tomemos el siguiente relato:

“Porque igual [...] y he conocido gente muy bonita porque todos se apoyan entre ellos y eso me agrada mucho”
(grupo focal de feriantes, Lebu).

Es interesante averiguar hasta qué punto las necesidades de quienes participan en este tipo de organizaciones son identificables. Una participante afirma lo siguiente:

“Porque como vivo sola [...] siempre he participado en los grupos, pero uno ya se acostumbra no tanto a la soledad, echa de menos el conversar con alguien”
(grupo focal, Quilleco).

Un elemento interesante que emerge de los relatos presentados es la generación de capital social en estos grupos, que se convierte en un componente sustantivo de la participación. Esto habla de contenidos asociados a la confianza recíproca ente las participantes, así como a la promoción de solidaridad entre ellas (Lozares, López, Miquel, Marti y Molina, 2011).

Retomando la perspectiva de la economía social desde un punto de vista ético, Chávez y Monzón (2008) recalcan que esta promueve valores como la solidaridad, tolerancia, ayuda mutua y altruismo. Al unirse a las agrupaciones, parte de las y los participantes puede aumentar su capital social y, específicamente, sus grados de integración social.

Sin embargo, hay que recalcar que la integración no es, en estricto rigor, dicotómica, es decir, no obedece a una lógica integrado/no integrado. Por el contrario, está asociada a niveles y/o grados y campos específicos. Así, sus contenidos pueden estar asociados a determinadas dimensiones, entre las que se cuentan la (i) psicosociológica, (ii) político-jurídica, (iii) socioeconómica y (iv) sociocultural (Lozares et al., 2011).

Cada uno de estos campos normativos es un área relativamente específica de integración. Lo anterior implica que las integrantes efectivamente pueden ser parte de determinadas asociaciones que no se limitan únicamente a lo económico-monetario. Así, la tipología presentada anteriormente permite establecer que las participantes están siendo incluidas en un campo que no se reduce solamente a los ingresos, sino que incorpora elementos psicosociológicos.

En síntesis, una labor que las organizaciones autogestionadas están cumpliendo es posibilitar que las participantes creen lazos profundamente valorados por ellas, que exigen, sobre todo, confianza recíproca, elemento propio del capital social (Baquero, 2004).

1.2 Necesidades y asociativismo: entre la exigencia exógena y la disposición endógena

La participación de cada integrante en sus respectivas organizaciones está asociada a diferentes factores, como la necesidad que se busca suplir, la dispo-

sición que presente la o el participante, las presiones institucionales a las cuales están expuestos, etc. Este último caso, el que involucra las presiones institucionales, ha de ser explorado con mayor profundidad.

El siguiente fragmento nos expone dicha situación.

“Y también teníamos que sacar personalidad jurídica, entonces... eso, teníamos que agruparnos para poder postular a proyectos y todo eso, para eso teníamos que agruparnos”

(grupo focal, Quinchamalí).

Como queda de manifiesto, la formalización (personalidad jurídica) a la cual deben recurrir las participantes es una presión exógena e institucional. Para complementar lo anterior, la asociación de Yungay expone un caso similar.

“Claro, no, si la idea, por ejemplo, nosotros, fue [...] una asociación con ella y después [...] te limitan cuando eres independiente, te limitan el acceso a diferentes sectores, en este caso, por ejemplo, alguna feria, si no estabas asociado, no te dejaban entrar, lo cual, por ejemplo, a nosotros también nos motivó a asociarnos para poder tener una ventana un poco más amplia en el trabajo que nosotros hacemos”

(grupo focal, Yungay).

Frente a la situación anterior, Jaime y Salazar (2009) explican que al Estado no le resulta eficiente, en términos de mercado (precios), entregar ayuda de manera individual, por lo que la conformación de agrupaciones se vuelve de gran utilidad al momento de realizar nexos y entregar determinados recursos.

Una forma complementaria de interpretación de este fenómeno corresponde al isomorfismo institucional. Así, entidades (organizaciones, asociaciones) que forman parte o no de la economía social terminan siendo una extensión de la política del Estado, lo que las vuelve dependientes de las decisiones estatales y, por tanto, vulnerables (Meyer, 2017).

Por otra parte, la participación en las organizaciones no está vinculada únicamente a las políticas promovidas por el Estado. Así, la evidencia permite demostrar que estas también dependen de la disposición e interés que manifieste cada integrante. Observemos el siguiente relato.

“Creo que pasé por la tienda, hace hartos años, y ahí entré a preguntar, parece que ya la había visto antes y tenía como la percepción de que vendían cosas muy caras, que eran artesanías caras y después, en este lapso en el que volví, dejé mi trabajo formal y volví a estudiar, pasé por ahí de nuevo y ahí pasé a preguntar y ahí me integré”

(“Manos del Biobío”, integrante N°1, entrevista semiestructurada).

Queda claro que antes de participar en la organización, existen una serie de nociones que condicionan el ingreso y la participación de las integrantes, en este caso, alusivas al precio de los productos. Esto puede estar asociado a que precios muy elevados pueden volver inviables ciertas ventas a futuro.

Para el caso del relato presentado, cabe prestar especial atención al hecho de que la participante ya poseía un tra-

bajo formal, el que decide dejar. Esto permite establecer un planteamiento provisorio: no todas las integrantes se encuentran necesariamente en situación de riesgo, es decir, no todas carecen de empleo. A continuación, podemos observar otro relato de la organización “Manos del Biobío” que complementa la narración anterior:

“Eeh, sí, es que esa es la idea, por eso la tienda era, más que como se lo imagina la gente, una tienda de dueños, o sea, todas somos dueños, pero me refiero como a tres dueños, que es netamente a algo como parcial, en realidad, es como un espacio como para que las personas que no tienen un espacio puedan promocionar sus productos”

(“Manos del Biobío”, integrante N°2, entrevista semiestructurada).

La tienda, como narra la integrante, es un espacio que ha permitido que las asociadas puedan dar a conocer sus habilidades y sus productos. Esto permite afirmar que el trabajo de índole colectiva logra generar condiciones de visibilización y comercialización de productos, que en este caso son diseñados individualmente y comercializados colectivamente. Otro relato sustancial es el presentado por la organización de Lebu. Aquí, una de las participantes comenta su experiencia de ingreso e integración:

“A mí se me abrieron las puertas, esa es la verdad, porque yo hacía cosas [...] ¿qué haces tú, Bárbara? ¿Yo tejo, así, bien piolita’, y cuando traje un mantel para la mesa como de metro y algo, como dos metros cincuenta, ‘no, es que tú haces cosas maravillosas’ [...] Yo sabía tejer, era la única

oportunidad, así que felices con las chiquillas, hemos participado de ferias en donde nos hemos dado a conocer”
(grupo focal de artesanas, Lebu).

Nuevamente, es posible observar que las agrupaciones han asumido roles que no se limitan únicamente a la generación de ingresos. En el relato anterior, la participante comenta que su habilidad es tejer, pero no participaba en instancias en las cuales fuera realmente valorado dicho trabajo. Tejer, como labor, solo pudo materializarse al momento de entablar contacto con la organización de Lebu. Así, dicha experiencia puede sumarse a investigaciones previas que utilizan el enfoque de la economía social, es decir, donde las integrantes puedan identificarse con otras personas, solidarizar y plantearse objetivos en común (Hoinle, Rothfuss y Gotto, 2013).

2. Prácticas empleadas por la agrupación “Manos del Biobío”

2.1. El precio justo como valorización del trabajo propio y ajeno

En este primer subpunto se abordan las prácticas desarrolladas por “Manos del Biobío” con el objetivo de identificar y diferenciar las acciones que cada organización realiza. “Manos del Biobío”, como se constata en los relatos, reivindica el trabajo realizado por terceros, pero desde una visión del comercio justo. Así, una de las integrantes plantea lo siguiente.

“Eeh, una de las características del comercio justo es que se le respeta el precio al proveedor [...] ha tocado personas que han puesto precios demasiado altos para algo que se le tiene que tratar de explicar que se le va a subir demasiado, que no se está desvalorando su trabajo”

(“Manos del Biobío”, integrante N°2, entrevista semiestructurada).

El relato parte de la premisa de que el trabajo y el precio que le asigne el proveedor a los materiales y/o productos ha de ser respetado. Ahora bien, en la misma narración es posible observar que la fijación de precios no es una labor sencilla, pues compromete directamente los intereses de las partes. Otra de las integrantes también destaca la necesidad de respetar el trabajo realizado por los proveedores, pero agrega un antecedente clave: hay ocasiones en que son los mismos proveedores quienes asignan precios relativamente bajos.

“Para mí, un precio justo es lo que me cobra el productor, es lo que me cobra el productor para yo venderlo acá en la tienda y subirle lo menos posible, y no regatearle el valor que él me da [...] entonces igual a veces nos ha pasado que llega un productor y cobra muy barato por el producto, entonces les subimos el precio y les pagamos lo que realmente debería ser, para mí, eso es”

(“Manos del Biobío”, integrante N°6, entrevista semiestructurada).

La integrante expone que el respeto por el trabajo-precio del productor no solo implica pagar por lo que este le asigne (proveedor), sino que implica más exi-

gencias, pues si el mismo proveedor asigna precios bajos, la acción que corresponde es proponer subirlos, pagando lo que “realmente”, según la visión de la integrante, corresponde.

Sin embargo, el proceso de compra y venta no solamente presenta dificultades en el momento en que el proveedor asigna los precios, ya que también surgen otras relacionadas con los intermediarios, como describen quienes participan en “Manos del Biobío”.

“Que ojalá lo puedas comprar del productor para que efectivamente sea el productor quien se lleve la mayor parte de la ganancia, tratar de evitar estos intermediarios, ¿entiendes tú? En el fondo, el artesano produce una cosa a un precio, pero cuando llega el consumidor llega a un precio mucho más elevado, muchas veces el que lo hace no pone el precio, es el que lo vende el que va agregando porcentaje sobre porcentaje”

(“Manos del Biobío”, integrante N°3, entrevista semiestructurada).

El intermediario es considerado como un agente que pone en riesgo la comercialización del producto pues, como la integrante relata, se compromete la ganancia del proveedor y puede ocurrir que los precios se eleven demasiado, afectando de manera negativa tanto a las participantes como a los futuros consumidores y/o clientes. En efecto, el precio justo implica la eliminación del “coyote” (intermediario), pues el beneficio de aquel se produce a partir de la distribución y el transporte; cuando no está presente esa figura, el valor agregado beneficia a la organización (Billason,

Gendron, Navarro-Flores y Torres, 2013). A la dificultad anterior se suma otra de tipo económico-estructural. El precio justo puede aplicarse desde el momento en que los materiales se compran, no obstante, una vez hecha la transacción, lo que se conoce como precio de venta queda sujeto a la lógica de mercado, es decir, oferta y demanda (Billason et al., 2013).

Realizando una síntesis, para la visión instrumental de la economía, la simple idea de que sea el comprador quien eleve los precios para favorecer al proveedor no cabe en un razonamiento lógico. No obstante, sí cabe en un razonamiento con arreglo a valores. Asimismo, pone en evidencia lo que las asociadas consideran justo, es decir, respetar y defender los precios que los proveedores asignan a sus productos. Esto resalta, una vez más, que no es suficiente el razonamiento neoclásico para comprender estos procesos sociales.

2.2. Prácticas empleadas por las agrupaciones del Biobío y Ñuble

2.2.1 La relevancia de la posición de la mujer

Uno de los tópicos más esenciales del análisis de los datos yace en esta sección, pues recoge el potencial de lo que implica una organización autogestionada con una política interna más definida y avanzada. A continuación, el relato de una de las integrantes.

“Que acá, como organización, tenemos como... es como separaciones. Una es el área de comercialización y lo otro el tema de la organización [...] pero en el tema de la organización en sí, porque ahí donde se trabaja con la mujer... con el autoestima y todo eso. Y con el liderazgo también”

(grupo focal, Tirúa).

La organización de Tirúa no solo atiende demandas de tipo sociolaboral, destinadas a la generación de ingresos, sino que ha integrado uno de los puntos más esenciales en la discusión de la agenda pública de los últimos años, que es justamente la materia de género, en este caso, la preocupación por el fortalecimiento de la autoestima y el liderazgo de la mujer.

La investigación realizada por Hoinle et al. (2013) constata de manera más clara el punto anterior, a saber, que las mujeres presentan mayores grados de dificultad al momento de organizarse. Dicha dificultad, explican los autores, tiene su origen en experiencias laborales fuertemente sustentadas en la obediencia.

Lo anterior se acentúa aún más para el caso de nuestra realidad histórica y social. La investigación llevada a cabo por Araujo (2016) explica que nuestro modelo de autoridad está impregnado de contradicciones. Al mismo tiempo que ciertos sectores de la población nacional han cobrado mayor protagonismo (lo que tiene un correlato en la búsqueda de mayores horizontes de igualdad y democracia), son las formas de liderazgo de tipo autoritario las que se continúan concibiendo y poniendo en práctica, pues recae en ellas la esperanza de

ejercer un control más “efectivo” sobre los distintos grupos sociales.

Es por ello que la política que pone en marcha la organización de Tirúa es tan relevante. Si bien su contexto es de mujeres con baja autoestima y liderazgo, es capaz de desplegar mecanismos auto-gestionados para potenciar dichas debilidades. Esto sería concordante con lo planteado por Schmidt y Perius (2004), quienes señalan la relevancia del factor educador y fiscalizador para el buen funcionamiento de la organización.

2.2.2 Cooperación y reciprocidad como distribuidoras del beneficio

Generalmente, se piensa que la cooperación es un rasgo adjudicado exclusivamente a las “buenas intenciones”, lo que la relaciona únicamente con un objetivo moral. Sin embargo, si bien la cooperación puede contener elementos morales, no siempre inicia y termina en estos (Searle, 1997). Esto tampoco implica que haya que razonar bajo la clásica y bastante usada premisa de que los agentes se movilizan en función de su egoísmo natural. Nuevamente, no es porque el egoísmo realmente no movilizara, o bien, y en términos más amplios, sea inexistente en la compleja realidad social, sino porque su interpretación adolece de limitaciones respecto a los hechos estudiados.

Con la aclaración anterior se busca vislumbrar un campo más amplio y exacto para definir el término de cooperación. En el caso de los grupos estudiados, esta ha permitido mejorar la gestión y

obtención de recursos y lograr el fortalecimiento de la cohesión social a nivel intragrupo. A continuación, una de las integrantes relata su experiencia con el trabajo colectivo.

“Por ejemplo, como grupo trabajamos [...] se designan dos personas, siempre dos, rara vez es que vayamos todo el grupo, porque generalmente a las ferias viene con su regla todos los expositores [...] o por los stand, por los espacios, también por el tema del alojamiento, por el tema de la alimentación, por el tema de movilización, entonces son muy altos los costos, entonces ya reunimos todos los productos de todas las chiquillas, se hace un cuaderno con un listado con todos los productos y sus valores, y así vamos trabajando. Y esas dos personas se hacen cargo de todo el grupo, esa es nuestra modalidad de trabajo”

(grupo focal, Quilleco).

Desde la visión de la economía social, Schmidt y Perius (2004) plantean que los integrantes de organizaciones deben ser capaces de promover la “solidaridad cooperativa”, es decir, ser capaces de promover el bien común y, por otra parte, lograr la obtención de beneficios individuales. Ahora bien, el relato muestra que las organizaciones están sometidas a diferentes y simultáneas dificultades. Y, como ha quedado histórica y empíricamente demostrado, los grupos humanos se adaptan, desarrollan y evolucionan en entornos complejos (Linares, 2018). Así, la cooperación es una “herramienta” social que permite a las personas mejorar su bienestar. Este, en el presente artículo, comprende tres dimensiones relacionadas e insepara-

bles: trabajo, ocio e ingreso (Wright, 1992).

Gracias a la experiencia anterior es posible conocer cómo las organizaciones gestionan sus dificultades y posibles soluciones. El siguiente relato guarda de igual forma relación con la cooperación, pero la forma en que la integrante se expresa hace que los puntos acentuados sean distintos.

“Y eso ha sido una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque sí hay alguien que dice ‘oye, podemos ayudar’, ‘sí, todos, todos, nadie ha dicho ‘no... oye, no, esa plata la tenemos destinada para otra cosa.’ Y la plata después vuelve de nuevo y así. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención del grupo, que en realidad la mayoría que estamos se pone la mano en el corazón cuando hay problemas”
(grupo focal, Chillán).

En este caso, el foco de atención yace en las prácticas que las integrantes realizan y que a su vez permiten estabilidad al interior de las agrupaciones. Linares (2018) explica que aquellos grupos que poseen un alto grado de clusterización³ cuentan con la ventaja de que las sanciones positivas poseen un bajo coste⁴ para los sancionadores, en este caso, para las integrantes de las agrupacio-

nes. El siguiente relato, al igual que el anterior, aporta mayor evidencia acerca del fenómeno de la clusterización:

“Lo otro, también, por ejemplo, se pusieron reglas internas y una de las reglas también fue que, en caso de fallecimiento de algún familiar de las compañeras, también se da un aporte en dinero. Aparte de hacerse presente con un ramo de flores, también se hace un aporte en dinero en ayuda de la compañera y también anteriormente teníamos la canasta, que era mensual, donde cada una se llevaba el kilo y, para que no todas se repitieran lo mismo, llevábamos, por ejemplo, tal persona le tocaba el aceite, otra el detergente, no sé, y ahí había una canasta y se iban rotando mensualmente para que todas dentro del año tocaran”
(grupo focal de artesanas, Lebu).

El mismo autor detalla que los pequeños gestos de aprobación, que pueden ser respaldados con el relato de la integrante, permiten un mayor grado de cooperación entre ellas (Linares, 2018). Recalando que lo anterior solo se desarrolla en pequeños grupos y a medida que esta cooperación continúa desarrollándose, cabe la posibilidad de que sea instituida por las mismas organizaciones.

³ Linares (2018) comprende la clusterización como “grupos de nodos con muchos vínculos internos (una alta densidad de relaciones) pero pocos vínculos (que juegan el papel de puentes) entre unos grupos y otros” (p. 121). El mismo autor recalca que la información acerca de innovaciones, enfermedades y chismes fluye con rapidez debido a la alta densidad de relaciones.

⁴ El costo no tiene por qué comprenderse exclusivamente en su sentido monetario. Por ejemplo, cotidianamente las personas piden y realizan favores, los que también pueden asumirse como deudas por quienes los solicitan.

Con el primer relato fue posible conocer más a fondo los problemas que deben gestionar las organizaciones y los posibles mecanismos para darles solución. En cambio, los relatos restantes permiten detallar de qué manera fenómenos como la aprobación o la sensación de estabilidad hacen perdurar a las agrupaciones.

3. Caracterización de los nexos que establecen las organizaciones con entidades del mundo público

3.1 Organizaciones del Biobío y Ñuble

Uno de los objetivos centrales de esta investigación es identificar los nexos que establecen las organizaciones para generar y/o mejorar los recursos ya existentes. A modo general, varias organizaciones afirmaron tener nexos y/o colaboraciones con instituciones del Estado. Sin embargo, al ser consultadas por instituciones como el mercado y la sociedad civil, se expresa una evidente baja. Ante esta situación, son fundamentales las reflexiones que se realizarán una vez presentadas las narraciones.

A continuación, el relato de Tirúa:

"Con Sercotec, en un principio y hace como dos años... bueno, con Sercotec nos iniciamos, pu', en todo el tema con el área de comercialización... y folletería, todo lo que es material promocional fue con ellos, sí"
(grupo focal, Tirúa).

Para el caso de Tirúa, el inicio de la organización en términos comerciales fue correlativo al apoyo estatal brindado. Este apoyo se vio reflejado, comenta la integrante, en la comercialización. Por ende, la promoción y venta de sus productos han estado ligadas a los apoyos brindados por Sercotec. Otra organización agrega lo siguiente:

"Yo puedo decir que estos nueve años que entré al Prodesal, cada año he ido aprendiendo una cosa distinta y eso me ha servido, me ha hecho crecer. Cuando partí en el grupo estaban las chiquillas, me acuerdo, yo ya venía vendiendo desde la vega, a mí no me daba vergüenza estar ahí, para mí era todo lo contrario, yo me he sentido orgullosa porque estaba sacando un producto"
(grupo focal, Yumbel).

En el caso de la organización de Yumbel, el relato muestra diferentes aspectos de lo que implica trabajar y colaborar con organismos dependientes del Estado. Primero, el apoyo que recibe parte de sus integrantes es de larga data, por ende, no hay evidencia (relatos) que indique que son apoyos esporádicos o pasajeros. Otro aspecto relevante es la manera en que las integrantes reciben e interpretan esta ayuda. Una de las integrantes de la asociación de Yumbel describe la relevancia del apoyo estatal, pues se presenta como un antecedente clave en la vida laboral de dicha persona. Otra de las organizaciones comenta lo siguiente:

"Entonces, del gobierno sí hemos recibido, el hecho de estar en capacitación con Prodemu, que es una entidad del gobierno también. O sea, eeh... no soy política, pero creo que este, esta gobernante ha sido alguien muy importante, como también ha sido nuestro alcalde"

(grupo focal, Florida).

En el caso de los relatos de la organización de Florida, nuevamente se releva que el Estado brinde apoyo a las organizaciones. En este ejemplo hay un elemento que matiza la experiencia en comparación con el resto. Hay un pasaje de la cita donde la integrante afirma no ser política. Este uso de la narración puede tener por fin desligarse de "compromisos" políticos y acentuar que la ayuda que reciben es independiente del sector ideológico al cual ellas pueden o no pertenecer.

En general, las organizaciones convergen en lo siguiente. Efectivamente, cuentan con nexos con el Estado, el cual puede variar dependiendo de la institución en particular con la que colaboran, el tiempo que llevan trabajando y el área que buscan impulsar. Otro aspecto sustancial corresponde a la interpretación que realizan las organizaciones en función del apoyo y recursos que reciben. En este sentido, las organizaciones valoran los recursos recibidos, ya sea porque permiten aumentar las competencias de las integrantes o bien, porque sienten genuinamente una preocupación por que sus proyectos se realicen.

Respecto a lo anterior, se puede asumir que el Estado cuenta con amplias razones para operar con una lógica ins-

trumental al momento de establecer nexos con organizaciones de la sociedad civil (o con otras instituciones de la sociedad), nexo que además podemos catalogar como unidireccional. No obstante, es interesante plantear, provisoriamente, que estamos en presencia de una co-instrumentalización. Es decir, no solamente del Estado hacia las organizaciones, sino que, a la vez, de las mismas organizaciones hacia el Estado. En este caso, ambos organismos (Estado-organizaciones) moldean sus acciones y objetivos, uno para entregar y distribuir recursos y otros para recibirlos.

Desde el enfoque y evidencia de la economía social, hay interpretaciones divergentes respecto a estas colaboraciones. Meyer (2018) sostiene que existen tres interpretaciones distintas respecto a los nexos formados con el Estado: conflictiva-cooptadora, facilitadora y constitucional.

La primera interpretación pone el acento en el rol cooptativo del Estado y afirma la función limitadora de la autonomía de las organizaciones. Aquí se puede retomar la idea del isomorfismo institucional presentada con anterioridad, que hace que las organizaciones se vuelvan dependientes de la política estatal y, por ende, vulnerables.

La segunda, en cambio, destaca que las asociaciones pueden, efectivamente, entablar relaciones positivas con el Estado. Para este autor, este tipo de alianza se constituye cuando la orientación hacia el mercado disminuye y el foco de atención se nivela en relación con las agrupaciones. Así, el Estado puede crear instituciones que tengan por ob-

jetivo apoyar emprendimientos de tipo autogestionado.

La tercera perspectiva está asociada al reconocimiento formal de las agrupaciones. Esto implica, comenta el autor, que dichas agrupaciones comienzan a tomar mayor protagonismo al interior de la sociedad, lo que deviene en la posibilidad de un reconocimiento a nivel constitucional. Finalmente, el autor recalca que dicho reconocimiento puede traer como consecuencia la cooptación o bien, el reconocimiento de una tercera fuerza, distinta de la economía estatal y del mercado capitalista.

Frente a este panorama, ciertamente las interpretaciones pueden ser variadas y el foco de atención puede cambiar dependiendo de lo que busquen conocer y respaldar los investigadores. No obstante, lo cierto es que, como plantean Schmidt y Perius (2004), las organizaciones de la economía social no operan aisladamente. En este sentido, parte de su desarrollo puede estar indudablemente determinado por la cantidad y tipo de colaboraciones que establecen con otros agentes e instituciones de la sociedad. Por ejemplo, Álzate y Betancur (2014) afirman que las empresas sociales deben proyectarse en el tiempo para ser autosostenibles. Es decir, no depender de recursos externos, sino que del propio funcionamiento, generando, finalmente, su propio capital.

En síntesis, las organizaciones respaldan que efectivamente cuentan con nexos con el Estado y, a su vez, logran captar diferentes recursos, siendo el de la capacitación el que más se valora. Por otra parte, las participantes afirman

valorar dicha ayuda recibida, independientemente del sector político que las promueva. No obstante, es indudable que un nodo conflictivo es saber hasta qué punto las organizaciones pueden funcionar de manera autónoma, es decir, sin las prestaciones que el Estado les brinda, recalcando y enfatizando que no es negativo el apoyo que reciben, pero teniendo presente que no todos los contextos socioeconómicos y políticos demuestran ser favorables para que el Estado genere y distribuya recursos. Además, y como hemos discutido hasta el momento, toda organización debe proyectarse hacia la autonomía.

3.2 “Manos del Biobío”

El potencial de las experiencias anteriormente señaladas está en la diversidad de relatos con los que se cuenta, los que permiten estudiar varias experiencias de manera simultánea. Para el caso del análisis de “Manos del Biobío”, la potencialidad se encuentra en que los relatos provienen de la misma organización. Por ende, no prima la amplitud, sino la profundidad.

A diferencia de las experiencias anteriores, las apreciaciones respecto al rol de las instituciones del Estado son más críticas y dispares. Este punto es relevante, puesto que podría esperarse que agrupaciones diversas tuvieran opiniones heterogéneas y que una unidad sin relación con otras organizaciones tuviera una visión que expresara mayor sintonía. No obstante, las agrupaciones de la región del Biobío, con sus respectivos matices, mostraron mayor convergencia con relación al rol positivo que

ha desempeñado la colaboración del Estado. Al contrario, como ya se dijo, de lo que ocurre en la organización “Manos del Biobío”, donde priman los relatos y opiniones más divergentes.

“Igual hemos tenido varias capacitaciones que no son solo vinculadas a este movimiento, porque cuando tú postulas a cualquier proyecto de gobierno, lo primero que tienes que cumplir es con horas de capacitación y en todos los proyectos, desde los Fosis, desde los más bajos, el tema de estructura de costo es una de las, de los temas que se abordan”
(“Manos del Biobío”, integrante N°1, entrevista semiestructurada).

Este primer relato muestra, en línea con los presentados en la sección anterior, que el Estado y las instituciones que derivan de él efectivamente están desempeñando un rol capacitador, que tiene por objetivo potenciar las habilidades de la organización. A continuación, se presenta otro relato que muestra más detalladamente las obligaciones que la organización sigue, por un lado, y por otro, los recursos que las instituciones públicas destinan.

“Bueno, como somos agrupación comunitaria, tenemos que tener automáticamente una incorporación en los datos y como que renovar la lista de socios cada cierto tiempo, no sé si cada año o no, y pagar una patente y esas cosas. Eso viene siendo como con el municipio, no sé, de repente hay contacto con ellos cuando invitan a alguna feria, cuando se arma alguna feria en el centro o en la rambla de la diagonal, qué sé yo, y el resto son con los diferentes

organismos del Estado, ProChile, cuando en algunas ocasiones nos ha financiado los pasajes para ir a eventos, digamos, en otros países, Sernatur”

(“Manos del Biobío”, integrante N°2, entrevista semiestructurada).

Según la participante, dada la naturaleza de la agrupación, existe una serie de normas u obligaciones que debe cumplir. Respecto a la colaboración con instituciones públicas, la integrante releva el trabajo conjunto con el municipio, ProChile y Sernatur. Así, nuevamente, hay evidencia de que estas organizaciones han podido establecer nexos con el mundo público, una relación que ha derivado en la obtención de diferentes recursos. Retomando a Meyer (2018), podemos estar en presencia de una relación que se concibe de manera positiva, pues ha permitido impulsar la actividad comercial y reforzar las competencias de la organización.

No obstante, y como se mencionó en un principio, no todas las opiniones convergen respecto a la evaluación o desempeño de las instituciones públicas. De hecho, parte de las integrantes han manifestado una opinión más crítica respecto del apoyo que han recibido. Una de ellas comenta lo siguiente:

“Que, por ejemplo, está ProChile también como a nivel gubernamental, que ha tirado algunos proyectos, que ha apoyado, pero son así como contadas con las manos, una o dos, no más”

(“Manos del Biobío”, integrante N°3, entrevista semiestructurada).

En este caso, la participante señala la escasa colaboración de parte de ProChile. Otra integrante agrega lo siguiente:

“De momento, yo pienso que no, eeh... yo creo que falta mucho para lograr, digamos, que este asunto sea como más, más tomado en cuenta, yo siento que somos muy, así, mirados poco menos que en menos, como que no encajamos dentro del sistema, porque... si bien es cierto, nosotros tenemos una tienda que paga IVA y que tiene todos los movimientos legales, digamos, entre comillas, la gran mayoría de los artesanos no están de acuerdo en que, en que se haga, digamos, de esa forma, porque... cómo se llama... nosotros gastamos mucho en impuestos y de repente generamos tan poco, que al final uno trabaja para los impuestos”

(“Manos del Biobío”, integrante N°5, entrevista semiestructurada).

Esta última cita revela una serie de elementos o nodos críticos. La participante señala que la organización no es reconocida como tal, y afirma que no forman parte del “sistema”. Esta crítica está dirigida a la manera en que las instituciones públicas se relacionan con la organización. Así, el conflicto se “origina” en lo que ella llama un desmedido cobro de impuestos. Este es considerado contrario a la lógica de la labor que ellas realizan, o bien, de la naturaleza misma de la organización.

Si utilizamos, una vez más, la propuesta de Meyer (2018), estamos en presencia de una función limitadora de parte del Estado hacia la organización “Manos del Biobío”. Pero, y este

punto es vital, a pesar de que existen relatos o experiencias que señalan puntos críticos respecto al desempeño del Estado, ninguna organización ha destacado que la presencia misma de las instituciones públicas sea el impedimento. No es su presencia la que explica el origen del conflicto, sino los tipos particulares de relación que pueden establecer con cada organización.

Así, parte de las integrantes de “Manos del Biobío” no critica el hecho de que el Estado se relacione con ellas. Al contrario, es su ausencia lo que justamente se critica en algunos casos. De aquí en adelante, el fenómeno colaborativo y los tipos de racionalidad cumplen un rol esencial en la relación Estado-organizaciones.

Esta investigación planteó la hipótesis de que aquellas organizaciones que poseen dinámicas de tipo cooperativo sopesan o equilibran de manera más efectiva la racionalidad instrumental y con arreglo a valores. Sin embargo, el lector puede hacer el siguiente y razonable cuestionamiento: ¿cuándo se presenta una forma de racionalidad-acción y se descarta otra?

Ciertamente, va a depender mucho de las instancias, los nexos que se establecen, los recursos que están en juego, etc. En ese sentido, la respuesta provisoria se encuentra al nivel de la cooperación que se decida estudiar. La cooperación con arreglo a valores funciona a un nivel intragrupo, donde la cercanía y la pequeña cantidad de integrantes, como se destacó anteriormente, favorece las sanciones positivas y, por tanto, la disposición a cooperar con el resto de los

participantes, fortaleciendo la red de relaciones (cohesión).

La acción instrumental, en cambio, se desenvuelve en un nivel extragrupal. Así, mientras las organizaciones capten, usen y administren los recursos recibidos por el Estado, podemos estar en presencia de una acción racional con arreglo a fines.

4. Mundo simbólico del trabajo: la labor artesanal como fin autotélico y de autorrealización

La significación del trabajo es y ha sido fundamental al momento de definirnos y presentarnos al resto, pues buscamos en él una fuente de reconocimiento. Las investigaciones recientes han constatado fuertes y profundas configuraciones en la manera en que los trabajadores interpretan su trabajo, especialmente en el empleo asalariado. Estos cambios se han presentado principalmente a través de un miedo generalizado y sostenido al despido, y un ambiente laboral caracterizado por la filosofía de la competencia, que conduce finalmente a la conflictividad y desconfianza (Araujo, 2016).

La significación del trabajo para aquellas personas que no se encuentran en una relación asalariada se ha visto mermada de otras maneras. Esta investigación presenta y constata discursos con un fuerte componente emocional y “holístico” al momento de interpretar las labores que las integrantes de una organización comunitaria realizan.

“Eeeh... es como todo, es como toda mi vida, porque cuando me voy al invernadero me olvido de hacer almuerzo, de... [risas] me fascina trabajar con las plantas, me entusiasma, me gusta mucho ver cómo se reproducen, cómo aparece la nueva planta, eso me llena, es mi vida, sí”
(“Manos del Biobío”, integrante N°4, entrevista semiestructurada).

Como se puede observar, la integrante expresa fascinación y entusiasmo al poner en marcha su trabajo. En este sentido, su labor no es un simple componente de su vida, al contrario, la vida misma es el trabajo que realiza. Es por esto que se clasifica este discurso como uno de tipo holista, puesto que tiene un rol totalizante en las experiencias de las participantes. Otro relato reafirma lo anterior.

“Para mí es todo, no me imagino hacer otra cosa, moriré haciéndolo, me engrandece como persona, es lo que siempre quise hacer, esa era mi aspiración. Hay mujeres que ellas aspiran a tener hijos, casarse: yo no, quiero ser artesana hasta que muera”
(entrevista semiestructurada, Arauco).

Una vez más, queda expresado el nivel o intensidad con que el trabajo es concebido. La participante narra su labor como una tarea que no está dispuesta a cambiar. Estos relatos pueden ser comprendidos como hallazgos de gran importancia, ya que evidencian una forma de concebir el trabajo distinta de aquella a la que estamos acostumbrados, que tiende a caracterizarlo como una labor extenuante y tediosa.

En lo que concierne a este trabajo investigativo, se asume y defiende una concepción amplia del concepto de trabajo. En este sentido, es aquel que considera las tres dimensiones: cognitiva-instrumental, práctica-moral y estética-expresiva (Noguera, 2002). Cada una de estas dimensiones puede adquirir mayor relevancia dependiendo de las condiciones de trabajo y la manera en que los trabajadores interpretan su vida en este.

Si nos guiamos por los relatos, podemos constatar que la dimensión que prevalece es la estética-expresiva. Cuando Noguera (2002) defiende esta concepción ampliada de trabajo, básicamente afirma que no toda actividad es puramente instrumental, sino que pueden existir elementos autotélicos, es decir, contener en sí mismos su propio fin.

De esta manera, lo estético-expresivo, utilizando el razonamiento del mismo autor, implica comprender que el trabajo permite autoexpresión y autorrealización. En consecuencia, los relatos que las participantes hacen contienen un componente de autorrealización asociado a las labores que desarrollan diariamente.

En los pasajes anteriores fue posible constatar el componente emocional, holístico y autorrealizador que reside en el trabajo. Así, para la lógica de la economía neoclásica, el foco de atención estaría centrado solo en la optimización de la producción y posterior comercialización. Es decir, un fin meramente instrumental y, además, limitado. Finalmente, el siguiente relato, a diferencia del resto, compara la producción artesana-

nal y aquella realizada en serie. Se trata de una distinción significativa:

“Sí, sí, de todas maneras, lo que le decía yo, de repente uno dice, ‘ya, hice un gato, pero no sé, en una fábrica hacen dos mil gatos y no pasa nada, yo hago un gato, pero yo adoro mi gato y yo voy a vender algo que hice con tanto cariño, con tanto amor, que eso, yo creo, que siento yo, por lo menos, que se tiene que transmitir a la gente, yo no pudo vender un producto que no sea tan superficial, no sé, pero tiene otro, otra elaboración, uno lo hace con cariño, le pone, qué sé yo, los detalles. En cada cosa que uno le pone a su producto, le pone un poquito de uno también en el producto, eso”
(“Manos del Biobío”, integrante N°5, entrevista semiestructurada).

La narración anterior refuerza la idea de que el trabajo desarrollado por estas mujeres posee un componente que no se reduce únicamente a la estricta objetivación (trabajo realizado), pues la producción de tipo artesanal agrega un elemento diferenciador. O sea, por más que la producción en serie objetiva el trabajo, concretando un mismo objeto-mercancía, no cuenta con el componente emocional que solo la actividad descrita por la participante logra.

Ahora bien, con el relato presentado anteriormente y con los discutidos en otros apartados de esta investigación podemos observar lo que particulariza a las economías sociales y sirve de fundamento a estos datos. Esto es, que “neutralizan el mecanismo estructural que separa y contrapone los procesos de producción, gestión y apropiación” (Gai-

ger, 2018, p. 87). Si bien estos procesos del trabajo refieren al campo objetivo, es indudable que tienen repercusiones subjetivas sobre los trabajadores al momento de interpretar sus labores.

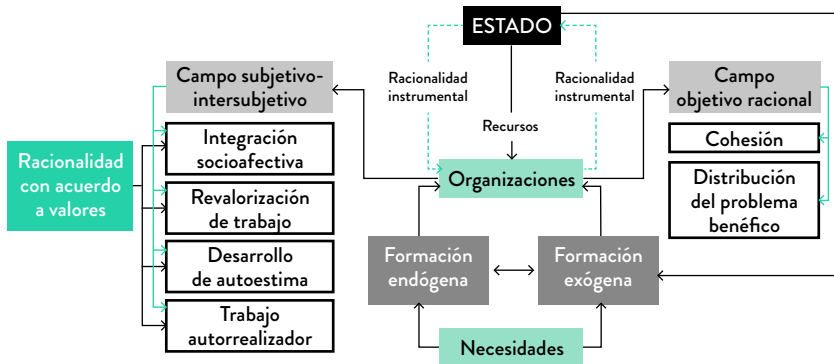
En relación con lo anterior, estas repercusiones subjetivas no son mecánicas, sino que implican antecedentes que tienen un impacto en la subjetividad a la que tienden o que puede desarrollarse. Wright (1992), citando pasajes de Marx, habla constantemente de la experiencia del trabajador. Así, frente al ya discutido fenómeno de la alienación, lo que ahí se produce básicamente es la pérdida del trabajador sobre el trabajo (Wright, 1992). Y esto es justamente lo que no ha ocurrido con las participantes, ya que su labor artesanal y la actividad que desempeñan en la organización les permite “reunificar” todos los procesos divididos o segmentados del trabajo. Es decir, producir lo que ellas realmente quieren,

comercializar en los términos que más justos y necesarios les parezcan y, finalmente, apropiarse de los resultados de su trabajo en el sentido más amplio de lo que trabajo significa.

En síntesis, las participantes de las diferentes organizaciones internalizan sus labores de manera profunda, asignando un fuerte componente emocional, holístico y autorrealizador a su trabajo. Además, el conjunto de relatos analizados permite reflexionar sobre las maneras en que “todas” las etapas y labores del trabajo tienen indudables impactos en la forma en que este puede interpretarse. En este caso, se trata de un trabajo que no es alienante ni enajenador.

A continuación, se presenta un esquema que tiene por objetivo presentar, sintetizar y describir los principales resultados alcanzados durante esta investigación.

Esquema 1. Uso y condicionamiento de las racionalidades



Fuente: elaboración propia.

Como se especificó al inicio de este artículo, las necesidades no solo han de ser comprendidas como carencia, sino que también como potencialidad, pues en estos contextos derivan en la posibilidad de conformar organizaciones de tipo autogestionado.

Ahora bien, la formación puede darse en distintos planos, es decir, a partir de las voluntades de los potenciales integrantes o bien, como un proceso de carácter más coercitivo por parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, ya sea para el primer o segundo caso, nos parece que lo relevante es tener presente que ambas situaciones pueden darse conjuntamente, de ahí que señalemos esta relación mediante una flecha de tipo bidireccional.

Posteriormente, y con un fin más didáctico, hemos clasificado las consecuencias del trabajo autogestionado en dos categorías. Una referente al campo subjetivo e intersubjetivo y otra al objetivo relacional. No está de más aclarar que esta es una clasificación de corte estrictamente analítico, por ende, no debería extrañar que determinadas categorías puedan ser útiles en uno u otro campo, o bien, en ambos de manera simultánea. En este sentido, se presentan varias subcategorías en el campo subjetivo e intersubjetivo, categorías que ya han sido discutidas en las secciones anteriores. No obstante, una observación relevante es que estas también pueden agruparse y a su vez explicarse por medio de la racionalidad con acuerdo a valores. Recordemos que dicha racionalidad se centra en un plano normativo, donde la acción en sí misma es conside-

rada por el sujeto u organización como necesaria de ejecutar.

Por otra parte, contamos con un plano objetivo relacional. Aquí lo sustancial deriva en dos consecuencias. Por una parte, destacamos el plano de la cohesión, específicamente el rol de las sanciones positivas, las que fortalecen el plano de la cooperación. Mientras, en otros casos, la cooperación permite afrontar las diferentes problemáticas a las que cada organización se enfrenta. A su vez, esta cooperación se vuelve fundamental para que las agrupaciones puedan, al menos como posibilidad, distribuir los distintos beneficios del trabajo colectivo.

Finalmente, este mismo esquema destaca una vez más que las agrupaciones pueden moldear sus prácticas con el fin de percibir, sostener o generar recursos nuevos. Esta investigación constata que el recurso más citado corresponde al de capacitaciones. A pesar de esto, parece más correcto optar por el concepto de recurso que por el de capacitaciones, puesto que buscamos establecer ciertas generalidades en torno a los análisis. Así, si el concepto no corresponde al de capacitación, continuaría siendo un elemento de valor requerido por las asociaciones. En este sentido, y como ya fue mencionado, estamos en presencia del fenómeno de co-instrumentalización, donde el Estado y las organizaciones moldean sus prácticas para el logro de determinados objetivos, recalcando y no olvidando las tremendas diferencias de poder entre uno y otro agente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El trabajo que aquí se presentó ha significado un reto desde diferentes puntos de vista, pero, en general, ha permitido estimular y aportar a un campo profundamente fértil de conocimiento, uno que resulta políticamente necesario. Más aún en nuestro contexto de movilizaciones sociales iniciado en octubre de 2019, cuando los temas relacionados con pobreza, vulnerabilidad y desigualdad han alcanzado un punto de máxima sensibilidad y se han vuelto cruciales para una ciudadanía que exige un paquete de medidas sociales y participar en la construcción de las políticas a adoptar, como nueva Constitución, asamblea constituyente y la garantía de determinados derechos sociales desde el Estado.

En ese sentido, la intención de este artículo es realizar un pequeño aporte a la discusión en torno a iniciativas sociolaborales ancladas en diferentes comunas ya señaladas. Como hemos observado a lo largo del texto, la conformación de agrupaciones en la región del Biobío y Ñuble ha implicado un impacto positivo en la vida social de sus integrantes, permitiendo, entre otros fenómenos, la integración socioafectiva y formas de asociación económica conectadas con principios y acciones solidarias.

El punto anterior también nos permite reflexionar, una vez más, sobre el modo en que la economía está unida a otros factores, los que no solamente están relacionados con la productividad o racionalidad de tipo instrumental. Un buen

ejemplo de esto es la discusión en torno a las AFP y el principio de solidaridad. Ahora bien, los análisis también nos permiten realizar distinciones que nos parecen clave respecto a las muestras. Primero, “Manos del Biobío” tiene un discurso más definido como organización, lineamientos más claros y una posición “política” más definida, que se identifica con la lógica del comercio justo.

No obstante, si se compara a la asociación “Manos del Biobío” con el resto de las organizaciones, es posible observar en estas últimas un discurso más articulado y cohesionado entre sus integrantes, uno donde la promoción de la solidaridad es más evidente. Por ende, cuentan con un elemento que posibilita enmarcar su trabajo en la economía social y que nos permite una vez más defender el enfoque utilizado.

Además, esta investigación ha dado cuenta de la manera en que ejecutan y articulan determinadas formas de racionalidad, un tema central durante este análisis. Así, se constató que la racionalidad con arreglo a valores es clave para la estabilidad interna y guía las prácticas de las distintas organizaciones, estén o no instituidas formalmente. Señala, además, que no solo el Estado opera instrumentalmente, sino que las organizaciones también pueden adoptar este tipo de aproximación para captar determinados recursos, lo que fortalece la idea de co-instrumentalización que funciona a un nivel extragrupal.

Es relevante saber qué tan importante consideran las mismas integrantes la organización a la que pertenecen. Esto es, detectar la presencia de un relato

que busque no solamente fortalecer las competencias a un nivel individual, discurso bastante utilizado, sino también aquellas referidas a lo colectivo o, en otras palabras, a la autogestión.

Por tanto, parece fundamental el rol que juega el Estado para promover e impulsar estas organizaciones. Sin embargo, dicha promoción debe ser bastante cuidadosa. Primero, porque el desarrollo de una política de este tipo ha de incorporar un discurso no solamente centrado en la carencia o necesidad de las personas o agrupaciones, es decir, en el tener, sino que uno que incorpore la dimensión del hacer, donde lo que efectivamente se busque lograr o alcanzar sea el mejor manejo de los recursos recibidos por las agrupaciones. En segundo lugar, y muy íntimamente relacionado con el primer punto, es indispensable no fomentar una política de la dependencia.

Existe un discurso o narración que da cuenta de que las tareas realizadas cuentan con un amplio apoyo, lo que permite la promoción de una actividad autorrealizadora. Este discurso (las investigaciones pueden respaldarlo) tiene sentido cuando se piensa que se trata de actividades profundamente ancladas en las biografías de las participantes. Sin embargo, parece necesario agregar que “todas” las etapas del trabajo son llevadas a cabo por las organizaciones, lo que permite afirmar que el trabajo no se vuelve una actividad enajenante.

Para el caso de esta investigación, las recomendaciones realizadas buscan ampliar el enfoque con el cual las instituciones del Estado se relacionan y

operan con las distintas organizaciones. Primero, los distintos organismos institucionales y programas de apoyo, como Sercotec, Prodesal, Prodemu y Fosis (mencionados en los relatos), deben ampliar su repertorio de diagnóstico. Es decir, no pueden limitarse solo a la carencia cuantitativa (entrega de apoyo económico) y a la dimensión técnica de las capacitaciones. En este sentido, parece crucial que las instituciones se adentren en aspectos inmateriales relacionados con el reforzamiento del ser, como la autoestima. Esto puede generar condiciones que ayuden a la perdurabilidad y cohesión de las organizaciones, tal como muestra el ejemplo de la agrupación de Tirúa.

Adicionalmente, es crucial que las instituciones que busquen apoyar iniciativas de índole asociativa cuenten con mayor coordinación entre sí y canales de información claros. Varias instituciones tienen por objetivo brindar apoyo económico y asesoría técnica, acción que sin duda es relevante. Sin embargo, las mismas instituciones pueden ampliar y facilitar nexos con otros organismos estatales cuando observen elementos que pueden fortalecer y estos, ya sea por ley o facultades, escapan a sus deberes. Así, Prodesal puede establecer canales y nexos con Prodemu y viceversa, dependiendo de las circunstancias de cada caso y siempre en función de las asociaciones.

Finalmente, se evidencia un nivel importante de cohesión entre las asociaciones, el cual es fundamental para su continuidad y desarrollo. Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre la necesidad de indagar en la profundidad

de la defensa y promoción del trabajo asociativo, pues en la mayoría de los relatos destaca, más que lo comunitario, la valoración de la capacitación entregada para fortalecer habilidades individuales. Si bien en “Manos del Biobío” existe una autopercepción colectiva o grupal, no se logra apreciar en ella el mismo componente de solidaridad que se advierte en el resto de las agrupaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- **Álzate, M. y Betancur, J. (2014).** Caracterización de unidades productivas asociativas del programa de economía solidaria de la alcaldía de Medellín. *Semestre económico*, 17(36), 101-132. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012063462014000200006&lng=en&lng=
- **Araujo, K. (2016).** *El miedo a los subordinados* (1ª ed.). Santiago: LOM.
- **Atria, R. (2012).** La sociología weberiana. En: Avendaño, O., Canales, M. y Atria, R. (2012). *Sociología, introducción a los clásicos: K. Marx, E. Durkheim, M. Weber* (1ª ed.). (p. 111-152). Santiago: LOM Ediciones.
- **Baquero, M. (2004).** Capital social. En *Cattani, A. La otra economía* (51-58). Argentina: Editorial Altamira. Recuperado de <https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/Laotraeconomia.pdf>
- **Billason, V., Gendron, C., Navarro-Flores, O. y Torres, A. (2013).** *El comercio justo: hacia nuevas formas de gobierno en el intercambio global* (1ª ed.). Santiago: LOM Ediciones.
- **Chávez, R. y Monzón, J. (2008).** Panorama de la investigación en economía social. *Estudios de Economía Aplicada*, 26 (1), 29-56. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30114081002>
- **Cid, B. (2018).** Agroexportación orgánica en Chile: deseos sustantivos, formalización de las prácticas y relaciones neocoloniales. *Agroalimentaria*, 24(46), 23-39.
- **Coraggio, C. (2016).** La economía social y solidaria (ESS): niveles y alcances de acción de sus actores. El papel de las universidades. En: Puig, C. *Economía Social: conceptos, prácticas y políticas públicas* (p. 15-40). Bilbao: Hegea; Donostia-San Sebastián: Euskal Herriko Unibertsitatea; Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco. https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/libro_ess.pdf
- **Gaiger, L. (2018).** El sentido metautilitarista de la economía social y solidaria. En: Meyer, R. *Ensayos sobre economía cooperativa, solidaria y autogestionaria* (p. 19-48). Proviencia, Santiago: Editorial Forja.
- **Hoinle, B., Rothfuss, R. y Gotto, D. (2013).** Empoderamiento espacial de las mujeres mediante la economía solidaria. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 10 (72), 117-139. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-14502013000300007&lng=en&lng=
- **Jaime, M. y Salazar, C. (2009).** Capital social y eficiencia técnica de los pequeños agricultores de trigo de la Región del Bío Bío. Recuperado de <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/17220/>
- **Linares, F. (2018).** *Sociología y teoría social analíticas*. Madrid: Alianza Editorial.
- **Lozares, C., Verd Pericàs, J. M., Martí, J., López-Roldán, P. & Molina, J. L. (2011).** Cohesión, vinculación e integración sociales en el marco del capital social. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 20 (1), 1. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.407>
- **Max Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (2010).** *Desarrollo a escala humana: opciones para el futuro*. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/10584600802686105>

- **Meyer, R. (2017).** Economía cooperativa, solidaria y autogestionaria: constantes y emergencias (una perspectiva histórica-analítica). En: Meyer, R. *Ensayos sobre economía cooperativa, solidaria y autogestionaria* (p. 19-48). Providencia, Santiago: Editorial Forja.

- **Monares, A. (2018).** La solidaridad imposible. Economía y naturaleza egoísta del ser humano. En: Gómez, N., Richards, H., Giovanni, M., Ochoa, M. y Monares, A. (2018). *La economía de los invisibles: miradas y experiencias de economía social y solidaria* (p. 149-174) Ril Editores.

- **Mutuberría, V. (2003).** El debate en torno a la economía social: discusiones fundamentales desde la perspectiva de los países centrales y la perspectiva de los países de la periferia. *Idelcoop*, 35 (183), 22-36. https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/2008_215779966.pdf

- **Noguera, J. (2002).** El concepto de trabajo y la teoría social crítica. *Papers: Revista de Sociología*, (68), 141-168.

- **Schmidt, D. y Perius, V. (2004).** Cooperativismo y cooperativa. En: Cattani, A. *La otra economía* (109-124). Argentina: Editorial Altamira. Recuperado de <https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/Laotraeconomia.pdf>

- **Searle, J. (1997).** *La construcción de la realidad social*. Barcelona: Paidós.

- **Vieytes, R. (2004).** *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas* (1ª ed). Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.

- **Wright, E. (1992).** *Reflexionando, una vez más, sobre el concepto de estructura de clase*: Zona Abierta.



COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: DEMOCRATIZANDO LA BANCA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Pedro Hepp Castillo¹,
Universidad Técnica Federico Santa María

RESUMEN

La presente investigación hace un análisis de la situación de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) de la región de Valparaíso con el fin de determinar las barreras y desafíos a los que estas instituciones se enfrentan en el contexto actual. Para ello, se aplicó una metodología mixta que incluyó encuestas y grupos focales a socios de las distintas cooperativas y a integrantes de los consejos de administración. Por medio de la información recolectada se caracterizó a los usuarios de las cooperativas por nivel socioeconómico y se analizaron los usos y/o destinos de los créditos otorgados. Esta investigación entrega luces sobre los aspectos simbólicos que rodean a las cooperativas de ahorro y crédito y que son muy valorados por las personas, quienes destacan atributos como familiaridad y confianza, gatillados por características intrínsecas de estas instituciones. Por último, se analizan aspectos relacionados con los desafíos que enfrentan las cooperativas de ahorro y crédito en Chile con respecto a su administración y a distintas tensiones generadas por el crecimiento y la profesionalización. Este trabajo fue realizado con el fin de aportar a un modelo que no solo busca que las instituciones bancarias sean económicamente estables, sino que sean instituciones de control democrático que posibiliten la bancarización de un sector que ha sido históricamente relegado.

Palabras clave: cooperativismo, cooperativas de ahorro y crédito, solidaridad, caracterización.

¹ Ingeniero civil industrial, Universidad Técnica Federico Santa María. El presente artículo está basado en la tesis "Características del sistema cooperativo de ahorro y crédito en Chile", realizada para optar al título de ingeniero civil industrial, Departamento de Industrias, UTFSM. Profesor guía: Jorge Cea. Profesores correferentes: Juan Felipe Espinoza y Paulina Santander. Esta investigación contó con el apoyo del proyecto Fondecyt N°11140432.

INTRODUCCIÓN

Las cooperativas son empresas creadas por grupos de personas con el propósito de satisfacer una necesidad en común. La estructura de las cooperativas incluye una junta general de socios, donde se toman las decisiones más importantes, un consejo de administración y la gerencia, que ejecuta lo mandado por las instancias anteriores. La particularidad de las cooperativas es que todos sus integrantes pueden votar de igual manera en la junta general de socios, independientemente del capital que hayan aportado. Así, estas asociaciones económicas presentan algunas características que las distinguen de otros tipos de empresas: (i) distribuyen equitativamente las utilidades de la empresa; (ii) enfrentan solidariamente las crisis económicas, permitiendo que muchas personas conserven sus trabajos; (iii) alientan el desarrollo económico autónomo de sectores populares.

Algunos organismos sostienen que las cooperativas son una buena opción para diversificar la matriz productiva de una localidad o un país mediante la inclusión de nuevos actores. También aportan valores democráticos y solidarios que vertebran un tipo de economía y sociedad diferente (Cooperativas de las Américas, 2015), cubren algunos vacíos que deja el sector público y privado y hacen retroceder las políticas de asistencia/subordinación al fomentar la satisfacción de necesidades a través de la autogestión.

El origen de este tipo de empresas se remonta a la Inglaterra del siglo XIX. Más tarde, su modelo se exportó a distintas partes del mundo, impulsado por la vocación democrática de su gestión. En Chile, las primeras cooperativas aparecieron en el año 1887 en la ciudad de Valparaíso. Casi 40 años más tarde, en 1924, se creó la primera ley que las regulaba y alentaba su conformación (Ley N°4.058). Quizás el periodo de mayor y más rápido crecimiento del sector se produjo en zonas rurales al alero del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Posteriormente, el movimiento cooperativo comenzó a decaer tras la victoria de la Unidad Popular, ya que en ciertos sectores del conglomerado se consideraba que eran una forma encubierta de capitalismo. En dictadura, las cooperativas fueron abiertamente perseguidas debido a su asociación con movimientos de reforma y sectores populares (Uralde, 2006).

Con la vuelta a la democracia, el movimiento cooperativo experimentó una lenta reactivación. Recién durante la década del 2000 el sector logró un mayor dinamismo gracias a la creación del Departamento de Asociatividad y Economía Social (Daes), la promulgación de la nueva Ley N°19.832 de cooperativas en 2003 y la digitalización de los trámites de gestión asociativa².

Aunque en Chile existen algunas cooperativas con alto nivel de desarrollo como Colun, Capel y Coopeuch, el sector aporta solo el 1% al PIB nacional

(Idea País, 2018). El sector cooperativo nacional presenta un desarrollo mucho menor en comparación con otros países (World Cooperative Monitor, 2014). En Alemania y Estados Unidos, una de cada cuatro personas es integrante de una cooperativa y cuatro de cada 10 lo son en Canadá (División de Política Comercial e Industrial, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014). En Chile, solo una de cada diez personas integra este tipo de iniciativas (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2019). Según datos del Departamento de Cooperativas, en 2017 había 1.403 cooperativas vigentes y activas. El 52,3% del total corresponden a cooperativas de servicios, seguidas por las agrícolas, campesinas y pesqueras (27,9% del total), las de trabajo (18,4%) y las confederaciones y federaciones, con un 1,4% (Decoop-Chile, 2017).

De todas ellas, el presente estudio se centra en las cooperativas de ahorro y crédito (CAC), que corresponden a aquellas catalogadas como de servicios. Las CAC son asociaciones autónomas que buscan satisfacer las necesidades bancarias de sus asociados por medio de la administración de ahorros y la entrega de créditos. Estas instituciones exhiben similitudes con los bancos tradicionales, pero también guardan grandes diferencias. Un ejemplo de ello son las condiciones relacionadas con sus políticas de riesgo, que les permiten aceptar a personas que han sido rechazadas por los bancos tradicionales. Además, como

en otras instituciones cooperativas, toman sus decisiones de manera democrática, con la participación de todos sus socios, independientemente de su capital (División de Política Comercial e Industrial, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014).

Las cooperativas de ahorro y crédito han sido reconocidas como un factor importante de desarrollo en las economías emergentes (Cicopa, 2014) y en los últimos años han experimentado un crecimiento sustancial. Un ejemplo de ello es Coopeuch, la cooperativa más grande de América Latina, con activos equivalentes a 2.160 millones de dólares para el año 2016. Sin embargo, a nivel local, representa apenas el 0,9% del sistema financiero nacional, mientras que en otros países de la región las CAC cuentan con un nivel menor de activos, pero con una participación en el sector que supera el 10%, como es el caso de Ecuador (18,37%), El Salvador (13,37%), Paraguay (10,83%), Costa Rica (10,09%), etc. (Confederación Alemana de Cooperativas, 2017).

En el contexto descrito, y con el propósito de potenciar el sector, resulta necesario estudiar y caracterizar la situación de las CAC en Chile. Falta investigación sobre las razones que llevan a las personas a asociarse a ellas, qué beneficios conlleva pertenecer a cierta CAC y cuáles son los mayores desafíos de gestión que enfrentan en la actualidad.

² Esta es una de las deudas más importantes saldadas por el Gobierno según los movimientos cooperativos, ya que cualquier modificación estatutaria demoraba mucho tiempo, obstaculizando muchos procesos administrativos y de fomento.

MÉTODO

Para realizar este estudio se entrevistó y encuestó a socios de CAC de la región de Valparaíso. Se utilizó un modelo mixto que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social. Para abordar la producción de datos de tipo cuantitativo, se aplicó una encuesta mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Por su parte, para la captura de relatos y reflexiones se usó la técnica de grupos focales. El proceso de análisis de información cualitativa se llevó a cabo con el apoyo del software Atlas.ti. Para la aplicación de encuestas se ocupó el recurso en línea Survey-monkey y para el procesamiento de la información cuantitativa, el programa Stata.

Capítulo cualitativo. Según Edmunds (1999), los grupos focales son espacios de conversación entre varias personas, de carácter semiestructurado y orientados por tópicos y preguntas de carácter general y/o abierto. Dan espacio para que surjan temas emergentes que son desarrollados por los participantes. Cuentan con un moderador que entrega el contexto de la conversación y facilita el diálogo mediante el desarrollo de interrogantes.

Para esta investigación se desarrollaron cuatro grupos focales, uno por cada cooperativa que registra su casa matriz en la región de Valparaíso.

Tabla 1. Listado de CAC estudiadas en la región de Valparaíso

Cooperativa de ahorro y crédito	San Felipe	Santa Inés	Lautaro Rosas	Somnaval
Socios	11.586	7.651	7.355	3.249
Comuna	San Felipe	Viña del Mar	Valparaíso	Valparaíso
Fiscalizada por³	Daes	Daes	CMF	Daes

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Daes.

Del total de CAC de la región, solo se pudo realizar grupos focales en cuatro, debido a que fue imposible contactarse con dos de ellas y coordinar el trabajo de levantamiento de datos. Se dividió la muestra en dos grupos de asociados: con y sin cargo dentro de la organiza-

ción, bajo el supuesto de que sus experiencias y reflexiones pueden variar debido al lugar diferente que ocupan en la estructura interna. En los grupos focales de los socios sin cargo participaron entre cuatro y doce personas por sesión. La invitación se cursó a través de las

³ Es importante esta variable, ya que las cooperativas que están fiscalizadas por la Daes tienen menores requisitos relacionados al riesgo de sus socios, a diferencia de lo que ocurre con las que están supervisadas por la CMF, a las cuales se les exige un control igual a una entidad bancaria tradicional. Esta diferencia es crucial para definir el público que atiende cada una de las cooperativas.

CAC. En el caso de los grupos focales de socios con cargo, se invitó a los miembros de los consejos de administración, buscando que el grupo focal calzara con

alguna de sus sesiones regulares. Los grupos de personas con cargo mantuvieron una asistencia de entre ocho y doce personas.

Tabla 2. Número (desagregado por CAC) de personas participantes en los grupos focales

Cooperativa / tipo de socio	Coopacsi	Lautaro Rosas	Sanfecoop	Somnaval	Total
Sin cargo	6	7	6	4	23
Con cargo	6	-	5	12	23
Total	12	7	11	16	46

Fuente: elaboración propia.

Entre otros temas, se abordó: (i) los factores que inciden en la afiliación a las CAC; (ii) sus estrategias de visibilización; (iii) la percepción hacia las CAC y otras entidades bancarias; (iv) su visión sobre personal calificado y participación (para los socios sin cargo); (v) fortalezas y debilidades de las CAC; (vi) perfil de las personas que asumen cargos; (vii) percepción sobre fiscalización; (viii) participación; y (ix) problemas dueño/socio (para los socios con cargo).

Capítulo cuantitativo. Dado que el estudio que se realizó fue de naturaleza exploratoria, se decidió utilizar el tipo de muestreo no probabilístico. En este tipo de investigaciones solo se pueden obtener conclusiones relativas a la muestra estudiada y no es posible estimar parámetros poblacionales (Casal & Mateu, 2003).

Las 23 preguntas de la encuesta recogieron datos sobre: (i) confianza en instituciones; (ii) finalidad de créditos; (iii) caracterización socioeconómica; (iv)

inclinación/aversión a la cooperación y confianza en las cooperativas.

A diferencia de la sección cualitativa, la encuesta se aplicó a socios de CAC de la región de Valparaíso y de todo el país. La extensión territorial se justifica por la mayor facilidad de extraer datos a través de plataformas digitales. Además, el carácter exploratorio de este estudio convoca a dar luces generales, sin diferenciación territorial. En total, se recolectaron 409 encuestas, de un universo de 56.535 socios a nivel regional y de 1.268.437 socios a nivel nacional. Se hizo necesario utilizar dos métodos para levantar la información: (i) un medio digital, a través del sistema SurveyMonkey, que permite llegar a un número grande de personas con un nivel de inversión baja; y (ii) encuestadores en los casos de las CAC de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.

Para otorgar mayor profundidad al análisis de los datos se procedió a clasificar a las personas encuestadas según nivel

socioeconómico (NSE), utilizando la definición de NSE propuesta por la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) en 2013, que divide a las personas en ABC1, C2, C3, D y E a partir de su nivel educacional y ocupación. Quedó pendiente el desafío de analizar los datos con pobreza multidimensional.

RESULTADOS

A continuación, se entregan algunos de los resultados más relevantes de la investigación, organizados en dos secciones. En la primera se caracteriza a los socios de las cooperativas y se entregan datos sobre el sexo de los/las socias/os, la relación que cada uno de ellos tiene con la institución y el destino de los créditos solicitados. En la segunda se presentan los resultados de los grupos focales aplicados a socios/as con cargo y socias/os sin cargo y se analizan los desafíos que enfrentan las CAC en la región, que refieren, entre otros, al problema de su crecimiento, la contratación de personal calificado, la fiscalización y algunas barreras adicionales.

1. Caracterización de los socios y socias de las CAC

Para empezar, el promedio de edad de los socios y socias de las CAC es de 47 años, 45,6% son hombres y 54,4%, mujeres. Se constata que la mayor cantidad de socios cooperados pertenece al nivel socioeconómico (NSE) medio y que el grupo C2 (81 personas encuestadas) y C3 (72 personas encuestadas) suman el

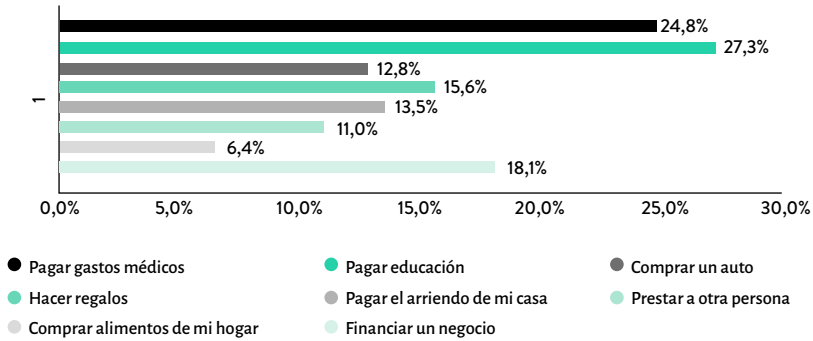
50,5% del total de socios y socias de las CAC. El segundo NSE más frecuente es el bajo, donde se agrupa el segmento D (74 personas) y E (7 personas encuestadas), alcanzando el 33,33%. Por último, se advierten 48 personas pertenecientes al NSE medio alto o C1.

Es necesario advertir que estos datos indican la presencia de un sesgo en los resultados que se presentan a continuación, ya que la mayor cantidad de respuestas obtenidas provienen de los grupos C2 y D (28,7% y 26,2%, respectivamente). En consecuencia, tendrían un mayor peso a la hora de analizar ciertos datos.

1.1 Usos y/o destinos del crédito

Una primera constatación es que una alta proporción de los préstamos suele ser utilizada para satisfacer necesidades de cuidado y desarrollo familiar. Un 27,3% de los créditos se usaron para cubrir gastos en educación y un 24,8% se destinaron a temas médicos y de salud. Este resultado es muy interesante, ya que si se analiza la estructura de gastos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, los desembolsos en educación están lejos de los primeros lugares (INE, 2018).

Gráfico 1. Uso de crédito de los socios



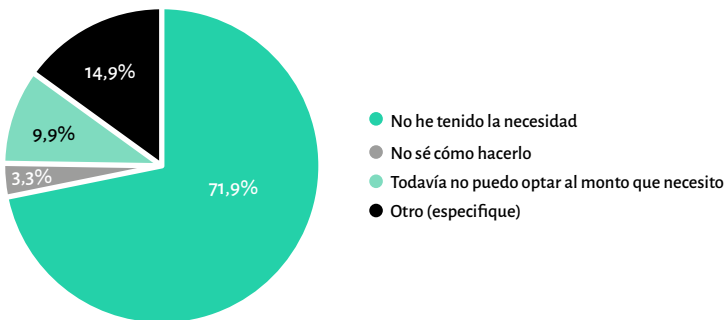
Fuente: elaboración propia.

Recién en el tercer lugar aparece el financiamiento de algún negocio. Este resultado es llamativo porque no guarda consonancia con estudios hechos en otras latitudes sobre uso crediticio (Sharma, 2005), que indican un uso mayoritario de este tipo de instrumentos para financiar negocios agrícolas. En el caso de la muestra estudiada, los créditos de este tipo (para financiar un negocio) se concentran principalmente en el área de comercio, compra y venta de artículos, y transporte. Esto podría

explicarse por la naturaleza urbana de las cooperativas de ahorro y crédito que participaron del presente estudio.

Pero no todos los socios y socias piden un crédito de forma regular. De hecho, un 29,7% no ha solicitado nunca uno. De este grupo, un 71,9% arguye que no ha tenido la necesidad, mientras que un 9,9% sostiene que desistió porque no accedería al monto que requería (Gráfico 2).

Gráfico 2. Razones por las que no se ha pedido crédito en la CAC

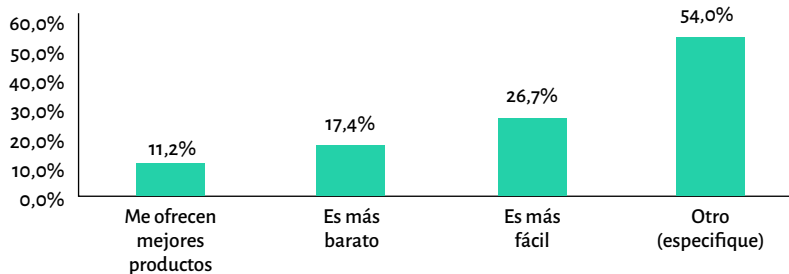


Fuente: elaboración propia.

Un dato interesante es que, si bien la mayoría de los encuestados ha solicitado créditos en su cooperativa, el 59,2% ha tramitado un crédito también fuera de esta. Un 26,7% señala que lo hizo porque es más fácil obtener créditos ex-

ternos. Dentro de la respuesta “otros”, la mayoría indica que lo hizo porque tuvo la oportunidad, lo que permite hipotetizar que los canales de difusión de los productos cooperativos no son tan eficaces como los usados por los bancos.

Gráfico 3. Razones por las que se pide crédito en otras instituciones



Fuente: elaboración propia.

1.2 Uso de crédito según género

La encuesta reveló que una buena proporción de los hombres suele utilizar el dinero de los créditos para financiar negocios y hacer regalos. Por su parte, las mujeres lo hacen para pagar educación y gastos médicos. Zelizer (2013) sostiene que estos resultados son coincidentes con los valores de la cultura en la que hemos crecido, que asigna responsabilidades y roles diferenciados según género, cuestión que también se expresa en el comportamiento del gasto. Según la autora, las mujeres suelen

destinar sus ingresos y gastos a fines domésticos y de cuidado, mientras que los hombres tienden a pagar arriendos e hipotecas. Resulta interesante observar una nueva peculiaridad: las mujeres encuestadas destinan, en promedio, un 16,2% de los créditos al pago de arriendos, a pesar de que, según la autora, este gasto estaría ligado a una actividad masculina. Es posible que el sistemático aumento en Chile de las jefaturas femeninas monoparentales esté influyendo en este comportamiento.

Tabla 3. Uso de crédito según género

Uso de crédito	Hombres	Mujeres	Total
¿Usó crédito para financiar un negocio?	20,9%	14,3%	17,4%
¿Usó crédito para comprar alimentos?	6,7%	5,8%	6,3%
¿Usó crédito para prestar a otra persona?	8,2%	13,0%	10,8%
¿Usó crédito para arriendo?	9,7%	16,2%	13,2%
¿Usó crédito para hacer regalos?	20,1%	11,0%	15,3%
¿Usó crédito para comprar auto?	14,3%	11,0%	12,5%
¿Usó crédito para pagar educación?	24,6%	28,6%	26,7%
¿Usó crédito para pagar gastos médicos?	18,8%	28,6%	24,0%
Total	100,0%	100,0%	100%

Fuente: elaboración propia.

Resulta interesante advertir que un 13% de las mujeres pidió créditos para prestar dinero y/o apoyar económicamente a otras personas. Los hombres también lo hacen, pero en una menor proporción (8,2%), lo que es indicativo de que la solidaridad y apoyo mutuo motivan una parte no menor del mercado de créditos cooperativos.

1.3 Cooperativa, género y comunicación

Como se aprecia en la Tabla 4, las mujeres tienden a expresar y compartir sus opiniones sobre las cooperativas y sus experiencias crediticias en una proporción mayor que los hombres. Un 68,9% de las mujeres declaró hablar sobre lo buena que es su cooperativa con otras personas. Solo un 59% de los hombres señaló lo mismo.

Tabla 4. Comportamiento verbal por género

Género		Masculino	Femenino	Total
¿Usted habla con parientes o amigos sobre lo buena que es su cooperativa?	Sí	59,0%	68,9%	64,4%
	No	41,0%	31,1%	35,6%
Total		100,0%	100,0%	100,0%
¿Usted habla con parientes o amigos sobre los problemas que tiene su cooperativa?	Sí	35,5%	40,3%	38,1
	No	64,5%	59,7%	61,9
Total		100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: elaboración propia.

1.4 Uso de crédito según nivel socioeconómico

Se sabe que un grupo mayoritario de socias y socios de las CAC son de NSE medio y bajo. Para profundizar en dicho análisis, se auscultó cuáles son los grupos socioeconómicos que más solicitan crédito en las cooperativas y para qué fines.

Tabla 5. Uso de crédito por NSE

¿Ha solicitado alguna vez un crédito en su cooperativa?		Sí	No	Total	
Nivel socioeconómico	E	% dentro del nivel socioeconómico	71,4%	28,6%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	2,5%	2,4%	2,5%
	D	% dentro del nivel socioeconómico	74,3%	25,7%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	27,9%	22,4%	26,2%
	C3	% dentro del nivel socioeconómico	63,9%	36,1%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	23,4%	30,6%	25,5%
	C2	% dentro del nivel socioeconómico	74,1%	25,9%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	30,5%	24,7%	28,7%
	C1	% dentro del nivel socioeconómico	64,6%	35,4%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	15,7%	20,0%	17,0%
Total	% dentro del nivel socioeconómico	69,9%	30,1%	100,0%	
	% dentro del total de respuestas	100,0%	100,0%	100,0%	

Fuente: elaboración propia considerando un total de 271 respuestas válidas.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los NSE C2, D Y E son los que más solicitan créditos en su cooperativa, con un 74,1%, 74,3% y 71,4%, respec-

tivamente. También se investigó si las personas han pedido crédito en otras instituciones.

Tabla 6. Uso de crédito (por NSE) fuera de la CAC

¿Ha solicitado alguna vez un crédito fuera de su cooperativa?		Sí	No	Total	
Nivel socioeconómico	E	% dentro del nivel socioeconómico	80,0%	20,0%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	3,7%	1,1%	2,5%
	D	% dentro del nivel socioeconómico	49,1%	50,9%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	24,8%	31,8%	27,9%
	C3	% dentro del nivel socioeconómico	56,5%	43,5%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	23,9%	22,7%	23,4%
	C2	% dentro del nivel socioeconómico	56,7%	43,3%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	31,2%	29,5%	30,5%
	C1	% dentro del nivel socioeconómico	58,1%	41,9%	100,0%
		% dentro del total de respuestas	16,5%	14,8%	15,7%
Total	% dentro del nivel socioeconómico	55,3%	44,7%	100,0%	
	% dentro del total de respuestas	100,0%	100,0%	100,0%	

Fuente: elaboración propia.

Los NSE D y E son los que solicitan más créditos en otras instituciones. Esto podría verse explicado por la alta carga financiera que soportan las familias de este grupo, proporcionalmente hablando, ya que suelen estar sobreendeudadas con distintos instrumentos (Banco Central de Chile, 2017). Esto podría representar una amenaza de fuga para las CAC, ya que existen distintas instituciones que abarcan estos niveles socioeconómicos, pero también es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo de productos para ese nicho de personas.

1.5 Uso de crédito según nivel socioeconómico

En este apartado se indaga en el destino de los créditos, desagregado por NSE. Según la literatura, deberían existir marcadas diferencias en este punto. En la Tabla 7, la nomenclatura DE, DD, DC3, DC2, DC1 corresponde al porcentaje dentro del NSE respectivo. Las columnas sin el prefijo D dan cuenta de los porcentajes de respuesta dentro del total de encuestados. En este caso, las respuestas fueron de selección múltiple.

Tabla 7. Uso de crédito por NSE

Usó crédito/NSE	DE	E	DD	D	DC ₃	C ₃	DC ₂	C ₂	DC ₁	C ₁
Financiar un negocio			18,2%	33,3%	21,7%	33,3%	8,3%	16,7%	16,1%	16,7%
Comprar alimento	20,0%	7,1%	9,1%	35,7%	4,3%	14,3%	10,0%	42,9%		
Prestar a otra persona	40,0%	10,0%	12,7%	35,0%	6,5%	15,0%	8,3%	25,0%	9,7%	15,0%
Pagar arriendo	40,0%	5,9%	10,9%	17,6%	23,9%	32,4%	18,3%	32,4%	12,9%	11,8%
Hacer regalos			18,2%	27,8%	17,4%	22,2%	18,3%	30,6%	22,6%	19,4%
Comprar auto			16,4%	37,5%	6,5%	12,5%	13,3%	33,3%	13,3%	16,7%
Pagar educación	40,0%	3,9%	20,0%	21,6%	21,7%	19,6%	31,7%	37,3%	29,0%	17,6%
Pagar gastos médicos			29,1%	36,4%	10,9%	11,4%	26,7%	36,4%	22,6%	15,9%

Fuente: elaboración propia.

Con la tabla anterior se puede comprobar que los niveles más vulnerables, en promedio, usan sus créditos principalmente para pagar educación, gastos médicos y prestar a otras personas. Los niveles medios, por su parte, los usan para pagar educación, arriendo y gastos médicos. En el caso del NSE C₁, los créditos suelen ser usados para hacer regalos, pagar educación y comprar vehículos. Así, los resultados son coherentes al compararlos con la encuesta de presupuestos familiares (INE, 2018), con la salvedad de los usos solidarios, donde el crédito se solicita para ayudar a otras personas, como ocurre en los sectores en situación de mayor pobreza⁴.

2. Percepciones y reflexiones de los socios de las CAC

En este capítulo se presentan los resultados de los grupos focales en los que participaron los socios de las cooperativas, segmentados en quienes ostentan cargos en ellas y quienes no. Se les hicieron dos preguntas generales: ¿por qué ingresan a las CAC? y ¿por qué se mantienen en las CAC? A partir de ellas se abordaron temas relacionados con (i) las razones de entrada, (ii) mecanismos de visibilización, (iii) crecimiento de su CAC, (iv) la percepción que tienen sobre su institución y otras, y (v) opinión sobre el personal calificado y la participación en la cooperativa.

⁴ En este estudio se entregan datos que señalan que, por ejemplo, la participación porcentual del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas y otros ítems asociados al financiamiento de la vivienda disminuye a medida que aumentan los ingresos. Lo contrario sucede con bienes y servicios que no son de primera necesidad, como la recreación y cultura o restaurantes y hoteles, donde el gasto es proporcionalmente mayor en los niveles socioeconómicos altos.

2.1. Percepciones de quienes no ostentan cargos en la organización

Las razones de entrada

La mayoría de los participantes manifestaron que su ingreso a las CAC se produjo por recomendación de algún amigo o familiar. Se destaca el boca a boca como el mecanismo preponderante de visibilización de las cooperativas estudiadas.

“Mi esposo era socio de la cooperativa y después se retiró porque él se fue a Melipilla, ¿ya? Y ahí me conocí yo con él, nos casamos y llegamos acá a Viña, y ahí me dice él: ‘ingresa a la cooperativa’. Y yo le digo: ‘pero ¿cómo, cómo se hace eso?’. Y me dijo: ‘anda y te haces socia, po’, dile que tú quieres hacerte socia’”

(grupo 1 de discusión de socios).

Muchas de estas cooperativas fueron fundadas bajo el mandato de alguna institución como la Iglesia católica o agrupaciones de marinos⁵. Estas invitaban a sus seguidores o trabajadores a unirse para conformar un grupo fundador que luego se dedicaba a reclutar nuevos socios entre sus familiares y amigos. Visto así, su génesis es muy coherente con la historia del cooperativismo latinoamericano postulada por Pérez (2003).

“Yo entré siendo muy joven porque una amiga me trajo, yo arrastré a toda mi familia y debido a eso mi hija está en la universidad, o sea, entró y yo le debo mucho a la cooperativa, porque, por los préstamos, todas esas cosas, salí adelante, mi hija ahora es, tiene su título, es ingeniera”

(grupo 1 de discusión de socios).

“Entonces lo acompañé a él [al sacerdote] y ahí estaba, que estaba formando una cooperativa y yo ya pertenecía también a una cooperativa de curas, pero en Puerto Montt, o sea, en Puerto Varas, porque ahí nació yo, en Puerto Varas, y me metí como socio, po’, y al poco tiempo andar, se abrieron otras cooperativas”

(grupo 4 de discusión de socios).

Se detectó que muchas personas ingresan al sistema cooperativo debido a que no son sujetos de crédito en la banca tradicional. Las cooperativas son valoradas por este atributo positivo, relacionado con su capacidad de acoger y apoyar, lo que implica un gran contraste con un sistema financiero tradicional insensible, impersonal e inalcanzable. Como ya se comentó, los socios de las cooperativas pertenecen generalmente a niveles socioeconómicos medios-bajos, que son el público objetivo de bancos asociados al negocio del *retail*, pero no de la banca tradicional.

De la misma forma, se pudo advertir que muchos de los asociados son personas de edad avanzada, quienes tampoco

⁵ Las cooperativas de ahorro y crédito Somnaval y Lautaro Rosas están constituidas por marinos, mientras que las cooperativas Andescoopy Santa Inés tienen una historia fundacional relacionada a la iglesia.

son sujetos de crédito en casas comerciales ni en los bancos. Esto se condice con lo sostenido por el Banco Central (2011), que señala que las CAC exhiben una exposición mucho mayor al riesgo que la banca tradicional, porque integran personas excluidas del sistema convencional. Esta actitud de acogida a los excluidos por el sistema tradicional potencia la percepción de que las cooperativas son “entes salvadores”.

“Cómo llegué a la cooperativa, yo llegué por un tema crediticio y en atención a algo muy importante, me gustaría hacer hincapié en relación a la apertura crediticia que tiene la cooperativa, que absorbe en alguna o en gran medida a la gente que tiene problemas para entrar en la banca tradicional y eso es súper importante: cuando tú tienes una necesidad crediticia y no eres sujeto de crédito en la banca tradicional, la cooperativa es LA ayuda, así que llegué pidiendo dinero”

(grupo 2 de discusión de socios).

Las razones de permanencia

Al ser consultados por las razones que los hacen permanecer en las cooperativas, los socios y socias destacaron diversos atributos positivos, tales como (i) la sensación de familiaridad, (ii) la participación dentro de estas, y (iii) la posibilidad de crecer y formarse, entre otros. Todos estos son aspectos que las diferencian de la banca tradicional.

Sentirse en un ambiente familiar y cercano es uno de los factores principales de fidelización. También lo es su marco valórico, ya que es muy diferente al que se suele ver en la banca convencional. Muchas cooperativas tienen fuertes lazos con el territorio donde se emplazan o las instituciones que las promovieron en su origen⁶, lo que acrecienta esa sensación de sentirse en familia. Se trata de un punto crucial para este trabajo de investigación, ya que el apego territorial o institucional favorece el establecimiento de relaciones de confianza y cooperación entre las personas. Gracias a ello, las socias y socios comparten características y costumbres que fortalecen la actividad cooperativa y les permiten trazar horizontes de desarrollo consensuados por la similitud de sus necesidades. En los grupos de discusión que presentan estas características en común, las personas mencionaron con mayor frecuencia el placer que les causa estar en una institución donde se sienten en familia, donde pueden confiar, atributos que aportan a su crecimiento y control.

“En esa parte, bueno, hay mucho compañerismo, eso es lo bonito, existe el respeto, porque más que mal, unos con otros, todos hemos navegado en algún momento, navegamos juntos o estuvimos en el mismo buque, por eso es que todos solidarios, ni un problema”

(grupo 2 de discusión de socios).

⁶ Tal como se comentaba anteriormente, muchas cooperativas tienen un fuerte arraigo territorial o institucional. Otros ejemplos de ello son la cooperativa Coopeuch, que nace en la Universidad de Chile, o Colun, que nace en La Unión y cuyos inicios contemplaban solo a socios de la institución o del territorio.

Siguiendo la idea de Zelizer (2013), las personas toman decisiones incorporando sentimientos en ellas, debido a que el acto de consumir o ahorrar implica muchas veces la consecución de un objetivo que tiene un significado simbólico y que está relacionado a algún sentimiento. Por eso, el autor cree que los socios cooperados se integran e invierten su dinero en las CAC. El sentido de comunidad les hace querer participar a pesar de que exista menos información y claridad económica. Este punto es importante, ya que la fidelidad hacia las CAC es uno de los recursos más importantes para su mantención en el tiempo, desarrollo y eventual crecimiento.

2.2. Percepciones de quienes ocupan cargos en la administración de las CAC

En este subcapítulo se abordan temas relacionados a la información recolectada durante los grupos focales en los que participaron los socios con cargos o pertenecientes a los consejos de administración⁷. Se analizan temas como (i) la paradoja de la participación versus el crecimiento de la CAC, (ii) la percepción sobre la contratación de personal especializado en la CAC, y (iii) los posibles problemas que existen bajo la dualidad del dueño/socio.

Participación versus crecimiento

Como se ha sostenido a lo largo del texto, uno de los activos más importantes de la CAC es la participación y el involucramiento de los socios en la vida cooperativa. Sin embargo, el crecimiento de estas entidades genera nuevos retos. Al respecto, Labie y Périlleux (2008) comentan que cuando las cooperativas crecen, suelen reducir la participación de los socios. Pero si bien estos fenómenos pueden correlacionarse, más que el número, la información proveniente de los grupos focales parece indicar que el problema es la despersonalización⁸.

“Entonces, a lo mejor por el crecimiento se han ido dejando muchas cosas de lado, por ejemplo, aquí se hacía antes una charla cuando el socio ingresaba, tenía que venir con tiempo, o sea, no ingresaba por el crédito, ingresaba porque era necesario ahorrar, saber que en algún minuto, si necesitaba, iba a poder pedir un crédito acá, o sea, se hacía parte de una familia. Entonces, si yo me quería hacer socio, venía con tiempo y ya, perfecto, me hacían pasar, como consejero le daba una charla y el gerente informaba y la gente se iba súper empapada de lo que es, se iba comprometida, eso es lo que se dejó hace muchos años de hacer, porque la gente quiere la plata e irse”

(grupo focal del consejo 2).

⁷ Los consejos de administración son organismos designados por la junta general de socios, que toma decisiones sobre temas particulares y tiene atribuciones para dirigir y administrar la cooperativa, además de convocar a las asambleas generales.

⁸ En este punto, los grupos focales que involucran a socios sin cargo arrojan que estos denotan un costo de oportunidad mayor cuando la cooperativa se vuelve más compleja, pues para tener una participación efectiva deben tener conocimientos más profundos.

El crecimiento explosivo de personal atrae problemas en la cultura organizacional, si puede llamársele de esta forma, ya que al ser una entidad que se sustenta en el ideal cooperativo, se ve fuertemente afectada si su personal no persigue ni comparte los mismos ideales que sus socios (Labie y Périlleux, 2008).

“En el sentido de que afuera, si no está familiarizado con lo que son las cooperativas, pierde un poco el sentido social y para lo que es, para lo que es el fin, de cómo nacieron las cooperativas, entonces eso a veces influye, porque uno tiene una persona que no tiene que ver mucho con el rubro, porque no conoce, porque no hay material, entonces se ve como más número, no como la señora Juana Pérez, la señora tanto que uno da créditos, porque, entre comillas, hay una política de créditos, pero también va un poco personalizado, hay que tener cierto criterio y se toman otras variables, como decía la señora L., que hay gente que no es sujeta de crédito en un banco, pero aquí nosotros tenemos, por ejemplo, socios históricos, de años, que siempre han trabajado en faena agrícola con declaración jurada”
(grupo focal del consejo 2).

Ser una CAC pequeña y familiar, donde todos los socios y socias se conozcan y trabajen juntos, es una cosa. Crecer y convertirse en una entidad más parecida a un banco es otra muy diferente. Las socias y socios sin cargo advierten este cambio.

“Recuerda tú que estas empresas son sin fines de lucro, entonces obviamente el norte de... por eso, hablar de la comparación, a mí, en lo personal, no me gusta mucho porque no existe, o sea, no hay comparación, no puedo comparar un banco con esto, no tengo elementos, pero el norte de un banco es tratar de ocupar la mayor cantidad, copar lo que más pueda del mercado porque él sí tiene un fin de lucro. El norte de una cooperativa no es eso, el norte de una cooperativa es hacer las cosas bien, lograr no un posicionamiento espectacular, salvo que hay una cooperativa por ahí que es inmensa, ¿verdad?, y un comentario muy particular: su problema es que va perdiendo este matiz familiar”
(grupo 2 de discusión de socios).

Profesionalización versus participación

El crecimiento de las cooperativas trae aparejada otra tensión: la profesionalización. La falta de socios y socias preparados en cooperativismo financiero es vista como un impedimento para las CAC que están creciendo, ya que estas se consideran incapaces de realizar la gestión y se ven en la necesidad de contratar personal especializado.

“Pero podría ser la evaluación de los proyectos, tener más técnicos que puedan evaluar un proyecto, eso podría aumentar, ¿cierto?, los montos, los montos y los plazos de los proyectos, porque aquí normalmente no somos capaces de analizar un proyecto, entonces le tenemos miedo a las cantidades grandes y eso yo creo que es una falla”
(grupo focal del consejo 2).

La profesionalización suele ir sustituyendo el aporte y quehacer de los socios y socias. Muchos perciben este proceso como una pérdida del “sentir y los valores cooperativos”, lo que merma la relación que mantienen con la organización y genera una especie de círculo vicioso: la profesionalización suele provocar el desapego de los socios; al crecer el desapego de los socios, se hace necesaria una mayor profesionalización.

“Lo que pasa es que antes era obligación, las libretas se entregaban aquí. Por ejemplo, tú entrabas y la libreta del socio nuevo la entregaban en la reunión mensual que se hacía el día jueves, entonces ahí le daban la explicación (de cooperativismo)”
(grupo 4 de discusión de socios).

La educación cooperativa es una herramienta clave para generar una vinculación positiva y cohesionadora entre los socios y socias. Es el vehículo para impregnar a las personas con los valores y objetivos solidarios que caracterizan este tipo de empresas.

Rol de socio versus rol de administrador

La estructura de las cooperativas es muy particular, pues los socios escogen a sus propias autoridades, quienes también son socios. Por lo tanto, es común que exista una relación de alta cercanía entre socio y administrador, pero también tensiones a la hora de decidir. Jensen y Mecling (1976) sostienen que en algu-

nas circunstancias esto puede llegar a rozar cuestiones éticas, cuando los socios o *principales* escogen a su directiva administrativa *agente* y no hay una concordancia entre las visiones que se tienen de la institución. Sin embargo, para el caso de las CAC estudiadas, las tensiones no escalarían a ese nivel, puesto que existen suficientes regulaciones y resguardos estatutarios⁹.

En algunos casos, la gran cercanía y familiaridad que suele darse entre los socios y la directiva ha provocado ciertos relajos en materia de rendición de cuentas y estándares de transparencia. Con el paso del tiempo, esto ha generado problemas importantes en algunas organizaciones que no cuentan con una reglamentación clara. Normar estos asuntos es una condición indispensable para la estabilidad de las cooperativas, pues si bien las reglamentaciones generales disminuyen la probabilidad de que las directivas obren maliciosamente, existen otros puestos que manejan dinero que sí podrían generar conflictos de interés y no existen protocolos de prevención de estas conductas.

“Sí, o sea, en general tenemos un buen sistema computacional, tenemos temas de seguridad en el sistema de informática, en eso estamos como bien actualizados, no estamos tan, bueno, lo que estamos implementando ahora son temas más de control interno, que eran nuestras debilidades. Control interno, esa es nuestra debilidad, el tema de control interno es en lo que se está ahora, porque ahí hemos tenido

⁹ A pesar de esto, muchos reconocen que, en el pasado, antes de que existieran los estatutos, los dirigentes sí incurrieran en malas prácticas.

problemas y eso nos ha llevado a la desconfianza de algunas personas, hemos tenido situaciones más menos feas, entonces estamos apuntando ahora al tema del control interno”
(grupo focal del consejo 3).

La teoría expuesta por Fischer y Desrochers (2002) plantea que las situaciones de atrincheramiento o preferencia de gasto suelen ocurrir en un escenario donde no existen reglas claras, contrario a lo que se pudo observar en las cooperativas analizadas.

“O sea, es que la tasa de interés la fija el consejo de administración con el estudio, el análisis que hace la gerencia respecto de cómo está la competencia, y se van fijando las tasas de interés. Cuando hay un crédito, el comité de crédito, por ejemplo, si viene un socio X que cotizó en un banco X y le dieron una mejor tasa que acá, que ha sucedido, eso es lo que pasa por el comité, por el consejo, y podríamos llegar a negociar con ese socio para darle una mejor tasa. Y qué hacemos, igualamos cuota, que no necesariamente... porque ellos agregan otro tipo de productos y de gastos, y nosotros solo el seguro de gravamen¹⁰, lo que no lleva ninguna otra comisión anexa a un crédito”
(grupo focal del consejo 3).

REFLEXIONES FINALES

Según el estudio “Umbrales sociales para Chile. Desafíos para la política social” (FSP, 2017), la acumulación desmedida de capital económico, político y cultural en pocas manos ha tendido a reforzar la distribución desigual del poder, provocando descontento social en aumento. Prueba de ello fue el estallido social que el país registró el 18 de octubre de 2019.

A continuación, se presentan las principales reflexiones motivadas por esta investigación.

Las CAC pueden contribuir a mejorar los patrones distributivos en la sociedad. Uno de los grandes problemas que enfrenta Chile es la alta concentración de la riqueza en algunos sectores sociales (Ocde, 2015). Según el informe “Panorama social de América Latina” de la Cepal (2018), el 1% más rico de la población concentra el 26,5% del PIB. Esta situación es respaldada por diversos indicadores como el índice de Gini¹¹, que, según los datos de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), alcanzó un 0,501 (2017); o el índice el 10/10¹², que marcó un récord al poner en evidencia que el 10% más rico de la población percibió ingresos 39,1 veces más altos que el 10% más pobre para el mismo año. Resulta preocupante que a pesar de que el país cuenta con

¹⁰ (Sic) Desgravamen.

¹¹ Índice que mide la desigualdad de ingresos de toda la población de un sector determinado y que va entre 0 y 1, siendo 0 perfecta igualdad y 1, perfecta desigualdad.

¹² Índice que mide desigualdad de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de un sector determinado.

un PIB per cápita del orden de los 27 mil dólares PPA, la mayoría de las personas viven con sueldos relativamente bajos (Fundación Sol, 2015). Es por lo anterior que todas las cooperativas, no solo las de ahorro y crédito, resultan interesantes por su acción distributiva y no acumulativa del capital. Potenciar y ampliar el radio de influencia social y territorial de las cooperativas de ahorro y crédito no va a resolver estas colosales diferencias, pero puede ayudar a contrarrestar sus efectos, en especial en territorios apartados y pequeños.

Las CAC pueden contribuir al alivio de algunas de las expresiones de la pobreza multidimensional. Un 20,7% de la población nacional se encuentra en pobreza multidimensional. Es decir, una de cada cinco personas reporta niveles de carencias intolerables en educación y/o trabajo y/o salud, vivienda/entorno y/o redes sociales. Estas cifras se elevan en territorios específicos, como las zonas rurales y/o comunas apartadas. La región de Valparaíso no es la excepción. Desde 2015, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia viene promoviendo una medición multidimensional de la pobreza. En este índice, el fortalecimiento de las redes de apoyo y la participación social contribuye a disminuir la severidad de la pobreza (2016). En ese marco, las CAC pueden cumplir un papel relevante debido al componente participativo de su diseño organizacional. Las cooperativas permiten la participación de los socios, dándoles un espacio donde se sienten miembros activos e importantes de una institución, y desarrollan redes y aprendizajes nuevos que los protegen de la experiencia de la pobreza.

El estudio de la Fundación Superación de la Pobreza detalla que, en la vida cívica, el derecho a voto es el menos valorado por las personas con mayores carencias y baja educación, quienes ven poco representados sus intereses, por lo que la estructura de control de las cooperativas, donde todos los socios tienen la misma capacidad de decisión, es una herramienta que fomenta no solo la participación, sino que indirectamente es un espacio de formación ciudadana.

En un plano más sustantivo, la teoría de desarrollo a escala humana (Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn, 1994) sostiene que la pobreza revela que existen personas que no pueden satisfacer correctamente sus necesidades. Para analizar esta situación, propone nueve necesidades axiológicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creación, participación, identidad, ocio y libertad; y cuatro categorías existenciales: *ser, hacer, tener, estar*. Desde esta perspectiva, ninguna persona puede prescindir de la satisfacción o realización de estas necesidades y categorías existenciales de manera absoluta y/o por largos periodos sin lesionar seriamente su condición humana. También sostiene que, para una adecuada realización de las necesidades, se requieren satisfactores o medios adecuados y suficientes. Desde este enfoque, las necesidades se mantienen constantes en el tiempo y los satisfactores o medios que se utilizan para realizarlas son los que van cambiando con el tiempo.

Bajo este prisma, las CAC podrían ser equivalentes a satisfactores sinérgicos, ya que contribuyen a satisfacer varias necesidades simultáneamente. Dentro

de ellas, las más relevantes son las de subsistencia, protección, participación, entendimiento y creatividad. A su vez, dado que los socios pueden contribuir al desenvolvimiento de la cooperativa, las CAC pueden llevar a movilizar todas sus dimensiones existenciales. Las cooperativas permiten a sus socios y socias *tener* créditos y acceder a recursos con los cuales financiar diversos ítems de gasto. También promueven su *hacer* mediante el trabajo cooperativo y el aprendizaje. La dimensión del *ser* también cambia muy positivamente, porque *ser* un cooperado suele constituir un testimonio de cambio biográfico; implica ser importante, ser escuchado, ser participante de la CAC y ser cuidado en un contexto financiero por lo general hostil hacia los más pobres. Por último, las empresas de este tipo permiten a sus asociados *estar* dentro de un contexto solidario y con personas con valores similares.

“Por la parte mía, yo me he sentido bien en esta cooperativa, porque he aprendido otras cosas, pongámosle que de conocer amigos, y la otra que me dieron la oportunidad, digamos, de ser vocal de mesa y todas esas cosas, digamos, y uno de repente se siente importante, uno ya conoce a todo el mundo, a toda la gente de la cooperativa y ‘hola, hola, hola, que cómo está!’”

(grupo 2 de discusión de socios).

Este sentir es de vital relevancia, ya que en concordancia con el estudio “Voces de la pobreza” (FSP, 2010), esta es percibida no solo como la incapacidad de tener bienes de las personas, sino que más bien está relacionada a oportuni-

dades no necesariamente tangibles. Es así como las cooperativas facilitan la superación de la pobreza a través de la satisfacción de necesidades que van más allá del tener (lo que está satisfecho por el rubro en el que se desarrollan estas entidades) y se focalizan fuertemente en las necesidades de *estar, ser y hacer*.

Las CAC pueden aportar mucho a la descentralización territorial, ya que son capaces de crear capacidades locales para el desarrollo económico. En países como Italia existen experiencias muy positivas que han promovido la creación de CAC a nivel de barrio, comuna o provincia. Su gestión está enfocada a satisfacer necesidades crediticias de sus habitantes, dependiendo de la estrategia que se plantee desde el Gobierno. Esto trae distintos beneficios:

- Entrega de servicios financieros a personas que por su ubicación geográfica no pueden acceder a estos debido a la baja presencia del sector privado.
- Los intermediarios financieros locales reportan mejores indicadores en materia de créditos impagos, ya que, como señala Ramírez (2006), las cooperativas presentan ventajas para trabajar en el medio rural debido a que los operadores se encuentran insertos en las mismas redes sociales locales y, por lo tanto, los problemas asociados a riesgo moral tienden a ser menores. Así, por ejemplo, instituciones gubernamentales como Indap o Corfo podrían funcionar como bancos de segundo piso, otorgando fondos y préstamos a los intermediarios financieros.
- Las cooperativas promocionan la educación financiera, lo que resulta muy relevante tomando en cuenta los indi-

cadore de endeudamiento que tienen los chilenos, que alcanza a 73,3% del ingreso total disponible (Banco Central, 2018).

- Son fuente de desarrollo económico local, generan empleo y son capaces de promover el comercio del sector al conocer mejor el territorio.

La sinergia que se puede generar con los gobiernos locales es interesante, sobre todo con los rurales. Esto se debe a que la participación es mayor en estas zonas y, según “Umbrales sociales para Chile. Desafíos para la política social” (FSP, 2017), existe un creciente deseo de participación que no se está viendo satisfecho. La promoción del modelo cooperativo en estos sectores puede resultar beneficiosa a la hora de avanzar hacia una sociedad cohesionada, participativa y con capacidad de decisión sobre su contexto.

RECOMENDACIONES

A pesar de que ha habido intenciones por parte de agentes gubernamentales de potenciar las entidades que presten servicios financieros en lugares donde no hay cobertura, la experiencia ha demostrado que estos agentes tienden a preferir personas conocidas por sobre las no conocidas para disminuir el riesgo de su cartera. Este punto representa una oportunidad y una amenaza, ya que la confianza es una de las bases del sistema cooperativo, pero cuando es usada de una forma poco transparente desvirtúa el sentido de implementar instituciones basadas en ella.

Si se habla de focalización, implícitamente se habla del tamaño de la cooperativa. Es así como, a partir de la percepción de los cooperados respecto al tamaño de su propia cooperativa, se recomienda fuertemente conservarlas dentro del espectro de alcance del núcleo de unión de sus cooperados. De esta forma, los socios que pertenecen a las cooperativas se sienten más representados, con más ganas de participar y de aportar a la institución a la que pertenecen, tal como propone Hansmann (1996) cuando dice que las cooperativas más exitosas son las que mantienen un nivel de homogeneidad entre sus socios.

Se recomienda también no tener como objetivo único crecer a través del reclutamiento de una mayor cantidad de socios, sino que buscar aumentar constantemente los beneficios de los socios existentes que están dentro del espectro planteado con anterioridad. Tal como se mencionó en el apartado de CAC por sector, puede ser una mejor estrategia fortalecer los beneficios e instrumentos orientados a los socios actuales, de manera coherente con el alcance ideológico de la cooperativa (territorial o institucional), que aumentar la cantidad de socios al punto de erosionar la identidad de la organización. De esta forma, además, se da espacio para crear nuevas cooperativas que abarquen otros sectores.

Los resultados del trabajo de investigación describen diversos recursos con los que cuentan las cooperativas estudiadas, como el sentido de pertenencia o los mecanismos de participación que generan, los cuales deberían ser considerados a la hora de trazar el horizon-

te estratégico de las CAC. Sin embargo, también se describen algunas paradojas y tensiones de las cooperativas, que son un desafío que han tenido que sortear y deberán seguir haciéndolo para lograr un mejor desempeño en un mundo que cambia rápidamente. Una práctica que aborda estos dos puntos y que se sugiere promover es la participación en las federaciones de cooperativas. Estas agrupan cooperativas de un mismo rubro y buscan compartir experiencias y generar sinergias para mejorar la gestión de estas instituciones¹³.

Caracterización de los socios cooperados

Uno de los puntos que se detectó durante el estudio es que el proceso de caracterización de personas que solicitan créditos es difícil y costoso, lo que conduce a que solo la banca retail pueda acceder a esa información. Por ello, resulta imperioso trabajar en estrategias que faciliten la disponibilidad de información de manera transparente y no como un bien transable. De esta manera, se podrían generar procesos de disminución efectiva del riesgo de los solicitantes, como lo es el descuento por planilla cuando se trata de un trabajador de una empresa socia de la CAC o el crédito otorgado a un grupo de personas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el banco Grameen en Bangladesh (2015), donde las personas adquieren créditos y la responsabilidad del pago del crédito recae en un grupo de individuos que se ayudan mutuamente en caso de que al-

guno de ellos pase por un mal momento económico.

Estrategias de captación y retención de socios

Como se comentó en el apartado de resultados, el canal de difusión o visibilización más poderoso de las cooperativas es el de boca a boca. Esto lleva a recomendar la implementación de estrategias de captación de socios nuevos a través de incentivos hacia socios antiguos, como pueden ser beneficios sociales o de reconocimiento institucional. Esta estrategia se utiliza en algunas cooperativas y ha tenido éxito, sin embargo, en otras ha fracasado, ya que los incentivos no son suficientemente atractivos. Una estrategia podría apuntar a estrategias de visibilización dirigidas hacia mujeres, ya que estas tienden a comunicar con mayor frecuencia su parecer sobre las CAC.

Una opción para fortalecer lazos con los socios es fomentar actividades entre los mismos que permitan atraer a distintos actores dentro de las familias, ya que, si se continúa congregando a las personas mayores, el recambio generacional no se producirá. Esto tiene que ver con la satisfacción de necesidades axiológicas de identidad o existenciales ligadas al hacer (Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn, 1994). Otra estrategia que puede fortalecer lazos entre los socios y las cooperativas y ayuda a su mantención dentro de la CAC es aumentar el número de talleres impartidos en temas que

¹³ En el caso de las CAC que son supervisadas por la Daes, existe la Fecrecoop, que nace en 1953.

sean pertinentes para los socios, ya que además de potenciar un aumento en el número de afiliados, son un espacio de encuentro y conocimiento. Con respecto a las temáticas, resulta necesario partir por la caracterización de los socios para luego hacer la oferta programática, que podría involucrar temas contables, alfabetización bancaria, acreditación de conocimientos, etc.

Desarrollo de cartera de productos

Habiendo demostrado el uso que se le da a los créditos por nivel y género, se propone utilizar esta información para ofrecer una mejor cartera de productos, que se adecue a las necesidades de los socios cooperados. Por ejemplo, se comprobó que la mayoría de las personas utilizan sus créditos para financiar necesidades relacionadas con salud o educación. En vista de lo anterior, se recomienda modificar los productos para adecuarlos a las fechas de pago, canales de comunicación, montos de los créditos, avales necesarios, naturaleza del gasto y perfil del solicitante. Es más sencillo implementar esta estrategia en cooperativas con un alcance territorial o institucional limitado, ya que conocen mejor los requerimientos de sus socios, que constituyen grupos más homogéneos.

También es necesario mejorar los servicios de intermediación financiera y beneficios sociales que ofrecen las CAC, que podrían ofrecer cursos y capacitaciones orientadas a que los socios y socias gestionen sus créditos tomando en cuenta sus usos y destinos. Así, se aportaría a la correcta utilización del dinero y se contribuiría a la razón de ser de las

cooperativas: promover una mejor calidad de vida.

Potenciar las CAC desde la política pública

Que las cooperativas tengan éxito en Chile no depende netamente de ellas. Existen muchas variables que inciden en su desarrollo. Las políticas públicas juegan un papel crucial. Es por esto que, de no reconocerlas como un eje relevante para el desarrollo de distintos sectores, las cooperativas corren el riesgo de retroceder lo que ha costado tanto construir al día de hoy. Es interesante notar que en los últimos lustros el interés en el cooperativismo ha ido aumentando, por lo que se cree que el movimiento se encuentra ante una oportunidad que no puede dejar pasar.

Para potenciar el trabajo de las CAC, una institución clave es la División de Asociatividad (Daes) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que debería poder ampliar sus atribuciones y rango de acción. En la actualidad, su capacidad institucional está limitada a un equipo pequeño y centralizado. Solo cuenta con una oficina en Santiago y no da abasto frente a la gran demanda de organizaciones asociativas. La Daes, en un escenario ideal, debiese contar con departamentos enfocados en los distintos rubros de las organizaciones y con instrumentos de fomento enfocados a las necesidades de cada sector. Se debería contar con un departamento de fomento del cooperativismo capaz de promover la figura entre organizaciones y asociaciones afines.


También se necesita fortalecer el Servicio de Impuestos Internos, para que los funcionarios conozcan los sistemas de tributación de las cooperativas y faciliten su labor. También se deben incluir instrumentos de divulgación del movimiento cooperativo en los servicios públicos que tienen gran despliegue territorial, como lo son los centros de negocios de Sercotec, los servicios extensionistas de Prodesal del Ministerio de Agricultura, el programa SAT o Pdti. Es a través de una política integral de fomento que las CAC pueden alcanzar un mayor desarrollo, ya que surgen a partir de una necesidad colectiva que solo se expresa si existe conocimiento del movimiento y un sentido de colaboración importante en la sociedad.

Las cooperativas de ahorro y crédito no son solo una herramienta de inclusión financiera para los niveles socioeconómicos más vulnerables, sino que también son un espacio de encuentro con otros, de participación en la toma de decisiones y de formación sobre gestión democrática. Las CAC, en conjunto con las cooperativas de otros sectores, pueden ser un gran aporte para la economía y sociedad chilena y debiesen ser apoyadas, visibilizadas y fomentadas desde el Estado.

BIBLIOGRAFÍA

- **AIM (2013)**. Metodología de clasificación de niveles socioeconómicos.
- **Allan, V. (2014)**. *Segmentación socioeconómica*. Critería.
- **Banco Central de Chile (2018)**. Cuentas nacionales por sector institucional. Evolución del ahorro, la inversión y el financiamiento sectorial en el año 2018.
- **Banco Central de Chile (2011)**. Economía chilena, volumen 14-Nº3. En: M. Fuentes, R. Álvarez, & C. Raddatz, *Economía chilena*. Santiago: Banco Central de Chile.
- **Banco Central de Chile (2017)**. Encuesta financiera de hogares.
- **Branch, B. & Baker, C. (1998)**. Overcoming governance problems: What does it take? Inter-American Development Bank (IDB) Conference on credit unions. Washington DC.
- **Casal, J. & Mateu, E. (2003)**. Tipos de muestreo. *Rev. Epidem. Med. Prev.*, pp. 3-7.
- **Cepal (2018)**. *Panorama social de América Latina*. Santiago.
- **Cicopa (2014)**. *Las cooperativas como constructoras del desarrollo sostenible*.
- **Confederación Alemana de Cooperativas (2017)**. *Datos y ranking de cooperativas de ahorro y crédito de América Latina y el Caribe*. San José.
- **Cooperativas de las Américas (2015)**. "Principios y valores cooperativos". Recuperado de <http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456>
- **División de Política Comercial e Industrial, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2014)**. *El cooperativismo en Chile*.
- **Edmunds, H. (1999)**. *The focus group research handbook*. Chicago: NTC/Contemporary Publishing Group.
- **Fischer, K. & Desrochers, M. (2002)**. Corporate governance and depository institutions failure. The case of an emerging market economy. Cirpee (Centre Interuniversitaire sur le Risque, les Politiques Économiques et l'Emploi), Cahier de Recherche/ Working Paper 02-01,.
- **Fundación Sol (2015)**. Los verdaderos sueldos de Chile. Panorama actual del valor del trabajo usando la Encuesta Nesi.
- **Fundación Superación de la Pobreza (2010)**. *Voces de la pobreza. Significados, representaciones y sentir de personas en situación de pobreza a lo largo de Chile*. Santiago.
- _____ (2017). *Umbral social para Chile. Desafíos para la política social*. Santiago.
- **Grameen Bank (2015)**. Recuperado de <http://www.grameenfoundation.org/>
- **Grupo de discusión de socios 1 (2015)**.
- **Grupo de discusión de socios 2 (2015)**.
- **Grupo de discusión de socios 3 (2015)**.
- **Grupo de discusión de socios 4 (2015)**.
- **Grupo focal del consejo 1 (2015)**.
- **Grupo focal del consejo 2 (2015)**.
- **Grupo focal del consejo 3 (2015)**.
- **Hansmann, H. (1996)**. *The ownership of enterprise*. Harvard University Press.

- **Idea País (2018)**. *Cooperativas: evidencia e historia*. Santiago.
- **INE (2018)**. Informe de principales resultados. VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Santiago.
- **Jensen, M. & Mecling, W. (1976)**. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305 - 360.
- **Labie, M. & Mersland, R. (2011)**. Corporate governance: challenges in microfinance. Labie, M. and Armendariz, B. editors. *The handbook of microfinance*, World Scientific Publishing Company.
- **Labie, M. & Périlleux, A. (2008)**. Corporate governance in microfinance: credit unions. *Working papers CEB*.
- **Max-Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1994)**. *Desarrollo a escala humana*. Montevideo, Uruguay: Nordan-Comunidad.
- **Mayrin, P. (junio de 2000)**. Qualitative content analysis. Forum qualitative social research. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research., párrafo 5.
- **Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2016)**. *Metodología de medición de pobreza multidimensional*. Santiago.
- **Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2019)**. Cooperativas - División de Asociatividad y Economía Social. Santiago.
- **Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. División de Asociatividad y Economía Social (2015)**. Obtenido de <http://economiasocial.economia.cl/busqueda-de-organizacion>
- **Ocde (2015)**. Todos juntos. ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? ...en Chile.
- **Pérez Arocas, E., Radrigán Rubio, M. & Martini Armengol, G. (marzo de 2003)**. *Situación actual del cooperativismo en Chile*. Santiago: Programa Interdisciplinario de Estudios Asociativos. Pro Asocia, Universidad de Chile.
- **Pérez de Uralde, J. M. (2006)**. *La economía social en Iberoamérica. Un acercamiento a su realidad*. Madrid: Fundibes.
- **Ramírez, E., Caro, J. C. & Vargas, K. (2006)**. *Acceso a servicios financieros de los hogares campesinos de Chile*. Santiago: Rimisp.
- **Sernac (2012)**. Radiografía al presupuesto familiar 2012 en Chile. Recuperado de <http://www.sernac.cl/estudio-radiografia-al-presupuesto-familiar-2012-en-chile/>
- **Sharma, N., Simkhada, N. & Shrestha, R. (2005)**. Impact assessment of Saccoss in Nepal's Hill Districts. Centre for Micro-Finance (Pvt) Limited.
- **Triandis, H. & Gelfland, M. (1998)**. Converging measurement of horizontal and vertical. *Journal of Personality and Social Psychology*. World Cooperative Monitor (2014). *Exploring the co-operative economy*.
- **World Council of Credit Unions (2006)**. Statistical Report. www.woccu.org/intl_system/global.php.
- **Zelizer, V. (2013)**. *Sobre la negociación de la intimidad*. Santiago: Universidad Diego Portales.



ESCUELA ALBERGUE: LAS FUNCIONES DE LA ESCUELA ANTE SITUACIONES DE DESASTRE SOCIONATURAL. EL CASO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ

Irene Villalobos Saldivia¹,
Universidad de Chile

RESUMEN

Los desastres y las acciones de reconstrucción activan la circulación de las narrativas en habitantes que son afectados en un tiempo y espacio determinado. La presente investigación es un estudio de caso que describe y analiza la función de la escuela frente a los desastres siconaturales en la fase de postimpacto en la comunidad educativa del Liceo de Huara, región de Tarapacá, Chile.

La comuna de Huara ha sido afectada por dos terremotos en las últimas décadas. El primero, en el año 2005, con epicentro en Huara y magnitud de 7,8 grados en la escala Richter, destruyó casi la totalidad de la comuna. El segundo terremoto afectó a la región de Tarapacá en 2014, con una intensidad de 8,2 grados en la escala Richter, el que terminó por desplomar la infraestructura afectada por el sismo anterior.

En estas circunstancias adversas, la escuela funciona como “la casa de todos”, puesto que ha operado como albergue, centro de acopio y organización de todo un poblado. Los resultados de esta investigación muestran que las personas se entienden a sí mismas como parte de una gran familia y que reafirman la identidad comunitaria y la necesidad de establecer límites con la autoridad del sector. Además, las acciones enmarcadas en el manejo del desastre por parte del Estado son percibidas como tardías y negligentes, ya que se interpela a la autoridad y a la institucionalidad por el retraso y la falta de gestión en la reconstrucción del poblado. La comunidad educativa propone estrategias de intervención descentralizadas con el fin de agilizar la burocracia administrativa y promover y fortalecer las redes de apoyo a nivel local y regional, con el objetivo de posicionar cada sector del país según sus necesidades geográficas y territoriales.

Palabras clave: desastre siconatural, vulnerabilidad, escuela, comunidad.

¹ Psicóloga de la Universidad Arturo Prat, Magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile. Estudiante del Doctorado en Psicología de la Universidad de Chile, becaria Anid 2020. Artículo basado en la tesis “Las funciones de la escuela ante situación de desastre siconatural: el caso de la comunidad educativa del Liceo de Huara, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, Chile”, realizada para optar el grado de Magíster en Psicología Educacional en la Universidad de Chile. Profesora guía: Adriana Espinoza. Santiago de Chile, 2018.

INTRODUCCIÓN

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) da cuenta de que el territorio de América Latina y el Caribe ha sido azotado por recientes experiencias de desastres socionaturales, una situación que impacta particularmente a Chile, país que periódicamente se ve afectado por distintos tipos de desastres naturales debido a sus características geográficas, ya que se encuentra ubicado en la zona de subducción del llamado "cinturón de fuego" que bordea los países del Pacífico (OPS, 2010). La recurrente frase "Chile, país de terremotos" tiene asidero si se analizan los sismos ocurridos desde el siglo XVI hasta hoy, lo que evidencia que, en promedio, cada diez años ocurre un sismo de magnitud 8. Por esta razón, Chile es una de las regiones más sísmicas del planeta y representa el 80% de la ocurrencia de terremotos (OPS, 2010).

Los desastres socionaturales, en especial los terremotos, hacen que se altere la cotidianidad de la población y emerjan nuevas situaciones a nivel territorial, social y material (Berroeta, Carvalho & Di Masso, 2016). Al mismo tiempo, la ausencia de planes de ordenamiento territorial, el crecimiento descontrolado de las ciudades y los asentamientos humanos en zonas peligrosas, y la falta o escasez de desarrollo de infraestructura e institucionalidad para mitigar los daños provocados por dichos eventos evidencian la vulnerabilidad y nuevas formas de acción y organización social para enfrentar el riesgo que se da en esta región (Iñigo & Ugarte, 2011).

Por lo tanto, un desastre natural es entendido como:

"Cualquier hecho concentrado en el tiempo y en el espacio, en el que una sociedad o una parte relativamente autosuficiente de una sociedad vive un peligro severo y pérdidas de sus miembros y pertenencias materiales, en el que la estructura social se rompe y la realidad de todas o algunas de las funciones esenciales de la sociedad se ve impedida"

(Fernández, Beristain & Páez, 1999, p. 1).

Esta definición se centra en los efectos sociales más que en las características físicas de los desastres. En la actualidad, se denomina desastre socionatural a todo evento que altera las condiciones en que vive la población y cuyos impactos son proporcionales a la vulnerabilidad de los territorios (Vargas, 2002).

Los desastres presentan tres fases interrelacionadas, las cuales ayudan a comprender los requerimientos psicosociales (Unicef, 2011). La primera es la fase de preimpacto y dice relación con la prevención, mitigación y preparación de la población ante una inminente amenaza. La segunda se denomina fase de impacto o primera respuesta y corresponde a la exposición de la fuerza con potencial destructivo y a la primera respuesta de la población con el fin de salvaguardar sus vidas. La tercera y final es la fase de postimpacto, un proceso de largo plazo encauzado hacia la restitución.

ción de las condiciones de vida precedentes al desastre.

La United Nations Children's Fund (Unicef, 2008) informa que el uso de las escuelas como albergues temporales es frecuente en América Latina y el Caribe en situaciones de emergencia, desastres y crisis. Los esfuerzos e iniciativas para no utilizar la infraestructura escolar en emergencias o generar planes de acción en caso de que esto ocurra continúa siendo un tema de debate público, sobre todo cuando la población requiere seguridad, abrigo y protección en momentos críticos. Las comunidades educativas son las que frecuentemente brindan las condiciones mínimas para albergar a los afectados.

La comunidad científica latinoamericana (Álvarez-Gordillo, Eroza-Solan & Dorantes-Jiménez, 2008; Aguilar & Brenes, 2013; González-Muzzio, 2013; Denis, 2014; Castro, Fava & Pérez, 2015; Larenas, Salgado & Fuster et al., 2015; Espinoza, Espinoza & Fuentes, 2015; Berroeta et al., 2016) enfatiza que la escuela es un lugar de encuentro, que vincula a la familia y, por ende, a toda la sociedad en la formación de futuros ciudadanos que sean capaces de sobreponerse a eventos adversos y transformar las experiencias en una oportunidad. Además, los estudios realizados por Álvarez-Gordillo et al., 2008; Aguilar y Brenes, 2013; González-Muzzio, 2013; Denis, 2014; Castro et al., 2015; Larenas et al., 2015; Espinoza, Espinoza y Fuentes, 2015; y Berroeta et al., 2016 manifiestan que surge un elemento transversal entre los integrantes de las distintas comunidades educativas de América Latina y el Caribe: la necesidad imperante de contar sus ex-

periencias, ser escuchados y validar su dolor, lo que revela la importancia del diálogo entre los actores sociales de las escuelas, la que los hace solidarizar y colaborar unos con otros.

La escuela ante una situación de desastre siconatural: función, tensión y articulación

En su función educadora, la escuela aminorar los impactos psicosociales de las catástrofes, otorga normalidad, estabilidad, estructura y potencia, elementos que permiten la proyección de las personas en y para la sociedad (Dettmer, 2002; Campos, 2017; Lillo, 2014; Veléz, 2011). Por otra parte, Vélez (2011) señala que cuando ocurre un desastre siconatural se producen colapsos en el sistema educativo, pues la noción de educación guiada por principios de estabilidad y continuidad deja de ser funcional para sobrellevar la crisis. En esos casos, la sociedad se ve enfrentada a utilizar aprendizajes transmitidos por las experiencias de la población.

En Chile, la gestión del riesgo de desastres se introduce durante el proceso de escolarización por medio de la Política de Seguridad Escolar y Parvularia, que tiene como objetivo desarrollar en el país una cultura de autocuidado y prevención de riesgos en el sistema escolar, lo que constituye un eje central en la formación integral de niños, niñas y adolescentes (Ministerio de Educación, 2013). El problema, según Campos (1999), Lillo (2013) y Campos (2017), emerge después, ya que existen pocos referentes entre la escuela y la comunidad en la fase de postimpacto.

Por otra parte, Vélez (2011) estima que la escuela es una institución en constante tensión frente a las demandas de la sociedad moderna y diversas temáticas contingentes, entre estas, los desastres siconaturales. Asimismo, los estudios de Álvarez-Gordillo et al., 2008; Izquierdo, Ramón, Ruiz y Cortaza, 2010; Aguilár y Brenes, 2013; Denis, 2014; Espinoza et al., 2015; y Castro et al., 2015, hacen hincapié en el rol de la escuela a la hora de propiciar espacios participativos para toda la comunidad e incorporar aspectos formales para sobrellevar este tipo de eventos.

Problema de investigación

La presente investigación se realizó en la comuna de Huara, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, Chile, donde han acontecido diversos tipos de desastres, entre los que destacan terremotos de alta intensidad en las últimas dos décadas. El primero, en el año 2005, con una magnitud de 7,8 grados en la escala Richter, destruyó casi la totalidad del pueblo de Huara. El segundo aconteció en 2014 y afectó a pueblos colindantes y a la capital comunal con una intensidad de 8,2 grados en la escala Richter (Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, 2017).

La comuna de Huara está conformada por 958 habitantes y geográficamente se ubica en una zona climática de extrema aridez, marcada por el aislamiento respecto de centros urbanos más poblados (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2017). En ese contexto se emplaza el Liceo de Huara, la única institución educacional munici-

pal de la comuna que ofrece educación básica y media (Proyecto Educativo Institucional, Liceo de Huara, 2015). La pregunta que guía el estudio es: ¿cuál es la función que los miembros de la comunidad educativa del Liceo de Huara le otorgan a la escuela ante situaciones de desastres siconaturales?

JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA

Retomando la relación entre los desastres siconaturales y la institución escuela, cabe señalar que, así como no todas las amenazas naturales afectan a todas las poblaciones por igual, no todos los desastres siconaturales tienen el mismo potencial de impacto (Campos, 2017). Por esta razón, es pertinente generar conocimientos científicos a nivel latinoamericano que llenen los vacíos relativos a las consecuencias postimpacto en la etapa de reconstrucción social y su relación con los establecimientos educativos en la zona norte de Chile.

En este sentido, los estudios psicosociales buscan hacer eco de las formas particulares que tiene cada una de las comunidades de concebir los desastres y detallar cómo sobrellevar sus actividades diarias tras la emergencia. La importancia de esta investigación está dada por la posibilidad de relevar conocimiento psicosocial, comunitario y educativo desarrollado por la comunidad educativa del Liceo de Huara para contribuir al conocimiento científico desde sus experiencias y significaciones, las que permitieron proteger a la población.

MÉTODO

La investigación corresponde a un estudio de caso (Yin, 1992; Stake, 1998) de la metodología cualitativa, cuya técnica de producción de información es la entrevista semiestructurada (Gaínza, 2006), que se realizó a nivel individual con 15 participantes, a quienes se resguarda a través de un consentimiento informado. El periodo en que se desarrolló la investigación fue durante los años 2017 y 2018. El procedimiento de análisis se realizó a través de la propuesta analítica de la teoría fundamentada (Strauss, Corbin & Zimmerman, 2002; Coffey & Atkinson, 2005), que privilegia la profundidad sobre la extensión. Su propósito principal es explorar, describir y comprender los significados y experiencias compartidas de personas que han experimentado un mismo fenómeno, el cual reproducen y traspasan por medio de relatos y acciones que son parte de su diario vivir de una forma pública y comunitaria (Bruner, 1990; Flick, 2007). Se utiliza una selección estratégica del contexto, priorizando para esto el criterio de accesibilidad frente al impacto del desastre (Valles, 2000).

La muestra fue intencionada y los criterios de inclusión fueron:

1. Ser integrante de la comunidad educativa del Liceo Huara. Para esta investigación se entiende como tal a los siguientes actores: director, inspector general, equipo directivo, cuerpo docente, asistentes de la educación, centro de padres y/o apoderados, y centro de estudiantes.

2. Que los miembros de la comunidad educativa hubiesen experimentado el terremoto de 2014 en la localidad.

No se revelan los nombres de las y los participantes, tampoco en los productos derivados, y para identificar la procedencia de las citas expuestas en los resultados se utiliza una codificación de cada participante según sexo y edad.

RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el proceso de análisis del contenido de la información producida a través de una estrategia inductiva. De este proceso emergen cuatro categorías: i) escuela albergue; ii) función de la escuela; iii) viviendas y reconstrucción; iv) malestar con la autoridad y las instituciones.

Figura 1. Síntesis de los resultados



Fuente: elaboración propia.

1. Escuela albergue

Esta categoría agrupa los relatos de los integrantes de la comunidad educativa del Liceo de Huara sobre la relación entre la escuela y la población huarina posterior al terremoto de 2014.

1.1 Tradición de "liceo albergue"

Los relatos de la comunidad educativa concuerdan en que han acontecido diversos tipos de desastres siconaturales que han afectado a todo el territorio de la comuna y en que, en cada una de esas ocasiones de amenaza, riesgo y/o emergencia, la costumbre es acudir al Liceo de Huara.

"*Toda la vida, es una cuestión que siempre ha sido tradición... aquí, al colegio, al colegio, por lo general,*

porque está catalogado como albergue, porque tiene los baños en cantidad, tiene salas donde albergar a la gente, cuenta con un grupo de electrógenos para mantenerlo con luz a las personas, eeh... tiene energía fotovoltaica, tienen acá paneles solares"
(mujer, 49 años).

"De manera automática el liceo albergue, porque es el único espacio de que cuenta Huara para poder hospedar gente en catástrofe, tomando en cuenta que la parte antigua del establecimiento tiene más de cien, ciento y tanto, ciento veinte años, aproximadamente, es madera muy resistente, y han pasado dos terremotos y no le ha pasado nada, y ante eso es el lugar más seguro que cuenta Huara para poder albergar a personas"
(hombre, 31 años).

El Liceo de Huara es el único centro educativo de la comuna que entrega enseñanza preescolar, básica y media técnico-profesional. Además, destaca su infraestructura confeccionada de pino oregón que remonta a la época de las salitreras, lo que le ha permitido ser el lugar de encuentro y refugio de los habitantes de la comuna.

1.2 “Si dicen terremoto, piensan en el liceo al tiro”

Para los participantes, el Liceo de Huara y las distintas escuelas básicas de la comuna cumplen un rol esencial dentro de la sociedad, porque no solo forman a los futuros ciudadanos, sino que también, gracias a sus infraestructuras y recursos, permiten salvaguardar sus vidas:

“En Huara, si dicen terremoto, piensan en el liceo al tiro, o sea, por ejemplo, se caen las casas y todos van al liceo, porque yo encuentro que el liceo es lo que está más unido al pueblo... así que yo creo que donde se puede responder de buena manera es en el liceo”
(mujer, 15 años).

La comunidad interpreta que, ante cualquier hecho de la naturaleza o situación de vulnerabilidad, es la escuela el lugar al que pueden recurrir para ser albergados. Se trata de un mensaje que se ha transmitido y conservado con el transcurso de los años por distintas generaciones, lo que se interpreta como un elemento esencial en la configuración de la identidad colectiva del sector. Además, las y los habitantes estiman que el

establecimiento educativo cuenta con el espacio e infraestructura para recibir y resguardar a la población.

1.3 “El liceo es el único lugar que se puede transformar en albergue”

Las personas mencionan las condiciones asociadas a una infraestructura sólida y recursos que posicionan al Liceo de Huara como el único lugar que se puede transformar en albergue. En el caso de esta comuna, la pobreza y exclusión social se suman a las características geofísicas, lo que hace que se pronuncien mucho más los efectos de los desastres sicionaturales:

“Es el lugar como que... es el más idóneo que hay para utilizarlo como albergue. Están las cosas como para poder hacerlo, se pueden armar ollas comunes ahí mismo sin problema, tiene un buen patio. Como personas naturales, para nosotros el colegio es el punto de encuentro, es el colegio, siempre se ha hablado del colegio, para todo se ocupa el colegio. Entonces, es como la parte más estratégica que se puede utilizar dentro del pueblo”
(mujer, 61 años).

Los participantes plantean que habilitar el colegio como albergue y/o centro de acopio es una práctica que ha sido establecida y sostenida por parte de los mismos integrantes de la comunidad huarina. Esta se ha sostenido en el tiempo a causa de sus conocimientos sobre los riesgos que experimentan constantemente en la zona y su propia conciencia de no contar con viviendas capaces de resistir ante eventos de la naturaleza.

“Es el único lugar que no le pasó nada, no le pasa na’ con los terremotos, quedan firme las salas, se ocupan como dormitorios. Yo creo que es como cultura que la gente viene para acá y usa la cocina, usa los baños, es lo único como que no se ha destruido, po’, sigue la misma infraestructura que remonta a la época del salitre, es de pino oregón, por eso no se cae”
(mujer, 44 años).

1.4 “Todo se mueve generando redes en el colegio”

Esa es la idea que persiste cuando las personas comienzan a reflexionar sobre lo que sucede en la comuna de Huará ante una situación imprevista:

“Lo que pasa que cuando en el pueblo pasan eventos graves, todos están, todos se unen hacia el colegio, y todo se mueve generando redes en el colegio, pero después que todo decanta y todo queda ya más tranquilo, cada uno vive su mundo, cada uno vive su mundo aparte”
(mujer, 61 años).

En consecuencia, la comunidad huarina termina encarando la búsqueda de protección y refugio en el establecimiento educativo porque es el lugar donde se articulan las redes de apoyo, por lo que opera como albergue, centro de operaciones y de organización social. Esta es una percepción ampliamente compartida por casi la totalidad de las y los participantes.

1.5 “Liceo, el responsable de recibir a las personas”

Gran parte de los relatos expresan desconocer si existe un protocolo, normativa o documento oficial que explicita que, en el Estado de Chile, en la región de Tarapacá o en la comuna de Huará, ante cualquier situación de amenaza, riesgo y/o emergencia es la escuela el lugar que debe habilitarse como albergue, centro de acopio, operaciones y organización para toda la población.

“Por lo que yo tengo entendido, no hay ningún protocolo de que el liceo sea albergue, pero a raíz de las experiencias es el liceo, ya saben que se habilita automáticamente para albergue ya, eso encuentro, dentro de toda la catástrofe, algo bien valorable que se cuente con un espacio y que justamente sea el liceo el responsable de recibir a personas”
(hombre, 31 años).

“Ante una emergencia, y vuelvo nuevamente al tema, el liceo va a ser el albergue esté o no esté escrito, acá, va a ser acá, acá circulan todos los alumnos, todos los niños, todos los jóvenes de Huará, y ante cualquier situación, lo primero que prende la alarma es el liceo, y tenemos jóvenes de todos los poblados del interior”
(hombre, 31 años).

Si bien un número significativo de participantes expresó desconocer si existe normativa que establezca al colegio como albergue, reconocen y validan al establecimiento educativo como tal debido a los mensajes transmitidos de forma oral y sus propios conocimientos ante los desastres socionaturales:

“Pa’ mí, la responsabilidad del Estado es mantener lo óptimo, óptimo que, si dice que todas las escuelas a nivel nacional son recintos de albergue, que tengan la condición de albergue, po’, si no es el nombre, no más”
(mujer, 49 años).

Entre las y los participantes existe preocupación respecto al rol de las instituciones y las autoridades a la hora de tomar medidas de contingencia frente a un escenario crítico como lo es una situación postdesastre. Si bien los participantes valoran y reconocen al establecimiento educacional como el lugar óptimo para proteger a la población, consideran que debiese estar dotado de ciertos insumos e infraestructuras específicas para responder de mejor manera a este tipo de eventualidades y no bajo la lógica de la improvisación y de la voluntad de los mismos miembros de la comunidad educativa.

1.6 “El colegio también sufrió deterioro”

Si bien las personas reconocen que el Liceo de Huara es el lugar de encuentro de la población, mencionan que el establecimiento educativo también sufrió consecuencias tras el terremoto de 2014:

“El colegio también sufrió deterioro, que fueron las salas nuevas, porque lo que es antiguo, que es como patrimonio de la humanidad, prácticamente, el colegio, toda la parte antigua que tiene pino oregón, no le pasó nada, pero lo nuevo se le cayeron los cielos y se desprendió un segundo piso de estructura metálica

que se había hecho, y eso todo se tuvo que demarcar para que nadie pudiera pasar por ese sector”
(mujer, 61 años).

“Pa’l 2014 la parte de delante quedó intacto, pero la parte de atrás se cayeron los techos, y esa parte está hecha de bloquetas y cosas así, y la de delante está hecha de madera, la madera es más para cosas sísmicas porque se mueve, pero en cambio, las bloquetas, como son firmes, se caen, lo nuevo se cayó y lo viejo sigue intacto”
(mujer, 15 años).

Los participantes dan cuenta de que el Liceo de Huara tuvo daños estructurales en la zona de ampliación, es decir, la de construcción más reciente, compuesta por cemento, bloquetas y fierro. Exponen que con el terremoto de 2014 se cayeron los techos y se desprendió el segundo piso. Atribuyen la mantención intacta de la zona antigua del colegio a la construcción en madera, un material noble, por tanto, más flexible ante los movimientos telúricos.

2. La función de la escuela

En esta categoría se agrupan las referencias de los miembros de la comunidad educativa a la función de la escuela. Se incluyen apreciaciones sobre el proceso en general y lo esperado por los integrantes de la comunidad educativa en cuanto a la función de la escuela frente a una situación de desastre siconatural.

2.1 “La escuela, la casa de todos”

Las personas destacan y valoran al colegio como un espacio con múltiples propósitos que les permite conectarse con la comunidad huarina:

“La escuela sirvió mucho para las personas que tuvieron como más desastres en sus casas”

(mujer, 15 años).

“El colegio, en una comunidad como esta, es una instancia que tiene la capacidad de reunirnos a todos y yo creo que sí, porque en realidad están todos los elementos, está todo el recurso humano fundamental y eso nos permite ser muy cercanos a la comunidad, entonces estamos para prestar no solamente una atención preferente a nuestros alumnos, a nuestra comunidad escolar, sino que también a la comunidad de Huara”

(hombre, 68 años).

Es notable la frecuencia con que se identifica a la escuela como el lugar estratégico de la comunidad, núcleo del pueblo y depositario de la vida de Huara y sus pueblos colindantes.

“Si nos circunscribimos a esta realidad, nuestra Huara, yo creo que el colegio es el ente organizador de todo, no solamente para enfrentar situaciones de catástrofes naturales, sino que es el centro de toda la actividad de Huara, aquí tiene que ver todo... el colegio es el que siempre está”

(hombre, 68 años).

Para los miembros de la comunidad educativa, el modo de vivir en Huara genera un fuerte vínculo con el territorio, sentido de pertenencia y comunidad con el pueblo, en especial con el establecimiento educativo, puesto que la escuela es vista como un lugar de encuentro, de afectos y, sobre todo, de confianza y seguridad. Por lo mismo, representa un elemento determinante en la identidad de sus habitantes, que perciben que toda la vida de la comunidad se organiza en torno al establecimiento.

“El Liceo de Huara es el centro neurálgico de Huara”

(hombre, 31 años).

“La escuela es un ente organizador, es un ente coordinador de todo el quehacer de un pueblo, la verdad de las cosas que el colegio, a través de su vida, es capaz de poder unir al pueblo, yo creo que en ese sentido, aparte de darle la enseñanza a los alumnos, también somos de alguna u otra manera depositarios de la confianza de nuestros apoderados y eso nos permite unirnos con ellos y a lo mejor eso, hasta cierto punto, acompañarlos en lo que son sus proyectos como comunidad. Tenemos ese rol, tenemos esa importancia”

(hombre, 68 años).

2.2 “Los niños emigran y los mandan al Liceo de Huara”

Es indiscutible la importancia de la institución escolar en una zona rural. Como ya se ha dicho, el Liceo de Huara es la única institución educacional municipal que ofrece enseñanza preescolar, básica y media técnico-profesional.

“Hay niños que vienen de los pueblos de los interiores, que en todas las escuelas que hay para el interior llegan hasta sexto básico, entonces los papás tienen que hacer que los niños emigren y los mandan al Liceo de Huara, pero llegan a hogares tutores, llegan a casas de otros apoderados, y a ellos se les paga una cantidad para que tengan albergados a los niños durante el año, hay niños que se van todos los fines de semana como hay niños que se van una vez al mes, se van pa’ sus pueblos. Estos hogares tutores funcionan porque no hay un lugar que puedan estar como internado, no hay un internado en Huara”
(mujer, 61 años).

El Liceo de Huara cumple una labor sociohistórica cultural no solo en la comuna, sino que también incluye a los pueblos aledaños. En estos, los niños deben desplazarse para continuar con su formación y muchas familias depositan la confianza y la responsabilidad de la educación de sus hijos en el Liceo de Huara. No obstante, al no contar con un internado, el establecimiento ofrece a las familias de los niños de los pueblos del interior un hogar sustituto con las mismas familias que viven en Huara, las cuales acogen a los menores como si fueran un miembro más de su núcleo y se les retribuye por medio de una manutención otorgada por la Municipalidad de Huara.

2.3 “La escuela informa, asesora y reflexiona”

Los relatos de los integrantes de la comunidad educativa señalan que es el colegio el lugar donde se brindan los

espacios extraprogramáticos y se produce la vida pública de la localidad y sus alrededores.

“Realizamos otras funciones, pero seguimos siendo mandados por el municipio, y con la población en sí se genera conversación, reflexión y análisis de la situación y de las necesidades de las personas. Vamos viendo y asesorando en lo que nosotros podemos ayudar, organizamos también la ayuda, viendo quién más necesita, informando”
(hombre, 40 años).

Los participantes son conscientes de que, con posterioridad al terremoto de 2014, la comunidad educativa actuó de forma extraordinaria, a través de acciones y organización. Esto habla, dicen, de la solidaridad y preocupación por el otro que es común entre los habitantes de Huara.

2.4 “No le hemos tomado el peso a estas cosas”

“El colegio se ha utilizado porque no solamente ha sido para los terremotos, se ha utilizado cuando ha habido tipo inundaciones, porque Huara no es solamente Huara, el pueblo, sino que tiene 31 pueblos pequeños y caseríos que son de dos o tres casas, y vive gente adulta y, lamentablemente, para el periodo del invierno altiplánico también hay desborde de agua, de ríos, arrasa con todo, arrasa con chacras, arrasa con casas, con animales, con lo que pilla, cae y se inunda en sí el pueblo. Yo ya he pasado aluviones, temporales de arena, los mismos remezones grandes que han habido, y se sigue adelante”
(mujer, 61 años).

Un aspecto sobresaliente que expresan los participantes guarda relación con los distintos tipos de desastres socio-naturales que se han experimentado en la comuna, entre los que destacan inundaciones, aluviones, temporales de arena, remolinos y terremotos. Todos estos eventos de la naturaleza son directamente relacionados con el establecimiento educativo, ya sea como lugar seguro, de albergue y/o centro de formación escolar. Asimismo, se manifiesta la preocupación por educar frente a dichos eventos:

“Falta mucho, yo creo que estamos tan acostumbrados, que es normal que haya un terremoto, tan normal que haya una tormenta de arena que ya no nos preocupamos de lo grave que podría pasar. Es por todos lados que nos falta, por todos lados, como persona encargada de un niño dentro del colegio y como papás encargados de los niños que no saben... Lo hemos tomado tan a la ligera, que no le hemos visto el peso a esas cosas”
(mujer, 44 años).

Los integrantes de la comunidad educativa reflexionan sobre estas situaciones y su naturalización, así como sobre la responsabilidad que les compete al estar a cargo de las y los niños durante la jornada escolar.

2.5 “La escuela está llamada a resguardar la integridad”

Los miembros de la comunidad educativa comparten la idea de que la función de la escuela ante una situación de desastres socionaturales es promover la tranquilidad, seguridad y protección del pueblo:

“Yo creo que la función de la escuela ante una situación de desastre... debiéramos ser quien genere la calma, quienes ser los encargados de bajar la histeria colectiva”
(hombre, 31 años).

Los participantes concuerdan en la responsabilidad social que tiene la escuela ante situaciones de desastres socionaturales y estiman que la labor del colegio es velar por la integridad de todos sus miembros:

“Yo creo que la escuela está llamada a resguardar la integridad de los alumnos y de que podamos crear nosotros las instancias de volver a la normalidad como nuestra función”
(hombre, 40 años).

Los miembros de la comunidad educativa concuerdan en que, ante situaciones de crisis, es la escuela la que debe formular y propiciar espacios que faciliten a la población volver a sus actividades cotidianas para retomar la estructura social del pueblo. Por eso, se refuerza la idea de que la escuela es la institución formadora por excelencia, que debe educar a las y los futuros ciudadanos respecto a la prevención de riesgos ante situaciones de desastres socionaturales, más en una localidad donde estos, a pesar de su naturalización e invisibilización, causan enorme daño a una población que mayoritariamente queda abandonada a su suerte.

3. Viviendas y reconstrucción

Los participantes estiman que la mayor parte de la infraestructura de las vivien-

das del pueblo de Huara y sus distritos fue afectada por el terremoto del año 2005, que dejó las casas en estado de inhabilitación, destruidas de manera parcial o en malas condiciones. Esta situación se acrecentó aún más con el impacto del terremoto del año 2014, que afectó a viviendas construidas con adobe que no soportaron la intensidad de un segundo movimiento telúrico.

3.1 “Se terminaron de caer las casas”

Los participantes dan cuenta de un hecho complicado y sensible que ha afectado durante las últimas décadas a numerosas familias que forman parte de la comuna de Huara y sus distritos. Las viviendas que ya se encontraban en mal estado con posterioridad al terremoto del año 2005 se terminaron de derrumbar con el terremoto de 2014:

“La mitad de la casa que cayó, porque anterior a eso hubo un remezón en el 2005, que se cayó la otra parte de la casa, eso también fue crítico... Entonces, el 2014 cayó la otra parte de la casa, porque yo vivo en una casa antigua, grande, es grandota la casa, entonces en el 2005 se restauró una parte y ya pa’l 2014, como quedaron débiles las paredes, cayó el resto que faltaba”
(mujer, 61 años).

“Del 2005 ya quedó sensible pa’l 2014, ya en el 2005 el terremoto que hubo fue bastante fuerte... En general, dañó todo lo que es, aparte de la infraestructura, casas que realmente tenían antigüedad, que eran de adobe”
(mujer, 63 años).

Los relatos señalan que las casas se terminaron de caer, lo que representó un momento crítico que implicó la pérdida total de los bienes de los integrantes de la comunidad educativa. Por otra parte, existe una cierta desesperanza ante este tipo de eventos, considerando la inexistencia de apoyo tanto emocional como material.

3.2 “Cayó todo”

Los participantes resaltan el impacto de los cambios a nivel geográfico y estructural que se registraron tras el desastre sismológico de 2014. Los miembros de la comunidad educativa no temen demostrar en sus relatos lo expuestos que se encuentran en lo cotidiano conviviendo con esa experiencia que deja huella, asombro y desazón en sus palabras:

“Caían las paredes, caían las paredes y volvían a caer las paredes, yo estaba en la casa con mi hijo. Era prácticamente todo de adobe, entonces cayó todo, cayó todo, y yo salí hacia la calle y la mampara del, de la casa, cayó la mitad de ventana, quedó colgando... Se cayó todo, pero quedó el frontis, como si no hubiera pasado nada”
(mujer, 61 años).

3.3 “El Serviu no fiscaliza los materiales, no fiscaliza a las personas que van”

Se evidencia un proceso lento de reconstrucción de las viviendas sociales tras el terremoto de 2005 y falta de fiscalización del mismo por parte de los organismos estatales, lo que dejó en muy mal pie a la comunidad que debió enfrentar el terremoto de 2014.

“Uy, y qué decir de la reconstrucción del 2005, que la gente quedó sin vivienda: en el 2008, en el 2009 recién tuvieron sus casas, pero para el 2014 esas mismas casas se abrieron, porque no fiscalizan. El Serviu, que es el que le corresponde, no fiscaliza los materiales, no fiscaliza a las personas que van y hacen los trabajos, las constructoras hacen y deshacen, y se tiran en quiebra de obra”
(mujer, 61 años).

Asimismo, los miembros de la comunidad educativa critican la burocracia administrativa que está detrás del proceso de reconstrucción de las viviendas:

“Desde el 2014 y hubieron tres constructoras, la primera empezó con la actividad, empezaron a hacer los requerimientos, hicieron la casa piloto y se tiró a quiebra; la segunda fue, hizo las proyecciones, hizo los rayados, to; hicieron las excavaciones y después se tiró a quiebra, y ahí quedó todo en nada; después vino otra constructora, y esa constructora trabajó con algunas casas y resulta que Serviu, por el hecho que hagan los áridos, van a fiscalizar y les pagan”
(mujer, 63 años).

Lo anterior retrata la impotencia y frustración por parte de los damnificados en la gestión, administración y fiscalización en la etapa de reconstrucción de las viviendas sociales. Se recalca un proceso tardío y poco supervisado, puesto que, a la fecha, las viviendas sociales no han sido entregadas en su totalidad a las personas que sufrieron la pérdida de sus casas en el terremoto de 2005 y 2014.

3.4 “Un país que es pobre”

Se estima que una de las principales causas de la tardanza en el proceso de reconstrucción de las viviendas está en el escaso presupuesto del país:

“El problema es... si realmente se tuvieran los recursos y se estudiara bien el asunto de la infraestructura, y ver quién es quién, yo creo que ahí tal vez las cosas cambiarían, se facilitaría más, pero es imposible en un país que es pobre. Las infraestructuras mismas son carísimas, todavía se está pidiendo para no perder la identidad, las construcciones de piedra y de adobe”
(mujer, 63 años).

Los integrantes de la comunidad señalan que uno de los criterios para la reconstrucción de los inmuebles es que representen la identidad local de los pueblos originarios, lo que les resulta cuestionable si se considera la recurrencia de eventos de la naturaleza con los que deben convivir a diario. Por lo mismo, su evaluación de este proceso es negativa, sobre todo en los casos que implicaron destrucción parcial de las viviendas en 2005 y destrucción total en 2014.

3.5 “No sé a qué echarle la culpa”

La falta de respuesta por parte de la autoridad y las instituciones ante los diversos eventos acontecidos en la comuna lleva a que los participantes manifiesten su descontento respecto al proceso de reconstrucción de las viviendas y además reflexionen sobre la ineptitud de los responsables:

“Entonces, no sé si son las empresas que no funcionan bien o el Gobierno Regional o el Gobierno central, que no hacen que fiscalicen bien todas estas situaciones, porque no es solamente en Huara, es en Pozo Almonte, en Hospicio, en el mismo Iquique, que se cayeron edificios en Iquique... Y las empresas todavía no terminan las construcciones de las viviendas, entonces no sé a qué se debe, no sé si es el protocolo o los dineros no están, o no sé a qué echarle la culpa, en verdad”

(mujer, 61 años).

“Son muy demorosas las instituciones públicas, no solamente de Huara, sino que lo digo a nivel nacional, en la cual no hay una mentalidad prácticamente de las autoridades parlamentarias en esta situación, lo miran así, ya pasó, pasó no más’... sino que los miden con un parámetro parejo para todos... Entonces, es esa una de las falencias graves y que todavía está presente en general en la comuna y en otros sectores, y yo creo que en todo Chile”

(mujer, 63 años).

Así, se cree que las instituciones públicas a nivel local y nacional tardan y no distinguen el estado de necesidad en el que viven las personas frente a una situación de emergencia. Los participan-

tes consideran que no se mira con seriedad el sufrimiento y el daño sufrido por las personas, pues no se llevan a cabo diligencias oportunas con posterioridad a los terremotos. De igual manera, piensan que se mide a todo un país de la misma manera, aludiendo a políticas públicas que, a su juicio, no contemplan los diferentes recursos y necesidades de cada localidad, comuna y región.

4. Malestar con la autoridad y las instituciones

Tras el terremoto de 2014, se generó entre los integrantes de la comunidad educativa del Liceo de Huara una conciencia grupal que apunta a un malestar con la gestión y transparencia de la autoridad, que va más allá de la burocracia estatal. Lo que aparece de relieve es el descontento e impotencia hacia el actuar de los funcionarios públicos y políticos, y una desconfianza hacia el honesto ejercicio de su desempeño y su capacidad para distribuir los recursos necesarios en el proceso de reconstrucción.

“La gente recurre al municipio esperando que la autoridad le va a solucionar algo que todavía no puede... ni él sabe cómo reaccionar a lo que pasó... Es algo de la naturaleza, que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, pasó y pasó, no más’. ¿Te va a levantar el gobierno todo de nuevo? Así como en Chaitén, que la gente tuvo que dejar abandona’o y quedó todo ahí, abandona’o, y no pudieron volver. O sea, imposible que tu quera’i tener lo mismo, entonces, yo, de verdad que no tengo tolerancia

para eso, yo no, yo ya viví varios terremotos”

(mujer, 49 años).

En los relatos se aprecia resignación frente al actuar de la autoridad tras los desastres siconaturales. Las personas incluso comparan su situación con la de otras que también se han visto afectadas por diversos eventos de la naturaleza en otros puntos del país, y donde, desde su perspectiva, se repiten las negligencias y la poca operacionalización por parte de las instituciones y la autoridad.

4.1 “Todo se hace mal”

Una implicación psicosocial toma fuerza en el relato de los participantes: hablan del mal manejo de las autoridades que representan al Estado y sus instituciones, puesto que abordan el desastre de manera tardía. De esa forma, predominan sentimientos de frustración y desconfianza hacia las acciones emprendidas para enfrentar la emergencia y se critica la tardanza de la ayuda y el proceso de reconstrucción del poblado:

“Mi sensación con respecto a eso es que las relaciones se quiebran en su momento, hay cierto tipo de desconfianzas que emergen con estas situaciones y empiezan las desconfianzas de todo, de todo, y la comunidad en general del pueblo también lo siente así, se percibe un momento de crisis. Y estas desconfianzas apuntan a la demora de la respuesta de la institución, como que consideran que todo se hace mal, es una percepción a nivel nacional, igual, que todo se hace lento, que

nada funciona, y se acrecienta con las personas que pierden sus casas. Las personas sienten eso y yo también siento eso, también somos parte de la comunidad, siento que se reacciona tarde, no estamos capacitados ni hemos recibido la forma de trabajar bien en ese tipo de situaciones, nos falta mucho todavía”

(hombre, 40 años).

Por lo anterior, se percibe que la estructura social postdesastre se quiebra y las funciones esenciales se ven restringidas, lo que genera incertidumbre y desconfianza entre los mismos miembros de la comunidad educativa, el poblado y la autoridad, lo que decanta en un momento de crisis.

“Uno dice ‘Huará también es Chile, po’, Iquique también es Chile’, entonces, si el Gobierno, toda su vida va a estar pensando ahí y va... Yo creo que ni la gente de Santiago está capacitada si viene un terremoto, nadie, porque entrevistan a la gente: ‘oigan, ¿qué opinan de la nueva falla de San Ramón?’ ¡Nooo! ¿Hay una falla? No, no tenía idea’. ¿De quién es la responsabilidad?”

(mujer, 49 años).

La evaluación crítica de los integrantes de la comunidad educativa de Huará sobre el actuar del Gobierno y las instituciones tras la ocurrencia de desastres siconaturales expone la lentitud en la respuesta a los requerimientos y demandas que han levantado para tratar de iniciar conversaciones productivas sobre los desastres siconaturales y la manera en la que afectan a la región.

4.2 “El Estado tiene muy abandonadas a las comunas más pobres”

Los miembros de la comunidad educativa expresan de manera reiterada la falta de acción del Estado en la comuna de Huará y otros distritos del país:

“El Estado tiene muy abandonado a las comunas más pobres, porque debieran llegar más recursos, recursos económicos para que puedan hacer más cosas, más salas, más canchas de deporte para los niños, porque resulta que, claro, ellos de repente pueden mandar platas, pero no son fiscalizadores, no fiscalizan bien todo, entonces de repente las platas se desvían, se desvían para otros lugares para donde no deben desviarse”
(mujer, 61 años).

Los participantes destacan la falta de atención que recibe el pueblo de Huará por parte de los diversos estamentos gubernamentales. Las personas se sienten impotentes, puesto que quedan sometidas a las decisiones de otro(s) frente al proceso de reconstrucción. En efecto, los afectados hablan de una ausencia de participación de la autoridad y de una participación aparente o superficial que influye durante todo el proceso de emergencia y reconstrucción. Los participantes estiman que la administración del país debe descentralizarse:

“Todo va por conducto regular, la importancia aquí para esto debía descentralizarse, las regiones no debería ser solamente todo de Santiago, no es porque tenga nada contra Santiago, sino que yo

creo que es una de las formas de cómo cada autoridad comunal o regional o provincial (en el caso de nosotros, tenemos a la provincia del Tamarugal) debe tener acceso a poder posicionarse en el sector y poder tomar las decisiones de cosas con el apoyo de allá, pero no así que de allá se tengan que dar las indicaciones hacia acá y una de papeleos, preguntas y ene de cosas que realmente a nosotros no nos... como pobladores, como educadores, como sea, ¡no! yo no lo acepto, de partí'a, ¡yo no lo acepto!”
(mujer, 63 años).

Se hace hincapié en la descentralización de la administración del país en miras a posicionar a cada región con autonomía para decidir y acelerar procesos de resolución en temáticas atinentes que muchas veces necesitan ser situadas a nivel territorial para responder de manera oportuna y agilizar las acciones burocráticas para la comunidad.

CONCLUSIONES

Los hallazgos hablan de la escuela como una institución social trascendente a momentos y lugares, que a lo largo de la historia se ha vinculado de maneras diversas y fundamentales con los integrantes de la comunidad educativa. Esta relación cobró una dimensión nueva con el terremoto de 2014, cuando el establecimiento no solo sirvió como albergue, sino también como punto de reconexión de la comunidad huarina. En ese sentido, es indispensable analizar la comunidad del Liceo de Huará a la luz de las experiencias que se registran tras este terremoto y el de 2005,

momentos en que la escuela funciona como una brújula, ya que guía a todo un poblado.

Examinar la vivencia de los miembros de la comunidad educativa tras un terremoto resulta una novedosa aproximación para conocer los efectos del desastre en el mundo escolar. Considerar a la escuela como una institución socializadora permite escudriñar las repercusiones del desastre y relacionarlas con las dinámicas sociales de esta población, relevando a los participantes de la presente investigación en su dimensión de sujetos sociales.

En el caso del Liceo de Huara, este es visto como una “madre protectora” de toda la comuna. Desde los elementos comprensivos que aporta la psicología comunitaria, este proceso puede entenderse como una acción comunitaria motivada por un profundo sentido de comunidad que, entre otras cosas, permite a las y los huarinos y a la comunidad educativa reconocerse como partícipes de un proceso social e histórico que afecta a todos en su singularidad. Desde otra visión, podría entenderse que este proceso tiene que ver con la necesidad de retomar el control sobre la propia vida postdesastre para alcanzar una restitución entre los mismos participantes, quienes se reconocen como una comunidad vulnerada que se cobija en la escuela. Todo esto se revela en el rol mitigador, protector y normalizador que le atribuyen al establecimiento educativo. Es necesario precisar, sin embargo, que no es la institución en sí misma ni su función educativa descontextualizada la que permite estos procesos, sino que es la apropiación de dicho

espacio la que motiva esa distinción. Conforme a lo señalado, resulta interesante esbozar la función esencial que tiene la escuela para el sector rural, que funciona, de una u otra manera, como el ente que organiza toda actividad que acontece en una determinada población y que permite el reencuentro de la comunidad.

El funcionamiento como albergue del centro educacional tiene larga data, pues ante situaciones de desastres socionaturales, las y los huarinos siempre han recurrido al colegio con el objeto de salvaguardar a la comunidad. Esto se ha mantenido en el tiempo debido a la transmisión intergeneracional de dicho mensaje. Los hallazgos de esta investigación son convergentes con lo que plantea la literatura científica sobre educación y desastres, que detalla que la escuela, en su función educadora, aminora los impactos psicosociales de las catástrofes (Dettmer, 2002; Vélez, 2011; Unicef, 2008). Por lo tanto, los desastres pueden disminuir si la gente está bien informada y motivada para asumir una cultura de prevención de estos, que a su vez requiere de la recopilación, elaboración y difusión de conocimientos y de información sobre peligros, vulnerabilidades y capacidades desde el lugar que se cohabita.

En este ámbito, aparece quizás uno de los énfasis más importantes de este estudio, pues los y las participantes expresan desconocer cualquier normativa o documento formal que explicita que, ante una situación de amenaza, riesgo y/o emergencia, el Liceo de Huara debería funcionar como albergue, centro de acopio y operaciones para el pueblo y

todo el distrito de la comuna de Huara. Si bien los miembros de la comunidad educativa reconocen que todo establecimiento educativo debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar, una exigencia legal por parte del Ministerio de Educación de Chile, que promueve actividades de autocuidado y prevención de riesgos, este no dice relación con la situación de colegio-albergue y la realidad territorial de cada poblado.

Se reconoce como una de las funciones inherentes de la escuela velar por la principal institución de la sociedad, que es la familia, porque alrededor del establecimiento educativo se producen y reproducen las experiencias de todo el pueblo. Pero a pesar de que los participantes valoran y reconocen al establecimiento como un lugar óptimo para protegerse, son críticos de la autoridad y las medidas de contingencia que debieran adoptarse frente a un escenario crítico como una situación postdesastre, y consideran que el liceo debiese estar dotado de ciertos insumos e infraestructuras específicas para responder de mejor manera a este tipo de eventualidades y no bajo una lógica de improvisación y voluntad de los miembros de la comunidad. Estos están tan acostumbrados a interactuar con desastres sicionaturales, que naturalizan su acción y la gravedad que estos implican en las distintas esferas sociales.

La comunidad de Huara, tal como se ha detallado, tiene un profundo vínculo con su liceo. Como plantea Torres (2004), en este caso, escuela y comunidad se confunden en mutua pertenencia y los inspectores, profesores, asistentes de la educación, padres y/o

apoderados, y estudiantes se sienten interpelados en los roles que ocupan no solo dentro de la comunidad educativa, sino también como sujetos sociales y comunitarios. Todo ello, por el valor que le otorgan a la escuela, una institución que posibilita materialmente el refugio y resguardo de la población, pero que también aporta a sus valores intangibles, ya que es depositaria de una historia común, consolida interacciones cotidianas cara a cara, reafirma la identidad y contribuye a la unidad de los miembros de la comunidad educativa por medio del vínculo con el territorio, identidad, sentido de pertenencia y comunidad.

Resulta importante resaltar en este punto que, de acuerdo con los resultados, un hallazgo problemático dice relación con lo referente a la subfase de reconstrucción (Unicef, 2011), pues los miembros de la comunidad educativa declaran sentirse desconfiados del proceder de la autoridad y la descoordinación de acciones por parte de las instituciones que representan al Estado para iniciar acciones de reconstrucción y reparación de daños a nivel material y psicológico. En el caso del terremoto de 2014, seis años han transcurrido y aún no se termina el proceso de reconstrucción de las viviendas.

Tras el terremoto de 2005, la infraestructura de las viviendas se vio enormemente afectada y las casas quedaron en estado de inhabilitación, destruidas de manera parcial o en malas condiciones. Esta situación se acrecentó con el impacto del terremoto del año 2014. Los participantes manifiestan que en la etapa de reconstrucción de las vivien-

das no se consideró la participación de la comunidad, por lo que este nunca fue sentido como un proceso propio de la comuna. Los habitantes del poblado observan esta fase como espectadores y recalcan que las distintas empresas contratistas suelen declararse en quiebra antes de terminar los trabajos, que los organismos públicos no fiscalizan y que cada vez aumenta la burocracia.

En consecuencia, debido a la lentitud de la gestión del gobierno en activar los recursos del Estado, las personas terminan por asumir una responsabilidad individual frente a los desastres socionaturales. En el proceso de reconstrucción, la gestión de parte de las instituciones se torna difusa y responde a una lógica de evasión y derivación a los mismos miembros de la comuna de la responsabilidad final. Las personas buscan, por sus propios medios, volver al estilo de vida que tenían antes del desastre, se resignan a la pérdida total de sus bienes y hacen todo por recuperarlos, naturalizando la actitud de la autoridad frente a un desastre socionatural. Las personas se sienten impotentes, puesto que quedan sometidas a las decisiones de otro(s) frente al proceso de reconstrucción.

Además, es pertinente refrescar los aprendizajes que investigadores latinoamericanos han planteado respecto a la incidencia de las acciones postdesastre en la configuración de la respuesta traumática, con el fin de evitar revivir la situación de emergencia entre las personas y producir un desastre después del desastre, que es lo que ocurre en la etapa de reconstrucción de viviendas en Huará. En una mirada más profunda so-

bre este último punto, resulta necesario concluir que las políticas públicas del Estado de Chile no están contextualizadas a los marcos de referencia de las comunidades y no restituyen, por ejemplo, la relación con el trabajo ni las características de su economía, tal como lo plantean los mismos participantes en la presente investigación, quienes incluso proponen estrategias de intervención descentralizadas para lograr agilizar la burocracia administrativa, promover y fortalecer redes de apoyo a nivel local ante situaciones de adversidad para posicionar cada sector del país según sus necesidades geográficas y territoriales.

Respecto a la vinculación de la escuela y la comunidad, se puede concluir que el Liceo de Huará representa un importante apoyo psicosocial y educativo para todas las personas que forman parte del pueblo y el distrito de la comuna de Huará, puesto que la población reconoce la vulnerabilidad social como condición base, ligada íntimamente a las dimensiones socioculturales del desarrollo en las fases de pre y postdesastre (Unicef, 2011). Por lo tanto, los desafíos para la región de Tarapacá son incorporar el diálogo con la sociedad civil y los establecimientos educacionales, con el objeto de promover la cultura de prevención del riesgo ante la ocurrencia de desastres socionaturales.

PROPUESTAS A LA POLÍTICA PÚBLICA

En los territorios rurales y apartados, la escuela constituye un espacio social y comunitario que ofrece una oportuni-

dad que excede a lo educativo y abarca dimensiones socioculturales y también de seguridad frente a los riesgos en el entorno, lo que la convierte en un lugar de encuentro y apoyo. Este es un aspecto muchas veces ignorado al hablar de los establecimientos educacionales en zonas rurales.

La información obtenida en este estudio contribuye a levantar nuevas interrogantes sobre las expectativas que surgen en torno al rol que desempeña la escuela y su comunidad educativa en contextos de desastres sicionaturales, y también permite esbozar propuestas a la estructura de oportunidades pública.

Se propone incorporar protocolos psicoeducativos de capacitación y acompañamiento psicosocial para los miembros de la comunidad escolar que se ven expuestos a los eventos de catástrofe. Dichos procedimientos deberían manifestarse en el Plan Integral de Seguridad Escolar y van en la línea de lo propuesto en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado en la tercera conferencia de la ONU, en los ítems de fortalecimiento de la gobernanza ante desastres y en el de resiliencia. El Plan Integral de Seguridad Escolar debe vincularse con los Planes de Integración Escolar (PIE) y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y debe situar con claridad la figura del psicólogo/psicopedagogo en el acompañamiento durante los eventos catastróficos.

BIBLIOGRAFÍA

- **Aguilar, M. & Brenes, G. (2008)**. La percepción de riesgo como herramienta para la gestión del riesgo. Aportes para la cogestión comunitaria. Caso de la Comunidad de Sixaola. Limón, Costa Rica. En Ponencia presentada en IX Congreso de Psicología Social para la Liberación. Chiapas, México.
- **Álvarez-Gordillo, G. D. C., Álvarez-Gordillo, L. M., Eroza-Solan, E. & Dorantes-Jiménez, J. E. (2008)**. Propuesta educativa para la gestión del riesgo de desastres: en la región Sierra de Chiapas, México. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 13 (38), 919-943.
- **Berroeta, H., Carvalho, L. & Di Masso, A. (2016)**. Significados del espacio público en contextos de transformación por desastres siconaturales. *Revista Invi*, 31(87), 143-170.
- **Bruner, J. (1990)**, *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Madrid, Alianza. Col. Psicología Minor, 1991.
- **Campos, A. (1999)**. Educación y prevención de desastres. Costa Rica, San José: Unicef. Recuperado de <http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/10224-opac>.
- **Campos-González, M. (2017)**. Percepción social del riesgo sísmico en escuelas de los barrios patrimoniales Yungay – Matta. Tesis para optar al grado de Magíster en Geografía, Universidad de Chile.
- **Castro, F., Fava, D. & Pérez, S. (2015)**. Niños y niñas como sujetos sociales en la gestión del riesgo: estudio en tres comunas con diversos desastres en Chile. En: Seminario Internacional sobre Ciencias Sociales y Riesgo de Desastres: un encuentro inconcluso. Buenos Aires, 15 al 17 de septiembre; 12 p.
- **Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile (2017)**. Sismos importantes o destructivos desde 1570. Recuperado el 10 de agosto de 2017 de <http://www.sismologia.cl/links/terremotos/>
- **Coffey, A. & Atkinson, P. (2005)**. Los conceptos y la codificación. En: *Encontrar el sentido a los datos cualitativos: estrategias complementarias de investigación* (pp. 31-63). Editorial Universidad de Alicante.
- **Denis, O. J. (2014)**. La percepción del riesgo como componente de la educación ambiental en las instituciones escolares. *InfoCiencia*, 18(4), 1-11.
- **Dettmer, J. (2002)**. Educación y desastres: reflexiones sobre el caso de México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (México), vol. XXXII, núm. 2, pp. 43-72. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/270/27032203.pdf>
- **Espinoza, A. E., Espinoza, C. E. & Fuentes, A. A. (2015)**. Retornando a Chaitén: diagnóstico participativo de una comunidad educativa desplazada por un desastre siconatural. *Revista Magallania*, 43(3), 65-76.
- **Fernández, I., Beristain, C. y Páez, D. (1999)**. Emociones y conductas colectivas en catástrofes: ansiedad, rumor, miedo y conductas de pánico. En: J. Apalategui (Ed.). *La anticipación de la sociedad. Psicología social de los movimientos sociales* (pp. 281-342). Valencia: Promolibro.
- **Flick, U. (2007)**. *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- **Gaínza, A. (2006)**. La entrevista en profundidad individual. En: M. Canales (Ed.). *Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios* (pp. 219-263). Santiago, Chile: LOM Ediciones.

- **González-Muzzio, C. (2013).** El rol del lugar y el capital social en la resiliencia comunitaria posdesastre: aproximaciones mediante un estudio de caso después del terremoto del 27/F. *Eure (Santiago)*, 39(117), 25-48.
- **Iñigo, I. & Ugarte, A. (2011).** Acerca de la experiencia del riesgo social. Aportes para un giro subjetivo en los estudios sobre vulnerabilidad. Texto de trabajo interno Cívdes.
- **Izquierdo, L. M. E. O., Ramón, E. G., Ruiz, M. R. M. A. & Cortaza, M. G. A. D. (2010).** Programa de educación ambiental, prevención y mitigación de riesgos por inundaciones aplicado en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel N°28. *Revista de la Alta Tecnología y la Sociedad*, Issn, 1940, 2171.
- **Larenas, J. A., Salgado, M. A. & Fuster, X. S. (2015).** Enfrentar los desastres siconaturales desde los capitales y recursos comunitarios: el caso de la erupción volcánica de Chaitén, Chile. *Revista Magallania*, 43(3), 125-139.
- **Liceo de Huará (2015).** Proyecto Educativo Institucional.
- **Lillo, M. (2013).** Influencia de la reapertura de la Escuela Almirante Juan José Latorre en el proceso de retorno de población desplazada por la erupción volcánica en Chaitén (tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago, Chile. Recuperado de <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/130215>
- **Ministerio de Educación, Chile (2013).** Seguridad escolar, currículum y temas sociales. Cómo trabajar la seguridad escolar a través de los objetivos fundamentales transversales en los planes y programas del Mineduc. Recuperado de http://www.educarchile.cl/UserFiles/POOO1/File/CR_Articulos/Mapeo_Curricular_Seguridad_Escolar.pdg
- **_____ (2013).** Política de Seguridad Escolar y Parvularia. Recuperado de http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201305241248540.Politica_Seguridad_Escolar_2.pdf.
- **OPS (2010).** *El terremoto y tsunami del 27 de febrero en Chile. Crónicas y lecciones aprendidas en el sector salud.* Santiago: Airena.
- **Redondo, J. (2011).** Una psicología educativa al servicio de la calidad y equidad de la educación chilena. En: J. Catalán (ed.). *Psicología educativa. Proponiendo rumbos, problemáticas y aportaciones.* La Serena: Editorial Universidad de La Serena.
- **Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2017).** Resumen ejecutivo de gestión año 2017. Recuperado de <https://www.dipres.gob.cl/597/w3-multiproperty-values-14291-23712.html>
- **Stake, R. E. (1998).** *Investigación con estudio de casos.* Ediciones Morata. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2017). Definición del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr).
- **Strauss, A. L., Corbin, J. & Zimmerman, E. (2002).** *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada.* Medellín: Universidad de Antioquia.
- **Torres, R. (2004).** Comunidad de aprendizaje, repensando lo educativo desde el desarrollo local y desde el aprendizaje. Simposio Internacional sobre Comunidades de Aprendizaje (pp. 1-8). Barcelona. Recuperado de http://inafocam.edu.do/cms/data/formacion/comunidades_y_aprendizaje.pdf
- **Unicef (2008).** Albergues en escuela, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ginebra.

_____ (2008). Escuela segura en territorio seguro: reflexiones sobre el papel de la comunidad educativa en la gestión del riesgo. NU. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UN/EIRD). Recuperado de <http://www.eird.org/publicaciones/escuela-segura.pdf>

_____ (2011). "Gestión del riesgo en América Latina y el Caribe". Oficina Regional para América Latina y el Caribe. N°3. Recuperado de [https://www.unicef.org/lac/UNICEF_TACRO_boletin_emerg_16122011\(1\).pdf](https://www.unicef.org/lac/UNICEF_TACRO_boletin_emerg_16122011(1).pdf)

• **Valles, M. (2000).** *Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid, España: Síntesis Editorial S.A.

• **Vargas, J. (2002).** Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y siconaturales. Cepal, N°50. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. Santiago de Chile.

• **Vélez, B. (2011).** La escuela en tiempos de crisis: puntos de fuga para re-instaurar la esperanza en contextos post-desastres. *Folios* (34), 25-35. Recuperado de <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/874/901>

• **Yin, R. K. (1992).** El método de estudio de caso como una herramienta para hacer la evaluación. *Sociología actual*, 40(1), 121-137.



**CADENA GLOBAL DE PRODUCCIÓN DE SALMÓN
ATLÁNTICO POST CRISIS DEL VIRUS ISA_v: ANCLAJE
ESPACIAL Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES EN LA
REGIÓN DE LOS LAGOS Y EL SUR DE CHILE**

Marion Stock Faúndes¹,
Universidad de Chile

RESUMEN

El presente artículo analiza, desde la geografía económica y ecología política, el anclaje espacial de la cadena global de producción de salmón atlántico en la región de Los Lagos y sus efectos sobre el territorio, consecuencia de las fases productivas asociadas a la crianza de salmón en agua dulce y agua de mar, y su posterior comercialización y distribución para el consumo humano.

En la introducción se presentan las causas de la crisis del virus ISAV, los efectos sobre la industria nacional y el mercado internacional salmonero, para luego ahondar en el vínculo entre el desarrollo de la industria y la pobreza que caracteriza a la región de Los Lagos. Luego, el apartado de método aborda conceptos clave para comprender la estructura que sustenta el anclaje espacial y permite el proceso molecular de acumulación de capital a través de las fases productivas del salmón atlántico.

Dado que las fases de crianza en agua dulce y agua de mar tienen lugar en Chile, pero el producto se distribuye y comercializa en diversos países, para el análisis se consideró la cadena de producción como una red global que tiene a las empresas como unidad social básica, ancladas en territorios ventajosos y asociadas con movilidad y fluidez en las fases de la cadena productiva. La metodología aplicada fue exploratoria y se utilizaron técnicas cualitativas, como la observación participativa, análisis de discurso y entrevistas a actores clave, sumadas a técnicas cuantitativas, como encuestas a actores clave y análisis estadístico de indicadores productivos de la industria nacional y el mercado internacional.

Los resultados desentramaron el funcionamiento interno de las empresas tras la crisis del virus ISAV e identificaron reestructuraciones en cada fase y etapa productiva, las que fueron asociadas con transformaciones territoriales entre las que se encuentran la configuración de los barrios salmoneros, la construcción de infraestructura para la conectividad y la consolidación de la macrozona salmonera. Lo anterior permitió identificar los efectos sobre los proveedores locales derivados de la crisis y la diversificación productiva en la región de Los Lagos y el sur de Chile.

Palabras clave: cadena global de producción, anclaje espacial, proceso molecular de acumulación de capital, empresa como sociedad red, redes globales de producción.

¹ Geógrafa. Artículo basado en la tesis "Efectos del anclaje espacial de la industria salmonera en la región de Los Lagos durante el periodo postcrisis (2011-2014) del ISAV", financiada por el proyecto Fondecyt de Iniciación N°11121451, "La Región de Los Lagos post crisis del ISAV, desafíos para el desarrollo territorial", y desarrollada para obtener el título de geógrafa en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Profesora guía: Beatriz Bustos G. Santiago, 2017.

INTRODUCCIÓN

Una característica decisiva del neoliberalismo es el extractivismo, que en América Latina ha traído como consecuencia un rápido aumento de las mercancías primarias provenientes del continente en el mercado mundial, “un apoyo a la inversión extranjera directa en el sector de los recursos naturales, y en la exportación de recursos naturales en forma de mercancías primarias” (Veltmeyer, 2013, p. 82).

Para esto, fue necesario reestructurar las relaciones entre sociedad y naturaleza, lo que condujo a la reliberalización de la propiedad de esta última, lo que la separó de las restricciones sociales y dejó su protección a merced de los mercados autorregulados. Esto limitó la “función social de la propiedad y los recursos de los que dispone el Estado” (Romero, 2009, p. 2).

En este contexto económico se ha desarrollado la industria salmonera chilena. Este recurso es un ejemplo de mercancía primaria en que la cadena global de producción funciona como un sistema que, por un lado, organiza las actividades productivas de las fases de agua dulce, mar, procesamiento y comercialización y, por otro, genera relaciones productivas multiescalares a través de redes globales de producción, lo que lleva a una convergencia de actores sociales, públicos y privados

con capitales financieros (nacionales e internacionales) que se mueven dentro del marco institucional y según las posibilidades de la infraestructura presente en la región (Harvey, 2003; Bustos, 2012; Irarrázaval, 2014; Avilés, 2015, en Román et al., 2015).

Tan alta es la relevancia de nuestro país en el mercado salmonero, que Chile es el segundo exportador tras Noruega, con un 27% de la producción mundial (Corfo, 2015, en Innovación, 2015). También ocupa el segundo lugar de exportaciones nacionales tras el cobre, lo que consolida a la salmonicultura como un sector orientado al comercio exterior.

En 2015 generaba más de 60.000 empleos directos e indirectos en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes (Corfo, 2015, en Innovación, 2015), cifra que se sostiene hasta hoy. De acuerdo con Salmón Chile², actualmente, la industria provee 21.000 empleos directos y 41.000 indirectos, lo que da cuenta de la tercerización del proceso a través de subcontrataciones de servicios (como ocurre con los trabajadores de balsas jaulas). Pero también ha sido importante en el último tiempo la tecnificación de actividades, que permite a esta industria reemplazar mano de obra por equipos robotizados, lo que ha generado un constante desempleo³. Son necesarios estudios más profundos

² Salmón Chile (S/F).

³ Centro Ecoceanos (2019).

para constatar las cifras comunicadas por la industria.

En la región de Los Lagos, la acuicultura (principalmente de salmónidos) es el sector económico predominante, por lo que tras la crisis provocada por el virus ISAV la población se vio profundamente afectada. Una gran cantidad de proveedores eran, y siguen siendo, familias locales, las que resultaron golpeadas tanto por la demora de los pagos por parte de las grandes empresas como por su dependencia del sector financiero que, ante la crisis, disminuyó su apoyo a fin de reducir el riesgo. Las subcontrataciones actuales prefieren trabajadores provenientes de otras regiones, como La Araucanía o Biobío, o trabajadores que provienen del continente, en desmedro de las y los isleños.

Resulta incomprensible que, siendo la segunda potencia exportadora de salmón a nivel global, la región de Los Lagos tenga a 25,5% de su población en situación de pobreza multidimensional (Casen, 2017), lo que representa un aumento de 2,3 puntos porcentuales respecto a 2015, cuando este indicador era de 23,2%. En estos momentos es superada solo por la región de La Araucanía, que presenta un 28,5% de pobreza (Haefner, 2019) y donde también opera una industria exportadora como es la industria forestal. Esto es una demostración de la inequidad en la distribución del capital acumulado.

Pareciera que los números relacionados con exportaciones y pobreza multidimensional son inversamente proporcionales, ya que al año 2015, Inteligencia Comercial de ProChile señalaba que:

“En más de 21% crecieron las exportaciones totales de bienes de la región de Los Lagos, registrando más de US\$5.058 millones en el año 2014, principalmente impulsadas por el comportamiento positivo del sector de 'Productos del Mar', que a su vez se expandió en un 23% en igual período”
(ProChile, 2015)⁴.

La principal cosecha y exportación fue de salmón atlántico (*Salmon salar*), con 606.453 toneladas de producción nacional (Salmón Chile, 2015). Los principales destinos son Estados Unidos, Brasil y América Latina, donde el producto llega en sus diversas presentaciones: fileteado, congelado, ahumado y seco, entre otros.

Estos números explican por qué la región fue la más impactada por el virus ISAV en el periodo de crisis (2007-2010), un punto de inflexión para el modelo productivo de la industria.

“El virus ISA o la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAV) es una enfermedad viral que ataca a la especie de cosecha de salmón atlántico y causa grandes pérdidas económicas a las cosechas marinas, por la muerte de la biomasa en la fase de agua de mar (específicamente centro de engorda). Se diferencia de otras

⁴ ProChile, Ficha de Inteligencia Comercial (2015).

problemáticas sanitarias en función del alto nivel de pérdidas que genera en una actividad productiva de largo ciclo, el ciclo del salmón atlántico es de 18 meses, en que la mayoría de los costos de producción se asocian a la alimentación de los peces. Sumado al nivel de deudas que significa la producción, en que la tendencia general de las productoras de salmón atlántico era solicitar préstamos a los bancos y el hecho de que gran cantidad de la inversión ya se encontraba realizada, generó un desajuste presupuestario que alcanzó los niveles perceptivos de crisis” (Irrarrázaval, 2014, pp. 61-65).

1. Proceso molecular de acumulación de capital por medio de las cadenas globales de producción (GCC) y las redes globales de producción (GPN)⁵

En la última década (2004-2014), el proceso de apropiación y valorización del salmón se ha organizado en cuatro fases productivas: i) fase de agua dulce, ii) fase de agua de mar, iii) fase de procesamiento y iv) fase de comercialización. A la vez, cada una se subdivide en etapas productivas, que ejecutan actividades que van desde el mejoramiento genético hasta el proceso de comercialización.

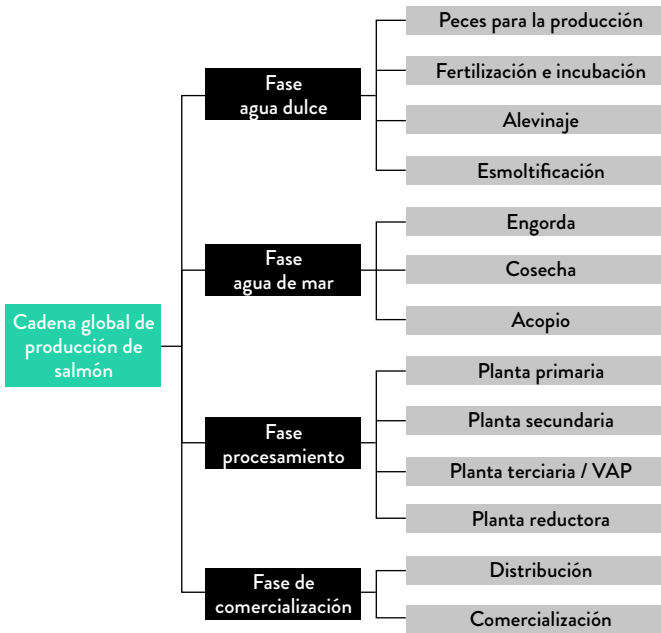
Esta situación exigió cambios en una realidad organizada por tratarse de una crisis estructural, que tuvo no solo impactos económicos (productivos y financieros), sino también sanitarios, ambientales, sociales e institucionales.

MARCO TEÓRICO

Para identificar las transformaciones territoriales, primero es necesario entender el funcionamiento de las cadenas de producción global del salmón, la forma en la que permiten y sostienen la acumulación de capital por medio del anclaje espacial con las empresas de nodos territoriales y la extensión de la circulación mediante redes globales de producción.

⁵ GCC y GPN corresponden a las siglas en inglés de Global Commodity Chain y Global Production Network, traducidos al español como cadenas globales de producción y redes globales de producción.

Figura 1. Fases de la cadena global de producción del salmón



Fuente: elaboración propia a partir del diagrama de Zalungo et al., 2014.

Harvey (2003) propone que la producción de valores y de plusvalor (o valor agregado) generará bienes de consumo para el mercado y la reproducción de la fuerza de trabajo, que posteriormente será vendida para volver a iniciar la producción. Gereffi señala que la “primera vía de circulación de capital” es la que sustenta el proceso de acumulación de capital por medio de “una estructura input-output, que describe el proceso de transformación de materias primas y otros insumos en productos finales” (1994, pp. 96-97). Anteriormente, Porter (1987) ya había planteado que esta estructura *input-output* correspondía a la cadena de valor, una herramienta de análisis del sistema de valor compuesta

por insumos, procesos de transformación y productos, que generalmente se divide en actividades primarias o de apoyo (1987, pp. 51-56).

Dado que la primera parte de la cadena de producción del salmón se desarrolla en Chile (las fases de agua dulce y de mar), pero la distribución y comercialización tiene alcance global, se utiliza el concepto de cadena global de producción, definida como “conjuntos de redes interorganizacionales, agrupadas alrededor de un commodity o producto, vinculando hogares, empresas y Estados dentro de las economías mundiales” (Gereffi et al., 1994, en Bair, 2009, p. 70).

Hasta aquí, queda expuesto que la cadena de producción global del salmón se sostiene en una estructura *input-output* que permite el proceso de acumulación de capital. Esta cadena se organiza en la empresa como unidad de negocio, que se instala necesariamente en un lugar donde pueda llevar a cabo su propósito con las mayores ventajas y los menores costos. Son nodos espaciales multiescalaes, puntos de cruzamiento o vértices de una red global de producción que permiten conectar múltiples localizaciones con el fin de producir, distribuir, comunicar y comercializar bienes o servicios (Mahecha, 2003; Harvey, 2003) con el objetivo de aumentar el lucro y minimizar los gastos.

2. Empresa como nodo espacial: la relación empresa-lugar

Según Coe et al. (2007), la cadena global de producción:

“Tiene dos cuestiones clave que se resuelven al interior de la organización empresarial, la configuración y coordinación de la estructura input-output. La primera, es una cuestión de decidir dónde debe situarse cada actividad de valor añadido a lo largo de la cadena, esta configuración es importante en la formación de las diversas estructuras espaciales, y la segunda, es principalmente una cuestión de organización que moldea la gobernanza de la cadena, dependiendo de la naturaleza de la cadena”

(Coe et al., 2007, p. 227).

La configuración de la estructura *input-output* requiere un análisis de mayor profundidad, ya que permite investigar la relación de la empresa con el territorio. Yeung propone que la empresa “puede ser vista como una red social, ya que está gobernada por relaciones sociales entre diversos actores y, a la vez, se encuentra permeada por las escalas geográficas que dan forma a su construcción social” (Yeung, 2005, p. 321). Esta perspectiva teórica permite comprender cómo las empresas son instituciones que conectan espacialmente a diferentes actores en diferentes lugares y regiones. Por su parte,

“Dicken, Kelly, Olds y Yeung (2001) plantean que las redes sociales son a la vez estructurales y relacionales: son estructurales porque están compuestas por redes establecidas (como redes de infraestructura), y son relacionales porque vinculan a los agentes—instituciones, objetos y el conocimiento, así como individuos— a través de una amplia variedad de dominios”

(Latour, 2005; Monge & Contractor, 2003, en Rozenblat & Melançon, 2013, p. 12).

Hay que recordar que en una cadena de producción puede haber más de una empresa que contribuye no solo al proceso de valorización del producto, sino que también a su distribución y consumo. Por esto, “las diferentes partes de la empresa pueden tener diferentes necesidades de localización y su anclaje espacial puede contraer resultados geográficos diversos” (Coe et al., 2007, p. 229).

3. Actores de la red social

La industria salmonera produce acciones y relaciones entre empresarios, trabajadores y consumidores en el marco de una economía neoliberal (MacKinnon & Cumbers, 2011), donde el Estado y los servicios financieros juegan un rol fundamental. Estos mismos autores señalan que “los empresarios desarrollan competencias que pueden ser un conjunto de habilidades, prácticas y formas de conocimientos”, las que se pueden “fortalecer, aumentando su competitividad, a partir de factores presentes en un entorno ambiental” (Maskell, 2001, p. 339, en MacKinnon et al., 2011, p. 44). En cuanto a los trabajadores,

“la mano de obra debe vender su propia “fuerza de trabajo” para ganar salarios y pagar lo esencial de la vida —comida, ropa, refugio— porque no es dueña de los medios de producción y por tanto de los medios para su propio sustento”

(MacKinnon et al., 2011, p. 51).

La relación empresa-lugar tiene su máxima expresión humana en la relación cotidiana que genera con la mano de obra o el mal llamado “capital humano”, ya que, si bien los productos pueden ser distribuidos de un lugar a otro, la mano de obra necesita asentarse temporalmente en un lugar, pues depende vitalmente de la reproducción del trabajo.

Por su parte, “el consumidor o el mercado de consumo, a menudo está involucrado como la razón para producir bienes y organizar servicios de formas específicas” (MacKinnon et al., 2011, p. 57). Por ejemplo, el mercado salmonero

produce diversos tipos de salmones y productos derivados, que buscan cumplir con patrones de calidad y tamaño. “El consumidor se ha convertido en un tipo de ‘dictador global’” (Miller, 1995, en MacKinnon et al., 2011, p. 57), que a su vez está definido por una cultura e identidad.

En cuanto al Estado, “se identifica como conjunto de instituciones públicas que ejercen autoridad sobre un territorio particular, incluyendo el gobierno, Congreso Nacional, sistema judicial, policías, servicios de seguridad y autoridades locales. Como sugiere, el Estado es una entidad compleja” (MacKinnon et al., 2011, p. 62).

Por último, el sector financiero es uno de los bloques fundamentales para la construcción global de la economía capitalista. Juega un rol crítico como proveedor de dinero y crédito para nuevas inversiones y, últimamente, determina el crecimiento económico, a pesar de que, como las crisis financieras han demostrado, también es propenso a una volatilidad considerable. El sistema financiero global se caracteriza por un desarrollo desigual, que involucra un aumento de concentración de actividades clave en los principales centros financieros por un lado y, por otro, la marginalización y exclusión de los más pobres (MacKinnon et al., 2011, p. 203). Todos estos actores se reúnen, en tiempos normales, para la producción del salmón, y también jugaron roles post-crisis, algunos presentes materialmente en el territorio y otros, como el sector financiero, de forma inmaterial pero igualmente presente en la configuración posterior.

4. Anclaje espacial como causa del proceso de acumulación de capital

El concepto de anclaje espacial ha sido altamente discutido, ya que es una de las tantas traducciones para *embeddedness*, acuñado por Polanyi en *La gran transformación* (1944) para “describir la relación entre la economía y las instituciones (económicas y no económicas) cuya inclusión resultaba vital para comprender la actividad económica” (Gómez Fonseca, M. Á., 2004, p. 151). Cuatro décadas después, Granovetter (1985, p. 487) amplía la unidad de análisis entendiendo al actor racional⁶ como uno “que se encuentra condicionado por el contexto social al que está anclado”, constituido por “un sistema concreto y continuo de relaciones sociales” o “redes de relaciones personales” (Swedberg & Granovetter, 2001, en Bair, 2008, p. 343).

“La utilidad del concepto de embeddedness tiene lugar cuando, desde la teoría, se intenta reconstruir un hecho empírico mediante la articulación de conceptos pertenecientes a disciplinas heterogéneas”

(Gómez Fonseca, M. Á. 2004, p. 150).

En el caso del estudio geográfico, permite complejizar los análisis territoriales a partir de la multidisciplinariedad y potencia el estudio de las relaciones en el territorio, ya que permite identificar dinámicas presentes en la relación en-

tre economía, instituciones, sociedad y la cultura en la producción del espacio.

En este contexto, el anclaje espacial permite vincular la actividad capitalista a la configuración interna de las empresas postcrisis y a las transformaciones geográficas, ya que “la actividad capitalista es un impulso perpetuo hacia la transformación de la escala geográfica” que, sumada a las innovaciones tecnológicas, genera cambios en las relaciones espaciales e influye sobre las reconfiguraciones políticas, lo que verifica el proceso molecular de acumulación de capital como “una intersección crucial entre el territorio y el poder del capital” (Harvey, 2003, p. 99).

Para que lo anterior funcione, debe existir coherencia estructural en el anclaje, lo que permite que se mueva el capital.

“La fluidez del movimiento de capital sobre el espacio depende de que se anclen infraestructuras materiales (capital fijo inserto en tierra) como: ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, instalaciones portuarias, redes de cable, sistema de fibra óptica, redes eléctricas, sistemas de conducción de agua y alcantarillado, oleoducto, etc.”
(Harvey, 2003, p. 99).

⁶ “Una definición de actor racional —vinculado a la racionalidad neoclásica— “supone que el tomador individual de una decisión tiene en su cabeza una función de utilidad que pretende maximizar” (Orive, 2006, p. 76) y que no depende del contexto en el que se encuentra, mientras que el social también lo considera.

5. Economías regionales o “regionalidad”

Por último, dado que la coherencia estructural condiciona la geografía, las tensiones y contradicciones pueden dar paso a configuraciones geográficas estables llamadas “regiones”, según Harvey (2003):

“Las fronteras de este tipo de regiones son borrosas y porosas, pero los flujos que se entrelazan en ellas producen la suficiente coherencia estructural como para distinguir el área geográfica en cuestión de todas las demás áreas de su misma economía nacional”

(Harvey, 2003, p. 102).

“La ‘regionalidad’, como expresión territorial, se da donde las fronteras pueden contravenir a las determinadas de forma administrativa por medio de la expansión de la especialización en y entre otras economías regionales, convirtiéndose en un rasgo fundamental del funcionamiento del capitalismo

(Harvey, 2003, p. 103).

MÉTODO

Esta investigación buscó dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los efectos del anclaje espacial de la industria salmoneera en la región de Los Lagos durante el periodo postcrisis (2011-2014) del ISAV? El objetivo general fue analizar cómo los cambios en la cadena global de producción en el contexto postcrisis del virus ISAV (2011-2014) afectaron el anclaje espacial configurado en torno a la industria salmoneera en la región de Los Lagos.

Los objetivos específicos fueron:

- Identificar la reestructuración de la cadena global de producción en torno a las fases productivas de la industria salmoneera en un contexto postcrisis.
- Identificar las transformaciones territoriales producidas a partir de la reconfiguración de la cadena global de producción en torno a la industria salmoneera.
- Analizar cómo se vincula la reestructuración y la reconfiguración de la cadena global de producción de la industria salmoneera.

La metodología de la presente investigación fue de carácter exploratorio y usó técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. La estrategia implicó fases que buscaron generar puntos de “encuentro de dimensiones políticas y ecológicas de los asuntos medio ambientales, de una manera más balanceada e integradora” (Zimmerer et al., 2003, p. 1).

Esta estrategia se abordó como una construcción sistémica orientada a responder las inquietudes de la ecología y la geografía económica por medio de la observación participante, encuestas, entrevistas, análisis de discurso y análisis estadístico.

La construcción teórica hizo referencia a Gereffi (1994; 1995) para la cadena global de producción; a Coe (2007; 2008; 2012) y Dicken (2011) para la red global de producción; a Yeung (2005) y Mahecha (2003) para la empresa como sociedad red; a Dicken (2011) para la relación empresa-lugar, y principalmente a Harvey (2003) y González (2005) para el proceso del anclaje espacial.

Sobre la escala de estudio, la intención fue pasar de la idea de la definición de escala como un nivel (donde cada nivel tiene asociada un área de acción: por ejemplo, municipio-comuna) al entendimiento de la escala como red de asociaciones o agentes sociales (Cox, 1998, en Gutiérrez Puebla, 2001).

Fue crucial determinar periodos de estudio, ya que ¿cuándo se podía comenzar a hablar de postcrisis?

Para ello se hizo una revisión de datos cualitativos y cuantitativos (2004-2014) que permitió identificar hitos que marcaron la expansión de la industria del salmón. Los datos cualitativos, provenientes de las entrevistas y revisión del medio electrónico *Aqua*, fueron ponderados a través del análisis de discurso en el software Atlas.ti. Las noticias fueron clasificadas por año y fase productiva a partir del diagrama de Zalungo et al., 2014 (modificado por Salmón Chile, 2015).

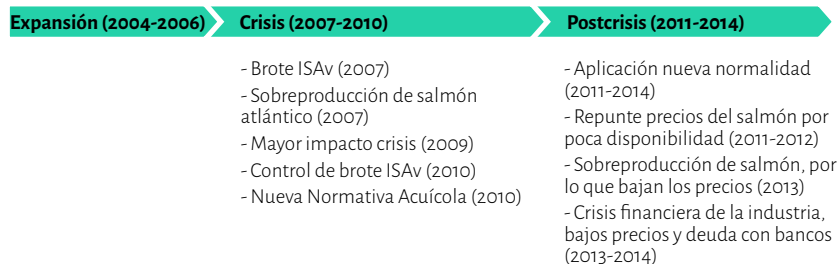
Los hitos que resultaron de interés para esta investigación fueron agrupados en tres dimensiones que convergen en la industria y que fueron relevantes durante el análisis de discurso. En primer lugar, la dimensión sanitaria, ya que es el puente entre los ecosistemas naturales y la cadena de producción. Fue el carácter urgente de la crisis ecológica (producto del volumen de salmón contagiado de ISAv en la etapa de engorda) lo que presionó la reestructuración de la cadena de producción, por lo que dos hitos relevantes fueron el brote del ISAv y su control.

En segundo lugar, la dimensión normativa, ya que para las empresas, los aspectos sanitarios operan sobre la base de normativas que regulan el accionar técnico y tecnológico. Es un marco de acción que, a su vez, devela la visión de los organismos públicos sobre la industria y su desarrollo en el país, por lo que con el primer brote de ISAv se activaron protocolos de acción, así como una discusión sobre cómo abordar la crisis sanitaria, que culminaron con la aprobación de una Nueva Normativa Acuícola, que, “implementada a partir del año 2009 y cuya mayor transformación se operó a través de la Ley N°20.434 del año 2010, realizó cambios en el modelo productivo para hacerlo sustentable” (Subpesca, S/F⁷).

Por último, se consideró la dimensión económica, integrada por ciclos productivos y financieros. En el año 2007, a raíz del ISAv, la expansión productiva de la industria se detuvo, lo que convirtió al periodo de crisis más aguda en el año de menor producción. En este sentido, la Nueva Normativa Acuícola (implementada desde el año 2009) marcó un hito que impactó en la dimensión económica, ya que con este nuevo marco de acción fue posible volver a proyectar la industria.

A partir de los hitos en estas tres dimensiones, se definieron tres periodos de evolución de la industria salmonera: “expansión” (2004-2006); “crisis” (2007-2010) y “postcrisis” (2011-2014).

⁷ Subpesca (S/F).

Figura 2. Periodización de la industria salmonera (2004-2014)

Fuente: elaboración propia a partir de Katz, Iizuka & Muñoz, 2011; Montero, 2004; Irrázaval, 2014; Bustos, 2012.

RESULTADOS

1. Desentramando la “caja negra” tras la crisis del ISAV

Las fases de la cadena global de producción debieron cambiar a raíz del impacto del ISAV para responder a las nuevas normativas acuícolas, y cada cambio significó, a su vez, efectos sobre las actividades productivas y, por ende, en las relaciones de la cadena productiva con el territorio, así como en las estrategias ejecutadas por los empresarios para continuar con la acumulación de capital.

Reestructuración de la fase de agua dulce

Tuvo cambios principalmente en la primera etapa de generación de peces para la reproducción, la que comienza con la adquisición de ovas.

Disponibilidad de ovas para la reproducción de peces

Durante el periodo postcrisis fue disminuyendo la importación de ovas a medida que aumentaba la producción interna por las nuevas normativas sanitarias aplicadas, sobre todo desde 2013 hacia finales de 2014, en que la importación bordeó solo el 10% de lo disponible para la industria.

Lo anterior va en directa relación con el reposicionamiento del salmón atlántico como producto “estrella” de la industria acuícola, ya que, aunque la trucha arcoiris y el salmón del pacífico (*coho*) aportaron a la diversificación productiva de las empresas —para sopesar la crisis—, el salmón atlántico sigue siendo el más demandado a nivel mundial.

De los sistemas abiertos a los sistemas cerrados, cierre de pisciculturas en lagos y limitación en ríos para la etapa de esmoltificación⁸

⁸ La esmoltificación constituye una real metamorfosis que involucra la osmorregulación, conducta, metabolismo y morfología del pez, lo que le permite llevar a cabo el paso del agua dulce a salada y es indispensable para su sobrevivencia y crecimiento en el mar.

Otro cambio relevante a raíz de del ISAv fue el aumento de preocupación por los ecosistemas de cultivo en lagos, ríos y mar. En el caso de la etapa de esmoltificación, implica un paso de los sistemas abiertos en agua dulce a los sistemas cerrados en tierra (como sistema de recirculación). Este es uno de los tópicos que aumenta el costo de producción para la industria, debido a las necesarias inversiones para cumplir con los estándares del Reglamento Sanitario para la Acuicultura (Resa).

2. Reestructuración de la fase de agua de mar

La etapa de engorda como punto crítico para el nuevo modelo productivo

Los cambios identificados en esta fase productiva estuvieron, en su mayoría, enfocados en la etapa de engorda —ya que en esta se detonó la epidemia del ISAv—, con el objetivo de normar la estructura productiva del sector acuícola en el mar, en específico, mediante regulación dirigida a las concesiones acuícolas (lo que trascendía los límites político-administrativos de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes).

A partir de la promulgación de la Ley 20.434, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia acuícola, se avanza hacia un nuevo modelo ambiental, que busca impulsar la industria salmonera y que se desarrolla a partir del periodo de postcrisis.

Fuentes (2014) considera cinco contenidos principales que definen el nuevo modelo: ordenamiento territorial, normativa sanitaria, normativa ambiental,

nuevas infracciones instauradas por la Ley General de Pesca y Acuicultura (Lgpa) y nuevas causales de caducidad por incumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria.

Lo importante de estas modificaciones es que impactan directamente sobre la forma en que se configura espacialmente la industria. Sobre el ordenamiento territorial plantea que:

“Se cierra el acceso a nuevas concesiones de acuicultura en la región de Los Lagos y Aysén. En la región de Magallanes se cierra durante un año, para concretar el proceso de zonificación costera; se crea la institución de la relocalización de concesiones de salmones; se establece la distancia de 1.5 millas de distancia entre los centros de cultivo y los parques y reservas marinas; se elimina la posibilidad de realizar acuicultura en lagos; en ríos se permite solo la acuicultura extensiva; se incorpora la zonificación del borde costero del litoral a la LGPA, con la finalidad de definir Áreas Apropriadadas para la Acuicultura (AAA) acorde a lo estimado por la zonificación; el agotamiento de las AAA, en la región de Los Lagos y Aysén, impone la necesidad de establecer nuevas áreas, acorde a el Convenio 169 de la OIT y la Ley N°20.249, sobre espacio marino de los pueblos originarios, es decir, se debe realizar una consulta previa a la apertura de nuevas AAA”

(Fuentes, 2014, pp. 466-467).

Además, en el caso de las modificaciones a la normativa sanitaria, se incorporan en la Lgpa las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) —antes, áreas de manejo sanitario—; se

establece densidad de cultivo por ACS; se incorpora un nuevo nivel denominado “macrozonas”, que abarca dos o más ACS; se incorporan las 1,5 millas de distancia entre ACS y macrozona para generar unidades de contención de enfermedades; se crean incentivos para la relocalización de concesiones hasta el 8 abril de 2015; y se crea una causal de caducidad para aquellas relocalizaciones posteriores a abril de 2015 (Fuentes, 2014).

Regulación de la etapa de acopio

Esta fue normada al inicio y final del año 2014.

“En primer lugar, se presentó un proyecto para regular la existencia de los centros de acopio, que, por estar ubicados en el mar, requerirían de dos actos jurídicos; la autorización de la Subsecretaría de Pesca y la concesión marítima otorgada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; en segundo lugar, estableció elementos para determinar la bioseguridad en los centros de acopio, tanto en aspectos tecnológicos como procedimientos en base al Reglamento Sanitario”

(Resa)⁹.

Este proceso se completó cuando “la Subsecretaría de Pesca, presentó una propuesta de modificación para centros de acopio y faenamientos, que contempló el lavado in situ de redes y el análisis de los centros con redes de cobre”¹⁰.

3. Efectos en la fase de procesamiento

En cuanto a la cosecha, en el Gráfico 1¹¹ se advierte la evolución de los principales recursos cosechados postcrisis. Desde 2011 (periodo en que la industria se encontraba en proceso de retomar el cultivo de salmón atlántico) hasta mediados de 2012, la principal cosecha fue de chorito, seguida por la cosecha de trucha arcoíris y salmón del pacífico, con el fin de diversificar el mercado.

Desde mediados de 2012 hasta el año 2014 se aprecia un aumento en la cosecha del salmón atlántico, tanto así, que durante 2013 se produce una sobreoferta que genera baja de precios¹² y que abre nuevamente cuestionamientos sobre la responsabilidad de los productores al momento de proyectar una industria que, bajo el “nuevo modelo de producción”, prometía ser sustentable con el fin de disminuir los riesgos sanitarios.

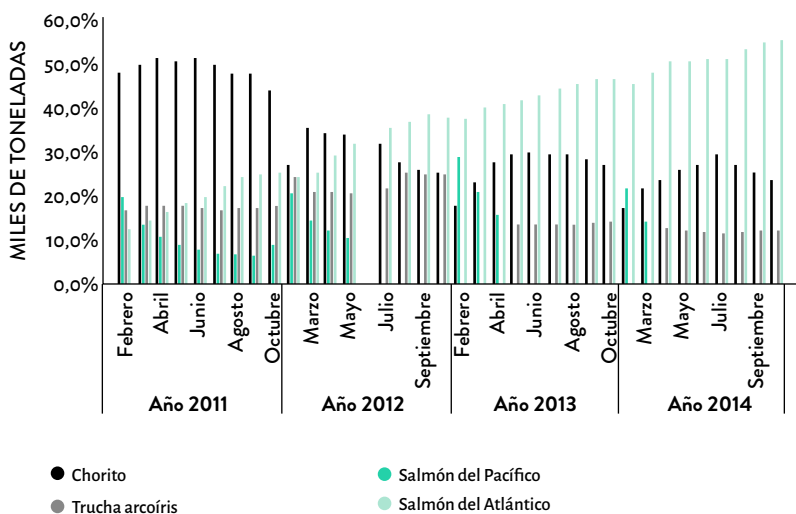
⁹ Aqua (2014a).

¹⁰ Aqua (2014b).

¹¹ En el informe correspondiente a junio (2012) no están indicados los principales recursos cosechados.

¹² Gerente entrevistado 1.

Gráfico 1. Principales recursos cosechados postcrisis (2011-2014)



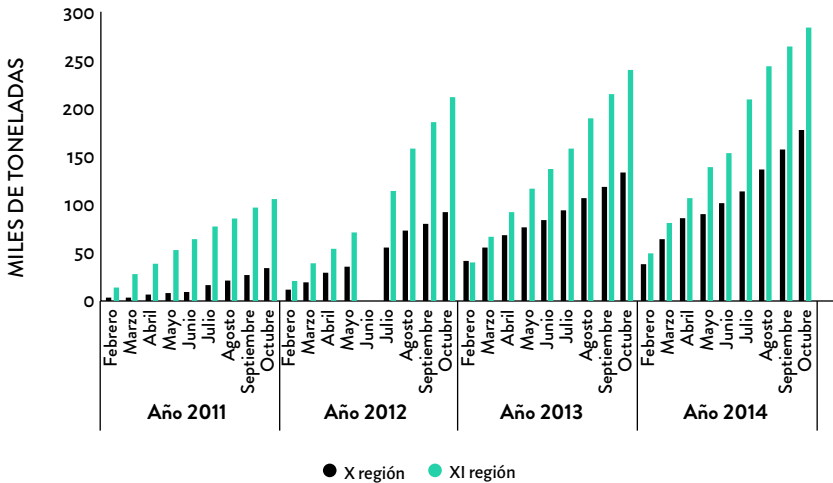
Fuente: elaboración propia a partir del Análisis de Sector Acuícola, Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura, Departamento de Análisis Sectorial, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), periodo 2011-2014.

Otro dato interesante sobre la cosecha de salmón atlántico es que comienza a generarse mayoritariamente en la región de Aysén, tal como demuestra el Gráfico 2¹³, lo que consolida el proyecto

de una macrozona salmonera en la búsqueda de nuevos espacios para el anclaje espacial de la industria que cumplan con las condiciones ambientales necesarias.

¹³ En el informe correspondiente a junio (2012) no están indicados los principales recursos cosechados.

Gráfico 2. Principales regiones de cosecha de salmón atlántico



Fuente: elaboración propia a partir del Análisis de Sector Acuícola, Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura, Departamento de Análisis Sectorial, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), periodo 2011-2014.

4. Efectos en la fase de comercialización

Esta fase productiva, a diferencia de las anteriores —enmarcadas en normativas rígidas para evitar riesgos sanitarios—, está más determinada por estrategias productivas y de comercialización de las empresas, por lo que en ella se reconocen efectos más que reestructuraciones. En particular, en la fase terciaria, en la cual se proporciona el valor agregado (VAP) a los productos, desde el corte hasta el tipo de envase para su posterior distribución.

En cuanto a la etapa de distribución, estuvo sujeta a efectos puntuales más que a cambios estructurales durante el periodo de postcrisis. Para la distribu-

ción de los productos finales (derivados del salmón atlántico en sus diversas presentaciones) se desarrollaron estrategias de comercialización que consideran desde las características culturales de los consumidores (preferencias en cortes, filetes, color) hasta la imagen y publicidad que será aplicada en cada mercado. El proceso de distribución tiene por objetivo hacer llegar el bien o servicio al consumidor. Esta tiene un carácter estratégico y está regulada por los vínculos comerciales entre países, ya que no basta con que el producto tenga un precio conveniente, sino que debe ser accesible.

5. Reconfiguración territorial como reflejo de la reestructuración de la cadena global de producción

Relación postcrisis de la industria salmoneera con la región de Los Lagos

La relación postcrisis se mantiene por la dependencia de la economía regional con este sector productivo, tal como indica un proveedor:

“Es fundamental, es fundamental y se vio después de la crisis del 2007-2008, en realidad, cuando la industria colapsó, Puerto Montt básicamente se vino abajo, muchas casas se vendieron, muchos remates de casas, mucha gente, eeh... un porcentaje extremadamente alto de la gente que se dedica al rubro acuícola, básicamente salmoneeros, es de afuera de Puerto Montt, de la región. Entonces, tú encontrabas gente que se emigraba, te quedabas sin trabajo y se emigraba, se iba a otras regiones, volvía a su casa, gente que... matrimonios que entregaban su casa en arriendo o vendían su casa y se iban a la casa de sus papás y viajaban, gente que tenía turnos, porque esta industria es mucho de turnos, entonces buscaban muchas alternativas, fue bien complejo y la industria acuícola es vital aquí en la décima región”
(Proveedor 10).

Además, es interesante relevar que se le atribuye a la industria el crecimiento regional en términos de la construcción de infraestructura a raíz de la necesidad de transporte de los bienes y servicios para el desarrollo de la cadena productiva. De hecho, uno de los proveedores entrevistados afirma:

“Nunca debieron estar acá los salmones, eso fue un error, pero si al año, digamos, que partió en el año ochenta, porque antes fue un experimento, no más, pero si en el año ochenta pretendías ir a colocar pescados en Punta Arenas, con qué ropa, imposible, digamos, si no habían ni barcos acá, estamos hablando de lanchas chilotas de madera y un par de lanchas que servían a la gente que vivía en la isla, o sea, pensar barcos que vayan a proveer ahí a los salmones, no, los salmones se colocaron donde había camino. Bueno, por Aysén no había camino y en Punta Arenas menos, entonces qué iba a hacer, na; po, tuvo que ser aquí, no más”

(Proveedor 6).

De hecho, después de la crisis se desarrollaron múltiples proyectos de infraestructura, no solo en la región de Los Lagos, sino que también hacia el sur austral, con el objetivo de consolidar la “macrozona salmoneera”.

Organizando el mar: configuración de los barrios salmoneeros

Tal como se señaló en los cambios de la etapa de mar, la Ley 20.434 modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia acuícola para la aplicación del Nuevo Modelo Acuícola para alcanzar los desafíos en sustentabilidad, lo que significó cambios en la configuración espacial mediante modificaciones sanitarias y ambientales (Intesal, 2014).

Estas se aplican principalmente en la etapa de engorda, ya que fue en las pisciculturas donde el descuido en la contención de los peces generó altas pérdi-

das de biomasa tras el ISAv. Por esto, dos de los cinco contenidos principales de la ley (Fuentes, 2014) tienen directa relación con la configuración espacial para controlar a la industria salmonera. Primero, están los contenidos sobre ordenamiento territorial y, en segundo lugar, la normativa sanitaria (Fuentes, 2014).

La creación de los barrios salmoneros o Agrupación de Concesiones de Salmónidos (ACS) es, sin duda, una de las medidas más relevantes para la industria y la región, ya que aparte de implantar un ordenamiento territorial en el mar interior, obliga a los productores a coordinar acciones y fiscalizarse entre ellos, pues en una agrupación conviven concesiones de diversas empresas. Para la industria, este es un avance hacia la sustentabilidad.

Sin embargo, existen muchas definiciones de sustentabilidad. La propuesta de Intesal (2014) apunta a un “equilibrio de la industria del salmón con la columna de agua y sistema costero en general. Explotación de estos recursos por debajo del límite de renovación”. En la Figura 3 se muestran los 62 barrios salmoneros de las regiones de Los Lagos y de Aysén.

“La creación de los barrios y el intentar cultivar por zonas delimitadas es una muy buena idea, es hacia donde las industrias de producción en el mar deberían ir, a producir en forma compartimentada, por lo que esto ha sido destacado por países como Noruega, que creen que esto es un buen ejemplo hacia donde se debe avanzar”

(Intesal, 2014).

Figura 3. Barrios salmoneros X región (región de Los Lagos) y XI región (región de Aysén)



Fuente: Intesal, 2014.

Otro aporte de los barrios salmoneros es que dilucidan las áreas de posible conflicto, ya que al determinar dónde deben estar las concesiones, se pueden establecer cruces con otras actividades que se ejecutan en la región, como el turismo, las áreas para la pesca artesanal y la relación con los pueblos originarios de acuerdo con los convenios de la OIT¹⁴.

Por otra parte, si bien en un inicio el desarrollo de la industria salmonera se concentró en la región de Los Lagos, principalmente por contar con las condiciones ambientales para el cultivo de salmón, luego de la crisis del ISAv se potenció la idea de una macrozona salmoneera debido a la necesidad de encontrar nuevos espacios de producción con condiciones naturales que se adecúan más a las necesidades sanitarias de la industria.

Construcción de infraestructura para la conectividad

Durante el periodo postcrisis, la industria estuvo atenta y siguió impulsando la construcción de infraestructura para la conectividad en vista de las nuevas necesidades de movilizarse más hacia el sur. Así, impulsó la “ruta salmonicul-tora” a través de diversos proyectos que integran la red vial, puentes y puertos.

El interés principal se encuentra en la Ruta 7, la que une la región de Los Lagos con la región de Aysén.

Expansión geográfica: macrozona salmoneera

Al crear el sistema de Agrupación de Concesión de Salmónidos (ACS) o “barrios salmoneros” y determinar un modelo de ordenamiento territorial para la engorda de salmón, emerge una regulación que resulta vital para la coherencia estructural de la industria, ya que no solo se determinan los lugares y densidades de cultivo, sino que se obliga a los productores a trabajar en conjunto por la “sustentabilidad de la industria”.

“Eso sucede por el tema de las concesiones, por el desgaste del suelo, tú tienes, no estoy segura de la cantidad de tiempo que puedas estar en un lugar, en tu concesión, entonces llega esa cantidad de años y tienes que dejar descansar ese sitio y moverte, pero después se van a volver a mover y así van a estar todo el rato, pero es eso, po’, no hay más lugares”
(Proveedor 8).

Hacia el año 2014, la regulación acuícola apuntó a limitar la creación de nuevas concesiones acuícolas en la región de los Lagos, lo que, a pesar de no generar mayor impacto, sí vino a confirmar el cambio de rol de la región dentro de la industria salmonera.

Si bien sigue siendo una de las principales regiones de cultivo, luego de 2010 Los Ríos se potencia como polo de desarrollo tecnológico para la industria acuícola.

¹⁴ Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

“En Puerto Montt y Chiloé, prácticamente se generó un polo de desarrollo tecnológico ¡gigante! Sobre la base de esta industria y los proveedores que están acompañando esta industria, o sea —ahí el papelito que te pasé—, la cantidad de equipos y servicios especializados, líderes mundiales, cada uno en aquello que están metidos, es brutal, de hecho, detrás de esto hay decenas o cientos de empresas o pequeñas empresas y muchas de ellas están incluso vendiendo en Asia, prestando servicio, es decir, el impacto de la industria ha sido gigante”

(Gerente 1).

Por otro lado, las regiones de La Araucanía y Aysén toman un rol importante en la fase de mar, específicamente en la etapa de engorda y de producción de smolt, respectivamente **(Proveedor 4)**.

“O sea, nosotros todavía tenemos mucha costa o superficie para seguir creciendo, lo que nos falta es infraestructura, nos faltan puentes, es que la operatividad es muy cara para llegar tan lejos, nos falta que se pueblen más ciudades aquí en el sur, más lugares para que la logística sea más fácil, que llegue petróleo, que llegue la luz, que haya puentes, que haya caminos, ¿te fijas? Y así la industria sigue creciendo, pero eso es un apoyo del Estado, tú vas a Noruega u otros países y está lleno de caminos en todos lados, los lugares más recónditos, y ahí llega la industria, pero nosotros no, nos falta, hay muchos lugares que tú pasas por avión y no tienes cómo llegar y está lleno de fiordos y lugares donde se pueden colocar salmones”

(Proveedor 9).

Migración de los proveedores

La expansión de la industria está aparejada a la necesidad de que nuevos proveedores se integren o que los que principalmente se ubican en Puerto Montt migren a las zonas donde se está anclando la industria.

“Ahora, en Aysén y Magallanes sí falta que se instalen proveedores, ahí sí hay una falta de servicios, toda la industria se creó en la décima y en Chiloé es prácticamente Puerto Montt para la décima, luego se fue gran parte de ella a Aysén y a Magallanes, que a Magallanes no va a llegar más del 20% de la producción, pero no se está dando servicio o muy pocos servicios para sostener esa producción, entonces... de hecho, nosotros hicimos un estudio de necesidades laborales de la industria de aquí a cinco años, seis años, y se requieren siete mil nuevos puestos de trabajo, pero principalmente en Aysén y Magallanes como prestadores de servicios, o sea, por ahí está la necesidad”

(Gerente 1).

Relación empresa-lugar para el anclaje espacial: el efecto de la reestructuración sobre los proveedores

Para comprender lo que significó la reestructuración de la cadena global de producción sobre los actores locales, a continuación se explicitan los efectos sobre los proveedores para comprender cómo la relación empresa-lugar constituye un nodo para el anclaje espacial. Para identificar los efectos de la reestructuración sobre los proveedores fue necesario caracterizarlos mediante una encuesta que permitió identificar que el

80% corresponde a empresas que cuentan con entre uno y 50 trabajadores, por lo que pueden ser calificadas como Pymes, y 20% pueden ser consideradas como empresas grandes. Por otro lado, respecto a la propiedad del capital, 56% reconoce ingresos de capitales nacionales; 36% de capital regional y un 8% internacional. En relación con las empresas que recurren al *factoring* (empresa que se dedica a otorgar préstamos), previo a la crisis 28% ocupaba este servicio y 72% no lo hacía.

Sobre los efectos del ISAv, 84% considera que fue perjudicado, mientras que 16% plantea que no. En este sondeo se consideraron empresas de todas las fases productivas y se constató que las menos afectadas fueron aquellas que participan en las etapas de ovas, fertilización e incubación, alevinaje, esmoltificación, alimentación, engorda y comercialización. Al hacer la distinción por el tipo de capital, son las empresas de capital regional las más afectadas (84%), seguidas por las empresas nacionales (14%) y las de capital internacional (2%).

Respecto a los trabajadores, 36% indica que tuvo que disminuir la planta, mientras que 33% dice que se mantiene igual; 24% señala que ha aumentado y 5% que tuvo que despedir a todos. Un encuestado que tuvo que cerrar la empresa afirma que:

“Se debió finiquitar a todos. Dado que no había trabajo y no despedimos a nadie en forma inmediata, gastando el capital en sueldos y gestiones estériles para conseguir trabajo, hubo demoras en el pago de finiquitos, con el consiguiente descontento y problemas con los trabajadores, con los cuales hasta ese momento se llevaba una relación muy cercana y cordial”
(encuesta a proveedores).

Esto es relevante, ya que permite comprender cómo las relaciones locales cambiaron después de las crisis del ISAv.

Por último, tras la crisis creció el número de empresas que recurrían al *factoring* (de 28% a 42%), lo que significó un nuevo foco de crisis post ISAv: los impactos financieros.

“Fue bastante doloroso eso, uno, perder capital humano, y dos, aumentar más aún tu deuda, porque tuvimos que alargarla, consolidar deudas, créditos, diferentes cosas, pero ya no lo ibas a pagar en tres años, lo ibas a pagar en ocho, nueve, diez, once, doce, lo que fuera cada uno, lo que hizo... y obviamente que eso es mucho más caro”
(proveedor 5).

Por otro lado, la crisis implicó un aumento de costos en la producción, ya que las nuevas regulaciones sanitarias aplicaron de igual forma para las Pymes, que no recibieron el apoyo desde el sistema financiero que sí llegó a los grandes productores. Muchas Pymes quebraron y otras redujeron la expectativa de crecimiento de sus negocios. Otras adoptaron diferentes estrategias postcrisis, como la apertura de nuevos

negocios en otros ámbitos, manteniendo el vínculo con la industria salmoneera; la generación de nuevos modelos de negocios, reestructurando la gestión interna; y el establecimiento de clientes prioritarios, aumentando los requisitos para trabajar con actores de la industria. Otros, simplemente, optaron por cambiar de ámbito de negocios, desligándose de la industria salmoneera.

Por otro lado, como una consecuencia positiva de la crisis, se abrieron nuevos negocios y se promocionaron otros que adquirieron relevancia por las nuevas regulaciones sanitarias, como los laboratorios, empresas de bioseguridad, alta tecnología, I+D+i, formación y capacitación, *factoring* e incubadoras de negocios.

Instituciones públicas: financiamiento, internacionalización, capacitaciones e I+D+i

Cabe revisar de qué forma el Estado se hizo cargo de los efectos sobre los proveedores, que no recibieron la misma atención que los productores. El 64% de los proveedores encuestados considera que la actuación institucional fue mala, 32% que fue ni buena ni mala y 4% declara no saber. Una fuerte crítica por parte de los proveedores tuvo que ver con la falta de información sobre las estrategias de comunicación del sector público-privado, en particular, las relacionadas con las pequeñas y medianas empresas.

Las principales acciones fueron capacitaciones, seminarios y entrega de fondos de gobierno, como capital semilla, que potencia emprendimientos por

medio de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

El conjunto de las políticas institucionales desarrolladas por las diversas instituciones estatales (las más visibles son Corfo, InnovaChile, ProChile y Sercotec) se enfoca en tres áreas impulsadas tras la crisis: nuevas líneas de financiamiento, internacionalización de los proveedores para la exportación (lo que se traduce en herramientas de marketing, logística y la apertura y diversificación de mercados) y, por último, desarrollo de conocimiento (abarca I+D+i y las capacitaciones por medio de talleres, encuentros o seminarios).

Diversificación productiva en la región de Los Lagos

La crisis del ISAv no solo reestructuró la cadena productiva de la industria salmoneera, sino que también afectó las relaciones con la industria turística, agropecuaria y minera, lo que evidenció las relaciones productivas estratégicas para la industria salmoneera.

Con la industria turística, los conflictos se generan, por una parte,

“porque las jaulas se ven feas, porque hay flotadores tirados en la playa, blah, blah, blah, con la contaminación del fondo del mar, con un montón de cuestiones”

(proveedor 6).

Además, existen conflictos relacionados con algunas concesiones y los lugares donde se anclan, ejemplo de esto fue la disputa en Bahía Rincones (región de Los Lagos) por las aguas del Lago Llanquihue (que comenzó en 2011 y fue

resuelta en 2014) entre la empresa productora Marine Harvest y la Sociedad Turística y Hotelera Puerto Viejo Ltda., de Puerto Octay. Esta situación terminó con la productora manifestando que “para nosotros es importante mantener una buena relación con las comunidades donde opera nuestra empresa”¹⁵.

“Han aparecido ciertas asociatividades que todavía no se concretan mucho, pero que están apareciendo entre, por ejemplo, hay tour turístico que van a ver centros, van a ver el salmón, cómo se produce, cómo lo sacan, los turistas se sacan fotos, hay toda una cuestión ahora, eso no se podía hacer por área de manejo, ¿cacha'í?, pero ahora se está como empezando a hacer, se están mezclando las industrias”

(proveedor 13).

Por otro lado, el sector agropecuario también se reactivó, principalmente por dos motivos. En primer lugar, por la necesidad de sopesar la crisis del ISAv.

“El agro quedó botado producto de la industria también, mucha gente salió de la tierra, ya no siguió cultivando sus tierras y quedaron botadas, y eso fue muy bonito, ese vuelco cuando ocurrió la crisis del ISA, uno ya se daba cuenta, andaba por los caminos rurales y te empezaste a dar cuenta que los potreros ya no estaban llenos de espinillos, todos cochinos, puro pasto, etc., empezaste a ver limpiando, pasando tractores, produciendo, haciendo producir de nuevo el campo, y eso es muy bueno”

(proveedor 5).

Y, en segundo lugar, por la necesidad de la industria de encontrar nuevas fuentes de alimentación para los salmones, en particular la proteína basada en vegetales que necesitan ingerir, por lo que surgió una oportunidad para la industria agrícola con el cultivo de raps/canola, perteneciente a la familia de las *Brassicales*, que se encuentra en un área de cultivo adaptada entre la VIII y la X región. El raps es el segundo cultivo oleaginoso más importante a nivel mundial (el primero es la soya). Desde el año 2000, la producción mundial de raps ha crecido en 88%, mientras que la de soya solo lo ha hecho en 49%¹⁶.

Por último, converge la industria minera con la industria acuícola mediante el desarrollo de tecnología en jaulas y redes de cobre para el cultivo. El proveedor EcoSea Farming S.A. (filial de Codelco) desarrolló desde el año 2009 tecnología para

“crear una jaula que no sólo permitiera a los salmonicultores criar peces en forma saludable en áreas aptas para la acuicultura, sino también evitar daños causados por mal tiempo, evadir los blooms de algas, los brotes de virus ISA y buscar mejores condiciones de oxígeno dentro de la columna de agua”

(Codelco, 2012).

¹⁵ Aqua (2014c).

¹⁶ Odepa (2014).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA

Existe una relación directa entre la reestructuración de la cadena global de producción del salmón y la reconfiguración espacial. Esto se expresa por medio de las transformaciones territoriales identificadas, como la reconfiguración de las concesiones en la etapa de engorda con la formación de barrios salmoneiros, la expansión de la industria salmoneira hacia el sur austral y la conformación formal de las macrozonas salmoneiras.

En este sentido, tanto la reestructuración como la reconfiguración espacial son efectos directos del anclaje espacial de la industria salmoneira en la región de Los Lagos durante el periodo post-crisis del ISAV, desarrollado para continuar con el proceso de acumulación de capital. En otras palabras, la reformulación se ejecuta luego de la crisis del ISAV y responde a las necesidades de la industria de continuar funcionando. La modificación de las acciones productivas es el vínculo entre el territorio y las empresas locales.

Estas últimas son actores vitales, ya que son los pequeños comerciantes quienes ven en la industria una oportunidad para insertarse en la economía y contribuir al desarrollo local. Esto no es menor, ya que por medio de la relación empresa-lugar se canalizan las relaciones que dan coherencia a la estructura capitalista desde la escala local, es decir, sin ellos el anclaje espacial no sería posible.

La región de Los Lagos (en particular Puerto Montt y Puerto Varas) se consolida como polo de desarrollo comercial y de I+D+i de la industria salmoneira, y desde ella se articulan las redes globales de producción para distribuir los bienes y servicios, convirtiendo un circuito cerrado en uno abierto al considerar la producción, distribución, comercialización, consumo y retorno de capital para su acumulación y reinversión. Por esto, el desarrollo local de la región depende inherentemente de las relaciones y decisiones de las empresas privadas — productores y proveedores— al alero de un Estado subsidiario, presente por medio de alianzas público-privadas.

Cabe recalcar que, al momento de proponer medidas para sobrellevar la crisis, las políticas propuestas por el Estado fueron dirigidas en mayor medida a las grandes empresas, lo que aumentó la precarización de la vida para las y los trabajadores locales, empujándoles a individualizar los impactos de la crisis y acrecentar la dependencia de los proveedores de los créditos financieros. Este punto es relevante, ya que demuestra una contradicción del anclaje espacial, pues las soluciones propuestas implicaban debilitar un vínculo fundamental: ¿de qué sirven las capacitaciones, seminarios y fondos concursables si no se convierten en estabilidad financiera para los miles de trabajadores que dependen de la industria? ¿Es realmente la industria salmoneira un aporte para superar la pobreza?

Pareciera que no. Ya no es suficiente proponer una actividad productiva rentable para unos pocos y hay que dejar de separar las decisiones tecnócratas

de las transformaciones territoriales para crear actividades productivas que reconozcan las condiciones geográficas y las necesidades de la población, con lo que se conseguirá, desde una visión sistémica, proponer un modelo de desarrollo que reconozca la importancia de todas y todos los actores territoriales, la diversidad de historias y las visiones que representan. Una salida (o inicio) puede plantearse desde el enfoque de los bienes comunes y una gobernanza en que las relaciones de poder no sean abismalmente asimétricas, sino que se sostengan en el diálogo y la construcción en comunidad, lo que solo podría ayudar al fortalecimiento de la economía regional, pues implicaría la generación de proyectos de vida comunes, socialmente responsables y con sanciones adecuadas en caso de incumplimiento de las normativas construidas para proteger derechos humanos básicos, como lo es vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Así pues, el debate sobre una nueva Constitución en Chile debe considerar la necesidad de un nuevo modelo económico y productivo, que permita cuestionar, por ejemplo, el principio de subsidiariedad y el rol que debe jugar el Estado en la economía nacional, en especial con los grupos intermedios, como son mencionadas las empresas en la Constitución de 1980.

A través de este análisis exploratorio, la geografía permite comprender cómo el proceso de acumulación de capital ejecuta diversas actividades productivas en distintos puntos de la región por medio del anclaje espacial, reconociendo variables materiales e inmateriales como

un complejo que permite reconocer la “regionalización” de la industria salmoneera y la diversificación productiva como una solución a la crisis del capital.

En otras palabras, permite evidenciar, mediante este caso y en el marco del modelo neoliberal, que actualmente el territorio se construye más desde el deseo de acumular capital que desde el respeto por las necesidades locales, por lo que se produce una distorsión —u omisión— al momento de proyectar actividades productivas en contextos de crisis. Cabe preguntarse qué modelo de desarrollo económico y social se está produciendo, para quiénes y dónde deja las necesidades, proyecciones y sueños de la población austral.

BIBLIOGRAFÍA

- **Aqua (2014a)**. Centros de acopio de peces: Buscan normar la entrega de concesiones marítimas. Aqua, 27/03/2014. Disponible online en <http://www.aqua.cl/2014/03/27/centros-de-acopio-de-peces-buscan-normar-la-entrega-de-concesiones-maritimas/>
- _____ (2014b). Limpieza y mantenimiento: Redes en óptimas condiciones. Aqua, 15/10/2014. Disponible online en <http://www.aqua.cl/informes-tecnicos/limpieza-y-mantenimiento-redes-en-optimas-condiciones/>
- _____ (2014c). Marine Harvest pondrá fin a sus operaciones en el lago Llanquihue. Aqua, 19/08/2014. Disponible online en <http://www.aqua.cl/2014/08/19/marine-harvest-pondra-fin-sus-operaciones-en-el-lago-llanquihue/>
- **Bair, J. (2008)**. Analyzing global economic organization: embedded networks and global chains compared, *Economy and Society*, 37:3, 339-364. Disponible en línea en [10.1080/03085140802172664](https://doi.org/10.1080/03085140802172664)
- _____ (2009). *Frontiers of commodity chain research*. Stanford University Press.
- **Bustos, B. (2012)**. Brote del virus ISA: crisis ambiental y capacidad de la institucionalidad ambiental para manejar el conflicto. *Eure (Santiago)*, 38(115), 219-245. Recuperado en 12 de marzo de 2015. Disponible en línea en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So25071612012000300010&lng=es&tln-g=es.10.4067/So250-71612012000300010
- **Coe, N. M., Kelly, P. F. & Yeung, H. W. C. (2007)**. *Economic geography: a contemporary introduction*. Oxford: Blackwell.
- **Codelco (2012)**. Jaulas de cobre para cultivo de peces: una gran noticia para la acuicultura mundial. Disponible en línea en <https://www.codelco.com/jaulas-de-cobre-para-cultivo-de-peces-una-gran-noticia-para-la-prontus-codelco/2012-06-20/130855.html>
- **Centro Ecoceanos (2019)**. Salmones de sangre del sur del mundo: morir trabajando en la industria productora y exportadora de salmónidos de cultivo del sur de Chile. Disponible en línea en <https://www.ecoceanos.cl/wp-content/uploads/2019/05/Salmones-DeSangre-Ecoceanos-27mayo2019.pdf>
- **Dicken, P., Kelly, P. F., Olds, K. & Yeung, H. W. C. (2001)**. Chain networks, territories and scales: Toward a relational framework for analyzing the global economy. *Global Networks*, 1(2), 89-112.
- **Fuentes Olmos, J. (2014)**. Evolución del régimen ambiental de la acuicultura en Chile. *Revista de Derecho (Valparaíso)*, (42), 441-477.
- **Gereffi, G. & Korzeniewicz, M. (Eds.) (1994)**. Commodity chains and global capitalism (No. 149). ABC-Clio.
- **Gómez Fonseca, M. Á. (2004)**. Reflexiones sobre el concepto de embeddedness. *Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, 2(4).
- **González, S. (2005)**. La geografía escalar del capitalismo actual. *Revista Pegada*, 6(1).
- **Granovetter, M. (1985)**. Economic action, social structure, and embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.

- **Gutiérrez Puebla, J. (2001).** Escalas espaciales, escalas temporales. *Estudios Geográficos*, 62(242), 89-104. doi: <http://dx.doi.org/10.3989/egeogr.2001.i242.295>
 - **Haefner, C. (2019).** La pobreza multidimensional: deuda pendiente en la región de Los Lagos. Disponible en línea en <https://www.elcalbucano.cl/2019/05/la-pobreza-multidimensional-deuda-pendiente-en-la-region-de-los-lagos/>
 - **Harvey, D. (2003).** *El nuevo imperialismo*. Madrid: Ediciones Akal.
 - **Intesal (2014).** La industria del salmón hoy y su desarrollo en tiempos que exigen sustentabilidad. Conferencia AquaSur. Octubre de 2014. Puerto Varas, Región de Los Lagos.
 - **Irarrázaval, F. (2014).** Las empresas salmoneras y el cambio institucional en acuicultura post crisis del virus ISA. Instituto de Asuntos Públicos, Escuela de Postgrado. Universidad de Chile, Santiago, Chile.
 - **Katz, J., Iizuka, M. & Muñoz, S. (2011).** Creciendo en base a los recursos naturales, “tragedias de los comunes” y el futuro de la industria salmonera chilena. Cepal.
 - **Mackinnon, D. & Cumbers, A. (2011).** *An introduction to economic geography: globalization, uneven development and place*. Second Edition. Pearson Education.
 - **Mahecha, O. D. (2003).** Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Universidad Nacional de Colombia.
 - **Odepa (2014).** El mercado del rap canola. Disponible en línea en http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1394212053rapsCanola2014.pdf
 - **Orive, Adolfo (2006).** De la racionalidad neoclásica a la racionalidad situada. *Estudios Políticos*, 8(9), 75-116. Issn: 0185-1616. Disponible en <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4264/426439537004>
 - **Porter, M. E. (1987).** *Desde la ventaja competitiva a la estrategia corporativa*. Harvard Business Review, mayo, 1987.
 - **ProChile (2015).** Ficha de Inteligencia Comercial. Oficina Puerto Montt, región de Los Lagos.
 - **Puebla, J. G. (2001).** Escalas espaciales, escalas temporales. *Estudios Geográficos*, 62(242), 89-104.
 - **Román, Á., Barton, J. R., Bustos-Gallardo, B., Salazar Burrows, A. (2015).** *Revolución salmonera: paradojas y transformaciones territoriales en Chiloé*. Santiago, Chile: Ril Editores.
 - **Romero, H. (2009).** *Comodificación, exclusión y falta de justicia ambiental. Globalización y territorio en América Latina*. Editores: Ovidio Delgado Mahecha y Hellen Cristancho Garrido, Biblioteca Abierta, Colección General, serie Geografía. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Geografía, 410 p.
 - **Rozenblat, C. & Melançon, G. (Eds.) (2013).** *Methods for multilevel analysis and visualization of geographical networks* (p. 223). Berlin: Springer.
 - **Salmón Chile (2015).** Evolución de producción por especie. Disponible en línea en <https://www.salmonchile.cl/produccion-salmonchile/>
- _____ (S/F). Cifras de empleo. Disponible en línea en <https://www.salmonchile.cl/salmon-de-chile/cifras-de-empleo-salmonchile/>

An aerial photograph of a rural landscape. In the foreground, there is a large, light-colored field, possibly a pasture or a recently cleared area, with several small trees scattered across it. To the right, a large solar farm is visible, consisting of many rows of solar panels. A road or path winds through the landscape, connecting different areas. The background shows more fields and some buildings, suggesting a small settlement or farmstead. The overall scene is a mix of natural and human-made elements.

“FUEGO EN CONTRA”: CONOCIMIENTO LOCAL COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

Diego Ignacio Valdebenito Mancilla¹,
Universidad Diego Portales

RESUMEN

La presente investigación analiza sociológicamente la relación entre los incendios ocurridos en el país en el verano de 2017 y los conocimientos locales desplegados para enfrentar esta catástrofe. En particular, se estudia el caso de los vecinos de la localidad de Cutemu, comuna de Paredones, región de O'Higgins. Esta localidad, al ser zona de seco y área ligada productivamente a la industria forestal, sufrió grandes consecuencias a raíz de este siniestro.

Estos conocimientos fueron estudiados desde una perspectiva cualitativa, la cual favorece la densidad de los relatos y la información recabada desde quienes vivieron y se enfrentaron a los incendios.

Como resultado, se recogen una serie de saberes de los vecinos, conocimientos del territorio producto de toda una vida habitando esa zona, que resultaron útiles para combatir los incendios y organizar a la comunidad.

Palabras clave: conocimiento local, incendios forestales, conocimiento experto, desastres sicionaturales, gestión del riesgo de desastres.

¹ Sociólogo. Artículo basado en la tesis titulada "Conocimiento local y catástrofes naturales: incendios forestales y escasez hídrica en la comuna de Paredones", realizada junto a Jorge Paz para optar al título profesional de sociólogo de la Universidad Diego Portales. Esta tesis forma parte del Núcleo Milenio en Energía y Sociedad (Numies). Profesor guía: Tomás Ariztía. Santiago, 2019.

INTRODUCCIÓN

El verano de 2017 estuvo marcado por una serie de incendios forestales que afectaron a las regiones de O'Higgins y Maule. El megaincendio forestal de aquel año trajo importantes pérdidas materiales, sociales, culturales, económicas y ambientales para los habitantes de dichos territorios. Eventualmente, fueron las zonas rurales las más afectadas dada la naturaleza de sus territorios y lo inédito del suceso.

Esta investigación pretende analizar la forma en que los/as habitantes de la localidad de Cutemu, comuna de Paredones, región de O'Higgins, se organizaron y pusieron en práctica sus conocimientos para enfrentarse a los incendios forestales, desde las capacidades y conocimientos propios de sus modos de vida campesina. Con ese objetivo, se abordaron sociológicamente los conocimientos locales de la comunidad afectada desplegados para evitar y responder a los incendios forestales ocurridos.

Es importante mencionar que estos conocimientos y acciones de las comunidades muchas veces difieren de las estrategias dispuestas por el aparato estatal, el cual responde a una lógica particular que pone énfasis en la verticalidad de la toma de decisiones y en la forma en que se ejecutan las acciones preventivas y reparativas en las localidades. Es por eso que esta investigación compara las acciones, conocimientos y formas de organización locales e institucionales, con el fin de proponer una

manera de complementar estos saberes en miras a futuros desastres siconaturales.

1. Catástrofes como un fenómeno social

Los desastres naturales son inherentemente sociales, tanto en su impacto como en sus orígenes (Lavell, 1993). Estos no se remiten únicamente al momento en que ocurren, sino que poseen un carácter histórico en su concreción; su temporalidad traspasa el momento de impacto del desastre y el proceso de restauración de las condiciones de vida de las personas.

Lavell (1993) señala que, a diferencia de Norteamérica, en América Latina se ha dedicado poco análisis a los elementos sociales de los desastres, los que incluyen su prevención, mitigación y reparación. Son las ciencias físicas las que han ejercido mayor influencia en esta materia, tanto al momento de predecir los desastres como a la hora de estudiar sus patrones físicos. El enfoque predominante entiende los desastres como sucesos temporal y territorialmente segregados, cuyo origen radica en situaciones extremas en los procesos físicos y naturales, una perspectiva que deja fuera aspectos sociales y culturales (Hewitt, 1983).

Para superar esta escisión entre desastres físicos y sociales, Lavell (1993) sugiere comenzar por una conceptualización idónea de los desastres. Es por esto que el punto de partida sería definir a los desastres como eminentemente sociales y naturales. A partir de este enfoque, un desastre es producto y resultado de procesos sociales que están histórica y territorialmente situados y relacionados (Lavell, 1993). Desde esta mirada, los desastres también son posibilidad de cambio. Para Quarantelli (1987), hay elementos de cambio social en los desastres que dan paso a procesos positivos. Los sitúa al interior de la dinámica social y los define como parte de lo que puede ocurrir en la sociedad cuando hay sucesos externos. Ejemplo de esto son los conocimientos locales que emergen o se activan en un desastre sicionatural.

2. Estudiando las catástrofes desde los conocimientos locales

El conocimiento local se define como un acervo de saberes, creencias, costumbres y lógicas para quienes las construyen. Este conocimiento se erige a partir de nociones, prácticas y percepciones particulares de una cultura o comunidad específica. Proviene, por lo general, de observaciones cotidianas y modos de vida, del conocimiento y uso del suelo, la flora y fauna, y otros elementos del medio natural y social. Además de constituir un saber contextual, se puede afirmar que el conocimiento local es histórico y socialmente construido, pues la experiencia entregada de generación en generación es constitutiva de los saberes locales y se va adaptando a

los nuevos desarrollos tecnológicos y socioeconómicos (Johnson, 1992). El conocimiento es parte de las generaciones actuales y a la vez de las futuras, de la misma forma en que perteneció y fue producido por los antepasados (Montecinos, 1999). Por eso es tan importante que esta cadena no se corte.

Este tipo de conocimiento permite sobreponerse a situaciones adversas, ya sea ambientales o del mercado, lo que permite aseverar que cumple sus objetivos de producción (Netting, 1993; Pimbert, 1995) y denota una importante habilidad de adaptación. Los saberes locales adquieren importancia dentro de las catástrofes durante todas las fases, emergencia, prevención y reparación, pues los saberes son el resultado de una cosmovisión que radica en una determinada relación con el territorio. A partir del reconocimiento de estos saberes se da un giro ontológico para conocer y actuar ante las catástrofes (Molina, 2018).

En 2015, resuena a nivel global el rol del conocimiento local y ancestral dentro de la gestión del riesgo de desastres (GRD). Este tipo de conocimiento queda estipulado en el Marco de Sendai de las Naciones Unidas y es ratificado en uno de los apartados de la Prioridad de Acción N°1 cuando se apuesta por “velar por que se aprovechen como correspondan los conocimientos y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, para complementar los conocimientos científicos en la evaluación del riesgo de desastres” (Unisdr, 2015, p. 15).

Este enfoque permite abordar las catástrofes en la región de O'Higgins. Es conocido que existen ciertos planes y

acciones, a nivel institucional, para la gestión del riesgo de desastres que se caracterizan por seguir una lógica vertical, “hacia abajo”, que buscan prevenir o reparar los efectos de los incendios forestales sin considerar los saberes locales. Cuando se trabaja desde esa perspectiva, se pierde una tremenda oportunidad de mitigar los desastres, pues los saberes locales pueden aportar y aprovechar estas instancias para reivindicarse frente a los conocimientos expertos. Así ocurrió en el megaincendio forestal de 2017.

3. Megaincendio forestal en la región de O'Higgins

En la última década, todo el secano costero e interior de la región de O'Higgins ha enfrentado transformaciones productivas (Modrego et al., 2011) y eventos hidroclimáticos de gran impacto para sus habitantes (FSP, 2019; Azócar, 2018). En la comuna de Paredones, el terremoto y tsunami de 2010 afectó al sector costero de la comuna, principalmente al balneario de Bucalemu. La escasez hídrica, entendida como desastre latente en dicho territorio (Azócar, 2018), también ha sido un fenómeno que ha crecido progresivamente, con efectos importantes sobre los habitantes de la localidad de Cutemu, comuna de Paredones. Finalmente, el megaincendio forestal de 2017, que constituyó un desastre de grandes dimensiones, también marcó un hito en las vidas de los vecinos de Cutemu.

En el verano de 2017, entre el 18 de enero y 5 de febrero, se registraron impor-

tantos focos de incendios forestales de gran magnitud en la zona centro-sur del país. Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se quemaron alrededor de 594.783 hectáreas en una longitud de 600 kilómetros. La intensidad del megaincendio se debió a una concatenación de hechos y condiciones, entre las que se cuentan eventos meteorológicos extremos e inusuales, un contexto de escasez hídrica registrado desde hace ocho años, y el aumento de la presencia de la industria forestal y de la población habitando en zonas de riesgo. Todo lo anterior propició la generación de material combustible (CEP, 2017). Fue tal el nivel de intensidad, que el incendio sobrepasó la escala global de medición de incendios, la cual hasta antes de este evento llegaba a la quinta generación, medida en intensidad de línea de fuego y velocidad en la propagación. El megaincendio forestal de 2017 alcanzó propagaciones de 8.200 hectáreas por hora e intensidades de calor de alrededor de 60.000 kW/m según datos de la Unión Europea (2017). A raíz de las grandes dimensiones que alcanzaron estos incendios, se les denominó “tormenta de fuego”.

Solo en la región de O'Higgins, en diez días el incendio alcanzó la impresionante cifra de 49.156 hectáreas, que involucra a todas las comunas del secano costero e interior de la región, como son Pumanque, Marchigüe, Paredones y Lolol. En total, se quemaron 80.897,29 hectáreas (Conaf, 2017, en FSP, 2019).

Respecto al tipo de vegetación siniestrada por el megaincendio forestal del año 2017, en la región de O'Higgins se quemaron 34.648 ha de bosque nativo, 34.406

ha de plantaciones forestales, 10.319 ha praderas y matorrales y 8.609 ha de terrenos agrícolas (Conaf, 2017), cifras que la convirtieron en la región del país que más pérdida de floresta nativa tuvo a raíz de este siniestro (Azócar, 2018).

En el plano agropecuario, 1.023 agricultores resultaron afectados y se perdieron 25.798 cabezas de ganado (bovinos, equinos, ovinos y caprinos) (Indap, 2017, en Azócar, 2018). Esto tuvo un impacto en el tipo de necesidad productiva declarada por los habitantes de las zonas afectadas, donde el 80% señaló necesitar fardos, cierres perimetrales e infraestructura de riego, lo que dejó de manifiesto que esta crisis fue del mundo agrícola y que el campesinado tradicional fue el más afectado y vulnerable (FSP, 2019).

Esta pérdida va más allá de lo productivo. Repercute en los saberes y prácticas propias del campesinado y deja en peligro de extinción su patrimonio cultural material, compuesto por iglesias y conventos, haciendas y paredones coloniales; e inmaterial, entre cuyos representantes está el modo de vida campesino en torno al trigo, con el trenzado y sus productos, y la crianza ovina (FSP, 2019).

A la estructura de oportunidades desplegada en la fase de la emergencia concurren distintos organismos e instituciones agrupados en el Sistema de Protección Civil, que intenta controlar los incendios, mitigar pérdidas materiales y evitar pérdidas de vidas humanas. Entre ellas se encuentran las brigadas de Conaf, Bomberos, Carabineros y autoridades. Pero quienes acudieron en primer lugar a los focos de

incendios, antes incluso que las instituciones activas del Sistema de Protección Civil, fueron los propios vecinos, que se organizaron de forma espontánea. A partir de un tejido social nutrido y un portafolio de experiencias, recursos y conocimientos propios que anteceden a la emergencia, los vecinos intentaron apagar los incendios y, al ver que no era posible, se enfocaron y organizaron para proteger sus viviendas y enseres.

Estos saberes son usualmente ignorados y rara vez son considerados a nivel institucional al momento de actuar ante los desastres socionaturales. Sin embargo, en la presente investigación se identifica la necesidad de visibilizarlos, tanto por su valor práctico dentro de una catástrofe y la recuperación posterior como por su potencialidad de construir nuevas formas de relación entre lo institucional y lo local.

MÉTODO

Para poder analizar y ahondar en el conocimiento propio de los habitantes empleado en catástrofes fue necesario establecer un contacto intenso y perdurable con el campo y las formas de vida de los sujetos. Para esto se emplearon técnicas cualitativas de corte etnográfico, pues este tipo de enfoque y técnica permite generar relatos cargados de sentido y experiencia subjetiva (Taylor y Bogdan, 1986). De esta manera, se dispuso como instrumentos de análisis la observación participante y la entrevista en profundidad. En la misma línea, la investigación se realizó desde un tipo de razonamiento inductivo, dado que,

mediante la observación y recopilación práctica de la información, se procedió a lo teórico y general.

Gracias a lo planteado por informantes clave, como el equipo de profesionales de Servicio País y líderes sociales comunitarios, se escogió la localidad de Cutemu, puesto que fue una de las comunidades más afectadas por el megaincendio forestal de 2017 en la región de O'Higgins.

Mediante el efecto bola de nieve y por medio de las artesanas de Cutemu se llegó a tres familias que han vivido

desde siempre en la zona y se han visto afectadas social y económicamente por los incendios forestales de 2017. Se realizaron nueve entrevistas en profundidad con el fin de tener un conocimiento más acabado de la situación.

Para efectos de este artículo, los nombres de los/las entrevistados/as de las distintas familias que participaron de esta investigación fueron modificados para asegurar el anonimato. En el caso de las entrevistas a funcionarios municipales e integrantes de la sociedad civil, los nombres fueron omitidos.

Tabla 1. Entrevistas y observación participante

Familia	Observación participante	Entrevista en profundidad	Entrevistados/as ²
Familia N°1	3	5	Ana y Pedro
Familia N°2	3	2	Clara y Tomás
Familia N°3	3	2	Patricia y Claudio
Total según técnica	9	9	

Fuente: Intesal, 2014.

Para ahondar en la dimensión institucional del megaincendio forestal, se realizaron cuatro entrevistas a actores institucionales, dos pertenecientes a la Municipalidad de Paredones y dos a la sociedad civil organizada con conocimiento y experiencia en el territorio. Se seleccionaron estos entrevistados dado su conocimiento sobre el territorio y el desastre en cuestión.

² Nombres ficticios.

Tabla 2. Entrevistas a actores institucionales

Escala	Tipo de institución	Número de entrevistas
Comunal	Municipio	2
Regional	Sociedad civil organizada	2
Total de entrevistas		4

Fuente: Intesal, 2014.

El procesamiento de la información se realizó mediante un análisis de contenido. El enfoque utilizado fue narrativo, pues permite analizar e interpretar los discursos por sobre el recuento. El proceso de codificación de la información fue central, ya que permitió reducir grandes textos y convertirlos en categorías clasificables (Ruiz, 2009). Como software de apoyo se usó Nvivo, que sirvió para categorizar los datos de las entrevistas en profundidad y las notas de campo.

Esta localidad se emplaza en medio de las colinas del seco y corresponde, básicamente, a una avenida asfaltada que forma parte de la ruta que la une con Santa Cruz, pasando por San Pedro de Alcántara, y de la cual surgen algunos pasajes con viviendas. En el pueblo hay una escuela básica, un par de almacenes que abastecen a los vecinos y vecinas, una pequeña capilla y el puente Cutemu, que pasa sobre el estero San Pedro de Alcántara, el cual, al momento de realizar esta investigación, entre marzo y noviembre de 2018, se encontraba totalmente seco.

RESULTADOS

1. Recorriendo Cutemu

Cutemu es una localidad perteneciente a la comuna de Paredones, provincia de Cardenal Caro, emplazada en el seco costero de la región de O'Higgins. Posee una población cercana a los 300 habitantes, la mayoría adultos y adultos mayores que han vivido gran parte de su vida en el territorio. Como es un poblado pequeño, todos los habitantes se conocen entre sí y desarrollan actividades sociales y económicas que los vinculan.

Fotografía 1. Artesanas en paja de trigo cruzando el puente Cutemu



Fotografía: Fernanda Azócar.

En la ruta a Cutemu y en el pueblo mismo, el paisaje se caracteriza por la uniformidad de las plantaciones de pino que se erigen desde los relieves de la Cordillera de la Costa. Las grandes extensiones de bosque exótico pertenecen a la empresa forestal Arauco y Licancel, y a pequeños propietarios de la comuna y la localidad. Desde una vista panorámica, el paisaje se aprecia uniforme y sin grandes alteraciones producto del incendio³.

Las actividades económicas que se realizan en la zona están directamente ligadas al uso del suelo y, por ende, están supeditadas a los factores hidroclimáticos del secano. Por una parte, se encuentran los pequeños propietarios dedicados a la explotación fores-

tal de pinos (22.113,18 ha) y eucaliptus (3.677,55 ha), que concentran una importante superficie en la comuna de Paredones (Uribe y Catalán, 2016). Durante los años noventa y dos mil, este sector primario tuvo importantes bonificaciones establecidas en el Decreto Ley 701 de Conaf (Azócar, 2018; Modrego et al., 2011). Esta realidad cambió drásticamente con el incendio de 2017, cuando las pérdidas excedieron a las ganancias y muchos pequeños propietarios forestales se quedaron sin producción, sin seguro y sin bonificaciones. Además de la pérdida de la explotación forestal, muchas familias lamentaron la quema considerable de hongos que se daban al alero de las plantaciones de pino, pues la recolección de estos constituía parte importante de los ingresos familiares.

³ En los meses en que se llevó a cabo esta investigación.

Fotografía 2. Hongos recolectados y secados a la orilla del camino



Fotografía: Fernanda Azócar.

Otra de las actividades económicas que predomina en el sector es la agricultura tradicional de rulo. Entre otros cultivos, en la zona se producen legumbres (arvejas y lentejas) y cereales (maíz, quinua y trigo). Este último también reviste relevancia para la artesanía, ya que históricamente en Cutemu se han desarrollado confecciones con la paja del trigo.

En 2019, los trenzadores y trenzadoras en paja de trigo de Cutemu y sus alrededores recibieron el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial que da el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap), el cual permite implementar un proceso de salvaguardia de dicho oficio. Este data del periodo de la conquista española y refiere a distintos tipos de trenzados que se aplican en accesorios propios de la cultura huasa de Chile, el principal, la chupalla. Hoy, el oficio ha innovado y se fabrican

carteras, aros, cestas, individuales y cinturones; estos últimos incluso han recibido el “sello de excelencia”. Además, las familias acostumbran tener cultivos caseros en pequeñas superficies llamadas chacras, en las que producen alimentos para consumo doméstico. Entre los productos que se cultivan se encuentran lechugas, porotos verdes, cebollas, repollos y papas.

Fotografía 3. Artesano mostrando una brazada de trenzado en paja de trigo, región de O'Higgins



Fotografía: Fernanda Azócar.

Finalmente, está el sector de la ganadería, desarrollado por productores de pequeña escala. Los principales ganados que se crían en el sector corresponden al bovino, ovino y equino. Además, hay crianza de gallinas.

Fotografía 4. Ovejas pastando



Fotografía: Rocío Schätzke.

2. Conocimiento local y colectivo ante desastres⁴

Para indagar en la construcción local que permite enfrentar incendios forestales es necesario retroceder en el tiempo y remontarse a la época donde no existía la industria forestal en Cutemu. Según relatan quienes han vivido toda su vida en el pueblo, antes de las industrias forestales, las praderas eran utilizadas principalmente para la agricultura de rulo y ganadería de ovino y bovino.

Pedro cuenta que, hace cuarenta años, el principal cultivo que se daba era el trigo, el que era utilizado para la producción de harina, pan, forraje para anima-

les y artesanía. Era un producto integral y central en su cotidianidad:

“En los cerros, como no había bosque, sembraban y de ahí sacaban el trigo para hacer harina para el pan. Lo iban a moler a un molino el trigo para hacer harina y todo eso. Y la paja la utilizaban para hacer trenzas y sombreros. Entonces, las mujeres hacían la trenza con esa paja y cuando trillaban, porque sale una paja gruesa y una delgada, se trillaba con gente, todo era ayuda ahí. Y la delgada se guardaba para el invierno para forraje para animales. Entonces, de esa manera se trabajaba aquí”
(Pedro, entrevista).

⁴ Como forma de resguardar el anonimato de los/las entrevistados/as, en los siguientes capítulos se han adaptado los nombres.

La crianza de animales tenía otra envergadura, dada la abundancia de agua y de agricultura, lo cual eventualmente favorecía la alimentación de estos. Esta situación cambió sustancialmente cuando se les dio un uso forestal a los suelos, en la década del setenta. En esta línea, Clara señala que:

“También se vivía de los animales, había mucha cabra, cordero, vacuno, porque antes no había bosques, había muchos terrenos. Y desde que llegaron las forestales, empezaron a comprar y compraron regalado”

(Clara, entrevista).

Además, el bosque nativo era utilizado directamente por los habitantes de Cutemu. Cuando se cortaba el bosque nativo para ser utilizado en la agricultura, se obtenía madera de los árboles de litre que predominaban en el paisaje. Tras cortar la madera de los litres, se procedía a construir un horno de barro, en el cual se arrojaba la madera y se obtenían entre cuarenta y cincuenta sacos de carbón. Este era comercializado y también utilizado en las cocinas de las casas. Pedro, uno de los entrevistados, señala que actualmente el comercio de carbón ha disminuido y genera ingresos menores.

Un hecho que llama particularmente la atención es la manera en que el cambio en el uso del suelo ha reconfigurado las relaciones laborales y económicas. Es ampliamente conocido que las relaciones laborales en las zonas rurales no responden a las mismas lógicas monetarias de las urbes. Como relatan los locales, antiguamente los trabajos

se hacían en mingacos, grupos voluntarios de vecinos que se reunían para colaborar mutuamente en las labores agrícolas. A cambio de la ayuda, se les proporcionaba comida y bebida, y la promesa implícita de prestar auxilio en caso de que se necesitase, es decir, “devolver la mano”. Sin embargo, en la actualidad, las lógicas han cambiado y los trabajos se han monetizado e institucionalizado. Son muy pocas las personas que hacen mingacos o que aceptan trabajar sin una transacción de dinero de por medio.

3. Conociendo el megaincendio forestal desde sus causas

Respecto a la ocurrencia de incendios forestales, los habitantes no recuerdan grandes eventos de este tipo en la antigüedad. Señalan que, si bien existían incendios, estos eran hechos aislados que se producían cuando se limpiaba algún lugar y el fuego se extendía más de lo programado. Estos incendios eran apagados sin mayores dificultades. Esa es una de las razones por las que el megaincendio de 2017 los sorprendió de tal forma, ya que fue un evento sin precedentes en su magnitud e intensidad.

Cuando los vecinos recuerdan el incendio de 2017 suelen comenzar sus relatos con epítetos como “terrible”, “gigantesco” o “tremendo”; se trata de un evento que durante ese año mantuvo paralizado y expectante a todo el país y acaparó miradas de todo el mundo. La experiencia e historia de los vecinos de Cutemu, conceptualizada en esta investigación como conocimiento local, es importan-

te para entender las acciones que se realizaron en el momento de ocurrencia de los incendios.

Existe discordancia entre los distintos actores, vecinos, autoridades y expertos a la hora de dilucidar las causas del incendio. Si bien todos reconocen la relevancia que tuvieron los monocultivos en la magnitud e intensidad del megaincendio forestal, desde la autoridad señalan que se originó por una situación de negligencia puntual, relacionada con el tendido eléctrico en mal estado, que dio paso a la tragedia:

“El fuego en una zona al menos ya está analizado [...] que fue una negligencia de una empresa de electricidad donde se comenzó el incendio principalmente, de ahí duró veinte a treinta días. El otro incendio, que duró quince días, lo están investigando una falla de tendido eléctrico de cables. Arrasó porque existían las condiciones súper favorables, o sea, había material para combustionar, había temperatura y había viento, así que estaban las condiciones para que hubiera un megaincendio”
(funcionario municipal, entrevista).

Si bien es innegable que para que ocurriera un incendio de tales dimensiones confluyeron factores como la temperatura, la sequía, los cableados eléctricos y los monocultivos, los vecinos parecen tener mayor conciencia de la injerencia de estos últimos en el suceso. Ana, una de las entrevistadas, indica que “antes no había incendios, porque como no habían bosques, no se quemaba”. Por su parte, Pedro profundiza más en las responsabilidades y falta de acción de

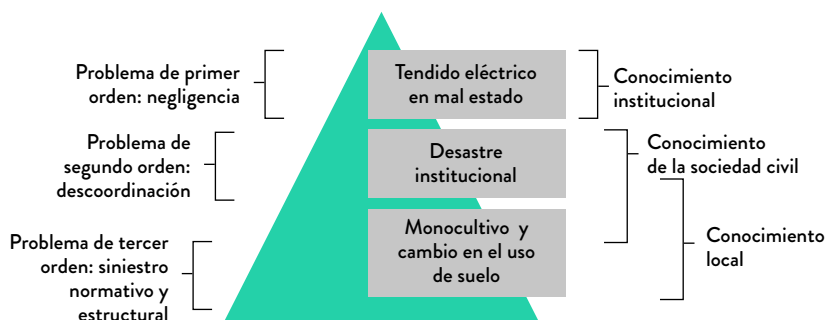
la empresa Arauco, dueña de parte considerable de las plantaciones forestales, y señala que luego de iniciado el fuego:

“Llegaron las empresas, las que tienen el bosque grande de como dos mil hectáreas. Pero llegaron con helicópteros cuando el fuego ya estaba sin atajos en el bosque. Ahí llegaron con helicópteros a tirarle agua. Pero ya que vieron que el fuego estaba por todos lados, lo dejaron y se fueron. Y de ahí tuvimos que nosotros prepararnos porque sabíamos lo que venía. La forestal debió haber hecho algo más, haber seguido con helicópteros o pedir más refuerzos”
(Pedro, entrevista).

Esta visión complementa la de la sociedad civil, que profundiza en las razones políticas e históricas que existen detrás de la implementación de los monocultivos de especies exóticas:

“Tiene que ver con decisiones políticas de permitir grandes extensiones de producción de pino. Es un tema normativo que vulnera mucho a los contextos locales, ya que facilita ciertos procesos en los territorios que finalmente terminan generando estas condiciones [...] Hay una causal normativa que vulnera y genera un Estado también, no solamente lo que pueda suceder en un evento de incendio o terremoto, sino también hay una institucionalidad, una política pública que permite generar ciertas condiciones a los territorios para que se den estos eventos”
(integrante de la sociedad civil, entrevista).

Figura 1. Causas según tipo de conocimiento



Fuente: elaboración propia.

4. Incendio forestal y la crónica de una megaincendio no anunciado

El incendio tuvo una magnitud sin precedentes, fue una catástrofe nunca antes vista ni esperada por parte de los habitantes de la zona. Los relatos de los informantes muestran cómo comenzó el evento y las etapas que fueron transcurriendo hasta alcanzar prácticamente a la totalidad de los alrededores de Cutemu. Pedro relata que el incendio se inició en Rarín, a cuatro kilómetros de Cutemu, lugar al que acudió junto a una cuadrilla de vecinos que se ofrecieron para ir a apagar el siniestro. Pedro señala que:

“Fue algo muy chico y se agrandó mucho porque se metió al fondo de la forestal Arauco, ellos se fueron y lo dejaron, no más, y como son dos mil hectáreas, entonces el fuego entró para acá con toda la fuerza”

(Pedro, entrevista).

La narración de Pedro coincide con la de Judith, otra de las entrevistadas, quien cuenta que una vez que el fuego se expandió a los territorios de la empresa Arauco, el desastre fue total:

“Ya después, cuando se pasó al bosque de la empresa Arauco, que es una de las forestaciones más grandes que hay acá, ahí uno lo vio todo perdido y pensábamos que todos íbamos a morir calcinados. El fuego podía uno verlo muy lejos, pero aparecía por acá otro foco, por el otro lado otro foco, y al final era para volverse loco”

(Judith, entrevista).

Tomás, otro de los entrevistados, también da cuenta de la magnitud del desastre:

“El fuego venía con una fuerza impresionante y después, ya como la una, dos de la tarde, como el fuego estaba más fuerte, venía bajando por las orillas de las casas. Fue suerte por aquí que no se quemaron casas y ahí se controló el fuego. La otra parte

donde la habíamos dejado controlado, donde el fuego volvió pa' atrás, ahí se quemó todo el bosque. Se quemó todo, todo, todo, después fue mi hijo en la tarde a mirar, yo no quise ir mejor... y me dijo 'no, papá, se quemó, no quedó nada'..."

(Tomás, entrevista).

Sin duda, el incendio tuvo consecuencias para todos los habitantes de la localidad, sin excepción, las que hasta el día de hoy se perciben. Afortunadamente, en Cutemu no hubo víctimas fatales ni tampoco viviendas consumidas por el fuego, pero las fuentes de trabajo sufrieron las consecuencias del incendio y hasta hoy persiste la conmoción que el desastre dejó en las personas que lo vivieron.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) señala que los incendios afectaron a un 40% de la geografía de la comuna, es decir, a poblados y sectores como La Quesería, El Casuto, la población General Barros, la población General Valenzuela, Lo Quindo, Las Palmas, San Pedro de Alcántara, Los Romeros, La Huertilla, El Perdiguero, Rarín, Carrizalillo, Lo Briones y El Calvario, todos de características similares a Cutemu. En la gran mayoría de los sectores rurales se quemaron casas, algunas parcelas, la plantación forestal, el ganado y la producción de trigo.

Según Indap, fue una catástrofe que afectó a las personas en todas las áreas de su vida, pues perdieron casas, galpones, bodegas, animales, praderas. Señalan que fue:

"Un desastre que afectó en la parte productiva, económica, social, psicológica, aún hay gente atemorizada por perder el esfuerzo de muchos años"

(funcionario municipal de Indap, entrevista).

Los principales afectados con el incendio fueron los pequeños propietarios de plantaciones de monocultivos de pinos y eucaliptus, las cuales resultaron en pérdida total para sus dueños, pese a sus intentos por salvaguardarlas. El esfuerzo de muchos años quedó reducido a cenizas. Patricia, una de las entrevistadas, señala que su familia tenía un bosque de eucaliptus, el que su esposo e hijos intentaron proteger. Sin embargo, durante la madrugada el fuego se extendió y llegó a sus plantaciones, consumiéndolas por completo. Al igual que la mayoría, Patricia estaba próxima a la tala de los bosques para comercializar la madera, lo cual generó aún mayor frustración en su familia.

En la misma línea, Claudio, otro de los entrevistados, señala que:

"Ahora los chicos (se refiere a los productores de pequeña escala) no quieren plantar los bosques porque dicen ¿qué sacamos con plantar si van a estar los pinos cuatro, cinco años y va a llegar el fuego otra vez y vamos a perder todo?'. A los chicos les afecta más porque ellos no tienen seguro, igual que yo, pierden, no más"

(Claudio, entrevista).

A esto se suma la gran cantidad de ganado que murió calcinado, asfixiado o por falta de alimentos posteriormente. Como indican los vecinos, existen familias cuya forma de subsistencia se basa en la crianza de alrededor de cinco animales, por lo que el incendio acabó con su única fuente de ingresos.

También el impacto social y emocional es considerable. Pese a que se ha recuperado cierta normalidad en la vida de la comunidad, ya que los cultivos forestales de las grandes industrias han vuelto a surgir, los incendios forestales han generado una sensación de temor y alerta constante. Además, se han agudizado los procesos de fragmentación familiar, dado que las nuevas generaciones rehúyen dedicarse a las actividades económicas de sus padres ante el riesgo que esto conlleva. Es por esto que progresivamente han decidido emigrar a polos urbanos y dedicarse a carreras técnicas y profesionales. Este proceso se había visto impulsado por la escasez hídrica de la zona, pero adquirió nueva fuerza tras el incendio de 2017.

5. Combate al fuego: conocimiento local versus conocimiento institucional

Los incendios de 2017 suscitaron la reacción de diversos organismos, instituciones y actores que acudieron al lugar, tanto en los momentos mismos de la catástrofe como durante los días y meses posteriores. A continuación, se da cuenta de la acción tanto de los vecinos a partir de sus conocimientos y formas de organización como de autoridades,

instituciones de emergencia y privados en este evento.

Como se señaló anteriormente, los incendios forestales de aquel verano tuvieron tal magnitud, que llevó varios días lograr controlar el fuego, lo que requirió de gran cantidad de recursos, entre los que destacan, por ejemplo, los icónicos aviones cisterna traídos desde Estados Unidos y Rusia. Los vecinos, por su parte, actuaron a partir de su portafolio de recursos y conocimientos, y desde su propia forma de organización. Es interesante observar que, en determinadas ocasiones, estos conocimientos y acciones locales entraron en tensión con el conocimiento institucional.

Una de las principales estrategias que utilizaron los vecinos de Catemu fue la organización. Es necesario recordar que no existía ningún plan de contingencia para un incendio forestal ni menos para uno de estas magnitudes, por lo que la agrupación ocurrió en el mismo momento y de manera rápida y espontánea. Se aprecia una lógica de solidaridad y apoyo mutuo en el actuar de los vecinos, quienes se dedicaron principalmente a resguardar sus hogares y bienes materiales de forma recíproca, como un mingaco. Además, se advierte una división de las funciones de acuerdo al género: mientras los hombres realizaban el trabajo que requería mayor demanda y riesgo físico, las mujeres de la comunidad aportaban asistiéndolos y realizando labores como el “raspado” y retiro de material combustible:

“Si había un vecino que estaba afectado y que el fuego estaba más cerca, íbamos todos allá en cuadrillas, con palas, con motos [motosierras], con hachas, con lo que fuera, pero la cosa era que había que proteger la casa del vecino. Iban los hombres con motosierras cortando para hacer cortafuegos y las mujeres sacando las ramas. Llevándoles agua y comida a los hombres que estaban trabajando”
(Judith, entrevista).

Es importante señalar que la acción de los vecinos estuvo mediada por lo que ellos conciben como cierta lentitud en la respuesta de las autoridades, principalmente de bomberos. Señalan que las instituciones acudieron tardíamente al lugar, cuando el fuego ya estaba inexorablemente extendido en las plantaciones forestales:

“Aquí en Cutemu no llegó nadie y entre vecinos se ayudaban para proteger las casas, principalmente. Las protegían juntando agua. Como se veía que venía afectando por todos lados, que estábamos encerrados, el tema era proteger las casas y limpiar, principalmente, juntar agua y tener aguas acumuladas en caso de, pero principalmente en raspar y sacar todo lo que fuera combustible que estuviera cerca de las casas”
(Patricia, entrevista).

En un principio, los esfuerzos de los habitantes de Cutemu se centraron en intentar apagar los primeros focos de incendios que se presentaron en los alrededores de la comunidad. Para eso, tuvieron que adentrarse en los bosques de monocultivo y combatir el incendio

mediante sus propios medios y estrategias. Esto generó conflicto entre vecinos e instituciones como Conaf, Carabineros de Chile y el Cuerpo de Bomberos, ya que los últimos atacaron el fuego desde los caminos y sin avanzar hacia los bosques. Como el principal propósito de Carabineros era salvaguardar la integridad de las personas y las familias, hubo cierta discordancia con los vecinos, ya que estos estaban interesados en proteger sus fuentes laborales y sus bienes materiales:

“No, ellos [Carabineros] decían que no, que dejaran que se quemara, porque ellos veían que ya no se podía controlar el fuego y tenían miedo de que la gente se fuera a quemar también, po’. Así que ellos decían que dejaran que se quemara, no más, pero la gente, sus dueños, no querían”
(Ana, entrevista).

Lo cierto es que finalmente se quemaron todas las plantaciones forestales de los vecinos, pese a sus intentos. Por tanto, los esfuerzos posteriores se volcaron a salvar las propiedades de la población y sus enseres. Aunque las órdenes de Carabineros y Fuerzas Armadas eran desalojar el sector, buena parte de las familias se quedó intentando salvar sus casas y las de los vecinos.

Uno de los factores más importantes del conocimiento local es el conocimiento sociodemográfico sobre el territorio, el cual resultó fundamental al momento de proteger sus hogares. Como gran parte de los vecinos ha vivido toda su vida en la comuna de Paredones, conocían a cabalidad los sectores aledaños a sus casas. Esto resulta especialmente

destacable, ya que el avance casi total del fuego limitaba la visión y movilización en el territorio:

“Ahí andaban Carabineros y todos ya desalojando, porque el fuego estaba incontrolable. Pero nosotros conocíamos el sector aquí y sabemos cómo manejar el fuego. Ahí Bomberos y Carabineros no estaban, dijeron que desalojáramos. Muchos se quedaron, todos no se fueron y me dijeron que la casa estaba por quemarse, y partí con una cuadrilla de muchachos y ahí no había nadie. Entonces lo hicimos y salvamos esas casas entre puros vecinos”

(Pedro, entrevista).

La acción de los vecinos fue fundamental para que no se quemara ninguna vivienda en Cutemu. Pese a que las plantaciones colindaban con las casas, los vecinos, por medio de sus conocimientos y acciones, lograron salvar las viviendas de la localidad. Uno de los puntos más importantes son las técnicas que se utilizaron para que el fuego no afectara las casas. La primera técnica es la de hacer cortafuegos, que se describe como un método en el cual se tala con motosierras una franja de aproximadamente ocho metros alrededor del sector que se esté incendiando. A esto se le suma el trabajo de una máquina bulldócer que “raspa” los desechos combustibles que puedan quedar. Posteriormente, actúan mujeres y hombres que recogen residuos como hojas y ramas que van quedando para evitar que el fuego se expanda.

Este proceso estuvo acompañado de la limpieza de las casas, de donde se eliminaba todo material combustible que estuviera contiguo:

“Si había cercas a trescientos metros, esas cercas se sacaban todas, se barría y no quedaba ni una hoja, porque por las cercas se venía el fuego e iba a llegar para acá. Así que las sacábamos todas, veinte, treinta metros de cerca”
(Claudio, entrevista).

Una de las técnicas que más llama la atención es la que llaman de “fuego en contra”:

“Que se choquen, hacer fuego en sentido contrario, uno agarra una rama y hace fuego al otro lado y los fuegos se encuentran y se chocan y ahí se apagan, a veces. Así fue como más funcionó pa’ acá, o si no, se hubieran quemado muchas casas, porque cuando viene el fuego y muy rápido, usted le pone fuego en sentido contrario y se detiene”

(Tomás, entrevista).

Esta técnica entró en tensión con las instituciones encargadas de apagar los incendios, ya que no era permitida por Bomberos, Carabineros, Conaf y las industrias forestales. Es un ejemplo de cómo se diferencian las formas de enfrentarse a eventos como los incendios. Como señalan los vecinos, la acción del “fuego en contra” debía ser realizada a escondidas de las autoridades:

“Eso así, todo había que hacerlo escondidos, escondidos de Carabineros, sobre todo porque ningún carabainero quería que uno le prendiera fuego. No, ellos no entienden, incluso Bomberos tampoco entienden eso, ahí sí que hubiésemos perdido todo, ahí se quemaban muchas casas”

(Tomás, entrevista).

Los planes de acción por parte de Bomberos y Carabineros son comprensibles, dado que su principal función es la de resguardar la integridad de las personas, evitando poner en riesgo su propio bienestar. Es por esto que los efectivos se enfocaron en evacuar a las personas del lugar, donde encontraron resistencia por parte de algunos vecinos que no querían perder sus esfuerzos de años, pero también porque su conocimiento y experiencia les dictaban lo contrario:

“Tenían miedo (Bomberos y Carabineros) que la gente se fuera a quemar también, así que ellos decían que dejaran que se quemara, no más, pero la gente, sus dueños, no querían, porque igual la gente es la que pierde todas sus cosas, po’, ellos no, la autoridad, ellos no pierden nada, los pequeños campesinos son los que pierden todo”

(Ana, entrevista).

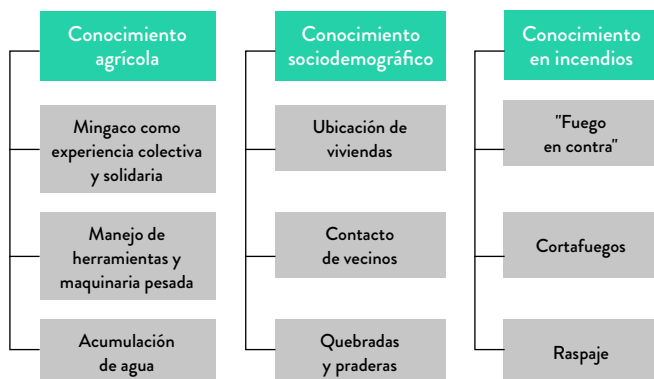
Las acciones de los vecinos eran complementadas en paralelo con el “raspaje” de las casas y alrededores que, como se mencionó, consiste en la limpieza con el fin de eliminar cualquier material combustible que pudiera expandir el incendio. El uso del agua también fue fundamental para resguardar los

hogares, ya que los vecinos acumulaban agua extraída de las norias para estar preparados por si el fuego se acercaba. Así protegían sus hogares:

“Acá en Cutemu no se quemó ninguna casa porque estaba la gente ahí. Para eso se necesitaban las aguas acumuladas en las casas. Cada uno tenía su manguera, y como la mayoría de las casas tiene noria, sacábamos agua de la noria y teníamos el motor listo para enchufarlo y las mangueras listas para tirar donde hubiera más peligro. Era cosa de organizarse y tratar de salir adelante a punta de lo que fuera”

(Judith, entrevista).

Figura 2. Tipos de conocimiento local desplegados por la comunidad para el combate del megaincendio forestal



Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el actuar de las instituciones generó cierta disconformidad en los vecinos de Cutemu. Es importante tener claro que fueron muchas las entidades involucradas en el evento y que actuaron en distintos tiempos, es decir, tanto en el momento mismo del incendio como posteriormente, de forma reparatoria. Dentro de las instituciones y organismos que se desplegaron en el incendio se puede mencionar a Carabineros, Bomberos, Ejército de Chile, Conaf, la Municipalidad de Paredones y el Estado en general.

Desde la municipalidad se reconoce que las acciones fueron lentas y que no se contaba con ningún plan de contingencia para un incendio de grandes magnitudes.

"Las acciones en el momento fueron tal vez un poco lentas, tal vez faltó rapidez en varios hechos, en varias acciones, y fueron pocas, en realidad. Fue todo tan rápido y tan grande, que fueron haciéndose cada vez pocas, quedaron pequeñas al lado del incendio. Sí, en la zona central todos los años hay incendios y de esa magnitud no había. Siempre ha habido campañas, letreros, tal vez brigadas forestales no habían permanentes en el sector, pero después llegaron brigadas forestales de todos lados e igual el incendio avanzaba"

(funcionario municipal, entrevista).

La tensión entre el saber local y el saber institucional sacó chispas. La comunidad señalaba que instituciones como las Fuerzas Armadas y de Orden no tenían conocimiento sobre la propagación del incendio en el sector, como tampoco de la ubicación de las viviendas.

“[Había] militares, hartos camiones, lo que sí, ellos no se meten al fuego, ellos venían y dirigieron, no más, y nosotros les dijimos qué hacer aquí, porque no se meten pa’ allá y eso nosotros lo encontrábamos injusto, porque el fuego estaba a un metro de las casas y ellos no iban. Ellos no se meten, iban solo por afuera y habían personas como yo y la gente que se metía pa’ todos lados, ellos solo dirigían. Fue la gente y apagó el fuego, si no, se nos quema la casa”

(Patricia, entrevista).

6. Después de la tormenta de fuego, ¿viene la calma?

Posterior al incendio, los vecinos reclamaron que la ayuda se repartió de forma dispar, privilegiando a quienes estaban focalizados como usuarios Indap. Desde esta institución señalan que las ayudas consistieron en instrumentos de fomento, como proyectos para reconstruir infraestructura perdida, bodegas, galpones, cercos y recuperación de animales, praderas y casas, a lo que aportó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si bien la mayoría de los vecinos declara haber recibido aportes desde la Municipalidad de Paredones y el Estado, existe la sensación de que fueron los organismos privados quienes ayudaron en mayor medida:

“Yo quedé muy disconforme con las autoridades, porque de empresas particulares que venían, mandaban alimentos para la ganadería, alimentos para perros, gallinas. Llegó mucha ayuda aquí, pero solo de particulares. ¿Qué hicieron las autoridades? La gente de Prodesal se hacía cargo de los fardos y después los

repartieron a la gente que está inscrita en Prodesal, pero no todos están inscritos. Entonces, los que estaban inscritos les daban, aunque no tuvieran animales, y había gente que tenía animales que no estaba inscrita en Prodesal y no le tocaba, no era muy eficiente la ayuda”

(Judith, entrevista).

Desde Indap hasta la junta de vecinos señalan que tras el incendio han comenzado a realizarse campañas preventivas para evitar que ocurra un evento como este a futuro. Por ejemplo, Judith, presidenta de la junta de vecinos, señala que desde la empresa Arauco se creó un comité de prevención de incendios que ha comenzado a contactarse con la Central General de Electricidad (CGE) para solicitar la limpieza de las líneas. Además, la empresa ordenó que se talaran doce metros alrededor del tendido eléctrico para evitar eventos como el que desencadenó el incendio.

En una fase de prevención, se aprecia que los mismos vecinos se han asegurado de que cada habitante limpie alrededor de su casa, a fin de que no haya árboles. En el futuro, las familias esperan no tener que vivir un incendio de estas características, pues ven con temor sus potenciales consecuencias, considerando la alta dependencia demográfica de la localidad.

CONCLUSIONES

Los incendios forestales ocurridos en el país en 2017, entre los que se encuentran los acontecidos en la región de O'Higgins y la localidad de Cutemu, son eventos siconaturales vinculados a una serie de transformaciones históricas, socioeconómicas y medioambientales. Estas catástrofes han tenido variadas consecuencias en la vida familiar, social y económica de las familias y se trata, en definitiva, de procesos de empobrecimiento, ya que tras su ocurrencia los vecinos ven encarecidas sus formas de vida, tienen que pasar por fases de fragmentación familiar y enfrentarse a un entorno natural con elementos que los ponen en peligro, como han demostrado ser los cultivos forestales por su alto consumo de agua y propensión a los incendios forestales.

Los vecinos de Cutemu han tenido que enfrentar transformaciones y eventos de magnitudes considerables y se han visto obligados a convivir con fenómenos como terremotos, escasez hídrica e incendios forestales. La comunidad interpreta estos fenómenos a partir del conocimiento que tienen sobre el territorio, sus condiciones naturales y medioambientales, las cuales han cambiado considerablemente en las últimas décadas. En el caso del incendio de 2017, al margen de los hechos coyunturales que pudieron detonarlo, la comunidad es consciente de que se trata de un fenómeno reciente e inesperado que alcanzó su magnitud final por la cantidad de cultivos exóticos que rodean a la comuna.

En este tipo de acontecimientos confluyen acciones de orden institucional y local, cada una con sus propias formas de organización y recursos que se activan. En esta ocasión, las formas de agencia y conocimiento que concurrieron a mitigar y superar estos sucesos no encontraron un elemento articulador que les permitiera actuar conjuntamente con el propósito de reducir los riesgos asociados a estas catástrofes.

Ante esta situación, la presente investigación revela que las catástrofes suscitan formas de agencia dentro de los vecinos de Cutemu que encuentran su origen en una estructura social, familiar, histórica, demográfica y económica propia del lugar y modos de vida de sus habitantes. Podemos observar que, en muchos sentidos, aún prevalecen relaciones sociales basadas en un “nosotros”, lo que les lleva a responder de manera colectiva y solidaria ante los desastres. Esto se debe, entre otras cosas, a una larga historia de convivencia en común. Al conocer la historia de los vecinos, nos encontramos con formas de organización laboral que son propias del mundo rural, como la trilla y los mingacos, las que se basan en lógicas de reciprocidad, colaboración y tratos bajo palabra que, si bien con el tiempo han tendido a desaparecer, parecen volver a emerger en situaciones eventuales como un incendio. Esta práctica es un acuerdo implícito de ayuda recíproca.

Es relevante destacar la forma en que los locales aplicaron sus conocimientos sobre el territorio y la relación entre vecinos para combatir el megaincendio forestal. Como se pudo observar, los vecinos ocuparon las herramientas y

mecanismos que tenían a su alcance y de forma colectiva se enfrentaron a los focos de incendio que iban emergiendo. Ante los esfuerzos en vano por frenar el incendio, finalmente se dedicaron a salvar sus casas y bienes materiales, lo que tuvo un resultado positivo en la comunidad. Entre las técnicas que más destacan, encontramos la realización de cortafuegos, “raspado” de las casas y el uso de “fuego en contra”.

Esta catástrofe dejó en evidencia una serie de falencias en la gestión del riesgo de desastres a nivel institucional. Lamentablemente, no existían planes de contingencia para enfrentar incendios forestales de tal magnitud y las autoridades a cargo tampoco consideraron el saber local de los vecinos al momento de organizar el combate al fuego y la mitigación de este, cuando fue justamente el saber local el que les permitió salvar sus enseres y viviendas.

RECOMENDACIONES

Se propone que es fundamental incorporar los conocimientos locales dentro de la gestión del riesgo de desastres, así como a la comunidad en el Sistema de Protección Civil. La comunidad es la que está en la primera línea del desastre, la que mejor conoce el territorio y sus integrantes son los que mejor se conocen entre sí. La comunidad está antes de que lleguen las autoridades e instituciones, por lo que la planificación debe incorporarla como un ente activo en la gestión del riesgo de desastres.

Lo que se propone es superar la concepción fiscalista y la lógica asistencialista del Estado en materia de desastres socio-naturales. Si bien es importante que su misión sea restablecer el orden y proteger a la comunidad, debe definir un mecanismo que conecte y permita la inclusión de la comunidad junto con su saber y despliegue en el territorio siniestrado. Para esto se debe contar con una estructura flexible, no tan rígida ni vertical. Para lograr aquello, la inclusión de la comunidad y sus prácticas debe estar presente en todas las fases del desastre y no solo en la emergencia y prevención. De esta forma, se puede hacer una gestión eficiente del riesgo de desastres con un alcance más horizontal, pero que involucre a autoridades, Sistema de Protección Civil y, sobre todo, a la comunidad.

Pensar los desastres desde la perspectiva de los conocimientos locales es una oportunidad para construir una nueva estrategia de desarrollo local y regional para prevenir el riesgo de desastres, activando el portafolio de recursos físicos, humanos, sociales y culturales de las personas, familias y comunidades, como ocurrió en Cutemu tras el megaincendio forestal. Se debe aprovechar el aprendizaje activado en estos eventos para nutrir y robustecer la gestión del riesgo de desastres.

BIBLIOGRAFÍA

- **Azócar, F. (2018)**. Estrategias comunitarias, medios de vida rural y desastres siconaturales en el secano de la región de O'Higgins: el caso del megaincendio forestal, verano 2017. Tesis para optar al grado de Magíster en Recursos Naturales y Riesgos, Universidad de Heidelberg. Santiago de Chile.
- **Fundación Superación de la Pobreza (FSP) (2019)**. Megaincendio forestal, vulnerabilidad y afectación en hogares. Fundación Superación de la Pobreza. Región de O'Higgins, Chile.
- **Hewitt, K. (1983) (Ed.)**. "The Idea of calamity in a technocratic age". En: *Interpretation of calamity*, Allen and Unwin, London.
- **Johnson, M. (1992)**. *Lore: Capturing traditional environmental knowledge*. Ottawa: Dene Cultural Institute/Idrc.
- **Lavell, Allan (1993)**. Ciencias sociales y desastres naturales en América Latina: un encuentro inconcluso. *Eure*. 19(58): 73-84, 1993. ISSN 0250-7161.
- **Modrego, F., Ramírez, E., Yáñez, R., Acuña, D., Ramírez, M., Jara, E. (2011)**. "Dinámicas territoriales del secano interior de la región de O'Higgins: las fronteras de la transformación agroindustrial". Documento de Trabajo N°80. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.
- **Montecinos, C. (1999)**. Todos lo sabemos (o deberíamos saberlo). Monitor de Biotecnología y Desarrollo, Compendio 1995-1997.
- **Netting, R.M. (1993)**. *Smallholders, householders: farms, families and the ecology of intensive, sustainable agriculture*. Stanford: Stanford University Press.
- **Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) (2017)**. 1° Informe Estadístico Semestral de Onemi, 2017. Periodo de enero a junio de 2017, Sistema Estadístico Institucional de Onemi.
- **Pimbert, M. (1994)**. The need for another research paradigm. *Seedling*, 11(2), 20-26.
- **Quarantelli, E. (1987)**: "What should we study? Questions and suggestions for researchers about the concept of disasters", *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, marzo, vol. 5, N°1, pp. 7-32.
- **Ruiz, J. I. (2003)**. Metodología de la investigación cualitativa, Universidad de Deusto.
- **Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1996)**. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona, Paidós.
- **Unisdr (2015)**. Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres, período 2015-2030.
- **Uribe, H. (2014)**. Hidrología del secano de la región de O'Higgins.

MEMORIAS VIVAS Y ACTUALES: ENTRE LAS MEMORIAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES DE LOS HABITANTES DE CERRO MERCED RESPECTO A LA RECONSTRUCCIÓN POSTINCENDIO DE 2014

Javiera Andrades González, Sandra Correa Rojas y Gisselot Letelier Jara¹,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso



RESUMEN

La presente investigación, desarrollada como tesis de pregrado, busca dar cuenta de las divergencias memoriales en torno a la fase de reconstrucción tras el incendio de 2014 entre los habitantes del Cerro Merced, Valparaíso, a partir de un estudio de caso.

Se considera que este desastre socionatural no ha sido abordado con la complejidad que implica un acontecimiento de este tipo, pues las entidades gubernamentales y constructoras se han centrado principalmente en la reconstrucción material, tanto de las viviendas de los y las habitantes siniestrados como en la reconstrucción urbana del territorio, invisibilizando que el fenómeno de la reconstrucción postdesastre socionatural contiene otras aristas. Una de ellas es el proceso memorial que conlleva dicho evento.

Si bien existen diferentes maneras de expresar las memorias del incendio y la reconstrucción, esta investigación centra su estudio en la materialidad como contenedor de las memorias individuales y colectivas. Algunos ejemplos de sus representaciones son los lugares de memoria (Nora, P., 2009 [1984]) oficiales y no oficiales, y las expresiones materiales —artísticas, monumentos, placas— que los y las habitantes del Cerro Merced desplegaron en espacios públicos y privados.

Se plantean dos puntos de llegada al análisis e interpretación de los datos. El primero da cuenta de que las memorias de la reconstrucción postincendio de 2014 son, para los y las habitantes, vivas y actuales, algo que no ocurre con la memoria oficial del Estado. El segundo punto tiene que ver con una dialéctica que se da en el territorio estudiado, entre memoria—materialidad—olvido.

Palabras clave: desastre socionatural, memoria, memoria colectiva e individual, memorias vivas, usos sociopolíticos, materialidad, lugares de memoria, marcas territoriales.

¹ Trabajadoras sociales y licenciadas en Trabajo Social. Artículo basado en la tesis “Memorias vivas y actuales: divergencias en torno a la reconstrucción postincendio de Valparaíso 2014 en Cerro Merced”, realizada para obtener el título de trabajadoras sociales y la Licenciatura en Trabajo social. Tesis de pregrado aprobada el año 2019 en la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso. Profesor Guía: Clément Colin.

INTRODUCCIÓN

Chile tiene una condición geográfica que predispone al territorio a diversos desastres de índole siconatural, como terremotos, tsunamis, incendios urbanos forestales y erupciones volcánicas. A pesar de ello, el Estado no cuenta con políticas públicas destinadas a la reconstrucción —en sus distintos ámbitos— postdesastre, lo que retrasa el proceso reconstructivo y genera nuevos problemas a quienes vivenciaron estos sucesos.

Por desastre siconatural se comprende un evento que ocurre en un tiempo y espacio determinado (Wilches-Chaux, 1993) y que genera grandes cambios en los territorios en los que ocurre. Autores como López (2004) relevan que estos eventos tienen un impacto que abarca las dimensiones política, económica y social. En el ámbito político, obliga a una respuesta de emergencia de parte de las autoridades de turno, que se materializa, entre otras ayudas, en la creación de políticas y entrega de bonos a quienes fueron siniestrados. Las políticas u orientaciones técnicas que se utilizan cotidianamente no están diseñadas para responder a una emergencia (Arenas, E., Departamento de Reconstrucción Servicio de Vivienda y Urbanismo, 2018).

En el ámbito social, vinculado, por cierto, a las dimensiones política y económica, se puede observar la vulneración socioeconómica de ciertos habitantes de la ciudad o sector en el que ocurrió el desastre, ya sea por el estrato económi-

co al que pertenecen o por el territorio donde residen, un factor que incide en su propensión a ser afectados por los desastres.

Es por lo anterior que la reconstrucción tras los desastres no debe limitarse únicamente al ámbito material, pues es necesario reconocer que después de los siniestros no solo el territorio afectado se ve alterado, sino que cada uno de los sujetos que vivenciaron la experiencia sienten el impacto, pues sufrieron pérdidas en su tejido social e identitario.

Asimismo, los efectos sociales asociados a la ocurrencia de desastres sobre una población determinada implican cambios drásticos en la cotidianidad que vivían las personas, lo que dificulta la construcción del sentido de pertenencia y modifica los referentes que hasta antes de la ocurrencia del desastre tenían los habitantes afectados. De esta manera, emergen nuevas formas de reconstrucción de sí mismos en los y las habitantes siniestrados (Arteaga y Ugarte, 2015), las que incluyen una transformación a nivel subjetivo e individual que se extrapola a los grupos sociales a los que pertenecen estos sujetos, es decir, a lo colectivo.

Es por esto que cobra importancia la esfera social en el desastre siconatural, integrada por las percepciones, representaciones, valoraciones, elementos simbólicos y racionalidades construidas y explicadas por las comunidades y las instituciones en torno al siniestro (Fun-

dación Superación de la Pobreza, 2015), las que, sin embargo, no son atendidas directamente por las entidades gubernamentales —pues no se destinan fondos específicos para ello—, ya que el foco es la pronta reconstrucción material y el regreso a la normalidad.

Esta investigación pretende poner de relieve que el desastre no es solo una situación o un estado, sino que en él confluyen múltiples momentos y procesos sociales, por tanto, el foco del análisis es el proceso memorial colectivo de los y las habitantes.

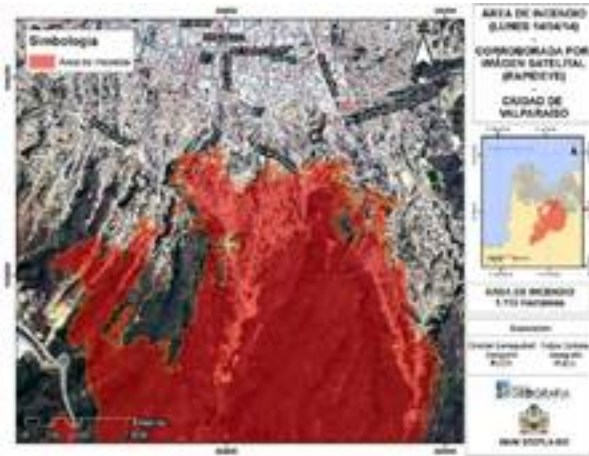
¿Qué elementos se recuperan de investigaciones previas que han trabajado con las memorias? Se puede mencionar la constatación del surgimiento de expresiones artísticas como grafitis, festivales y ceremonias como una manera en que los y las habitantes reconstruyen el espacio físico a través de una memoria, buscando, de alguna manera, transmitir lo sucedido, tanto para ellos como para externos al territorio. A su vez, se reconoce que existe una memoria del desastre permeada por los significados, imaginarios y materialidades que los habitantes conforman colectivamente, donde las memorias estarían constantemente en interacción unas con otras.

En este sentido, se logra visualizar que la rememoración de un desastre socio-natural no solo queda relegada a lo discursivo, sino que también se plasma en lo material a través de acciones comunitarias en el territorio u otras emprendidas por el Estado de Chile. La intencionalidad de este estudio fue investigar lo colectivo, prácticas y/o acciones que podrían tener como medio o fin la rememoración del incendio y la reconstrucción de este. En particular, se busca relevar la dimensión individual, dentro de lo colectivo, asociada a la materialización de las memorias.

Incendio en Valparaíso, 2014: el caso del Cerro Merced

El incendio urbano-forestal que tuvo lugar entre el 12 y 13 de abril de 2014 en la ciudad de Valparaíso es uno de los desastres sicionaturales que ha mostrado con mayor fuerza la relevancia de la reconstrucción, pues en 48 horas el fuego avanzó arrasando con 1.042 hectáreas, de las cuales 148 corresponden al área urbana de Valparaíso, lo que siniestró a los cerros Rocuant, Ramaditas, Mariposas, Merced, Litre, Las Cañas y La Cruz.

Mapa 1. Territorio afectado por el incendio de 2014



Fuente: Cooperativa.cl, 2014.

Para la reconstrucción de Valparaíso se realizó un plan de inversión (Gobierno de Chile, 2014) al que se le asignaron \$509 millones de dólares, los cuales fueron distribuidos en tres escalas de acción: ciudad; barrio/cerro, con foco en la recuperación de espacios comunitarios; y vivienda. El programa Quiero mi Barrio fue el encargado de generar intervenciones vinculadas a la recuperación de identidad e historia barrial.

El análisis del impacto sobre las casas mostró 2.910 viviendas afectadas, de las cuales 2.765 sufrieron daños irreparables, lo que afectó a aproximadamente 2.998 familias (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018). Cuatro años más tarde, 849 familias reconstruyeron su vivienda en un nuevo terreno, 1.093 familias han adquirido viviendas nuevas o usadas, y a 1.188 familias se les construyó una vivienda en el sitio propio (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018). A partir de estos datos y los discursos de

los y las habitantes sobre este fenómeno, se puede decir que el Estado centró su accionar principalmente en lo material, invisibilizando otros ámbitos de la vida de los y las habitantes de Valparaíso, como el simbólico y el que incluye las subjetividades de las personas. Por tanto, se considera que este incendio no ha sido abordado con la complejidad que implica un desastre siconatural de esta magnitud.

Cerro Merced fue uno de los siete cerros afectados por el incendio y fue seleccionado para el estudio de caso de esta investigación por ser el que tuvo el mayor porcentaje de habitantes que continuaron residiendo en el cerro con posterioridad al siniestro. En el cerro aún persisten vestigios materiales del incendio, tanto en los espacios públicos como en los privados, lo que de alguna manera alimenta un vínculo material con lo perdido durante el desastre.

Mapa 2. Valparaíso. Focalización del territorio seleccionado para la investigación



Fuente: Google Maps y elaboración de Javiera Andrades, 2018.

El Cerro Merced es un territorio caracterizado por los propios habitantes como un espacio habitado principalmente por grupos familiares. Según la versión oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicada en el libro *Desde las cenizas: memoria de la reconstrucción en Valparaíso* (2018), tuvo su auge de poblamiento en 1906, tras el terremoto e incendio de ese año.

Las viviendas afectadas por el incendio de 2014 pueden dividirse entre las que tienen un daño reparable y las que sufren un daño irreparable, lo que se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Viviendas afectadas en Cerro Merced

Reparable	Irreparable	Total de viviendas
267	17	284

Fuente: catastro Serviu, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014.

La reconstrucción llevada a cabo por el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el Cerro Merced no estuvo enfocada meramente en las viviendas, pues “había que reconstruir no sólo casas, sino hogares, barrios, reconstruir la vida de la gente, sus costumbres y cotidianeidad”

(Miguel Mujica, gerente de la reconstrucción de Valparaíso, citado en Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018, p. 30). Por tanto, se hizo una reconstrucción urbana, con incidencia en el tejido urbano del territorio, ya que se debía

“restaurar calles, escaleras y callejones que quedaron muy dañados con el incendio, y que muchas veces incluso antes de la catástrofe, se caracterizaban por su precariedad producto de la improvisación de los mismos vecinos al momento de construir”

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018, p. 32).

Si bien existen diferentes maneras de expresar las memorias del incendio, esta investigación se centra en las expresiones materiales-artísticas, monumentos, placas instaladas por los y las habitantes del Cerro Merced, los que son identificados como lugares de memoria, contramemoria y marcas territoriales.

MARCO TEÓRICO

Para esta investigación es relevante abordar la realidad a partir de las memorias de un desastre siconatural. Pierre Nora (2009 [1984]) comprende a las memorias como un proceso en constante movimiento, “vivas”, encarnadas por grupos vivientes que se encuentran en evolución permanente, por lo que constituyen un fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente que permite realizar una selección de las mismas, en términos de Todorov (2000 [1995]).

Existen elementos de vital importancia al momento de referir cómo se comprenderán las memorias. Quién recuerda es el primer punto relevante, pues denota una tensión permanente

entre sujeto, grupo y sociedad que se ubica entre lo individual y lo colectivo. Bergson (2004 [1898]) otorga una primera aproximación mencionando que las memorias se constituyen desde el cuerpo, pues sería el dispositivo motor que recibe, acoge y ordena las acciones del pasado, lo que plantea una visión meramente individual de la memoria. Un punto de vista distinto es el de Halbwachs (2004 [1950]), quien acuña el concepto de memoria colectiva para hablar de “una memoria producida, vivida, oral, normativa, corta y plural” (Candau, 2006 [1996], p. 57), donde el individuo solo existe en el entrecruzamiento del grupo, por lo que para este autor no hay una transmisión de memorias fuera del colectivo que las genera.

Bastide ([1970], citado en Candau, 2006 [1996]) se interesa en la reconstrucción de las memorias y propone situarlas en dos dimensiones, por una parte, colectiva, y por otra, individual, ya que las memorias colectivas son “sistemas de interrelaciones de memorias individuales” y se ubican entre lo individual y lo colectivo, es decir, en una tensión permanente entre el sujeto, el grupo y la sociedad.

En segundo lugar, es importante preguntarse cuándo se recuerda, pues las memorias se inscriben en un tiempo y espacio, en un contexto político y cultural específico.

Adicionalmente, hay que cuestionarse por el uso que se les da, pues este habla de una relación disímil de poder entre actores, lo que sitúa a las memorias como un objeto de lucha constante, donde, acorde a Jelin (2002), los actores que luchan por el poder mantienen una

pugna por afirmar la legitimidad de su verdad sobre las memorias. Todorov (2000 [1995]) realiza una aproximación a los usos de las memorias y distingue dos: el literal, que somete el presente al pasado, volviéndolo insuperable y produciendo con ello un abuso de la memoria que origina rencor, venganza y violencia; y el ejemplar, que utiliza el pasado con vista al presente, por lo que busca obtener lecciones y otorgar nuevos significados a los recuerdos.

Otro factor relevante es cómo se transmiten las memorias. Es posible que la circulación ocurra a través de grupos y la materialización que de ellas hacen estos colectivos en un determinado espacio. Lefebvre (2013 [1978]) comprende esta propagación como una producción social, es decir, con anclaje en las relaciones de poder y las interacciones sociales.

Así, cuando en un espacio acontece un hecho relevante para los sujetos, este se transforma en un “lugar”, lo que, según Jelin y Langland (2003), se realizaría por medio de una marca territorial, es decir, un soporte de las memorias expresado en una placa, monumento, memorial o mosaico en el espacio territorial que es transitado y vivido cotidianamente, por medio del cual se rememora un evento traumático o que marcó la vida de los sujetos.

Pierre Nora (2009 [1984]) acuña la noción de lugares de memorias como espacios que contienen vestigios —intencionales o no— de eventos históricos cuya edificación rememora sucesos que ocurrieron en ese lugar. Contienen tres elementos: lo material, que refiere

a lo concreto, donde se emplaza el lugar de memoria y la distribución de este; lo simbólico, que contiene las características de un hecho experimentado y vivido por ciertos sujetos; y lo funcional, que posibilita transmitir el acontecimiento cristalizado en los recuerdos de los sujetos.

Estos lugares de memorias solo darían cuenta de la versión oficial y excluirían otros puntos de vista. Legg (2005) propone el concepto de contramemoria para criticar los lugares de memoria. Estos funcionarían como una versión alternativa de lo descrito por Nora, que permitiría relevar la interpretación de quienes no fueron parte de la historia oficial. Es necesario mencionar que un lugar de memoria podría ser, a la vez, de contramemoria, es decir, un lugar físico con distintos significados.

MÉTODO

La investigación se conforma a partir del establecimiento de la pregunta de investigación, que fue “¿Cómo se revelan las divergencias memoriales respecto de la reconstrucción postincendio en el espacio del Cerro Merced?”, como del objetivo general, “Analizar las divergencias respecto de las memorias de la reconstrucción postincendio 2014 en Cerro Merced, Valparaíso”.

Las hipótesis de trabajo fueron las siguientes:

1. “Los habitantes asocian memorias en función de sus experiencias, asignándo-

les distintos significados y emociones”.

2. “La diversidad de memorias entre los habitantes del Cerro Merced y las instituciones genera divergencias respecto de la reconstrucción postincendio”.

3. “La diversidad de memorias entre los habitantes del Cerro Merced y las instituciones genera divergencias que son reveladas a través de la edificación de lugares de memorias”.

4. “Desde el Estado y las instituciones, la reconstrucción postincendio es un proceso cerrado”.

Los resultados esperados, es decir, aquello que se creía encontrar a partir del estado del arte, el marco teórico y los primeros acercamientos al territorio, eran los siguientes:

1. “Diversidad de memorias asociadas a la reconstrucción postincendio por parte de los y las habitantes del Cerro Merced y las instituciones”.

2. “La divergencia de memorias asociadas a la reconstrucción postincendio se materializa en lugares de memoria en el Cerro Merced”.

3. “Los y las habitantes poseen una memoria actual y viva respecto al proceso de reconstrucción postincendio”.

Se diseñó una investigación con enfoque cualitativo, con una perspectiva interpretativa-comprensiva que buscó comprender los significados, intenciones, motivaciones y expectativas del accionar de los y las habitantes ante las divergencias memoriales.

Se utilizó un tipo de estudio exploratorio, pues la temática es una arista escasamente estudiada cuando se compara con otras investigaciones referidas a los desastres sicionaturales. El método empleado fue un estudio de caso centrado en Cerro Merced, que buscó analizar y profundizar en la complejidad del fenómeno.

Respecto a las técnicas, se utilizó la fotografía, recorridos guiados, entrevista semiestructurada y grupo focal. Para el procesamiento de información se utilizaron dos tipos de análisis, el de contenido cualitativo y el de contenido fotográfico.

El uso de estas técnicas y tipos de análisis tuvo como objetivo rescatar tanto la materialidad como la narrativa de los y las habitantes del territorio seleccionado, a fin de comprender que lo tangible no puede separarse de lo intangible.

RESULTADOS

1. La reconstrucción material de Cerro Merced

Al recorrer las distintas calles del Cerro Merced, no solo es posible encontrar “casas nuevas”. Es evidente la presencia de vestigios que hacen alusión al incendio en distintos espacios públicos, tanto para quienes visitan el territorio como para los y las habitantes.

Estos vestigios no solo hablan de lo sucedido, sino que también dan cuenta de lo que quiere transmitir cada habi-

tante. Son precisamente estos lugares emblemáticos los que dan cuenta de divergencias memoriales entre las instituciones y los y las habitantes del Cerro Merced. Cada uno de estos actores tiene una versión de por qué, cómo y para qué se construyó ese espacio.

La versión oficial emanada de las entidades gubernamentales en diversos documentos publicados² define la reconstrucción material de Valparaíso como un proceso exitoso, aunque se reconoce que existió una demora en la reconstrucción de viviendas (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018).

Este proceso finalizó en diciembre de 2018. Esto da cuenta de un choque de visiones: para las instituciones, la reconstrucción postincendio es un proceso cerrado, pues los subsidios, la construcción habitacional, la reconstrucción urbana y la asignación de recursos en el territorio ya concluyó, lo que excluye de esta fase el proceso social e individual de la reconstrucción de los y las habitantes. No solo se convierte en una

memoria cerrada administrativamente, sino que también se busca cerrarla para los y las habitantes.

Para estos últimos, ciertamente no se trata de un proceso cerrado, ya que aún faltan viviendas por construir y hay habitantes que aún no vuelven al territorio.

“También ha sido difícil, difícil, todavía quedan casas por reconstruir, todavía hay gente que no llega”
(habitante del Cerro Merced, colectivo).

¿De qué da cuenta la materialidad erigida por la memoria oficial? Las marcas territoriales (por ejemplo, placas situadas en distintos puntos del territorio) solo relevan las acciones que las entidades gubernamentales emprendieron y no se refieren al día del incendio o a la reconstrucción material y del tejido social de los habitantes, como muestra la Fotografía 1.

² Las instituciones gubernamentales a cargo de la reconstrucción publicaron dos libros sobre este desastre socionatural y su posterior reconstrucción. El primero es *Desde las cenizas: memoria de la reconstrucción en Valparaíso*, realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y publicado en enero de 2018 en Valparaíso, en el marco del cierre de la reconstrucción de parte del mismo organismo estatal. El segundo libro es *Cuatro cerros unidos en una historia*, realizado por el equipo de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Programa Quiero mi Barrio, publicado en 2017 en Valparaíso.

Fotografía 1. Placas realizadas por las entidades gubernamentales durante el proceso de reconstrucción



Fotografía: Sandra Correa, 2018

Es interesante notar que la memoria oficial da cuenta de múltiples obras barriales y renovación de espacios públicos, lo que de alguna manera habría implicado dar una respuesta no solo al desastre, sino también a las condiciones de vulnerabilidad previas, tal como explica el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“El plan de vivienda se mostró como un potente instrumento para corregir el estado de incumplimiento normativo urbanístico de los asentamientos en el polígono del incendio, ya que todos los proyectos fueron previamente aprobados por la dirección de obras municipales”

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018, p. 87).

Esto se expresó en mejoras urbanas en las calles, escaleras, muros de contención y alcantarillados, que hicieron que “la familia ya no baja por una quebrada, baja por una escalera” (Miguel Mujica, gerente de la reconstrucción de Valparaíso, citado en Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018, p. 36). Se asignaron recursos específicos a esta tarea. El detalle aparece en la Tabla 2.

Tabla 2. Obras realizadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo en Cerro Merced

Escaleras construidas	9.405 mtz
Pavimentos construidos	211.091 mtz
Proyectos con red seca	4
Obras de contención	8.200 ml
Obras de protección de taludes	18.022 ml
Puestos de trabajo	3.820
Contratos desarrollados	35 (14 terminados, 20 en ejecución, 1 licitación)
Gasto en el 2017	M\$ 8.677.815.000
Inversión total	M\$ 24.758.101.372

Fuente: Desde las cenizas: memoria de la reconstrucción en Valparaíso, realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, p. 88, 2018.

Una parte de los y las habitantes valoran la recuperación de espacios públicos y el impacto que esta tuvo sobre la reconstrucción material del territorio que aparece en las memorias de la reconstrucción.

“La comunidad, no, la comunidad, porque ahí era donde hacíamos las reuniones del Quiero mi Barrio y ahí nosotros... se hizo el proyecto de los mosaicos, se inscribió la gente y participamos ahí”

(habitante del Cerro Merced, secretario de la Junta de Vecinos N°61).

Por cierto, no ocurre lo mismo en todos los casos, ya que algunos habitantes creen que esto implicó marcar el territorio con acciones en las que no tuvieron incidencia.

“El Quiero mi Barrio ha puesto el eslogan en todos lados, en el muro de allá abajo, “en memoria del gran incendio”; si el incendio no fue allá abajo”

(habitante del Cerro Merced, participante de la agrupación Ave Fénix y la ludoteca).

2. La materialidad como soporte de las memorias

Durante el desarrollo de la investigación fue posible visualizar que el incendio no solo quedó plasmado en el discurso de los y las habitantes, sino que también en una materialidad que sirvió como soporte para transmitir sus memorias relacionadas con el siniestro. Allí se reconoce que hay ciertos recuerdos indecibles producto del trauma colectivo que dejó este desastre siconatural.

Lo indecible es soportado en marcas territoriales, lugares de memorias u objetos que permiten significar un espacio.

Sin embargo, estos lugares también representan lo decible de este trauma, lo que se rememora constantemente.

Estos soportes de memorias no solo tienen un impacto en el colectivo, sino que también impactan las acciones individuales que los mismos habitantes han desarrollado como una vía para enfrentar lo acontecido y reconstruirse como sujetos.

2.1 Lugares de memorias en Cerro Merced

Según el Servicio de Vivienda y Urbanismo, la reconstrucción urbana se realizó pensando en el resguardo patrimonial de las viviendas y de los espacios públicos de la urbe, a fin de conservar la línea arquitectónica y relevar la historia barrial de la Plaza de La Virgen y el monumento a las víctimas del incendio de 1906 en la Plaza Cruz de los Muertos. Este proceso implicó una intervención a los lugares de memorias de sucesos históricos previos.

Los habitantes reconocen que los lugares oficiales que rememoran el incendio de 2014 y la reconstrucción son importantes y forman parte de la historia que cada uno cuenta sobre el Cerro Merced y lo que les parece relevante de su territorio.

“Para la comunidad, porque esto, por ejemplo, si no estuviera la virgen, no se conocería la calle La Virgen, la virgen y todo eso”

(habitante del Cerro Merced, secretario de la Junta de Vecinos N°61).

A partir de esto, se seleccionaron tres lugares para la investigación: la Plaza La Virgen, el pasaje Quilacura y la Plaza Cruz de los Muertos. En ellos estaría el soporte de la versión oficial de las entidades gubernamentales sobre la historia del incendio de 2014 y la posterior reconstrucción.

2.1.1 Pasaje Quilacura

El pasaje Quilacura se distingue por sus mosaicos. Desde el punto de vista de algunos de los y las habitantes, su instalación fue una iniciativa que no tuvo relación con la comunidad.

“El pasaje Quilacura, ellos lo eligieron, nosotros no elegimos ninguna cosa, ellos... todo lo eligieron ellos”

(habitante del Cerro Merced, participante de la ludoteca).

Las y los vecinos creen que, desde el programa Quiero mi Barrio, las decisiones sobre esta materialidad y lo que contendría la misma se tomaron de manera unilateral. Sin embargo, otros habitantes piensan que las entidades gubernamentales fueron un facilitador para que los sujetos generaran esta materialidad.

“Esos murales, hicieron unos cursos aquí en el club deportivo, vinieron unas personas y les enseñaron a los mismos vecinos y entre ellos hicieron esos murales”

(habitante del Cerro Merced, secretario de la Junta de Vecinos N°61).

Fotografía 2. Murales del pasaje Quilacura



Fotografía: Gisselot Letelier, 2018.

2.1.2 Plaza La Virgen

Si bien la Plaza La Virgen no fue afectada directamente por el incendio, durante su ocurrencia se convirtió en un punto de acopio y de encuentro, por lo que adquirió un nuevo significado para los y las habitantes.

“Mira, yo no soy católica, pero la respeto, porque ese día (refiere al día del incendio) ella nos cobijó, llegamos allí, ella nos cobijó [...] ella nos protegió como mamá”

**(habitante del Cerro Merced,
secretaria de la Junta de Vecinos
N°14).**

Fotografía 3. Plaza La Virgen



Fotografía: Gisselot Letelier, 2018.

Sin embargo, en las obras de mejoramiento realizadas por los agentes estatales no se advierte ninguna referencia al incendio; los mosaicos que están a un costado solo remiten a la historia barrial. En este sentido, los mosaicos de la plaza funcionarían como una marca territorial en proceso de convertirse en un lugar de memoria, ya que no es relevada por la historia oficial ni por los habitantes, a diferencia de la estatua de la Virgen Stella Marie, la que sí sería considerada como un lugar de memorias previo a la ocurrencia del incendio de 2014.

2.1.3 Plaza Cruz de los Muertos

Ya el nombre de este espacio representa una tensión entre las y los habitantes

y las autoridades, pues el nombre que le dan los primeros, Plaza Cruz de los Muertos³, choca con el de Plaza del Recuerdo, impuesto por las entidades gubernamentales. Ni siquiera la totalidad de los habitantes conocen este nombre oficial.

En este lugar de memorias, las modificaciones son más notorias, pues se realizó una higienización, una especie de blanqueamiento o tabula rasa, pues la memoria oficial expone su versión del cerro sin rastro del incendio en el espacio. Previo a la ocurrencia del desastre, los y las habitantes consideraban este espacio como un punto de encuentro y que permitía recordar a las víctimas del terremoto de 1906.

Fotografía 4. Plaza Cruz de los Muertos



Fotografía: Javiera Andrades, 2018.

³ Esta plaza debe su nombre a una fosa común que contiene los restos de quienes fallecieron en el terremoto y posterior incendio de Valparaíso de 1906.

No obstante, este lugar fue resignificado con la inclusión de un monolito en recuerdo a las víctimas del incendio de 2014.

Otros habitantes consideran que se debió elegir otro lugar para recordarlos, lo que muestra su resistencia a incluir nuevos significados en este espacio.

Es interesante visualizar la apropiación de los y las habitantes que rodean a la Plaza Cruz de los Muertos, que edificaron un monolito después del incendio a pesar de las intervenciones realizadas por las entidades gubernamentales. En este sentido, se evidencia lo propuesto por Jelin (2002): en el espacio social existiría un juego de poder disímil en torno a las memorias

Por tanto, cabe señalar que los y las habitantes no materializan sus memorias con la misma potencia que la memoria oficial del Estado. Esto podría estar relacionado con el repliegue de los habitantes a su individualidad para reconstruirse subjetivamente a sí mismos y a su vivienda. De este modo, su memoria de la reconstrucción se centra en su propia experiencia de vida relacionada con el desastre siconatural.

2.2 Los objetos que permiten recordar lo ocurrido

Si bien en un inicio la investigación identificó solo a los lugares de memorias como vía de entrada para estudiar las divergencias memoriales, durante el trabajo de campo se accedió a los discursos de los y las habitantes de Cerro Merced, quienes mencionan tener ob-

jetos en sus viviendas que rememoran el incendio.

Esto refuerza la idea de que no hay un único tipo de memorias, sino una multiplicidad de circunstancias en las cuales se manifiestan memorias, olvidos y silencios, con diversos usos y sentidos (Jelin, 2002), pues a pesar de la intención de querer olvidar lo ocurrido (debido a su componente “traumático”), fue transversal la intencionalidad de recuperar objetos personales de entre medio de los escombros de las viviendas u otros sectores siniestrados, con la finalidad de rememorar lo ocurrido por medio de un elemento material.

“Hay cosas que yo guardé de la casa de mis papás que estaban quemadas, porque es como un recuerdo, lo único que nos quedó de la casa de mis papás”
(habitante del Cerro Merced, participante de la agrupación Sol Naciente).

Algunos habitantes recuperaron objetos de los escombros de las viviendas siniestradas con la finalidad de rememorar lo ocurrido. A pesar de que estos objetos son variados, comparten la característica de haber sido modificados en su funcionalidad y materialidad por el incendio de Valparaíso de 2014. Esto permitió considerarlos como otra entrada para estudiar lo acontecido.

Estos objetos se transforman en un soporte del recuerdo del incendio y permiten recordar lo que sucedió, razón por la cual los y las habitantes buscan conservarlos sin realizarles mayores intervenciones y los interpretan como una

posibilidad de transmitir a otros sujetos y nuevas generaciones que los y las habitantes “se pusieron de pie” y “salieron adelante”.

“Hay gente que tú vas a sus casas y tienen cosas que se le quemaron, máquinas de coser, eh... muebles que pudieron salvar pedazos, árboles, troncos que ahora tienen hechos mesas de centro o cosas así, es como ‘esto me quedó de ese incendio que destruyó mi vida, que destruyó mi

hogar, pero lo transformé y estoy parada”

(habitante del Cerro Merced, participante de la agrupación Sol Naciente).

Un ejemplo de ello está en un negocio siniestrado donde tienen un cuadro con un serrucho y una moneda, elementos que los dueños rescataron de su vivienda tras el incendio y expresan el recuerdo de lo que pudieron salvar del fuego.

Fotografía 5. Objetos recuperados por los habitantes



Fotografía: Gisselot Letelier, 2018.

El serrucho podría haber sido una herramienta de trabajo, y la moneda, un método de pago, pero actualmente su función es otra, da cuenta de un recuerdo, de la acción de rememorar y transmitir las memorias de los dueños del negocio, por lo que adquieren un nuevo significado tras el incendio, uno conmemorativo que trasciende lo utilitario.

Los objetos en el cuadro están acompañados con una frase, “Lo único que se rescató y la fuerza de comenzar de nuevo. Abril 2014”, que reafirma que este acto de rememoración no solo estaría ligado a una pérdida material, sino

que también a la conservación de sentimientos que permitieron salir de un estado inicial de pérdida total y avanzar a uno de reconstrucción, un proceso que construye nuevos significados ligados a las experiencias de los y las habitantes. Si bien para los habitantes el recuerdo del incendio plasmado en estos objetos evoca un sentimiento de pérdida, también los remite a significados ligados a la transformación de la pérdida en una oportunidad de recuperación de un evento traumático que vivieron. Según Todorov (2000 [1995]), esto constituiría un uso ejemplar de las memorias.

Un segundo ejemplo de un objeto que funciona como un soporte de memorias es un bidón de agua que una habitante guarda.

“Las niñas me dicen que mientras no se abra, el agua del bidón seguirá buena, entonces yo no quiero abrirlo [...] es algo bonito que conservo de parte de esas niñas, ya que me ayudaron a salir adelante”

(habitante del Cerro Merced, secretaria de la Junta de Vecinos N°14).

Si bien la función principal de un bidón es brindar agua potable, existe una intención de conservarlo, ya que adquiere un nuevo significado que se encuentra ligado a las experiencias de una habitante que necesita materializar esto en un objeto.

En este sentido, los discursos de los y las habitantes relacionados con la intención de utilizar objetos como soporte de las memorias del incendio y su posterior reconstrucción son una acción consciente e intencionada, relegada a ámbitos más privados, es cierto, pero con la intencionalidad de ser comunicadas.

Ricoeur (2008 [2000]) plantea que las memorias individuales y colectivas no son contrarias entre sí, sino que existiría un vínculo entre ellas y una interconexión, ya que ambas se construyen socialmente. Así, las memorias privadas no son antagonistas de los lugares públicos de memorias. Más bien, esos registros íntimos tienen que ver con el proceso individual experimentado por los y las habitantes, ya que fueron ellos quienes vivieron una situación de pér-

didada tanto subjetiva como material. En este sentido, las acciones colectivas de memorias son incipientes y no bastan, por lo que tienen que ser completadas por acciones privadas que les permitan reconstruir su subjetividad, comenzar la reconstrucción de sí mismos.

Las memorias del incendio de Valparaíso de 2014 no pueden considerarse cerradas, ya que se siguen construyendo en el vínculo constante que realizan los y las habitantes entre pasado y presente por medio de la rememoración. Se trata de memorias actuales y vivas.

2.3 Memorias del incendio de 2014: entre lo individual y lo colectivo

Como ya se ha dicho, la rememoración de un desastre sicionatural no solo queda relegada a lo discursivo, sino que también se plasma en lo material. Por esto, para los y las habitantes de Cerro Merced, hablar de la reconstrucción sociomaterial implica, inevitablemente, recordar al día del incendio, por lo que no existe una separación entre esa jornada y el proceso de reconstrucción.

“Pareciera que fuera ayer”
(habitante del Cerro Merced, participante de la agrupación Sol Naciente).

En el recuerdo se enlaza el pasado y el presente y las personas recurren a metáforas para rememorar una situación significada como traumática.

A pesar de haber transcurrido cerca de cinco años del incendio al momento de esta investigación, en el discurso y la cotidianeidad de los y las habitantes el recuerdo pareciera estar fresco en sus memorias. Jelin (2002) advierte que ante una experiencia traumática es difícil expresar las memorias, hay obstáculos y trabas para comunicar por el dolor y el desborde emocional que genera recordar la experiencia, por lo que lo decible de dicha experiencia no está exento de analogías y huecos simbólicos.

“Es ese sentimiento de, de hecho, aún no sé cómo expresarlo, porque no sé qué palabras ocupar, pero que se te doblen las piernas de... solas, por sentir impotencia, rabia, a lo mejor, pena o no sé qué sentimiento produce que eso te pase”

(habitante del Cerro Merced, participante de la agrupación Ave Fénix y de la ludoteca).

No obstante, algunos habitantes han logrado comunicar sus recuerdos, convertirlos en algo decible y establecer un lazo entre el pasado y el presente, lo que les permite reconstituir el día del incendio desde las experiencias, sensaciones y percepciones que son parte de sus recuerdos. Esto refleja la dimensión viva y actual de sus memorias.

Lo relevante de la relación entre memoria y olvido es la manera en que los recuerdos se plasman en la materialidad, ya que el proceso memorial no solo es visible en los lugares de memoria, sino que en el caso del Cerro Merced también fue posible advertirlo en lugares más privados.

Pese a lo anterior, hay algunos habitantes que buscan olvidar lo ocurrido. Todorov (2000 [1995]) comprende este olvido no como una oposición a las memorias del incendio y de la reconstrucción, sino más bien como una vía para no rememorar contantemente un hecho doloroso, lo que permitiría evitar y superar lo traumático. Sin embargo, el proceso no es sencillo, ya que no solo el espacio fue marcado por estas memorias, pues su cuerpo también las porta. Por más que traten de olvidar, no pueden.

Por eso, los y las habitantes vuelven constantemente sobre el incendio y la reconstrucción, lo que permitiría afirmar que existe un abuso de estas memorias por parte de algunos habitantes. Ello, debido a que las mismas se utilizarían de manera literal, en términos de Todorov (2000 [1995]), lo que haría que las memorias siguieran en construcción y no pudieran ser cerradas debido a esta rememoración constante de las experiencias asociadas al proceso.

Aun cuando estas experiencias fueron vividas con diversos matices que las convierten en particulares y únicas para cada habitante, en sus discursos es posible advertir la presencia de un nosotros, un colectivo, que en este caso sería “ser habitantes afectados por el incendio y posterior reconstrucción”.

A pesar de que se identifica un nosotros en los discursos y elementos en común que recuerdan los y las habitantes, estos aún no logran confluír en una memoria colectiva, pues aún se encuentran en un proceso de reconstrucción de sí mismos. Pese a que participan de distintas

organizaciones en el territorio, en ellas no se ha hecho un trabajo de reconstrucción colectiva.

Así también, hay matices en cómo y por qué rememoran ciertos elementos, lo que da cuenta de que las memorias colectivas estarían en construcción. Por tanto, es posible retomar los postulados de Bastide ([1970], citado en Candau, 2006 [1996]) y decir que hay una tensión permanente entre el sujeto, el grupo y la sociedad, por lo que permanentemente habrá memorias individuales y colectivas.

2.4 Sentimientos sobre la reconstrucción del Cerro Merced

Las memorias individuales y colectivas de los y las habitantes están permeadas por distintas emociones dependiendo del espacio temporal en que se ubican las conciencias de los sujetos, que transitan entre un sentimiento de esperanza, nostalgia y humillación.

La esperanza surge a partir de la necesidad de reconstruir su subjetividad después del desastre, lo que es denominado por los y las habitantes en sus discursos como “cambio en la perspectiva de vida”. Por un lado, esto funciona como un móvil para comenzar el proceso de reconstrucción —tanto habitacional como de su subjetividad—, por otro, como un cambio en la manera de relacionarse con la materialidad, ya que estar con vida es más importante que los objetos perdidos.

La nostalgia tiene que ver con la relación que se estableció entre los y las ha-

bitantes durante el proceso de reconstrucción de viviendas, caracterizada por unión y cercanía, las que se perdieron en la medida en que los y las habitantes obtuvieron una solución habitacional. Se trata de una unión que existió y no volverá.

Finalmente, la humillación y el abandono son sentimientos que los y las habitantes han experimentado en su relación con las entidades gubernamentales encargadas de la reconstrucción material durante todo el proceso. Al inicio, por la demora en la reconstrucción, la burocracia ligada a ella y la no consideración de sus opiniones respecto al cambio en el tejido urbano, y hacia el final, por viviendas sin condiciones óptimas para ser habitables.

Además, no todos los habitantes han vuelto a residir en el cerro, lo que ha impedido la reconstrucción de la comunidad. Se trata de un proceso memorial vivo y actual, lejos de considerarse cerrado. Esta falta de cierre hace que se rememore un pasado-reciente presente.

En sus memorias, la forma en que ocurrieron los hechos se vuelve confusa y reviven las sensaciones experimentadas el día del siniestro, lo que genera un desborde emocional en algunos habitantes, que reconocen querer olvidar lo sucedido —debido al componente “traumático”— para enfrentar el presente y reconstruirse a sí mismos.

Es relevante volver sobre los sentimientos de los y las habitantes, pues es por medio de su comunicación que se da a conocer cómo vivieron y continúan viendo desde su subjetividad el proceso de reconstrucción de su territorio a par-

tir de las acciones de las distintas entidades gubernamentales involucradas. Se trata de una denuncia de lo ocurrido a través del uso de un discurso político, como lo plantea Todorov (2000 [1995]), ya que los y las habitantes, al dar a conocer sus emociones y denunciar, buscan validar sus sentimientos y experiencias para obtener un aprendizaje de lo ocurrido que debería ser considerado por las entidades gubernamentales en caso de una próxima reconstrucción postdesastre sicionatural. Si bien las autoridades abordaron el ámbito social en la reconstrucción, esto apuntó a la recomposición comunitaria, no a la reconstrucción subjetiva de los y las habitantes siniestrados.

CONCLUSIONES

Esta investigación se centró en la materialidad como soporte de las memorias de los y las habitantes del Cerro Merced asociadas a la reconstrucción postincendio de 2014.

Los resultados hablan de un diálogo constante entre memorias, olvido y materialidad, pues las memorias toman forma, en ocasiones, en la materialidad, y esta permite luchar contra el olvido a quienes buscan recordar lo ocurrido.

Se observan tres tipos de materialidad que los y las habitantes del Cerro Merced emplearon como soporte de las memorias de la reconstrucción postincendio: las viviendas construidas, los lugares de memorias oficiales y los no oficiales (objetos personales de los y las habitantes).

Estas materialidades funcionan como un soporte para expresar emociones en torno a un hecho traumático que vivieron los y las habitantes del Cerro Merced y generarían un sentimiento dispar: por una parte, hacen que unos quieran olvidar lo ocurrido, y por otra, que muchos utilicen esos espacios como un sitio de rememoración constante. Esta divergencia entre querer recordar y olvidar podría dar cuenta de por qué la materialización en los lugares es objeto de conflictos y por qué es posible identificar memorias individuales más que colectivas a la hora de buscar formas de materialización.

Algunos habitantes mencionan que sus memorias de la reconstrucción se encontrarían marcadas por sentimientos de humillación, abandono, rabia y frustración asociados a la obtención de la vivienda, lo que les impide olvidar lo ocurrido, pues el aprendizaje en torno al desastre genera una dialéctica entre querer olvidar y recordar lo ocurrido. Por otra parte, los lugares de memorias constituyen un soporte material de la versión oficial de las memorias de la reconstrucción pues son reconocidos por el Estado, pero para algunos habitantes estos lugares referirían a otros acontecimientos que difieren de lo ocurrido con el incendio. En este sentido, existen lugares marcados por los habitantes, como el monolito que se encuentra en la Plaza Cruz de los Muertos, que generan divergencias entre los habitantes, que se debaten entre querer recordar lo ocurrido o intentar olvidarlo.

“Es que se encontró que era el mejor lugar este, porque como ya es la Cruz de los Muertos, es el mejor lugar para tener un recordatorio y por eso se decidió poner eso”

(habitante del Cerro Merced, participante de la agrupación Sol Naciente).

Otros habitantes no concuerdan con esto y señalan que el monolito podría haber sido ubicado en otro sector.

“Pero haber puesto una cosa así, pero como este, como dicen que este es un lugar llamativo que vienen tantos, pero nadie ve, nadie se pone aquí”

(habitante del Cerro Merced, secretaria de la Junta de Vecinos N°14).

Para algunos habitantes, una manera de soportar y recordar lo ocurrido está en los objetos personales, los que constituyen un contenedor de lo que no se puede expresar con palabras debido al componente traumático de lo ocurrido. Estos elementos hablan de una tensión entre el deseo de olvidar lo ocurrido y lo no decible que es contenido en los objetos. Así, se incluye la reconstrucción de sí mismos en cuanto a la subjetividad de los habitantes como un punto relevante en el estudio del fenómeno.

La construcción de memorias estaría marcada, como ya fue mencionado, por los conflictos y divergencias que los y las habitantes tienen con las instituciones gubernamentales, los cuales no han permitido que los y las habitantes de Cerro Merced terminen de reconstruir los distintos ámbitos de su vida que fueron impactados por el incendio.

Estas memorias individuales y colectivas del incendio y de la reconstrucción están marcadas por sentimientos de dolor y trauma, elementos centrales de la dialéctica identificada, que para los habitantes constituyen memorias vivas que aún están en proceso de construcción.

RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA

Al indicar que los habitantes poseen memorias actuales y vivas se busca dar cuenta de que se está recordando un acontecimiento en la vida de los y las habitantes que aún ocurre, pues la reconstrucción, en sus distintos ámbitos, aún no ha finalizado, es decir, se recuerda un pasado-presente reciente. En algunos momentos, incluso, se podría afirmar que hay un abuso de estas memorias por parte de algunos habitantes.

La colisión ocurre porque, para las entidades gubernamentales, esta memoria está “cerrada” e intentan imponer ese cierre como la verdad oficial del proceso. Las autoridades asocian el cierre a la finalización administrativa de la entrega de recursos financieros y beneficios estatales para los habitantes del Cerro Merced, que coronaron con la publicación de un libro de la memoria de la reconstrucción de Valparaíso.

En resumen, se puede decir que el proceso descrito en esta investigación tiene que ver con un conflicto entre memorias vivas y “cerradas”.

Es imperativo implementar una política pública que atienda las características particulares de un evento tan único como son los desastres siconaturales, que distorsionan la vida cotidiana de una comunidad y, en muchos casos, se transforman en un trauma difícil de superar.

La visión viviendista de las políticas que se formulan especialmente para esos momentos deja un punto ciego abismal: la reconstrucción de la subjetividad de los y las habitantes como sujetos individuales y de la comunidad que conforman.

En el caso del Cerro Merced, fue tan grande el ímpetu de reconstruir viviendas y remodelar espacios públicos, que se dejó al margen a los y las habitantes, lo que generó una doble vulneración, primero por el incendio y posteriormente por su invisibilización en el proceso de reconstrucción, lo que les hizo más difícil y tormentoso el regreso a la vida cotidiana.

A la luz de este conflicto, no resulta extraña la falta de sincronía entre el sentir de los y las habitantes y el de las entidades gubernamentales, asincronía que no será posible borrar de sus memorias. Se recomienda generar políticas estables, con recursos asignados para este tipo de siniestros, pues Chile es un país en el que continuamente ocurren desastres siconaturales. No es aconsejable crear soluciones solo en el momento en que ocurren los desastres.

Además, se sugiere no emplear soluciones estándar o que fueron diseñadas para otro evento, pues cada desastre y

territorio tienen sus características particulares, y cuando estas no se consideran, no se respeta la identidad de quienes habitan los territorios afectados por desastres, quienes perciben que la única preocupación de la autoridad son los niveles de eficiencia y calidad de la vivienda y no los sujetos.

Aparejado a lo anterior, se propone incluir en las políticas públicas una línea de acción enfocada en la reconstrucción de las percepciones, representaciones, valoraciones, elementos simbólicos y racionalidades de los y las habitantes siniestrados. Se trata de una arista que no suele abordarse en los procesos de reconstrucción a pesar de que los documentos oficiales de las entidades gubernamentales declaran contar con una línea de acción social. Sin embargo, esta se enfoca mayoritariamente en la recuperación de los espacios públicos vinculados a lo comunitario y deja en un segundo plano lo individual, compuesto por elementos simbólicos y memorias, esenciales para la reconstrucción de los y las habitantes.

Informes estatales

- **Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2018)**. "Desde las cenizas: memoria de la Reconstrucción en Valparaíso", realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Valparaíso, Chile.
- **Ministerio de Vivienda y Urbanismo & Programa Quiero mi Barrio (2017)**. "Cuatro cerros unidos en una historia", realizado por el equipo de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Valparaíso, Chile.
- **Servicio de Vivienda y Urbanismo (2018)**. Informe técnico "Estado Proceso de Reconstrucción Región de Valparaíso", realizado por el Departamento Técnico del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Valparaíso, Chile.

Artículos periodísticos

- **Cooperativa (2014)**. "Valparaíso vive el peor incendio de su historia". [Fotografía] Recuperado de <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/desastres-naturales/incendios-forestales/valparaiso-vive-el-peor-incendio-de-su-historia/2014-04-15/075755.html>



**PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LICEOS TÉCNICOS
PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO:
ORGANIZACIÓN, TENSIONES Y CAPACIDAD DE AGENCIA
COMO FÓRMULA PARA EL TRABAJO COLABORATIVO AL
INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA**

Javiera Órdenes, Camilo Paz, Víctor Campos, Vicente Ramírez, Paz Letelier¹,
Universidad de Valparaíso

RESUMEN

La escasa participación de la población en los recientes procesos electorarios, el desencanto con la política institucional y las diferentes formas de manifestación en Chile nos invitan a cuestionar la relación que existe entre los procesos democráticos y las comunidades educativas, y a repensar la organización y las formas de participación social que estas desarrollan. Para esto, nos basamos en los resultados obtenidos en una investigación previa que buscó conocer las nociones y prácticas de participación social que construyen los/as integrantes de la comunidad educativa. Este artículo presenta los elementos que influyen en los diversos procesos de participación social que se desarrollan en la comunidad y la manera en que los procesos autónomos de actores clave impactan sobre estos procesos, en los que se convierten en agentes de cambio de los espacios participativos que proveen los establecimientos educacionales.

Palabras clave: participación social, comunidad educativa, agentes de cambio, espacios participativos.

¹ Psicólogas y psicólogos. Artículo basado en la tesis titulada “Participación social en dos liceos técnicos-profesionales de la comuna de Valparaíso”, realizada para optar al título profesional de psicólogas y psicólogos de la Universidad de Valparaíso.

INTRODUCCIÓN

La participación social (en adelante, PS) que se desarrolla al interior de cada establecimiento educacional es un aspecto fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los/as estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. La escuela es un lugar de socialización secundaria que provee un conjunto de espacios y prácticas de PS formales institucionalizadas y no formales, las que propician el desarrollo de conocimientos, habilidades y herramientas significativas útiles para la vida en sociedad, por lo que la PS incide de manera trascendental en la manera en que la sociedad desarrolla sus procesos educativos y genera relaciones. Este artículo se basa en los resultados obtenidos en una investigación realizada para el seminario de título de la carrera de Psicología de la Universidad de Valparaíso, que tuvo por objetivo caracterizar los significados de la participación social que mantienen los/as integrantes de la comunidad educativa de dos liceos públicos de la ciudad de Valparaíso. En este artículo presentamos parte de los resultados con el objetivo de identificar la interacción entre las tensiones, obstaculizadores y facilitadores de las prácticas y espacios de participación social. La relación de estos elementos nos permitiría aproximarnos a la comprensión de la agencia que mantienen algunos integrantes de la comunidad educativa, que contrasta con el escaso involucramiento general de las personas en procesos participativos.

Dar cuenta de la importancia que tendría la PS como un fenómeno relevante para la vida en sociedades pareciera ser una perogrullada, ya que es evidente la relevancia de la organización de las personas en torno a metas comunes y favorables para el conjunto de las comunidades. Sorteada esa primera aclaración, la pregunta que guía este artículo es: ¿cuáles son los elementos que interactúan y median la participación social en las comunidades?

Para esclarecer el uso de la PS como elemento central de nuestra investigación es necesario hacer una distinción entre los conceptos de participación social y ciudadanía, dado que el segundo se encuentra sujeto a una concepción jurídica que otorga a su portador una calidad que le habilita para ejercer derechos y deberes amparados en la constitucionalidad vigente de un país. Así, la condición de ciudadano/a otorga el derecho a sufragar en las elecciones de cargos de representación y a presentar su candidatura a uno de estos cargos. En este sentido, la ciudadanía habilitaría a una persona con una condición (ser ciudadano/a) que la faculta para ejercer y exigir derechos (Iturrieta, 2008). Sin embargo, limitar la participación a la ciudadanía parece riesgoso, pues ello implica no considerar a las personas que no pueden interactuar en espacios de participación y prácticas participativas institucionalizadas por no cumplir con los requisitos impuestos por el marco legal. Este es el caso de los/as estudiantes menores de edad que parti-

ciparon de esta investigación. Los resultados de la octava Encuesta Nacional de Juventud 2015 realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) evidencian que las democracias contemporáneas se han visto enfrentadas a profundas transformaciones relacionadas, principalmente, con la desconfianza de los individuos hacia el sistema político. Lo anterior no solo constituye un problema central para la legitimidad de los regímenes democráticos, sino que también repercute en las formas tradicionales de participación sociopolítica (Injuv, 2018, p. 1).

El Injuv (2017) plantea que la relación entre la juventud y el sistema político está marcada por el escaso interés y participación de este grupo etario en la política tradicional. No obstante, la vinculación en procesos sociopolíticos adquiere un matiz diferente para los jóvenes cuando esta les permite influir de manera directa y activa a través de un tipo de participación no convencional, mediante espacios y prácticas relacionadas más con la participación social que con acciones vinculadas con el ejercicio de la ciudadanía.

Respecto a los resultados de esta investigación, con el fin de resguardar la identidad de los establecimientos educacionales que participaron, estos se designan como Liceo I y Liceo II, los que son caracterizados de acuerdo con la información correspondiente al año 2017. Ambas instituciones corresponden a liceos técnicos/públicos de la ciudad de Valparaíso.

El Liceo I es un establecimiento educacional de enseñanza media técnico-profesional dependiente de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval). Según datos de la plataforma Más Información, Mejor Educación del Ministerio de Educación (Mime, S/F), este cuenta con 1.006 estudiantes. Sus funciones comenzaron en 1988 y desde el año 1991 se emplaza en el sector de Playa Ancha. En su Proyecto Educativo Institucional (PEI) declara que su misión está ligada a que los/as estudiantes sean agentes activos en los cambios que requiera la sociedad. El colegio reconoce y valora la educación como un derecho social garantizado y potencia un proceso educativo inclusivo e igualitario que acepte la diversidad de las personas y propicie su desarrollo integral. Por su parte, el Liceo II cuenta con una población total de 1.131 alumnos (Mime, S/F). Este establecimiento se propone como objetivo “formar personas a partir de una dimensión espiritual, ética, social y profesional con competencias necesarias que les permitan integrarse a una sociedad de cambios vertiginosos, en un proceso de formación continua” (Proyecto Educativo Institucional, Liceo II, 2017, p. 7).

Nuestra investigación se centra en las comunidades educativas pues entendemos que la escuela es una de las instancias efectivas que permite la inclusión de las personas en la sociedad, ya que abarca de manera permanente a las comunidades que la rodean, que la reconocen como la entidad por excelencia para desarrollar, sistematizar y promover procesos (Galván, 2008, en Observatorio Ciudadano de la Educación, 2008).

Los resultados de este estudio podrían aportar no solo como un marco de referencia para la elaboración de políticas públicas y educacionales que fomenten la participación social dentro de contextos educativos y fuera de ellos, sino que además tienen el potencial de entregar herramientas que permitan comprender mejor las prácticas y consensos en las comunidades educativas. Consideramos además que este puede incentivar que los/as integrantes de la comunidad tengan un rol activo en el ejercicio de la educación y organización de sus intereses, por lo que se convertiría en un aporte que conduciría a una mayor apertura de los espacios que potencian la concientización del posicionamiento social de estas comunidades, y serviría como insumo para futuras prácticas orientadas hacia la participación social, instancias democráticas y de transformación social.

Los temas que desarrolla este artículo tienen que ver con las comunidades educativas, a las que se entiende como espacios de participación donde entran en juego el valor y las experiencias personales de sus integrantes. Aquí se analiza la relación entre esa dinámica y la transformación social.

MARCO TEÓRICO

Participación social y comunidad educativa

Sanabria (2001) y Perales y Escobedo (2016) plantean que el término *participación social* se ha acuñado a través del

tiempo y se ha utilizado indistintamente debido a la polisemia de la expresión y al significado que adopta según el contexto en que se usa, lo que deja abierta su interpretación a las personas. En consecuencia, la comprensión que tienen los miembros de las comunidades educativas podría configurar diversos espacios y prácticas asociadas a este concepto en cada comunidad. En un sentido amplio, Ferrero y Hoehn (2014) señalan que la PS implica la disposición a organizarse con otras personas, tanto a nivel comunitario como en niveles sociales más amplios, con el fin de establecer o negociar metas compartidas, proponer iniciativas, realizar tareas y lograr incidir en las decisiones para alcanzar beneficios colectivos.

Zurita (2008) habla de la necesidad de generar una discusión a propósito del contenido del término PS dentro del contexto educacional. Siguiendo esa línea, coincidimos con Andrade et al. (2008), quienes proponen que

“una política efectiva de participación social en educación tendría entre sus fines poner en movimiento la práctica reflexiva, el respeto a las diferencias existentes entre los/as participantes, el acceso a la toma de decisiones, la vigilancia en el manejo de los recursos, la transparencia de las acciones, la rendición de cuentas, la intervención en los diferentes momentos del ciclo de las políticas públicas, etcétera”
(Andrade et al., 2008, p. 2).

Esta investigación aborda las comunidades educativas, las que según Montero (2004) son un grupo social, dinámico, histórico y cultural que se mantiene en movimiento y en constante proceso de

construcción. A pesar de que la comunidad se modifica constantemente, esta se puede definir como una identidad social en la que confluyen sentidos, significados y el rol que los/as diferentes integrantes de la comunidad cumplen. En una comunidad, la acción individual no se pierde, sino que desde ahí se constituye, por lo que se puede plantear que los espacios participativos se construyen desde la participación de los/as individuos/as, “por lo tanto, cuando se habla de comunidad, no se refiere a grupos homogéneos, sino que a grupos compuestos por individuos que comparten conocimientos, sentimientos, necesidades, deseos, proyectos, cuya atención beneficiará al colectivo, beneficiando así a sus miembros” (Montero, 2004, p. 97).

El Observatorio Ciudadano de la Educación (2008) considera que la participación social dentro del contexto educativo no se improvisa y que es imposible que se genere desde la burocracia o academias. En este sentido, Perales y Escobedo (2016) explican que es necesario reconocer que la escuela, como espacio público abierto a la participación, debe reconsiderarse como una instancia que promueve la participación social en su cotidianidad, en sus posiciones y en las disposiciones de los/as miembros de la comunidad.

Educación como práctica de la libertad

Los métodos educativos y la organización de las comunidades educativas influyen directamente en la participación social de los miembros de su propia comunidad. El objetivo de la educación es darles forma a las prácticas existentes.

Sin embargo, a la par de la reproducción de la cultura existente se generan procesos que buscan su transformación. Dicho de otra manera, a la educación que reproduce la cultura hegemónica se contraponen la pedagogía crítica, la cual se opone a procesos de disciplina y control social, así como a la resistencia al cambio de los/as actores del proceso educativo. McLaren (1994) plantea que la pedagogía crítica sitúa lo personal dentro de lo social y a su vez inserto en un contexto histórico, lo que posibilita comprender la producción de las subjetividades. Esto le permite moverse dentro de los enfoques dominantes dentro de la actividad escolar, en los que predomina “una hegemonía relativamente indiscutida” (McLaren, 1994). A su vez, Giroux (2013) señala que la práctica de esta forma de resistencia no radica solo en el método, sino también en la comprensión de la interacción del aula y los otros contextos educativos a través de preguntas como “¿cuál es la relación existente entre la educación y el cambio social?” (Giroux, 2013).

Esta perspectiva destaca la importancia de democratizar los espacios educativos para que los sujetos que los habitan reconozcan su dignidad humana y su papel activo en la construcción de su historia, de modo que cualquier análisis de esta realidad no puede quedar solo en el contexto escolar, sino que debe centrarse en el contexto social y la búsqueda de la eliminación de aquellas injusticias sociales que no permiten la autonomía y la libertad de las personas y comunidades (Moreno, Gamboa y Poblete, 2014).

A lo largo de los años, hemos visto en la educación chilena lo que plantean Oraison y Pérez (2006), quienes señalan que se ha mantenido una concepción conservadora del rol de la escuela, pues se la considera como un espacio de reproducción que tiende a normalizar la adaptación a un modelo hegemónico de democracia representativa que se sostiene en una economía de mercado. A esto se refiere la educación bancaria (Freire, 1970), definida como un sistema de reproducción que impone respuestas estereotipadas y clausura la oportunidad de acceder a desafíos diferentes a los quehaceres establecidos, lo que evita el despertar de la curiosidad y enmarca de forma normativa el aprendizaje en el aula.

Freire (1970) plantea que la educación debe problematizar, no depositar, transferir o transmitir conocimientos y valores, que es lo que define a la educación bancaria. La problematización implica un permanente descubrimiento de la realidad a través de una reflexión que desafía a actuar en el mundo mediante prácticas de acción, reflexión y diálogo. Para esto se necesita una educación que sobrepase los límites estrictamente pedagógicos y que desarrolle diferentes habilidades democráticas que potencien la toma de decisiones comunitarias y la responsabilidad social.

Concientización y participación social

La participación social se encuentra ligada a la capacidad de los integrantes de una comunidad de comprender y trabajar para lograr objetivos o cubrir necesidades, por lo que necesitan ser conscientes tanto de la realidad social

como de las relaciones que se establecen al interior de las comunidades en las que participan. Para abordar esta dimensión recurrimos a Freire (1974, citado en Villalobos, 2000), quien plantea que es en el nivel de la praxis donde ocurre la concientización, es decir, en la inserción crítica en la historia. Respecto a la definición de concientización, adscribimos a lo que propone Sanders (1968, citado en Freire, 1969), quien la relaciona con un “despertar de la conciencia”, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de cada uno en la naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y transformadora. Además, este proceso integra la capacidad de desarrollar un diálogo interpersonal que contrasta la propia realidad con la de otros seres humanos, lo que genera encuentros e instancias de participación.

En este sentido, Puig (2000) advierte que el diálogo de los/as participantes toma formas distintas y no excluye a ningún miembro de la comunidad, pues su participación a través del diálogo aumenta la comprensión mutua, la elaboración de formas de convivencia y el compromiso para realizar sus acuerdos.

La adquisición de esta conciencia hace que las personas conozcan la realidad y se transformen en sujetos activos de transformación y cambio, capaces de crear empoderamiento dentro de las comunidades gracias a una profunda consciencia de la realidad sociocultural que moldea sus vidas, la que les brinda la capacidad de comprender la magni-

tud de su potencial para transformar la realidad y a sí mismas como parte de esa realidad (Villalobos, 2000).

Transformación social

El diálogo entre pares y la participación que surge como resultado de esa interacción permiten reconocer que “la escuela no es únicamente un ente de reproducción social, sino también una posibilidad de cambio real de la sociedad” (Ayuste, 1994, p. 14).

Para Montero (2004; 2010), la participación social tiene un alcance más amplio que la vinculación de los/as individuos/as en espacios de comunidad, pues se trata de un proceso que conduce a una transformación social que se verifica en la vida diaria y que transforma la concepción del ser humano, que se convierte así en actor y constructor de su propia realidad. Para aclarar el concepto de transformación social es necesario hacer esta precisión:

“No se trata de cambios señalados desde afuera a la comunidad [...] debe ser conocida, discutida, reflexionada y aceptada por la comunidad. El trazado de las líneas de transformación se hace desde la propia comunidad y, sobre todo, desde las aspiraciones, los deseos y las necesidades de la comunidad”

(Montero, 2004, p. 36).

Montero (2010) considera que la transformación de una comunidad se logra a través de la participación y el compromiso de grupos organizados y personas interesadas en ella. En este sentido, es desde una necesidad sentida que sur-

ge el potencial de cambio, por lo que promover y lograr participación comprometida es un objetivo inmediato dentro de la finalidad más amplia de la transformación social (Hernández, 1996; Montero, 1996, citados en Montero, 2010). En esa línea, participar supone una multiplicidad de acciones que se reflejan tanto en las relaciones y el espacio privado como en el espacio colectivo de la comunidad y en el espacio colectivo-público de la sociedad donde ella se encuentra (Montero, 2010).

Una vez desarrolladas las ideas en torno a la participación social en el contexto educativo como vehículo para la transformación social, entendemos que la enseñanza que busca la transformación social pretende, en primera instancia, desarrollar la capacidad de modificar el terreno donde se vive la experiencia y generar procesos de concientización que problematicen las relaciones imperantes. Palomar y García (2010) plantean que diferentes actividades que se llevan a cabo en las comunidades de aprendizaje persiguen la transformación en múltiples niveles: el del contexto de aprendizaje, el del conocimiento, el de las expectativas, el de las relaciones entre familia y escuela, el de las relaciones sociales en las aulas, en el centro educativo y en la comunidad, por lo que la educación se encuentra estrechamente relacionada con la transformación social.

MÉTODO

Tipo de investigación

Este trabajo es un estudio cualitativo de tipo fenomenológico. Mejía (2004) señala que la investigación cualitativa hace un énfasis importante en el ser humano, al que posiciona como el objeto central de análisis, por lo que interesa el contexto social en el cual el/la sujeto participa y el mundo de significaciones donde interviene. Según Moustakas (1994), un estudio cualitativo “entrega la alternativa de conocer diferentes características que constituyan la participación social y su práctica desde el relato de los/las participantes de la comunidad educativa” (Moustakas, 1994, p. 21).

Esta investigación emerge del paradigma del constructivismo social. Según Creswell (2007), los significados subjetivos se negocian social e históricamente. Así, entendemos que el significado ligado a los discursos está en constante cambio y sujeto a los contextos de los/as individuos, los/as investigadores/as y la relación entre ellos/as.

Este es un estudio de tipo fenomenológico que se caracteriza, como menciona Gurdian (2007), por tratar con significados, comprender el mundo desde las experiencias de cada uno de los participantes y tener como punto de partida las vivencias concretas de las personas.

Según Creswell (2007), el estudio fenomenológico describe el significado de la experiencia de los/as individuos en relación con un fenómeno particular por medio de la descripción del significado

de sus experiencias en torno a un concepto o fenómeno. Un elemento relevante de la perspectiva fenomenológica es la riqueza de los datos obtenidos y el carácter interactivo de los análisis que con estos se realizan. En este sentido, Creswell (2007) plantea que el método fenomenológico incorpora la intersubjetividad y la intuición a la comprensión de los fenómenos.

Una de las características de este diseño es su carácter emergente, descrito por Márquez (2007). En segundo lugar, pretende ser contextualizado, ideográfico e histórico. También es holístico y busca la comprensión de la situación socioeducativa a través de sus acontecimientos, acciones sociales, significados y sentidos. La reivindicación del actor social potencia estos elementos y resalta el protagonismo de las voces.

Participantes y recolección de datos

Para esta investigación consideramos a los y las participantes de la comunidad educativa según lo definido por el artículo N°10 de la Ley General de Educación (LGE): “La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales” (Ley 20.370, 2009, p. 4). En este caso, nos enfocamos en cinco de los seis establecimientos mencionados y dejamos fuera a los sostenedores, porque al tratarse de establecimientos de carácter público, el sostenedor es la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval). Esto ocasiona

que el trato con la comunidad educativa no sea directo, sino enfocado en solo unos pocos integrantes, lo que se suma a que quienes integran la Cormuval y quienes pertenecen a la comunidad educativa no comparten actividades cotidianas en un espacio. Además, hubo un cambio de administración en la municipalidad, lo que dificultó el contacto con la institución.

Se utilizaron dos métodos de entrevista como técnica de recolección de datos, la entrevista de tipo individual y la entrevista grupal, a modo de complemento. Para la recolección individual de datos, en cada uno de los establecimientos se seleccionó a 10 participantes y de entre ellos se eligió a dos por estamento. La selección de estos/as participantes se realizó junto a un miembro del equipo directivo de cada establecimiento de acuerdo a los criterios de selección. Cabe mencionar que a cada participante se le asignó un pseudónimo ajustado a su género con el fin de resguardar su identidad.

Las entrevistas individuales se realizaron en dos rondas por cada establecimiento hasta completar un total de 20. La primera tuvo en cuenta criterios de inclusión y elegibilidad. Los criterios de selección fueron ser miembro de la comunidad educativa de un liceo técnico profesional de enseñanza media de carácter público, haber estado en él al menos un semestre y tener un cargo de representación dentro del estamento (centro de estudiantes, centro de padres, etc.). La segunda ronda consideró a los mismos estamentos, pero esta vez el cargo de representación no fue requisito para la selección.

La segunda instancia de recolección de datos fue la entrevista grupal. Esta se realizó en ambos liceos y solo abarcó al estamento de estudiantes, compuesto por jóvenes que pertenecían a distintos cursos y no fueron entrevistados/as en la instancia anterior. La elección de estos estudiantes se realizó utilizando el método de bola de nieve, que se activó en la fase de la entrevista individual.

Las entrevistas grupales consideraron a nueve estudiantes del Liceo I y a siete estudiantes del Liceo II, es decir, se llegó a un total de 16 estudiantes en esta instancia. Además, se realizó un análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para conocer y comprender mejor las comunidades educativas con las que se trabajó, lo que aportó información relevante para la investigación, posterior análisis y triangulación.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó el método planteado por Creswell (2007):

- a) Se describieron las experiencias personales de los/as investigadores/as con el fenómeno que se investiga para dejar de lado sus propias experiencias y enfocarse en los/as participantes.
- b) Después de transcribir las entrevistas, se realizó un listado de declaraciones significativas de cómo los/a individuos experimentan el fenómeno.
- c) Se tomaron estas declaraciones y se agruparon en unidades de significado o temas.

d) Se describió lo experimentado por los/las participantes, proceso que se conoce como descripción textual.

e) Se realizó una descripción estructural, que consiste en graficar “cómo” sucedió la experiencia.

f) Se unió la descripción textual y la descripción estructural, lo que permite esclarecer la “esencia” de la experiencia.

Triangulación

Esta investigación realizó dos procesos en este ámbito (Okuda y Gómez, 2005), la triangulación de datos y la triangulación de investigadores. El primero consiste en la verificación y comparación de la información obtenida mediante las distintas técnicas de recolección y distintos momentos de la investigación. El segundo implica la observación y análisis del fenómeno por parte de los/as distintos/as investigadores de manera separada, para reducir los sesgos que puedan aparecer en la recolección y análisis de los datos.

RESULTADOS

Las categorizaciones que emergen en esta investigación se centran en dos grandes temas, la comunidad educativa y la participación social. Estas se graficarán a través de esquemas al inicio de la presentación de las categorías y subcategorías emergentes de nuestra investigación.

Para facilitar la lectura de los resultados a través de los fragmentos de las entre-

vistas grupales e individuales se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

- Las instituciones serán denominadas I y II.
- Los estamentos se identificarán con su denominación.
- Las entrevistas serán distinguidas por su abreviación:
 - Ind - Entrevista individual
 - Grup - Entrevista grupal

Por ejemplo:

Esta cita corresponde a una entrevista individual realizada a un participante del equipo directivo del Liceo I.

Una comunidad educativa es un espacio integral y de convivencia de los distintos actores de una..., en este caso, de una localidad, de una comunidad, donde estamos los... están los alumnos, están los apoderados, donde están los profesores, donde están los auxiliares, que comparten en un mismo lugar (ind., directo, I).

Comunidad educativa

La Figura 1 presenta la categorización elaborada a través del análisis de la información obtenida mediante las entrevistas realizadas, donde emergen diversas categorías que se explican a continuación. Entenderemos por *noción de comunidad educativa* a las ideas que tienen los/as miembros de los distintos estamentos sobre lo que es una comunidad educativa; por *funcionamiento de la comunidad educativa* se comprenderá la descripción de las experiencias y prácticas que se presentan regularmente en

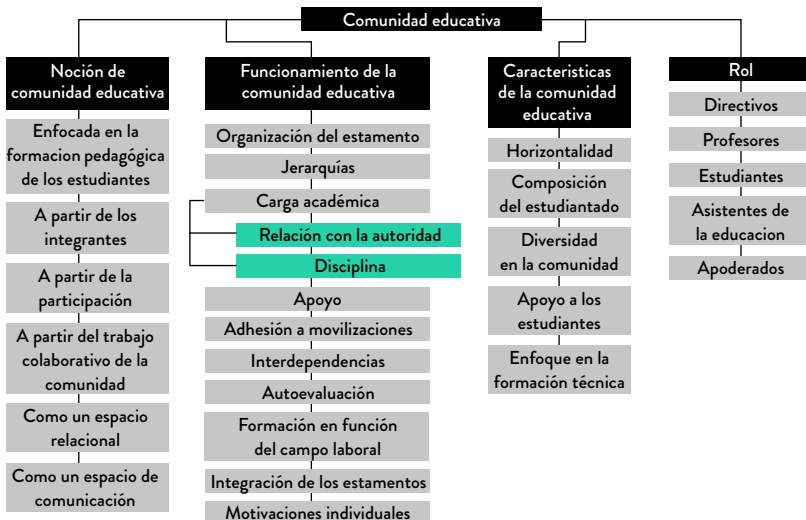
el establecimiento al que pertenecen; y las *características de la comunidad educativa* aluden a las descripciones respecto a la manera en que se toman las decisiones, la composición del estudiantado y la forma en que se desarrollan los procesos educativos en la comunidad. Por último, se comprenderá como *rol* las funciones que cumple cada uno de los/as integrantes de la comunidad educativa dependiendo del estamento al que pertenecen.

Se observa que tanto las nociones de comunidad educativa como las de participación social son heterogéneas y se advierte una dependencia del estamento al que pertenecen los/as entrevistados, posiblemente asociada al lugar en que se sitúan dentro de un espacio físico determinado y con ciertas prácticas puntuales asignadas al rol que cumplen. Destaca que el carácter situado y el rol que se lleva a cabo determinan las

experiencias relacionadas con la integración y colaboración con otros/as, así como sus prácticas de participación, las que tienen lugar en los distintos espacios que propician los establecimientos educativos.

En lo referido a las categorías que emergen de las características de la comunidad educativa, se visualiza que están ligadas a lo que sucede en los contextos que rodean al individuo que analiza la experiencia educativa, lo que reafirma la importancia que tiene el carácter situado de la experiencia educativa. Uno de los resultados emergentes de esta investigación señala que el funcionamiento, las prácticas y espacios de participación se plantean por la comunidad educativa desde una idealización de su funcionamiento, la que no siempre coincide con la experiencia situada de los individuos en la comunidad.

Figura 1. Esquema de categorización de las temáticas de comunidad educativa



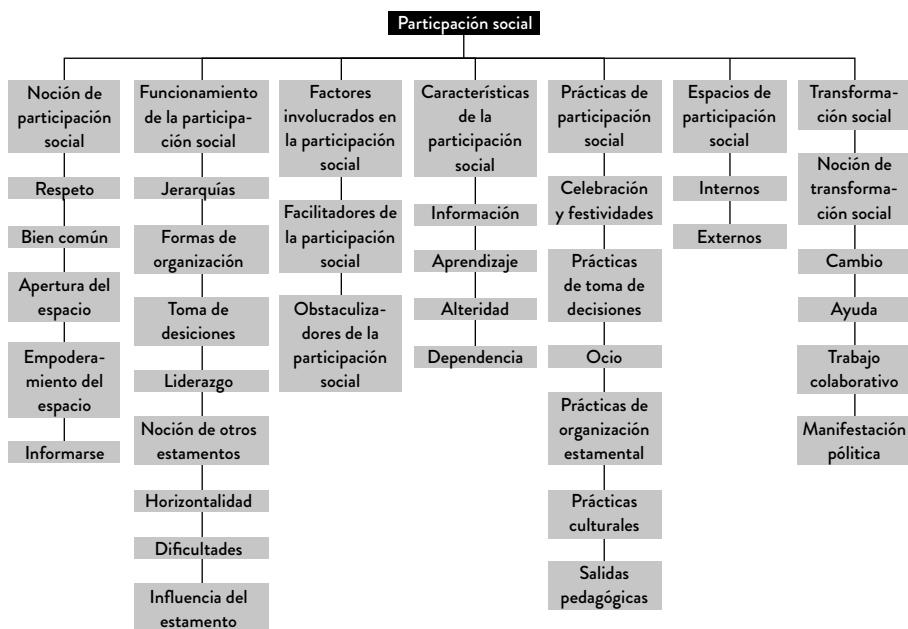
Fuente: elaboración propia.

Participación social

Las nociones de participación social que emergen desde la investigación se comprenden como ideas generales que tienen los/as miembros de los distintos estamentos sobre lo que entienden por participación social. El funcionamiento de la participación social se entiende como las descripciones que hacen los/as distintos/as miembros de la comunidad educativa de las formas en que se desarrollan las prácticas y acciones que tienen lugar en el establecimiento. Existen distintas maneras de determinar los factores involucrados en la participación social, pero el consenso es que hay facilitadores (condiciones, situaciones o relaciones que facilitan el desarrollo de

la participación social al interior del liceo) y obstaculizadores (elementos que dificultan el desarrollo de las prácticas de participación social al interior del liceo). Además, se identifican los diversos atributos que debe presentar la participación social, es decir, las características y prácticas asociadas a la participación social de los miembros de la comunidad educativa. A la vez, se identifican espacios que funcionan como instancias de encuentro y participación social de los/as integrantes del establecimiento con la comunidad. Por último, aparece el concepto de transformación social, que alude a las ideas generales del concepto que tienen los/as miembros de la comunidad educativa.

Figura 2. Esquema de categorización de las temáticas de participación social



Fuente: elaboración propia.

Para caracterizar los significados de la participación social de los diferentes integrantes de la comunidad educativa, se partió de la premisa de que estos/as configuran sus nociones y comprensión de la comunidad desde sus visiones del funcionamiento de la institución educativa, su organización y desde los distintos roles que los/las miembros cumplen. Así, se evidencia que el funcionamiento de los espacios de participación que emergen en la comunidad educativa está mediado por el tipo de relaciones que se desarrollan entre los integrantes de cada estamento y sus respectivas formas de organización. Estas relaciones se consolidan a partir de aspectos como jerarquías, interdependencia y colaboración entre estamentos, ámbitos que tendrían efecto en las propuestas y los tiempos destinados al ejercicio de prácticas de participación social. Es posible decir que la comunidad educativa es sensible a las decisiones y acciones que surgen del Proyecto Educativo Institucional, de la cultura escolar y las exigencias de las políticas educativas.

Las relaciones de jerarquía y poder que se establecen en el entramado de la comunidad educativa podrían tensionar la interrelación entre sus miembros. Sin embargo, estas tensiones responden también a fenómenos externos, ya que las posiciones jerárquicas responden a exigencias de las políticas educativas y plazos gubernamentales.

“Es que por eso te digo, nosotros somos una generación diferente a la generación de la directora, por ejemplo. Entonces ellos son súper normalistas en general, no todos, y nosotros venimos con otro concepto, de que ya la autoridad es diferente, que hay que ganarse el respeto de otra manera y eso es... como que nos miran mal por ese hecho, pero nosotros lo asumimos, que las cosas cambian porque al final no puede ser igual siempre y no compartimos con ese tipo de valores”

(ind., profesora, I).

El funcionamiento de la comunidad educativa difiere en torno a los límites y grados de libertad que permite la organización institucional de los establecimientos y se observa un comportamiento dinámico que varía entre un funcionamiento jerárquico o rígido en determinados periodos del año escolar y un funcionamiento horizontal de mayor libertad en otros momentos, que permite a sus integrantes proponer y organizar acciones y espacios que tiendan a la participación social.

La comunidad educativa, a través de sus estamentos y de quienes toman las decisiones, es responsable de facilitar y establecer cómo estos espacios son utilizados. Se observa que el acceso a la información es una característica que determina el desarrollo de prácticas de participación social, ya que permite que los integrantes de los distintos estamentos informen a sus compañeros y fundamenten sus decisiones. Esta investigación identifica la información y los canales por los que esta fluye como necesarios para el desarrollo de la par-

ticipación social, pues para participar es indispensable estar informado, saber qué es lo que se hace y por qué se hace. Es importante señalar que la información entregada en las comunidades no necesariamente lleva a la participación social, ya que pueden existir diferentes obstaculizadores en los canales de información, institucionales y personales.

“Decisiones que involucren a todos los miembros de la comunidad educativa, ¿por qué se le invita a los apoderados?, ¿por qué se les invita a los alumnos? Porque, si hay un beneficio que llega al establecimiento, ya sea económico o material o simplemente para llegar a poder organizar esto, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces siempre se le pide la opinión o se le dice al centro de apoderados y centro estudiantes que este le manifieste a toda la comunidad, a sus compañeros, a sus pares, y los apoderados a los apoderados”

(ind., estudiante, II).

Existen circunstancias en las que la facilitación o exposición a la información se identifica como un símil a la participación social. Esto grafica que hay ocasiones en que las formas que adquiere el fenómeno del acceso a la información se asocian a expresiones de participación enfocadas en informar sobre la toma de decisiones o resoluciones. Además, esto valida la información compartida y los canales de información asociados a actores reconocidos por más de un estamento.

La participación social se relaciona directamente con la flexibilidad existente en las comunidades educativas y el li-

derazgo de quienes mantienen a cargo las actividades educativas. La confianza con los miembros de los estamentos no directivos y el uso libre de los espacios y tiempo del que disponen también generan prácticas y espacios de PS, como se manifiesta en las entrevistas.

“Desde mi punto de vista, la flexibilidad te permite participación [...] el dejar ser, pero sin quitar la capacidad de observación, digamos, que tú hagas lo que tienes que hacer. Si yo te asigno un rol y te dejo desempeñarlo, aunque te esté monitoreando, pero no directamente, y dejándote hacer y que puedas incluso tomar ciertas innovaciones dentro de lo que podría estar establecido, que resulte, y que resulte provechoso para tu trabajo”

(ind., asistente de la educación, II).

“Los que favorecen la participación, yo creo que lo que favorece es que los profesores tenemos cierta libertad dentro de la sala de profes para poder entregar este tipo de mensajes. Entonces, aunque tú no puedas organizarte, los niños sí saben que pueden hacerlo, entonces yo creo que eso, dentro de la sala de clases hay cierta libertad, yo creo que eso favorece una participación en el colegio, pero más que eso, no mucho”

(ind., profesor, I).

“El tiempo es lo único que puede favorecer la participación”

(ind. profesor, II)

“Creo que los conceptos de autoridad o de liderazgo que está tan de moda... estos liderazgos han ido cambiando. Creo que el liderazgo tiene que ser más compartido, tienen que tener

liderazgos medios, fuera de esa estructura piramidal que uno conoce en los colegios: directora, inspectorías generales, qué más sigue... inspector general, UTP, profesores, alumnos. Creo que ya eso está, está cambiando a pasos grandes, existen liderazgos intermedios, nosotros trabajamos con jefes de departamentos que tienen participación activa también en esto, es decir, hay varios liderazgos intermedios que permiten un poco esto de empoderar, porque te entrega identidad”
(ind., inspector general, I).

Considerando la diversidad de estamentos y espacios, las comunidades educativas articulan sus prácticas de participación social principalmente dentro de los espacios establecidos en las instituciones educativas, entre los que se cuentan las clases regulares, reuniones, consejos y actividades extra-programáticas, las que actúan como una base para el funcionamiento de la participación dentro de la comunidad.

Los espacios asignados a la participación social fueron divididos en dos momentos, dentro y fuera de la comunidad educativa. Los últimos corresponden a instancias de participación realizadas de manera externa a la comunidad y adicionales a las propuestas regularmente. Sin embargo, los espacios de participación social que se desarrollan fuera de la comunidad educativa tienen estrecha vinculación con las características que se manifiestan al interior de ella, ya sea porque las iniciativas nacen desde el mismo grupo humano, que propone actividades como obras de teatro o salidas pedagógicas, o porque

tienen que ver con instancias de participación que se realizan en los establecimientos, como las asociadas a los sindicatos o campeonatos deportivos. La distribución del poder, autonomía y organización existente dentro de los espacios educativos influyen sobre el funcionamiento y desarrollo de la participación e interfieren en la manera en que se ejecutan los procesos de participación. Esto queda de manifiesto en las instancias en que se toman decisiones, donde la influencia que ejercen los distintos estamentos está sujeta al rol que cumplen dentro de la comunidad y la forma en que son reconocidos y validados por los otros estamentos. En consecuencia, las determinaciones que se toman están sujetas a la estructura organizativa del espacio, que implica la existencia de momentos de participación vinculantes o no resolutivos. El siguiente extracto habla de un espacio de participación vinculante a pesar de que mantiene la jerarquía en la toma de decisiones por tratarse de una instancia de origen superior.

Entrevistador (E): *“ya, pero en ese sentido, todo lo que son las decisiones vendrían a ser más desde el lado de la opinión, desde asesorar lo que es el trabajo pedagógico”.*

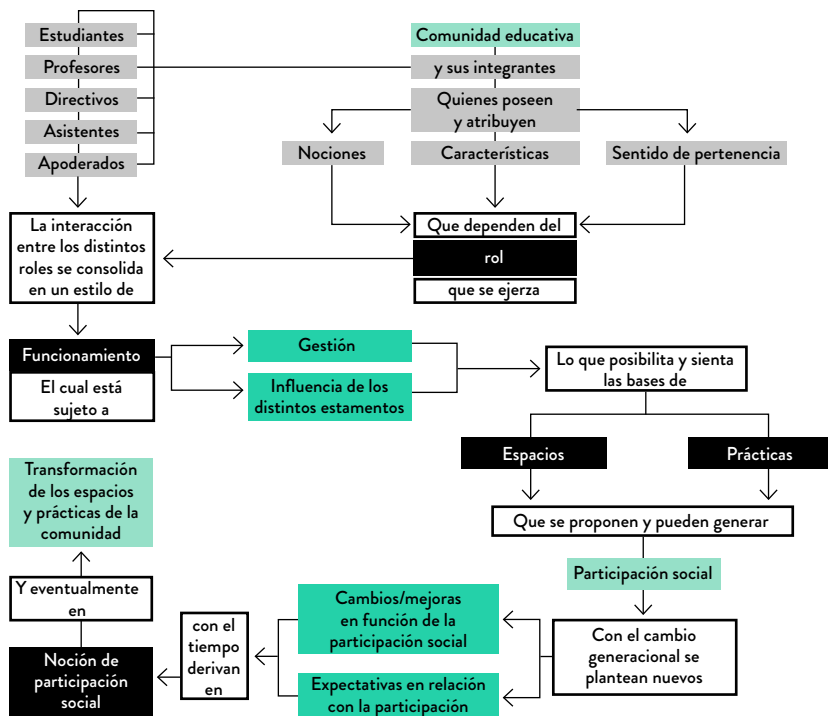
J: *“correcto, correcto. Bueno, que, en sí, no se pierde el sentido verticalista que tiene la administración del establecimiento”.*

E: *“como la jerarquía”.*

J: *“exacto. De hecho, hoy en día es re difícil encontrar donde... la jerarquía se elimine, digamos”.*

(ind., asistente de la educación, II).

Figura 3. Esquema resumen de categorías de resultados



Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, existe una posición compartida dentro de la comunidad, que reconoce la importancia de la presencia de agentes interesados en hacerse partícipes de los espacios que organizan la participación, ya que sin ellos no se generaría el encuentro con otros/as para el alcance de metas comunes.

A modo de síntesis de los resultados obtenidos, la comunidad educativa y sus integrantes le atribuyen nociones, características y sentido de pertenencia a la comunidad. Estas dependen del rol que se ejerza y su interacción, lo cual eventualmente se consolida en un estilo de funcionamiento que estará sujeto

a las características de la gestión y la influencia de los distintos estamentos, la que cimienta las bases del uso e identidad de los espacios y prácticas que se proponen para la participación social. Junto con el cambio generacional (diferencia etaria y recambio constante de estudiantado), emergen nuevos escenarios y mejoras que podrían apuntar a la generación de una participación social asociada a nuevas expectativas, que con el tiempo podría convertirse en nuevas formas y nociones de participación social, lo que eventualmente podría decantar en una transformación de los espacios y prácticas de la comunidad.

CONCLUSIONES

Esta investigación da cuenta de que las interpretaciones y funcionamientos de la comunidad educativa surgen desde los diferentes integrantes que la conforman, quienes configuran sus nociones y comprensión a partir de lo que logran visualizar en el funcionamiento de la institución educativa y su organización, siempre desde los distintos roles que los/las miembros cumplen y las relaciones entre estamentos.

El funcionamiento de los espacios que emergen en la comunidad educativa está mediado por el tipo de relaciones que se desarrollan entre los integrantes de cada estamento y sus respectivas formas de organización. Estas relaciones se consolidan teniendo a la vista aspectos como jerarquías, interdependencia y colaboración entre estamentos, ámbitos que tendrían un efecto sobre las propuestas y los tiempos destinados a los diferentes objetivos de la comunidad. Se identifica que la comunidad educativa es sensible a las decisiones y acciones que surgen del Proyecto Educativo Institucional, de la cultura escolar y de las exigencias de las políticas educativas.

Respecto a la relación entre comunidad educativa y participación social, es posible señalar que las características de la comunidad educativa y su organización tienen un efecto transversal en las formas y desarrollo de la participación social en la institución. Esto, principalmente, porque la comunidad educativa es la que tiene a su disposición los espacios y puede proponer la apertura y empoderamiento de estos.

Los establecimientos educativos dirigen sus objetivos a la internalización de competencias que les permitan a las y los estudiantes insertarse en el campo laboral, tales como responsabilidad, disciplina y cumplimiento de normas. La importancia de estas competencias podría radicar en comprenderlas como una acción reparativa de los establecimientos ante las necesidades de sus estudiantes. La carga académica de la modalidad técnico-profesional dificulta la formación y el desarrollo del estudiante fuera del espacio de educación formal, en otras instancias participativas o de socialización. En consecuencia, la priorización de los elementos profesionalizantes estaría posponiendo el desarrollo de otros aspectos ligados al desarrollo de prácticas de reflexión y participación democrática en los estudiantes y profesores de la comunidad educativa.

La comunidad educativa comprende que la participación social es un espacio de trabajo colaborativo que no involucra solo a un estamento, sino que depende de la relación entre distintos grupos. Esta relación se materializa a través del respeto que los estamentos se demuestran, lo que hace emerger el diálogo y las ideas en espacios donde prima el bien común de los estamentos y/o de la comunidad escolar.

La participación es considerada una acción situada, que sucede en un contexto espacial y temporal. Uno de los problemas que advierte esta investigación es que a pesar de que muchos espacios informativos son considerados participativos, la participación en ellos no es activa, ya que están destinados princi-

palmente a la toma de decisiones por la comunidad educativa de forma consultiva, lo que la vincula con el proceso desde la opinión y no desde la resolución.

En los casos en que se registra capacidad de agencia dentro de un estamento, su acción está orientada a la toma de decisiones al interior del grupo y en espacios generales participativos no resolutivos provistos por la estructura y funcionamiento jerárquico de las comunidades educativas.

Se ha observado que cuando se presentan tensiones o falta de claridad en el funcionamiento de la comunidad, emergen motivaciones individuales en los y las integrantes del espacio para movilizar y hacer dialogar los mecanismos de participación social. No obstante, estas acciones no son aleatorias, ya que responden a los intereses e ideas de agentes de la comunidad y al espacio donde se sitúan y articulan. Estas motivaciones también están limitadas y obstaculizadas por factores como la carga académica o laboral, la falta de espacios de organización, la visibilización de sus acciones, la remuneración de actividades o inexistencia de planificaciones en torno a la participación, además de factores como la infraestructura y el tipo de organización.

La participación social en las comunidades educativas se produce principalmente gracias a la capacidad de agencia de actores y actrices de la comunidad educativa, y a la conformación de espacios participativos que se generan a partir de las relaciones de horizontalidad. En estos espacios, donde se presentan

los/as miembros de la comunidad, se desarrolla el reconocimiento de los/as otros/as como agentes válidos para interactuar y desarrollar la participación, en un proceso que potencia y valida la alteridad. Por el contrario, las organizaciones con relaciones jerárquicas establecen previamente estos espacios y delimitan los márgenes de acción de la comunidad educativa y la participación social, pues las prácticas que proponen no trascienden a tomas de decisiones. De igual modo, la capacidad de agencia de los/as integrantes de la comunidad surge como una respuesta ante la inexistencia o intrascendencia de los espacios de participación y ante la rigidez del funcionamiento de la institución; lo que busca es exponer las necesidades sentidas que afectan a los/as integrantes de la comunidad.

Finalmente, las diferencias que existen sobre las nociones de comunidad educativa y participación social son influenciadas por el nivel de agencia que pueden lograr los sujetos al interior de su estamento, así como por la capacidad de agencia que tenga el propio estamento a la hora de involucrarse en los procesos de participación social dentro de la comunidad educativa. En ocasiones, los agentes son los/as representantes de sus estamentos en los espacios establecidos dentro de la comunidad y también son quienes logran organizar sus estamentos con el objetivo de generar impacto en la comunidad educativa. Es aquí donde las instancias de encuentro de la comunidad constituyen espacios fundamentales para establecer comunicación y diálogo entre los distintos estamentos, generando acción y

espacios de participación social y desarrollando acuerdos en torno a las metas y objetivos que surgen en la comunidad educativa.

DISCUSIÓN

El contexto que examina esta investigación, las comunidades educativas de dos liceos públicos/técnicos de la ciudad de Valparaíso, tiene varias características facilitadoras y obstaculizadoras de la participación social.

La discusión se centrará principalmente en los obstaculizadores, partiendo por los espacios de participación, ya que, a pesar de plantarse como espacios de reunión, diálogo y colaboración, están altamente normados y tienen un carácter más informativo que resolutivo. Estos espacios de participación son generalmente propuestos desde las orgánicas institucionales. Si bien no restringen la posibilidad de que algún estamento logre consolidar instancias de organización propia, hacen efectiva la jerarquía y delimitan los ámbitos y nivel de toma de decisiones que los actores o actrices de la comunidad educativa son capaces de proponer y desarrollar en su participación.

Este funcionamiento burocrático y vertical de los estamentos genera desinterés y falta de motivación en los miembros de la comunidad, quienes advierten rigidez en la posible gestión de algún espacio participativo y democrático, lo que conduce a menores posibilidades de encuentro, propuestas y acuerdos

comunes a los que podrían llegar en el ejercicio de la participación social. Sumado a esto, un obstaculizador destacado es la escasez de tiempo derivada de una forma educativa (técnico-profesional) fundamentada en un modelo capitalista neoliberal que copa el tiempo de los integrantes de la comunidad educativa. Esto resulta fundamental, ya que de la disponibilidad de tiempo depende la motivación que permite abrir espacios y prácticas participativas.

El sistema político, económico y social implica una forma de entender la educación en la que se reproducen las prácticas opresoras, las que, eventualmente, se transforman en establecidas, lo que ubica la tecnocracia y las necesidades económicas y laborales del mercado sobre la necesidad humana de relacionarse y desarrollarse junto a la comunidad.

Cabe preguntarse: ¿las comunidades educativas estudiadas son reproductoras del sistema capitalista o generan prácticas de resistencia a este sistema? Lo que encontramos en esta investigación es que existe una disputa entre ambas tendencias, pero se observan, en mayor medida, prácticas reproductoras. Estas se comprenden desde la perspectiva de la educación bancaria planteada por Freire (1970). En este sentido, nuestros hallazgos visibilizan que los espacios y prácticas participativas están altamente relacionados y restringidos, tanto por las jerarquías dentro de la comunidad como por las exigencias del sistema capitalista neoliberal en cuanto al cumplimiento de normativas y políticas públicas.

La comunidad educativa, sobre todo la de los liceos técnicos-profesionales, que es una importante matriz productora de mano de obra especializada para el país, se educa a través de la competencia de los/las estudiantes y se sectoriza en los estamentos de la comunidad educativa, lo que eventualmente deriva en un fomento, no necesariamente voluntario, del individualismo y escasa participación social.

A su vez, se identifica que a pesar de que los integrantes de la comunidad están inmersos en dinámicas reproductoras (promovidas por jerarquías que norman el establecimiento educativo y que les dan prioridad a instancias de carácter consultivo y no resolutive), son capaces de identificar que hay un problema en esa aproximación y advertir que los espacios de participación social no están activados. Una perspectiva de colaboración/horizontalidad promovería el surgimiento de agentes encargados de dialogar en instancias de toma de decisiones en representación de su estamento o de la comunidad, los que tendrían la potencialidad de convertirse en agentes de cambio. Estos agentes, a través de su movilización y de la articulación de diálogo con otros actores con agencia, alimentan la transformación de las jerarquías de la comunidad y promueven, facilitan y/o acompañan al estamento hacia la participación social.

Otro elemento vital para entender la participación social es el trabajo colaborativo, el que se da a través de la horizontalidad de roles, pero que depende totalmente de la forma que adquieran la jerarquía y la administración de las

relaciones de poder dentro de estos espacios.

Elementos ya discutidos como la participación social, la capacidad de agencia y la transformación de las jerarquías conducen a lo fundamental: la generación de pensamiento crítico. De este depende la posibilidad de pensar en estos espacios como constructivos, como lugares que permitan la concientización de los integrantes de la comunidad desde la horizontalidad. El pensamiento crítico, a su vez, conduce al aumento del número de agentes de cambio, ya que si una mayor cantidad de integrantes de la comunidad se identifica con las problemáticas que se evidencian, más gente intenta transformar la realidad en la que se encuentran.

Esta investigación presenta a las comunidades educativas de ambos liceos en un terreno en disputa, donde existe una línea muy delgada entre la educación bancaria (reproductora) y la educación de resistencia (liberadora), un factor que influye directamente en las prácticas educativas y en las relaciones sociales tanto de las comunidades escolares como de las sociedades futuras de las que las y los estudiantes serán parte cuando ingresen al mundo laboral.

De estas prácticas depende el desarrollo de habilidades personales, sociales y políticas de las comunidades educativas, compuestas por estudiantes que viven el proceso educativo en un contexto histórico y situado. Si bien en los grupos analizados existen prácticas relacionadas, en sus fundamentos, con la pedagogía de la liberación (1970), coexisten

con otras muy limitadas a la educación bancaria y su base productiva para el sistema capitalista y neoliberal. Es fundamental el empoderamiento de la comunidad educativa y sus estamentos, así como la promoción de agencias que permitan transmitir conocimientos a diferentes agentes que luego serán capaces de replicar sus conocimientos sobre la participación social en sus barrios y comunidades.

Existe una necesidad urgente de fomentar la participación social de los y las estudiantes en las comunidades educativas, principalmente en la educación pública y técnica, a fin de que ellos vean en la organización una forma para abordar sus necesidades personales y comunitarias.

Creemos que el desencanto social (que se materializa, por ejemplo, en los bajos índices de sufragio en las votaciones de cargos de elección popular) está vinculado directamente con los facilitadores y obstaculizadores de la participación. Una de las principales trabas es la escasez de personas con capacidad de agencia idóneas para canalizar las necesidades e intereses de las comunidades. Esta falta de agencia provoca que las comunidades vivan con disgusto y sin posibilidad de solucionar las prácticas opresoras que existen tanto en las comunidades educativas como en las políticas públicas, lo que conduce a la preservación del desencanto y la desesperanza ante la transformación social, que aparece como un ideal lejano.

Esta investigación abre el campo para el estudio de los agentes de transfor-

mación social, lo que permitiría ahondar en sus motivaciones, su historia de vida y las inquietudes que los motivan a desarrollarse a través de diálogos y espacios de participación social y a buscar motivar a las comunidades. Estas, a su vez, se benefician al identificar e impulsar soluciones a sus problemas y necesidades de forma colaborativa y horizontal, lo que desarrolla la capacidad de agencia entre sus integrantes.

Es evidente la necesidad de generar un cambio en los procesos involucrados en la educación en las escuelas, pues es indispensable la promoción de una educación para la decisión y para la responsabilidad social y política que favorezca la transformación de la sociedad.

RECOMENDACIONES

Cada institución educativa es particular y debe hallar en su cotidianidad las respuestas que permitan reformular la tensión entre los facilitadores y obstaculizadores de la PS, en la que intervienen aspectos fundamentales como la estructura, organización y el propio rol educativo de las instituciones. El llamado es a poner sobre la mesa la discusión sobre la promoción de la PS y revisar las políticas de convivencia escolar, a fin de que potencien una mirada más integradora a partir de la colaboración con otros servicios y ministerios.

Al analizar la Política Nacional de Convivencia Escolar (Pnce) (2019), la Política de Participación de las Familias y la Comunidad en Instituciones Educativas

(2017) y las Orientaciones para la Participación de las Comunidades Educativas (2017), se observa una tendencia a privilegiar los espacios formales de participación, lo que podría constituir un límite para la organización e innovación de los agentes del contexto educativo, pues restringe los mecanismos de participación y el diálogo con las redes extraescolares.

El set de cartillas elaborado por el Mineduc en el contexto de la Pnce, orientado hacia la gestión de redes territoriales de convivencia escolar, considera que estas son, a grandes rasgos, las que “facilitan el encuentro de actores que trabajan en convivencia escolar y el mutuo reconocimiento entre estos, promoviendo la reflexión crítica de la práctica” (Mineduc, 2019, p. 3). Quienes están principalmente convocados a estas redes son los encargados de convivencia escolar de los establecimientos y los directivos de las escuelas o liceos que la comunidad educativa considere pertinentes.

Por lo tanto, consideramos relevante que las redes se extiendan más allá de los servicios que tradicionalmente se han ligado a la educación, a fin de atender la “carencia” de las comunidades, particularmente de sus estudiantes, y ampliar al territorio en el que está inserta la escuela o liceo, sea comunal o provincial, para que en ella se vean identificados/as sus miembros.

Teniendo a la vista que lo esperado es fortalecer y problematizar las prácticas de convivencia escolar, parece interesante agregar a la red a otras iniciativas de la comunidad, como clubes deportivos, juntas de vecinos, organizaciones

culturales, clubes de adultos mayores, entre otros. Al consolidar estas prácticas de manera sinérgica y periódica, aumenta el sentido de pertenencia que las y los integrantes ampliados de la comunidad educativa pueden construir. Todo esto robustece las prácticas participativas y democráticas dentro de las escuelas y liceos, y las abre a la comunidad como espacios en donde todos y todas pueden participar desde una mirada crítica, propositiva y evaluativa. La comunidad ampliada, compuesta por organizaciones sociales, territoriales y formales, entre otras, podría recibir financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya que al ampliar el sentido de la red a un plano más comunitario-territorial, aumenta el capital social y cultural (Bourdieu, 2011) de los territorios y comunidades de aprendizaje. Esto se haría cargo de los nudos críticos identificados en torno el tiempo y recursos de los que disponen las instituciones educativas.

Tal como menciona Manfred Liebel (2019), el fortalecimiento de la construcción comunitaria puede ser un proceso emancipatorio y autónomo orientado al apoyo mutuo y la constante generación de aliados y aliadas, lo que propicia la consecución de un eje central de este artículo, la dinamización de la participación a través de la capacidad de agencia de sujetos y sujetas claves dentro de la comunidad educativa.

Es necesario relevar la importante labor de gestión en los establecimientos educacionales, aun cuando nuestro propósito es fortalecer la PS en las comunidades educativas desde las acciones cotidianas que realizan sus miembros

y agentes. Es fundamental propiciar el fortalecimiento de la comunicación y divulgación de las orientaciones que brinda el Ministerio de Educación, con el fin de promover la participación de las comunidades educativas enraizadas en el tejido social en el que coexisten. Esto corresponde a una revisión de los nudos críticos que se configuran como obstaculizadores, entre los que evidenciamos los recursos económicos, espacios y tiempo disponible.

Una respuesta frente a estos desafíos podría estar en los Planes de Mejoramiento Educativo (PME), pues brindan la posibilidad de ejecutar acciones que favorecen la participación social de las comunidades educativas, considerando los recursos económicos/ humanos y la planificación que requieren. No obstante, sugerimos que el desarrollo de estas acciones no puede convertirse en una fuente de estrés y agobio para la comunidad, por lo que es fundamental una posición crítica respecto a la presión que generan las políticas de rendición de cuentas en educación.

BIBLIOGRAFÍA

- **Andrade, H., Pontón, M., Bordon, A. y Fuentes, M. (2008).** Participación social: en escuelas preescolares y primarias. Reflexiones y propuestas desde las experiencias de una organización social. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, Redievol.18 no.1, Ensenada, ene. 2016.
- **Bourdieu, P. (2011).** *Capital cultural, escuela y espacio social*. Por Pierre Bordieu. Compilación y traducción de Isabel Jiménez - ed. rev. corr.- México: Siglo XXI, 201.
- **Creswell, J. (2007).** Five qualitative approaches to inquiry. *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches*, 2, 53-80.
- **Ferrero, M. y Hoehn, M. (2014).** Participación ciudadana - Un marco teórico. Asesoría Parlamentaria BCN, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones. Biblioteca del Congreso Nacional.
- **Freire, P. (1969).** *La educación como práctica de la libertad*: Tierra Nueva.
- _____ (1970). *Pedagogía del oprimido*. Ed. Siglo Veintiuno, Montevideo, Uruguay.
- **Giroux, H. (2003).** *Pedagogía y política de la esperanza: teoría, cultura y enseñanza*. Amorrortu, Primera edición, Buenos Aires-Madrid.
- _____ (2016). *La pedagogía crítica en tiempos oscuros de Henry Giroux*. Obert, G. y Eliggi, G. (Traductoras) /Critical Pedagogy in dark times, Obert, G. y Eliggi, G. (Translators). *Praxis Educativa*, 17(2), 13-26. Recuperado de <http://170.210.120.129/index.php/praxis/article/view/1648/1668>
- **Gurdian, A. (2007).** El paradigma cualitativo en la investigación Socio Educativa. Inie. Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) (2017). Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015. Recuperado de http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf
- _____ (2018). *Iniciativa Social Escuelas de Ciudadanía*. Minuta administrativa, programa activo País Público.
- **Liceo II (2017).** Proyecto Educativo Institucional Liceo II.
- **Liebel, M. (2019).** *Infancias dignas o cómo descolonizarse*. Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes. Lima, Perú. 2019.
- **Iturrieta, F. (2008).** Participación social y la nueva articulación entre Estado, mercado y sociedad civil. Análisis del cambio en la relación entre Estado, mercado y sociedad civil, y su relación en la conformación de iniciativas de participación social.
- **Márquez, E. (2007).** Diseño emergente en la investigación cualitativa, reflexiones sobre el diseño emergente en la formación y actualización en investigación cualitativa. Venezuela. Recuperado de <https://investigacionubv.wordpress.com/2012/03/17/diseño-emergente-en-la-investigacion-cualitativa/>
- **Más Información, Mejor Educación (2012).** Listado establecimientos Valparaíso. Recuperado de <http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/listado>
- _____ (S/F). Ficha de establecimiento Instituto Marítimo de Valparaíso. Recuperado de <http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/ficha?rbd=1525>

- **Mclaren, P. (1994).** Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo. Buenos Aires: Aique Grupo Editor. Recuperado de http://terras.edu.ar/biblioteca/5/PDGA_Mc_Laren_Unidad_7.pdf
- **Mejía, J. (2004)** Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo. *Revista de Investigación Social*. Volumen 8, número 2013, pp. 277-299. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- **Ministerio de Educación (2019).** ¿Cómo gestionar las redes territoriales de convivencia escolar? Recuperado de <http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/03.-Como-gestionar-las-Redes-Territoriales-de-C.E.pdf>
- **Montero, M. (2004).** *Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos.* Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina.
- **Montero, M. (2010).** Fortalecimiento de la ciudadanía y transformación social. Área de encuentro entre la psicología política y la psicología comunitaria. *Psykhé* (Santiago), 19(2), 51-63.
- **Moreno, A., Gamboa, R. y Poblete, C. (2014).** Desigualdad, educación y posibilidad de transformación social: pedagogía crítica y democratización escolar. En: Moreno y M. Arancibia. *Educación y transformación social: construyendo una ciudadanía crítica* (pp. 10-18), Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- **Moustakas, C. (1994).** *Phenomenological research methods.* Thousand Oaks, CA: Sage.
- **Observatorio Ciudadano de la Educación (2008).** Participación social en educación. Recuperado de http://www.redgestionescolar.org/file_biblio/participacionsocialOCE.pdf
- **Oraisón, M. y Pérez, A. (2006).** Escuela y participación: el difícil camino de la construcción de ciudadanía. *Revista Iberoamericana de la Educación OEI* N° 42, septiembre-diciembre 2006, pp.15-29. Recuperado de <http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/101115.pdf>
- **Okuda, M. y Gómez, C. (2005).** Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, vol. XXXIV, núm. 1, pp. 118-124.
- **Palomar, J. y García, R. (2010).** Comunidades de aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, vol. 24, núm. 1, abril, 2010, pp. 19-30, Universidad de Zaragoza, España.
- **Perales F. y Escobedo, M. (2016).** La participación social en la educación: entre propuestas innovadoras y tradición educativa. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(1), 69-81. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/738>
- **Puig, J. (2000).** ¿Cómo hacer escuelas democráticas? *Revista Educação e Pesquisa*, 26(2), 55-59. <https://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702200000200005>
- **Sanabria, G. (2001).** Participación social y comunitaria: Reflexiones. *Revista Cubana de Salud Pública*, 27(2), 89-95. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662001000200002&lng=es&tlng=es.
- **Villalobos, J. (2000).** Educación y concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo Freire. *Educere*, julio-septiembre, 17-24.
- **Zurita, R. (2008).** La participación social en la educación básica en México. Reflexiones en el marco de la Evaluación Nacional de la Participación Social en la Educación Básica, 2000-2006.



NIÑEZ Y SEGREGACIÓN SOCIAL: EL CASO DEL CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS DE VIÑA DEL MAR

Claudia Cárdenas Godoy, Fernanda León Aguirre¹,
Universidad de Valparaíso

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo conocer las representaciones sociales que poseen niñas y niños de entre 7 y 12 años del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar acerca del territorio que habitan, con lo que se buscó aportar a la discusión sobre las representaciones sociales. El abordaje teórico es el de la nueva sociología de la infancia propuesta por Lourdes Gaitán, quien considera a niñas y niños como actores sociales y protagonistas de su realidad social. En esa línea, se analizó el contenido de sus relatos desde la teoría de las representaciones sociales de Moscovici y el concepto de segregación residencial desarrollado por Jorge Rodríguez.

El método empleado fue el etnográfico, que consideró a dos comités de vivienda, Villa La Pradera y Los Manantiales. La investigación siguió la técnica de mapeo colectivo, la que se desglosó en tres sub técnicas: cartografía social e individual, fotovoz y recorridos comentados. El objetivo fue conocer la información que poseen niñas y niños acerca del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar e identificar su actitud hacia el territorio que habitan para, finalmente, interpretar el campo de representación ordenado y jerarquizado por ellos mismos.

Palabras clave: niñez, segregación residencial, campamento, representaciones sociales.

¹ Sociólogas, Universidad de Valparaíso. Artículo basado en la tesis de pregrado "Representaciones sociales de niñas y niños acerca del territorio que habitan: el caso del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar", realizada para obtener el título de sociólogas, 2019. Profesora guía: Claudia Espinoza Carramiñana.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo está basado en la tesis de pregrado “Representaciones sociales de niñas y niños acerca del territorio que habitan: el caso del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar”. Por razones de espacio y relevancia, se puso especial énfasis en la segregación residencial y en los efectos que esta tiene sobre las representaciones sociales de niñas y niños del campamento Manuel Bustos acerca del territorio que habitan.

Las representaciones sociales son, según Moscovici (1979), “maneras específicas de entender y comunicar la realidad e influyen a la vez que son determinadas por las personas a través de sus interacciones” (Moscovici, citado en Materán, 2008, pp. 244-245). Las representaciones sociales de niñas y niños del campamento Manuel Bustos se ven cruzadas por la segregación residencial que se produce al habitar un territorio determinado. Esta es comprendida como “[...] la ausencia de interacción entre grupos y en un sentido geográfico, significa desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico” (Rodríguez, 2001, p. 11).

Ahora bien, la importancia de abordar la niñez como sujeto de estudio y a los niños y niñas como protagonistas de la investigación y su realidad social recae en la invisibilización histórica que ellos y ellas han sufrido en la investigación y en las políticas públicas, que conciben a la infancia como un fenómeno presocial (Qvortrup, 1987; Durkheim, 1975; Parsons, 1976). En cambio, el presente estu-

dio tomó los lineamientos de la nueva sociología de la infancia, perspectiva que considera a niñas y niños como actores sociales, es decir, como seres humanos con capacidad de modificar su entorno con su sola existencia o con la interacción que llevan a cabo en él (Sallas Céron, 2010).

1. Segregación residencial

A lo largo del siglo XX, las ciudades latinoamericanas exhiben un patrón de segregación residencial semejante al modelo europeo de ciudad compacta: en las áreas centrales se concentran los grupos superiores de la escala social, que adquieren una mejor edificación y arquitectura (Sabatini & Sierralta, 2006), y se concentran, por lo general, en una sola zona de crecimiento que, en la forma de un cono, une el centro histórico con la periferia en una dirección geográfica definida.

Por otra parte, los grupos más pobres, que representan entre una cuarta parte y más de la mitad de la población, tendieron a aglomerarse en extensas zonas de pobreza, especialmente en la periferia más lejana y con edificación precaria (Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001). En la actualidad, este grupo se ha vuelto más visible, pues se ha puesto de relieve la complejidad de la raíz socioeconómica de este concepto, es decir, cuando corresponde a segregación residencial socioeconómica (SRS). La SRS actúa, a grandes rasgos, como un mecanismo

de reproducción de las desigualdades socioeconómicas, de la que ella misma es una expresión.

En términos específicos, la segregación, según Sabatini, Cáceres y Cerda (2001), tiene tres dimensiones: “(1) la tendencia de los grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad; (2) la conformación de áreas socialmente homogéneas; y (3) la percepción subjetiva que los residentes tienen de la segregación ‘objetiva’ (las dos primeras dimensiones)” (Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001, p. 27).

Las tres dimensiones de segregación mencionadas se amplían a la siguiente conceptualización: existe una fuerte segregación en la primera dimensión, producto del asentamiento de las élites en las áreas de crecimiento dentro de la zona del cono en la ciudad. En la segunda dimensión será menos fuerte la segregación, dado que quienes la habitan comparten esa área con otros grupos socioeconómicos. Si bien estas dos dimensiones tienen diferentes impactos urbanos y sociales, los efectos de desintegración social, vinculados con la fuerza que alcanza la segunda dimensión de segregación en los sectores donde se concentran las familias pobres, ha sido el interés de las investigaciones de las ciudades chilenas. En el caso de personas y familias pobres, la dimensión subjetiva de la segregación, es decir, aquella que arrastra sentimientos de marginalidad —la sensación de sobrar—, representa un factor clave para que la segregación objetiva (tercera dimensión) dé lugar a efectos de desintegración social.

En el pasado, la aglomeración espacial podía significar ventajas sociales y sobre todo políticas para las familias pobres chilenas. En la actualidad, solo ha conducido a una situación de desintegración social con efectos devastadores, como los que se presentan a continuación:

Deterioro de servicios. Como establece Rodríguez (2001), al existir una correlación creciente entre precio de suelo, recursos municipales y nivel socioeconómico de residentes, los municipios en áreas de mayor pobreza reciben menos ingresos que las zonas de la ciudad donde se aglomeran las familias de altos ingresos. Como consecuencia, su acceso a servicios mayormente estatales es de menor calidad que el acceso a los de carácter privado, lo que estrecha los espacios de encuentro con el otro.

Deterioro de la seguridad y la convivencia. La segregación aumenta la sensación de inseguridad cuando se reconoce que otros son potencialmente peligrosos. Este temor conduce a la utilización cada vez más cotidiana de mecanismos de protección y encierro (Dammert, 2004). Según Kaztman y Filgueira (2006), la inseguridad provocaría que las familias congelen ciertos activos que podrían movilizar en su beneficio, como acompañar a sus hijos a la escuela. Además, la reacción del resto de la ciudad ante los hábitos y comportamientos que germinan en esas subculturas es apartarse de estas áreas y estigmatizarlas como el lugar donde residen las “clases peligrosas” (Kaztman R., 2003).

Aislamiento social. Como un efecto derivado de todo lo anterior, se genera el aislamiento normativo de quienes residen en barrios segregados, el que produce un desconocimiento mutuo con otros grupos sociales. Según Kaztman (2001), cuando se producen los procesos de segregación residencial y los barrios comienzan a ser cada vez más homogéneos, dentro de cada uno de ellos se generan códigos propios y un ordenamiento de valores diferentes al de la sociedad global.

Sin duda, la SRS ha actuado como un mecanismo de reproducción de desigualdad social que ha hecho que las familias que viven en áreas pobres se hayan visto más afectadas producto de la falta de servicios urbanos y las malas condiciones de accesibilidad, lo que las ha empobrecido aún más.

2. Situación de campamento en Chile y en la región: el caso de Manuel Bustos

En Chile, hablamos de campamentos desde poco después de la mitad del siglo pasado. Campamento es la forma de nominar a un conjunto de viviendas precarias que están agrupadas geográficamente y que dan cuenta de un poblamiento espontáneo, muchas veces irregular, producto de tomas de terrenos o la erradicación de cierto sector de la población (Candía, 2005). Los asentamientos que surgen de esta forma de habitar quedan fuera de la ciudad formal y se diferencian del entorno físico-urbano y social. Por ello, se les ha calificado como marginales, espontáneos,

ilegales, irregulares y clandestinos. Se trata de asentamientos conformados por viviendas y servicios inadecuados, no reconocidos y no incorporados a la ciudad, “caracterizados por la inseguridad en la tenencia de la vivienda, acceso inadecuado a los servicios básicos, altos índices de pobreza, emplazamientos en zonas de riesgos, entre otras características que los convierten en una expresión territorial de la pobreza urbana” (Candía, 2005, p. 13).

Actualmente, 38.770 familias viven en situación de campamento a lo largo del país y el número no deja de aumentar. Desde sus inicios, los campamentos han sufrido diversas transformaciones en su composición o estructura interna (Techo-Chile, 2016), lo que ha generado especificidad y diversidad en cada uno de ellos. Aun así, es posible identificar que los campamentos comparten características comunes como el bajo nivel de escolaridad de sus habitantes, la precariedad del empleo y las misérrimas condiciones de habitabilidad debido a la inestabilidad de su construcción en terrenos irregulares propensos a siniestros socioambientales.

Las cifras indican que, en la región de Valparaíso, según los datos del Mapa Social de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2013), habitan 7.531 familias en 146 campamentos, lo que la convierte en la región con más campamentos del país. Sin desmentir lo anterior, el Monitor de Campamentos de la Fundación Techo (2015) indica que las cifras del gobierno están incompletas: en el catastro del año 2015, la región de Valparaíso tenía 10.710 familias viviendo en 177 campamentos. Manuel

Bustos es el campamento más grande de la región e incluso de Chile, compuesto por más de 1.100 familias, y es considerado como uno de los más vul-

nerables en cuanto a acceso a servicios básicos: salud, educación y seguridad (Techo-Chile, 2013).



Fuente: Plataforma urbana²

Según los datos del catastro de Techo-Chile (2015), la toma de terrenos en el sector de Manuel Bustos comenzó en 1995, aunque algunos vecinos dicen que ocurrió en 1997. La toma no tuvo nombre hasta que en 1999 murió el presidente de la CUT y dirigente demócrata cristiano Manuel Bustos. Se necesitaba un nombre y los dirigentes de la época decidieron homenajear de esa forma al expresidente de la CUT (Bazán, 2016).

Desde 2017, en Manuel Bustos se registra un proceso de urbanización apoyado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) que comenzó luego de la firma del decreto que autoriza el procedimiento (Ministerio de Vivienda y

Urbanismo, 2017). Hasta ahora, este ha implicado la regularización de las propiedades y la construcción de alcantarillado, luminarias y pavimentación de vías estructurantes, entre otros avances (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013).

3. ¿Por qué la niñez?

Históricamente, la niñez ha sido concebida como una representación social amenazada, que debe ser protegida, víctima de la pobreza, inocente del contexto que le ha tocado vivir y del cual debe ser alejada. Esta imagen ha sido la base de las políticas de protección a la

² <http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/08/31/nuevo-fracaso-en-licitacion-para-urbanizar-campamento-mas-grande-de-chile/>

infancia (Rojas Flores, 2010). La Convención Internacional de los Derechos del Niño, oficializada en 1989 y ratificada en nuestro país en 1990, busca romper con esa imagen de infancia y constituye uno de los principales hitos de la transformación sociojurídica en temas de ciudadanía y de la relación con niñas y niños (Contreras & Pérez, 2011). Esto ha impulsado cambios en las políticas para la niñez, que actualmente incorporan una noción de infancia como sujeto de derechos (Marré, 2013; Salazar & Botero, 2013).

En cuanto a los estudios y enfoques recientes, Unicef Chile ha desarrollado una línea de investigación que se ha dedicado a estudiar actitudes y opiniones de los niños y niñas respecto a diversos temas. Se trata de estudios extensivos y de carácter cuantitativo. No se desmerece el interés que pueden tener los estudios cuantitativos, pero esta investigación se posicionó desde lo propuesto por Ana Vergara et al. (2015), quienes señalan la limitación de estos en cuanto a su capacidad de explorar en mayor profundidad las significaciones configuradas por niñas y niños. Lo último tiende a desestimarse debido a la idea de que la comprensión verbal, capacidad reflexiva y de verbalización de los niños son limitadas (Vergara, Peña, Chávez & Vergara, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, las nuevas formas de construcción de la niñez, donde se han incorporado prácticas relativas a la validación del propio juicio de niños y niñas, la creación de espacios abiertos donde puedan opinar y, al mismo tiempo, promover que sean escuchados y escuchadas por el mundo

adulto, han hecho que hoy en Chile la participación infantil sea un tema y un ejercicio más recurrente, tanto en los discursos oficiales como en la cotidianidad de la sociedad (Contreras & Pérez, 2011).

Sin embargo, todavía somos herederos de conceptos que han predominado en occidente desde el siglo XVIII, “como son la inocencia, la integración regulada del niño a la sociedad por medio de la familia y la escuela, la ausencia de responsabilidades laborales o familiares, y el predominio del juego y la fantasía” (Vergara del Solar, 2003, p. 127). Frente a este modelo ideal, sigue sobreviviendo la imagen de una infancia amenazada, que debe ser protegida, víctima de la pobreza, inocente del contexto que le ha tocado vivir y del cual debe ser alejada. Es “esta representación social de la infancia ‘en riesgo social’ la base de las políticas de protección” (Rojas Flores, 2010, p. 775).

El enfoque de la nueva sociología de la infancia comienza a considerar a niñas y niños como actores sociales, es decir, como seres humanos con capacidad de modificar su entorno con su sola existencia o con la interacción que llevan a cabo en él (Salas Céron, 2010). Esta comprende a la infancia como una parte de la estructura social que posee un carácter permanente que se construye socialmente y presenta variaciones históricas y culturales determinadas por las normas y pautas de conducta que se esperan de un niño en un momento determinado (Gaitán, 2006a; 2006b). Estimar a niñas y niños como agentes sociales y sujetos de pleno derecho cuyas visiones deben ser recogidas nos

permite tener una visión más completa de la realidad estudiada, lo que permite reducir el sesgo de la perspectiva adulta (Argos González, Ezquerro Muñoz & Castro Zubizarreta, 2011).

En la región de Valparaíso habitan 401.378 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años (21,6% del total de población de la región), de los cuales un 22,6% se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Esto se suma a que en Chile el porcentaje de pobreza infantil es más alto que el nivel de pobreza de la población total (20,7%) (Casen, 2017).

Tomando en cuenta lo anterior y el contexto de urbanización del campamento Manuel Bustos, se hace relevante profundizar en las representaciones sociales que realizan niñas y niños sobre el espacio que habitan, pues son sujetos que tienden a ser invisibilizados mediante la priorización de la población adolescente o adulta (Pavez Soto, 2012). En ese contexto, la presente investigación es relevante pues le entrega a niñas y niños del campamento la oportunidad de manifestar su relación con el territorio y valorizar y jerarquizar los lugares importantes para ellos, en un proceso que aún se encuentra en desarrollo. El concepto de representaciones sociales de Moscovici (1979) pudo guiar dicho propósito en la medida en que estas se presentan como una modalidad de pensamiento “que integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social; el pensamiento y la acción” (Araya, 2002, p. 9). En ese sentido, cuando se estudian las representaciones sociales de niñas y niños, se reconocen los modos y los procesos de construcción de su pensamien-

to social, es decir, cómo constituyen y son constituidos por la realidad social.

A partir de lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿cuáles son las representaciones sociales que poseen niñas y niños del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar acerca del territorio que habitan? Para abordarla, se propuso como objetivos acceder a la información que poseen niños y niñas, determinar la actitud de estos hacia el campamento Manuel Bustos e interpretar el campo de representación ordenado y jerarquizado por las niñas y los niños.

MÉTODO

1. Tipo de estudio

Teniendo en consideración la existencia de una extensa profundización teórica en torno a las representaciones sociales, debemos precisar que no ocurre lo mismo en el caso de los trabajos sobre el contexto habitacional de campamento y menos si hablamos de un estudio que considera a niñas y niños como protagonistas de la investigación. En ese contexto, se decidió realizar un estudio de tipo descriptivo (Valles, 1999), ya que, con ajuste a los objetivos, se ha buscado conocer una realidad específica: las representaciones sociales de niñas y niños del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar acerca del territorio que habitan. En ese sentido, el objetivo fue recoger datos descriptivos de manera que se evidenciara los significados con los que operan los sujetos.

2. Tipo de diseño

Se definió un diseño de investigación de tipo cualitativo debido a que esta metodología es adecuada para los objetivos del estudio, ya que produce datos descriptivos a través de las palabras, escritos y conductas observables (Taylor & Bogdan, 1987). A su vez, este tipo de diseño enfatiza la perspectiva de los protagonistas, niñas y niños, y persigue el significado particular que estos construyen sobre los hechos como partes de un todo. De esta forma, se puede abordar el sentido que los actores le otorgan al objeto de estudio, el cual no es medido por la metodología cuantitativa (Ruiz, 1996).

Los estudios cualitativos suelen seguir un diseño flexible. Este tipo de diseño no sigue un plan estructurado cuyas fases correspondan a un orden temporal lineal. La flexibilidad hace alusión a la posibilidad de encontrar situaciones nuevas durante el proceso de investigación, que se vinculan al tema de estudio y que pueden implicar cambios en la pregunta de investigación, objetivos o en las técnicas de recolección de datos (Vasilachis, 2006). Vale la pena mencionar que este estudio cualitativo fue semiprojectado, ya que en él convergieron aspectos propios de un diseño proyectado, “aquel que prevé con antelación todos los pasos y operaciones a seguir para llegar a los productos de la investigación” (Noboa, 2013, p. 317), especialmente en la recopilación de la información, como también elementos de un diseño emergente, caracterizado por generar los componentes principales del diseño durante el proceso de investigación y adaptar ciertos aspectos

metodológicos a las particularidades del campo (Valles, 1999). Por otro lado, esta investigación se define como no experimental, puesto que no fue su intención modificar las situaciones o variables que influyen en la investigación, sino que observarlas tal y como ocurren dentro del campo (Alvira, 2000).

La clasificación temporal de este diseño ha sido de tipo transversal, pues se centró exclusivamente en el momento en que se generó la información (Valles, 1999). Esta decisión responde a que el estudio se llevó a cabo durante un periodo de tiempo determinado y no se realizó un seguimiento de los casos en cuestión. No obstante, los resultados que de aquí se han obtenido podrán ser contrastados con investigaciones posteriores.

3. Universo y muestra

El universo de esta investigación está compuesto por los niños y niñas que habitan el campamento Manuel Bustos, ubicado en el sector de Achupallas de la comuna de Viña del Mar. No se encontraron registros previos de la cantidad exacta de personas en esta categoría.

Originalmente, la investigación contemplaba un diseño muestral que no se pudo realizar debido a lo que fue ocurriendo durante el trabajo de campo: después de aplicar la metodología en dos comités de vivienda, se obtuvo gran cantidad de información, lo que implicó tomar la decisión de no seguir indagando. Finalmente, la muestra estuvo compuesta por dos grupos de niñas

y niños de entre 7 y 12 años, cada uno perteneciente a un comité de vivienda de los campamentos Villa La Pradera y Los Manantiales. Para las técnicas individuales aplicadas se seleccionó a un niño y una niña de Villa La Pradera y a dos niñas y un niño de Los Manantiales. La muestra fue de carácter no probabilístico, ya que la finalidad no era la generalización de los resultados, sino más bien el análisis de las representaciones sociales del territorio habitado por las niñas y los niños del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, por lo que el foco fue la indagación cualitativa, a fin de comprender el fenómeno a partir de sus características particulares.

La selección del tipo de muestreo tiene relación con la cuestión de la representación, la accesibilidad y la heterogeneidad (Valles, 1999), por ende, este fue elegido por conveniencia (Salamanca & Martín-Crespo, 2007), ya que los casos se eligieron de acuerdo a la accesibilidad y disposición de la muestra, y al cumplimiento de los siguientes criterios de inclusión: se seleccionó a aquellos niños y niñas de entre 7 y 12 años de edad que habitaban el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar y se consideró el nivel de desarrollo cognitivo requerido por las técnicas de producción de información utilizadas en la investigación. Dichos niños y niñas aceptaron previamente, de manera escrita, participar en la investigación; sus padres también consintieron de manera escrita y presentaron disposición a participar. Por otra parte, se consideró como criterios de exclusión la negación de niñas o niños de participar, lo que fue expresado de modo conductual o verbal.

4. Técnicas de producción de información

Se ha optado por utilizar el método etnográfico, herramienta de producción de información cualitativa que permite acceder a entramados de significados intersubjetivos en su contexto de escenificación por medio de prácticas e interacciones sociales (Taylor & Bogdan, 1987), lo que significa que como investigadoras participamos y nos implicamos en las dinámicas y los espacios sociales que observamos.

En el caso de la presente investigación, se utilizó el método etnográfico mediante la técnica de mapeo colectivo, la que fue empleada durante un mínimo de tres jornadas en cada sector. Se optó por el mapeo colectivo como técnica de producción de información debido a que este pretende territorializar la creación colectiva, la participación plural y la visibilización de un horizonte crítico mediante diversos recursos visuales y mapas que dan pie a la comunicación y difusión de significaciones y sentidos (Risler & Ares, 2013).

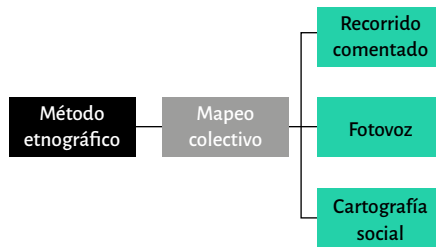
Cabe destacar que la elección del mapeo colectivo como técnica de investigación obedeció a que este se caracteriza por ser un proceso de creación que busca alterar los relatos dominantes sobre los territorios, en este caso, el discurso adultocéntrico, a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes, niñas y niños (Risler & Ares, 2013). Con el objetivo de respetar esto, nuestro rol consistió en ser mediadoras, a fin de ir abriendo o “haciendo aparecer” los significados a través de preguntas u otros

ejercicios dialógicos, experienciales y/o reflexivos, desde las propias subjetividades de las niñas y los niños de Manuel Bustos. Lo anterior se desprende de múltiples subtécnicas que se enmarcan en las posibilidades del mapeo colectivo. Para cumplir con los objetivos de la presente investigación, se seleccionaron solo algunas de ellas: recorrido comentado, fotovoz y cartografía social.

El recorrido comentado es una subtécnica individual que funciona como una entrevista en movimiento cuyo objetivo es reconocer el territorio y caracterizar la actitud y patrones de comportamiento de niñas y niños frente al cam-

mento (Thibaud, 2001). Por otro lado, el fotovoz, también conocido como entrevista fotográfica participativa, permite el desarrollo de reflexión e intercambio y fomenta la participación y el debate mediante la realización de fotografías por parte de los sujetos y una posterior discusión acerca de ellas (Serrano, Revilla & Arnal, 2016). La última subtécnica, la cartografía social, consiste en la construcción colectiva de mapas, dibujos, imágenes, relatos y/o crónicas que ilustran y narran la manera en que los habitantes de un lugar representan y comprenden los fenómenos sociales que ocurren allí (Puerta, Hinestroza & Montoya, 2008).

Figura 1. Técnicas de producción de información



Fuente: elaboración propia.

El trabajo de campo se aplicó en tres instancias por cada comité de vivienda: una jornada en que se realizaron los recorridos comentados individuales y dos jornadas colectivas para no saturar de actividades a niñas y niños. En la primera jornada colectiva se realizó el recorrido comentado grupal que fue acompañado del fotovoz, para luego seleccionar las fotos más importantes para las niñas y los niños; en la segunda jornada colectiva se realizó la cartogra-

fía social. En Los Manantiales se realizaron dos cartografías individuales con el fin de enriquecer la información.

HALLAZGOS Y RESULTADOS

El análisis se estructuró a partir de las tres grandes dimensiones del concepto de representaciones sociales (Moscovici, 1979): información (qué se sabe), actitud (qué se hace y cómo se actúa) y campo de representación (qué se cree y cómo se interpreta). Además, tal como en la totalidad de la investigación, se abordó a los niños y niñas como actores sociales que participan en la construcción y determinación de sus propias vidas (Gaitán, 2006a; Gaitán, 2006b; Pavez Soto, 2012), por tanto, se incluyó en el análisis lo conversado durante la etapa de devolución participativa de resultados.

Cada uno de los tres apartados que se presentan a continuación muestra el análisis de la experiencia separada de los territorios abordados, a fin de respetar las particularidades de cada uno de ellos y del grupo de niñas y niños participantes. Aun así, cabe destacar algunas similitudes y diferencias encontradas, las que se presentan al final.

1. Lo que niñas y niños saben acerca del territorio

En Villa La Pradera, niñas y niños caracterizan el paisaje de lo que entienden como su territorio. Una de las características del campamento es que posee cierto grado de ruralidad y destaca la presencia de árboles y “verdes” dentro del sector, lo que genera un ambiente agradable para ellos y ellas, pues se diferencia del desierto y de las características urbanas de la ciudad. Una segunda

característica del sector son sus caminos de tierra, que también responden al grado de ruralidad mencionado previamente. Estas son identificadas en la cartografía social y son una referencia que permite indicar uno de los límites de la población.

La descripción del paisaje de Villa La Pradera deriva en la identificación de ciertos elementos del territorio que permiten delimitar y ubicarse. Niñas y niños tienden a utilizar ciertos elementos referenciales que ayudan a definir estos límites, tales como la cancha o la Villa Arauco, que marcan “el comienzo” del comité, y la iglesia, que ayuda a comprender dónde “termina”.

Cabe destacar que las y los niños conocían el nombre de casi todas las calles. Esto se visibilizó mediante la cartografía social, en la que se trazaron las calles con mucha precisión y se pintaron de color café para simular la tierra. Luego de haber precisado su ubicación, decidieron colocar un papel con nombre a cada una de las calles, e incluso algunos niños demostraron estar muy ubicados, pues hablaron sobre ellas con mucha claridad.

Ahora bien, dentro de los espacios representativos del campamento, los niños y las niñas identificaron y dieron mayor importancia a lugares que permiten el encuentro dentro de la comunidad, mientras que aquellos de carácter privado, como sus hogares o “las casas”, pasaron a un nivel de importancia secundario. Uno de los espacios reconocidos con mayor fuerza por los niños y las niñas de Villa La Pradera fue “la sede”. En la subtécnica del fotovoz,

esta fue fotografiada por cinco de ocho niños. Quienes la fotografiaron recalcaron que ella es el símbolo de la comunidad, el lugar donde hacen actividades y donde juegan. Además, indicaron que el mural fotografiado fue realizado por ellos mismos y que representa el trabajo en equipo y la unidad de Villa La Pradera.

En cuanto a la ubicación del campamento con relación a la ciudad, niñas y niños de Villa La Pradera entienden Viña del Mar como un entorno urbano y tecnológico, descrito como algo ajeno, como una otredad que se encuentra lejos y que es diferente al lugar en el que ellos viven. Además, lo describen como si Viña del Mar fuera algo externo, a pesar de que la Villa La Pradera y, por tanto, Manuel Bustos se encuentran dentro del perímetro de la ciudad. Esto se asocia a uno de los efectos de la segregación residencial socioeconómica, el aislamiento social planteado por Rodríguez (2001) y Kaztman (2001), que se evidencia como un desconocimiento mutuo hacia otros grupos sociales, que en este caso habitan en Viña del Mar. Algunos logran identificarse como parte de la ciudad, pero luego otros señalan encontrarse entre Viña del Mar y Quilpué, lo que demuestra que la mayor parte del grupo no se identifica como parte de Viña del Mar o de Quilpué.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, niñas y niños hacen referencia al acceso que poseen al campamento y a los servicios básicos, siempre comparándose con quienes viven en Viña del Mar, a quienes identifican como personas que poseen mejor acceso que ellos

a ciertos servicios y beneficios, lo que podría explicarse, de acuerdo a Jorge Rodríguez (2001), como uno de los efectos de la segregación residencial socioeconómica: el deterioro de servicios. Esto tiene que ver con la correlación existente entre el precio del suelo, los recursos municipales y el nivel socioeconómico de los residentes, pues las áreas de mayor pobreza reciben menos ingresos que las zonas de la ciudad donde se aglomeran las familias de altos ingresos (Rodríguez, 2001), sobre todo si es un sector irregular, como es el caso de Manuel Bustos.

Algo que llama la atención es que, durante la devolución participativa de los resultados, mientras se conversaba respecto del acceso a servicios básicos y del acceso de instituciones como Carabineros o Bomberos desde el campamento, los niños reconocieron que a pesar de que el proceso de urbanización del sector estaba trayendo mejoras, no creían que estas incluyeran la construcción de estos servicios dentro del territorio. Eso da cuenta de que, a pesar de reconocer un mejoramiento en la estructura del sector, se asumen como parte de un territorio segregado socioespacialmente, algo que no tiene que ver solo con la calidad de la estructura, sino con su ubicación dentro del espacio, que continúa siendo periférica dentro de la ciudad y con poco acceso a otros servicios.

En la comparación que niñas y niños hacen entre su territorio y Viña del Mar como una "otredad", porque no se identifican como parte de ella, tienden a desear incorporar a su territorio ciertos elementos que se pueden encontrar en

la ciudad, como un *skatepark*, una piscina gigante y una antena con mejor señal, entre otros.

Por otro lado, en Los Manantiales, los niños y niñas del comité no se refieren a las calles del campamento y no las utilizan como un elemento de orientación. La cartografía social trazada por niñas y niños carece de caminos o calles que conecten los elementos dibujados y se compone principalmente de espacios a los que ellos y ellas concurren, como la sede, la cancha, los juegos y elementos de carácter natural como el sol y el cerro.

En relación con los elementos representativos, la sede social del comité es mencionada y dibujada en el contexto de la cartografía social como un elemento de referencia, pues es el lugar donde se realizó esta actividad. No se le da mayor importancia en las otras subtécnicas, lo que da a entender que la sede se aprecia más como un elemento de referencia que uno de relevancia para niñas y niños. Si bien la sede es un espacio asociado a una rutina, esta comparte lugar con dos espacios que niños y niñas consideran relevantes y son mencionados como “favoritos”: la cancha y los juegos. Estos se encuentran en el mismo lugar y son considerados importantes pues disponen un territorio para el juego, el ocio y la recreación, y permiten el encuentro con otros niños y niñas.

Sus hogares fueron mencionados como los espacios de mayor importancia para ellos y ellas, al igual que los lugares en los cuales interactúan y son parte de la cotidianidad familiar, como es el caso del negocio familiar que se encuentra

aledaño a la casa de uno de los niños, y del cementerio que, si bien es un lugar externo, pero cercano al comité, es mencionado como un elemento significativo pues algunos familiares se encuentran enterrados en ese lugar.

En Los Manantiales, niñas y niños tienden a otorgarle importancia a lugares externos al sector habitacional, tales como el sector llamado “el cerro”, que es una explanada con vegetación ubicada a unos kilómetros del comité de vivienda. Se reconoce como un sector externo, pero aun así enormemente valorado en cada una de las subtécnicas. Por otro lado, el colegio también se menciona como un lugar cotidiano y como un elemento dentro de Los Manantiales, a pesar de que en realidad se encuentra en la Villa Independencia, que está cerca, pero fuera del comité. Se menciona este espacio como importante y lo dimensionan como parte del territorio donde viven.

El relato de los niños y las niñas de Los Manantiales evidencia una diferencia geográfica que los ubica respecto del resto de la ciudad. Ellos y ellas hablan de “arriba en el cerro”, “abajo en Viña” / “la playa”. Se identifican con vivir arriba, mientras que relacionan a “otros u otras” con vivir abajo. El “vivir arriba” proporciona un campo visual amplio de la ciudad y del mar, lo que hace que estos lugares sean considerados cercanos a pesar de que se ubican “abajo”. Esta diferencia manifestada en el discurso de niñas y niños puede ser explicada a partir de cómo se configuran las ciudades latinoamericanas, las que exhiben un patrón de segregación residencial

que se expresa de la siguiente forma: en áreas centrales se concentran los grupos superiores de la escala social, que tienen acceso a una mejor edificación y arquitectura (Sabatini, 2006), mientras que los grupos más pobres tienden a aglomerarse en extensas zonas de pobreza, especialmente en la periferia más lejana y con edificación precaria (Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001). Ellos comprenden la segregación residencial a partir de un relato que identifica el “vivir arriba” y “abajo”. En relación con el acceso al campamento, los niños y niñas mencionan que deben subir “la montaña” para llegar a sus hogares, ya que estos se encuentran “arriba” y no existe servicio de locomoción pública hasta el comité. Para acceder a este, identifican dos maneras: caminando o en autos que ejercen como un medio de transporte ilegal y que se pueden tomar desde la plaza de Villa Independencia.

Respecto al acceso a elementos básicos, el colegio y los servicios de salud son mencionados por los niños y niñas en relación con su cercanía o lejanía. En el caso de los hospitales y las farmacias, son servicios a los cuales les gustaría acceder con mayor rapidez dadas las experiencias que han protagonizado, mientras que el colegio, espacio cotidiano y de asistencia obligatoria, les resulta cercano a pesar de que explicitan que la única manera de acceder a él es caminando o tomando los servicios de locomoción ilegal. Ninguno de estos espacios es reconocido dentro o cercano al territorio. Incluso, al preguntar por la posibilidad de existencia de estos en el campamento, respondieron no solo con negación, sino expresando la inviabilidad de que esto pueda ocurrir.

2. Prácticas espaciales y conjunto de comportamientos de niñas y niños dentro del campamento

Este apartado se refiere a lo que las niñas y los niños hacen dentro del campamento, a sus prácticas espaciales y el conjunto de sus comportamientos dentro del territorio que habitan. Esto permitió identificar la dimensión de actitud, que tiene que ver con los vínculos que se establecen dentro del sector y con la traducción de las elecciones, experiencias y valores que les son socialmente atribuidos (Rangel, 2009). La actitud de niñas y niños frente al territorio se expresa en una orientación positiva o negativa, lo que da luces para, posteriormente, interpretar el núcleo simbólico presente en el campo de representación.

Según el relato de niñas y niños, en Villa La Pradera predominan los espacios de uso común que permiten el encuentro intergeneracional, en los que se pueden relacionar y ser partícipes de actividades en conjunto con los pobladores de la comunidad. El primer espacio al que hicieron referencia, el más fotografiado por niñas y niños, y el que fue nombrado con mayor intensidad fue la sede social de Villa La Pradera, a la que interpretan como un lugar de encuentro entre pobladores, independientemente de sus edades. No obstante, el encuentro no se da solo en la sede social. Ellos observan y destacan prácticas espaciales de unión y solidaridad en las mismas casas de las y los pobladores, en las que también se realizan actividades y/o se coopera con las y los vecinos si es necesario.

Al parecer, quienes habitan el campamento no son los únicos que hacen uso de ella, ya que mencionaron el uso que le dan personas externas al territorio, entre las que se cuentan diversas instituciones que intervienen y hacen actividades en ciertos espacios comunes del sector, como la sede social. Algunos adultos comentaron que constantemente existe presencia de ciertas instituciones, como Techo, Desafío Levantemos Chile, Serviu, entre otras. Incluso, niñas y niños participan de las actividades propuestas por estas instituciones y están al tanto de los cambios de urbanización del sector que Serviu realiza actualmente. Asocian esto último sobre todo a espacios importantes para ellos que se están viendo afectados, como, por ejemplo, “la plaza”, la cual va a ser eliminada para convertirse en una calle.

En Los Manantiales, las niñas y los niños se refirieron a la sede social como el lugar donde se reúnen para participar de actividades realizadas por organizaciones externas al comité, por lo tanto, se entiende como un espacio de intervención. En los resultados de la aplicación de ninguna subtécnica fue mencionada como un lugar de importancia ni como su lugar favorito dentro del comité, sino más bien como el lugar donde se reúnen con personas de mayor edad, que intervienen a través de diversas actividades, y con los niños y niñas que participan de las actividades realizadas. Sumado a esto, en primera instancia, cuando nos reunimos con la dirigente del comité de vivienda, nos comentó que no visitaba la sede hace más de un mes, lo que da a entender que no es un espacio utilizado con frecuencia por la comunidad.

Por otro lado, la cancha, que se encuentra bajo la sede, se caracteriza por ser un espacio grande, con pequeñas bancas, columpios, “sube y baja” y un pequeño huerto construido por niñas y niños en alguna intervención voluntaria de actores externos. En cada visita se observó que la cancha era un lugar de encuentro entre niños y niñas y adultos y adultas, ya que se divisó a jóvenes de diversas edades, niñas y niños solo/as o acompañados de sus padres o madres. Además, alguno/as de los niños y niñas mencionan a la cancha como un espacio donde se desarrollan diversas actividades. No obstante, no es un espacio para que niñas y niños visiten solos o uno que se utilice con regularidad; más bien se le da uso los fines de semana junto a algún adulto o cuando se realizan actividades externas. Esto da a entender que, a pesar de que se menciona como un espacio relevante, no existe una relación tan estrecha con este lugar.

Niños y niñas presentaron una clara inclinación a mostrar y vincularse a espacios con mayor presencia de vegetación para explorar, los que corresponden, en su mayoría, a lugares que se encontraban fuera del comité. Esto se dedujo a partir de lo mencionado por algunos niños y niñas y de lo que ocurrió durante la aplicación de la subtécnica del fotovoz, en la que se priorizó asistir al sector del “cerro” debido a la presencia de flora, fauna y una “mejor vista”, lo que da cuenta de una imagen del cerro como un espacio para “salir de lo cotidiano”. Este fue el único sector al que niñas y niños quisieron sacar fotografías y al que constantemente fuimos llevadas durante la aplicación de las diversas subtécnicas. Adicionalmente, dada su

ubicación, el cerro permite tener una vista panorámica de la ciudad, lo que genera en niños y niñas una sensación de amplitud y libertad y hace que valoren este espacio por sobre otros lugares dentro del campamento.

3. Lo que niñas y niños creen e interpretan del campamento

Las valoraciones de niñas y niños acerca del campamento están asociadas al campo de representación, por tanto, a lo que creen e interpretan acerca del territorio habitado (Araya, 2002). Nos hemos dado cuenta, a través de los relatos de niñas y niños, de que existen múltiples núcleos simbólicos de la representación social, solidificados y establecidos mediante el proceso de objetivación que proviene de los múltiples contenidos conceptuales e ideas abstractas, identificadas en la información que poseen y la actitud que desempeñan frente al campamento (Tineo González & Ponte, 2013). Considerando el espacio y la pertinencia, nos limitaremos a presentar uno de cada grupo de niñas y niños.

Uno de los núcleos simbólicos de las representaciones sociales de niñas y niños de Villa La Pradera es el reconocimiento del territorio como un espacio de unión, amabilidad y solidaridad. Las niñas y niños que lo habitan señalan sentirse seguros y tranquilos viviendo allí. Esto se asocia al silencio, a la ausencia de ruidos molestos a los que podrían estar expuestos en otros espacios.

Por otra parte, también fue posible identificar la sensación de inseguridad y temor de lugares peligrosos. En contraposición a la sensación de seguridad y tranquilidad previamente descrita, esta se asoció a sectores o elementos externos a Villa La Pradera. De hecho, cuando se les preguntó por la existencia de lugares que les provocaran miedo o tristeza, la mayoría realizó un movimiento de cabeza en forma de negación. Durante la técnica del fotovoz, algunos niños comenzaron a cuestionarse “¿qué es peligroso?” y varios de ellos y ellas dieron ejemplos como los perros que vienen a dejar personas externas al comité, las personas que vienen de afuera a robar o a tomar alcohol en la plaza. Además, algunos niños y niñas hicieron alusión al sector que se encuentra debajo de Villa La Pradera, más conocido como la Villa Arauco, lugar en el que identifican disparos y drogas, elementos que ellos consideran peligrosos. Esto da cuenta de que reconocen el peligro como algo alejado, externo al comité de vivienda Villa La Pradera.

Lo anterior se explica como de uno de los efectos de la segregación residencial socioeconómica que propone Rodríguez (2001), el deterioro de la seguridad en la medida en que reconocen a un “otro” como potencialmente peligroso, en este caso, personas externas al comité de vivienda que habitan la Villa Arauco. Esto conduciría a que quienes habitan la Villa La Pradera utilicen mecanismos de protección y encierro, lo que crea una imagen de Villa La Pradera como un espacio seguro, donde no hay peligro, violencia, drogas u otras amenazas.

En Los Manantiales se identificó un núcleo simbólico que se relaciona con la imagen del campamento como un territorio inseguro, construida a partir de vivencias familiares e historias colectivas de episodios sucedidos en sectores cercanos, los que repercuten en la sensación de inseguridad en las calles del campamento. Niñas y niños hacen alusión a robos, desapariciones y maltratos que ocurren dentro del sector, además de episodios sucedidos en sectores cercanos al campamento, lo que los lleva a construir esta imagen de un hábitat inseguro.

Esta sensación de inseguridad se agudiza aún más debido a las restricciones de algunos espacios que niños y niñas tienen por parte de sus familias, pues no pueden hacer uso de espacios como “el cerro”, “el cerro de abajo”, “la cancha”, entre otros, sin la compañía de un adulto. Incluso a la hora de aplicar las subterfugas, estuvieron presentes las prohibiciones que tenían de ir a ciertos lugares solos y únicamente se justificó la visita a ellos durante la actividad y con la presencia de una persona mayor, en este caso, “las tías”. Atribuyen el peligro a la noche y a la presencia de gente extraña en el lugar. Además, las experiencias familiares relacionadas con delincuencia dentro del campamento generan que niños y niñas tengan, frente a sus pares, un discurso de inseguridad relacionado con el lugar en el que viven. Interpretan al campamento como un sector “malo” producto de los robos de los que han sido testigos o sobre los que han escuchado.

El deterioro de la seguridad y de la convivencia son efectos que se explican desde la lógica de la segregación residencial, ya que la sensación de inseguridad aumenta al reconocer a otros que son potencialmente peligrosos. Este temor conduce a la utilización cada vez más cotidiana de mecanismos de protección y encierro (Dammert, 2004). Esta situación se manifiesta en niños y niñas a través del mecanismo de protección que significa su casa, a la que reconocen como el lugar más importante para ellos y ellas.

Lo anterior genera como consecuencia que los niños y las niñas conciban sus prácticas cotidianas cada vez más desde la lógica de encierro, lo que los lleva a crear espacios dentro de sus casas como territorio seguro. Como se planteó anteriormente, estos permiten suplir los territorios comunitarios, y tanto la casa propia como la de otros niños y niñas se transforma en un lugar para reunirse y jugar. Al mismo tiempo, los lugares públicos son percibidos como inseguros; en particular, las calles y los espacios de encuentro comunitarios como la cancha y la sede son utilizados para intervenciones planificadas por organizaciones externas, por lo que siempre son empleados bajo la tutela de un adulto.

CONCLUSIONES

En primer lugar, quisiéramos exponer que cada uno de nuestros objetivos específicos conduce al objetivo general, el cual pretende responder a la pregunta de investigación.

En Villa La Pradera, el tipo de conocimiento está asociado a una lógica comunitaria, ya que las niñas y niños reconocen el sector a través de los espacios de encuentro y los conocimientos históricos están asociados a una historia compartida que, aunque muchas veces no ha sido vivida por ellos, de todas maneras manejan pues ha sido traspasada por otras generaciones. No ocurre lo mismo en Los Manantiales, donde poseen poca información del territorio, tienden a reconocer espacios externos como parte del campamento y no logran ubicarse tan bien en el espacio en cuanto a límites y conexiones del sector.

Por otro lado, los conocimientos históricos de niñas y niños de Los Manantiales están asociados a una historia más vivencial, personal y familiar, ya que, al no poseer mayor conocimiento sobre la historia de la comunidad, optan por relatar otras historias de las cuales se apropian para sentirse parte. A pesar de las diferencias nombradas, ambos grupos de niñas y niños conciben de igual manera la ubicación del campamento en relación con la ciudad de Viña del Mar. Aunque se expresa de distinta manera en ambos comités, existe una visión del campamento como un espacio cerrado y de Viña del Mar como una "otredad". Esta idea puede ser explicada como uno de los efectos de la segregación residencial socioeconómica que

propone Jorge Rodríguez (2001): el aislamiento social.

En cuanto a la actitud de niños y niñas hacia el campamento, en Villa La Pradera se hace referencia mayoritariamente al encuentro y las actividades que se realizan dentro de la comunidad en espacios como la sede social o las casas de algunos vecinos. Aun así, niñas y niños reconocen no tener una participación tan activa y relacionan sus hábitos cotidianos principalmente con el juego.

En Los Manantiales se reconoce que no existe mayor encuentro entre niños y adultos del comité. La cancha cumple la función de reunirlos, pero solo cuando asisten con sus padres o cuando se realiza alguna intervención de actores externos. En ambos comités de vivienda existe este tipo de intervención. No obstante, en Los Manantiales, la participación de niñas y niños se limita a esas instancias, mientras que en Villa La Pradera se generan actividades y encuentros autogestionados. En cuanto a los hábitos cotidianos del grupo de Los Manantiales, estos tienen que ver principalmente con la visita que realizan a espacios externos al campamento, como el cerro o el colegio, pero también existe una valoración por quedarse en el hogar.

Respecto al campo de representación ordenado y jerarquizado por las niñas y los niños de Manuel Bustos, logramos interpretar dos núcleos simbólicos en cada grupo de niñas y niños. En Villa La Pradera se manifiesta la idea nuclear de un territorio vinculado a la unión comunitaria, imagen que se construye a partir de conocimientos asociados a una his-

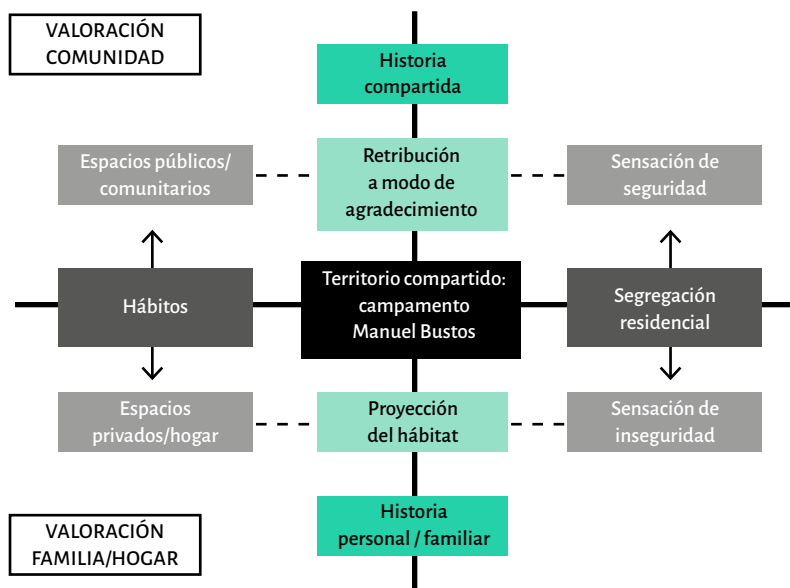
toria común y espacios de encuentro, y de prácticas espaciales relacionadas con la reunión. Además, existe una idea que tiene que ver con la seguridad, en la medida en que conciben a Villa La Pradera como un espacio cerrado y “aislado” de las inseguridades que de igual manera logran identificar, pero como elementos externos al comité de vivienda.

En cambio, en Los Manantiales se configura la idea nuclear de un territorio vinculado al hogar y a la familia, imagen elaborada a partir de conocimientos asociados a la experiencia personal y familiar, y de una actitud relacionada con la proyección fuera del campamento, pero siempre pensando en sus relaciones afectivas y familiares. Sumado a esto, hay un segundo núcleo simbólico que identifica a Los Manantiales como un territorio inseguro, el que se construye a partir de historias y experiencias familiares y colectivas vinculadas al peligro. En ese sentido, se construye una imagen del hogar como un espacio seguro. En ambos comités de vivienda, niñas y niños identifican dos otredades, adultos que habitan el campamento y quienes no lo habitan. Lo que creen que las personas externas piensan acerca de Manuel Bustos está vinculado a ideas que ellos consideran erróneas, tales como el peligro y el difícil acceso. La diferencia está en que en Villa La Pradera se cree que los adultos valoran el apoyo existente en la comunidad, mientras que en Los Manantiales se piensa que los adultos perciben el territorio como peligroso.

A pesar de que existe un territorio geográfico compartido entre los dos comités de vivienda en donde se realizó el trabajo de campo (Manuel Bustos), fue posible identificar que las representaciones sociales son diferentes en cada uno de los comités. Cada grupo de niñas y niños se refiere principalmente al territorio en el que habitan antes de referirse a la totalidad de Manuel Bustos. En ese sentido, conocimos dos representaciones sociales diferentes del territorio habitado, pero ambas cruzadas por la idea de segregación residencial.

En el caso de Villa La Pradera, las niñas y los niños poseen una representación social del campamento vinculada a lo comunitario, desde una historia compartida de valoración de los espacios públicos y de encuentro, y desde la sensación de seguridad dentro del espacio habitado. Lo anterior les invita a retribuir a la comunidad en forma de agradecimiento. En Los Manantiales, las niñas y los niños poseen una representación social del campamento que se relaciona más con la familia y el hogar, que se origina a partir de una historia personal más vivenciada y vinculada a lo familiar, y que se expresa en una valoración de los espacios privados, como el hogar, y en una sensación de inseguridad dentro del territorio. Lo anterior les invita a proyectarse en el futuro en otros espacios externos a Los Manantiales, a pesar de que siempre mencionan la relevancia de sus relaciones familiares y afectivas. El esquema que se presenta a continuación resume los principales hallazgos de la investigación y ayuda a comprender mejor lo planteado.

Figura 2. Representaciones sociales de niñas y niños de Villa La Pradera y Los Manantiales



Fuente: elaboración propia.

RECOMENDACIONES

Luego de responder a la pregunta de investigación, quisiéramos mencionar los principales aportes que hace este estudio. La contribución práctica más importante impulsada por esta investigación es que niñas y niños del comité de vivienda Villa La Pradera hayan exigido un espacio para ser escuchados y partícipes del proceso de urbanización en donde han ocupado una posición de espectadores invisibilizados. Durante la aplicación de las subtécnicas manifestaron preocupación por la eliminación de la plaza en la que solían reunirse y jugar, que corresponde al único espacio identificado por ellos y ellas como propio. Esta situación se volvió más eviden-

te durante la devolución participativa de los resultados, en la que realizaron una acción para ser escuchados y dar a conocer su preocupación y necesidad de contar con un espacio de recreación propio.

Niñas y niños consideraron que la mejor forma de explicar y hacer visible esta situación era mostrar, en una reunión realizada en la sede social, con presencia de autoridades del Serviu y los adultos del campamento, el material elaborado a partir de las subtécnicas aplicadas durante la investigación. Su propósito era que su visión fuera acogida y se tomaran acciones en torno a sus necesidades, planificando un comité desde y para todos.

Como segundo aporte, consideramos que la investigación, en algún grado, enriquece empírica y metodológicamente el enfoque de la nueva sociología de la infancia, pues este es uno de los pocos estudios que considera la niñez como digna de análisis desde una perspectiva que entienda a los niños y niñas como actores y protagonistas de su realidad social y de la misma investigación, dándoles una posición de coinvestigadores. Además, este estudio actúa como un puntapié inicial dentro de la sociología, ya que la academia se enfoca principalmente en investigaciones con adultos o, en su defecto, en problemáticas de niñas y niños que son abordadas desde sus apoderados o profesionales tratantes, como profesores, psicólogos u otros, quienes se enfocan netamente en “los niños problema” y no en lo que las niñas y niños quieren manifestar. En este contexto, la investigación viene a resaltar otros aspectos de la infancia, vinculados al hábitat y su relación con el territorio construido desde una mirada adultocéntrica.

Creemos que la presente investigación tiene la posibilidad de proyectarse hacia múltiples direcciones. Tres de ellas nos parecen sobresalientes. La primera se relaciona con el campamento Manuel Bustos, en donde parece interesante replicar la investigación cuando el proceso de urbanización esté finalizado. Esto, con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos antes y después de los cambios físicos en el campamento, lo que permitiría analizar si se producen o no variaciones en las representaciones sociales que niños y niñas elaboran a raíz de este proceso estructural.

La segunda proyección se vincula con la aplicación de la metodología en dos territorios segregados residencialmente pero que presenten diferencias socioeconómicas. Sería interesante abordar dos grupos de niñas y niños, uno de ingresos altos y otro de ingresos bajos. El objetivo sería contrastar las representaciones sociales que poseen niños y niñas acerca del territorio habitado y cómo se presenta la dualidad público/privado en estas dos instancias, cuestión que en el estudio pudimos visualizar, pero que consideramos necesario profundizar en otro tipo de investigaciones.

A su vez, consideramos importante que, en estudios de infancia, los niños y niñas sean actores y protagonistas de su realidad y de la propia investigación. Para eso, proponemos atreverse y apostar por metodologías en que estos sean coinvestigadores y partícipes en la elaboración de los instrumentos a utilizar en el estudio. En el caso de nuestra investigación, la aplicación del instrumento en el pretest fue pensada con la colaboración de un niño de Manuel Bustos que no sería considerado en la muestra, con el fin de recoger sus ideas y de esta forma evitar que las subtécnicas utilizadas estuvieran cargadas del sesgo adultocéntrico de las investigadoras. Esto no fue posible debido a los tiempos de la investigación, pero nos parece interesante que se pueda considerar en otras investigaciones con niñas y niños.

Por último, queremos hacer énfasis en advertir que, en la sociedad civil, los niños y niñas han sido históricamente concebidos y tratados como sujetos de protección. Las distintas iniciativas se

han enfocado en suplir necesidades y contrarrestar males, siempre desde las carencias de los niños y niñas y sin que ellas y ellos participen activamente. Es por esto que, en términos de políticas públicas, este grupo de la población no se involucra en ningún proceso y nos parece fundamental comprender que "no son sólo portadores de derechos y obligaciones; ellos son también la fuente y justificación de la presión de mandato y autoridad que el Estado y el gobierno invocan cuando toman decisiones colectivamente vinculantes" (Pnud, 2004, p. 59). Es por esto que creemos que se debe incluir a niños y niñas en el diseño de urbanización realizado en el diagnóstico previo al proceso de obra. Estos diseños se realizan con las comunidades en vías de urbanización, tal como ocurrió con los comités de vivienda que participaron en la investigación, involucrando a todos los actores que habitan y habitarán en el futuro un mismo territorio.

En conclusión, se hace fundamental incorporar a niños, niñas y adolescentes como actores sociales que ejercen su derecho a ser oídos y a opinar en todos los asuntos que les afectan. Asimismo, que sus opiniones sean consideradas, tanto en el proceso como en la entrega de información e insumos para la construcción de nuevas políticas públicas fundadas en un nuevo modo de relación entre el Estado y la ciudadanía.

BIBLIOGRAFÍA

- **Alvira, F. (2000).** Diseños de investigación social: criterios operativos. En M. García Ferrando, J. Ibáñez & F. Alvira, *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza Editorial.
- **Araya, S. (2002).** *Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión*. San José: Flasco.
- **Argos González, J., Ezquerro Muñoz, M. & Castro Zubizarreta, A. (2011).** Metáforas de la transición: la relación entre la escuela infantil y la escuela primaria y la perspectiva de futuros docentes de educación infantil. *Educación XX1*, 14(1), 135-156.
- **Bazán, I. (28 de febrero de 2016).** "El festival desde más arriba de la galería". *La Tercera*. Recuperado el 24 de julio de 2017 de <http://www.latercera.com/noticia/el-festival-desde-mas-arriba-de-la-galeria/>
- **Candia, D. (2005).** *Metas del milenio y tugurios: una metodología utilizando datos censales*. Cepal.
- **Casen (2017).** Encuesta de Caracterización Socioeconómica. Santiago de Chile.
- **Contreras, C. & Pérez, A. (2011).** Participación invisible: niñez y prácticas participativas emergentes. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 2(9), 811-825.
- **Dammert, L. (diciembre de 2004).** ¿Ciudad sin ciudadanos? Fragmentación, segregación y temor en Santiago. *Eure* (91), 87-96.
- **Durkheim, É. (1975).** *Educación y sociología*. Barcelona: Península.
- **Espinoza, C., Catalán, M., Guerra, A., Sandoval, J. & Ampuero, C. (2016).** Los lugares de autoría y actoría de niños y niñas como tácticas de resistencia en la vida cotidiana.
- **Gaitán, L. (2006a).** Sociedad, infancia y adolescencia. ¿De quién es la dificultad? *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 17, 29-42.
- _____ (2006b). La nueva sociología de la infancia. Aportaciones de una mirada distinta. *Política y Sociedad*, 43(1), 9-26. Recuperado el 26 de julio de 2017 de <http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0606130009A/22625>
- **Kaztman, R. (2001).** Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. Cepal.
- **Kaztman, R. (2003).** La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza urbana. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Santiago: Cepal, Eclac.
- **Marré, D. (2013).** Prólogo. De infancias, niños y niñas. En V. Llobet, *Pensar la infancia desde América Latina. Un estado de la cuestión* (pp. 9-25). Buenos Aires: Clacso.
- **Ministerio de Vivienda y Urbanismo (enero de 2013).** Mapa social de campamentos. Recuperado el 17 de julio de 2017 de Mapa Social de Campamentos: <http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txt-completo/mapasocial-campamentos.pdf>
- _____ (2013). *Proyectos de campamentos: viviendas, urbanizaciones y espacios públicos*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

_____ (17 de julio de 2017). Documentos Sector Vivienda. Obtenido de Documentos Sector Vivienda: http://documentos.minvu.cl/min_vivienda/decretos_exentos/Documents/DEDIJURN%C2%B0%20%20%20%2095.pdf

• **Moscovici, S. (1979).** *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires: Huemul S. A.

• **Noboa, A. (2013).** Diseño cualitativo de investigación social. En A. Marín & A. Noboa, *Conocer lo social: estrategias y técnicas de construcción y análisis de datos* (pp. 305-344). Madrid: Universidad de la República.

• **Observatorio de la Niñez y Adolescencia (2017).** *Infancia cuenta en Chile, Segundo Informe Observatorio Niñez y Adolescencia*. Santiago de Chile.

• **Pnud (2004).** *Desarrollo humano en Chile 2004*. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

• **Parsons, T. (1976).** *El sistema social*. Madrid: Editorial Revista de Occidente.

• **Pavez Soto, I. (2012).** Sociología de la infancia: las niñas y los niños como actores sociales. *Revista de Sociología* (27), 81-102.

• **Puerta, C., Hinestroza, P. & Montoya, V. (2008).** Cartografía sociocultural de Antioquia: Parque Nacional Natural "Los Katíos". En *Expedición Antioquia 2013*. Medellín: Iner, Instituto De Estudios Regionales Universidad De Antioquia.

• **Qvortrup, J. (1987).** Introduction to sociology of childhood. *International Journal of Sociology*, 17(3), 3-37. Recuperado el 4 de septiembre de 2017.

• **Rangel, M. (2009).** *Teoría de la representación social: revisión de enfoques significativos para la investigación*. Xihmai.

• **Risler, J. & Ares, P. (2013).** *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.

• **Rodríguez, J. (2001).** *Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?* (Eclac, Ed.): Cepal.

• **Rojas Flores, J. (2010).** *Historia de la infancia en el Chile republicano, 1810-2010*. Santiago: Junji.

• **Ruiz, J. I. (1996).** *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad de Deusto.

• **Sabatini, F. (2006).** *La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina*. Inter American Development Bank.

• **Sabatini, F. & Sierralta, C. (2006).** *Medición de la segregación residencial: meandros teóricos y metodológicos, y especificidad latinoamericana*. Documento de trabajo N°38.

• **Sabatini, F., Cáceres, G. & Cerda, J. (2001).** *Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción*. *Eure*, XXVII (82), 21-42.

• **Salamanca, A. & Martín-Crespo, C. (2007).** *El muestreo en la investigación cualitativa*. *Nure Investigación*. Recuperado el 17 de agosto de 2017 de <http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/340>

• **Salas Céron, L. (2010).** "Calidad de vida" y "la nueva sociología de la infancia", perspectivas de investigación social complementarias. *Hologramática*, 4(12), 83-95. Recuperado el 8 de septiembre de 2017 de http://www.cienciaried.com.ar/ra/usr/3/912/hologramatica_n12_v4pp83_95.pdf



EL HÁBITAT RESIDENCIAL Y SU DESARROLLO EN TORNO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MEDIANTE PRÁCTICAS DE AUTOCONSUMO REFERIDAS A CULTIVOS URBANOS¹

Alan Gregory Farmer Pérez²,
Universidad Viña del Mar



RESUMEN

El presente artículo analiza la producción de la vivienda de interés social y su relación con el entorno como oportunidad para implementar prácticas de autoconsumo asociadas al cultivo urbano a través del estudio de tres conjuntos habitacionales de la región de Valparaíso. El objetivo es estudiar el rol que cumplen las relaciones y prácticas socioespaciales, el diseño de las viviendas de interés social procedente de políticas habitacionales y la sustentabilidad derivada de la intervención de espacios públicos en desuso por medio del componente natural.

Así, es posible observar cómo el diseño de conjuntos y viviendas sociales condiciona y predispone la manera en que los habitantes se enfrentan y hacen uso de su entorno, en el cual se desarrollan las prácticas sociales según las posibilidades que este sea capaz de entregarles. Muchas veces, estas no existen o son ineficientes, por lo cual se plantea que la implementación del cultivo urbano como elemento capaz de recuperar espacios públicos en desuso, tanto física como socialmente, puede contribuir a la sinergia entre la vivienda, su entorno y sus habitantes, generando espacios convocantes en los cuales establecer y fortalecer las relaciones interpersonales, al dotarlos de nuevas áreas verdes de carácter productivo y autogestionadas por la comunidad.

Palabras clave: hábitat residencial, vivienda de interés social, autoconsumo, desarrollo sustentable, cultivo urbano, habitabilidad.

¹ Artículo basado en la tesis “La experiencia del habitar a través de las prácticas socioespaciales y el desarrollo de expresiones de autoconsumo en viviendas sociales contemporáneas”, realizada para obtener el título de arquitecto.

² Arquitecto, Ilustre Municipalidad de Nogales.

INTRODUCCIÓN

El hábitat residencial en torno a la vivienda de interés social se plantea como un ente dinámico sujeto a diversos cambios, dentro de los cuales no se han logrado apreciar mecanismos asociados a un desarrollo sostenible a través de la gestión de su espacio público. Este fenómeno sucede principalmente debido a que las políticas habitacionales se centran en mitigar el déficit habitacional sin abordar la vivienda y su entorno de forma integral, mediante conceptos de sustentabilidad y medio ambiente.

El presente artículo busca dar a conocer cómo el desarrollo sostenible de viviendas sociales se puede proyectar mediante la gestión y planificación de expresiones de autoconsumo, las cuales se desprenden de las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo socioeconómico y, al mismo tiempo, como un medio de rehabilitación urbana capaz de replantear espacios en desuso percibidos como zonas de riesgo mediante la generación de paisajes productivos autogestionados.

Al observar experiencias internacionales y tomando como referencia el proyecto Sociópolis expuesto en la Bienal de Valencia 2003 y dirigido por el arquitecto Vicente Guallart, quien sostiene que “el urbanismo del siglo XX era propio de la era industrial, mientras que en el siglo XXI tiene que responder a una nueva conciencia en relación con el entorno y el paisaje”, es posible proponer que, a nivel nacional, aún no existen políticas públicas que aborden

la capacidad regeneradora que poseen los espacios de autoconsumo y que permitan explorar y reflexionar sobre cómo y en qué medida la transformación del espacio público puede afectar el hábitat residencial a partir de sus diversas manifestaciones.

A lo largo de la historia, en Chile se han implementado diversas políticas habitacionales que han tenido por objeto dar una respuesta a la realidad y necesidad de sus habitantes de acuerdo al contexto social e histórico que ha enfrentado el país. En ese contexto, podemos encontrar diversas acciones que ha definido el Estado para abordar esta problemática y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias mediante la disminución del déficit habitacional, el incremento del acceso a la vivienda a través de la entrega de subsidios, el favorecimiento de la integración socioespacial y la promoción de la equidad territorial. Para ello, en la actualidad existen diversos programas habitacionales que de alguna manera han contribuido a dar solución a estas problemáticas, como el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.49, el Programa Habitacional para Familias de Sectores Medios D.S.01, el Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios D.S.27 y el Subsidio de Arriendo D.S.52, entre otros. Cada uno de ellos está abocado a satisfacer los problemas habitacionales que presentan las familias considerando la realidad socioeconómica de cada grupo familiar.

A partir de este contexto, al modelo socioeconómico preexistente se le integra el concepto de medio ambiente, a través del cual la noción de desarrollo adquiere el carácter de desarrollo sustentable, concepto que fue planteado por primera vez en el Informe Brundtland, “Our Common Future”, de 1987, que hacía referencia a la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Debido a esto y para satisfacer los requerimientos medioambientales que se desprenden de este nuevo concepto, se crea la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable³, cuya principal función es coordinar un plan de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos y obligaciones emanadas del Convenio Interministerial de Construcción Sustentable de 2012.

A pesar de que a partir de este momento se comienza a considerar la sustentabilidad como una directriz para el desarrollo de políticas públicas, dentro de las cuales destacan los estándares de construcción sustentable para viviendas de Chile y el manual de elementos urbanos sustentables elaborados por el área de construcción sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), estas directrices aún no han logrado verse reflejadas en los procesos de producción del hábitat residencial en torno a las viviendas de interés social.

Es por eso que, hasta el día de hoy, en Chile no se han implementado modelos de diseño habitacional que pretendan hacerse cargo del espacio público en función del autoconsumo. Este artículo busca contribuir, desde la perspectiva del desarrollo habitacional sostenible, a la aplicación de estrategias de diseño que permitan generar mejoras en la percepción del hábitat residencial, incentivar la apropiación de espacios comunes en desuso, generar nuevos paisajes urbanos sujetos a la gestión comunitaria, promover el autoconsumo como modelo de desarrollo socioeconómico y generar estándares de diseño sustentable para la producción de viviendas sociales. Todos estos factores son considerados como elementos que potencialmente permitirían promover la integración a nivel comunitario y generar recomendaciones capaces de contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

MÉTODO

Para comprender el fenómeno socioespacial que implica la posible inserción de cultivos urbanos dentro de conjuntos de viviendas sociales se aplica una metodología de carácter cualitativo, que evita la cuantificación de los datos, con el objetivo de producir registros narrativos y gráficos de los fenómenos investigados. En este sentido, los datos se obtienen a través de tres procedimientos

³ Creada dentro de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional (Ditec) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el año 2012. La Secretaría Ejecutiva de Construcción tiene como finalidad coordinar, promover, difundir y fomentar lineamientos para la construcción sustentable en Chile.

tos; el análisis teórico de conceptos relacionados con las prácticas sociales, la vivienda de interés social y las expresiones de autoconsumo; el estudio de tres casos de conjuntos habitacionales mediante la observación arquitectónica; y la realización de entrevistas aplicadas a los habitantes de los casos analizados, las que se utilizaron como parte integral de la observación para poder definir elementos y situaciones urbanas dentro de las cuales se desenvuelven los habitantes.

En primer lugar, el estudio se centró en el análisis teórico al definir los ejes del desarrollo sustentable que se vinculan con la producción de la vivienda de interés social, identificando su impacto urbano y sus beneficios para la comunidad dentro del espacio arquitectónico, el cual queda determinado por la vivienda y su entorno, donde se desarrollan las prácticas sociales.

Entonces, para obtener la información necesaria para el análisis, se realizó el estudio a través de la observación arquitectónica de tres conjuntos habitacionales del Gran Valparaíso: la población Gómez Carreño, 7 Hermanas y Quebrada Márquez, los que fueron seleccionados debido a sus diversas maneras de emplazarse frente al contexto y sus particulares modos de habitar.

Luego, para abarcar un análisis teórico de la vivienda de interés social, se realizó el estudio histórico de las políticas habitacionales implementadas en Chile, para lo cual se consultó el artículo “La vivienda social en Chile: la acción del Estado en un siglo de planes y programas” del profesor e investigador Rodri-

go Hidalgo Dattwyler. A partir de esto se plantearon los avances propuestos por las políticas habitacionales que han ido desarrollándose por medio de los programas implementados por el Gobierno en la actualidad.

Al mismo tiempo, mediante el estudio de casos y como complemento del análisis a través de la observación arquitectónica, se realizó una serie de 12 entrevistas de carácter semiestructurado, compuestas de tres preguntas, que fueron aplicadas a cuatro habitantes de cada conjunto.

Esta serie de entrevistas tuvo como propósito conocer la percepción de los habitantes sobre la factibilidad de generar cultivos urbanos comunitarios dentro de cada conjunto habitacional, para posteriormente definir y analizar las posibles manifestaciones de cultivos urbanos capaces de implementarse en cada uno.

Una vez concretada la recolección y análisis de datos, se realizó el proceso de interpretación de estos, cuya finalidad fue identificar mecanismos de producción del cultivo urbano, definiendo los beneficios y obstáculos que la implementación de estos podría significar para la comunidad, para de este modo lograr establecer una serie de directrices que puedan servir de base para la producción de mecanismos de autoconsumo y su posible aplicación dentro de políticas habitacionales de desarrollo sostenible.

RESULTADOS

Sociedad, economía y medio ambiente en el desarrollo de la ciudad y el hábitat residencial

Considerando la planificación territorial que se ha ido desarrollando en las ciudades, es necesario generar estrategias que permitan cambiar el paradigma de desarrollo urbano, emplazar la ciudad hacia un medio sustentable, impulsar la inclusión del hábitat natural y generar modelos de rehabilitación urbana que permitan integrar otros elementos naturales para mejorar el hábitat residencial.

A través del tiempo, las ciudades han ido experimentando cambios en relación a

los usos de suelo, integrando distintas aplicaciones prácticas para su desarrollo. Un ejemplo de ello son los cultivos urbanos, que representan una forma de intervenir el espacio de las ciudades y actúan como agentes articuladores de la comunidad y permiten transformar los espacios comunes. Desde esta perspectiva, incorporando el componente urbanístico y social, se entiende que el espacio público es un espacio vivo y de posible uso comunitario, que podemos transformar y mejorar entre todos.

La Figura 1 presenta la relación entre los ejes del desarrollo sustentable y la implementación del cultivo urbano dentro de la producción de viviendas sociales y sus beneficios como nuevo modelo habitacional sostenible.

Figura 1. Ejes de desarrollo sustentable y beneficios del cultivo urbano en la producción de vivienda sociales



Fuente: elaboración propia.

Prácticas sociales dentro de la experiencia del habitar

Rodríguez (2018) plantea que las prácticas sociales surgen como la manera en la que los humanos nos relacionamos con otros y con nuestro entorno. Al necesitar estructurar y poner normas a la forma en la que se comportan, las personas que conforman una sociedad van desarrollando sus hábitos y pautas sobre lo que es correcto y lo que no.

El actuar humano está sujeto a una serie de elementos que contribuyen a constituir las prácticas sociales asociadas a un

lugar y tiempo determinado. Estos elementos tienen su expresión en sistemas definidos por lo natural, espacial, cultural, económico, etc. que, al interrelacionarse de diferentes formas, dan pie a lo que conocemos como el habitar.

Uno de estos elementos es la concepción de jerarquía por distancias, las que se construyen según las distancias interpersonales y les permiten a los individuos tener conocimiento sobre cómo otros se desenvuelven dentro de su espacio íntimo y el colectivo social a través de las prácticas sociales, las que quedan definidas en la Figura 2.

Figura 2. Distancias interpersonales en la escala humana

JERARQUÍA EN LA ESCALA HUMANA SEGÚN DISTANCIAS INTERPERSONALES	
Zona íntima	Se describe como la distancia zonal más importante y la que una persona cuida como su propiedad. Solo se permite la entrada a los que están, emocionalmente, muy cerca de la persona, como pareja, padres, hijos, amigos íntimos y parientes cercanos.
Zona personal	Representa la distancia que separa a dos personas en un acto social, ya sea en una reunión, una fiesta, una oficina, etc.
Zona social	Es la distancia que las personas mantienen con otros que les resultan desconocidos o poco conocidos.

Fuente: elaboración propia.

Para abordar el fenómeno del habitar hay que comprender que este se encuentra intrínsecamente ligado a la relación con el contexto en el cual se presenta, por lo que se ve afectado por una serie de distancias interpersonales que para bien o para mal definen el espacio existencial de las personas y le dan jerarquía, orden y legibilidad. Por lo tanto, el diseño de la vivienda y su espa-

cio público debe ser capaz de responder a estas zonas y distancias interpersonales, de tal manera de otorgar espacios de circulación, encuentro y detención según la necesidad y experiencias de los habitantes.

A partir de esto, se plantea una reflexión sobre tres situaciones analizadas en la investigación “La experiencia del ha-

bitar a través de las prácticas socioespaciales y el desarrollo de expresiones de autoconsumo en viviendas sociales contemporáneas” en la que se basa este artículo y que indaga en el hábitat residencial y su desarrollo en torno a la vivienda de interés social mediante prácticas de autoconsumo referidas a cultivos. Allí, se analiza el fenómeno desde las dimensiones social, económica y medioambiental y se realiza una analogía con las prácticas sociales relacionadas a la experiencia del habitar, la producción de la vivienda de interés social y la implementación de expresio-

nes de autoconsumo dentro del hábitat residencial, respectivamente.

Tomando como referencia el estudio realizado a partir de las experiencias de las poblaciones Gómez Carreño, 7 Hermanas y Quebrada Márquez, se establecen relaciones entre el diseño de cada conjunto habitacional y su influencia sobre el habitar de las personas según las prácticas sociales definidas mediante las distancias interpersonales y la posible implementación de expresiones de autoconsumo en cada conjunto habitacional.



Fuente: elaboración propia.

1 > Población Gómez Carreño / Viña del Mar⁴

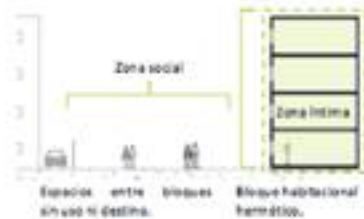
Este conjunto habitacional se encuentra ubicado en la comuna de Viña del Mar, entre Reñaca, Santa Inés, Achupallas y Glorias Navales, y está conformado

por viviendas en altura de hasta cuatro pisos y casas pareadas. Para el estudio solo se analizó una etapa de los blocks habitacionales.

El conjunto está compuesto por nueve blocks posicionados de manera simétri-

⁴ El barrio tiene su origen en el año 1962, de la mano del entonces alcalde Gustavo Lorca, quien inició las primeras gestiones para su construcción. El alcalde consiguió el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del proyecto, el cual sería ejecutado por la Corporación de la Vivienda (Corvi).

ca, los cuales configuran una manzana abierta y atravesable, la que se muestra permeable respecto a su entorno, generando circulaciones interiores y propiciando la aparición de vacíos entre los



blocks, lo que denota un claro contraste con el hermetismo de los departamentos y su poca relación con el espacio público.

Zona personal: no se aprecian espacios dentro de los cuales exista una instancia de encuentro entre los residentes.

Zona social: no existe infraestructura ni diseño y solamente sirve al tránsito peatonal y vehicular.

Zona íntima: espacio hermético sin relación con el entorno.



Fuente: elaboración propia.

En esta situación urbana, al no existir un área que pueda definirse como zona personal, se hace evidente la inexistente vida en comunidad y la nula apropiación del espacio público presente en el conjunto. Esto queda en evidencia al conversar con los transeúntes, quienes en su mayoría no forman parte del conjunto, sino que únicamente transitan a través de él a modo de atajo a sus destinos.

Lo anterior permite establecer que el diseño hermético de los bloques habitacionales y la falta de planificación del

espacio entre estos no posibilita condiciones adecuadas para entablar relaciones de comunidad a través de las prácticas sociales, quedando estas limitadas a los espacios interiores de la vivienda.

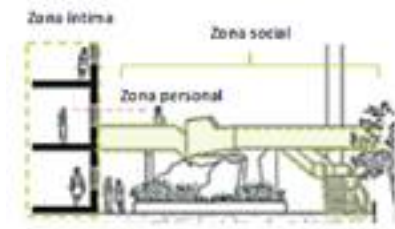
2 > Población 7 Hermanas / Viña del Mar⁵

Este conjunto, ubicado sobre la quebrada colindante a la Quinta Vergara en la ciudad de Viña del Mar, se emplaza en un espacio reducido y se asienta sobre plataformas naturales, a la vez que se integra a la morfología del lugar. Allí

⁵ Este conjunto de torres fue construido por la ex Caja de Empleados Particulares, la cual generó inscripciones especiales con puntaje para ordenar la lista de postulantes según una tabla de prioridad. Por lo tanto, este conjunto no responde a una vivienda social para personas de pocos recursos, sino que a una destinada a personas de clase media en 1970.

aparecen elementos vinculantes y espacios comunes que van conformando una red de circulaciones y lugares de encuentro público con un carácter privado. Esta población contempla un sistema de pasarelas y terrazas que permiten la circulación entre los bloques, espacios

donde el proyecto encuentra su máxima expresión del habitar. Al ser elementos convergentes y de distribución, las personas se encuentran en el punto medio, donde logran el contacto social y se relacionan fuera de sus departamentos.



Zona personal: elementos de circulación y estancia que propician el encuentro y contacto entre residentes.

Zona social: la apropiada infraestructura está en directa relación con los bloques habitacionales, lo que favorece las relaciones sociales y la vida de barrio.

Zona íntima: bloques en relación con el espacio público.



Fuente: elaboración propia.

Así como su estructura vertical está bien definida por los bloques habitacionales, también lo está su espacio horizontal, que permite contener un hábitat residencial único en el cual se contempla la vivencia comunitaria y donde es posible encontrar situaciones que quedan definidas por la influencia que ejerce el espacio público y sus elementos sobre los bloques residenciales. Es posible apreciar aquí cómo las personas se relacionan tanto dentro de su zona personal como desde su zona íntima hacia la zona social.

La morfología, pasarelas, circulaciones interiores, etc., aparecen como los recursos propios que entrega el conjunto desde su emplazamiento, lo que logra darle una vitalidad singular en el contexto de su espacio público.

3 > Población Quebrada Márquez / Valparaíso⁶

La población Márquez, ubicada contigua al sector de La Matriz en la ciudad de Valparaíso, se emplaza en un terreno singular de la quebrada, en un espacio angosto y de gran extensión. Este conjunto abarca cinco blocks dispuestos de manera longitudinal a la quebrada, construidos con el propósito de seguir la continuidad de su contexto en diferentes niveles, generando terrazas y espacios intermedios.

La particularidad de este conjunto no reside solo en su arquitectura singular,

ya que esta es consecuencia del proceso de apropiación de la morfología de la ciudad, algo muy propio de Valparaíso por su peculiar emplazamiento. A esto se suma su condición de vivienda social, entendida no solo como un objeto individual, sino que inserta en un contexto de barrio, por lo que se ve afectada por un sinnúmero de fenómenos. Así, el potente manejo del habitar generado por esta obra está indiscutiblemente relacionado con su diseño, que replanteó la quebrada como una oportunidad y permitió aprovechar las ventajas morfológicas que esta ofrece. Esto hizo posible dejar de verla como un espacio de riesgo dentro de la ciudad.



Zona personal: circulaciones que se ocupan como pequeños patios y áreas de encuentro.

Zona social: la calle que queda contenida por los bloques se presenta en estrecha relación con las áreas de circulación (zona social) del conjunto

Zona íntima: bloques habitacionales encarados entre sí, que contienen y son espectadores del espacio social y personal de los habitantes.



Fuente: elaboración propia.

⁶ El conjunto habitacional, destinado a albergar viviendas sociales, fue edificado entre los años 1946 y 1949 a través de la Caja de Habitación Popular del Estado, bajo el gobierno del presidente Gabriel González Videla. Fue declarado Monumento Nacional de Chile, en la categoría de Zona Típica, mediante el Decreto Exento N°605, art. 1°, del 31 de agosto de 2001.

Como no posee un espacio público definido, la población Quebrada Márquez contiene espacios de circulación que actúan como pequeños patios. Estas zonas de circulación, definidas a través de la zona social, actúan como extensiones del espacio residencial (zona íntima) y son contenedoras del acto público y las relaciones socioespaciales.

Asimismo, estos corredores se convierten en balcones que entregan la posibilidad de interacción entre los habitantes del conjunto, los que se apropian del

área que enfrenta sus departamentos, incluso cerrándola para convertirla en un espacio privado. Esta versatilidad construye el espacio, dándole forma y propiciando la vida de barrio.

A partir de estos análisis y al comparar las diversas situaciones, queda en evidencia que el diseño de un espacio influye en las decisiones o elecciones que las personas pueden tomar. A estas influencias las denominaremos patologías urbanas, según lo definido por Bentley (1999).

Figura 3. Patologías urbanas

Influencia del diseño arquitectónico en la toma de decisiones del habitante Patologías urbanas	
Variedad	Gama de actividades disponibles tanto dentro del conjunto como en su entorno.
Legibilidad	Capacidad para comprender las oportunidades que se les presentan a los habitantes.
Versatilidad	Utilización de un espacio por parte de los habitantes para diferentes propósitos.
Personalización	Capacidad del lugar para que las personas puedan imprimir su propio sello.

Fuente: elaboración propia a partir de Bentley (1999).

Producción de la vivienda de interés social

A lo largo de la historia de Chile es posible encontrar diversas políticas habitacionales, las que se han centrado en dar respuesta a las necesidades de cada época y grupo familiar. A partir de ellas se han implementado diversas acciones tendientes a satisfacer la demanda habitacional de las familias focalizadas en la población de extrema pobreza.

En este contexto histórico, las normativas y acciones realizadas a finales del siglo XIX fueron conocidas como “políticas malsanas”, pues no consideraban de manera adecuada la higiene de las viviendas y los espacios. Para responder a esta amenaza crítica, en 1906 se promulga la Ley 1.838 de Habitaciones Obreras, la cual funcionaría como punto de partida de un largo camino desarrollado por el Estado chileno para aproximarse a dar solución al déficit habitacional existente.

Las políticas venideras no lograron asimilar el deterioro social emergente, por lo que se tomaron nuevas decisiones en la segunda y tercera década del siglo XX. Las condiciones sociales y los vaivenes económicos relacionados con los diferentes momentos de crisis, junto a las propias limitaciones de las normativas anteriores, desencadenaron que los grupos más afectados comenzaran a manifestar su malestar por la carencia de una vivienda (Hidalgo, 1999).

Buscando respuestas a estos problemas, comienzan a asentarse los primeros cimientos de un desarrollo social en torno al concepto de vivienda, ya con bases institucionales definidas que empezaron a velar por el bienestar social y calidad de vida de las personas.

En la actualidad, se intenta abordar la vivienda y su comportamiento como elementos fundamentales que inciden sobre el desarrollo social al impactar en la calidad de vida del núcleo familiar. Esta mirada integral abarca los diferentes niveles y componentes que inciden en el desarrollo socioespacial de la comunidad. Así, debiera abandonarse la reflexión en torno a la vivienda de interés social como un elemento aislado, para pasar a una visión global de sus componentes urbano-arquitectónicos, lo que proporcionaría un análisis de mayor complejidad que permitiría desarrollar políticas habitacionales más ricas y con mayor proyección social.

A nivel urbano, los espacios privados son las viviendas. El lugar donde la persona reside abarca el concepto de hogar, el cual puede variar según el modo de habitar. En un extremo están las vi-

vindas unifamiliares, donde el núcleo básico es la familia, y en el otro, cuando se le da gran importancia al ámbito público, aparece una forma de vida en que los habitantes residen juntos como una comunidad (Norberg-Schulz, 1971).

A nivel institucional, los programas habitacionales perciben la vivienda como una “unidad habitacional” y no entienden que el valor asignado a estas se encuentra estrechamente relacionado con su localización y el entorno donde se emplazan. Si bien en la actualidad es posible encontrar acciones públicas a través de iniciativas como el Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales, el Programa de Recuperación de Barrios, los Espacios Públicos Concursables y el Subsidio de Integración Social y Territorial, entre otras medidas que buscan hacerse cargo del hábitat residencial de manera integral, abordando su espacio público y buscando diseños que respondan a las necesidades y expectativas de sus futuros residentes, estas acciones no logran verse reflejadas de manera integral en las políticas habitacionales, pues hasta el momento se presentan como soluciones aisladas que, por el contrario, debieran integrarse desde el inicio, al momento de pensar el desarrollo de la vivienda de interés social y su entorno.

Esta visión segregadora de la vivienda con su entorno, que por lo general se ha mantenido, ha contribuido a que la participación del Estado quede principalmente reducida a la entrega de subsidios, lo que ha llevado a la desaparición de este como ente regulador, proyectista, defensor de familias vulnerables y constructor de vivienda y entorno.

Debido a esto, se ha mantenido de manera sostenida una serie de deficiencias en el proceso de producción de la vivienda, las que hablan de la urgencia de tomar partido por el diseño de la vivienda de interés social. Las más relevantes están relacionadas con:

- Habitabilidad
- Flexibilidad
- Contextualidad
- Diversidad
- Participación
- Autoconstrucción

La producción de la vivienda de interés social debiese entenderse como un fenómeno transversal que emerge de la participación ciudadana y las políticas habitacionales vigentes, las cuales son reflejo vivo de una idiosincrasia, una época y el desarrollo socioeconómico del país.

Es en este punto donde se comienza a plantear una idea del barrio que contemple todos sus niveles, pues la vivienda no solo se define como el espacio físico particular, sino que engloba su relación con el entorno y cómo este se hace partícipe de las relaciones socioespaciales que se desarrollan en él, lo que lo convierte en parte esencial de la urbanización y densificación de la ciudad, cuidando la trama y estableciendo centros de desarrollo social. Existe una serie de conceptos relacionados con el diseño habitacional de carácter social, algunos de los cuales han sido definidos por Martínez (2001) y que se presentan en la Figura 4.

Figura 4. Conceptos generales sobre el diseño de la vivienda de interés social

1. Estudio de contexto > Estudio de lo natural – social – cultural – urbano arquitectónico

Unidad territorial	Para establecer un estudio de contexto se debe tener en cuenta que este se encuentra asociado a una unidad territorial, la cual se compone de una serie de factores.			
	Ecológico	Espacial	Paisajístico	Social

2. Participación > Experiencia del habitante / familias

La participación se concibe como un encuentro entre los excluidos y aquellos elementos de la sociedad que mantienen o hacen cumplir la exclusión.

Políticas habitacionales	Se debiese consolidar un modelo participativo de gestión habitacional y urbana capaz de reconocer los componentes que tocan o tienen algún grado de influencia dentro de cada propuesta, a fin de hacerlos partícipes del desarrollo socioespacial proyectado.
Procesos participativos	

3. Progresividad > Tamaños insuficientes / autoconstrucción

Transformaciones de la vivienda	Serán ajenas al diseño si se plantean como rígidas, por lo que se deberá proyectar la vivienda pensando en su progresividad de acuerdo a:
> Mejoramientos	> Modificaciones
> Ampliaciones	> Temporalidad
	Soporte: áreas que no se pueden transformar Unidades reemplazables

4. Habitabilidad mínima aceptable > Forma arquitectónica y urbana que debe establecer condiciones de funcionalidad, materiales, paisajísticas y urbanas según el caso

La vivienda de interés social debe adaptarse a las necesidades de las familias	Hab. de usuarios / familias	Concebida de forma empírica
	Hab. concedida por el Estado	Conceptos genéricos-prácticos

5. Proyección y producción de la vivienda > La vivienda no es en sí misma, sino que es la vivienda y todo su entorno en el loteo y la ciudad

La producción de la vivienda de interés social deberá entender los espacios arquitectónicos y urbanos como un proceso de:	Crear Producir Usar	Dentro de esta producción se detectan deficiencias referidas a:	Diversidad Participación Autoconstrucción
---	--	---	--

6. Políticas habitacionales > Conjunto de acciones que el país pone en práctica en la vivienda y su entorno, expresadas a través del Minvu y los Serviu

Se detectan defectos del diseño arquitectónico y construcción de las viviendas de interés social dentro de las políticas habitacionales existentes	Habitabilidad mínima Diseño arquitectónico Solución integral Patologías sociales	- Tamaños de espacios insuficientes - Falla en las partidas principales - Falta de preocupación por el entorno y equipamientos - Malos diseños y modificaciones por autoconstrucción
--	---	---

7. Vivienda dinámica > Capacidad de cualquier modificación o alteración al espacio original basada en una necesidad de hacer propio el hábitat residencial

Expansibilidad	- Está dada por el crecimiento o ampliación de la vivienda por incorporación de nuevos elementos
Convertibilidad	- Definida como los cambios orgánicos internos de la vivienda en el número, tamaño y/o función de los recintos
Versatilidad	- Necesidad de generar espacios destinados a una actividad que se superpone con las funciones propias del hábitat residencial

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez (2001).

Expresiones de autoconsumo dentro del hábitat residencial

La aparición de cultivos urbanos dentro de la ciudad responde a una serie de factores urbanísticos, sociales, paisajísticos, económicos y ambientales. Desde la planificación de la ciudad y tomando en consideración la experiencia de iniciativas que impulsan su desarrollo, se plantea que

“la importancia estratégica que podrían tener los cultivos urbanos en la rehabilitación urbana ecológica con el objetivo de conseguir ciudades más sostenibles debe entenderse de una manera integral, por tanto las intervenciones en el entorno construido deben responder tanto a aspectos ambientales como sociales” (Morán, 2008).

Del mismo modo, debe pensarse en su relación con la arquitectura y contexto.

Por lo tanto, la aplicación práctica de cultivos dentro del tejido urbano tiene como finalidad el desarrollo sociocultural que se expresa en la rehabilitación de un espacio en desuso dentro de la ciudad, el cual posee la capacidad de ser un elemento de desarrollo social por su impacto económico y un elemento de cultura e inserción urbana por su relevancia como área verde y elemento paisajístico. Se promueve, de este modo, el desarrollo de barrios más sostenibles en función de los componentes que se presentan en la Figura 5.

Figura 5. Función del cultivo urbano

Función del cultivo urbano como componente activo para la configuración de barrios más sostenibles	
Productiva	Se centra en la generación de recursos naturales y materias primas para el autoconsumo a través del cultivo.
Medioambiental	Está relacionada con el potencial de los huertos urbanos para conservar y rehabilitar los valores y las funciones ecológicas, culturales y paisajísticas de los espacios en desuso, promoviendo el reciclaje y el cuidado del entorno.
Social	Se desarrolla través de actividades educativas, lúdicas, terapéuticas, etc., asociadas a los huertos, lo que al mismo tiempo contribuye a la apropiación de espacios vistos como áreas de riesgo, lo que incrementa la seguridad social.
Estética	Se presenta gracias a las diversas manifestaciones del huerto, las que generalmente constituyen un referente de variedad, riqueza visual y armonía, y tienen un papel destacado en el paisaje urbano de los espacios públicos.
Saludable	Existe una relación estrecha entre la salud de las personas y el huerto urbano, ya sea por los beneficios alimentarios propios del autocultivo como por las mejoras en el estado anímico de quienes se hacen cargo de este tipo de manifestaciones.

Fuente: elaboración propia a partir de León, Lerma, López & Alía (2015).

Para algunos ciudadanos, este tipo de iniciativas provee un lugar de ocio donde cultivar y relacionarse con otras personas, pero para todos es una zona verde que aporta una mejora espacial y cohesión social que aumentan la denominada "vida de barrio" (Monfort, 2011). Dentro de las prácticas de autoconsumo se pueden encontrar diversas manifestaciones de las huertas como formas de intervención del espacio urbano, las que a partir del estudio realizado se dividen en huertos urbanos, reutilización de infraestructura y huertas residenciales. A continuación, se analizan de acuerdo a los casos seleccionados.

Aplicaciones prácticas de la huerta / Expresiones singulares de autoconsumo

Huertos urbanos

Son lugares de inserción social, donde las personas son capaces de apropiarse de un espacio en desuso de la ciudad y generar una transformación en pos del bien común, donde las prácticas sociales se tornan el germen de la acción comunitaria. Es en este contexto donde aparecen los "vacíos urbanos autogestionados".

Aplicación de expresiones de huertos urbanos dentro de la población Gómez Carreño

A partir del estudio realizado se puede concluir que la implementación de prácticas de autoconsumo dentro de la población Gómez Carreño, teniendo a la vista el momento actual de la comunidad y que no se han planteado como grupo la idea de desarrollar este tipo de acciones, no sería factible. Sin embargo, es posible encontrar manifestaciones de apropiación del espacio público que albergan cultivos, las que se presentan de manera aislada, sin constituirse como un modelo replicable dentro del conjunto.

En este momento, los grandes espacios comunes en desuso no se ven como una oportunidad y el arraigo y falta de seguridad serían elementos decisivos en la toma de decisiones para una próxima implementación de políticas de autoconsumo. A la vez, se plantea que, de manera proyectual, es posible implementar la gestión de prácticas de autoconsumo pensando que:

- Se logra observar un nuevo destino utilitario para un espacio en desuso.
- Se genera una estructura paisajística inexistente dentro del conjunto.
- Se crean espacios autogestionados donde es posible desarrollar actividades de ocio y recreación comunitaria.
- Se retrae la vivienda, potenciando la seguridad a través del distanciamiento y despliegue del espacio público y el bloque.



Por el contrario, encontramos que, en la actualidad, a través del modelo habitacional tipo que presenta el conjunto, se producen:

- Espacios sin destino, terrenos baldíos.
- Trazado urbano no planificado.
- Administración inexistente, terrenos sin intervención vecinal o municipal.
- Bloques aislados sin relación contextual.
- Habitabilidad reducida al espacio interior. Soleamiento excesivo/ Efecto isla de calor

Huertas residenciales

Estas se encuentran principalmente en espacios acotados o cerrados, ya sea balcones, muros, etc. Están destinadas a satisfacer necesidades básicas de alimentación y funcionan como un componente natural dentro del espacio residencial. Su desarrollo es el más común dentro de las prácticas de autoconsumo por su fácil mantención y el poco espacio que requieren. Este tipo de prácticas se define por tener una gran cantidad de tecnologías de aplicación y estar ligadas al ingenio de las personas para crear huertos dentro de espacios reducidos o con una morfología diferenciada. Existen diversos tipos de huertas.

Aplicación de expresiones de huertas residenciales dentro del conjunto habitacional 7 Hermanas

A partir del análisis realizado se plantea que, si bien la estructura comunitaria a nivel de conjunto se encuentra disminuida, existen pequeños grupos que actúan de forma paralela a la junta de vecinos, denominados juntas de vigilancia, los cuales actúan como grupos cerrados. Debido a esta segregación se hace complejo el desarrollo de prácticas de autoconsumo a nivel comunitario. Sin embargo, el hecho de que algunas personas se apropien de espacios comunes para la creación de jardines particulares da una base para pensar que el espacio está capacitado para su desarrollo. Estas no se producen debido, principalmente, a que no existe el conocimiento ni se ha visibilizado la posibilidad y beneficios que pudiese traer la incorporación de huertos dentro de los espacios que el mismo conjunto habitacional ofrece.

En este sentido, dependiendo del modo en el que las personas utilizan los recursos que el mismo conjunto es capaz de otorgar, el uso y la apropiación del espacio público residencial se lleva a cabo espontáneamente en diversas áreas de este. Gracias a la conversación con algunos residentes podemos conocer sobre la existencia de pequeñas ocupaciones cuyo fin es generar pequeños jardines y, en algunos casos, la aplicación de huertos personales, lo que permite establecer que:

- Se logran identificar situaciones de cultivos particulares, tanto ornamentales como para consumo, dentro de los espacios públicos existentes.
- La infraestructura particular del conjunto contribuye y potencia la apropiación espontánea de pequeños espacios para el desarrollo de expresiones de autoconsumo.
- Debido a que el conjunto por sí mismo presenta recursos tales como pe-

queños patios entre bloques, jardines aterrazados, pasarelas, entre otros, se plantea como posible la generación de áreas verdes dentro del espacio público. Sin embargo, la estructura comunitaria poco consolidada dificulta guiar estas prácticas de una manera que las convierta en espacios de autoconsumo, ya que estos requerirían de cuidados y organización especial por parte de la comunidad.



Reutilización/rehabilitación de infraestructura

Un modo de accionar en el desarrollo de cultivos urbanos es la reutilización de la infraestructura preexistente. Esta puede producirse en el contexto de diversos tipos de iniciativas, dentro de las cuales están las que se producen en edificaciones en desuso, a las que se les otorga un destino utilitario para una comunidad que no cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de estas prácticas, lo que pone de manifiesto las iniciativas de un grupo o comunidad residencial que dentro de su propio espacio genera prácticas de desarrollo comunitario. La reutilización puede dar origen a huertas urbanas verticales, colgantes y en terrazas.

Aplicación de expresiones de reutilización de infraestructura dentro de la población Quebrada Márquez

El fenómeno de apropiación y arraigo dentro del conjunto, que se lleva a cabo en los pasillos y espacios intermedios entre bloques habitacionales y la pendiente que da origen al asentamiento irregular sobre el terreno, propicia su utilización como espacio doméstico donde es posible desarrollar acciones netamente residenciales, compartiendo un espacio común con los vecinos, que a su vez disponen de igual manera del espacio tangible e intangible (aire intermedio).

A partir del análisis de la manera en que las personas son capaces de hacer suyos y utilizar inteligentemente estos corredores y espacios a partir de necesidades básicas (colgar la ropa, cultivar en maceteros, dejar elementos como bicicletas, etc.), se plantea que es posible la

concepción de estos para el desarrollo de prácticas de autoconsumo y sus diferentes expresiones, es decir, pensarlos como una posibilidad de desarrollo sustentable dentro del contexto de su hábitat residencial.



Las expresiones de autoconsumo, por su extensa capacidad de implementarse en espacios de difícil intervención, serían capaces de manifestarse mediante los elementos constructivos propios del conjunto, tomando en cuenta que:

- Se comparten distancias íntimas entre los habitantes, lo que les permite entablar relaciones con los vecinos de su mismo nivel, niveles inferiores o superiores, y con los bloques de enfrente.
- Si bien como comunidad no se han planteado este tipo de intervenciones debido al acotado espacio que poseen, dentro del conjunto existen elementos naturales de carácter particular que pueden ser interpretados como indicios de posibles intervenciones a nivel particular o comunitario.

- Al no contemplar un espacio público definido, los vecinos tienden a apropiarse de los espacios de circulación, donde es posible observar cómo las personas se relacionan de una manera que les permite generar vínculos que se plantean como indispensables para implementar algún tipo de manifestación de autoconsumo dentro del conjunto.

CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como propósito definir directrices que sirvan de base para la producción de mecanismos y su aplicación sobre políticas habitacionales de desarrollo sostenible. El estudio permite afirmar que la implementación del componente natural vinculado a la autogestión de las personas en conjuntos de viviendas sociales se asocia de manera favorable a la integración de los habitantes de una comunidad con su entorno a partir del manejo y cuidado de espacios públicos en desuso, normalmente vistos como zonas de riesgo, los que pasan a convertirse en una oportunidad y parte integral del barrio.

Para esto, se definen elementos arquitectónicos, sociales y medioambientales que forman parte de un mismo sistema socioespacial y que tienen como finalidad contribuir a establecer que la producción de la vivienda de interés social no está determinada tan solo por la unidad habitacional, sino que forma parte del medio en donde se emplaza y dentro del cual es posible integrar soluciones de autoconsumo como un estándar de producción del espacio público residencial autogestionado por sus habitantes.

No se busca aquí demostrar la posibilidad irrefutable de aplicar nuevos e innovadores mecanismos de autoconsumo, sino que reconocer que, tal como los requerimientos de las personas varían dependiendo de las externalidades, también el empleo de expresiones de autoconsumo está influenciado por elementos socioespaciales que detonan

la búsqueda de nuevas manifestaciones pensadas desde el impacto de la experiencia vivencial y apropiación del espacio público colectivo como oportunidad.

Se ha logrado identificar mecanismos de producción que tienen una aplicación práctica mediante diversas manifestaciones, las que hacen posible la rehabilitación de espacios residuales a través de huertos urbanos y la reutilización de infraestructura y huertas residenciales, iniciativas que impactan el desarrollo del hábitat residencial. Se resumen aquí algunos de sus aportes.

- El paisaje urbano, como ente sujeto a la gestión de la comunidad, se presenta en la mayoría de los casos como uno de los primeros indicios para suponer una inserción de cultivos que promuevan el desarrollo de espacios públicos autogestionados y productivos.
- La apropiación del espacio público, principalmente en desuso y en malas condiciones, siempre está estrechamente ligada a la aparición de jardines con y sin finalidad de autoconsumo, pero siempre pensados como un medio práctico para un incremento en la habitabilidad y vínculo con el entorno, ya sea a través de la construcción de un “colchón” entre el interior y el exterior o como un espacio de diálogo entre la vivencia externa y el espacio residencial, entre otros.
- Con la reutilización de áreas en desuso, se apuesta por un medio de urbanización con un valor social agregado.

- El proyecto arquitectónico, que en sí mismo no contempla mecanismos de autoconsumo, posee elementos latentes capaces de incentivar el desarrollo de estos, los que están estrechamente ligados al ingenio con el cual se planteen las diversas manifestaciones de autoconsumo en el hábitat residencial.

El análisis evidencia que una planificación que considere el autoconsumo, la arquitectura y las prácticas sociales sería capaz de asegurar un desarrollo sostenible. Esta, en tanto indispensable para la configuración de barrios más sostenibles y con mejoras sustanciales en su estructura, sería un factor clave a la hora de plantear nuevas políticas habitacionales enfocadas en fomentar la sustentabilidad de la vivienda de interés social y su entorno. Considerar estos elementos en el desarrollo de políticas públicas que impacten en diferentes programas habitacionales, como el Subsidio Habitacional para Familias de Sectores Medios DS N°1, el Subsidio de Integración Social y Territorial DS N°19, el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS N°49 y el Programa de Recuperación de Barrios pertenecientes al Minvu, así como los Programas de Habitabilidad y de Apoyo a Familias para el Autoconsumo del Fosis, es fundamental y debe pensarse a través de la intervención intersectorial de los diferentes ministerios y divisiones del sector público que forman parte del desarrollo habitacional. Asimismo, debería considerarse el trabajo con los encargados de desarrollar programas de habitabilidad y autoconsumo, de manera de lograr una coordinación interprogramática que haga posible establecer una planificación

conjunta para aunar y generar nuevos criterios, involucrando a estos diversos actores en el proceso de la toma de decisiones de nuevas políticas públicas, con el fin de entregar soluciones habitacionales capaces de contribuir al desarrollo socioeconómico de familias vulnerables, construir barrios más sostenibles y ciudades más integradas.

RECOMENDACIONES

A partir de lo anterior se proponen las siguientes directrices tendientes a propiciar y guiar el desarrollo habitacional de manera sustentable:

1. Cuidar el hermético emplazamiento y diseño de conjuntos de viviendas sociales sin relación con su contexto, desarrollando una estructura habitacional en función de la trama urbana, para de este modo constituir un barrio de uso mixto que propicie la integración sin llegar a verse afectado por factores de segregación urbana.
2. Pensar el desarrollo habitacional integrando expresiones de autoconsumo por medio de un plan de acción intersectorial, el cual deberá ser desarrollado por diversas instituciones públicas mediante la coordinación interprogramática de los diferentes programas de carácter habitacional preexistentes capaces de convivir entre sí.
3. Priorizar el diseño participativo en relación al contexto y las nece-

sidades de los futuros habitantes, promoviendo el arraigo y la apropiación espontánea de su espacio público, incentivando la vida de barrio y la cohesión social.

4. Presentar a la vivienda de interés social aislada, pareada o continua como una unidad habitacional flexible, capaz de recibir modificaciones o alteraciones al espacio original según las necesidades de cada usuario en la búsqueda de hacer propio el hábitat residencial.

5. Normar y favorecer la habitabilidad de la arquitectura del proyecto de acuerdo a la relación con su contexto visto como una oportunidad y no como un espacio residual. Por lo tanto, deberá verse como un medio residencial colectivo, cuya habitabilidad estará estrechamente ligada a potenciar el uso de espacios públicos como comunidad, dotándolo de un sistema espacial y equipamientos que reconozcan las necesidades de cada grupo social y que contribuyan al desarrollo social colectivo, preferentemente a través de la implementación de áreas verdes productivas autogestionadas mediante expresiones de autoconsumo.

6. Exponer y sociabilizar, en la etapa de diseño de nuevos conjuntos habitacionales, el concepto de sustentabilidad, el que debería promoverse mediante la inclusión de expresiones de autoconsumo como modelo ecológico, paisajístico y económico, involucrando a los habitantes a través de reuniones y mesas de trabajo en donde se plantee la

implementación de mecanismos de autoconsumo, sus beneficios y sus requerimientos.

7. Desarrollar soluciones de autoconsumo particulares de acuerdo a las características y necesidades de cada grupo social. Para esto se debe recoger información sobre los habitantes, su entorno, necesidades, capacidades, recursos, etc., para luego realizar capacitaciones sobre las diversas manifestaciones de cultivos urbanos con posible implementación dentro de cada conjunto habitacional, realizando el seguimiento antes, durante y después de implementar dichos mecanismos.

Al mismo tiempo, es importante dejar expresado aquello que el estudio no ha logrado comprobar o se encuentra por debajo de los resultados esperados, lo que se centra principalmente en la acción conjunta de las personas para integrarse y constituir un barrio en pos del desarrollo colectivo y progreso común. Esto, debido principalmente a los deficientes diseños de espacios públicos no convocantes y al hermetismo muchas veces presente en los conjuntos y viviendas de interés social, los que potencian el individualismo en vez de promover la acción colectiva.

Por eso, se han dejado expresados mecanismos a través de los cuales es posible guiar un desarrollo colectivo capaz de involucrar a la comunidad en el proceso de gestión y mantención del espacio público en conjuntos de viviendas de interés social, y se plantea que el diseño de espacios a través de las prácticas sociales y distancias interpersonales

propias del habitar colectivo debiese ser un factor presente en el diseño de nuevos conjuntos habitacionales. Parece necesario que el Estado, a través de sus diferentes unidades técnicas, sea capaz de involucrar a la comunidad en la toma de decisiones durante la etapa de diseño de sus futuras viviendas, realizando capacitaciones y entregando las herramientas necesarias para que, de esta manera, se haga partícipe del proceso de gestión y mantención del espacio público colectivo a través de la implementación de mecanismos de autoconsumo propuestos en el presente artículo.

Finalmente, es posible señalar que los resultados demuestran que el desarrollo socioespacial de prácticas de autoconsumo se vincula de manera positiva con el desarrollo sostenible de la vivienda social dentro del contexto urbano colectivo, promoviendo la desaparición de microbasurales, incentivando la recuperación de espacios considerados zonas de riesgos, dotando de nuevas áreas verdes de carácter productivo, incrementando la percepción de seguridad, generando espacios e instancias de sociabilización, entre otros. En consecuencia, se plantea que existen grandes probabilidades de que en el futuro la implementación de estas expresiones pueda formar parte de la gestión y políticas de desarrollo habitacional, lo que permitiría mitigar el hecho de que mientras las ciudades se expanden, generando nuevos enclaves urbanos, las áreas verdes se van haciendo más limitadas. La implementación de cultivos urbanos es una oportunidad para promover la creación de nuevos espacios naturales autogestionados, lo que hace

posible pensar que dentro de la producción de la vivienda de interés social se pueden incluir mecanismos de autoconsumo como parte de políticas públicas que aporten una nueva mirada del quehacer socioespacial desde la perspectiva productiva y medioambiental.



PROPUESTA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS SOCIALES DESDE EL ENFOQUE DE EXCLUSIÓN SOCIAL: ESTUDIO DE CASO DEL PROGRAMA FAMILIAS, PERTENECIENTE AL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

Diego Apablaza Bokros¹,
Universidad de Santiago de Chile



RESUMEN

A pesar de que los fenómenos de la pobreza, vulnerabilidad y exclusión representan términos relacionados, difieren en varios aspectos, y es el enfoque de exclusión social el concepto que integra la mayor cantidad de variables que permiten analizarlos, en tanto concibe las causas de la pobreza y/o la exclusión como de carácter multidimensional, multifactorial, estructural, relativo, dinámico y de restricción de la ciudadanía. En Chile, a pesar de la disminución significativa de los índices de pobreza en las últimas décadas, los recientes eventos de protesta social, sumados a los signos de estancamiento de la política social, plantean la necesidad de cuestionar el paradigma imperante en materia de promoción y protección social. Para ello, se propone una distinción de criterios que deben tener los programas sociales para que consideren el enfoque de exclusión social, los que se utilizarán como metodología para analizar el Programa Familias, perteneciente al subsistema Seguridades y Oportunidades a partir del año 2017.

Palabras clave: exclusión social, política social, subsistema Seguridades y Oportunidades, Programa Familias, programas sociales.

¹ Administrador público, Universidad de Santiago de Chile. Artículo basado en la tesis “¿El sistema de protección social en Chile ha transitado del enfoque de la pobreza al enfoque de exclusión social? Estudio experimental del enfoque de exclusión social”, realizada para optar al título de administrador público, año 2017. Profesor guía: Víctor Osorno Iribarren.

INTRODUCCIÓN

En Chile, con el regreso de la democracia en 1990, el Gobierno aumentó el gasto social sostenidamente en materia de vivienda, educación, salud y capacitación laboral. Gracias a esto y a un conjunto de nuevas políticas sociales destinadas a la extrema pobreza, redujo, en el largo plazo, la pobreza según ingresos en 26,8 puntos porcentuales entre 1990 y 2015, a pesar de que el índice de Gini solo descendió 0.096 puntos². Estos datos demuestran que las políticas sociales implementadas durante la transición a la democracia han contribuido a la reducción de la pobreza (Hopenhagen, 2013), así como lo han hecho el crecimiento económico y, en específico, los programas monetarios de transferencia condicionada implementados (Larrañaga y Rodríguez, 2014), los que, sin embargo, han tenido un nulo impacto en la desigualdad.

Las políticas sociales de las últimas tres décadas, a pesar de haber significado un avance, han sido insuficientes para mejorar las condiciones relacionadas con el bienestar. Los desafíos que tienen las políticas sociales en la nueva década que se aproxima aumentan considerablemente, pues los paradigmas imperantes en ellas y en la distribución de la riqueza no son capaces de brindar las herramientas para una solución a la ex-

clusión social. Sobre todo, considerando los retos que se aproximan como consecuencia de la crisis climática, la globalización y la introducción sistemática de la inteligencia artificial.

A su vez, el estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre de 2019 (Roura, 2019) ha dejado en evidencia la necesidad de evolucionar los paradigmas en una gran cantidad de materias relacionadas con las políticas públicas, entre ellas, la política social.

Ya la encuesta Casen del año 2017 muestra indicios del estancamiento del progreso social, pues el índice de Gini de ese mismo año, que toma en cuenta el ingreso que proporciona el trabajo de los hogares, aumentó a un 0,501, lo que representa un alza de 1,2% en comparación con el periodo anterior. De igual forma, si analizamos la evolución de la pobreza multidimensional entre el periodo 2015 y 2017, vemos que la disminución no es estadísticamente significativa y que, en varios ámbitos, en vez de disminuir, aumenta. Este es el caso de las subdimensiones de ocupación, jubilación, servicios básicos, entorno y seguridad. La subdimensión de servicios básicos fue la que más aumentó, pasando de 3,6% en 2015 a 6,6% en 2017.

² En 1990, cerca del 38,6% de la población era pobre o indigente según ingresos (Ministerio de Desarrollo Social, 2016a) y el índice de Gini era de 0,521 en ese mismo año (Larrañaga y Rodríguez, 2014). En 2015, el 11,7% de la población era pobre o indigente y el índice de Gini fue de 0,495 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017a).

Por otra parte, si observamos el stock de deuda de los hogares, se visualiza que ha aumentado constantemente, con un alza de 35,9% entre 2004 y 2019, alcanzando un stock de deuda equivalente al 74,3% del ingreso disponible al segundo semestre de 2019 (Banco Central de Chile, 2019). Asimismo, existen estudios relacionados con la pobreza en Chile que han destacado que existe un alto riesgo de que las familias que superaron la pobreza en periodos anteriores puedan volver a ser pobres según ingresos en un futuro próximo. Se calcula que cerca del 30% de las familias se encontraron en esa situación durante el periodo 1996-2006 en Chile (Maldonado y Prieto, 2015; Henocho, 2010; Aguilar, 2002; Contreras et al., 2004; Castro y Kast, 2004). Por tanto, se puede establecer que existe un alto grado de vulnerabilidad.

Lo anterior permite señalar que en Chile es necesario superar la teoría del derrame³ y del paradigma residual deslocalizado⁴, entendiendo que el crecimiento económico y las políticas sociales focalizadas a la pobreza extrema y la pobreza no son suficientes para que los más

desposeídos puedan mejorar sustancialmente y en forma duradera sus condiciones de vida. Avanzar en un nuevo pacto social que aborde las políticas sociales se hace urgente en el contexto actual.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

El enfoque de exclusión social permite una mayor comprensión de las dimensiones y causas de la pobreza que las que aportan la teoría del derrame y el paradigma residual deslocalizado, las cuales conciben la separación de los pobres y no pobres según sus ingresos bajo una lógica binaria y asignan al mercado la responsabilidad de entregar prestaciones sociales. El enfoque de exclusión social se caracteriza por concebir a la pobreza como un proceso histórico-estructural, relativo, dinámico, multidimensional, multifactorial, y busca fomentar el ejercicio de la ciudadanía y la distribución de las riquezas (Castel, 2004; Moriña Díez, 2007; Hernández Pedreño, M., 2010; Tezanos, 1999; Atkinson et al., 2002; Freijeiro

³ La teoría del derrame plantea que la superación de la pobreza se lograría, en principio, con un mayor crecimiento económico, sin embargo, en Latinoamérica esta idea fue insuficiente e incluso se observa un patrón donde se visualiza que la incidencia de la pobreza aumenta de manera independiente de los ciclos económicos. Más aún, existe una tendencia cuando el PIB por habitante crece a tasas mayores de 3% y aumenta la desigualdad, mientras que, con crecimientos más bajos, cercanos al estancamiento económico, se reduce la inequidad. En este sentido, se puede señalar que predomina la igualación hacia la pobreza (Filgueria & Peri, 2004).

⁴ El paradigma residual deslocalizado es entendido como las políticas implementadas por los Estados latinoamericanos después del Consenso de Washington, cuando el Estado nación deja de tener preponderancia para la construcción del bienestar social en su territorio y delega estas capacidades a organismos financieros internacionales, los cuales financian, evalúan y recomiendan acciones estatales que propicien estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y control presupuestario, por lo que las políticas sociales deben estar subordinadas a estos conceptos, ante lo cual la política social limita su acción a la pobreza y la pobreza extrema, ya sea coyuntural o estructural (Barba, 2004).

Varela, 2008; Tezanos, 2001; Subirats, Gomà & Brugué, 2005; Estivill, 2003; Barros, 1996; Sojo, 2001; Bustelo y Minujin, 1997; Busso, 2001; Serafini, 2013; Marshall, 1965; Castel, 1997). Asimismo, este enfoque entiende la exclusión como una acumulación de procesos confluyentes con rupturas sucesivas entre el individuo y la sociedad, que se dimensionan en diferentes espacios, ya sean políticos, sociales, comunitarios, culturales, económicos, educacionales, familiares, recreacionales, laborales o habitacionales, entre otros. Lo anterior se traduce en una discriminación activa y en la inferiorización de personas, grupos, comunidades y territorios, fenómenos que terminan por alejar a los afectados de los centros de poder, de la repartición de recursos y de la legitimidad de su identidad cultural, separándolos de los valores dominantes de la sociedad (Estivill, 2003; Laparra et al., 2008).

Se hace la distinción entre los conceptos *multidimensional* y *multifactorial*, pues si bien estos pueden estar relacionados e incluso pueden llegar a emplearse como símiles, para efectos de la presente investigación se entenderá bajo el paradigma multidimensional aquellas expresiones de carencias relacionadas con el bienestar, mientras que lo multifactorial se referirá a las causas primigenias que explican las expresiones carenciales. Esto equivale a decir que si cierto índice demuestra que en una familia existe ausentismo escolar, esta situación debería catalogarse como una expresión de una carencia, por lo que se clasifica dentro de lo multidimensional, mientras que las explicaciones sobre las causas del ausentismo escolar se enten-

derán como parte de la multifactorialidad del fenómeno.

Caracterización de la política social analizada: Programa Familias, perteneciente al subsistema Seguridades y Oportunidades

El Programa Familias tiene sus orígenes en el año 2004 con el programa social denominado Puente, perteneciente a Chile Solidario, el cual iba dirigido a las familias y sus integrantes en situación de extrema pobreza. Se caracterizaba por proporcionar apoyo psicosocial a las familias durante dos años y era requisito de entrada para los beneficios de Chile Solidario (Ley N°19.949, 2004). Posteriormente, a partir de 2012, Chile Solidario fue reformulado, profundizando su estrategia e integrando una mayor variedad de programas sociales, transformándose en el subsistema Seguridades y Oportunidades (Ley N°20.595, 2012). Dentro del subsistema se encuentra el Programa Familias, un legado del Programa Puente de Chile Solidario.

El Programa Familias se caracteriza por instalar cinco componentes en las estrategias de acompañamiento y, al igual que el Programa Puente, dura dos años. El primer componente es el denominado *eje*, cuyo objetivo es diagnosticar la situación de los beneficiarios para luego definir las estrategias generales de la intervención. Además, realiza el seguimiento a las prestaciones comprometidas y la evaluación final. El segundo es el *acompañamiento psicosocial*, que apoya a los beneficiarios en la identificación,

desarrollo y fortalecimiento de los recursos y capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida. El *acompañamiento laboral* es el tercer componente y se caracteriza por generar o mejorar el nivel de ingresos autónomos de las familias de un modo que posibilite salir de la situación de pobreza por la vía del trabajo y mantenerse fuera de ella por sus propios medios. El componente de *transferencias monetarias* permite a las familias disminuir su vulnerabilidad, aliviando las consecuencias de la pobreza al aumentar sus ingresos y asociar la transferencia a incentivos que protegen la generación de capital humano. Finalmente, el componente *oferta* otorga acceso a programas sociales y otros servicios complementarios que apoyan el proceso de habilitación y desarrollo (Ministerio de Desarrollo Social, MDS, 2018a).

Dentro de los componentes *transferencias monetarias* y *oferta* se encuentran las siguientes prestaciones sociales para los usuarios del Programa Familias al año 2017 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017b):

- 1) Bono de protección
- 2) Subsidio a la cédula de identidad
- 3) Subsidio al consumo de agua potable
- 4) Bono base familiar
- 5) Bono por formalización laboral
- 6) Bono por graduación 4° medio
- 7) Programa alimentación escolar – tercer servicio
- 8) Habitabilidad
- 9) Apoyo a familias para el autoconsumo

- 10) Generación de microemprendimiento indígena urbano
- 11) Apoyo a la atención en salud mental
- 12) Yo trabajo – Apoyo a tu plan laboral
- 13) Yo emprendo – Semilla – SSyOO
- 14) Yo trabajo – Jóvenes – SSyOO
- 15) Programa de formación y capacitación (ProFoCap)
- 16) Programa de desarrollo de competencias laborales para mujeres
- 17) Programa de servicios sociales
- 18) Ayudas técnicas – SSyOO
- 19) Programa de apoyo a la dinámica familiar

MÉTODO

La investigación se centró en la revisión de fuentes bibliográficas secundarias disponibles en diversos centros de documentación, tanto en bibliotecas como en Internet, que dieran cuenta de los fundamentos teóricos y conceptuales para interpretar la evolución del concepto de exclusión social durante las últimas décadas con sus diferentes matices, contextualizándolo en la realidad nacional y latinoamericana.

También se realizó una revisión de fuentes bibliográficas secundarias asociadas a documentos oficiales del Gobierno de Chile, pertenecientes a la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Ministerio de Desarrollo Social y la encuesta Casen; al igual que otras generadas por ONGs, *think tanks* y universidades, entre otras instituciones, con el fin de identificar la evolución de los programas sociales y sus principales características. Para el

análisis, se seleccionó el programa social denominado Familias, dependiente del subsistema Seguridades y Oportunidades, que comenzó en 2013.

La revisión de fuentes bibliográficas secundarias sobre exclusión social permitió la construcción de categorías de análisis, las cuales representan criterios que deben alcanzar los programas sociales para considerar que utilizan el enfoque de exclusión social. Posteriormente se desarrollaron tablas y escalas relacionadas con cinco aspectos centrales:

- i. Participación de los beneficiarios sociales.
- ii. Participación de actores de la sociedad civil que intervienen en programas sociales.
- iii. Tipos de metodologías de selección de los beneficiarios de los programas.
- iv. Tipo de políticas que fomenten la ciudadanía.
- v. Tipo de unidad de análisis que pueden utilizar las intervenciones sociales.

Con el desarrollo de tablas y escalas, y la identificación de las principales características de los programas sociales se elaboró un estudio de caso comparativo entre las siguientes políticas:

Programas sociales pertenecientes al sistema Chile Solidario durante el periodo 2003-2010 y programas sociales pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades a partir de 2017.

Se escogió Chile Solidario teniendo a la vista que varios programas de esta política se integraron posteriormente, en 2013, al subsistema Seguridades y Oportunidades, tal como lo demuestran los artículos tercero, cuarto y octavo de las disposiciones transitorias de la Ley N°20.595 (Ley N°20.595, 2012).

Gracias a esta investigación se recopiló y profundizó en los principales resultados del subsistema Seguridades y Oportunidades del año 2017, y se presentan aquí analizados desde el enfoque de exclusión social.

RESULTADOS

Categorías de análisis para considerar que una intervención emplea el enfoque de exclusión social

Para asegurar que una política social utiliza el enfoque de exclusión social es necesario que cumpla con los siguientes criterios, los que responden a un conjunto de análisis de varios autores que han realizado estudios y trabajos (Castel, 2004; Sen, 1983; Sojo, 2000; Moriña Díez, 2007; Hernández Pedreño, 2010; Tezanos, 1999; Atkinson et al., 2002; Freijeiro Varela, 2008; Tezanos, 2001; Subirats, Gomà & Brugué, 2005; Estivill, 2003; Barros, 1996; Sojo, 2001; Bustelo y Minujin, 1997; Busso, 2001; Serafini, 2013; Marshall, 1965; Castel, 1997; Laparra et al., 2008; Carrasquilla y Carnacea, 2013; Feres y Mancero, 2001) donde plantean metodologías y/o aná-

lisis que buscan acercar las políticas sociales a los conceptos de exclusión social, vulnerabilidad, cohesión social, ejercicio de la ciudadanía y capital humano, entre otros paradigmas.

1. Participación de los destinatarios de las intervenciones sociales

Barros señala que si los sectores excluidos participan en el diseño, ejecución y evaluación de las intervenciones socia-

les podrán, progresivamente, ir restituyendo su estatus de ciudadanos, por lo que para que una intervención social sea catalogada bajo el enfoque de exclusión social es vital que considere la participación de los usuarios/sujetos/destinatarios de las intervenciones sociales (Barros, 1996).

En este sentido, De la Hera Rodríguez plantea una metodología que permite medir la participación de individuos en políticas sociales a través de ocho escalafones que se detallan a continuación⁵:

Tabla 1. Escala de participación de los destinatarios de las intervenciones sociales

Escalón	Programa social
Escalón 1: participación manipulada	
Escalón 2: participación decorativa	
Escalón 3: participación simbólica	Programa Familias
Escalón 4: participación de asignados, pero informados	
Escalón 5: participación con información y consulta	
Escalón 6: participación en ideas de agentes externos de desarrollo compartidos con la población	
Escalón 7: participación en acciones pensadas y ejecutadas por la propia población	
Escalón 8: participación en acciones pensadas por la propia población y que han sido compartidas con agentes externos de desarrollo	

Fuente: *La voz de las personas en situación de vulnerabilidad en el diseño de las políticas sociales en Euskadi. La experiencia de EAPN Euskadi*, De la Hera Rodríguez, 2017.

La Tabla 1 muestra de manera escalonada la participación relacionada con cada uno de los programas sociales. Se considera una participación real a partir del cuarto escalón, ya que los primeros tres

no implican participación verdadera, sustantiva y con incidencia (Carrasquilla y Carnacea, 2013; De la Hera Rodríguez, 2017).

⁵ Este planteamiento se basa en los desarrollos pioneros de Arnstein, S. R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation". En: *Journal of the American Planning Association*, 35: 4, pp: 216-224.

Resultados de la participación de los destinatarios de las intervenciones sociales

El diseño del Programa Familias fue realizado por un equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social, el que sería discutido con el Parlamento durante el proceso de creación de la ley. Sin embargo, las minutas del Comité de Reducción de la Pobreza de la Cámara de Diputados solamente declaran la participación de académicos y miembros de una fundación durante las audiencias de discusión y debate (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2012).

Durante la implementación de este programa, las familias son invitadas a participar e involucrarse en la elección de los modelos de acompañamiento, no obstante, ellas no pueden decidir sobre el contenido de los mismos; incluso, existen estudios del subsistema Seguridades y Oportunidades (Subsecretaría de Evaluación Social, 2018) que plantean que las familias desconocen lo que significa y contiene cada modelo de acompañamiento. En ese sentido, y en sintonía con lo expuesto en la Tabla 1, se puede decir que el nivel de participación que alcanzan los destinatarios corresponde al escalón 3, de participación simbólica, pues esta es solo aparente.

Al finalizar el Programa Familias, los egresados se involucran en dos mecanismos participativos: evaluaciones grupales que dan cuenta de las apreciaciones de los usuarios respecto al desempeño del programa y encuestas de satisfacción donde se recogen sus opiniones individuales (Ministerio de Desarrollo Social, 2018). Sin embargo, estas instancias no son vinculantes y no se relacionan con la mejora continua del programa.

2. Participación de actores de la sociedad civil que intervienen en programas sociales

Aumentar la efectividad en la generación de acciones contra la exclusión implica establecer alianzas estratégicas con otros actores sociales. La realidad de la exclusión es muy compleja debido a la multidimensionalidad y multifactorialidad del fenómeno, por lo que es imprescindible abordarla desde la posición de diferentes personas e instituciones (Barros, 1996).

Lo que plantea Barros puede resumirse en la siguiente tabla:

Tabla 2. Actores de la sociedad civil que intervienen en programas sociales

Actores	Programa social a evaluar
Círculo social más cercano al beneficiario (familia, tutores, vecinos, amigos cercanos)	Programa Familias
Organización social primaria (juntas de vecinos, clubes sociales y deportivos, etc.)	
Organización social secundaria (fundaciones, ONGs, <i>think tanks</i> , universidades)	
Empresas, sindicatos, gremios, etc.	

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación de Barros, 1996.

La Tabla 2 muestra los niveles de participación de los actores sociales que intervienen en los programas sociales, entendiendo que cuando hay una mayor cantidad de actores que intervienen, mejor va a ser la comprensión del fenómeno de la exclusión social.

Resultados de la participación de los actores de la sociedad civil

Como lo señala su nombre, el Programa Familias está destinado principalmente a los núcleos familiares, ya que las dinámicas que se generan en esos espacios ofrecen una oportunidad de intervención, la que, desarrollada correctamente, permite orientar procesos que de manera individual sería muy difícil fomentar. Además, el Programa Familias busca promover la conexión con redes cercanas, integradas por amigos, vecinos y/o familiares; y también con redes comunitarias (Subsecretaría de Servicios Sociales-Ministerio de Desarrollo Social, 2016). En las evaluaciones *ex post* se manifiesta la participación de organizaciones de nivel secundario, ya que la Dirección de Presupuestos y el MDS encomiendan, mediante licitación pública, a universidades y/o *think*

tanks la realización de evaluaciones de los programas sociales, con el objeto de verificar el impacto, la eficiencia y la eficacia de estos. Durante la ejecución del Programa Familias, la participación a nivel de actores de la sociedad civil solo alcanza al círculo cercano, vale decir, se focaliza en familias en situación de pobreza según ingresos.

3. Metodologías de selección de los destinatarios de los programas sociales

Según Tezanos, la exclusión social tiene un carácter multidimensional, debido a que se relaciona con la acumulación de diversas dimensiones, las cuales se articulan, se asocian y se interrelacionan, generando el fenómeno de la exclusión social (Tezanos, 2001). Asimismo, Subirats, Gomà & Brugué entienden la exclusión como un fenómeno poliédrico, formado por la articulación de un cúmulo de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas (Subirats, Gomà & Brugué, 2005). En este sentido, no solamente se visualiza la exclusión social en bienes económi-

cos, sino que también se visualiza en recursos no tangibles⁶ que potencialmente permitirían la obtención de ingresos y otros medios para lograr satisfacción o realización personal (Serafini, 2013). En consecuencia, las metodologías utilizadas para seleccionar a los beneficiarios sociales son fundamentales para distinguir y separar los conceptos de multidimensionalidad y multifactorialidad del fenómeno, pues permiten que la formulación de las políticas públicas sea más eficaz a la hora de combatir las verdaderas causas de la exclusión.

En este sentido, Estivill plantea que las causas de la exclusión pueden ser múltiples, y estas se pueden categorizar en una escala individual (micro), en la relación entre los individuos y los grupos intermedios (meso), y a través de la relación de los grupos intermedios con

el conjunto de la sociedad (macro) (Estivill, 2003).

En consecuencia, utilizar un método que solo mida necesidades económicas y que contemple características binarias para diferenciar a pobres de no pobres en un contexto multidimensional y multifactorial lleva a legitimar únicamente un tipo de necesidad o carencia. Si es así, la construcción y el alcance de las políticas sociales se limitará a combatir solo una dinámica, lo cual excluye a los individuos que sufren otros males que afectan su bienestar, fomentando la marginación de las personas a sectores más cercanos a la exclusión.

Los métodos de selección de los destinatarios se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 3. Actores de la sociedad civil que intervienen en programas sociales

Escalón	Programa social a evaluar
Método según línea de la pobreza ⁷	Programa Familias
Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) absolutas ⁸	
Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) relativas ⁹	

⁶ Barros plantea que las dimensiones en donde se puede expresar la exclusión son la económica, política y social (relacional) (Barros, 1996).

⁷ Se entiende por **Método según línea de la pobreza** la selección del destinatario a partir del uso del ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar, el cual establece un valor per cápita de una canasta mínima de consumo requerida para la sobrevivencia, vale decir, una canasta de satisfactores esenciales.

⁸ Se entiende por **NBI absolutas** aquella metodología que selecciona a los destinatarios cuando no pueden acceder a los bienes y servicios cuya satisfacción es indispensable para la existencia humana, independientemente del medio social en que se desenvuelve la persona.

⁹ Se entiende por **NBI relativas** aquella metodología que selecciona a los destinatarios cuando no pueden acceder a ciertos bienes y servicios que, si bien no son necesarios para la supervivencia, son esenciales para que las personas puedan integrarse adecuadamente a su entorno social.

Método de medición integrada (MIP) con NBI absolutas ¹⁰	
Método de medición integrada (MIP) con NBI relativas ¹¹	
Método de medición integrada (MIP) con NBI relativas en función del territorio ¹²	

Fuente: elaboración propia a partir de los trabajos de Feres y Mancero, 2001; y de Barneche et al., 2010.

La Tabla 3 muestra los métodos de selección de los destinatarios de los programas sociales y en ella destaca la medición integrada con necesidades básicas relativas en función del territorio como la mejor candidata para identificar y seleccionar los destinatarios de las políticas sociales, pues considera los factores económicos, de infraestructura y servicio, educación, vivienda y otros relativos a la cohesión social (Feres y Mancero, 2001). Sin embargo, estos no pueden utilizarse para buscar la multifactorialidad de la exclusión social, sino que deben orientarse a la búsqueda de la multidimensionalidad del fenómeno, pues las causas primigenias de cada expresión o dimensión pueden ser múltiples e interrelacionadas a nivel micro, meso y macro, por lo que lo más recomendable en estos casos es inicialmente identificar la expresión de la carencia del bienestar de la o las personas afecta-

das y, posteriormente, profundizar caso a caso según los antecedentes, contexto y situación de cada familia.

Resultados de la aplicación de diferentes metodologías en la selección de los destinatarios de los programas sociales

Desde 2016, Chile empezó a utilizar un nuevo instrumento de focalización denominado Registro Social de Hogares (RSH), que crea una base de datos que almacena información autoreportada y proveniente de fuentes administrativas, lo que permite elaborar la calificación socioeconómica de los hogares que entrega la información necesaria para focalizar las prestaciones sociales. La calificación socioeconómica corresponde a una ordenación de los hogares en función del ingreso¹³. Después de ese proceso, este se corrige de acuerdo a un

¹⁰ Se entiende por **MIP con NBI absolutas** la selección del destinatario mediante la combinación del método de la línea de la pobreza con el método de las necesidades básicas insatisfechas absolutas.

¹¹ Se entiende por **MIP con NBI relativas** la selección del destinatario mediante la combinación del método de la línea de la pobreza con el método de las necesidades básicas insatisfechas relativas.

¹² Se entiende por **MIP con NBI relativas en función del territorio** la selección del destinatario mediante la combinación del método de la línea de la pobreza con el método de las necesidades básicas insatisfechas relativas, considerando las características sociales, geográficas, demográficas, entre otras. Se distinguen, por ejemplo, canastas y necesidades de integración diferentes en áreas rurales y urbanas.

¹³ Los ingresos considerados son los del trabajo (dependiente e independiente), capital (físico y financiero) y pensiones (contributivas y no contributivas), los cuales pueden obtenerse en bases administrativas del Estado y desde lo reportado por los integrantes del hogar.

índice de necesidades, el que considera el número de personas, las economías de escala y un mayor peso para personas con movilidad reducida, adultos mayores y población menor de 18 años (Ministerio de Desarrollo Social, 2015).

Por otra parte, es interesante analizar los tramos de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, que comienzan en el tramo del 0 al 40% y posteriormente se establece cada 10 puntos porcentuales. Esta forma de estratificación se justifica en la ausencia de diferencias significativas en el ingreso dentro del 0 al 40%, mientras que el primer corte natural en la distribución del ingreso se produce en torno al 40%; vale decir, para distinguir diferencias de ingresos significativas dentro del tramo señalado se requiere la utilización de otras variables y/o modelos que permitan identificar una vulnerabilidad específica, por lo que la utilización, por sí solo, del RSH en la selección de programas sociales para el tramo menor al 40% conduciría a un alto riesgo de equivocación en la selección de los destinatarios sociales buscados (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).

Cabe destacar que, en Chile, a partir del año 2013, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen¹⁴, empieza a ocupar una técnica multidimensional para medir la pobreza, denominada metodología de Alkire y Foster (AF), la cual se basa en las privaciones que sufren los hogares (o individuos) y permite generar perfiles de carencias en dimensiones que determinan el bie-

nestar (Durán, 2015). Las dimensiones incluidas en la metodología aplicada en Chile son: educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social, y entorno y seguridad (Subsecretaría de Evaluación Social, 2016). Las cuatro primeras dimensiones representan el mismo porcentaje en la metodología, 22,5% cada una de ellas, mientras que la dimensión entorno y seguridad equivale a un 10% (Subsecretaría de Evaluación Social, 2016).

Pese a que la implementación de una metodología multidimensional para observar el comportamiento de la pobreza en diferentes dimensiones es un avance, esta herramienta no es la que selecciona a los usuarios de los programas sociales, pues, como ya se ha dicho, para ese fin se utiliza el Registro Social de Hogares. La selección de usuarios del Programa Familias está regulada por el Decreto N°16 del MDS que aprueba el reglamento sobre el "Procedimiento de Focalización y Reclamo del Subsistema de Protección y Promoción Social Seguridades y Oportunidades".

El proceso de focalización contempla las siguientes etapas:

- Determinación de las familias y personas que cuentan con encuesta vigente del instrumento técnico de focalización, vale decir, que cuenten con Registro Social de Hogares o Ficha de Protección Social.
- Determinación de las personas y familias que se encuentran dentro del 10%

¹⁴ La encuesta Casen es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 1990 con una periodicidad bianual o trianual.

más vulnerable de la población nacional registrada.

- Definición del número de personas prioritarias en el hogar. Se establecen cuatro categorías de personas prioritarias: niños de 0 a 8 años, adultos con 60 años o más, discapacitados moderados o severos y embarazadas. En base a estas categorías prioritarias, se ordena a los hogares dentro de cada grupo definido en la etapa anterior, dando mayor prioridad a hogares con un mayor número de individuos prioritarios.
- Estratificación. Dentro de cada combinación de grupo y número de personas prioritarias se pone en primer lugar a los hogares monoparentales.
- Ordenamiento. Finalmente, dentro de cada combinación de grupo, número de personas prioritarias y tipo de jefatura de hogar, se ordena a los hogares según su ingreso per cápita.

A partir de esta focalización, el Ministerio de Desarrollo Social crea una nómina de usuarios potenciales por comuna según los recursos disponibles en la Ley de Presupuestos y le comunica al ejecutor del programa eje de la comuna el detalle de los usuarios que deben contactar e invitar desde cada municipio.

En este sentido, y en sintonía con lo establecido en la Tabla 3, se puede plantear que la selección de los destinatarios sociales se realiza principalmente a través del método según línea de la pobreza, pues se selecciona a las familias dentro del 10% más vulnerable según el RSH, lo que excluye a otro tipo de familias afectadas por factores que comprometen el bienestar y que propician la vulnerabilidad y/o exclusión social.

4. Tipo de unidad de análisis que pueden utilizar las intervenciones sociales

El enfoque de exclusión social se entiende como un proceso relativo, pues no puede considerarse a un ser humano excluido de forma definitiva, ya que es el contexto social el que genera esas rupturas (Moriña Díez, 2007), por tanto, como señala Atkinson (1998), la interpretación social de la exclusión puede variar según el país o a lo largo del tiempo.

En este sentido, un estudio realizado por Brugué, Gomà y Subirats (2002) en el contexto europeo del surgimiento de nuevas formas de pobreza relaciona los factores de exclusión con los grupos sociales afectados, identificando a ocho colectivos excluidos: los jóvenes con dificultades intensas de inserción laboral, adultos desempleados de larga duración, colectivos de inmigrantes, mujeres-madres solas, gente mayor dependiente, sectores fuera del bloque de transferencias/servicios del Estado de Bienestar, sectores sin acceso a la vivienda y colectivos espacialmente segregados. Bajo esta lógica, Alwang entiende que la vulnerabilidad puede afectar a individuos, hogares o grupos sociales (Alwang et al., 2001). De igual forma, Satriano plantea que los destinatarios de políticas sociales se pueden calificar en grupos sociales o etarios (Satriano, 2006). Por último, Estivill plantea que las estrategias que buscan afrontar la exclusión deberían manifestar un carácter territorial, a pesar de que por sí solas no pueden solucionar una situación global (Estivill, 2003).

En virtud de lo expuesto, se plantea que las intervenciones pueden tener la siguiente clasificación o escala de análisis:

Tabla 4. Tipo de unidad de análisis que pueden utilizar las intervenciones sociales

Unidad de análisis	Programa social a evaluar
Individuos	
Familias u hogares	Programa Familias
Grupos etarios	
Grupos sociales en situación de exclusión	
Territorio (zonas rezagadas o comunidades que se encuentren en situación de exclusión social)	

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 4 se plantea la necesidad de repensar las unidades de análisis al momento de formular una política social, pues es posible que la política aumente su efectividad si es dirigida a grupos sociales determinados o a zonas rezagadas, en vez de lo que comúnmente se hace a nivel latinoamericano, que se expresa en la focalización en los individuos y en las familias.

Resultados de la aplicación de diferentes tipos de unidad de análisis que pueden utilizar las intervenciones sociales

Según lo establecido en el apartado de caracterización del Programa Familias, y en consonancia con lo constatado en el apartado de su población objetivo (Ministerio de Desarrollo Social, 2018), las ayudas van dirigidas a familias dentro del 10% más vulnerable según el RSH. La Tabla 4 indica que este programa solo va dirigido a familias u hogares.

Esta elección implica un desaprovechamiento de la política social, pues si ciertas prestaciones sociales fueran dirigidas a grupos sociales vulnerables y a territorios determinados que comparten un diagnóstico común, podría generarse un aumento en la eficacia del Programa Familias, ya que esta decisión tendería a aumentar la participación de las personas y el éxito dentro de los programas sociales, además de impulsar otras áreas del bienestar. Cabe destacar que este incentivo debe venir acompañado de inversión pública, pues, en caso contrario, se presenta el riesgo de estigmatización de los territorios.

5. Tipo de políticas sociales y fomento de la ciudadanía

El análisis que realizan Bustelo y Minujin sobre los trabajos de Richard Titmus señala que uno de los puntos donde debe evolucionar la política social es

en la constitución de actores sociales titulares de derechos habilitantes para la expansión de la ciudadanía (Bustelo & Minujin, 1997), pues para considerar al ciudadano como un ser autónomo hay que brindarle oportunidades sociales desde las más básicas hasta las más complejas, enfocándose en otorgar capacidades que le permitan generar, por sus propios medios, condiciones que fomenten su bienestar (Freijeiro Varela, 2008). Siguiendo estas ideas, Levin propone que los derechos sociales son un vínculo de integración con la sociedad, los que, mediante un consenso social, establecen un estatus social óptimo que cambia a partir de la evolución de la comunidad (Silvia, 2000). En ese sentido, la existencia de un individuo que no tenga acceso a ciertos derechos sociales o cuyos derechos se vean limitados decaería, en el mediano y largo plazo, en un desmedro de sus derechos políticos y civiles y, por tanto, una degradación de su estatus de ciudadano (Freijeiro Varela, 2008).

Actualmente, una de las principales políticas sociales que se han utilizado en América Latina para que los ciudadanos más pauperizados alcancen el estatus social óptimo son los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas¹⁵. Los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) son políticas que actúan mediante incentivos en el hogar, realizando transferencias de dinero (generalmente a las madres de familia) con

el objeto de realizar cierta acción beneficiosa para las familias o algunos de sus miembros. Los usuarios están obligados a cumplir una serie de corresponsabilidades para recibir las transferencias. Estas corresponsabilidades consisten, generalmente, en asegurarse de que los niños asistan a clases y a sus controles de salud. Los PTC actualmente benefician a más de cien millones de latinoamericanos (Trivelli & Clausen, 2015). Sin embargo, existen dudas sobre si estos programas promueven realmente la acumulación de capital humano¹⁶ en el largo plazo, pues a pesar de que los PTC han tenido un impacto positivo en América Latina, sobre todo en materia de educación infantil y salud (Attanasio, Fitzsimmons y Gómez, 2005; Behrman y Hodinott, 2005; Gertler, 2000; Maluccio y Flores, 2005), solo se ha logrado cerrar las brechas entre los más pobres.

Ante estos resultados, puede cuestionarse la promoción de la movilidad social propuesta por los PTC, pues a pesar de que el enfoque del capital humano potencia una integración de los individuos en los servicios básicos, estos, al finalizar el programa, no pueden obtener los recursos suficientes a partir de trabajos formales, microemprendimientos o vínculos sociales para superar, incluso, la línea de la pobreza. Saraví (2007) plantea que tres de los principales motores de la exclusión son el desempleo, la precariedad laboral y las barreras que

¹⁵ Tanto el Programa Familias como el anterior a este, Chile Solidario, son considerados PTC.

¹⁶ Desde el enfoque de capital humano se señala que una mejor alimentación, salud y educación deberían conducir a las nuevas generaciones a mejores empleos y a mayores ingresos, lo que permitiría romper la transmisión intergeneracional de la pobreza (Yanes, 2016).

tienen los nuevos trabajadores para ingresar al mercado del trabajo.

Si analizamos la precariedad laboral en Chile, constataremos que existe una gran cantidad de personas que se encuentran trabajando sin contrato de trabajo¹⁷; según Velasco, un 30% de la población que se encuentra trabajando activamente lo hace en situación de informalidad, vale decir, no cuenta con acceso a la seguridad social (salud y previsión) derivado de su vínculo laboral (Velasco, 2018). Por otra parte, la tasa de participación femenina nacional en el mercado del trabajo llegó a un 48,5% en 2018, mientras que la de participación masculina alcanzó el 71,2% ese mismo año (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). Estos datos se explican con más detalle en el estudio de Encina (2008), quien plantea que cerca del 46,08% de las mujeres de entre 18 y 40 años con hijos menor(es) de dos años, que no se encuentran trabajando, pierden esa oportunidad porque “no tienen con quien dejar a los niños”. Además, si se analiza la caracterización económica según decil de las mujeres que hace Encina, se revela que entre los cuatro primeros deciles esta cifra sube de 46,08% a 71%. Por tanto, se puede visualizar que, en el caso de las mujeres, existe un desincentivo para participar activamente en el mundo laboral, pues al no contar con un lugar donde dejar a sus hijos, ellas eligen seguir cuidando a los menores, lo cual fomenta la situación de exclusión social y les impide generar más ingresos.

En este contexto, no basta simplemente con que la población que quiera superar su condición de pauperización tenga voluntarismo moral ni tampoco basta con políticas sociales eficaces en otorgar capacidades a los individuos con niveles bajo el estándar de bienestar, sino que es fundamental analizar el “estado de salud” del modelo de desarrollo instaurado, pues si existe una alta cantidad de grupos excluidos es producto de que otro grupo los excluye mediante las relaciones de poder. De esta forma, se puede señalar que la exclusión es la manifestación más extrema de la desigualdad social (Pérez, 2007).

Por consiguiente, el foco de la política social en sociedades con altos niveles de desigualdad no debe centrarse en la cuantificación de los individuos que superan su condición de miseria, sino que en identificar las barreras que impiden la movilidad social en un amplio espectro de la población, vale decir, desde excluidos totales hasta los sectores medios. En este sentido, Piketty plantea, a través de un análisis de datos económicos históricos, que una disminución en la participación de los ingresos de la renta nacional por parte del decil superior produce un aumento en el ingreso del 90% más pobre¹⁸, lo cual se traduce en un aumento sostenido en la productividad. Cabe destacar que Piketty señala que si el decil superior aumenta por sobre el 50% su participación en el ingreso de la renta nacional, se puede desencadenar una desestabilización

¹⁷ Si unimos las variables “pobres extremos” y “pobres no extremos” según ingresos y que señalan que tienen un trabajo principal, se observa que un 34,24% de los pobres no tiene contrato laboral según la encuesta Casen del año 2017.

del sistema económico, político e institucional (Piketty, 2014).

En este escenario, el índice más acertado para medir la desigualdad sería el ratio de Palma, ya que mide la relación entre la participación del ingreso del 10% más rico y la del 40% más pobre. El fundamento teórico que justifica este ratio es que la proporción del ingreso que va desde los grupos medios hasta los medios altos (deciles cinco a nueve) es sorprendentemente equivalente en todo el mundo y corresponde aproximadamente a la mitad del ingreso nacional. Mientras, el 50% restante está asociado a la distribución en el ingreso del 40% más pobre y del 10% más rico (Palma, 2016). Por esto, la recomendación de expertos como Stiglitz es que este ratio no debe ser superior a uno (1) (Doyle & Stiglitz, 2014).

Para aquellas sociedades que presenten un ratio de Palma superior a 1 se recomienda lo siguiente (Molina, 2006):

- Expandir la cobertura de la protección social, incorporando activamente la garantía de un conjunto de servicios sociales definidos como relevantes para todos los ciudadanos.
- Elevar la calidad de los servicios sociales accesibles para todos los ciudadanos, disminuyendo las brechas de

las condiciones de vida entre sectores y territorios.

- Potenciar la estructura fiscal que permita financiar el gasto social de las políticas sociales universalistas.

Para que los individuos puedan superar su condición de pauperización es necesario brindarles una red de protección de bienes y servicios que garantice un nivel mínimo relativo de bienestar. Para ello, tanto las políticas universalistas como las focalizadas deben actuar en conjunto para contribuir a alcanzar este objetivo, pues al ser la exclusión un fenómeno formado por la articulación de un cúmulo de circunstancias desfavorables, fuertemente interrelacionadas, no puede ser solucionada de forma parcial y/o localizada. Las políticas sociales, ya sean universalistas y/o focalizadas, deben tener por característica la de ofrecer una batería de programas sociales que tengan por objeto la regeneración de rupturas sucesivas a los individuos que hayan vivido esos procesos.

Entendiendo esta dinámica, es fundamental la utilización de metodologías que permitan mapear las expresiones de la exclusión y, posteriormente, identificar las causas primigenias mediante el empleo de equipos multidisciplinarios que permitan diferenciar entre un origen micro, meso o macro, según la estratificación realizada por Estivill.

¹⁸ El análisis de datos que realiza Kuznets sobre la participación de cada decil en los ingresos de la renta nacional de los EE.UU. entre 1913 y 1948 demuestra una disminución del decil superior en la participación de ingresos de la renta nacional desde el 45 a 50% hasta 30 a 35% en el periodo indicado, lo cual se tradujo en que la participación en la renta nacional del 90% más pobre aumentó desde un 50 a 55% en la década de 1910 y 1920 hasta un 65 a 70% a finales de 1940. Posteriormente, Piketty extendió ese análisis hasta el 2010, demostrando que a partir de la década de 1980 se presenta un aumento en la desigualdad que llega, en la década de los 2000-2010, a 45 a 50% por parte del decil superior.

En razón a lo expuesto, se propone identificar los principales tipos de programas sociales y categorizarlos en las zonas o áreas a las cuales pueden ir dirigidos mediante la metodología de

gradientes de integración y exclusión de Busso (2001), que considera el objetivo de cada programa y la población objetivo.

Tabla 5. Categorías de identificación de programas sociales que fomentan la ciudadanía

Tipo de programa social	Exclusión total y media	Exclusión débil	Excluido no pobre	Integrado pobre	Integración débil y media
Programas de transferencia monetaria	- Subsidio de agua potable - Subsidio a la cédula de identidad - Bono base familiar				
Programas de transferencia condicionada	- Bono de protección - Bono base familiar - Bono por graduación de 4° medio				
Programas de fomento de la generación de ingresos autónomos	- Yo emprendo – Semilla - Desarrollo de competencias laborales para mujeres - Programa de servicios sociales - Yo trabajo – jóvenes - Generación de microemprendimiento urbano - Yo trabajo – Apoyo tu plan familiar	- Yo emprendo – Semilla - Programa de servicios sociales - Yo trabajo – jóvenes - Yo trabajo – Apoyo tu plan familiar	- Programa de servicios sociales	- Yo emprendo – Semilla - Yo trabajo – jóvenes - Yo trabajo – Apoyo tu plan familiar	
Programas de articulación con el mercado del trabajo	- Programa de formación y capacitación				
Programas que promueven la formalización laboral	- Bono por formalización laboral				

Fuente: elaboración propia a partir del artículo "Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI", documento presentado en el seminario internacional "Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe", Gustavo Busso, 2001.

En la Tabla 5 se observan las diferentes zonas a las que pueden estar dirigidos los programas sociales de acuerdo a su población objetivo y la finalidad del programa. Esta sistematización tiene por objeto la generación de un diagnóstico sobre el estado actual del Programa Familias, por lo que se espera que esta radiografía promueva el avance en la formulación de programas más efectivos que logren una movilidad social sostenida.

Resultados de la aplicación de diferentes tipos de políticas sociales que fomenten la ciudadanía

Para profundizar en la discusión sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza del Programa Familias, la Tabla 5 analizó las 19 prestaciones sociales que brinda esta iniciativa, de las cuales tres se catalogan como transferencias monetarias no condicionadas¹⁹; tres como transferencias monetarias condicionadas²⁰; seis como programas que fomentan el ingreso autónomo a grupos excluidos²¹; un programa se orienta a disminuir la precarización laboral²²; un programa articula el mercado del traba-

jo para aumentar la empleabilidad de grupos excluidos²³; y cinco prestaciones no aplicaron para ninguna de las categorías anteriores²⁴.

Se observa que 14 programas van dirigidos al área de exclusión total y media, puesto que tienen como objetivo a familias en situación de pobreza y pobreza extrema; cuatro a la zona de exclusión débil, pues apuntan al 40% de la población vulnerable; uno está dirigido al sector excluido pobre, ya que se enfoca en mayores de 18 años en situación de desempleo; y tres al sector integrado pobre, debido a que apuntan al 40% de la población vulnerable²⁵.

A pesar de que existe una presencia mayoritaria de programas en el apartado de generación de ingresos autónomos, existen serias dudas de que el componente de acompañamiento sociolaboral sea efectivo en la generación de ingresos una vez finalizado el programa, ya que uno de sus principales indicadores de éxito señala que se busca que las familias aumenten los ingresos monetarios autónomos del grupo familiar por sobre la línea de la indigencia durante seis meses consecutivos una vez supe-

¹⁹ Subsidio al consumo del agua potable, Subsidio a la cédula de identidad y Bono base familiar.

²⁰ Bono de protección, Bono base familiar y Bono por graduación de 4° medio.

²¹ Yo emprendo-Semilla, Programa de desarrollo de competencias laborales para mujeres, Programa de servicios sociales, Yo trabajo-jóvenes, Generación de microemprendimiento urbano, Yo trabajo-Apoyo tu plan laboral.

²² Bono de formalización laboral.

²³ Programa de formación y capacitación.

²⁴ Ayudas técnicas, habitabilidad, Programa apoyo a la dinámica familiar, apoyo a las familias para el autoconsumo, apoyo a la salud mental y Programa Alimentación Escolar-tercer servicio.

²⁵ La población objetivo y el objetivo del programa fueron obtenidos a partir de la Guía de beneficios sociales 2017, N°2.

rada su permanencia en el programa (Ministerio de Desarrollo Social, 2016b). De igual forma, los resultados del anterior Programa Familias, denominado Chile Solidario, demuestran que no hay evidencia de que este programa haya contribuido a aumentar los niveles promedio de empleo e ingresos de los participantes. Incluso las evaluaciones de impacto indican que las familias que mejoraron sus ingresos y la empleabilidad son explicadas por cambios en los ciclos económicos favorables (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo—Chile. Área de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, 2010).

Según lo expuesto, no es comprensible que la superación de la línea de la indigencia por seis meses consecutivos sea el objetivo del Programa Familias, pues este indicador, en ningún caso, puede significar la superación de la pobreza extrema de forma sostenible. Quizás solo podría asegurarse que el objetivo del acompañamiento sociolaboral es hacer menos pobres a los más pobres, ya que los individuos egresados del componente sociolaboral siguen estando en una alta vulnerabilidad.

Asociado a esto, la Subsecretaría de Servicios Sociales plantea que el verdadero objetivo del componente de acompañamiento sociolaboral no es la inserción de los usuarios en empleos dependientes y/o independientes, sino el aumento de sus competencias laborales (Ministerio de Desarrollo Social, 2016b).

Si el acompañamiento sociolaboral no va aparejado de políticas sociales que promuevan una verdadera articulación con el mercado del trabajo y el mundo

privado es muy difícil que los individuos en condiciones más adversas puedan optar a un trabajo o emprendimiento estable que genere condiciones mínimas para su bienestar, vale decir, a una formalización de su situación laboral con seguridad social.

Asimismo, la Subsecretaría de Servicios Sociales plantea que el componente *eje*, instrumento inicial de diagnóstico de las familias al momento de ingresar al programa, solo genera una caracterización estandarizada de la familia, que no mide las condiciones iniciales y el real estado de esta. Esto ocasiona que, ante distintas causas, se presentan y ofrecen las mismas soluciones (Ministerio de Desarrollo Social, 2016b).

Como ya se ha dicho, el Programa Familias va dirigido al 10% de la población más vulnerable según el RSH. Esto genera cuestionamientos, ya que no se comprende por qué se focaliza en el tramo entre 0 y 10% si el Ministerio de Desarrollo Social señala que no existe diferencia significativa en el ingreso (y por tanto, en la calificación socioeconómica) de los hogares que están en el tramo de 0 a 40%. Así las cosas, la utilización del RSH como único instrumento para seleccionar el ingreso a programas sociales en tramos inferiores al 40% implica un alto riesgo de error (Ministerio de Desarrollo Social, 2016b).

En síntesis, hace falta que las prestaciones del Programa Familias vayan dirigidas significativamente a la preparación y la generación de ingresos autónomos, donde es vital el acompañamiento y la voluntad de la empresa privada de incluir a personas en situación de exclu-

sión a partir de oportunidades acordes con el contexto globalizado. Esto, a la espera de que el Estado pueda entregar incentivos a aquellas empresas con un alto índice de trabajadores en situación de exclusión.

CONCLUSIONES

- No puede considerarse que el Programa Familias, perteneciente al subsistema Seguridades y Oportunidades, emplee un enfoque de exclusión social, pues la participación de los destinatarios sociales es de carácter simbólico, ya que los usuarios desconocen el contenido del programa y no han participado colaborativamente en su formulación. De igual forma, la participación de otros actores sociales, además de la familia, solo interviene en las evaluaciones *ex post*, dentro de marcos definidos por la institucionalidad, ya sea la Dirección de Presupuestos o el Ministerio de Desarrollo Social. Adicionalmente, la selección de los destinatarios se ejecuta teniendo a la vista solo la línea de la pobreza, lo cual excluye cualquier otra dimensión no económica que afecte al bienestar. Asimismo, se visualiza que la unidad de análisis es la familia, lo que restringe otro tipo de direccionamiento en la política social hacia grupos sociales vulnerables o zonas o comunidades en situación de rezago. Conjuntamente, a pesar del avance en la creación de programas de fomento de la generación de ingresos autónomos, estos solo se limitan a lograr que los destinatarios superen la línea de la indigencia.

- El Programa Familias falla a la hora de asegurarles a las familias ingresos sostenibles, pues solo el 33% de las que egresan son capaces de aumentar sus ingresos sobre la línea de la indigencia durante los seis meses posteriores (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2019).

- Se presenta confusión entre las funciones del componente *eje* y el componente *acompañamiento psicosocial*, ya que las similitudes de cada uno hacen que las familias participantes se desorienten.

- Los usuarios seleccionados tienen una sobreexpectativa de los ingresos que percibirán tras su participación en el programa.

- Se presentan desorganizaciones entre las diferentes instancias institucionales respecto a la ejecución de ciertas funciones.

RECOMENDACIONES

Corto plazo

- a) Aumentar la inversión. Durante 2018, el Programa Familias atendió a un total de 105.234 grupos familiares, los cuales se desagregaron en 45.000 que se iniciaron durante el año señalado más 55.000, aproximadamente, que corresponden a años anteriores. Con este fin, el Ministerio de Desarrollo Social destinó un presupuesto ejecutado de \$23.853.310 (MM\$ de 2018), que abarcó al 60,53% de la población potencial.

Si consideramos lo establecido en el Decreto N°16 del Ministerio de Desarrollo Social, la población corresponde al tramo de clasificación socioeconómica que va entre el 0 al 10%, por lo que se recomienda que durante la discusión del presupuesto del año 2021 se aumente el presupuesto en un 39,47%, lo que representa \$33.268.211 (MM\$ de 2018), con el objeto de cubrir a la totalidad de población potencial, es decir, las 173.855 familias que componen el 10% de la población más vulnerable según el RSH.

b) Modificar el sistema tributario, reformular la estructura tributaria, dar mayor carga a los impuestos directos y bajar la carga a los impuestos indirectos, de tal forma que disminuya el peso de impuestos regresivos (como es el caso del IVA) y aumente el de los impuestos progresivos (como el de primera categoría). Esta medida tiene por objeto generar una recaudación fiscal capaz de financiar el gasto social de las políticas sociales universalistas.

c) Modificar la metodología de selección de destinatarios sociales por una que contemple varias dimensiones del bienestar y que cuente con correcciones para territorios determinados.

d) Crear normativas que obliguen a las empresas a crear cuotas de contratación de personas que se encuentren en situación de exclusión, ya sea económica, étnica, social, etaria o relacionada con vulnerabilidad o capacidades diferentes, entre otras.

e) Elaborar propuestas de participación para los programas sociales en conjunto con la ciudadanía, donde esta proponga

y decida las instancias de participación vinculantes para la evaluación *ex ante*, *ex dure* y *ex post* de los programas sociales.

f) Postergar el postnatal de seis meses a un año, equiparando, de forma obligatoria, el cuidado del menor por parte del padre con el de la madre, lo cual desactivaría la menor contratación de mujeres.

g) Crear políticas de acompañamiento para fomentar la formalización laboral y el microemprendimiento.

h) Crear incentivos para aquellas empresas y cooperativas que tengan un alto índice de trabajadores en situación de exclusión.

Mediano plazo

a) Reformular el Programa Familias dentro de los próximos cinco años y a partir del 2020, priorizando la utilización de equipos multidisciplinarios en el componente *eje* e identificando diagnósticos multifactoriales de la exclusión social.

b) Reformular el Registro Social de Hogares y reemplazarlo por un método integrado con necesidades básicas relativas, con el objeto de identificar las dimensiones de la exclusión social, lo que facilitaría los diagnósticos de los grupos excluidos a través de equipos multidisciplinarios.

c) Descentralizar la política social. El Estado centralizado debe generar programas sociales donde existan elementos comunes que permitan revertir la exclu-

sión y, a la vez, debe brindar recursos a locales (gobernaciones o municipios) que aseguren el fomento de la innovación frente a causas de exclusión difíciles de resolver. Esto permitiría entregar soluciones adaptativas a cada realidad familiar, comunal o para cada grupo social determinado. En caso de ser exitosa, esta medida puede ser replicada a nivel nacional.

d) Crear una entidad pública que brinde cuidado del hogar a usuarios del subsistema Seguridades y Oportunidades, con el objetivo de independizar a los padres o tutores para que puedan generar ingresos autónomos.

e) Identificar aquellas zonas productivas en situación de rezago e invertir en innovaciones productivas de acuerdo a las identidades locales, a fin de que puedan incluirse dentro del modelo de desarrollo preponderante.

f) Promover las políticas sociales aplicables a grupos sociales, comunidades excluidas y territorios rezagados²⁶ donde se presenten diagnósticos comunes.

g) Ampliar el presupuesto una vez reformulada una parte del Programa Familias, con el objetivo de cubrir al 40% de las familias más vulnerables según el método de selección de los destinatarios sociales vigente.

²⁶ Según el informe listado de comunas susceptibles de ser propuestas como zonas rezagadas en materia social de la Subdere, año 2019.

BIBLIOGRAFÍA

- **Alwang, J., Siegel, P. and Jorgensen, S. (2001).** *Vulnerability: a view from different disciplines*, Social Protection Discussion Paper Series, Banco Mundial Washington.
- **Arnstein, S. R. (1969).** "A Ladder of Citizen Participation". In: *Journal of the American Planning Association*, 35: 4.
- **Atkinson, A. B. (1998).** *Poverty in Europe*. Oxford, Blackwell Publishers.
- **Attanasio, O., Fitzsimmons, E. y Gómez, A. (2005).** The impact of a conditional education subsidy on school enrollment in Colombia. Mimeo. Institute for Fiscal Studies.
- **Banco Central de Chile (2019).** Cuentas Nacionales por Sector Institucional. Evolución del ahorro, la inversión y el financiamiento sectorial en el segundo trimestre de 2019 (p. 4). Santiago.
- **Barba, C. (2004).** Régimen de bienestar y reforma social en México. Políticas Sociales. División De Desarrollo Social Cepal, Serie N°92. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6080/1/S047561_es.pdf
- **Barneche, P., Bugallo, A., Ferrea, H., Ilarregui, M., Monterde, C., Pérez, V. & Angeletti, K. (2010).** Métodos de medición de la pobreza. Conceptos y aplicaciones en América Latina. *Entrelíneas de la Política Económica*, 26(4), 31-41.
- **Barros, P., De Los Ríos, D. y Torche, F. (1996).** ILO Multidisciplinary Technical Advisory Team. Ginebra: Oficina Internacional Del Trabajo, 1996.
- **Behrman, J. R. y Hoddinott, J. (2005).** Programme evaluation with unobserved heterogeneity and selective implementation: the Mexican Progresa impact on child nutrition. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 67, 4, 547-569.
- **Brugué, Q., Gomà, R. y Subirats, J. (2002).** "De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas". *Revista Internacional de Sociología*, 33, 7-45.
- **Bustelo, E. & Minujin, A. (1997).** La política social esquiva. *Revista de Ciencias Sociales*, 6, 3-28. Recuperado de http://www.terras.edu.ar/biblioteca/10/ECP_Bustelo-Minujin_Unidad_6.pdf
- **Busso, G. (2001).** Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Documento presentado en el Seminario Internacional "Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe" (Santiago de Chile, 20 y 21 de junio), inédito.
- **Carrasquilla, M. C. y Carnacea, M. A. (2013).** Crea, juega y participa. Caja de herramientas para la participación. Cuaderno conceptual, Madrid, Eapn España <http://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/>
- **Castel, R. (2004),** Encuadre de la exclusión. En: S. Karsz (Coord.). *La exclusión: bordeando sus fronteras: definiciones y matices*. Barcelona, Gedisa, 55-86.
- **De la Hera Rodríguez, M. (2017).** La voz de las personas en situación de vulnerabilidad en el diseño de las políticas sociales en Euskadi. La experiencia de Eapn Euskadi. *Zerbitzuan*, (64), 203-212. <http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.64.14>

- **Doyle, M. & Stiglitz, J. (2014).** Eliminating Extreme Inequality: A Sustainable Development Goal, 2015–2030-Ethics & International Affairs. Recuperado el 23 de marzo de 2020 de <https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/eliminating-extreme-inequality-a-sustainable-development-goal-2015-2030/>
- **Durán, J. (2015).** Construcción de una medida multidimensional de pobreza para El Salvador. Universidad de Chile, Economía y Negocios. Tesis de postgrado.
- **Estivill, J. (2003).** *Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias* (primera edición, pp. 19–20). Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- **Feres, J. C. & Mancero, X. (2001).** El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Cepal.
- **Filgueria, C. & Peri, A. (2004).** América Latina: los rostros de la pobreza y sus causas determinantes. Población Y Desarrollo Cepal, Serie 54. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7192/1/S045458_es.pdf
- **Freijeiro Varela, M. (2008).** ¿Hacia dónde va la ciudadanía social? (de Marshall a Sen). *Andamios, Revista de Investigación Social*, 5(9), 157. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v5i9.188>
- **Gertler, P. (2000).** Final report: the impact of Progesa on health. International Food Policy Research Institute, Washington, D. C.
- **Hernández Pedreño, M. (2010).** El estudio de la pobreza y la exclusión social. Aproximación cuantitativa y cualitativa. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*. Issn: 0213-8646. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/274/27419173003.pdf>
- **Instituto Nacional de Estadísticas (2018).** Brechas de género en el mercado laboral chileno a nivel nacional, año 2017. Recuperado de http://historico.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/infografias/o_infografia_brecha_genero_mercado_laboral.pdf
- **Kaztman, R. y otros (1999).** “Vulnerabilidad, activos y exclusión social en Argentina y Uruguay”. Santiago, OIT, Serie Exclusión Social-Mercosur, documento de trabajo 107.
- **Laparra, M., Obradors, A., Pérez, B., Pérez, M., Renes, V. & Sarasa, S. et al. (2008).** Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. Implicaciones metodológicas. *Revista Española Del Tercer Sector*, N°5 enero-abril, 23–26. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/28179965_Una_propuesta_de_consenso_sobre_el_concepto_de_exclusion_implicaciones_metodologicas
- **Ley N°20.595.** Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 17 de mayo de 2012.
- **Maluccio, J. A. y Flores, R. (2005).** Impact evaluation of a conditional cash transfer program: the Nicaraguan Red de Protección Social. Research Report 141. Washington, D. C.: International Food Policy Research Institute.
- **Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2019).** Ficha de seguimiento de programas sociales año 2016, Programa Familias-SS-yOO (p. 4). Santiago de Chile.
- _____ (2018). Informe de seguimiento de programas sociales: “Programa Familias”. Santiago.
- _____ (2017a). Informe de Desarrollo Social (p. 13; 24). Santiago.

_____ (2017b). Guía de beneficios sociales 2017, N°2. Santiago. Recuperado de http://www.registrosocial.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Guia2_Beneficios_Sociales.pdf

_____ (2016a). Informe de Desarrollo Social 2016. Santiago. Recuperado de http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_de_Desarrollo_Social_2016.pdf

_____ (2016b). "Informe final de evaluación Programa Familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad - Subsistema Seguridades y Oportunidades". Santiago, Chile.

_____ (2015a). Evaluación del Modelo de Gestión del Programa Ingreso Ético Familiar. Santiago, Chile.

• **Molina, C. (2006).** *Universalismo básico, una nueva política social para América Latina* (1st ed., p. 100). Colonia Florida, México: Inter-American Development Bank.

• **Moriña Díez, A. (2007).** La exclusión social: análisis y propuestas para su prevención. Fundación Alternativas, Estudios de Progreso N°26, 15. Recuperado de https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/estudios_documentos_archivos/xmlimport-r6gMze.pdf

• **Palma, J. G. & Stiglitz, J. E. (2016).** Do nations just get the inequality they deserve? The "Palma Ratio" re-examined. En: *Inequality and growth: Patterns and policy* (pp. 35-97). Palgrave Macmillan, London.

• **Pérez Saínz, J. P. (2007).** La persistencia de la miseria en Centroamérica. Curridabat, Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

• **Piketty, T. (2014).** *El capital en el siglo XXI*. Fondo de Cultura Económica.

• **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo—Chile. Área de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (2010).** Las nuevas políticas de protección social en perspectiva histórica (p. 16). Santiago. Recuperado de http://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_texto16.pdf

• **Roura, A. (2019).** "Protestas en Chile: las grietas del modelo económico chileno que las manifestaciones dejaron al descubierto". *BBC News Mundo*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50208871>

• **Saraví, G. (2007).** *Nuevas realidades y nuevos enfoques: exclusión social en América Latina. De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina*. Buenos Aires, Ciesas & Prometeo.

• **Satriano, C. (2006).** Pobreza, políticas públicas y políticas sociales. *Revista Mad. Revista del Magister en Análisis Sistemático Aplicado a la Sociedad*, (15), 60-74.

• **Sen, A. (1983):** "Poor Relatively Speaking", *Oxford Economic Papers*, N°3.

• **Serafini, V. (2013).** La pobreza en Paraguay: apuntes para la discusión. *Revista Paraguaya de Sociología*, (143), 71-78.

• **Silvia, L. (2000).** La ciudadanía social argentina en los umbrales del siglo XXI. Hintze Susana (comp.) *Estado y sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI*, Eudeba, Bs. As.

• **Sojo, C. (2000).** *Dinámica sociopolítica y cultural de la exclusión social*, E. Gacitúa, C. Sojo y S. H. Davis (eds.).

• **Subirats, J., Gomà, R. & Brugué, J. (2005).** Análisis de los factores de exclusión social. Fundación BBVA (Documentos de Trabajo 4), 11-13. Recuperado de https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/exclusion_social.pdf

• **Subsecretaría de Evaluación Social (2016).** Ampliando la mirada sobre la pobreza y desigualdad. Santiago: Casen, 2015.

_____ (2018). Evaluación de Impacto del Subsistema de Protección y Promoción Social Seguridad y Oportunidades (Ley N°20.595) - Usuarios egresados. Santiago de Chile: Centro de Sistemas Públicos-Ingeniería Industrial Universidad de Chile.

• **Tezanos, J. F. (2001).** *Tendencias en desigualdad y exclusión social; tercer foro sobre tendencias sociales.* Madrid: Sistema.

• **Trivelli, C. & Clausen, J. (2015).** *De buenas políticas sociales a políticas articuladas para superar la pobreza: ¿qué necesitamos para iniciar este tránsito?* (1st ed.). Lima: Instituto de Estudios Peruano.

• **Velasco, P. (2018).** "INE: 2,5 millones de personas trabajan en un empleo informal en Chile". *La Tercera*. Recuperado de <http://www.latercera.com/negocios/noticia/ine-25-millones-personas-trabajan-empleo-informal-chile/53356/>

• **Yanes, P. (2016).** ¿De las transferencias monetarias condicionadas al ingreso ciudadano universal? *Acta Sociológica*, 70, 129-149. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1016/j.acso.2017.01.006>

• **Zambrano, P. (2011).** El milagro chileno. *Polemika*, 2(6), 144-159. Recuperado de <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/polemika/article/view/392/369>



FARMACIAS POPULARES EN CHILE: UNA MIRADA TERRITORIAL HACIA LA EQUIDAD EN SALUD EN CHILE

Macarena del Pilar Filún Aguilar¹,
Universidad de Chile



RESUMEN

El presente artículo expone los resultados obtenidos en una investigación de campo realizada el año 2018 que analizó los modelos de farmacias populares (FP) en Chile y Brasil y puso énfasis en su impacto a nivel económico, social y sanitario. Este trabajo pone foco en el acceso a medicamentos en Chile y en cómo las farmacias populares, particularmente en Chile, han contribuido a subsanar las brechas existentes.

La investigación contempló dos grandes momentos: primero, se hizo un estudio de antecedentes, entre ellos la experiencia brasileña, y en un segundo momento se realizó un estudio empírico que consideró una selección de FP chilenas. Se abordó una selección del 10% del universo de farmacias populares existentes y se llegó finalmente a visitar 16 centros ubicados en distintas localidades de Chile. La mayoría de las FP se concentra en Santiago y la proporción en regiones es casi 1:1 en situación urbano-rural. En definitiva, todos los resultados analíticos cuantitativos y empíricos cualitativos confirman el potencial de las FP de contribuir a disminuir las desigualdades en salud, en específico, las brechas de acceso a medicamentos y, en términos macro, a alcanzar la meta última de la superación de la pobreza.

Palabras clave: acceso, medicamentos, gasto de bolsillo, farmacias populares, sistema de salud, redes integradas de atención en salud.

¹ Química farmacéutica. Artículo basado en la tesis "Modelos de farmacias populares en Chile y Brasil y los resultados en Chile: evaluación de impacto en lo económico, social y sanitario", realizada para optar al título de química farmacéutica. Año de aprobación: 2018. Profesor guía: Mg. QF. José Peña Ruz, asesor regional de Asuntos Regulatorios OPS/OMS. Esta investigación contó con el patrocinio de la representación OPS/OMS Chile.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo abarca los resultados de la investigación de campo en 16 farmacias populares chilenas. Esta investigación se centró en las tres dimensiones del acceso: asequibilidad, disponibilidad y aceptabilidad, y surge después de tres años de implementación de la iniciativa local comunal Farmacia Popular de Recoleta en la comuna del mismo nombre ubicada en la capital de Santiago de Chile, una política pública local originada desde el municipio para enfrentar el alto gasto de bolsillo de los vecinos en medicamentos, así como la desprotección en que el sistema de salud chileno deja a las personas en esta materia.

La idea de una farmacia popular (FP) aún resulta innovadora en el contexto chileno. Sin embargo, la política pública encuentra su origen en el Programa Farmacia Popular de Brasil², creado en 2004 en dicho país. Esta iniciativa se diferencia de la chilena en su génesis: se trata de una política pública gubernamental, con estandarización de servicios y financiamiento estatal. En contraste, Chile cuenta con farmacias populares que obedecen a políticas públicas territoriales originadas en la realidad y

necesidades locales que presentan las unidades municipales. Al término de esta investigación (2018), se contaban 145 municipios de un total nacional de 345 que albergaban a al menos una farmacia popular con asentamiento físico claro, a lo que se suman iniciativas puntuales de farmacias populares móviles, farmacias populares en red y asociación de farmacias entre dos municipios³.

La discusión teórica del artículo se ordenará de la siguiente manera: en primer lugar, se contextualiza la situación del sistema de salud chileno abordando aristas de estructura, organización, ejecución y aseguramiento. Luego, se procederá a consignar aspectos sociales de la población chilena para vincular estas características con las dificultades en el acceso a medicamentos, entendiendo estos últimos, al igual que las vacunas y otros dispositivos médicos, como un ejemplo de tecnología sanitaria altamente especializada. Finalmente, los resultados se centrarán en el impacto generado en la población usuaria y la extrapolación de esta política pública en el marco general de la discusión sobre el acceso a medicamentos.

La metodología utilizada en este estu-

² El Programa Farmacia Popular de Brasil (Pfpb) es una política pública estatal declarada a partir del año 2005 (Ministerio de Salud de la República Federal de Brasil, 2005). Entre los argumentos esgrimidos para su creación estuvo la necesidad de aumentar el acceso de la población a los medicamentos. Ha tenido etapas de readaptación e innovación a medida que ha ido evolucionando.

³ Estas son adaptaciones territoriales que se han ido dando espontáneamente. Algunos ejemplos: la farmacia popular móvil de la comuna de Machalí y de la comuna de Colina, la red de farmacias populares de Valparaíso, de la comuna de Huechuraba y las futuras farmacias en red en las comunas de Ñuñoa y Pudahuel.

dio corresponde a un diseño mixto con variables cualitativas y cuantitativas justificadas a partir de la escasa literatura sobre farmacias populares⁴.

DISCUSIÓN TEÓRICA

1. Sistema de salud chileno: paradoja ambivalente entre lo público y lo privado

El modelo de salud en Chile es de base mixta: liberal y estadista. Esta última característica tiene raíz en el Servicio Nacional de Salud (SNS) de Chile (1952-1979), cuya creación obedeció a un modelo conocido como Beveridge. La definición de sistema de salud corresponde a “todas las actividades cuya finalidad principal es promover, restablecer o mantener la salud” (OMS, 2000). Los sistemas de salud tienen cuatro funciones esenciales: (i) prestación de servicios de salud; (ii) financiamiento (incluyendo recaudación, mancomunación y asignación de recursos); (iii) creación de recursos humanos y financieros; y (iv)

rectoría, es decir, desarrollo de facultades y respuesta a las expectativas de la autoridad sanitaria. Esto, en pos de alcanzar las metas del sistema de salud, las que, según la OMS (2000), son financiamiento equitativo y capacidad de respuesta. Cuando se alcanzan estas metas, se produce una ganancia en salud, equidad en salud, protección financiera, equidad financiera y respuesta del sistema (Kutzin, 2008).

En general, en Chile, el sistema de salud en ejecución consta de dos subsistemas: el público y el privado, los que difieren en tipos de coberturas y prestadores. El sistema público es cubierto por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa)⁵ y tiene una red de prestadores públicos⁶ que brindan atención primaria, secundaria y terciaria, la cual está dividida en su administración y gestión en un nivel central y otro local. Del primero se hace cargo el Estado, definiendo los mecanismos pertinentes⁷, mientras que el nivel local, que corresponde a la administración de la atención primaria, es responsabilidad de los municipios tras el proceso de municipalización de la red de atención primaria de salud (APS)⁸ en la década

⁴ Las farmacias populares no han sido estudiadas acabadamente. Recién en los últimos años se han desarrollado tesis de pre y postgrado, pero no han existido iniciativas suficientemente reveladoras en este contexto.

⁵ El Fonasa es el asegurador público del sistema de salud. Fue creado el año 1979, durante la dictadura militar.

⁶ Esta red se conoce como Sistema Nacional de Servicios de Salud (Sns) y se basa en lo que alguna vez fue el Sistema Nacional de Salud. Se organiza en 29 servicios de salud territoriales que tienen responsabilidades de acción sanitaria sobre territorios geográficos definidos. Hoy en día, la red cuenta con prestaciones a cargo del Estado desde dos áreas de gestión: estatal central (con administración y ejecución de hospitales públicos) y estatal de administración y ejecución municipal, en el nivel primario de atención (red de atención primaria de salud o APS).

⁷ Desde la profundización de reformas neoliberales en el sector salud, estos mecanismos tienen distintas alianzas con el mundo privado, lo que incluye, por ejemplo, hospitales autogestionados.

de los ochenta. El sistema presenta tres niveles de atención: primaria (estrictamente público), secundaria y terciaria (prestadores públicos, mayoritariamente, y privados a medida que se especializa la atención). Es, además, un sistema altamente fragmentado y segmentado.

En general, los sistemas de salud de las Américas se caracterizan por altos niveles de segmentación y fragmentación (OPS, 2010). El primer nivel, mayoritariamente administrado por las municipalidades, tiene un modelo de atención de salud familiar con enfoque de derechos y participación centrado en el usuario, su familia y su comunidad, y resuelve la mayor parte de los problemas de salud de la población. Se trata de un sistema de baja complejidad y amplia cobertura que se centra en la atención ambulatoria a través de postas rurales y consultorios urbanos, generales y rurales, con diversos nombres y etiquetas (Gattini, 2017), los que actualmente reciben el nombre de centros de salud familiar (Cesfam). Por su parte, el concepto de atención primaria de salud proviene de la Declaración de Alma-Ata, suscrita por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que se trata de

“la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y comunidad; a un coste aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”

(Declaración de Alma-Ata, 1978, p. 1).

Es así que se reconocen en el mundo variados sistemas de salud que adoptaron los principios de APS, ya sea antes o después de la declaración. La atención primaria de salud comenzó siendo una recomendación para terminar convirtiéndose en un mandato a los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS.

En Chile, la APS se rige conceptual y normativamente por el Ministerio de Salud (Minsal) y ha incluido el desarrollo de un Modelo de Atención Integral en Salud (Mais) de carácter multidisciplinario. Ahora bien, la mayor parte de la atención primaria de salud entregada en centros urbanos y rurales ha sido delegada a la administración municipal (Gattini, 2017). Como ya se señaló, el nivel de atención primario es de menor complejidad y dentro de los establecimientos que lo componen se encuentran: consultorios generales rurales y urbanos (CGR y CGU), centros comuni-

⁸ La municipalización de la atención primaria (APS) en Chile se dio en el marco de descentralización de las funciones del Estado en pleno periodo de reformas neoliberales en los años ochenta y noventa. Actualmente, 321 municipios se hacen cargo de la salud de su territorio en Chile.

tarios de salud familiar (Cecof), centros de salud familiar (Cesfam), centros de salud rurales y urbanos (CSR y CSU), centros comunitarios de salud mental (Cosam), postas y estaciones médicas rurales (postas de salud rural).

2. Determinantes sociales de la salud en Chile: la extrema desigualdad como síntoma

La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (Cdss) de la OMS señala que “la equidad sanitaria es una cuestión que afecta a todos nuestros países y en la que influyen de forma considerable el sistema económico y político mundial” (Cdss, 2008, p. 9). La falta de equidad sanitaria se basa en las desigualdades existentes según las situaciones y condiciones en las que la población vive, crece, trabaja, envejece y muere, determinadas por el sistema económico, político y de protección social en el que la población está inmersa. Estas inequidades comprenden una dimensión ética y moral y se definen como “aquellas diferencias injustas y evitables” (Whitehead, 1992, p. 431) en el estado de salud de los individuos, poblaciones o grupos que tienen diversas características sociodemográficas, económicas y geográficas, entre otras. A medida que se ha visualizado la im-

portancia de subsanar las desigualdades e inequidades en salud, los países y comunidades han implementado diversas políticas y reformas para lograrlo.

Las desigualdades en salud han sido el centro de la investigación empírica y analítica en las últimas décadas, la que ha llegado muchas veces a las mismas conclusiones. En primera instancia, las desigualdades sanitarias afectan casi siempre a las personas más pobres y suelen agudizarse más con los indicadores objetivos de mala salud que con los subjetivos. Ejemplos de ellos son las medidas antropométricas de malnutrición y la tasa de mortalidad infantil y adulta (Wagstaff, 2002).

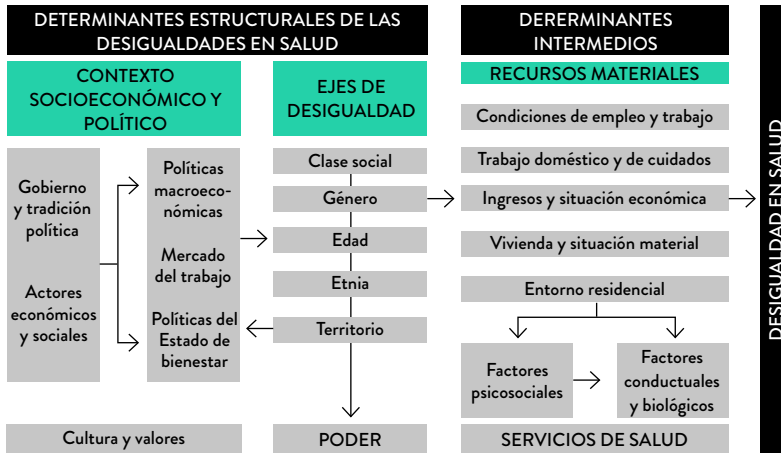
Los llamados determinantes sociales de la salud⁹ (DSS) son diversos factores que determinan el estado de salud y bienestar de la población que no responden a razones estrictamente biológicas. Se identifican dos grandes categorías para los DSS según la OMS, que se basa en la convergencia de los artículos de los autores más aceptados, como “Model of the Determinants of Health” (Dahlgren-Whitehead, 1991) y “Health Inequality-Determinants and Policies” (Diderichsen, 2012), que establecen determinantes estructurales e intermedios. En la primera categoría se encuentran dos grandes pilares que sustentan esta concepción: (i) contexto

⁹ Definición entregada por la Organización Mundial de la Salud: “las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas”. La OMS también consigna que “estas circunstancias sociales son el resultado de la distribución desigual del dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, lo que depende a su vez de la adopción de las políticas del territorio” (Cdss, 2018).

socioeconómico y político y (ii) ejes de desigualdad. Ejemplos de determinantes estructurales son: posición socioeconómica individual y/o clase social, ingreso económico (individual y del hogar), nivel educacional, trabajo u ocupación, género, etnicidad y redes, entre

otros. Por su parte, los determinantes intermedios son condiciones aún más concretas de la vida de las personas enmarcadas en los ejes de desigualdad, como son las condiciones del empleo, el tipo de vivienda y trabajo doméstico, por nombrar algunos (Figura 1).

Figura 1. Determinantes sociales en salud



Fuente: Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010.

La realidad de la desigualdad chilena se expresa en un coeficiente de Gini¹⁰ promedio histórico de 51,84, mientras que el promedio histórico mundial es de

39,28. El último valor medido en Chile (2017) fue de un 46,6, cuando el promedio mundial de dicho año fue de 39,84¹¹. La Oede señaló recientemente que:

¹⁰ El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad (todos los individuos o familias tienen el mismo ingreso) y 1 representa la desigualdad absoluta (solo unos pocos hogares o individuos concentran todos los ingresos). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en referencia a 100 como máximo, en vez de 1, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

¹¹ Valores obtenidos en la base de datos del Banco Mundial a la fecha. "Los datos se basan en datos primarios obtenidos de encuestas de hogares de los organismos de estadística del gobierno y los departamentos de país del Banco Mundial" (<https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=AM>).

“La desigualdad de ingresos de Chile es la segunda más alta de los países de la Ocde, después de México. El ingreso promedio del 10% más rico de la población chilena es 19 veces mayor que el ingreso del 10% más pobre, en comparación con el promedio de 9,3 en todos los países de la Ocde [...] Los altos niveles de desigualdad tienden a obstaculizar la movilidad de ingresos y social: en Chile podría necesitarse que pasaran seis generaciones para que los descendientes de una familia ubicada en el 10% más bajo de la distribución de ingresos alcanzaran el ingreso promedio, en comparación con cuatro a cinco generaciones en promedio en todos los países de la Ocde”
(Ocde, 2019, p. 98).

En otras palabras, en Chile, el nivel de ingreso económico de los individuos puede impactar directamente en distintas esferas de la vida; una de ellas es la salud. El gasto en salud (una de las labores del sistema de salud) puede tener variados mecanismos de financiamiento dependiendo de su origen, que puede estar en el Estado, las aseguradoras o los mismos ciudadanos. Uno de los mecanismos que prevalece en Chile es el gasto de bolsillo (GB), es decir, el costo directo que realizan los

usuarios del sistema por prestaciones de salud. Específicamente, se habla de un promedio de GB de 20% en países Ocde, mientras que en Chile alcanza un 32%. De esa cifra, el 36% corresponde a gastos en medicamentos (Benítez et al., 2018), muy por encima de las consultas médicas (17,3%). A su vez, los hogares que más gastan en medicamentos en Chile se caracterizan como numerosos, longevos (adultos mayores, en su mayoría) y con mayor cantidad de mujeres (Benítez et al., 2018).

El gasto de bolsillo es uno de los mecanismos de pago más inequitativos para la sostenibilidad del sistema de salud, pues depende del pago directo de los usuarios. Se trata de un fenómeno que actúa como barrera de entrada, a diferencia de otros mecanismos que incluyen el gasto de aseguradoras o del mismo Estado, directamente. El gasto de bolsillo siempre termina afectando en mayor medida a los más desfavorecidos (OPS, 2017). En Chile, los medicamentos no están cubiertos por ningún seguro, a excepción de las canastas que otorga el derecho GES (2006)¹² o los que considera la Ley Ricarte Soto¹³, por lo que cualquier prescripción debe ser costeadada directamente por el usuario en una far-

¹² El derecho GES (o, simplemente, garantías explícitas en salud) constituye un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas al Fonasa y a las Isapres (aseguradoras de salud privadas). Las garantías exigibles son: acceso como derecho por Ley de la Prestación de Salud; oportunidad: tiempos máximos de espera para el otorgamiento de las prestaciones; protección financiera: la persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la afiliación; calidad: otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o certificado [<http://www.supersalud.gob.cl/consultas/667/w3-article-4605.html>].

¹³ La Ley Ricarte Soto corresponde a la Ley N°20.850, de junio de 2015, del Ministerio de Salud, que “crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos”. La ley entrega protección financiera a condiciones específicas de salud, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, que hayan sido determinadas a través de un Decreto Supremo del Ministerio de Salud [<http://www.supersalud.gob.cl/difusion/665/w3-propertyvalue-6088.html>].

macia. Según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS 2016-2017), el 65,2% de la población adquiere sus medicamentos en el sistema público, mientras que el 30,4% de la población lo hace en el sistema de farmacias privadas de forma particular. La misma encuesta indica mayor prevalencia de uso de medicamentos en grupos de menor nivel educativo (75,1%) que en aquellos de mayor nivel educativo (52%). Análogamente, es mayor el consumo de medicamentos en estos grupos (3,1 medicamentos versus 1,6) (Benítez et al., 2019).

En términos macrosociales, Chile, en los últimos años, muestra una mayor esperanza de vida¹⁴ y un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, dislipidemias y diabetes), con mayor prevalencia en grupos de menor nivel educativo y cuya escolaridad no supera los ocho años de estudios (ENS, 2016-2017), lo que vuelve a las tecnologías sanitarias más necesarias de lo que fueron en otras épocas. En ese contexto, la situación del mercado farmacéutico evidencia que, desde la injerencia de políticas neoliberales en la década de los noventa, las farmacias cambiaron su modelo histórico de “boti-

ca” a uno de corte mercantil, que exhibe síntomas de concentración de mercado y oligopolios (índice de concentración de mercado HHI superior a los 3.000 puntos¹⁵), e incluso colusión de precios. Además, es un modelo que privilegia la venta de medicamentos, lo que invisibiliza la estructura social del boticario-usuario/paciente. Palma Irarrázaval se refiere al incremento de la concentración de mercados, específicamente el farmacéutico, en América Latina:

“Por una parte, puede haber significado, o ha significado, una rebaja de costos para los consumidores al expandirse las escalas de producción a nivel de venta al detalle, algo discutible por las alzas de precios internacionales de los medicamentos asociados al uso de patentes. Pero, por otra, ha afectado la estructura social al sustituir el rol del profesional farmacéutico, que tenía una farmacia en el barrio o en una ciudad de cuarenta mil o cien mil habitantes y conocía a sus clientes, por las farmacias de cadena, que, además presta otros servicios adicionales aprovechando su vinculación a mercados financieros. Este vínculo que ha posibilitado la

¹⁴ Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el país, la esperanza de vida al nacer se ha triplicado. En 1900 se estimaba en 23,6 años para las mujeres y 23,5 años para los hombres, y para el periodo 2015-2020 es de 82,1 para las mujeres y 77,3 para los hombres.

¹⁵ Índice Herfindahl-Hirschman o HHI: la FNE presume que las operaciones de concentración que no sobrepasan un determinado umbral tienen un escaso potencial anticompetitivo. En consecuencia, la FNE descartó un mayor análisis: a) si el IHH posterior a la operación es inferior a 1500; b) Si 1500 < IHH < 2.500 (el valor de este índice refleja un mercado moderadamente concentrado) y $\Delta IHH < 200$; y c) si IHH > 2.500 (el valor de este índice refleja un mercado altamente concentrado) y $\Delta IHH < 100$. La FNE analizará con detención las operaciones que sobrepasen dichos umbrales, siendo este marcador uno de los más importantes al momento de evaluar competencia en un sector. Esto ha quedado muy expuesto en los últimos pronunciamientos de la Fiscalía Nacional Económica de Chile y también por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en su sentencia N°119/2012 indica expresamente el nivel de relevancia y concentración del mercado farmacéutico chileno.

expansión de cadenas de farmacia, les permite expandir sus áreas de operación y desarrollar líneas propias de financiamiento. Lo que resulta atractivo para los consumidores, pero tiene el efecto de incrementar la concentración de los mercados”
(Palma, 2008, p. 34).

Pese a los avances de la reforma de salud que creó las garantías explícitas en salud (GES), las que solucionaron un gran número de problemas de acceso a tratamientos, muchos de estos quedan fuera de la canasta y persisten problemas de ejecución fluida de estos programas.

Considerando la importancia de los medicamentos en función de la cantidad de enfermos existentes, del envejecimiento de la población, es decir, la inversión de la pirámide poblacional que tiende a una mayor proporción de adultos mayores por aumento de esperanza de vida (Censo, 2017; INE, 2018), y de la incorporación de la estrategia de promoción de la salud en todas las políticas, la necesidad de acceder y disponer de fármacos es inminente y relevante. Sobre todo cuando se tiene en cuenta que en Chile predomina una economía de mercado, donde el Estado no regula el mercado de los fármacos de ninguna manera, por lo que estos van incrementado su costo de acuerdo a la oferta y la demanda sin las regulaciones propias de un mercado imperfecto como el de medicamentos, el panorama se vuelve preocupante dada la gran desigualdad de ingresos evidenciada en el país.

3. Dimensiones del acceso

Un enfoque necesario para enfrentar el problema de la desigualdad es poner atención a los principios declarados en la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud de la OPS/OMS, que declara acceso universal para toda la población por medio de sistemas de salud sostenibles, mancomunados y solidarios (Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud, OPS/OMS, CD53/5, Rev. 2 y CD53/R14 OPS/OMS, 2014). Esto es imprescindible pues el acceso a tecnologías sanitarias (medicamentos, insumos, vacunas y dispositivos médicos) sigue siendo un obstáculo en diversos lugares del mundo. El acceso es, en sí mismo, la “habilidad de obtener y utilizar apropiadamente tecnologías sanitarias de buena calidad cuando son necesitadas” (Frost y Reich, 2009).

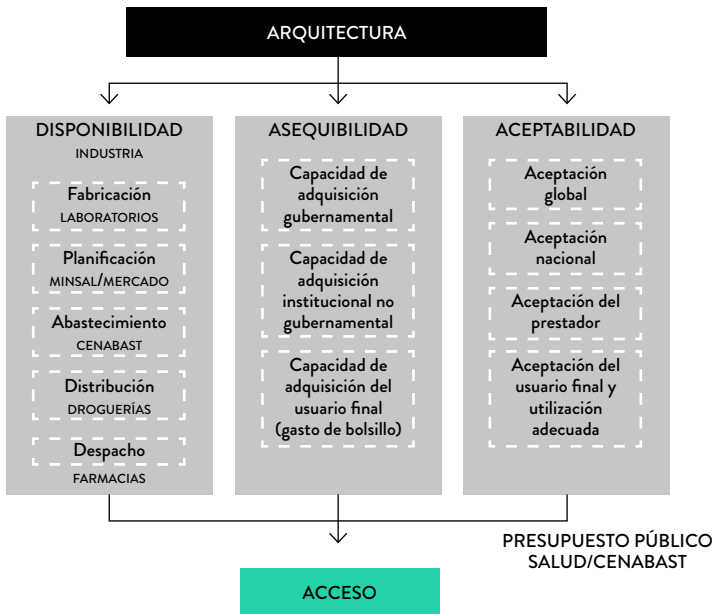
El acceso no es solo un apartado técnico, sino un área compleja que involucra valores sociales y culturales, intereses económicos y aspectos políticos y burocráticos. Simultáneamente, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud piden evolucionar la red de APS hacia redes integradas de servicios de salud (Riss), donde se pueda llevar a cabo a cabalidad un modelo de mayor integridad, lo que disminuiría la fragmentación del sistema de salud, muy común en América Latina (OPS, 2010). Las Riss se vieron potenciadas tras la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud de la OPS, cuyo primer objetivo es “articular las condiciones que permitirán a los países orientar y evaluar sus políticas, y medir

el progreso hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”. Desde esta perspectiva, es interesante que la creación y el diseño de las farmacias populares estén articulados por los municipios, pero sin duda se produce una paradoja cuando esta iniciativa no se integra a la red desde sus inicios. El acceso universal se define como “ausencia de barreras de tipo geográfico, económico, sociocultural, de organización o de género que impiden que todas las personas utilicen servicios integrales de salud”, mientras que la cobertura universal se entiende como aquellos “mecanismos de organización y finan-

ciamiento suficientes para cubrir a toda la población”. Es necesario enfatizar que la cobertura universal por sí sola no es capaz de asegurar salud, bienestar y equidad.

El acceso involucra tres dimensiones estructurales: asequibilidad, disponibilidad y aceptabilidad. Estos ejes están coordinados por la estructura del sistema, lo que se conoce como arquitectura. A continuación, se presenta un esquema (Figura 2) que detalla la estructura dimensional del acceso aplicado directamente a medicamentos en Chile.

Figura 2. Arquitectura del acceso



Fuente: adaptado de Frost y Reich (2009) con antecedentes de Chile.

Disponibilidad. Esta dimensión involucra toda la estructura tangible del recurso, desde su producción hasta su entrega final. Para el caso de medicamentos, agrupa laboratorios de todo tipo (innovadores, nacionales, transnacionales, productores, importadores, etc.), distribuidores al por mayor y minoritarios como las farmacias, y la estructura del sistema asistencial.

Asequibilidad. Corresponde a la capacidad económica del individuo para adquirir un bien o servicio. El principio que funda el acceso equitativo señala que ninguna persona debe ser discriminada u olvidada del sistema debido a su poca capacidad adquisitiva (Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud OPS/OMS).

Específicamente en medicamentos, la asequibilidad tiene tres componentes: (i) gubernamental, (ii) no gubernamental e (iii) individual. El primero, visto desde la mirada del gasto público en salud, corresponde en Chile a un 4,72% del Producto Interno Bruto (PIB)¹⁶ de inversión en toda la cobertura sanitaria del país, proveniente de las cotizaciones de los individuos en Fonasa más la suma de impuestos generales. En comparación con los números de la Oede y en concordancia con la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud OPS/OMS, la inversión fiscal debería alcanzar un 6%

del PIB nacional para todo el sistema sanitario. En el caso específico de salud municipal, esta se financia por tres mecanismos:

i. Aporte estatal a través de la asignación per cápita por población inscrita: se realiza mensualmente a partir de la mediación del Servicio de Salud, que emplea criterios sociodemográficos.

ii. Presupuesto sectorial de salud a través de programas ministeriales que se ejecutan con acción municipal.

iii. Financiamiento municipal directo, ligado estrechamente a los presupuestos comunales y su relación con el Fondo Común Municipal.

Aceptabilidad. Puede entenderse como acceso a la información o, más bien, como la aceptación de la medida. Involucra la manera en que los usuarios responden a un determinado producto o servicio. Para el caso específico del acceso a fármacos en Chile, estos pueden importarse como productos terminados o fabricarse en el país a partir de materias primas extranjeras. La planificación de compra centralizada es estratégica para el área asistencial pública y se ejecuta a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast)¹⁷. Las droguerías públicas (bodegas autorizadas para trabajar con medicamentos) están relacionadas comúnmente a algún ente de la red asistencial y las privadas pueden cubrir mercado público y privado.

¹⁶ Valor elaborado a partir del informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) del año 2017. Este valor solo toma el gasto fiscal en salud, vale decir, el presupuesto en salud desde la distribución estatal.

¹⁷ La Central Nacional de Abastecimiento es un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la República de Chile creado en el año 1933 y reformulado el año 1992, cuando se le dio un rol intermediador entre proveedores de medicamentos, insumos y bienes de salud, y el sector público de salud.

En el caso de la comercialización minorista que ocurre en las farmacias, hasta el surgimiento de las farmacias populares, solo existían farmacias privadas, principalmente (agrupadas en grandes cadenas), con excepciones de farmacias independientes y correspondientes excepcionalmente a alguna organización no gubernamental (ONG) o fundaciones, como es el caso de la farmacia de la fundación Liga Chilena contra la Epilepsia o la Fundación Diabetes Juvenil.

Actualmente, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) también tiene un estudio del que se extraen los siguientes datos (Amuch, 2015):

- i. En Chile hay 271 departamentos o direcciones de salud municipal y 50 corporaciones.
- ii. El 65% de las direcciones de salud municipal están adscritas a los municipios más pobres del país.

En Chile se financian públicamente los medicamentos incorporados en los arsenales de las garantías explícitas en salud (GES) creadas con la reforma de salud del año 2006, y aquellos que entran en la canasta correspondiente a la Ley Ricarte Soto. Por otro lado, los arsenales comunales de salud (de los centros de salud familiar) deben ser financiados por la administración municipal sin ayuda de subsidios fiscales u otros. El resto de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos se debe costear bajo la lógica de gasto de bolsillo en las farmacias comerciales comunes, puesto que tampoco están cubiertos por seguros privados. Cabe indicar que

en los últimos diez años no solo ha aumentado el gasto de bolsillo general en salud, sino también el gasto específico en medicamentos, como ya se ha mencionado. El análisis específico de gasto de bolsillo en salud obtenido de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2018 indica que el gasto en medicamentos en hogares que destinan dinero a fármacos llega al 55,3% del gasto de bolsillo y a 4,2% del gasto total del hogar (Benítez et al., 2019).

En este contexto, donde intervienen los ya mencionados antecedentes del sistema de salud chileno, el alto gasto de bolsillo de la población y las dificultades de acceso a medicamentos específicamente, surge la iniciativa de la farmacia popular en la comuna de Recoleta en 2015, con el propósito de disminuir el gasto de bolsillo de los vecinos en medicamentos y brindar mayor acceso a la población. Esta iniciativa se ha replicado en otros 145 municipios (de un total de 345) a la fecha¹⁸.

La relevancia de la situación detallada y la inexistencia de estudios sistemáticos sobre estas iniciativas populares que las aborden como políticas públicas hacen urgente verificar la incidencia de la farmacia popular en el acceso a medicamentos de la población. Este artículo pretende entregar una visión empírica basada en una investigación sobre la realidad de 16 farmacias populares en Chile, en específico, de las tres dimensiones estructurales del acceso a fármacos antes descritas. Desde esta perspectiva, se concibe a las farmacias

¹⁸ Término de la investigación, septiembre de 2018.

populares como centros de salud. Finalmente, se reflexiona sobre cómo estas políticas públicas locales están contribuyendo a subsanar brechas de acceso de la población, logrando dilucidar los principales desafíos presentes en estas intervenciones.

MÉTODO

Para realizar la investigación se utilizó un diseño metodológico de tipo mixto, que permitió recabar antecedentes sobre la experiencia brasileña, que cuenta con más de diez años de existencia. Luego, se realizó un estado del arte de las farmacias populares en Chile. De este modo, el estudio comprendió simultáneamente tres grandes áreas: revisión de literatura y estado del arte Brasil-Chile, aplicación de técnicas cuantitativas y aplicación de técnicas cualitativas.

El objetivo de las técnicas cuantitativas y cualitativas combinadas fue constatar las tres dimensiones del acceso a medicamentos y proyectar los resultados de una muestra al universo total de farmacias populares existentes a la fecha. La selección de la muestra tuvo como criterios de inclusión: (i) que la farmacia popular estuviese operativa y funcional a la fecha de entrevista y (ii) que contara con un equipo que estuviese diseñado para funcionar como una FP. Además, la muestra debía componerse de un 60% de recintos pertenecientes a la región Metropolitana (coherente con la distribución poblacional del país) y la composición regional esperable debía constituirse de dos regiones al norte y dos al sur, considerando capitales regionales obligatoriamente y, al menos, una ciudad pequeña o pueblo de la región correspondiente para alcanzar un marco de contraste núcleo urbano/pueblo. Las visitas y entrevistas a 16 lugares se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Arquitectura del acceso

Zona norte (región de Coquimbo)	Botica Ciudadana de La Serena, comuna de La Serena Farmacia Municipal de Vicuña, comuna de Vicuña
Ciudad de Valparaíso	Farmacia Comunal de Valparaíso, comuna de Valparaíso
Región Metropolitana	Botica Ñuñoa, comuna de Ñuñoa Farmacia Popular La Pincoya, comuna de Huechuraba Farmacia Popular Dr. Juan Carlos Concha Gutiérrez, comuna de Pedro Aguirre Cerda Farmacia Solidaria Puente Alto, comuna de Puente Alto Vitabotica, comuna de Vitacura Farmacia Popular de Cerrillos, comuna de Cerrillos Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, comuna de Recoleta Farmacia Municipal de Pudahuel, comuna de Pudahuel Farmacia Comunal Pablo Neruda de Lo Prado, comuna de Lo Prado Farmacia Popular de Padre Hurtado, comuna de Padre Hurtado

Zona sur (región de Los Ríos)	Farmacia Municipal de Valdivia, comuna de Valdivia Farmacia Municipal de Lanco, comuna de Lanco
Zona austral	Farmacia Comunal de Punta Arenas, comuna de Punta Arenas

Fuente: elaboración propia.

Los criterios se cumplieron para la región Metropolitana y las regiones de Los Ríos y Coquimbo. No se podía cumplir en Magallanes por no existir otra FP en la región y en Valparaíso no se pudo concretar el trabajo.

El trabajo cualitativo se dividió en dos fases. La primera fue la visita al lugar seleccionado, revisando y conociendo las particularidades del espacio físico. La segunda y más consistente fue la entrevista a los directores técnicos de cada recinto. Esta entrevista tuvo un formato semiestructurado que buscó entender y valorar el relato como la fuente más importante de conocimiento de la génesis de la FP en cada territorio. Cada conversación partió con una revisión de datos duros, como población total, fecha de apertura, alcalde y partido político, cantidad de inscritos (perfiles según sexo, edad y cobertura de salud) y cantidad de recetas despachadas. Luego, el diálogo giró en torno a las recomendaciones del Ministerio de Salud y sus cuatro áreas de trabajo para las farmacias populares (Ministerio de Salud de Chile, 2018): (i) uso racional de medicamentos; (ii) vinculación con la atención primaria en salud; (iii) abastecimiento y modelo de gestión; y (4) marco regulatorio.

Por otro lado, las técnicas cuantitativas apuntaban a tres objetivos específicos, todos relacionados con el grado de acceso que podían brindar las FP en cada una de las dimensiones. Estas técnicas fueron las siguientes:

a) Análisis contrafactual¹⁹: se diseñó una canasta de medicamentos tras conocer los arsenales terapéuticos de los lugares visitados. La canasta incorporó tratamientos relevantes de los usuarios de farmacias populares (antihipertensivos, dislipidemia, paliativos del dolor, antidepresivos, tiroideos y antihistamínicos) y se evaluó el costo comercial promedio de las tres farmacias de *retail* en Chile y luego en cada farmacia popular seleccionada.

b) Análisis georeferencial: siguiendo la lógica de la farmacia como centro de salud y las recomendaciones Ocd de 4.000 habitantes por farmacia, lo que implica 24,7 farmacias por cada cien mil habitantes (OPS, 2017), se evaluó la cantidad de habitantes por farmacia que tienen las comunas estudiadas y se analizó la composición de esta distribución, identificando también la presencia del *retail* de cadenas de farmacia²⁰.

¹⁹ Un análisis contrafactual es una técnica de evaluación de impacto en políticas públicas donde existe un grupo control "no real" (White y Bamberger, 2008).

c) Análisis de la percepción usuaria de farmacias populares: tras las visitas, se constataron los lugares donde se pueden realizar encuestas directamente al público que midan la percepción del usuario en temas de atención, costo y calidad del servicio otorgado en la farmacia popular. Debido a la carencia de evidencia chilena, el instrumento se creó adaptando mediciones previas en farmacias comunitarias argentinas (Armando et al., 2009). A ellas se sumaron las evaluaciones hechas por el Departamento de Políticas Públicas y el Subdepartamento de Políticas Farmacéuticas del Ministerio de Salud recogidas en el documento “Recomendaciones para farmacias populares” (Minsal, 2018).

Solo la medición de análisis geográfico pudo realizarse a cabalidad en todos los lugares, puesto que la evaluación de la percepción usuaria y los precios finales en las FP fueron considerados datos sensibles en algunos lugares y en otros no hubo posibilidad de concretar el trabajo. A modo de regla de consistencia en la cadena final de análisis, en todos los lugares donde se realizó evaluación de la percepción usuaria se desplegaron las otras dos técnicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Resultados generales

El estado del arte de las farmacias en Chile indica que el modo de funcionamiento de estas obedece a lógicas de mercado que en su mayoría han ido mutando hacia la reproducción de las condiciones de las farmacias de cadena, las cuales dispensan y expenden medicamentos junto a bienes comerciales en el mismo recinto. Estas lógicas de mercado no implican una distribución geográfica equitativa de las farmacias, puesto que se hace según índices de consumo y no en función de criterios sanitarios, lo que ha dejado a comunas de Chile sin farmacias. Las farmacias populares comienzan a enfrentarse a este paradigma y a su modelo de ejecución y organización, lo que tiene un impacto en los precios finales. Entre las características distintivas de la función pública de las farmacias populares (División de Políticas Públicas, Minsal, 2018) están la exclusividad de medicamentos en la farmacia, el mayor nivel de competencias técnicas del personal en la FP y la ausencia de publicidad.

²⁰ El *retail* de cadenas de farmacia hace alusión a las tres grandes empresas que concentran en Chile el 90% de las ventas y el 80% de sucursales. Estas son: Farmacias Cruz Verde S.A, Farmacias SalcoBrand S.A y Farmacias Ahumada S.A. Según el Ministerio de Salud, el año 2015 se repartía, de mayor a menor, el mercado de farmacias en estas tres grandes cadenas; Cruz Verde S.A, SalcoBrand S.A y Farmacias Ahumada S.A., con un total de 1.492 locales. Los recintos independientes representan un número inferior a la mitad de estos. Los locales de las cadenas se concentran mayoritariamente en la región Metropolitana, seguida de lejos por centros urbanos de las regiones del Biobío y Valparaíso. A la fecha, aún hay comunas y provincias en Chile que no cuentan con ningún tipo de farmacia (alrededor de 60 comunas). El número de comunas sin farmacia varía según las fuentes que se visite, puesto que en regiones el control de estos datos pertenece al Seremi de Salud y no siempre existe retroalimentación del gobierno central.

Los datos recabados muestran que a la fecha de finalización de la investigación (agosto de 2018) se hallaban operativas 145 farmacias populares a lo largo de todo el país, alcanzando un 43% de los municipios chilenos²¹. De estas, 37 están en la región Metropolitana. Las circunscripciones fuera de la capital se extienden al norte, centro y sur del país, sin representación en el territorio insular. Se distribuyen heterogéneamente en

las distintas regiones, incluyendo doce capitales regionales y diversas comunas de alta constitución rural. La Asociación de Municipalidades Chilenas realizó una caracterización de comunas (Amuch, “Municipalidades y diversidades: ¿qué caracteriza a las comunas chilenas con menos desarrollo?”, 2015²²) que distingue dos grupos: comunas de desarrollo alto (126) y comunas de desarrollo medio y bajo (219).

Tabla 2. Características municipales de acuerdo a territorio y recursos

Características	Nº Comunas
+ Mayor capacidad para la generación de recursos del territorio comunal	126
+ Mayor condición socioeconómica de la población	
+ Territorio comunal con mayores condiciones de urbanidad	
- Menor capacidad para la generación de recursos del territorio comunal	219
- Menor condición socioeconómica de la población	
- Territorio comunal con mayores condiciones de ruralidad	
TOTAL COMUNAS	345

Fuente: informe “Municipalidades y diversidades: ¿qué caracteriza a las comunas chilenas con menos desarrollo?”, 2015, realizado a partir de datos del INE.

Uno de los factores más relevantes según la Amuch fue el asociado a la pobreza multidimensional, índice recién incorporado en esa fecha a la encuesta Casen 2015. Se distingue un promedio de pobreza de 13,37% para el primer grupo y de 17,32% para el segundo. (Amuch, 2015). La región que presenta mayor cantidad de comunas en grupo

de desarrollo medio y bajo es la región del Biobío²³, y es, al mismo tiempo, la administración con mayor número de farmacias populares (26), excluyendo a la región Metropolitana. Las comunas con menor grado de desarrollo tienen mayor dependencia del Fondo Común Municipal (67,91% versus 37,41%). Del grupo de comunas de desarrollo bajo

²¹ En Chile existen 345 municipios de Arica a Magallanes, pasando por Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández.

²² Estudio que reveló datos pioneros aún útiles. Se basó en el Censo de 2012 y en la encuesta Casen de 2015, que utilizó el índice de pobreza multidimensional y el sistema de información municipal de la Subdere-Sinim.

²³ Antes de la creación de la región de Ñuble, en septiembre de 2018.

y medio, 54 cuentan con una farmacia popular en ejecución y estable (31,24% del total de FP en Chile). Dos de ellas, además, han trabajado en una asociación para formalizar una FP de acuerdo a la normativa vigente (Asociación San Fabián de Alico y San Carlos²⁴).

Posteriormente, en coherencia con las visitas, observación y entrevistas con los directores técnicos de las farmacias populares (farmacéuticos), se realizó una recopilación general de los usuarios de las farmacias muestreadas, considerando cantidad total de inscritos, cantidad de inscritos correspondientes al sistema de salud público, cantidad de inscritos correspondientes a población de adultos mayores. Además, se perfila el tipo de administración municipal, las jornadas de atención al público, la cantidad de recetas despachadas mensualmente, las actividades de la farmacia popular (que involucran, entre otras, las relacionadas con su rol como canal de comunicación con la comunidad y otras prestaciones) y el tipo de abastecimiento y su relación con Cenabast.

Del análisis de dicha información se desprenden los siguientes resultados:

a) Variable de usuarios inscritos y su composición

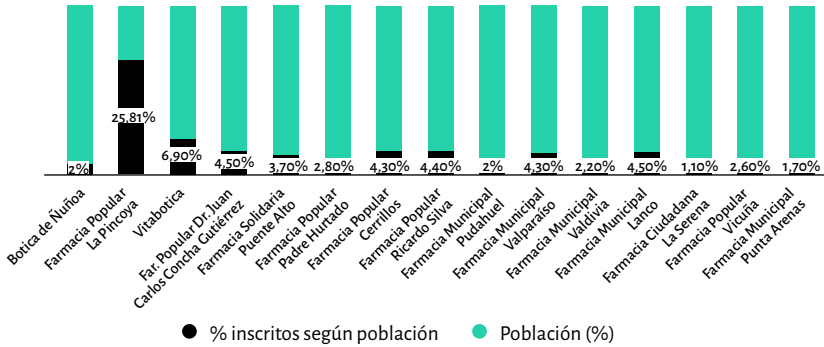
Primero, se identificaron los criterios de inscripción a las FP²⁵ (compartidos por las FP). Uno de los directores de farmacia entrevistado declaró que “la inscripción aún no se detiene, por lo que ha crecido en forma exponencial desde que se inauguró la farmacia”. En algunos casos se realizaron inscripciones previas a la inauguración de los centros. En promedio, los establecimientos de la muestra alcanzan una proporción de inscritos cercana al 5% de la población comunal. En números, los casos se vuelven extremos si se considera, por ejemplo, la magnitud de la comuna de Puente Alto, con 24.308 inscritos y una densidad poblacional de 568.106 habitantes, en comparación con la comuna de Lanco, con 750 inscritos y 16.752 habitantes. En casos extremos como el de Puente Alto, una FP puede incluso tener más inscritos que un Cesfam promedio²⁶. Si se relaciona la cantidad de usuarios inscritos y sus heterogéneas características (en edad, patologías concurrentes y seguridad en salud), las farmacias populares exhiben condiciones que las asemejan a las que exhiben órganos de la red de atención primaria comunales, como los Cesfam, Cecof o Cosam, haciendo las debidas distinciones dependiendo del rol de cada una de estas instituciones.

²⁴ Firma de convenio de farmacia y óptica popular entre San Fabián y San Carlos (2017): <http://www.sanfaban.cl/firma-de-convenio-de-farmacia-y-optica-popular-entre-san-fabian-y-san-carlos/>

²⁵ Tres requisitos fundamentales: ser residente de la comuna, presentar cédula de identidad y receta vigente (tratamiento médico prolongado de seis meses o más).

²⁶ Los inscritos de un Cesfam dependen de la organización y gestión municipal. Varían de 20 mil a extremos de 60 mil y 70 mil. El Ministerio de Salud declaró en 2014 un estándar de 30 mil usuarios inscritos por cada Cesfam.

Gráfico 1. Cantidad de inscritos en farmacias populares versus población comunal (2017-2018)



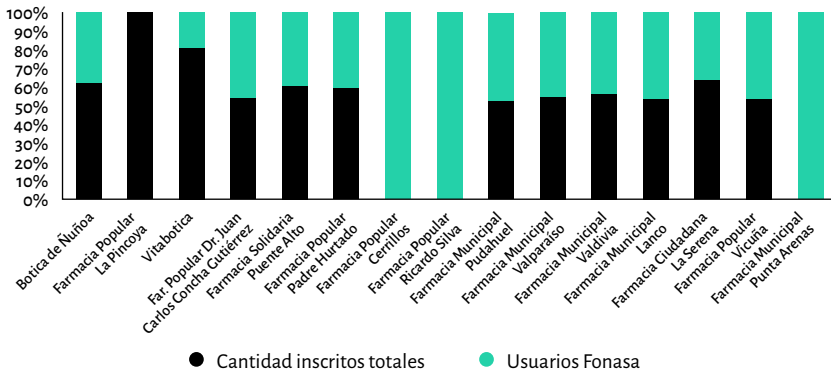
Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por farmacias populares seleccionadas.

b) Cobertura de salud de usuarios de las farmacias populares muestreadas

El aseguramiento en salud a nivel país tiene una proporción estimada de 80% cubierto por el asegurador público (Fonasa) y 20% por los privados. No fue posible extraer este dato en todas las farmacias visitadas, ya que algunas no cuentan con esa información. El prome-

dio de usuarios afiliados a Fonasa rondó el 40%, a excepción de la comuna de Vitacura con la FP Vitabotica, que presenta un perfil socioeconómico invertido, con un 80% de sus usuarios asegurados de manera privada. Cabe recordar que el aseguramiento público y privado no incluye los medicamentos, a no ser que estos estén dentro de una prestación GES.

Gráfico 2. Porcentaje de usuarios de farmacias populares afiliados a Fonasa (agosto de 2018)



Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por farmacias populares seleccionadas.

c) Gestión y abastecimiento de las farmacias populares muestreadas

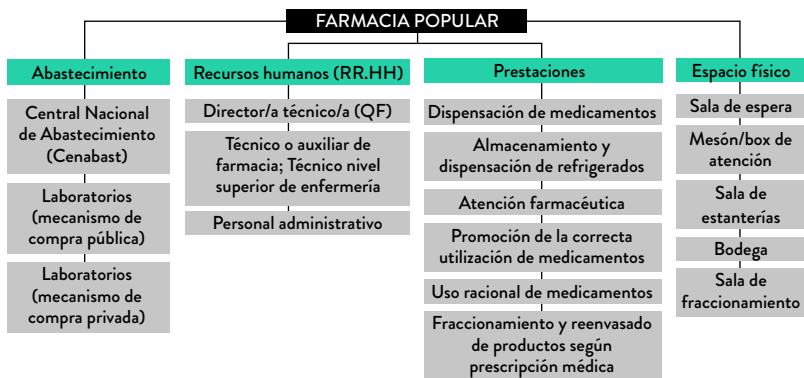
En general, el catálogo va desde los 200 medicamentos y productos hasta los 400, dependiendo del lugar. En este punto se constató que un eje central de la gestión es la agrupación de la demanda local, lo que permite construir perfiles de los usuarios y rescatar la trazabilidad de esta demanda. La sostenibilidad del sistema también la da el aumento de usuarios y la mancomunación de los recursos para que el gestor (director técnico de la farmacia popular) pueda hacer una compra de la manera más eficiente posible ocupando los canales pertinentes. La totalidad de los directores técnicos declara que esta actividad consume el 85% a 90% de su actividad en la farmacia popular y que, a medida que se agilicen y adapten procesos especiales para farmacias populares, este tiempo se reduciría y permitiría destinar una mayor parte de sus jornadas a estar con la comunidad de usuarios. Esto permite decir que las FP son autónomas en su gestión y modelo de ejecución.

Respecto al abastecimiento, los canales más usados por los directores técnicos fueron licitación pública e intermediación vía Cenabast, con una relación 70% y 30%, respectivamente, y, excepcionalmente, compra por trato directo. Inicialmente, se especulaba que el abastecimiento vía Cenabast sería el mayoritario para el caso de farmacias populares, pero a medida que fueron ampliando el arsenal, el catálogo ofertado por la entidad no se ajustaba a las FP, sino más bien a hospitales y Cesfam. Otra alternativa que se vislumbra en municipios con antigüedad como Reco-

leta fue el convenio de suministro. Este tipo de contrato puede ejecutarse entre entidades públicas cuando hay antecedentes de comportamiento por al menos dos años.

Los modelos adoptados en cada comuna responden a la interacción de cuatro dimensiones: abastecimiento, recursos humanos (RR.HH.), prestaciones o servicios y espacio físico (infraestructura). Estos ámbitos fundamentales se originan en las interconexiones de características de la comuna, de la población y del territorio, como lo son la relación entre densidad poblacional comunal —clave para dimensionar la cantidad de usuarios que puede proyectar la farmacia—; niveles de urbanización de la comuna; condiciones del territorio y servicios sanitarios; requerimientos epidemiológicos comunales y recursos; y administración municipal.

Figura 3. Pilares de funcionamiento eficiente de una farmacia popular



Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas, visitas y análisis de la situación en farmacias populares seleccionadas.

En resumen, estos cuatro pilares o dimensiones son imprescindibles para el funcionamiento de una farmacia popular que se adecúe a las condiciones del contexto. Esta investigación ahonda en cada una de estas aristas aplicada al contexto chileno con mayor o menor complejidad. Cabe señalar que han surgido experiencias novedosas e innovadoras que pueden ser replicadas, como son la modificación del espacio físico para brindar una atención más cercana, personalizada e integral (por ejemplo, en Valparaíso se atiende a través de módulos), talleres o educación a pacientes, o incluso adaptaciones de canales de comunicación que den a la población usuaria herramientas para superar brechas de información.

2. Resultados particulares según dimensiones de acceso a medicamentos

2.1 Asequibilidad. Análisis contrafactual. Comparación del valor de una canasta de medicamentos en una farmacia popular y en una farmacia de cadena (retail)

La asequibilidad por parte de los usuarios de FP fue medida analíticamente con el ensayo contrafactual, al cual se suma el relato de los directores técnicos y la percepción usuaria en la encuesta aplicada.

Para el caso del ensayo contrafactual, se definió en primera instancia que no todas las farmacias populares a evaluar trabajarían con todos los medicamentos requeridos en la canasta confecio-

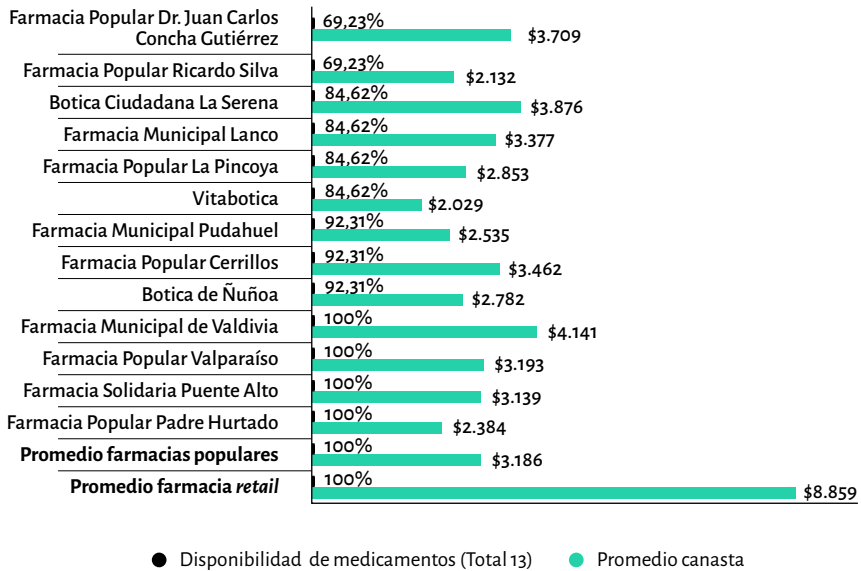
nada para el análisis, pero esta termina siendo un 88,76% representativa de la muestra, vale decir, cumple con las seis categorías de medicamentos seleccionadas. Este análisis pudo realizarse en 14 de las 16 farmacias consideradas. Detallando, todos los productos tienen precios inferiores en las farmacias populares cuando se los compara con los de las cadenas: el precio en una FP puede ser entre 18,96% y 62,20% menor, incluyendo el promedio de toda la canasta. La canasta total en las farmacias populares tiene un valor promedio de \$3.106 y, en el *retail*, de \$8.859. Vale decir, la canasta en FP representa casi un tercio del valor del mismo grupo de fármacos (35,65%) en otro tipo de farmacias.

Por otra parte, se hace evidente el beneficio de obtener los productos vía Cenabast. Las 10 farmacias de la muestra que actualmente intermedian de esta manera (Botica Ñuñoa, Vitabotica, Farmacia Popular Ricardo Silva, Farmacia Popular Dr. Juan Carlos Concha, Farmacia Municipal de Valdivia, Farmacia Comunal de Valparaíso, Farmacia Solidaria de Puente Alto, Farmacia Popular de La Pincoya, Farmacia Popular de Padre Hurtado y Farmacia Popular de Cerrillos) mantienen sus precios iguales o con un margen de ganancia no mayor al 5%. En las entrevistas, los farmacéuticos declaran que el catálogo de Cenabast es relativamente estable en el tiempo, aunque no faltan las eventualidades. Los factores que influyen en estas excepciones son, entre otros, que las listas de precios de los laboratorios no son fijas y se debe recurrir a ellos cuando un fármaco no se encuentra en la canasta de Cenabast o cuando los usuarios demandan un fármaco y este

demora su llegada desde la misma central. Otro factor a considerar es la disponibilidad de los distintos proveedores para cada medicamento, lo que no fue analizado en profundidad y da pie a trabajos posteriores.

El siguiente gráfico muestra los promedios del precio de cada canasta y la disponibilidad de los medicamentos en cada farmacia.

Gráfico 3. Promedio de precio final de canasta representativa de medicamentos en farmacias populares muestreadas (2018)



Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por farmacias populares seleccionadas.

Respecto a los precios finales de adquisición, se reporta una diferencia a favor de las FP de entre 30% y 80% respecto al promedio del *retail*. Esta diferencia se produce mayoritariamente debido al mecanismo con el que las farmacias populares gestionan su compra, lo que permite mantener los costos de venta. En específico, estos precios más bajos se deben a que son farmacias sin fines de lucro y con un alza sostenida en la cantidad de inscritos, lo que permite mancomunar recursos. Así, se otorga dinamismo y adaptabilidad al catálogo de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a la necesidad de los usuarios. Esto se evidencia en el relato de

los directores de las FP y también de los usuarios, y se corrobora en el detalle de las licitaciones públicas. Además, cada año Cenabast se abre un poco más hacia las farmacias populares, ampliando y diversificando su oferta. Por otro lado, en la etapa de evaluación de percepción usuaria se obtiene que las personas de la muestra infieren, en el 77,02% de los casos, que estas les reportan “mucho ahorro” o un ahorro superior al 50% del precio del medicamento en otro tipo de farmacias, lo que es coherente con los resultados analíticos.

2.2 Análisis georeferencial: aproximación a una distribución geográfica equitativa

En relación con el acceso geográfico del público a farmacias en Chile, hay estudios que destacan un patrón asociado al poder adquisitivo de los usuarios y una segregación socioeconómica (Villalobos, 2015), lo que demuestra altos niveles de desigualdad por ingreso económico en Chile y segmentación del sistema de salud.

Para recopilar los datos, se prefirió un enfoque de cobertura poblacional y no territorial, puesto que para esto último es necesario tener herramientas de geolocalización que permitan evaluar todas las comunas en esta dimensión. Este puede ser un alcance para futuras investigaciones. Se establecen como referencia los últimos datos publicados por la Ocede, los cuales señalan un

promedio de 24,7 farmacias por cien mil habitantes en estos países (aproximadamente 4.049 habitantes por farmacia. Ocede, 2015). Según el mismo informe, naciones con altos indicadores de salud como Canadá, España y Japón superan el promedio Ocede y logran casi un 100% de cobertura poblacional. A través de sus legislaciones y políticas se evitan grandes concentraciones territoriales y se logran buenos indicadores de cobertura territorial. En el caso de Chile, de acuerdo a cifras actualizadas, la población nacional alcanza los 17.574.003 habitantes (Censo, 2017), mientras que el total de farmacias alcanza 3.117, lo que implica una relación promedio de 5.638 habitantes por farmacia (según lo informado por Farmanet a julio de 2018).

Para la muestra analizada se encontraron los siguientes índices de habitantes por farmacia:

Tabla 3. Índice de habitantes por farmacia según comuna seleccionada y detalle de participación del *retail* de farmacia

Farmacia popular muestra	Comuna	Población (habitantes según Censo, 2017)	Total de farmacias	Habitantes por farmacia	% de presencia del <i>retail</i> en la comuna
Farmacia Popular Ricardo Silva	Recoleta	157.851	38	4.154	18,42
Farmacia Popular La Pincoya	Huechuraba	98.671	22	4.485	63,64
Vitabotica	Vitacura	85.384	39	2.189	87,18
Farmacia Comunal Pablo Neruda de Lo Prado	Lo Prado	96.249	17	5.662	41,18

Farmacia Popular Dr. Juan Carlos Concha Gutiérrez	Pedro Aguirre Cerda	101.174	20	5.059	10
Farmacia Solidaria de Puente Alto	Puente Alto	568.106	76	7.475	38,16
Farmacia Popular de Padre Hurtado	Padre Hurtado	63.250	10	6.325	20
Farmacia Popular de Cerrillos	Cerrillos	80.232	8	10.029	62,5
Botica de Ñuñoa	Ñuñoa	208.237	77	2.704	76,62
Farmacia Municipal de Pudahuel	Pudahuel	230.293	35	6.580	20
Farmacia Popular de Valparaíso	Valparaíso	296.655	61	4.863	31,15
Farmacia Municipal de Valdivia	Valdivia	166.080	21	7.908	61,9
Farmacia Municipal de Lanco	Lanco	16.752	3	5.584	0
Botica Ciudadana de La Serena	La Serena	221.054	31	7.131	74,19
Farmacia Popular de Vicuña	Vicuña	27.771	4	6.943	50
Farmacia Municipal de Punta Arenas	Punta Arenas	131.592	21	6.266	61,9

Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por farmacias populares seleccionadas.

Al respecto, se analizó y determinó que:

a) Todas las comunas de la muestra sobrepasan el índice recomendado por la Oede, a excepción de Vitacura, que cumple una proporción bastante cercana a países que lideran el ranking Oede (2.000 a 2.200 habitantes por farmacia). Esto habla de diferencias geográficas en el acceso de los ciudadanos a los recursos sanitarios que proveen las farmacias.

b) Los casos más emblemáticos de cobertura poblacional deficitaria se dan en comunas que superan los 6.000, 7.000 e incluso los 10.000 habitantes por farmacia, como sucede en Padre Hurtado, Pudahuel, Puente Alto y las capitales regionales Valdivia y Punta Arenas, con el extremo de 10.029 personas por farmacia en Cerrillos.

c) La incidencia del *retail* también es observable, sobre todo en comunas que tienen un alto índice de cobertura, además de alta densidad poblacional urbana. En estos casos se observa una alta concentración de farmacias de cadena.

d) Es muy difícil que solo el concepto y ejecución de farmacias populares incida directamente en la superación de estas cifras. Para tener algún efecto sobre esta situación, es necesario abordar la problemática territorial desde una mirada distinta. Una solución favorable puede ser la creación de redes integradas de sucursales, como ocurre en Valparaíso.

e) En relación al índice de farmacias por habitantes, se evidencia, en primer lugar, que la mayoría de las comunas presenta un déficit de farmacias por canti-

dad de habitantes; la muestra también exhibe opuestos radicales entre comunas sobreconcentradas de farmacias versus comunas con evidente escasez de ellas. A pesar de que este artículo no pudo abordar en detalle este ámbito, se aprecia en general que la distribución de farmacias obedece a criterios de mercado, lo que podría explicar la diferencia entre los extremos. Una solución a este problema pasaría por considerar una estrategia de geodistribución que no responda a lógicas de mercado y avanzar de igual modo en la integración a la red de atención municipal de salud para así dar solución a las necesidades territoriales de la población desde un principio de redes integradas de salud. Esto, considerando que las FP han sido eficientes hasta ahora a pesar de no integrarse al modelo de salud municipal, pues participan desde el área de desarrollo social del territorio en muchos casos. El dictamen 33.699 del año 2016 de la Contraloría General de la República explicita la dependencia a la atención primaria, pero no la integración.

2.3 Análisis de la percepción de los usuarios de farmacias populares

Tras el término de las visitas a las farmacias populares muestreadas, se confeccionó un subgrupo correspondiente a farmacias populares donde fue posible realizar encuestas a usuarios regulares a través de un instrumento que puso énfasis en la percepción y satisfacción según la propia e individual experiencia de cada usuario. La submuestra abarcó nueve farmacias y alcanzó la cifra de 322 usuarios encuestados.

Cuadro 1. Descripción de la submuestra

322 usuarios encuestados

En nueve farmacias populares:

- Farmacia Solidaria de Puente alto (45), comuna de Puente Alto
- Botica Ñuñoa (30), comuna de Ñuñoa
- Botica Ciudadana La Serena (10), comuna de La Serena
- Farmacia Municipal de Valdivia (53), comuna de Valdivia
- Farmacia Popular Dr. Juan Carlos Concha (29), comuna de Pedro Aguirre Cerda
- Farmacia Municipal de Pudahuel (30), comuna de Pudahuel
- Farmacia Popular Ricardo Silva (30), comuna de Recoleta
- Farmacia Popular de Padre Hurtado (2), comuna de Padre Hurtado
- Farmacia Municipal de Valparaíso (93), comuna de Valparaíso

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas realizadas en farmacias populares seleccionadas.

Se constata un perfil de usuarios de farmacias populares en que el 65,2% corresponde a mujeres. Además, el grupo etario mayoritario corresponde a la tercera edad, con un 47,2%, seguido del grupo adulto de 46-60 años, con un 32,3%. Un grupo considerable también son los adultos jóvenes, con un 13,66%. Del total, el 52% declara encontrar sus medicamentos “siempre” y el 30% indica que “casi siempre”.

Bajo un supuesto hipotético donde el usuario no encuentra el medicamento que busca el día que visita la farmacia y debe buscar una alternativa, los resultados dejan ver que un 46% de los usuarios recurre a farmacias de cadena en estos casos; 21% permanece (o espera) en la farmacia popular; un 19% acude a las farmacias de barrio o independientes; 11% indica “otro lugar” y 3% consulta en farmacias de especialidad²⁷. Estos resultados revelan un grupo numeroso de

usuarios que manifiestan no tener otra opción fuera de la farmacia popular, por lo que deciden esperar adaptándose a las condiciones y tiempos que esta les ofrece. Este es uno de los públicos específicos que más podrían definir el rol y aporte de la farmacia popular dado el desamparo en que los deja el sistema de salud debido a su fragmentación y falta de coberturas, así como a las lógicas del mercado que encarecen el costo de los medicamentos.

Posteriormente, se enfatizó en la percepción de ahorro que tienen los usuarios tras obtener sus medicamentos en la farmacia popular, obteniendo cifras muy positivas (77,02% a favor entre los encuestados de todo el país). La satisfacción usuaria referida como experiencia global en la farmacia popular (atención, funcionamiento, infraestructura) alcanza un 95,34%. La experiencia al interior de la farmacia

²⁷ Farmacias de especialidad son aquellas que corresponden a una ONG. Ejemplos de ellas son las acopladas a la Liga Chilena contra la Epilepsia y la farmacia de la Fundación Diabetes Juvenil.

tiene dos aristas. La primera, relativa a la atención sanitaria, mientras que la segunda aparece como una dificultad: la infraestructura. A simple vista, este último punto fue conflictivo en los lugares con mayor cantidad de usuarios inscritos y fue el punto más álgido de la encuesta en cinco de los nueve lugares encuestados. Comentarios como: “es muy estrecha, pequeña o simplemente insuficiente” se repitieron bastante. En total, este comentario se registró 55 veces (un 17,08% de las experiencias). Las comunas en donde más se advirtieron problemas con la infraestructura fueron Puente Alto, Ñuñoa, Recoleta, Valparaíso y, en menor grado, Valdivia. Puente Alto y Valparaíso reciben el mayor valor estadístico para connotaciones negativas, lo que se correlaciona con su mayor cantidad de usuarios. Por el contrario, hay lugares que no reportan ninguna connotación negativa y donde solo emergen agradecimientos, como ocurre en las farmacias de Pedro Aguirre Cerda (Popular Dr. Juan Pedro Concha), Botica Ciudadana La Serena, Farmacia Municipal Pudahuel y Farmacia Popular Padre Hurtado.

El grado de conformidad con la disponibilidad de medicamentos y variedad de los mismos ha variado con el tiempo. Se observó conflicto de parte de los usuarios, sobre todo por los cambios mes a mes y los flujos del suministro. Se escuchó mucho el comentario “cómo era antes y cómo es ahora” y la enumeración de problemas con “los tiempos de espera, cambios repentinos en abastecimiento”, etc. A pesar de esto, la población dice estar mayoritariamente conforme con el funcionamiento de su FP. Específicamente, los lugares con mayor índice de

inconformidad son Valparaíso, Valdivia y Puente Alto. Los testimonios más decisivos en este tema fueron relativos a la falta de suministro o escasez en algunos medicamentos, la falta de fluidez y la necesidad de ampliación del stock de medicamentos.

Por otra parte, se logró evidenciar la adquisición de hábitos sanitarios entre las personas, posiblemente debido a su adhesión y experiencia como usuarias en la farmacia popular. Un ejemplo de ello es que 84,47% de los usuarios declara llevar su receta al momento de visitar la farmacia popular, lo que habla de controles médicos oportunos y al día. Lo mismo ocurre en los Cesfam, pero no en las farmacias comerciales. Además, se registra una mayor adherencia a tratamientos cuando se cuenta con los medicamentos para dar continuidad a estos: un 84,16% indica haber sido capaz de seguir su tratamiento desde que acude a la farmacia popular, sin quiebres o visitas a otras farmacias. Por otra parte, existe un porcentaje menor de usuarios que declararon no poder cumplir con su tratamiento en la farmacia popular. Resulta preocupante constatar que muchos de ellos señalan que previamente podían abastecerse sin problemas en la FP y que ya no lo hacen por falta de medicamentos, problemas de abastecimiento o falta de sincronía. Este representa uno de los grandes desafíos de las farmacias populares. Los centros que reportan más negativas en esta pregunta son los de Valparaíso y Valdivia.

Finalmente, un 97% de los usuarios encuestados declara que recomendaría la farmacia popular a familiares y amigos. Este estudio ha permitido retratar la

experiencia de las farmacias populares como política pública instalada desde el territorio, donde la comunidad y el municipio trabajan conjuntamente barajando formas de mitigar problemas estructurales. Con todo, queda pendiente la idea de que estos problemas estructurales deben ser subsanados y complementados para estar a la altura de su promesa, lo que implica necesariamente una mayor y mejor articulación con la red pública, así como una inversión mayor en el sector.

CONCLUSIONES

Acceso a medicamentos como parte del derecho a la salud

El acceso a medicamentos y prestaciones sanitarias de toda índole es declarado por la OMS como un mandato para los Estados miembros. Es más, la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud de la OPS tiene un eje estructural en acceso universal que indica que se deben erradicar las barreras de todo tipo que impidan a las personas utilizar servicios integrales de salud.

Frente a este escenario, mientras en el sistema de salud chileno persistan la fragmentación en niveles de ejecución y subsistemas, la segmentación por naturaleza de seguro de salud (público o privado) y la mantención del gasto público por debajo de lo que señala la OPS/OMS (6% del PIB), las farmacias populares son una alternativa concreta para subsanar las brechas de desigual-

dad en acceso a medicamentos y construir un camino hacia la salud como un derecho. No obstante, si la salud solo se concibe como el suministro de prestaciones relacionadas con este ámbito, sin considerar toda la cadena de funcionamiento necesaria para llegar a resultados sanitarios en un contexto local y territorial apropiado, lograr un derecho a la salud pleno y plurivalente se vuelve una tarea muy difícil.

Impacto de las farmacias populares en la superación de la pobreza en salud

Respecto al análisis macro del total de 145 farmacias populares en Chile, la iniciativa popular brinda mayor acceso a medicamentos en 54 comunas de desarrollo medio y bajo, donde la ruralidad se vuelve un impedimento para el desarrollo comercial de farmacias de *retail* y los territorios quedan desamparados. Allí, las FP contribuyen a la disminución de gasto de bolsillo, pero también a la equidad territorial y a disminuir el centralismo.

En las 16 farmacias populares estudiadas en específico, se constató, desde su aparición en la vida de los usuarios, una disminución del gasto de bolsillo del 30 al 80% dependiendo del lugar; el surgimiento de una alternativa que se suma a las ya existentes (en los casos de sucursales con mejor distribución geográfica) y mayor aceptabilidad en la adquisición de medicamentos como un bien esencial para tratar la enfermedad, lo que contribuye al cuidado de las personas y al manejo de sus controles.

Esta iniciativa, que partió como un proyecto acotado, ha demostrado una

transición de envergadura hacia su constitución como un centro de salud propiamente tal, como lo señala el artículo 129 del Código Sanitario. Como ya se ha mencionado, las farmacias populares se han ido adaptando a las necesidades comunales de acuerdo al tamaño poblacional, características epidemiológicas y sociodemográficas, y han considerado los recursos municipales para infraestructura y equipo técnico adecuado. Las políticas públicas responden precisamente a eso, a dar solución a un problema público, vale decir, contribuir al sistema ordenando las irregularidades que el mercado no ha podido equilibrar. Al mismo tiempo, cabe consignar que pese a ser una política pionera en Chile, experimental, y a no haber sido una política pública estructurada como la brasileña, ha tenido mayor éxito que el previsto, logrando una aceptabilidad casi total de parte de la población usuaria (en el caso estudiado, se registra 97% de recomendación usuaria). Sería ideal, en esta línea, contar con un apoyo más sólido desde los niveles superiores, especialmente desde el Ministerio de Salud, pero también desde los organismos técnicos autónomos que corresponden a la autoridad sanitaria, e inclusive desde el Parlamento, como sucedió con la Ley Ricarte Soto, una iniciativa muy exitosa en el ámbito del acceso a medicinas de alto costo que se implementó tras levantar evidencia necesaria para la toma de decisiones con evaluación de tecnologías sanitarias (Etesa²⁸). Una

clara recomendación que deriva de este estudio es la promoción de una integración real y efectiva de la farmacia popular al resto de la red asistencial primaria municipal, lo que otorgaría un valor como centro de salud a la farmacia popular y brindaría al país, por primera vez, la posibilidad de contar con un sistema de atención y servicios farmacéuticos de calidad y de acceso público.

Se indica expresamente que iniciativas como estas empoderan a la ciudadanía y al gobierno local, por lo que esta investigación las recomienda siempre y cuando sean bien evaluadas su implementación y posterior ejecución respecto al modelo que necesita la comuna en cuestión.

Red de atención primaria más integral: concretizando redes para la estrategia de redes integradas de servicios de salud

La implementación de intervenciones que sean capaces de integrar servicios de salud que logren subsanar la fragmentación del sistema ha sido un desafío constante y latente. Existen múltiples factores y antecedentes del curso de utilización del sistema de salud chileno que impiden esta integración. Ejemplo de ellos son los sistemas operativos diversos que no poseen interoperabilidad informática, es decir, que impiden la conexión de los sistemas de alguna manera, así como las prácticas y la cultura

²⁸ El Departamento Etesa es parte del Ministerio de Salud y es el encargado de tomar decisiones técnicas respecto a medicinas y dispositivos médicos. Sería ideal conferir mayor autonomía y responsabilidades a fin de ampliar sus funciones a la evaluación de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en otras canastas como GES o arsenales farmacoterapéuticos comunales.

del equipo de salud e infraestructura. Una farmacia integrada a la red de salud comunal, en tanto un establecimiento más de atención primaria, permitiría, desde una perspectiva comunitaria e intersectorial, mejorar la salud territorial de los Cesfam en particular y de la comunidad local en general a través del abordaje de ámbitos estratégicos de la acción sanitaria integral para comprender la complejidad del bienestar de las personas y sus comunidades.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Para terminar este artículo se presentarán recomendaciones que permitirán abordar mejor el desarrollo de una farmacia popular chilena, enfocándose en sus mejores atributos y los desafíos preponderantes. En específico, se propone:

- i.** Fortalecer y definir el modelo desde el contexto y gobierno local junto a la participación ciudadana con apoyo de instancias superiores como el Ministerio de Salud y otros organismos gubernamentales.
- ii.** Integrar la farmacia popular a la red de atención primaria de la comuna, evitando la fragmentación y segmentación del sistema de salud, diseñando y sustentando una red de salud integrada, multidisciplinaria y con enfoque en el modelo de salud familiar y redes integradas de servicios de salud.
- iii.** Dar autonomía y robustez a la central de abastecimiento nacional (Cenabast) y conectarla con las necesidades territoriales de las comunas y las del país. Esto, tomando en cuenta el catálogo de la oferta actual de Cenabast y sus servicios de gestión y operación, y sobre todo considerando el dinamismo de los arsenales terapéuticos de las farmacias populares.
- iv.** Actualizar arsenales terapéuticos nacionales (por ejemplo, en programas GES), locales (hospitales) y comunales (red de APS), argumentando evaluación de tecnologías sanitarias (Etesa) y medicina basada en evidencia (MBE).
- v.** Por último y, sobre todo, fortalecer el aseguramiento en salud a través del aumento del gasto público en salud al menos al 6% del PIB según recomendaciones de la OPS.

BIBLIOGRAFÍA

- **Amuch (2015)**. Informe de salud municipal en perspectiva: caracterización del sistema de salud comunal, aportes financieros totales y según grupo de municipios de la Asociación de Municipalidades de Chile. [https://www.amuch.cl/pdf/estudio_salud_municipal.pdf]. Consultado el 20 de agosto de 2019.
- **Amuch (2015)**. Municipalidades y diversidad: ¿qué caracteriza a las comunas rurales chilenas? [https://www.amuch.cl/pdf/estudio_municipalidades_y_diversidad.pdf]. Consultado el 20 de agosto de 2019.
- **Armando, P et al. (2007)**. "Validación de un cuestionario de satisfacción de pacientes con el servicio de dispensación en farmacias comunitarias". En: *Revista de Atención Primaria*. Vol. 39. Núm. 11, pp. 591-596.
- **Benítez, A., Hernando, A. y Velasco, C. (2018)**. Encuesta de presupuestos familiares y gasto en salud: una primera mirada. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- **Benítez, A., Hernando, A. y Velasco, C. (2019)**. Gasto de bolsillo en salud: una mirada al gasto en medicamentos. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- **Bruzzo, S., Henríquez, J. y Velasco, C. (2018)**. Radiografía del gasto de bolsillo en salud en Chile: una mirada desagregada. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- **Comisión sobre Determinantes Sociales de Salud (2008)**. *Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud*. Ginebra. Ediciones OMS.
- **Declaración de Alma-Ata (1978)**. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. [En línea, www.paho.org/spanish/dd/pin/almaata25.htm]. Consultado el 19 de noviembre de 2019.
- **Fiscalía Nacional Económica (2012)**. "Guía para el análisis de operaciones de concentración". Santiago.
- **Frost, L. y Reich, M. (2008)**. *Acceso: ¿cómo las buenas tecnologías sanitarias se acercan a los pobres en países pobres?* Cambridge: Harvard Center for Population and Development Studies.
- **Gattini, C. (2014)**. Síntesis de la situación de salud en Chile 2013. Documento de Serie Técnica del Observatorio Chileno de Salud Pública 2014/3. [<http://www.ochisap.cl/imagenes/SintesisSaludChile.pdf>]. Consultado el 10 de noviembre de 2019.
- **Ministerio de Salud de la República Federal de Brasil, Fundación Oswaldo Cruz (2005)**. "Programa Farmacia Popular do Brasil". 1era edición. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília.
- **Ministerio de Salud de la República de Chile (2018)**. Recomendaciones para Farmacias Populares. Departamento de Políticas Farmacéuticas. [<https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/Recomendaciones-Farmacias-Populares.pdf>]. Consultado el 21 de agosto de 2019.
- **Ocde (2017)**. "Pharmacists and pharmacies". En: *Health at a Glance 2017*: OECD Indicators, OECD Publishing, París.
- **Ocde (2019)**. *Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators*, OECD Publishing, París.



LA CONSOLIDACIÓN DE UNA IDENTIDAD PROFESIONAL SOCIAL: EL CASO DEL PROGRAMA SERVICIO PAÍS EN LA COMUNA DE CHIMBARONGO, CHILE

Camilo Andrés Caro Zúñiga¹,
Universidad de Chile

RESUMEN

El presente artículo describe un trabajo analítico y reflexivo que aborda los procesos subjetivos que viven los profesionales de la Fundación Superación de la Pobreza en contextos de intervención social en pobreza, para así comprender el impacto de esta experiencia en la transformación y consolidación de una identidad profesional particular. En ese sentido, el artículo indaga en la construcción de significados y sentidos respecto al ser profesional en un contexto territorial e intersubjetivo de intervención social, teniendo en consideración el impacto social y las capacidades de transformación propias de la actividad profesional.

Para abordar este tema y conceptualizar la intervención social en pobreza, esta investigación adopta un enfoque multidimensional, a la vez que realiza un abordaje de la identidad desde una concepción subjetiva, vinculante y normativa. Para lograr el objetivo del estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas a los cinco profesionales que fueron parte del proceso de intervención en la localidad de Chimbarongo desde el programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza en los ciclos 2013-2014 y 2014-2015. Estas entrevistas fueron analizadas desde un enfoque metodológico cualitativo por medio de técnicas de análisis de contenido.

Se concluye que los profesionales Servicio País que trabajaron en la comuna de Chimbarongo poseen dos fuertes núcleos de significado relacionados al ser profesional: el sentido social de la profesión y un ser profesional que trasciende lo laboral. Estos núcleos de significados se construyen a partir de espacios de socialización entre los pares, los artesanos y la Fundación por medio del despliegue práctico de principios (compromiso, horizontalidad, responsabilidad, interdisciplinariedad, transparencia, proactividad y eficiencia), un enfoque (promocional) y saberes prácticos (trabajo en equipo, metodologías de participación y postulación a proyectos sociales) que los vuelven competentes en la intervención social en situaciones de pobreza.

Palabras clave: identidad, identidad profesional, intervención social, pobreza.

¹ Psicólogo. Artículo basado en la tesis "Construcción de identidad profesional: el caso de los profesionales del programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza en un contexto de intervención social con comunidades en situación de pobreza", realizada para obtener el título de psicólogo en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología, 2019. Profesora guía: Sonia Pérez Tello, Santiago, 2019.

INTRODUCCIÓN

Respecto a la pobreza existe el consenso, y así los ratifican los distintos tratados internacionales, de que debe ser combatida desde el Estado y las organizaciones de la sociedad civil (ONU, 2015; PMA, FAO y Fida, 2002). En Chile existen organizaciones de la sociedad civil que se han posicionado como actores relevantes para solucionar este problema social, como es el caso de la Fundación Superación de la Pobreza (FSP). Esta Fundación, desde su programa Servicio País, realiza intervenciones para la reducción de la pobreza y exclusión desde un enfoque promocional, pluralista e independiente, elaborado desde una concepción de la pobreza que la interpreta como multidimensional en sus manifestaciones, multifactorial en sus causas y multiarquetípica en sus expresiones socioculturales (FSP, 2015).

Uno de los dispositivos para combatir la pobreza son las intervenciones sociales, las que en el caso particular de la Fundación desarrollan una visión multidimensional de la pobreza y un enfoque promocional. Esto tiene como consecuencia que los objetivos de intervención pueden estar definidos de manera previa, pero, inevitablemente, los procesos de cambio social son producto de las relaciones normativas, subjetivas y prácticas de los actores concretos involucrados: Fundación, instituciones, profesionales y comunidad (Cüell, Frei y Palestini, 2009). Este tipo de intervención social se centra en lo práctico, en la relación concreta de quienes intervienen y los intervenidos, lo que permite no solo

transformaciones prácticas, materiales y subjetivas de las comunidades, sino que también de los profesionales, las que impactan sobre su visión de la pobreza, su práctica dentro del programa (a través de la toma de decisiones cotidianas, innovando y creando alternativas según las condiciones en las que se encuentran) y sus proyecciones futuras respecto a su quehacer profesional.

Es en este marco institucional, que releva la vinculación entre interventores y comunidades en contextos de pobreza y vulnerabilidad social, que emerge la interrogante por conocer los procesos subjetivos que viven los profesionales de la FSP en el contexto de una intervención realizada en la comuna de Chimbarongo entre los años 2013 y 2015. El artículo tiene por objetivo comprender la experiencia de intervención y la construcción de significados y sentidos respecto al quehacer profesional, la construcción de relaciones sociales con el equipo, las instituciones y las comunidades, y al impacto social y las capacidad de transformación que tiene la actividad profesional, para caracterizar la identidad profesional de los interventores y conocer aquellos elementos que posibilitan una transformación en la subjetividad de los profesionales.

Por lo tanto, la relevancia de este artículo está en su construcción de un marco de comprensión del proceso identitario de los profesionales que trabajan en una intervención social a comunidades en situación de pobreza. Esto puede ayu-

dar a conocer el impacto de la intervención social en la identidad profesional desde un paradigma de intervención centrado en la práctica, con expectativas de la Fundación interviniente, normativas institucionales, cultura y prácticas comunitarias que van configurando la experiencia social de intervención en Chimbarongo.

Teniendo en consideración lo anteriormente planteado, el objetivo general de esta investigación es conocer los componentes de la identidad profesional de los profesionales de la Fundación Superación de la Pobreza que se construyen en su experiencia de intervención social en la localidad de Chimbarongo entre los años 2013-2015.

MARCO TEÓRICO

1. La intervención social como mecanismo para combatir la pobreza

Contraviniendo la creencia instalada por el Consenso de Washington, que señalaba que la intervención estatal para ayudar a las personas en situación de pobreza agudiza esta condición (Becerril, 2015), la discusión actualmente zanjada establece que la pobreza puede y debe ser combatida desde el Estado y las organizaciones de la sociedad civil (ONU, 2015; PMA et al., 2002). En concordancia con lo anterior, los países han promulgado una serie de políticas públicas con el fin de combatirla. Sin embargo, y tal como expresa Beytía (2016), las medidas estructurales que

apuntan hacia la superación de la pobreza necesitan acordar qué se entiende por pobreza, pues es desde ese tipo de conceptualizaciones que se articulan diversos indicadores que permiten, finalmente, conocer quiénes son los pobres y qué estrategias de intervención es relevante llevar a cabo.

Ahora bien, en los procesos de intervención social se involucran y relacionan distintos tipos de actores, cada uno con roles diferenciados. Sáenz (2008) plantea que el Estado, la iglesia y las ONG son los tres principales actores sociales involucrados en los procesos de intervención social. Actualmente, las últimas juegan el papel más relevante debido a los procesos de desintegración del Estado de Bienestar. Si bien estos representantes son los responsables a nivel normativo-institucional, existe otro tipo de actores vinculados a la práctica concreta de la intervención: profesionales y comunidad. Es en esta triple relación de institución, profesionales y comunidad que se va configurando un proceso particular de intervención social, cuyos resultados y transformaciones están determinados por los consensos y contradicciones emanados de los dispositivos normativos de las instituciones, la construcción de sentido en la subjetividad de los profesionales y las comunidades, y los aprendizajes y conocimientos previos (Güell, Frei y Palestini, 2009). Siguiendo la misma línea argumentativa, Montenegro (2001) señala que esta transformación debe ser mediada por profesionales o voluntarios y que debe tener como objetivo que las personas desarrollen herramientas propias que les permitan solucionar o subsanar la problemática social identificada.

Respecto a la intervención social en pobreza, la FSP tiene una serie de concepciones teóricas y prácticas que sustentan y dan sentido a su objetivo de “contribuir a la superación de la pobreza, promoviendo mayores grados de equidad e integración social en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social” (FSP, 2013, p. 11). Estas concepciones teóricas y prácticas pueden ser sintetizadas en los siguientes puntos: (1) conceptualización de la pobreza como fenómeno multidimensional en sus manifestaciones, multifactorial en sus causas y multiarquetípico en sus expresiones socioculturales (FSP, 2015); (2) un enfoque promocional de la intervención social que reconoce a las personas de la comunidad como sujetos activos de sus procesos de desarrollo, por lo que busca su empoderamiento a través de la visibilización y activación de sus propios recursos y de la conexión con la estructura de oportunidades; (3) una estrategia de intervención de focalización territorial que establece a la comuna como unidad territorial blanco de la intervención; y (4) desarrollo profesional de jóvenes basado en la permanencia temporal en un territorio y la vinculación con comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, lo que propicia una experiencia de aprendizaje significativa para el desarrollo de competencias para su futuro laboral.

2. El concepto de identidad profesional

En su análisis del concepto de identidad de Erik Erikson, Taylor (1996) plantea que esta sería una construcción propia del ser, que se produce durante todo el desarrollo de las personas y que permite, además, tener un horizonte moral capaz de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo importante de lo irrelevante. La identidad “posibilita que tengamos un lugar de adscripción (histórico-temporal) frente a los demás, distinguirnos de los otros (sujetos, instituciones, grupos, familias, comunidades, movimientos sociales, naciones), y decir qué es lo que somos y lo que no somos” (Navarrete-Cazales, 2015, p. 8). Esto pone de manifiesto que la identidad es un concepto complejo, dinámico y multidimensional (Bajardi, 2015), que surge a partir de la diferenciación y el reconocimiento, tanto de sí mismo como de los otros (Gee, 2001, citado por Bajardi, 2015).

Según Bajardi (2015), es en la interacción con otros donde la identidad se va desarrollando a partir de cuatro procesos fundamentales: la identificación, como un proceso de apropiación de rasgos o características de otros; la individuación, que hace parte de uno aquellas características propias de la experiencia vital; la imitación, que permite reproducir conductas o razonamientos dependiendo del contexto social; y la internalización, que conduce a la creación de una imagen de cada uno por medio de las valoraciones de los otros.

Considerando las anteriores premisas, esto es, de la identidad como construcción relacional situada en un contexto y tiempo, bajo determinadas relaciones, es posible plantear que este concepto posee variadas dimensiones y que una de ellas es la identidad profesional (Bolívar, Fernández y Molina, 2005). En este sentido, Evetts (2003) señala que uno de los aspectos centrales de esta es la posibilidad de compartir significados culturales, percepciones de mundo, formas de actuar en la realidad y trayectorias educativas, es decir, el énfasis en lo común como elemento principal de la construcción de la identidad profesional en contextos laborales. Finalmente, Briggs (2007) plantea que existen tres componentes de la identidad profesional: valores profesionales, ubicación profesional y rol profesional.

Es importante señalar que los procesos de construcción de identidad profesional no son aislados de los procesos de construcción de la identidad personal, sino que más bien se encuentran imbricados debido a que la actividad laboral se constituye como una de las principales fuentes de sobrevivencia (Hirsch, 2013).

En síntesis, estos autores retoman los elementos planteados en la primera parte que describen a la identidad como un proceso relacional, construido a partir de instancias de socialización donde se comparten significados, percepciones y sentidos sobre el mundo, lo cual permite la diferenciación y pertenencia. Ahora bien, todos estos elementos deben ser situados en contextos laborales y profesionales, y se deben tener en cuenta las particularidades de

este escenario en la definición de roles y ocupaciones, así como en el despliegue de varios conocimientos, saberes y competencias que permiten, por una parte, la pertenencia y reconocimiento del grupo laboral y, por otra, de la sociedad (Balderas, 2013).

3. Caracterización de la intervención en Chimbarongo

Teniendo en cuenta el informe documental (FSP, 2017) que sistematiza la intervención que realizan los profesionales de la FSP de los ciclos 2013-2014 y 2014-2015 en la comuna de Chimbarongo, se presenta a continuación una breve caracterización de la localidad y los resultados de la intervención.

La comuna de Chimbarongo está ubicada en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, 150 km al sur de la capital de Chile. Históricamente, esta comuna se ha visto ligada a la actividad artesanal del mimbre. Según los datos del Ministerio de Desarrollo Social (2016), la comuna de Chimbarongo presenta los índices más altos de pobreza según ingresos y multidimensional de toda la región, ambas muy por sobre la media nacional y regional: en cuanto a ingresos, marca un 21,1%, y desde el enfoque multidimensional, un 27%. De todos los indicadores, destaca, por lo alarmante, la carencia de escolaridad completa de la comuna, con un 50,3% de la población sobre 18 años que no ha accedido a su último nivel escolar correspondiente. La tasa de escolaridad es de ocho años. Lo mismo ocurre con el acceso a la seguridad social, ítem que revela que en el 34,7% de los hogares hay

al menos un ocupado que no cotiza en el sistema previsional y no es trabajador independiente con educación superior completa. Esta cifra se acrecienta entre aquellos que declaran ser artesanos o mecánicos, donde pasa a un 56,7% de los hogares.

Particularmente, en este último grupo se ha centrado la intervención de la FSP, que ha logrado la transformación del “ser artesano”, pasando de una artesanía interpretada como estigmatización a una entendida como patrimonio cultural importante de Chimbarongo. Se identifica que a raíz de la intervención existe un mayor reconocimiento por parte de las comunidades y entre los propios artesanos de la importancia de la artesanía, lo que se ha logrado a partir de la gran cantidad de distinciones nacionales e internacionales de quienes trabajan en este ámbito y de una importante cantidad de iniciativas de visibilización de sus creaciones por medio de ferias y exposiciones.

MÉTODO

Para abordar esta problemática se recurrió al método cualitativo, ya que permite captar los significados y definiciones de las situaciones que experimentan los profesionales (Gallart, 1992). El diseño de la investigación es el estudio de caso (Stake, 1994), que empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional (Otzen y Manterola, 2017) y tuvo como criterio de inclusión que los participantes fueran profesionales involucrados en el proceso de levantamiento de aprendizajes desarrollado por la dirección regional de O'Higgins de la FSP el año 2017. Considerando estos elementos, los participantes de este estudio son los profesionales participantes de la intervención en la región de O'Higgins, comuna de Chimbarongo, por parte del programa Servicio País de la FSP, en los ciclos 2013-2014 y 2014-2015. La muestra del artículo contó con un total de cinco profesionales.

Tabla 1. Muestra de interventores según ciclo y profesión

Ciclo	Profesión	Área
2013-2014	Diseñadora (P1)	Cultura
	Socioeconomista (P2)	Cultura
	Antropóloga (P3)	Trabajo
2014 - 2015	Antropóloga (P3)	Cultura
	Diseñadora (P4)	Cultura
	Ingeniero comercial (P5)	Trabajo

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, la técnica de producción de información fue la entrevista semiestructurada, la que constó de cinco apartados, a saber: vida universitaria; ingreso a la FSP; integración a la comunidad; desarrollo de la intervención; vida profesional actual. Los audios de las entrevistas fueron transcritos y luego analizados con el software computacional Atlas.ti por medio de una técnica de análisis de contenido, ya que esta permite analizar las categorías y unidades de significados, principios, sentidos y aprendizajes que construyen los profesionales en torno a su identidad profesional en el contexto de la intervención social en pobreza (Valles, 1999).

RESULTADOS

A continuación, se presentarán las categorías construidas sobre los textos de las entrevistas realizadas a los profesionales interventores de la FSP en la localidad de Chimbarongo entre los años 2013 y 2015. Para ello, se realizó un análisis de contenido a las entrevistas semiestructuradas, que tuvieron como temática principal las características de la identidad profesional, el contexto y los espacios de socialización que propician la construcción de aquella identidad. A partir de este análisis emergen una serie de categorías de caracterización de la identidad profesional y los espacios de sociabilización que permiten la construcción de identidad profesional, las cuales son presentadas en relación con tres ejes temporales, como se señala en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de los ejes temporales

Eje temporal	Categoría
Formación profesional	Proceso de elección de una profesión basado en capacidades y sentido social. Formación profesional con sentido social y vinculación comunitaria. Aprendizajes vinculados a principios del quehacer profesional y habilidades de vinculación comunitaria.
Experiencia de intervención social en el programa Servicio País	Ingreso al programa como oportunidad de desarrollo profesional con sentido social y compromiso comunitario. Convivencia con comunidades que cambia la visión de la pobreza, compromete y consolida una identidad profesional. Identificación con el profesional ideal de la Fundación, lo que consolida una identidad profesional similar. Intervención social exitosa que da sentido a la profesión y transforma la identidad profesional. Experiencia que permite el desarrollo de aprendizajes para convertirlos en principios, enfoque y quehacer. Importancia del equipo de trabajo en el proceso de intervención.
Desarrollo profesional posterior a la participación en el programa Servicio País	Continuidad laboral semejante a la experiencia del programa Servicio País.

Fuente: elaboración propia.

1. Formación profesional

a) Proceso de elección de una profesión basado en capacidades y sentido social

Los profesionales señalan que su decisión de una carrera estuvo mediada por el interés y la habilidad que habían desarrollado en determinada área:

“Yo era muy buena en castellano, me gustaba mucho redactar y escribir, me sentía muy hábil para eso y además me gustaba mucho arte, me gustaba hacer cosas con las manos”

(P1).

Por otra parte, también plantean que a la hora de tomar la decisión de estudiar determinada carrera optaron por alguna que tuviera vínculo con el ámbito social y una dinámica de trabajo en terreno.

“Entonces sabía que la cultura y lo diverso, en términos culturales, me gustaba, y antropología... primero era arqueología y después antropología, por esta sensibilidad con lo social”

(P3).

“Me gustaba el hecho que fuera algo más dinámica, como no tanto trabajo de oficina [...] no encuentro muy bueno el sistema de estar en una oficina ocho horas al día, cinco días a la semana, no me agradaba mucho”

(P4).

Esto nos habla de profesionales que de manera incipiente pretendían desarrollar una profesión que tuviera un impacto en la sociedad, pero que además

los vinculara con las comunidades; no querían desarrollar una profesión entre cuatro paredes. Pero además de un imaginario de futuro profesional, decidieron por una carrera a partir de la cual se sintieran capaces de realizar determinadas acciones, es decir, una que les entregara habilidades para desempeñar un rol profesional social.

b) Formación profesional con sentido social y vinculación comunitaria

Los entrevistados señalan que su formación profesional se caracterizó por una vinculación con un territorio particular y las comunidades que lo habitaban. Algunos plantean que dicha vinculación territorial se realizaba en los espacios formales de la universidad, como ocurre en los terrenos o viajes, mientras que la totalidad indica que el trabajo territorial y la relación con las comunidades se realizaron principalmente al momento de desarrollar su práctica profesional.

Además, los profesionales manifiestan que su formación profesional se caracterizó por tener un sentido social. No definen este como parte de un proyecto de la universidad o la carrera, sino como una cualidad que se desarrolla en espacios extrauniversitarios y en la práctica profesional.

“[...] porque lo del proyecto Fosis era un huerto comunitario para una comunidad de Playa Ancha [...] con esa experiencia como que ya terminé por autoconvencerme de que sí quería darle una connotación social a mi profesión”

(P4).

“Mi práctica profesional en el Fosis me ayudó a entender un poco lo pertinente que era la carrera con mi vida, con mi forma de ser y con lo que yo proyectaba o soñaba hacer, entonces cómo un ente público ayudaba a familias, mayormente vulnerables, ayudar sus finanzas, desarrollar algún negocio, lograr estabilizarse económicamente y proyectarse en el tiempo con sus negocios”

(P2).

De esta forma, los espacios de trabajo práctico permitieron a los profesionales darle mayor sentido social a su labor por medio de un quehacer concreto y de una vinculación directa con las comunidades. Aparece por primera vez en la historia de los profesionales la posibilidad de realizar un trabajo capaz de transformar la vida de las personas, lo que actúa como un mecanismo de ratificación que les permite continuar un desarrollo profesional con sentido social.

c) Aprendizajes vinculados a principios del quehacer profesional y habilidades de vinculación comunitaria

Los profesionales entrevistados manifiestan que la experiencia de formación profesional les permitió adquirir una serie de principios que guían su quehacer e identificaron como un aprendizaje los principios de horizontalidad, respeto, responsabilidad y capacidad de compartir.

“Una de las cosas fundamentales que aprendí en la universidad es que las relaciones deben ser horizontales con quienes estás trabajando”

(P3).

“Yo creo que estaría más bien enfocado al respeto, la responsabilidad, el compartir, trabajo en equipo, yo creo que para ese lado va un poco enfocado, yo creo que son cosas que se comparten, que son transversales a la hora de poder trabajar con comunidades o en espacios para el desarrollo social”

(P5).

Los espacios de quehacer profesional no solo ratificaron el sentido social de la profesión, sino que además les permitieron ir construyendo principios capaces de darle sustento concreto al interés de los participantes en ser profesionales sociales. Es decir, la horizontalidad, el respeto, la responsabilidad y la capacidad de compartir son transversales para el ejercicio de una profesión con sentido social y funcionan para los jóvenes como la guía correcta que les permite una vinculación efectiva con las comunidades.

Los entrevistados plantean que sus profesiones no solo los identifican en el ámbito laboral, sino que están relacionadas con todos los ámbitos de sus vidas, especialmente con sus trayectorias vitales. Es por esta relevancia que les asignan que sienten que deben ejercer su trabajo con pasión.

“En el fondo, también los intereses o a lo que quieres conducir tu carrera, se encuentran asociados a experiencias personales [...] no te tienes que obligar a ser una identidad separada, me parece interesante estar consciente de aquello, porque en el fondo te permite disfrutar más de la experiencia del ejercicio de la profesión, como que me parece interesante”

(P3).

La identidad profesional no se disocia de la identidad personal, sino que es parte de la misma. Por otra parte, los profesionales señalan que esa identidad se construye a partir de las experiencias personales que van dando sentido a determinada identidad, en este caso, de tipo social.

Finalmente, los profesionales argumentan que gracias al proceso de formación profesional lograron desarrollar una serie de habilidades como la escucha, la observación, la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía.

“Es fundamental el desarrollo de habilidades blandas que te permitan relacionarte mejor con las personas, comunicarte mejor, empatizar. Yo creo que eso es fundamental para relacionarte con personas en distintos contextos, tanto institucionales como con las comunidades”

(P5).

Estas habilidades mencionadas son particularmente importantes en el trabajo con las comunidades, sobre todo las llamadas “habilidades blandas”, que se asocian con profesionales con mayor capacidad de lograr un buen vínculo con las personas.

2. La experiencia de intervención social en el programa Servicio País

a) Ingreso al programa como oportunidad de desarrollo profesional con sentido social y comunitario

Los profesionales señalan que una de las razones principales para ingresar al programa Servicio País tiene que ver con la posibilidad de desarrollo profesional y llevar a la práctica los conocimientos y herramientas de la formación profesional:

“[Ingresé al programa para] desarrollar mi carrera, ver de qué manera mi carrera me había entregado herramientas para desarrollar un trabajo”

(P2).

Adicionalmente, el programa Servicio País permite el desarrollo de sus intereses y habilidades profesionales. Las motivaciones mencionadas por los profesionales se vinculan con el desarrollo de una profesión que les permita vincularse con las comunidades y especialmente con el hecho de vivir en el territorio. En tanto, las habilidades se relacionan con capacidades para conectar con otros actores en pos de un desarrollo local.

“Yo, lo interesante que veía de Servicio País, más que del relato de ellos, es el hecho de estar en lo rural y en el terreno, sabía que existía, que una de las características principales era el terreno, vivir en el lugar, el compromiso, eso me pareció siempre atractivo”

(P3).

“La idea de desarrollo local, de qué manera los distintos entes que se involucran en el desarrollo local funcionan, entonces yo sentía que tenía las habilidades para vincular [...] para poder buscar un bienestar para la comunidad”

(P2).

Así, la FSP y su programa Servicio País proveen una experiencia en la que es posible desplegar una identidad como profesional con sentido social, así como los intereses y habilidades de quienes participan. Es decir, se articula como un espacio concreto donde los profesionales pueden averiguar si los conocimientos adquiridos durante la formación profesional pueden ser utilizados para mejorar la vida de las comunidades y lograr un mejor desarrollo local en territorios rurales.

b) Convivencia con comunidades que cambia la visión de la pobreza, compromete y consolida una identidad profesional

Los profesionales señalan que tras su primera intervención en una comunidad en situación de pobreza cambió totalmente el paradigma que tenían, pues comprendieron que aunque las comunidades se encuentren en situaciones precarias, siempre tienen herramientas y capacidades que pueden ser potenciadas.

“Conocer sus historias, creo que es clave, porque son historias súper diferentes a las que yo estaba acostumbrado [...] porque al final eso implica en mí un cambio de mente, porque estás tan acostumbrado a tu entorno, a tu realidad, pero no, po’, existen otras formas de entender la vida, entender el bienestar, lo que te hace feliz, entonces fue bacán”

(P2).

“Para mí también fue súper clave para entender cómo funcionan los distintos tipos de pobreza que vas conociendo, entonces como que también me cambió totalmente la idea que yo tenía desde el principio, sobre todo en pueblos más chicos, también como que entendí que ahí existen posibilidades, recursos en todos lados”

(P1).

Este cambio en la visión se logra particularmente cuando los profesionales se involucran en una realidad social que, antes de la experiencia, les era completamente ajena. Este encuentro con comunidades en situación de pobreza amplía su visión como profesionales y transforma la posición que toman en el proceso de vinculación con ellas.

Desde esta nueva posición, la relación con la comunidad desde la convivencia y cotidianidad compromete a los jóvenes fuertemente y transforma su identidad profesional, ya que se piensan como profesionales que trabajan con y para la comunidad.

“Creo que el vínculo con la comunidad consolida una identidad particular, porque, en el fondo, llegas a un nivel de vínculo y de identificación con esa comunidad que es súper alto, porque igual te encuentras viviendo ahí, eso transforma la relación con el otro que trabajas. En el fondo, estás trabajando desde la horizontalidad y la cotidianidad [...] eso impacta harto porque te identificas con ese otro que estás trabajando”

(P3).

“Trabajar a la par con ellos, darte cuenta de que ese grupo humano... yo creo que es lo fundamental y lo que te compromete a realizar el trabajo, porque nosotros no estábamos haciéndole al trabajo a la Fundación, al concejo o a la muni², estamos trabajando con ellos y para ellos, teniendo a estas instituciones como apoyo”

(P4).

Por lo tanto, al identificar al otro con capacidades y saberes, ya no se posicionan como profesionales desde un saber erudito, sino más bien como mediadores dialogantes, personas que trabajan para la comunidad y desde la comunidad. Gracias a esto, al vínculo con las comunidades desde la cotidianidad y la horizontalidad, se consolida una identidad profesional social que es producto de una identificación con la comunidad y la adquisición de un compromiso en el que se sienten pares de los habitantes permanentes de los territorios.

c) Identificación con el profesional ideal de la Fundación que consolida una identidad profesional similar

El profesional ideal para la Fundación es aquel que disfruta el contacto con la gente y el conocimiento de distintas realidades. Para los entrevistados, un buen profesional Servicio País es aquel que tiene capacidades de escucha, observación e investigación. Finalmente, los jóvenes plantean que el ideal de la Fundación es aquel profesional que se caracteriza por ser comprometido, trabajador, proactivo, sacrificado, perseverante, empático, horizontal y responsable.

“La Fundación igual tiene un ideal de Servicio País y ese ideal es un profesional comprometido, trabajador, que con pocos recursos hace muchas cosas, que es simpático, empático con la gente, como que ese es el ideal de la Fundación”

(P3).

“Existe una construcción del ‘buen servicio país’ que, por ejemplo, no deja plantada a la comunidad si se compromete a una actividad, por tanto, es responsable. El buen Servicio País es súper empático con la comunidad [...] el buen Servicio País es colaborativo con la comunidad”

(P3).

² (Sic) Municipalidad.

Estas respuestas dan cuenta de que los entrevistados logran identificar los elementos que conforman el perfil de un buen profesional del programa Servicio País. Reconocen que la Fundación trabaja con un criterio que reconoce a un cierto “profesional ideal” y van transmitiendo sus características entre pares:

“Sí, porque uno se sentía parte de la Fundación, entonces no sé si era una Fundación, estábamos igual siempre alineados”
(P3).

Esto permite construir una relación dual entre el deber ser profesional y el ideal de profesión, que la Fundación busca. Si bien los jóvenes responden a la FSP, estas características les entregan, al mismo tiempo, una cohesión de grupo, elemento que refuerza la consolidación de una identidad particular.

“Lo otro tiene que ver con esta comunidad Servicio País que se genera [...] se genera una relación o una lógica de pertenecer a un grupo particular, nos decían ‘los Chile País’, entonces eso genera igual una cohesión de grupo”
(P3).

“Yo, desde que entré a la Fundación, compartí los valores y principios que esta tenía, al estar dentro se fortaleció más de lo que yo pensaba, porque yo tenía cierta forma de mirar las cosas que compartía, pero al estar dentro se fortaleció más, en términos de adquirir nuevas cosas y herramientas, nuevas metodologías y formas de hacer las cosas, nuevos enfoques”
(P5).

Esta identificación dual, con la Fundación y entre pares, se desarrolla en un espacio concreto, el de la intervención, pero que es posible rastrear en principios, valores y sentidos profesionales que provienen de la formación profesional de cada uno de los jóvenes. Por tanto, la experiencia se configura como la posibilidad de desplegar estos principios, valores y sentidos gracias a la adquisición de nuevos enfoques, herramientas y metodologías que se despliegan como cualidades prácticas de una identidad profesional; se trata de la identidad en acción.

d) Intervención social exitosa que da sentido a la profesión y transforma la identidad profesional

Los profesionales señalan que el carácter social de la intervención realizada en Chimbarongo les permitió darle un sentido a su propio trabajo a través de la práctica concreta del ejercicio profesional, es decir, dicha experiencia marcó, para ellos, el camino de su profesión.

“[La experiencia] le comienza a dar sentido al trabajo, porque para mí el sentido de trabajo tiene relación con hacer un bien, si no es así, no dignifica”
(P4).

“Sí, se puede hacer mucho del diseño en la vida social [...] yo quería encontrar un trabajo que tuviera sentido para mí, lo encontré y vi que sí se podía”
(P1).

“La Fundación me marcó el camino porque en realidad entré sabiendo que quería trabajar con comunidad y queriendo darle un sentido social a mi profesión, pero no sabía dónde [...] entonces la Fundación como que me aclaró la película”

(P4).

Los profesionales señalan que la experiencia de intervención de carácter social les permitió confirmar que es posible aplicar su profesión en un ámbito de la vida social que signifique un bien para otras personas. La experiencia constituye una posibilidad concreta de dar sentido a la profesión, a lo que se suma el objetivo de hacer el bien, de transformar la realidad de las comunidades.

La consolidación de este sentido social en la identidad profesional de los entrevistados se sustenta en que sienten que son capaces de lograr una serie de cambios en la comunidad gracias a su trabajo, una percepción que reafirman constantemente gracias a la valoración positiva por parte de la comunidad.

“Sentí que fui hábil porque el trabajo tuvo impacto, eso me hizo sentir hábil para eso [...] ahí uno dice como ‘bien’; es súper gratificante, igual [...] entonces como que toda esa suma hizo que yo dijera ‘sí, este es el camino”

(P1).

“Sí, obviamente, es súper relevante eso [el éxito de la intervención], si no, tu sentido de frustración implicaría que te cueste identificarte con esa identidad [...]. Si la comunidad no te validara constantemente, nada de tu identidad positiva y egocéntrica podría existir, entonces, claro, la comunidad permanentemente te está diciendo”

(P3).

“Claro, si tú haces algo y la gente no lo valora, no significa nada, pero si tú ves que lo que haces tiene un impacto en la gente, tú ves que sí existe un camino posible”

(P1).

Esto quiere decir que si los profesionales son retroalimentados positivamente por la comunidad, sienten que su trabajo tiene un real impacto en la realidad social, lo que les reafirma que es posible ejercer una profesión que persiga un objetivo social y consolida una identidad profesional que apela a la transformación de la realidad de las comunidades.

e) Experiencia que permite el desarrollo de aprendizajes para convertirlos en principios, enfoque y quehacer

A raíz de la experiencia en Chimbarongo, los profesionales aprendieron una serie de principios que rigen el ejercicio de la profesión. Estos fueron la interdisciplinariedad, la transparencia, la horizontalidad, la proactividad y la eficiencia.

“Otro aprendizaje es el trabajo interdisciplinario, es cómo se construye un complemento para trabajar en el territorio”
(P1).

“Eso me lo enseñó la Pau, en relación al trato horizontal con la gente, la transparencia siempre, contarles siempre todo cómo va a ser”
(P4).

“Yo aprendí que actividades y gestos pequeños, como tomar once juntos, eran súper valiosos para poder realizar un trabajo que tuviera un sentido para el otro”
(P3).

Algunos de estos aprendizajes tienen un anclaje en ciertos principios de la formación profesional, pero en la práctica cotidiana y en el ejercicio de la profesión se van desarrollando otros nuevos, ligados directamente con el ámbito social y la vinculación con las comunidades.

Además, la experiencia les ha permitido a los jóvenes desarrollar el enfoque promocional, clave para el ejercicio de cada una de sus profesiones con un objetivo social.

“Incluir a la comunidad en un lugar privilegiado, como de sabiduría en torno a lo que ellos quieren”
(P3).

Ello permite reconocer en la comunidad saberes y herramientas:

“La idea es que no genere tanta diferencia con las personas, uno no dice ‘ah, estoy trabajando con una comunidad’, pero uno sabe que esta comunidad tiene muchas herramientas”
(P1).

Finalmente, los profesionales señalan una serie de aprendizajes que se vinculan con el ámbito práctico, es decir, con el quehacer concreto en la intervención. Los entrevistados plantean que la experiencia en Chimbarongo les permitió aprender a trabajar en equipo, a escuchar a las personas y usar un lenguaje común con las comunidades. Otros profesionales señalan que la experiencia de Servicio País les permitió el aprendizaje de metodologías de trabajo con comunidades y de postulación a proyectos sociales.

“El proceso implica muchas cosas, yo nunca había trabajado con servicio público, nunca había trabajado con un equipo tan amplio, es decir, multidisciplinario, trabajé con ingenieros, geógrafos”
(P4).

“[La experiencia] me aportó en la necesidad de siempre escuchar, de estar dispuesto a conocer más, abrir los ojos [...] definitivamente, me sirvió mucho el tema del contacto con la gente, el querer escuchar a quien estás sirviendo y querer realmente, no porque quieres sacarle algo o quieres ganar algo de esa persona, sino que el disfrutar la historia del otro”
(P2).

Se refleja que la importancia de estos nuevos aprendizajes radica en lograr una buena relación con la comunidad y también con sus pares. Son estos nuevos conocimientos los que dan sustento práctico a la identidad profesional con sentido social.

f) Importancia del equipo de trabajo en el proceso de intervención

Al reflexionar sobre la intervención realizada en Chimbarongo, los profesionales plantean que uno de los pilares importantes para el éxito de la intervención fue el buen funcionamiento del equipo.

“En general, nosotros teníamos como conversaciones bien fluidas, logramos llegar a distintos acuerdos, era un buen equipo, teníamos buena comunicación, nos llevábamos bastante [...] eso es súper importante, el apoyo y una base muy buena donde trabajar”

(P1).

“A mí me ayudó la Paula, porque ella ya tenía más tiempo ahí y además diez años de experiencia profesional, entonces ella fue fundamental porque me explicó cómo lograr trabajar [con] los artesanos y artesanas, cómo relacionarse con la municipalidad, me enseñó metodologías de trabajo, entonces fue como mi gurú ahí”

(P4).

“Yo he conocido acá muchas personas que han sido parte de la Fundación, que compartimos valores, sobre todo en cómo miramos la pobreza, desde lo técnico y lo político, entonces son miradas compartidas”

(P5).

Este buen funcionamiento del equipo se logró principalmente por medio de la buena comunicación entre los integrantes, que permitió que el grupo se convirtiera en una estructura de apoyo capaz de sustentar el desarrollo de aprendizajes entre jóvenes que lograron compartir valores, enfoques y principios para desplegar un trabajo con las comunidades.

3. Desarrollo profesional posterior a la participación en el programa Servicio País

Continuidad laboral semejante a la experiencia del programa Servicio País

La experiencia de los profesionales marcó el camino para su desarrollo posterior, un fenómeno visible en el hecho de que todos ellos continuaron trabajando en espacios parecidos a la experiencia de intervención social en Chimbarongo. Incluso, algunos de los profesionales continuaron trabajando en el ámbito de la artesanía y uno de ellos permaneció trabajando con los artesanos de Chimbarongo.

“Me pasó lo mismo que con el título y la tesis, pero ya más a nivel 2.0, porque ahí de verdad me di cuenta que sí, que eso era lo que quería seguir haciendo [...] de hecho, al salir de la Fundación seguí trabajando con los artesanos de Chimbarongo [...] ahora estoy postulando a un magíster en patrimonio cultural”

(P4).

“Yo trabajo actualmente en un proyecto Fosis que depende del Ministerio de Desarrollo Social y la experiencia me sirvió bastante, porque nosotros recién estamos instalando el enfoque territorial”

(P5).

“Me fui a trabajar al municipio de Pedro Aguirre [...] específicamente, en un programa comunitario, el cual duró seis meses, pero continué trabajando en la oficina de Pedro Aguirre Cerda”

(P3).

Todos los profesionales continuaron trabajando en intervenciones sociales con grupos en situación de vulnerabilidad, varios de ellos desde la institucionalidad pública. Es más, cuando se les pregunta si volverían a trabajar para la Fundación, algunos de los profesionales entrevistados señalan que lo harían, pero desde otro rol, debido a que se encuentran en otro momento de su desarrollo profesional.

“El programa me gustó mucho, pero ahora me encuentro en una etapa donde he estado avanzando en algunas cosas, entonces tal vez haría Servicio País en otro nivel, es decir, no de la misma forma que lo hice”

(P1).

“Sí [volvería], o sea, ahora es un poco distinto, porque igual ahora no podría irme un año a vivir tan lejos de las amistades y la familia, pero como experiencia, sí”

(P4).

Todo lo anterior permite afirmar que la experiencia no solo logró darles sentido social a las trayectorias laborales de los

jóvenes al momento de la intervención, sino que además transformó su quehacer profesional futuro y les permitió incorporar los aprendizajes del ámbito profesional en sus actuales labores.

CONCLUSIONES

Los resultados de este artículo evidencian la existencia de dos núcleos de significado relacionados al ser profesional: el sentido social de la profesión y un ser profesional que trasciende lo laboral. El primero de estos núcleos se construye de manera incipiente desde un ideal de profesional desde el momento en que se decide estudiar determinada carrera, es decir, un imaginario de un profesional con sentido social proyectado hacia el futuro. Luego, en la formación universitaria, el sentido social de la carrera se convierte en un horizonte posible debido a que se desarrollan aprendizajes teóricos y prácticos en contextos de vínculo con comunidades, pero aún de manera incipiente en las prácticas laborales. Posteriormente, con la participación en la intervención y el desarrollo de aprendizajes, el sentido social de la profesión deviene en praxis, es decir, se despliega en el ejercicio profesional concreto, por lo tanto, el sentido social se convierte en acción. Finalmente, en el desarrollo profesional posterior a la experiencia de intervención, el sentido social ya no solo es factible, sino que se convierte en rector del quehacer, lo que se expresa en la búsqueda de espacios laborales relacionados con la experiencia del programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza.

Este proceso de construcción del sentido social de la profesión se puede explicar a partir de los cuatro procesos señalados por Bajardi (2015), a saber: la identificación con los principios del profesional comprometido socialmente de la Fundación; la individuación de los logros de la intervención realizada en Chimbarongo; la internalización de la valoración positiva por parte de la comunidad; y la imitación de prácticas y saberes vinculados al sentido social por parte de los compañeros de equipo. Es decir, los profesionales intervinientes en la localidad de Chimbarongo logran desplegar su profesión con un sentido social a partir de valoraciones internas y externas del impacto positivo de su quehacer, en sincronía con aquellos principios del ideal profesional como validación del otro normativo.

Respecto al segundo núcleo, autores como Hirsch (2013) plantean la intrínseca relación entre el proyecto de vida y la identidad profesional. Efectivamente, en el caso particular de los entrevistados, ser profesional pertenece a un ámbito del proyecto vital, perspectiva que difumina la división entre la vida profesional y la personal. Respecto al proceso que permite la consolidación de este núcleo en la identidad profesional, existe una relación con el tipo de vínculo que se estableció con la comunidad en la experiencia de intervención social, ya que los profesionales señalan que la creación de un lazo de cotidianidad debilita las divisiones entre el ámbito profesional y el ámbito de la vida personal.

En la experiencia de intervención, los profesionales desarrollaron una serie de principios (compromiso, horizonta-

lidad, responsabilidad, interdisciplinariedad, transparencia, proactividad y eficiencia), un enfoque (promocional) y saberes prácticos (trabajo en equipo, metodologías de participación y postulación a proyectos sociales) que los vuelven competentes en la intervención social en situaciones de pobreza y que se despliegan como dimensiones de los núcleos de significados respecto a la identidad profesional. Es decir, si los profesionales construyen una identidad profesional con sentido social y arraigada en el proyecto de vida, requieren de sentidos que guíen el quehacer, de un enfoque que les permita situarlos en el contexto y comprender la problemática social que están interviniendo, así como tener a disposición saberes que les permitan, de manera concreta, trabajar con las comunidades y transformar la realidad en pos del bienestar.

Estos saberes prácticos, enfoque y principios se construyen mediante relaciones sociales situadas en un contexto histórico, en el cual se suscitan vínculos entre los profesionales, los artesanos y la Fundación. Los resultados ya expuestos permiten identificar ciertos espacios de consolidación de una identidad profesional particular. El vínculo entre los profesionales se configura como un espacio de socialización que permite compartir saberes, reflexiones y pensamientos sobre el quehacer profesional. En esas relaciones de retroalimentación entre iguales, la identidad profesional tiene posibilidad de identificarse con la de otro y asimilar ciertas formas de ser y quehacer profesional. El vínculo con la Fundación se plantea como una disputa identitaria, pues si bien los profesionales se identifican con algunos de

los principios que caracterizan a la Fundación, al mismo tiempo critican la falta de apoyo desde esta entidad a pesar de que la reconocen como una posibilidad de autonomía y avance en la construcción de una identidad profesional. Por último, el vínculo con los artesanos se vuelve fundamental para la consolidación de una identidad profesional de carácter social. En tanto la intervención es caracterizada como exitosa por parte de estos, los profesionales sienten que realmente es posible posicionarse en determinado lugar, con un enfoque promocional, desde principios de horizontalidad, y lograr un bienestar de las comunidades. Esto hace que para ellos adquiera sentido ser profesionales con vocación social.

A partir de los elementos que hablan de un proceso de construcción de la identidad profesional, es posible lograr una caracterización de la identidad de quienes trabajaron en Servicio País en la comuna de Chimbarongo. En esta intervienen particularidades como i) ser un profesional que entiende que su labor es parte de su proyecto vital y que al mismo tiempo tiene un fuerte sentido social que apela al bienestar de las comunidades en situación de pobreza; ii) ser un profesional comprometido, responsable y transparente con las comunidades con las que trabaja; iii) ser un profesional que se desempeña en una lógica interdisciplinar y que es capaz de aplicar una serie de saberes prácticos relacionados a un buen trabajo en equipo; iv) ser un profesional que trabaja de manera proactiva y eficiente para el logro de los objetivos de la intervención; y v) ser un profesional que se relaciona de manera horizontal por medio de me-

todologías de participación capaces de incorporar activamente a la comunidad en los procesos de intervención social, ya que entiende que todas las comunidades, sea cual sea su condición de pobreza, poseen capacidades y recursos.

A partir de los resultados de este artículo se logra constatar que los contextos, vínculos y normas impactan sobre la construcción de una identidad profesional en escenarios de intervención social en pobreza. Esto quiere decir que la identidad profesional no funciona como una suma de factores que tiene como resultado una serie de características estáticas; por el contrario, este estudio permite mostrar que la consolidación de una identidad profesional social es resultado de un contexto que estimule, propicie y demuestre que es factible, en la realidad, posicionarse desde un ser profesional de tipo social. Se trata de un proceso en el que intervienen, a la vez, vínculos sociales que potencian y retroalimentan un quehacer profesional particular, y normas institucionales que entregan márgenes y posibilidades de despliegue. Por medio de este estudio se logra constatar que los contextos de intervención social en pobreza, a través del trabajo de una organización que apela a transformar la realidad de las comunidades desde un enfoque que las comprende como integradas por sujetos activos y dotados de saberes, actúa como caldo de cultivo para la consolidación de una identidad profesional de tipo social. Pero esto no es suficiente, ya que también es necesaria la existencia de un equipo de trabajo comunicativo y resolutivo, que actúe como plataforma de construcción de consenso entre los profesionales, así como el apoyo

por parte de la Fundación en niveles que permitan la autonomía de los profesionales en su quehacer. Todos estos elementos actúan como factores que propician un mayor o menor impacto de la intervención social, la que entrega un sentido de transformación a los profesionales en la medida en que les hace saber que es posible transformar la realidad de las comunidades y combatir la pobreza.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A partir de estos hallazgos, resulta dable plantear una serie de recomendaciones para la generación de políticas públicas orientadas a la intervención social en pobreza, especialmente respecto a la identidad de los profesionales. En primer lugar, este artículo entrega luces sobre la importancia del vínculo territorial e intersubjetivo al momento de realizar intervenciones, que no solo permite un mayor éxito del trabajo al comprometer fuertemente a los profesionales, sino que también posibilita una formación profesional desde otro paradigma, transformando la identidad y la mirada de los jóvenes sobre la pobreza. En ese sentido, se recomienda que las políticas públicas y los programas orientados a la superación de la pobreza tengan un fuerte componente de vínculo territorial intersubjetivo y que apliquen una estrategia de incorporación de los profesionales al diario vivir de las comunidades. De esta manera, los profesionales podrán desarrollar

una identidad profesional desde una posición horizontal y respetuosa de los saberes, conocimientos y creencias de las comunidades con las que no solo trabajan, sino que también conviven.

En segundo lugar, se recomienda la construcción de políticas de intervención social desde un enfoque promocional, con el objetivo de implementar programas con mayor sentido y pertinencia para las comunidades y los profesionales intervinientes. Este enfoque promocional no solo permite reconocer y movilizar las capacidades, saberes y herramientas de las comunidades, sino que también permite que los profesionales se sitúen desde un rol de mediadores y promotores de la resolución de problemáticas territoriales en el ámbito de la pobreza, potenciando así la instalación de capacidades en la comunidad. Para ello se recomienda el desarrollo de dispositivos de diálogo entre profesionales y comunidad, que actúen como instancias de construcción de consensos y evaluación de la intervención, lo que promovería un rol participativo de las comunidades en el desarrollo del trabajo. Algunas instancias de diálogo fundamentales son el diagnóstico participativo, las asambleas para la gestión y planificación, las jornadas de reflexión sobre los avances de la intervención y espacios de evaluación. Estas oportunidades de diálogo no solo permitirán la construcción de una relación de confianza desde un enfoque horizontal y transparente, sino que también propenderán al desarrollo de una identidad profesional que co-construye soluciones ante una condición de pobreza a partir de las necesidades y capacidades de las comunidades y los territorios.

Finalmente, este estudio revela la importancia del acompañamiento teórico y práctico del organismo o institución encargada del proceso de intervención. Esto se debe traducir en que los programas en pobreza y sus intervenciones sociales deben tener un grupo de profesionales que acompañen el quehacer de los interventores, no solo con el objetivo de supervisar los avances y el logro de los objetivos, sino también para propiciar espacios reflexivos sobre la construcción identitaria. Estos espacios tienen como objetivo ir subsanando las problemáticas que surgen en el desarrollo de la intervención, pero siempre desde un diálogo con la construcción de identidad profesional, es decir, se debe asegurar que el grupo de profesionales de acompañamiento permita la construcción de un puente entre la experiencia práctica y la consolidación identitaria. Para ello es importante que el profesional de acompañamiento desarrolle dispositivos individuales o grupales que permitan reflexionar no solo sobre el quehacer profesional, sino que también sobre los principios, sentidos, sentimientos y aprendizajes que van surgiendo a la luz de la intervención social.

BIBLIOGRAFÍA

- **Bajardi, A. (2015).** La identidad personal en relación con la educación: características y formación del concepto. *Revista Electrónica de Investigación y Docencia Creativa de La Universidad de Granada* (15), 106–114.
- **Balderas, K. (2013).** Elementos que constituyen la identidad profesional de la enfermera. *Cuadernos de Educación Y Desarrollo* (13).
- **Becerril, C. (2015).** El papel del Estado en el alivio a la pobreza en la era neoliberal. Una aproximación teórica. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 60(225), 369–393. Recuperado de [https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(15\)30030-1](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(15)30030-1).
- **Beytía, P. (2016).** La estructura interna de la pobreza multidimensional. En: C. Siles (Ed.), *Los invisibles. Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad* (pp. 71–88). Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad.
- **Bolívar, A., Fernández, M. y Molina, E. (2005).** Investigar la identidad profesional del profesorado: una triangulación secuencial. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 6(1).
- **Briggs, A.R.J. (2007).** Exploring professional identities: middle leadership in further education colleges. *School Leadership and Management*, 27(5), 471–485.
- **Evetts, J. (2003).** Identidad, diversidad y segmentación profesional: el caso de la ingeniería. En: M. Sánchez-Martínez, J. Sáez y L. Svensson (Coords.), *Sociología de las profesiones*. Murcia: Pasado, Presente y Futuro.
- **Fundación Superación de la Pobreza (2013).** Primer informe técnico de avance Servicio País. Santiago de Chile: Fundación Superación de la Pobreza.
- _____ (2015). Orientaciones técnicas Servicio País ciclo 2015-2016. Santiago de Chile: Fundación Superación de la Pobreza.
- _____ (2017). Sistematización de la intervención social en la localidad de Chimbarongo en los ciclos 2013-2014 y 2014-2015. Santiago de Chile: Fundación Superación de la Pobreza.
- **Gallart, M. (1992).** La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una reflexión desde la práctica de la investigación. En: F. Forni, M. Gallart y I. Vasilachis (Eds.), *Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación* (pp. 107-152). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- **Güell, P., Frei, R. y Palestini, S. (2009).** El enfoque de las prácticas: un aporte a la teoría del desarrollo. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 8(23), 63–94.
- **Hirsch, A. (2013).** Elementos teóricos y empíricos acerca de la identidad. *Perfiles Educativos*, 35(140), 63–81.
- **Ministerio de Desarrollo Social (2016).** Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen). Santiago de Chile: Ministerio de Desarrollo Social. Recuperado de http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Ampliando_la_mirada_sobre_la_pobreza_desigualdad.pdf
- **Montenegro, M. (2001).** Conocimientos, agentes y articulaciones: una mirada situada a la intervención social (tesis de doctorado). Recuperado de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5410/mmm1de6.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

TUTORES

Para el ciclo 2019-2020, las y los tesistas que participaron del Programa Tesis País y que finalmente fueron seleccionados por el comité editorial para ser publicados en esta compilación de artículos de alcance nacional fueron apoyados constantemente durante el proceso por tutores institucionales. Queremos reconocer especialmente a todas y todos los tutores de esta versión y compilación de Tesis País, quienes participaron apoyando con su tiempo, reflexión y experiencia para enriquecer los trabajos que aquí se presentan publicados.

Los siguientes profesionales de la Fundación Superación de la Pobreza oficiaron como tutores y tutoras:

- **Ricardo Álvarez.** Antropólogo de la Universidad Austral de Chile.
- **Fernanda Azócar.** Socióloga de la Universidad Diego Portales y Magíster en Gobernanza en Riesgos y Recursos Naturales de la Universidad de Heidelberg.
- **Francisca Castro.** Psicóloga de la Universidad de Chile y Magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile.
- **Florencia Hepp.** Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado, Diplomada en Desarrollo, Pobreza y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado y Diplomada en Liderazgo Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- **Luis Iturra.** Sociólogo de la Universidad Arturo Prat y Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat.
- **Eduardo Martínez.** Sociólogo de la Universidad de La Frontera y Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado.
- **Maximiliano Mayan.** Sociólogo de la Universidad Católica Silva Henríquez y Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado.
- **Carolina Momberg.** Socióloga de la Universidad de La Frontera, Magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Austral de Chile y Diplomada en Género del Pnud.

- **Héctor Morales.** Ingeniero de Ejecución en Medio Ambiente del Instituto Profesional Duoc UC, Licenciado en Gestión Ambiental de la Universidad Católica del Norte, Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado y Diplomado en Políticas Sociales, Desarrollo y Pobreza de la Universidad Alberto Hurtado.
- **Claudia Muñoz.** Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado.
- **Diego Pérez.** Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Psicología de la Universidad Diego Portales.
- **Luis Rodríguez.** Sociólogo de la Universidad de Chile.
- **Mauricio Rosenblüth.** Sociólogo de la Universidad de Chile y doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad Jesuita de Comillas.
- **Sandra Sepúlveda.** Trabajadora Social de la Universidad Mayor de Temuco y Magíster en Psicología Social, mención en Intervención Psicosocial y Evaluación de Proyectos Sociales de la Universidad Alberto Hurtado.
- **Francisco Valdivia.** Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Diplomado en Desarrollo, Pobreza y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado y Diplomado en Descentralización, Desarrollo Local y Participación Ciudadana de la Universidad Alberto Hurtado.
- **Ricardo Villalobos.** Ingeniero Comercial de la Universidad Adventista de Chile.
- **Diego Weinstein.** Psicólogo de la Universidad Diego Portales y Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile.

SOMOS una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuyos orígenes se remontan a 1994.




CREEMOS que superar la pobreza que experimentan millones de chilenos y chilenas en nuestro país es un desafío de equidad, integración y justicia social.

CONTRIBUIMOS a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de equidad e integración social en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza.

DESARROLLAMOS nuestro quehacer en dos líneas de trabajo: por una parte, desarrollamos intervenciones sociales a través de nuestro programa SERVICIO PAÍS, que pone a prueba modelos innovadores y replicables para resolver problemáticas específicas de pobreza y, por otra, elaboramos propuestas para el perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a la superación de este problema, tanto a nivel nacional como local. Así, desde nuestros orígenes hemos buscado complementar, desde la sociedad civil, la labor de las políticas sociales impulsadas por el Estado de Chile.

Desde nuestros inicios trabajamos en alianza con el Estado de Chile y municipios de las 16 regiones del país. Contamos con financiamiento de entidades privadas y fondos públicos provenientes de los ministerios de Desarrollo Social y Familia, Vivienda y Urbanismo y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

www.superacionpobreza.cl
www.serviciopais.cl

 /superarpobreza
 @serviciopais
@superarpobreza
 @serviciopais
 /superacionpobreza

Con el financiamiento de:

